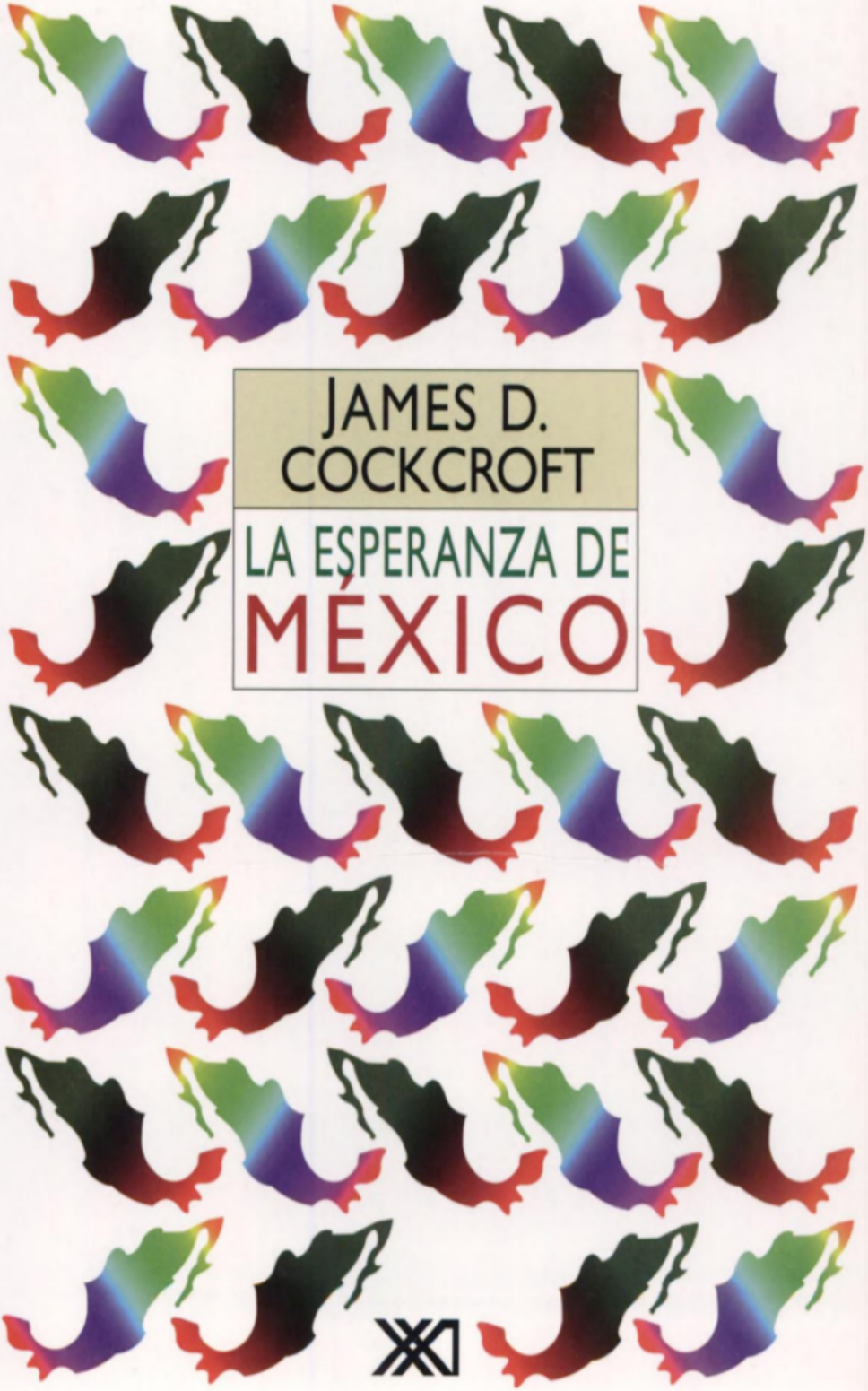


JAMES D. COCKCROFT

LA ESPERANZA DE MÉXICO



La esperanza de México cuenta la dramática historia de la construcción del México moderno. A medida que James Cockcroft va desgranando su detenido análisis de las causas de la enorme división entre ricos y pobres en México, va subrayando también el flagrante contraste entre el corrupto sistema político del país y las aspiraciones democráticas de su pueblo.

El desarrollo económico mexicano —nos dice Cockcroft— se distorsiona y desequilibra a causa de una larga colusión entre intereses extranjeros y la clase nacional dirigente. Explica por qué importantes desafíos contra la élite del poder, tales como la revolución de 1910-1920 y la rebelión estudiantil de 1968, fracasaron en su intento de romper la hegemonía de las clases dominantes.

Con particular atención hacia la contribución de mujeres, indios, trabajadores y campesinos, *La esperanza de México* está definida por la convicción de que hoy día las perspectivas más prometedoras del país descansan en la exigencia de justicia y democracia por parte de sus capas más empobrecidas a partir de la insurrección zapatista en Chiapas y de los esfuerzos electorales de la izquierda.

James D. Cockcroft ha publicado también en Siglo XXI *Precursores intelectuales de la Revolución mexicana* (1971) y *Los latinos en el beisbol de Estados Unidos* (1999).

siglo veintiuno editores

968-23-2282-0
9 789682 322822

traducción de

ANA MARÍA PALOS

LA ESPERANZA DE MÉXICO

un encuentro con la política y la historia

por

JAMES D. COCKCROFT

siglo veintiuno editores

historia

siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310 MÉXICO, D.F.

portada de maría luisa martínez passarge
cuidado de la edición: libros del umbral
dibujos de r. templeton

primera edición en español, 2001
© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
isbn 968-23-2282-0

primera edición en inglés, 1998
© 1998 by james d. cockcroft

título original: *mexico's hope. an encounter with politics and history*
publicado por monthly review press, nueva york

derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico / printed and made in mexico

ÍNDICE

ÍNDICE DE MAPAS Y CUADROS 6

AGRADECIMIENTOS 8

INTRODUCCIÓN: EL ENCUENTRO DEL MÉXICO MODERNO CON LA HISTORIA 10

PRIMERA PARTE: UNA HISTORIA DIFÍCIL 17
1. Invasión, colonización e inicios del capitalismo mexicano 19
2. Independencia y guerra civil, 1770-1880 58
3. De la dictadura a la revolución, 1880-1920 103
4. El corporativismo y Cárdenas, 1920-1940 138

SEGUNDA PARTE: LA ERA DEL CAPITALISMO MONOPÓLICO 171
5. El estado, el capital extranjero y el capitalismo monopólico 173
6. Clases en conflicto, desde 1940 hasta hoy 234
7. Petróleo y neoliberalismo: 1968-1993 290
8. Desafíos al PRI 350

CONCLUSIÓN: LA ESPERANZA DE MÉXICO 444

SITIOS DE LA RED RELACIONADOS 458

ÍNDICE ANALÍTICO 460

ÍNDICE DE MAPAS Y CUADROS

MAPA 1: México revolucionario 18
MAPA 2: México contemporáneo 172

CUADRO 1: Población indígena y epidemias, Valle de México 33
CUADRO 2: Estimación del producto económico de México, *ca.* 1791-1809 61
CUADRO 3: Intervenciones estadunidenses en México, 1906-1920 129
CUADRO 4: Intervenciones estadunidenses en México, 1920-1941 145
CUADRO 5: Poder de compra del salario mínimo legal, 1980-1997 190
CUADRO 6: Distribución del ingreso familiar, 1950-1996 192
CUADRO 7: Población económicamente activa por sectores, 1940-1995 196
CUADRO 8: Distribución de la industria por tamaño, número de empleados y salarios pagados, 1985-1993 197
CUADRO 9: Inversión extranjera directa e ingreso, 1960-1996 206
CUADRO 10: Utilidades por inversión extranjera directa más pagos de intereses sobre la deuda externa, 1980-1996 207
CUADRO 11: Inversión extranjera directa, 1980-1996 207
CUADRO 12: Tipo de actividad manufacturera, 1960-1994 225
CUADRO 13: Producto interno bruto por actividad económica, 1970-1996 225
CUADRO 14: Clases sociales en el campo 239
CUADRO 15: Pago de la deuda y comercio exterior, 1980-1995 301
CUADRO 16: Bienes de producción importados y deuda pública externa, 1980-1995 309
CUADRO 17: Partidos políticos de México 316

para Susan

AGRADECIMIENTOS

Este libro representa muchos años de investigación, durante los que han sido tantos los trabajadores, campesinos, estudiantes y académicos de México que me han ayudado que sería imposible nombrarlos a todos. Especialmente deseo agradecer a mis colegas mexicanos Alejandro Álvarez Béjar, Enrique Semo, Sergio de la Peña y Edur Velasco Arregui por su ayuda intelectual en mi trabajo a lo largo de los años, y a Edgar Sánchez Ramírez por su asistencia similar en 1997-1998. La preparación de Edur Velasco Arregui de los cuadros estadísticos y sus comentarios a los mismos aumentó mucho el valor de este libro. Debo un agradecimiento muy especial a otra valiosa colega de la ciudad de México, Heather Dashner Monk, y a mi amigo de muchos años Ross Gandy de Cuernavaca, que me dieron a conocer importantes señalamientos sobre México.

Muchos colegas de Estados Unidos y Europa han sido generosos también con sus sugerencias críticas. En las notas los menciono a ellos y sus trabajos. Deseo agradecer en especial a los historiadores John M. Hart y Friedrich Katz por compartir conmigo a lo largo de los años sus consultas de materiales de archivo estadunidenses respecto de las intervenciones de Estados Unidos en la Revolución mexicana. Deseo igualmente agradecer al historiador y analista laboral Dan La Botz por las útiles sugerencias e ideas que me dio tanto sobre México como sobre Estados Unidos en 1997-1998.

Varios proyectos de investigación que realicé en México a principios de los ochenta y en 1997 me han ayudado para este trabajo. Mi investigación en los ochenta fue respaldada por una Fulbright-Hays Research Grant sobre migración y problemas fronterizos y por un nombramiento de profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Azcapotzalco) de la ciudad de México, 1980-1981.

Parte de las ideas originales de este libro aparecieron en formas previas en mis siguientes trabajos: Intellectual precursosrs of the Mexican Revolution, 1900-1913 (Austin, University of Texas Press, 1968; edición en rústica, con una "Note to Chicano readers", 1976; ed. mexicana: *Precursores intelectuales de la Revolución mexicana, 1900-1913*, México, Siglo XXI, 1968); un capítulo sobre México en Ronald Chilcote y Joel Edelstein, comps., *Latin America: the struggle with dependency and beyond* (Cambridge, Schenkman, 1974); *El imperialismo, la lucha de clases y el estado en México* (México, Nuestro Tiempo, 1979); "Subordinated technological development: the case of Mexico", en *Research in social movements, conflicts and change*, vol. 4, comp. Louis Kriesberg (Greenwich, JAI Press, 1981); con el Equipo de Investigación de la Migración de la UAM-Azcapotzalco: *Trabajadores de Michoacán: historia de un pueblo migrante* (México, IMISAC, Ediciones Contraste, 1982); "Immiseration, not margi-

nalization: the case of Mexico", en Nora Hamilton y Timothy F. Harding, comps., *Modern Mexico: state, economy and social conflict* (Beverly Hills, Sage, 1986); *Mexico: class formation, capital accumulation, and the state* (Nueva York, Monthly Review Press, 1983, 1990); y *Latin America: history, politics, and U.S. policy* (Chicago, Nelson-Hall Publishers, 1996).

Agradezco especialmente a Elliot Linzer por la realización del índice, a la Cambridge University Press por los mapas, y al editor Ethan Young y a todo el equipo de Monthly Review Press. Deseo también agradecer muy especialmente a la artista gráfica y buena amiga Rini Templeton (m. 1986), a mi gran amiga, ya fallecida, Hedda Garza (m. 1995), y a otra amiga fallecida, fuente de estímulo en Monthly Review Press, Judy Ruben (m. 1997). Estas tres personas inspiraron a otras muchas con sus vidas generosas de compromiso con la causa de la justicia social y también me ayudaron a mí personalmente a analizar acontecimientos históricos y políticos de México y otros países.

Muy especialmente deseo agradecer a mi colega Susan Caldwell por sus agudas percepciones en temas de género, raza y clase, y por sus muchas útiles sugerencias que espero hayan hecho este libro al mismo tiempo teóricamente preciso y fácil y agradable de leer. Su perspicacia teórica me ayudó inmensamente.

Friends Lake, Chestertown, N.Y., 15 de septiembre de 1998

INTRODUCCIÓN

EL ENCUENTRO DEL MÉXICO MODERNO CON LA HISTORIA

México llega al nuevo milenio sumido en una crisis política y en la incertidumbre económica. Como segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá, avanza hacia el primer plano del escenario mundial.

Cerca de 4 000 plantas de ensamblaje (maquiladoras), que emplean tecnología cada vez más avanzada, explotan una fuerza de trabajo principalmente femenina con salarios miserables. Las empresas norteamericanas obtienen de esas plantas tasas de ganancia dos veces más altas que en el resto de América Latina. Una huelga en una de las maquiladoras podría desencadenar una oleada de despidos de miles de trabajadores estadunidenses que dependen de partes ensambladas allí, mientras que una huelga en una planta de Estados Unidos provocaría su cierre y su traslado a México.

Los economistas lo llaman la "integración silenciosa" de las economías de ambas naciones. Los activistas de los sindicatos estadunidenses lo censuran severamente como una desvergonzada explotación de la mano de obra. Los ejecutivos de las grandes empresas lo ensalzan como "buen negocio realista". El Departamento de Estado de Estados Unidos lo llama "dependencia mutua", pero debido a que es mucha más la riqueza que sale de México que la que entra, gran número de mexicanos e incluso algunos estudiosos norteamericanos lo llaman "imperialismo".

La economía capitalista semindustrializada de México está colmada de paradojas. Una nación agraria que importa sus tortillas: una quinta parte del maíz consumido en el México productor de maíz proviene de Estados Unidos. Las tiendas de México rebosan de mercancías fabricadas por empresas transnacionales. Por ejemplo, los supermercados exponen regularmente estanterías llenas de papel de baño de diferentes marcas, texturas, colores y precios, pero son pocos los mexicanos que pueden comprar alguna de ellas: la mayoría usa papel periódico o, en el campo, una piedra lisa. Los muchos modelos de automóviles que atascan las calles de la ciudad de México, exhalando una nube de esmog que envuelve la meseta central, son propiedad del 13% de los residentes; todos los demás emplean cuatro horas diarias yendo y viniendo del trabajo en sobrecargados autobuses y metros.

México cuenta con un mercado doméstico que potencialmente podría construir economías de escala basadas en abundantes recursos, empezando por su pueblo acostumbrado al trabajo duro. La población estimada de México en 1998 era de 95 millones de habitantes, aumentando en 1.94% al año, con cerca

de un 90% de la fuerza de trabajo adulta capaz de leer y escribir. Además de sus inmensas reservas de petróleo y gas natural, México está bien provisto de recursos naturales como carbón, coque, cobre, fluorita, oro, grafito, hierro, plomo, manganeso, mercurio, hule, plata, azufre, uranio y cinc. Su industria del acero está entre las quince mayores del mundo, exactamente detrás de Canadá. Sus fábricas elaboran toda clase de bienes de consumo, pero en su mayor parte lo hacen en operaciones de ensamblaje —importando, sobre todo de Estados Unidos, el 90% del capital y los productos intermedios (maquinaria, materiales y partes de repuesto). México es un gran productor de petróleo crudo, automóviles y productos agrícolas, pero principalmente para su exportación a Estados Unidos.

México también exporta trabajadores a Estados Unidos, fortaleciendo las economías de ambas naciones. Los sindicatos obreros y los ciudadanos desempleados de Estados Unidos se quejan de los "millones" de mexicanos que cruzan la frontera. Estos emigrantes encuentran empleos temporales o de más largo plazo y envían a México lo que les queda de sus salarios —después de lo que han gastado en su mantenimiento y en pagar a los "tiburones" traficantes y usureros que les "ayudan" en su migración. El flujo migratorio proporciona mano de obra barata no sindicalizada a agroindustrias, hoteles, restaurantes, plantas automovilísticas, factorías electrónicas y productores de ropa que cuentan cada vez más con esos trabajadores. A pesar de la dureza de las nuevas leyes antimigratorias, el gobierno de Estados Unidos permite que los inmigrantes mexicanos sigan limpiando sanitarios en Houston, empacando carne en Chicago, cosechando en el Imperial Valley de California y ensamblando partes en Los Ángeles y otras ciudades a cambio de un acceso más fácil y barato al petróleo y el gas natural mexicanos —y porque a los capitalistas les gusta culpar a los inmigrantes de problemas económicos tales como el desempleo o la disminución de los salarios reales de los trabajadores estadunidenses. Los empleadores refuerzan sus decrecientes tasas de ganancia explotando a los mexicanos y a otros inmigrantes.

Los inversionistas, estadunidenses y de otros países, tienen miles de millones de dólares invertidos en México, en donde sus tasas de ganancia superan la media mundial gracias a la abundancia de mano de obra barata. Dos tercios de la inversión extranjera están en manos de empresas transnacionales con base en Estados Unidos. A partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), la inversión extranjera se elevó hasta 8 mil millones de dólares o más por año. Parte de ella fue a las manufacturas, pero la mayor parte reforzó el mercado accionario mexicano a escala mundial. Un tercio de las transacciones de bolsa fueron a los mercados estadunidenses, en donde las empresas mexicanas representan el 11% de las acciones extranjeras negociadas. El 5% más rico de los mexicanos se volvió más rico aún (el número de multimillonarios mexicanos subió de dos a veinticuatro), mientras que la mayoría del resto de la población recibió una porción aún más reducida del ingreso nacional.

Luego, en el duodécimo mes del TLC, la burbuja financiera estalló, los inversionistas salieron huyendo, y en 1995 la economía de México se hundió hasta el fondo. La "recuperación" que siguió fue tan inestable como lo había sido el "milagro del TLC". Más que nunca antes, la economía de México se "petrolizó" y "maquiladorizó".

Entre tanto, unos 40 millones de mexicanos harapientos vagan por el paisaje volcánico de escarpadas montañas, laderas erosionadas, valles agostados por las sequías, áridos desiertos y ciudades sobrepobladas, siguiendo la ruta de las cosechas o en busca de un día de trabajo. Son las familias esforzadas, campesinos sin tierra, trabajadores migrantes, desempleados urbanos, madres solteras, indios de la sierra, niños abandonados, mendigos sin hogar y delincuentes ocasionales. Muchos de estos pobladores empobrecidos carecen de documentos de identidad; son "extranjeros indocumentados" en su propio país. Tres millones son vendedores ambulantes en la abarrotada capital —México, D.F., el centro urbano más populoso del mundo (22 millones), cubierto por el esmog generado por las chimeneas industriales y el congestionado tráfico automovilístico. Menos del 40% de la fuerza laboral está empleada regularmente, y sólo un tercio gana el salario mínimo, que no alcanza para comprar lo que una familia de cinco personas necesita para mantenerse.

Cerca de una quinta parte de todos los mexicanos recibe ingresos más bajos que los de Haití y Nicaragua, los países más pobres de América Latina. El puñado de ricos mexicanos vive en mansiones lujosas protegidas por numerosas patrullas de seguridad y muros de dos pisos de alto coronados por vidrios cortantes. La mitad inferior de la población, incluyendo al 90% de los niños en edad preescolar, sufre de desnutrición y anda descalza. No tienen instalaciones de plomería, ni agua purificada para beber, ni electricidad. Sus ingresos rara vez pasan de veinticinco centavos de dólar por persona al día.

"Hoy es igual que ayer", se lamenta una popular canción latinoamericana, "en un mundo sin mañana. Qué triste suena la lluvia en los techos de lámina de las casas de cartón."

¿Cuánto tiempo más soportará la mayoría de los mexicanos ser explotados en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos? ¿Por qué todo ese petróleo y ese gas natural no benefician a los pobres? ¿Por qué el dinero no sirve para pagar servicios médicos, viviendas y educación? ¿Por qué, en cambio, los burócratas del gobierno, los capitalistas nacionales y extranjeros, y los narcotraficantes están en libertad de invertirlo, sobre todo fuera de México, o de esconderlo en cuentas bancarias secretas? ¿Cómo puede aumentar la inversión de capital en México o mantenerse las ganancias en sus niveles tradicionales sin una escala de salarios baja, y cómo pueden garantizarse salarios bajos a menos que el desempleo y el subempleo garanticen un "ejército de reserva de desempleados"? Éste es el dilema de la economía capitalista de México.

¿Por qué es tan barata la mano de obra mexicana? ¿Por qué se ha convertido México en el eje central de las relaciones de Estados Unidos con América Latina? ¿En qué consiste la crisis de la deuda? ¿Qué factores subyacen al sú-

bito aumento del narcotráfico y al súbito interés en crear el TLC? ¿Podría darse un golpe militar en el "estable" México? Para responder a estas preguntas tendremos que revisar la asombrosa historia de México, en gran parte como los propios mexicanos lo están haciendo.

En este libro intento un análisis amplio de la economía política mexicana y el actual estado de crisis, rastreando sus raíces históricas en el proceso de la lucha de clase, acumulación de capital y el nacimiento del estado moderno autoritario-tecnocrático. Examino el entramado de intereses de las élites nacionales con las de las potencias extranjeras más fuertes, desde el colonialismo español hasta el imperialismo norteamericano. También analizo los conflictos periódicos entre esos intereses. Los orígenes del sistema económico y el estado de crisis se rastrean a través de un largo y desigual proceso histórico de formación del estado, de cambios en la organización de la producción económica, de la acumulación por parte de grupos dirigentes de la riqueza producida por los trabajadores de México, y del conflicto interno e internacional.

El libro se divide en dos partes. La primera estudia el proceso de acumulación de capital y la formación del estado y las clases desde la época de los primeros estados mexicanos, a lo largo del periodo colonial de dominio español, hasta el nacimiento de la nación independiente. Ha sido escrito en la creencia de que para comprender el México moderno debemos sumergirnos en la historia de sus diversos pueblos —cada uno de ellos con sus costumbres y herencias únicas— y en sus luchas para definir y controlar el estado y la economía mediante sus repetidos levantamientos contra los opresores locales y extranjeros. La primera parte prosigue analizando la guerra civil que siguió a la independencia y las guerras extranjeras y el surgimiento de la dictadura "liberal" de Porfirio Díaz, coronada por la Revolución de 1910 a 1920. Materiales de archivo recientemente descubiertos ayudan a documentar la intervención de Estados Unidos que ayudó a derrotar a la Revolución. Más decisivos, sin embargo, para ayudar a la derrota de la Revolución fueron los enfrentamientos de clase internos en las filas revolucionarias y las desviaciones raciales y de género de la mayoría de los líderes revolucionarios. La primera parte termina examinando la consolidación de las raíces del estado corporativista capitalista moderno durante los movimientos sociales de los treinta.

La segunda parte examina el desarrollo del capitalismo monopólico a partir de 1940 y la estructura de clases del México contemporáneo, con particular hincapié en cómo ambos fueron afectados por las políticas estatales y el impacto de las inmensas inversiones e influencias culturales estadunidenses. La segunda parte enfoca temas como la "nueva división internacional del trabajo";[1]

[1] La "nueva división internacional del trabajo" se refiere a la fuerza de trabajo de bajos salarios en el tercer mundo (o "sur"), que suministra materias primas, productos agrícolas y partes ensambladas (a veces unidades completas, como automóviles en México) para las naciones más industrializadas del "norte". Los empleadores del norte, por su parte, se hacen más ricos al reducir los niveles salariales medios de sus propias fuerzas de trabajo mediante "plantas tránsfugas" (al tercer mundo) y la importación de mano de obra inmigrante barata.

la relativa descapitalización de México causada por el capital extranjero y su alianza con las élites nacionales y con el estado; el papel de las clases intermedias ("medias"), y de los estudiantes e intelectuales; la pauperización de la mayoría de los mexicanos y sin embargo su papel central en la acumulación de capital y su creciente activismo político; el papel central de las mujeres y los indígenas en la lucha de clases para cambiar a México, y los nuevos movimientos de militancia sindical entre los proletariados industrial y rural de la nación.

Los capítulos finales examinan el neoliberalismo económico y la privatización,[2] el TLC, las "guerras del libre comercio", y lo que todo esto significó para México. Analizo aquí el papel que desempeñan las elecciones y la "reforma política" (proyectándose hacia el año 2000); los nuevos zapatistas y otras guerrillas; las fuerzas de seguridad nacional; los narcotraficantes y la "alianza narco-estado"; la Iglesia; los medios de comunicación; las relaciones entre México y Estados Unidos, y las "guerras fronterizas" que acompañan al flujo migratorio de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.

Cada uno de los capítulos de este libro incluye, cuando es necesario, explicaciones de los conceptos y términos introducidos. Una elaboración teórica mayor puede encontrarse en las notas. Con respecto a las estadísticas y a la investigación ofrecidas aquí, las estadísticas históricas y contemporáneas deben ser tratadas con cierta cautela. Los cuadros y las cifras no pueden pretender un nivel de exactitud ideal; hay demasiadas controversias para que tal cosa sea posible. Sin embargo, sí reflejan un consenso entre los académicos o, en caso de duda, la más modesta de las estimaciones disponibles. El objetivo principal es mostrar proporciones, no dar cifras exactas. En lo que se refiere a sucesos reales, personalidades y el curso histórico del cambio social, sólo en casos de nueva investigación o de duda suficiente o controversia se amplían algunos puntos en el texto o en las notas. Existe abundante literatura sobre México (más que sobre cualquier otro país latinoamericano), y se incluyen numerosos ejemplos en las notas y referencias en los comentarios bibliográficos.

A todo lo largo del libro subrayo las fuerzas estructurales que actúan bajo la incompleta industrialización de México, así como las muchas muestras de resistencia popular contra la opresión, y de las luchas populares que buscan cambiar México por su bien. Los últimos capítulos y la conclusión elaboran este enfoque para señalar posibles argumentos alternativos al neoliberalismo y al TLC, y para documentar cómo a mediados de los noventa algunos de estos argumentos empezaron realmente a conseguir apoyo práctico por parte de un número creciente de mujeres y hombres trabajadores de los tres países del TLC.

[2] En los años ochenta, los teóricos occidentales de la "modernización" refundieron sus ideas como "neoliberalismo" y "privatización". El neoliberalismo era una ideología económica que abogaba por el desarrollo capitalista de libre empresa mediante la privatización de las industrias estatales, la reducción del gasto social y soluciones de "libre mercado" a los problemas sociales. Los ochenta fueron testigos de la "década perdida" de depresión económica en América Latina; las economías y los niveles de vida de los europeos orientales en los noventa cayeron en picada bajo las políticas neoliberales.

La estabilidad y legitimidad del partido gobernante más longevo del mundo, el PRI de México, ya no se da por descontada. ¿Por qué? A pesar de los frecuentes retrocesos, a lo largo de muchas décadas oleada tras oleada de resistencia popular contra el estado unipartidista y corporativista de México y contra las burguesías locales y foráneas a las que servía se han transformado en una verdadera marejada. El estado ha hecho diversos ajustes a este desafío, volviéndose más sofisticado en su combinación de represión, concesiones, retórica revolucionaria y reconocimiento de sus fracasos. Algunos mexicanos se han vuelto cínicos y desesperan de que alguna vez sea posible cambiar "el sistema" que los mantiene sometidos. Otros, sin embargo, han desarrollado una obstinada esperanza en que sus luchas no serán en vano.

Su esperanza se ha convertido en la esperanza de México, y esa esperanza es el *leitmotiv* de este libro. En último análisis, su esperanza se basa en el encuentro del México moderno con la historia. En palabras de un comunicado de febrero de 1994 emitido "desde las montañas del sureste mexicano" por las guerrillas zapatistas a sus partidarios de todo México:

> Durante años y años cosechamos la muerte de los nuestros en los campos chiapanecos [...] Los más viejos de los viejos de nuestros pueblos nos hablaron palabras que venían de muy lejos, [...] de cuando nuestra voz era callada. Y [en] la verdad [...] venía también la esperanza para nuestra historia. Y apareció en su palabra de ellos la imagen de uno de nosotros: Emiliano Zapata. Y en ella vimos el lugar a donde nuestros pasos debían caminar para ser verdaderos, y a nuestra sangre volvió nuestra historia de lucha [...] Nuestra fuerza debió romper esas paredes [mal gobierno] para entrar otra vez a nuestra historia, a la que nos habían arrebatado junto a la dignidad y la razón de nuestros pueblos. En ese primer golpe a los muros sordos de los que todo tienen, la sangre de los nuestros, nuestra sangre, corrió generosa para lavar la injusticia que vivíamos. Para vivir morimos. Volvieron nuetros muertos a andar pasos de verdad. Con lodo y sangre se abonó nuestra esperanza. Pero la palabra de los más viejos de los viejos de nuestros pueblos no se detuvo. Habló la verdad diciendo que nuestros pasos no podían caminar solos, que en la carne y sangre de hermanos de otras tierras y cielos nuestra historia de dolor y pena se repetía y multiplicaba. [...] Pero junto a su paso de ustedes y de todas las personas buenas de este mundo habremos de crecer y encontrar al fin el lugar que nuestra dignidad y nuestra historia merecen.[3]

[3] Subcomandante Marcos, "Comunicado a las organizaciones que forman la Coordinación Nacional de Acción Cívica para la Liberación Nacional, febrero de 1994", en EZLN, *documentos y comunicados* (prólogo de Antonio García de Léon, crónicas de Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska (México, Ediciones Era, 1994), comuniucado del 14 de febrero de 1994, pp. 146-47.

PRIMERA PARTE

UNA HISTORIA DIFÍCIL





MÉXICO REVOLUCIONARIO

CAPÍTULO 1

INVASIÓN, COLONIZACIÓN E INICIOS DEL CAPITALISMO MEXICANO

Vine por oro, no para cultivar la tierra como campesino.

HERNÁN CORTÉS

Las condiciones coloniales y precoloniales de México sentaron las bases para su formación estatal y de clase y para el subsiguiente desarrollo de una economía capitalista marcadamente dividida entre ricos y pobres. En la época colonial, México era conocido como "Nueva España", un área que abarcaba la actual Centroamérica y el suroeste de Estados Unidos (incluyendo Texas y California).

Este capítulo tiene un enfoque múltiple. Primero, documenta las profundas raíces coloniales del actual problema económico de México en la historia de su desigual desarrollo económico. Segundo, observa las cuestiones desde los diferentes puntos de vista del pueblo mexicano, en términos de una historia social marcada por la raza, el género y la clase. Específicamente, estas agrupaciones incluyen a las masas trabajadoras de piel más morena; a las de piel más clara, usualmente élites blancas; a los conquistadores españoles y a sus descendientes, cuyos intereses a menudo eran diferentes no sólo de los de las masas sino también de los de las autoridades coloniales de la monarquía gobernante en España, y finalmente, los representantes del estado colonial. Tercero, el capítulo expone la historia de la resistencia popular contra la opresión por parte de las clases más bajas, incluyendo el importante papel representado por las mujeres. Finalmente, el capítulo relata desde hechos iniciales hasta otros posteriores, yendo en ocasiones a través de siglos enteros en un solo viaje. Es importante para el lector conocer desde el inicio la periodización *socioeconómica* (más que política) de la historia mexicana adoptada aquí.

El periodo precolonial incorpora la creación de las grandes civilizaciones indígenas de México anteriores a la llegada de los españoles en 1519. En tiempos precoloniales, emergieron fuertes estados centralizados, que dieron como resultado el imperio azteca.

El periodo colonial en su mayor parte (1519-1770) presenció la dominación de los aztecas por parte de los españoles y el surgimiento de un capitalismo dependiente embrionario estimulado por el capital mercantil y bajo la tutela de un poderoso estado colonial. La época de la colonia vio un empobrecimiento masivo de la mayoría de los habitantes originales de México y una movilidad hacia arriba limitada o bloqueada para quienes trabajaban la tierra. Estas con-

diciones desencadenaron repetidos levantamientos populares (a menudo llamados "tumultos") que amenazaban los vínculos con la "madre patria" española y que, lo que era aún más grave, desafiaban el poder de las élites tradicionales y de la naciente burguesía de la colonia.

El último periodo colonial y primero poscolonial (1770-1880) consistió en un proceso continuo aunque con altibajos de desarrollo capitalista desigual. Empezó en tiempos de cambios radicales en Europa y Norteamérica, cuando España adoptó una serie de reformas en sus políticas coloniales. Para México, el resultado de estos cambios fue una era de dinámico crecimiento económico, acompañado por sufrimientos aún mayores para la población rural.

Esto propició una intensificación del conflicto de clase entre ricos y pobres que estalló en una serie de tres momentos políticos de ruptura: desde 1810 y hasta 1822 los mexicanos conquistaron su independencia nacional; entre 1846 y 1848, Estados Unidos se apoderó militarmente de casi la mitad del territorio de la nueva república, incluyendo la mayor parte de California y el actual suroeste de Estados Unidos, y entre 1854 y 1867 las élites mexicanas se enzarzaron en una guerra civil sobre la naturaleza del estado y sus relaciones con la Iglesia católica. Durante este último periodo, Francia invadió y ocupó México en 1861. Un movimiento de liberación nacional liberó al país de los franceses en 1867 y estableció un estado democrático-burgués que muy pronto dejó paso a otro oligárquico-dictatorial. Ambos estados se concentraron en remplazar el modo de acumulación capitalista-mercantilista del periodo anterior, que ya estaba en vías de disolución, por un modo más puramente capitalista, capaz de industrializar el país y generar una acumulación capitalista a escala más amplia. Este proceso ganó fuerza durante las décadas siguientes.

Los principales trabajadores en el proceso de cambio económico que transformó a México tras la invasión española fueron los pueblos indígenas, conocidos en México como "indios" (aunque cada uno de los grupos indígenas tenía su propio nombre y su propia lengua o dialecto) y, más adelante, las diversas mezclas raciales que surgieron debido a la violación por los colonizadores españoles de las mujeres indígenas y a los matrimonios interraciales. El rígido sistema colonial de jerarquías de raza, clase y género contaba con un orden social definido por el poder de los conquistadores y de la Monarquía y la Iglesia a los que representaban. Los españoles estaban en la cúspide de la pirámide social, seguidos por los criollos (blancos nacidos en México), mestizos (de ascendencia mixta de español e india), mulatos (mixto de blanco y negro), negros (africanos) y, en lo más bajo, los indios. La mezcla de todas estas razas diferentes creaba lo que se conocía como "castas" —mestizos, mulatos, zambos (afroindios), afromestizos, etc.— o, a ojos de los españoles y de aquellos criollos que lograban introducirse en la clase alta, la "sucia plebe" que organizaba los tumultos. Aunque con el tiempo el racismo mexicano se fue haciendo menos severo que el que se desarrolló en Estados Unidos, durante el periodo colonial funcionó para mantener a las personas en rígidos nichos económicos que limitaban la movilidad geográfica y desalentaban el dinamismo económico.

En términos de clase, la pirámide social de México estaba edificada sobre una base de campesinos y trabajadores asalariados. En la cima había un reducido número de autoridades gubernamentales, religiosas y militares y de familias privilegiadas del comercio, la minería, la agricultura y la naciente manufactura. Algunas de estas élites, tanto españolas como criollas, con el tiempo evolucionaron para convertirse en una temprana burguesía productora, pero el proceso fue limitado y desigual.

Como es bien conocido, la colonización europea de los pueblos originarios de México y América Latina fue un hecho violento y, para algunos, extraordinariamente provechoso. Metales preciosos producidos por diferentes tipos de mano de obra duramente explotada inyectaron en Europa una vasta acumulación de riqueza. La Nueva España aprovisionó a Europa con oro, plata y gran número de otros valiosos productos primarios, incluyendo cochinilla y plantas medicinales importantes para el desarrollo de las manufacturas textiles y la medicina europeas.

En términos globales, el comercio mercantilista ayudado por estados poderosos, la creciente división del trabajo y el crudo pillaje caracterizaron este periodo de lo que Marx llamó "la acumulación originaria de capital", la condición necesaria para el desarrollo del capitalismo. Fue la época en que en el norte de Europa creció un superávit económico suficiente para iniciar la reproducción de un excedente sobre una base amplia, "los albores de la era de producción capitalista".[1]

Elementos de división del trabajo y acumulación de capital original dirigida por estados fuertes ya existían en las civilizaciones indígenas avanzadas del México prehispánico. Los españoles hicieron un uso relativamente bueno, aunque oportunista, de esta herencia. En el curso del tiempo, los cambios económicos que fomentaron sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo tipo de sistema: un capitalismo desigualmente desarrollado con un estado fuerte marcadamente influido por fuerzas exteriores.

El proceso poscolonial de acumulación de capital en México fue ampliamente definido en la época colonial por la habitual tendencia de las élites del país a ignorar el "mercado doméstico" enviando sus excedentes mineros y agrícolas al extranjero. Los ricos hacendados, mineros y comerciantes de la Nueva España pagaban la fuerza de trabajo que producía estos excedentes por debajo del valor de la fuerza de trabajo de los obreros, esto es, por debajo de la cantidad requerida por el trabajador para mantener una subsistencia mínima para él y su familia. (Esta "sobrexplotación" se examinará con más detalle

[1] Karl Marx, *El capital*, tomo I, vol. 3 (México, Siglo XXI, 1975), p. 939. Los incisos 1, 6 y 7 del capítulo XXIV y el capítulo XXV de la primera parte de *El capital* explican el papel de la "acumulación originaria" en el nacimiento de la era capitalista. Su papel en los sistemas de clase no capitalistas anteriores es explorado por Alexander V. Chayanov, "Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas", *Cuadernos Políticos* 5 (junio-septiembre de 1975), pp. 15-31; John Clammer, comp., *The new economic anthropology* (Londres, Macmillan, 1978); y Maurice Godelier, *Perspectives in Marxist anthropolgy* (Nueva York, Cambridge University Press, 1977).

en el capítulo 5.) Por consiguiente, rara vez quedaba algún excedente para las familias trabajadoras de la Nueva España con el que incrementar su consumo de bienes, limitando así aún más el tamaño del mercado doméstico.

Con esa mano de obra tan barata y al alcance de la mano, las élites coloniales de México tenían poco interés en modernizar las fuerzas de producción con las nuevas tecnologías que ya se iban aplicando en los transportes y en la industria de Europa y Estados Unidos. El subsiguiente intercambio desigual de productos de México con las potencias extranjeras derivó de esta temprana formación colonial del carácter de la acumulación de capital y de su correspondiente bajo nivel de productividad.

La naturaleza de la economía de México se vio fuertemente influida por el estado y la Iglesia coloniales. Imponiendo toda una serie de sobrecargas a todas las transacciones económicas, incluyendo el reclutamiento de mano de obra según una norma regia llamada el "repartimiento", el estado hacía difícil para cualquiera emprender cualquier actividad económica que no estuviese directamente relacionada con la producción para la "madre patria". La Corona recolectaba rutinariamente su "quinto real" de todos los ingresos comerciales de la colonia, incluyendo una quinta parte del valor de los metales preciosos exportados. Las instituciones del estado tenían muy poco interés en invertir en obras públicas o en grandes infraestructuras económicas.

Por su parte, la Iglesia católica recolectaba su "diezmo" (tasa del 10 por ciento) de los propietarios de las grandes haciendas, así como de los campesinos, artesanos y otros pequeños productores. El diezmo, recolectado en algunas áreas rurales incluso hoy día, reducía el excedente económico de México al tiempo que lo aumentaba en los cofres de la Iglesia en Europa.

En la misma medida en que la Iglesia se enriquecía en el México colonial, reforzaba también el patriarcado y el "machismo" (la ideología y práctica de la supremacía masculina con su correspondiente hincapié en la bravuconería, la virilidad, la "inferioridad" intelectual de las mujeres, la asignación a las mujeres del papel de cuidadoras del hogar y la familia, etc.), expresiones del cual se hallaban ya presentes en algunas de las culturas del México indígena. Estas costumbres se extendieron notablemente mediante las prácticas españolas y católicas, con el resultado de que la mitad femenina de la población experimentaba mayores dificultades y un papel restringido en la economía de mercado colonial, aunque las mujeres eran una parte esencial de la fuerza de trabajo subpagada en muchas zonas (por ejemplo, en el tabaco, los textiles y la producción de la bebida ceremonial, el pulque).

Las mujeres eran consideradas no sólo como objetos sexuales para ser tomadas por la fuerza si era necesario, sino también como yeguas reproductoras, de las que se esperaba produjeran tantos futuros obreros como fuera posible —porque sin trabajadores el excedente económico no podía generarse. A falta de una producción generacional de fuerza de trabajo —esto es, que las mujeres parieran y criaran bebés que crecieran para convertirse en trabajadores generación tras generación— ninguna economía podría sobrevivir por mucho

tiempo. Los "deberes" familiares no pagados de las mujeres y su trabajo doméstico, así como la producción de subsistencia y artesanal, se sumaban directamente a la generación de excedente económico. De hecho, la producción diaria de fuerza de trabajo de las mujeres, sin costo para los empleadores (alimentación de la familia, vestido y educación; mantenimiento de la cohesión de la comunidad, etc.), entonces como ahora, hizo una enorme contribución a la generación de riqueza que hasta el día de hoy no aparece en las estadísticas.[2]

Numerosas costumbres actuales de México datan de la época colonial. Una de ellas es el "personalismo", o la definición de las relaciones sociales como cosa "personal". Las regulaciones del estado colonial que protegían los monopolios de la Corona propiciaban los favores personales y el soborno para lidiar el papeleo. Las minúsculas pero crecientes clases medias formadas por militares de graduación intermedia, clérigos regulares, profesionales e intelectuales, a menudo dependían de sobornos para poder prosperar. Esto sentó un temprano precedente para la famosa "mordida" mexicana que frecuentemente demostró ser tan eficiente como corrupta.

A medida que México experimentaba su cambio económico, los indios semiesclavizados inicialmente proporcionaban la mano de obra, generaban parte del capital y aportaban gran parte de la necesaria tecnología y organización social para la producción de bienes, especialmente en la minería y la agricultura. Con el tiempo, los indios, los africanos, las "castas" y la mayoría de los blancos (perdiendo la descripción de "criollos") fueron sometidos, en su mayor parte, como mano de obra "libre", esto es, separada de los medios de producción, una de las precondiciones fundamentales para el surgimiento del modo de producción capitalista.

Durante todo el periodo colonial, los indios y otros individuos de las clases más bajas organizaron revueltas, en las que las mujeres tuvieron frecuentemente un papel importante e incluso de liderazgo. Estas rebeliones eran aplastadas brutalmente. Entre tanto, los frutos de los largos días y noches de labor por parte del pueblo siguieron siendo apropiados por las élites económicas o sus aliados del estado, los burócratas de la Corona.

El creciente desarrollo económico de México y la constante evolución de un mercado doméstico en el siglo XVIII —un capitalismo embrionario estimulado por el capital mercantil dueño del control de gran parte de la riqueza minera apropiada— contribuyeron al cambio social. Junto con los acontecimientos en

[2] Tradicionalmente, los estudiosos llamaban a menudo a la producción de fuerza de trabajo "reproducción", lo que se confundía fácilmente con "reproducción de las especies". Esta naturalización de una *relación construida socialmente* ha sido impugnada en análisis feministas recientes. Sobre las mujeres en la producción económica precapitalista, véase Stephanie Coontz y Peta Henderson, "Property forms, political power, and female labour in the origins of class and state societies", en Stephanie Coontz y Peta Henderson, comps., *Women's work, men's property: the origins of gender and class* (Londres, Verso, 1986), pp. 108-55. Sobre las mujeres en el México precolonial y colonial, véase Susan Schroeder, Stephanie Wood y Robert Haskett, comps., *Indian women of early Mexico* (Norman, University of Oklahoma Press, 1997).

Europa, desencadenados allí por la transición del capitalismo mercantil al temprano capitalismo industrial, ese crecimiento económico interno ayudó a desarticular formas anteriores de producción (comunal, esclava, de pequeño comercio, etc.) y a crear las condiciones para el renovado estallido de un conflicto de clase en la "Nueva España" que, mucho más explosivo que los anteriores, estaba a punto de producirse.

Los primeros pobladores

Quiénes fueron los pobladores originarios de México es algo que sigue sujeto a investigación, pero el método de datación del radiocarbono (C-14) y otros métodos innovadores han dado origen a algunas áreas de acuerdo tentativo. La evidencia sugiere que los seres humanos existieron en América desde hace al menos 50 000 años y probablemente más aún.[3]

La opinión más común es que los primeros pobladores eran originarios de Asia, y utilizaron el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska para cruzar a este continente. Las excavaciones arqueológicas en Mesoamérica (región que comprende considerables partes del México actual y de los países de América Central) han desenterrado pequeños objetos con ruedas, considerados como juguetes u objetos de culto. Los primitivos habitantes de México, según eso, habrían estado familiarizados con el principio de la rueda —aunque ni la rueda ni el arado eran utilizados, ya que no había animales de tiro.

La agricultura evolucionó muy temprano en Mesoamérica. El maíz era el cultivo principal; frijoles, zapotes, calabazas, chiles, aguacates y tubérculos se cosechaban también. Algunos pueblos agrarios excavados en el centro de México datan de hace unos 3 500 años. Los arqueólogos han descubierto miles de cabezas femeninas y estatuillas de barro en esos pueblos, lo que permite suponer que las mujeres poseían bien fuese poder temporal o significación religiosa o ambas; las estatuillas podrían ser diosas de la fertilidad.[4]

Muchas comunidades agrícolas en todo México cultivaban en forma comunal. La tecnología productiva constaba de objetos bien acabados de piedra, obsidiana y jade, así como palos de siembra o "coas", que todavía se usan en la actualidad.

La evolución de grandes "civilizaciones" de clases estratificadas, como las de los olmecas, Monte Albán, los mayas o Teotihuacán, es objeto de muchas controversias. Hay un consenso general acerca de que los logros científicos, ar-

[3] Descubrimientos arqueológicos a mediados de los noventa todavía en análisis sugieren un periodo todavía más largo para la existencia humana en América. Para estimaciones tempranas, véase Alex D. Krieger, "Early man in the New World", en Jesse D. Jennings y Edward Norbeck, comps., *Prehistoric man in the New World* (Chicago, University of Chicago Press, 1964).

[4] Véase Robert S. MacNeish, "The origins of American agriculture", *Antiquity* núm. 154 (junio de 1965); y "The origins of New World civilization", *Scientific American* (noviembre de 1964), y William Sanders y Barbara Price, *Mesoamerica* (Nueva York, Random House, 1968).

tísticos, arquitectónicos, de irrigación y de edificación estatal de estas sociedades precolombinas no pudo haberse dado sin la producción de un excedente económico (liberando a sectores de la población de la producción directa de alimentos), una importante división del trabajo y un grado de centralización política en forma de un estado representante de los intereses de la élite dirigente.[5] Varias investigaciones desde diversos puntos de vista han mostrado que la estratificación social, el conflicto de clases y los sistemas estatales de organización social compleja se habían desarrollado y florecido en México mucho antes de la llegada de los europeos.

Todas estas primitivas sociedades exhibían altos niveles de organización del trabajo y de producción, un aumento en el comercio a largas distancias, y en ocasiones el desarrollo de ciudades mucho mayores que cualquiera de las europeas. El asombroso tamaño y el notable arte de la arquitectura monumental, las pinturas murales, la alfarería y la escultura sugieren algo menos simple e igualitario que un "comunismo primitivo" o "ciudades-estado democráticas".

Caracterizados por los más elevados logros intelectuales de la América precolombina, los mayas (Periodo Clásico, 325-925), se extendían desde las tierras altas de la actual Guatemala y El Salvador hasta las semiáridas zonas límite de Yucatán en México. Comerciando con lugares tan distantes como la costa del Pacífico de Sudamérica, los mayas estaban a la cabeza de los demás pueblos del mundo en astronomía, matemáticas, escultura arquitectónica, grafología, arte mural y pintura.[6]

La organización social maya giraba en torno a pequeñas aldeas agrícolas de entre veinte y cuarenta familias, aunque algunos de los centros ceremoniales eran ciudades que albergaban hasta 80 000 residentes. La tierra era poseída en común por grupos hereditarios cuyos miembros no podían casarse dentro de su propio grupo. Cada familia cultivaba una parcela de la tierra comunal. Se estima que cada familia agrícola maya podía producir el doble de los alimentos que

[5] La sociedad olmeca floreció en las tierras altas y bajas de México aproximadamente entre 800 y 400 a.C. Ellos y sus sucesores usaban signos y símbolos matemáticos. Muchos estudiosos atribuyen la primera aparición plenamente evolucionada del estado en México al periodo olmeca. La civilización de Monte Albán (*ca.* 250-900), centrada en el valle de Oaxaca al sureste de la ciudad de México, se caracterizaba por una agricultura intensiva basada en la irrigación y en terrazas, alta densidad de población, comercio a largas distancias (de obsidiana, por ejemplo), y la producción de algodón y cochinilla (que más tarde serían una importante exportación mexicana a España y Europa). Sobre los mayas, véase Robert M. Carmack, Janine Gasco y Gary H. Gossen, comps., *The legacy of MesoAmerica: history and culture of a native American civilization* (Upper Sadle River, Prentice Hall, 1996). Sobre Teotihuacán, véase Rebecca Storey, *Life and death in the ancient city of Teotihuacan: a modern paleodemographic synthesis* (Tuscaloosa, 1992).

[6] Los mayas podían trazar con precisión el curso de planetas como Venus sin poseer telescopios, y podían calcular las fechas exactas de los eclipses solares. Tenían una cronología y un calendario que definía los 365 días del año solar más exactamente que lo conseguido mil años más tarde durante el pontificado del papa Gregorio en 1582. En matemáticas, dominaban el sistema de notación posicional ignorado por griegos y romanos. Utilizaban un sistema vigesimal y la cifra cero. (Los europeos no se familiarizaron con el cero sino en 1202, cuando los árabes lo introdujeron llevándolo desde la India.)

necesitaba en cuatro meses, dejando suficiente tiempo libre para trabajar en obras públicas, templos y otros servicios en beneficio de las clases superiores. A pesar de ser explotados por los que estaban por encima de ellos, los "comuneros" tenían un nivel de vida bastante confortable en algunas regiones.[7]

La ausencia de señales de grandes fortificaciones guerreras ha inducido a muchos académicos a considerar a las sociedades mayas como pacíficas teocracias: ciudades-estado independientes gobernadas por una casta sacerdotal. Otros estudiosos han concluido, sin embargo, que los mayas eran gobernados por "reyes guerreros". Egon Z. Vogt ha planteado la hipótesis de que los mayas tenían una organización social democrática, con funciones religiosas y administrativas rotativas y distribuidas de acuerdo con un complejo sistema temporal, rendimiento de servicios, riqueza y prestigio social. En otras palabras, no había un grupo profesional único como tal, y la nobleza no era hereditaria.

No se sabe cómo desaparecieron los mayas y otras civilizaciones antiguas. Existe una laguna de conocimiento detallado que abarca un periodo entre el final de las civilizaciones precolombinas clásicas, *ca.* 1000, y el surgimiento de las sociedades más seculares, complejas, y divididas en clases encontradas por los españoles, tales como el imperio azteca (1327-1519). Frecuentes explicaciones sobre el fin de las civilizaciones primitivas incluyen catástrofes naturales, hambrunas o epidemias (que en parte eran causadas por los dirigentes, pues se tomaban medidas inadecuadas para prevenir sus consecuencias), el crecimiento de la población en exceso de las reservas de alimentos (vinculado a las fallas de los grupos gobernantes en la distribución equitativa de los alimentos), guerras de clases y guerras con otros pueblos. Las condiciones en las civilizaciones primitivas podían volverse insoportables en épocas de suministros alimentarios inadecuados, especialmente para las mujeres, como se refleja en la falta de crecimiento en su estatura física a lo largo del tiempo y crecientes diferencias entre hombres y mujeres en sus estaturas, documentadas mediante el examen de los restos humanos descubiertos.

Muchos académicos han concluido que grupos en expansión desde el norte de México se extendieron por toda la meseta y por el sur, destruyendo a las civilizaciones anteriores. También se expandieron estados rivales de otros puntos (por ejemplo, el de los mixtecos en el sureste).

Desde el 900 hasta el 1300, los toltecas avanzaron hacia el sur y gradualmente fueron incorporando a otros pueblos del México central en un sistema de tributos, extendiendo su influencia por lo menos hasta Oaxaca y las tierras altas de Guatemala, bien mediante la conquista o por el establecimiento de alianzas. El comercio con las culturas andinas aparentemente existía, lo que tal vez explicaría la aparición de la metalurgia y otras técnicas peruanas relacionadas. Los toltecas no manejaron bien sus asuntos, sin embargo, por lo que pa-

[7] Véase Gordon Willey, "The structure of ancient Maya society, evidence from the southern lowlands", en John A. Grahame, comp., *Ancient Mesoamerican selected readings* (Stanford, Stanford University Press, 1966).

decieron hambrunas y cayeron víctimas de otra invasión procedente del norte: la de los pueblos conocidos como chichimecas.

Los chichimecas extendieron su influencia sobre la vasta red de lagos que entonces constituían el Valle de México, lugar de la actual ciudad de México. Pero se enzarzaron en guerras entre ellos mismos. Como consecuencia, muchos de ellos trataron de consolidar sus sociedades locales en pequeñas ciudades-estado estrechamente ligadas. Luego, en el siglo xv, los aztecas empezaron a afianzar su poder.

Para la época de los aztecas, nuevos inventos en la metalurgia, extensas obras de irrigación, una organización social más centralizada, un mayor contacto entre los pueblos, un grado más alto de centralización estatal y la supremacía de una élite militar y de la nobleza secular (más que de una casta sacerdotal) eran todas ellas evidentes. Económicamente, los aztecas acumulaban excedentes a través de las conquistas y los tributos impuestos a otros estados y pueblos. Los aztecas también se apropiaban de algunos de los productores de estas sociedades, forzándolos a trabajar en la construcción de los sistemas de irrigación y drenaje de Tenochtitlán, a edificar las casas de la nobleza, o a pelear en nuevas guerras aztecas de expansión. Un sistema de irrigación muy amplio y mejorado, que incluía el sistema de *chinampas* (mal llamado más tarde de "jardines flotantes"), junto con una creciente división del trabajo, producción artesanal y comercio (lo que caracterizaba igualmente a otros estados, como los de los mixtecos y zapotecas), generaron un considerable excedente económico distribuido entre la élite azteca de jefes militares, burócratas del estado, sacerdotes y nobles.

Socialmente, la extendida base de producción material de los aztecas permitió una diferenciación de clases en aumento. Hubo oportunidad de mejorar la situación de cada uno en la vida, incluso para los esclavos, que podían comprar su libertad con botín de guerra.

Políticamente, en el corazón del estado azteca estaban los *calpulli*. Traducido literalmente, *calpulli* significa "casa grande", una institución que antecedía a los aztecas y que era una comunidad dotada con tierras inalienables que cada uno de sus miembros estaba obligado a trabajar. Bajo los aztecas, los *calpulli* se convirtieron en unidades económicas, religiosas, militares y (para mediados del siglo xv) administrativas. El *calpullec*, o cabeza del *calpulli*, era elegido por los miembros de la comunidad. Pertenecía siempre a la misma familia, de modo que se desarrolló una nobleza hereditaria. Un consejo de ancianos respaldaba al *calpullec*. Los sacerdotes aztecas disfrutaban de independencia económica, dirigían las escuelas del *calpulli*, y ponían a las demás religiones bajo su dominio, destruyendo sus ídolos o, más comúnmente, incorporando otras deidades —de forma semejante a lo que más adelante harían los españoles.[8]

[8] Georges Baudot, *Utopie et histoire au Mexique: Les premiers chroniqueurs de la civilisation mexicaine, 1520-1569* (Toulouse, Édouard Privat, 1976), y Robert Ricard, *The spiritual conquest of Mexico* (Berkeley, University of California Press, 1966).

En 1376, los aztecas establecieron el rango de "Gran Orador" (*Huey Tlatoani*) que, con sus descendientes, disfrutaba de la más elevada autoridad y derechos excepcionales, incluyendo la poligamia. Estos descendientes (*pipiltin*) aumentaron las filas de la nobleza. Además existía una nobleza meritoria, consistente sobre todo en guerreros que se habían distinguido en la batalla. Organizados en órdenes militares, eran premiados con lotes de tributos valiosos y con tierras conquistadas, así como con elevados puestos en el gobierno. Esta aristocracia militar se convirtió en la autoridad que decidía sobre la sucesión del Gran Orador, arrancando este poder a los representantes del *calpulli*. Todos los nobles tenían derecho a la propiedad de tierras privadas; sus haciendas eran trabajadas por esclavos y siervos.

Por debajo de las élites dirigentes estaban los comerciantes, los artesanos y las clases trabajadoras. Los comerciantes, algunos de los cuales compartían los privilegios de la nobleza, ayudaron a los aztecas en la expansión de su riqueza y poder, trayendo frecuentemente al regresar de sus viajes mensajes e información militar o política útil. Con bastante poder en sus manos, tenían su propio sistema judicial, pero siempre bajo el control último de la clase gobernante. Los comerciantes traían desde las tierras bajas tropicales materias primas para los artesanos y de regreso llevaban los textiles, la alfarería y los objetos de metal de la meseta. Pero encontraron límites a su capacidad para acumular grandes riquezas. Debido al sistema de los *calpulli*, su posibilidad de acumular tierras era limitada, y no se les permitía irrumpir en la estrecha estructura gremial de los artesanos.

En Tlatelolco, ciudad vecina de Tenochtitlán y plaza del mercado principal, los comerciantes disfrutaban de una autonomía económica que iba rápidamente transformando un sistema normalmente dominado por el estado en una economía de libre mercado en cuanto a las mercancías (pero no en las tierras ni en la mano de obra).[9] El conquistador Hernán Cortés habla de que 60 000 personas se congregaban diariamente en Tlatelolco "para vender y comprar toda clase de mercancías imaginables". Su ayudante, el capitán Bernal Díaz del Castillo, maravillado ante la cantidad de objetos de oro y plata, escribió: "Admirando cosas tan maravillosas no sabíamos qué decir o si lo que aparecía ante nosotros era real." Pero Cortés sí sabía que era real. Les dijo a los aztecas: "Nosotros los españoles estamos afligidos por una enfermedad del corazón para la cual el remedio específico es el oro."[10]

La posición de los artesanos en la sociedad azteca era muy inferior a la de los comerciantes pero superior a la del resto de la población trabajadora. Los artesanos tenían voz en los consejos de la ciudad, y los más afortunados tenían numerosos trabajadores a sus órdenes.

[9] Véase Pedro Carrasco y Johanna Broda, comps., *Economía política e ideología en el México prehispánico* (México, Nueva Imagen, 1978); y Pedro Carrasco *et al.*, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica* (México, INAH, 1976).

[10] Véase Hernán Cortés, *Cartas de relación de la conquista de Méjico*, 2 vols., Madrid, 1942, y Bernal Díaz del Castillo, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, México, Patria, 1983.

Tres grupos conformaban las masas trabajadoras en la sociedad azteca: los hombres libres (esto es, miembros del *calpulli* que poseían la mayor parte de las tierras del Valle de México y constituían más de la mitad de su población); los siervos, o *mayeques*, que componían una tercera parte de la población del Valle, y los llamados esclavos, o *tlacotin*, que constituían cerca del 5% de la población. (Estas cifras no incluyen a los numerosos pueblos conquistados.)

Además de estos grupos principales de la sociedad azteca, también hacían su negocio ladrones, asesinos, prostitutas y otros más. Estos elementos misceláneos fueron aumentando a medida que las disciplinas y lealtades más tradicionales empezaron a desintegrarse ante la inexorable marcha de la conquista azteca y la centralización estatal.

Para 1500, el estado azteca gobernaba a una población de pueblos diversos a todo lo largo de Mesoamérica estimada entre 5 y 35 millones.[11] Puesto que los aztecas eran conocidos también como "mexicas", sus gobernantes llamaron "Mexico" a su imperio. Pero no llegaron a conquistar, integrar o administrar toda Mesoamérica. El comercio y las correrías militares servían para afirmar su hegemonía. La colonización azteca fue mucho menos completa que la versión española que la sustituyó.

En la construcción de su imperio, los aztecas sacrificaban a sus prisioneros a los dioses —una buena razón para la notable "estabilidad" de su régimen. (Grupos gobernantes anteriores usaron también los sacrificios humanos como instrumento de estatización.) La religión azteca afirmaba que los sacrificios eran necesarios para mantener al sol en movimiento gracias a las muertes sacrificiales, primero de los dioses y luego de seres humanos. Cada "periodo" del sol acababa en catástrofe, y el quinto periodo, que llegaría a su conclusión en la época de la invasión española, había beneficiado a sus fieles con una nueva base material de vida: el maíz.[12]

En los últimos años de dominio azteca, los sacrificios humanos aumentaron notablemente —al igual que lo hizo la disensión interna dentro del dominio azteca, especialmente por parte de otras sociedades indígenas, que se rebelaban en diversas partes del imperio mexica. El sistema azteca contenía la simiente de su propia desintegración: una red diversificada de trabajo forzado, trabajo servil, tributos, productores y distribuidores especializados, y un intercambio libre y creciente de mercancías. Las luchas y rebeliones se dieron principalmente entre las masas aplastadas pero, después de una devastadora hambruna en 1505,

[11] Henry F. Dobyns, "Estimating aboriginal American population", *Current Anthropology* 7 (1966), pp. 395-449. Las estadísticas fluctúan ampliamente en esta área difícil, pero los expertos están de acuerdo en que Tenochtitlán contaba con cerca de 300 000 personas, lo que la hacía mayor que Madrid o Roma.

[12] El maíz, un cereal muy durable y que se reproduce sin ayuda, que crece en gran variedad de climas y sin necesidad de siembra, fue un factor crucial en la transición a la agricultura sedentaria, al desarrollo de los pueblos y comunidades y de las sociedades estratificadas de clase. Hasta el día de hoy, representa casi el 75% de la ingesta diaria de energía de la mayor parte de los pueblos mesoamericanos.

los elementos más acomodados también se rebelaron. Así, el aumento de los sacrificios humanos se emparejaba con la necesidad del estado de mantener el temor y en consecuencia la estabilidad. Pero el número de los sacrificados era insignificante comparado con el número de indios que perecerían a manos de los españoles, o el número de mujeres europeas que fueron quemadas acusadas de "brujas" durante la Inquisición en la Europa medieval.

Los indios tlaxcaltecas y tarascos, pueblos fieramente independientes que sobreviven todavía hoy, se mostraron poco complacientes cuando los aztecas trataron de conquistarlos a fines del siglo xv. Luego, tras la gran hambruna de 1505, el emperador Moctezuma enfrentó tensiones crecientes en el Valle de México, por parte de las ciudades aliadas, e incluso de grupos dentro de Tenochtitlán. Como respuesta masacró a sus opositores, despidió a todos los funcionarios estatales que no eran nobles, aplastó a los comerciantes ambiciosos y se deificó a sí mismo de manera que toda la lealtad ya no siguiera dándose al gobernante y al estado —como en el pasado— sino al dios-emperador, Moctezuma.

Invasión y colonización

Cuando llegaron los españoles en 1519, estalló la guerra entre los soldados de Cortés y los indios. Sin embargo, los otomíes y los tlaxcaltecas, resentidos contra la dominación azteca, abrieron negociaciones con los españoles, y fueron reclutados por Cortés para marchar contra Tenochtitlán. De paso, Cortés procuró fortalecer su posición masacrando a los desarmados residentes de la ciudad de Cholollan (hoy Cholula), controlada por los aztecas.

Intimidado, Moctezuma intentó evitar una suerte similar para Tenochtitlán, inclinando la voluntad de Cortés con regalos de oro, plata y tocados de plumas. Cortés aceptó los obsequios y tomó prisionero a Moctezuma. Luego, cuando Cortés estaba de viaje a la ciudad portuaria de Veracruz para encontrarse con un nuevo desembarco de españoles enviado por su superior, el gobernador de Cuba, que antes le había ordenado no avanzar sobre Tenochtitlán, el segundo de Cortés, Pedro de Alvarado, dirigió una enorme matanza de los residentes de la capital, que estaban armados solamente con mazos.

Así, después de imponerse a los soldados españoles recién desembarcados en Veracruz, Cortés regresó a la agitada Tenochtitlán, en donde encontró al pueblo furioso y alzado. Unidos bajo la dirección del hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, los aztecas aprovecharon su número superior y su familiaridad con el sistema de puentes y canales para aislar al ejército de Cortés y casi diezmarlo. Cortés procuró arreglar la situación presentando a Moctezuma ante el pueblo como gesto de paz, pero el emperador, caído en desgracia, fue apedreado hasta la muerte por sus antiguos súbditos. En lo que los libros de historia occidentales llaman la "Noche Triste", Cortés y los restos de su ejército huyeron de Tenochtitlán amparados por la oscuridad.

La victoria azteca fue de corta duración. Cortés reagrupó las fuerzas que le quedaban, reforzándolas con soldados de Tlaxcala ansiosos de acabar con la tiranía azteca. Con este inmenso ejército de indígenas y la superior tecnología española de armas de fuego, espadas, armaduras y caballos, volvió a invadir Tenochtitlán en 1521. Una epidemia de viruela, enfermedad desconocida en Mesoamérica, debilitó a las fuerzas aztecas y arrebató la vida a Cuitláhuac. Su sobrino Cuauhtémoc asumió la dirección.

En un prolongado sitio, durante el cual el agua de los canales corría roja de sangre y el hedor de los muertos enfermó a Cortés, los españoles tuvieron que destruir Tenochtitlán para poder conquistarlo. Destruyeron el intrincado sistema de irrigación y pasaron a cuchillo a los ciudadanos; Cortés calculaba que habían matado a 100 000. Tomaron prisionero a Cuauhtémoc, y luego le ejecutaron. El 13 de agosto de 1521 los aztecas capitularon, sellando el final de su ya inestable régimen.

En el México actual, buscamos en vano una estatua de Cortés o de su muy calumniada amante, Malinche (de cuyo nombre deriva el término idiomático para traición, "malinchismo"). La Malinche, miembro de un grupo indígena enemigo de los aztecas, sirvió a Cortés como intérprete y, después de darle un hijo, se cuenta que fue estrangulada por el desagradecido Cortés o que murió de una enfermedad desconocida antes de cumplir los treinta años. Estatuas de Cuauhtémoc, por el contrario, aparecen en lugares prominentes. A menudo los padres bautizan con su nombre a sus hijos. Por ejemplo, el primer jefe de gobierno de la ciudad de México electo popularmente (1997), mestizo como la mayoría de los mexicanos, se llama Cuauhtémoc Cárdenas.

Con el Cuauhtémoc original fuera de juego, los conquistadores, ayudados por los clérigos católicos, se concentraron en su negocio inmediato: hacerse con la riqueza, las tierras y la fuerza de trabajo de los indios, para enriquecerse ellos mismos y a la Corona. En palabras de Cortés: "Vine por oro, no para cultivar la tierra como campesino", a lo que el obispo Alonso de la Mota y Escobar añadió: "Donde no hay plata el evangelio no entra... donde no hay indios, no hay plata."[13]

La invasión española destruyó la autonomía económica y política de los estados indios, reestructurando aquellas partes que la Corona, la Iglesia y los colonizadores podían usar para su propio engrandecimiento. Así, las heterogéneas sociedades indígenas se fueron reduciendo gradualmente a una población más homogénea pagadora de tributos y, con el tiempo, a una disciplinada fuerza de trabajo.

La muerte se convirtió en la compañera cotidiana de los indios. Matanzas, flagelaciones, exceso de trabajo, mala alimentación, falta de higiene, hambre y enfermedades provocaron que más del 90% de la población hubiera desapa-

[13] Citado en Andre Gunder Frank, *Latin America: underdevelopment or revolution?* (Nueva York, Monthly Review Press, 1969). Los indios (y los esclavos africanos) eran llevados a las minas de plata del norte, de modo que el obispo probablemente tenía en mente la mano de obra indígena y no sólo la simple presencia de los indios.

recido para 1650. Muchos perecieron por enfermedades traídas por los españoles o en los barcos de esclavos, especialmente por la viruela, pero también tifus, sarampión, malaria, fiebre amarilla, difteria y paperas.

Las comunidades agrarias indígenas —aunque se les permitió continuar debido a su influencia estabilizadora y a su aportación de fuerza de trabajo— se vieron reducidas o dañadas por la importación española de ovejas y arados y por la producción de trigo para los blancos. (Las ovejas destruyeron las tierras con su pastoreo que ramonea hasta las raíces, mientras que los arados requerían más tierra cultivable para cada unidad de alimento producida.) Los españoles drenaron el lago que soportaba la agricultura de chinampas y monopolizaron las fuentes de abastecimiento de agua, aumentando más aún la malnutrición y el hambre entre los indios. El cuadro 1, basado en los cálculos demográficos muy conservadores de Charles Gibson, muestra la marcada disminución y parcial recuperación de la población indígena en el Valle de México entre 1520 y 1800, así como los años de grandes epidemias.

Esta disminución de la población aumentó los sufrimientos de los indios en la medida en que los españoles competían por la escasa mano de obra. El látigo, la horca y el cepo, la prisión, tortura, violación y muerte fueron armas comunes para imponer la disciplina laboral.

Un clérigo como el obispo Bartolomé de Las Casas, conocido como el "Protector General de los Indios", defendió los derechos humanos de los indígenas. Asistido por unos pocos sacerdotes, Las Casas consiguió una bula papal en 1537 que declaraba "libres" a los indios. En 1542 la Corona promulgó las Nuevas Leyes, prohibiendo la concesión de nuevas tierras de los indios a los colonizadores. Las autoridades locales evadieron las Nuevas Leyes con la famosa máxima "Obedezco pero no cumplo". Éstas, y los frailes franciscanos y dominicos, persuadieron a la Corona de que su estricto cumplimiento era imposible, llevando a la revocación de las Nuevas Leyes en 1545. Cinco años después la Corona ordenó que cesaran todas las nuevas expediciones de conquista hasta que el gobierno pudiera decidir si éstas eran "justas". Finalmente, en 1573, la Ley Regular resolvió gran parte de la tensión entre la Corona y los colonizadores sustituyendo la palabra "conquista" por "pacificación" y simplemente urgiendo a los colonizadores a moderar su uso de la fuerza.[14]

A pesar del holocausto biológico, ruptura cultural y explotación económica sin precedentes, algunos indios se las arreglaron para ajustarse a la nueva situación. Los profusos, exóticos rituales de la Iglesia católica y su ordenada

[14] La mayoría de los historiadores no mexicanos (y algunos mexicanos) desde siempre han subrayado estas preocupaciones "morales" de la Corona, y no obstante han desechado como irremediablemente "tendenciosa" la investigación realizada por Las Casas. Véase, por ejemplo, Lewis Hanke, *The Spanish struggle for justice in the conquest of America* (Boston, Little, Brown and Company, 1965). Las Casas interpretó la conquista como un producto del poder sanguinario y del pillaje en su *Historia de las Indias*, 2 vols. (Madrid, 1957), y *Brevísimo sumario de la destrucción de las Indias* (1552). Véase también Cockcroft, "Prescott and his sources: a critical appraisal", *Hispanic American Historical Review* 48, núm. 1 (febrero de 1968), pp. 59-74.

CUADRO 1
Población indígena y epidemias, Valle de México

Población estimada	*Año*	*Grandes epidemias*
1.5 millones	1520	1521
300 000	1570	1545-1548, 1576-1579
70 000	1650	1629-1634
120 000	1742	1736-1739, 1761-1762
275 000	1800	1784-1787

FUENTE: Charles Gibson, *Los aztecas bajo el dominio español*, México, Siglo XXI, 1965.

jerarquía contenían formas que ya les eran familiares, y transfirieron gran parte de su antigua identidad religiosa a la nueva doctrina impuesta en lugar de sus destrozados ídolos, obviamente ineficaces. El día del santo patrón de un pueblo católico se celebraba con tanta alegría y bailes que remitían a los tributos devocionales ofrecidos a los viejos dioses y diosas. Se establecieron lazos de reciprocidad entre las comunidades indígenas y las autoridades de la Iglesia, obligando a ésta a apoyar —o al menos a aparentar que apoyaba— las demandas de un mejor trato por parte de la comunidad.

En 1531 un humilde indio llamado Juan Diego declaró que había visto una imagen de la "Virgen de Guadalupe" (madre de los dioses, o "Madre Tierra") viniendo milagrosamente a bendecir y sanar a su sufrido pueblo. La Virgen muy pronto se convirtió en un símbolo de salvación para los oprimidos. Los rebeldes de todas las revoluciones de México y de los movimientos sociales a partir de entonces han llevado su bandera en batallas y manifestaciones.

Sin embargo, las autoridades eclesiásticas de Roma se negaron a incorporar a la Madre Tierra Virgen de Guadalupe en la doctrina católica hasta 1648. La iglesia original de Nuestra Señora de Guadalupe fue construida por los españoles con mano de obra indígena en el mismo sitio donde una vez hubo un templo consagrado a Coatlicue (diosa azteca de la tierra y madre de los dioses). Muchas deidades aztecas representaban las fuerzas de la naturaleza, tan decisivas en la producción y el comercio agrícola, que —con los despojos de la conquista— habían formado la base material del imperio azteca. Después de superar sus dudas, las autoridades católicas simplemente adaptaron la Madre Tierra Virgen de Guadalupe azteca a su liturgia corriente. La celebración de la Virgen de Guadalupe continuó ininterrumpidamente hasta el día actual. Cada 12 de diciembre, conocido como el Día de la Guadalupana, decenas de miles de peregrinos llegan a pie hasta la Basílica de Guadalupe en las afueras de la ciudad de México para rendirle homenaje. Al honrar a la (virgen) madre de Jesucristo, los indios honran a la antigua madre de los dioses. Algunas oraciones aztecas siguen siendo expresadas en las ceremonias católicas para los indios actuales. Aun así, indios y mestizos siguen experimentando sentimientos ambivalentes con respecto a los clérigos, a los que a menudo ven como opresores.

Más importante que la incorporación religiosa de los indios en la época colonial, sin embargo, fue la integración de muchas de sus prácticas sociales al sistema de explotación español. Por ejemplo, los mayas habían practicado un sistema de *compadrazgo*, que muy pronto se amalgamó con el sistema europeo de los *padrinos*. El compadrazgo servía como una forma patriarcal de controlar la mano de obra indígena y fortalecer la jerarquía de clase. Proporcionaba una forma patrón-cliente de intercambio que aún hoy día sigue siendo común. Un compadre más acaudalado debía asistir a su "ahijado" con regalos en sus días de cumpleaños —manteniéndose atento a las actividades de la familia campesina u obrera y al mismo tiempo asegurarse de que no había señales de rebelión.[15]

Aunque exentos de tasas y diezmos, los indios tenían que pagar un tributo anual. Hombres, mujeres y niños eran acarreados a las minas y obrajes (talleres textiles, molinos o fábricas), sacrificados, en palabras del antropólogo Eric Wolf, "a la producción de objetos que no tenían más fin que maximizar la ganancia y la gloria del conquistador individual".[16] Al describir a los trabajadores como "explotados despiadadamente", un investigador dijo que "algunos dueños de obrajes encerraban a sus indios por la noche en dormitorios vigilados".[17]

En un principio los colonizadores españoles intentaron conservar los restos de las antiguas clases dirigentes para que les ayudaran a recaudar los tributos y a organizar y disciplinar la fuerza de trabajo. Tras una resistencia inicial (como la rebelión del Mixtón reprimida en 1541), la mayoría de los antiguos indios nobles y altos cargos cooperaron, conservando sus privilegios bajo nuevas condiciones. Empezaron a ser conocidos con el nombre de *caciques*. A su vez, algunos de ellos se convirtieron en "gobernadores", elegidos por las comunidades indias que administraban. Además de caciques varones, también había mujeres, llamadas pues *cacicas*.[18]

[15] Véase Segundo Montes, *El compadrazgo* (San Salvador, UCA Editores, 1979). Para estudios de caso regionales que confirman la continuidad de las prácticas sociales precoloniales, consúltese James Lockhart, *The Nahuas after the conquest: a social and cultural history of the Indians of Central America, sixteenth through eighteenth centuries* (Stanford, Stanford University Press, 1992); Ida Altman y James Lockhart, comps., *Provinces in early Mexico: varieties of Spanish-American regional evolution* (Los Angeles, UCLA Latin American Center Publications, 1976); Hugo G. Nutini, *Ritual kinship, ideological and structural integration of the compadrazgo system in rural Tlaxcala*, vol. 2 (Princeton, Princeton University Press, 1984).

[16] Eric R. Wolf, *Sons of the shaking earth* (Chicago, University of Chicago Press, 1959). p. 200.

[17] J. I. Israel, *Race, class and politics in colonial Mexico* (Londres, Oxford University Press, 1975), p. 39. A los indios a veces les iba mejor en las haciendas, en las que algunos se refugiaban. Véase François Chevalier, *Land and society in colonial Mexico* (Berkeley, University of California Press, 1963), cap. 8.

[18] La palabra *cacique* viene del término arawaco *"kassiquan"* ("tener o mantener una casa"). Los españoles importaron este término del Caribe para aplicarlo a las autoridades indias cooptadas, aunque no todos los caciques fueron cooptados. Sobre las *cacicas*, véase June Nash, "Aztec women: the transition from status to class in empire and colony", en Maria Etienne y Eleanor Leacock, comps., *Women and colonization: anthropological perspectives* (Nueva York, Praeger, 1980), pp. 134-48, y Steve J. Stern, *The secret history of gender: women, men and power in late colonial Mexico* (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1995).

Cada comunidad tenía su propio *cabildo* (ayuntamiento), para el que se elegían de cinco a diez concejales de entre la antigua clase dirigente. El gobernador y los concejales mantenían "la ley y el orden". Supervisaban las tierras comunales y el mercado local; recaudaban los tributos en nombre de los *corregidores* (funcionarios españoles locales a cargo de los distritos y de la recaudación de contribuciones); obligaban a asistir a la iglesia y organizaban la mano de obra para los colonizadores. A cambio, tenían derecho a poseer tierras y a heredarla a sus descendientes, comerciar, poseer esclavos y adoptar las costumbres de los españoles. Algunos de ellos llegaron a ser terratenientes y comerciantes en gran escala (con esclavos y con sirvientes mulatos) y reinaban sobre sus comunidades. Hasta el día de hoy los mexicanos siguen utilizando el término de *cacique* para referirse a los líderes obreros poderosos, por lo general rurales, o a los funcionarios locales.

Inicialmente, los invasores españoles dividieron a los indios para su propio uso —como concubinas, esclavos y fuentes de nuevas generaciones de la mano de obra que tan desesperadamente necesitaban. La aprobación de la Corona se daba por descontada, puesto que prácticas anteriores en el Caribe español ya habían incluido instrumentos de reclutamiento de mano de obra como el *repartimiento* y la *encomienda*. Bajo el sistema del *repartimiento*, los colonizadores tenían que alquilar el trabajo indígena según las tasas impuestas por la Corona con salarios predeterminados para periodos de tiempo establecidos. La *encomienda* derivaba de un decreto real que daba a Cristóbal Colón acceso a los indios y a su fuerza de trabajo —aunque no a sus tierras— "en encomienda". Por su parte, los conquistadores tenían que cristianizar a los pueblos indígenas. Para 1542, unas treinta encomiendas incorporaban a unos 180 000 trabajadores indios, cuya producción iba a manos de los *encomenderos*.

El afán del clero católico de ayudar a someter y disciplinar a los indios se hizo legendario. Un fraile franciscano, Juan de Zumárraga, alardeaba en 1531 de la destrucción de más de 20 000 ídolos. Los misioneros condenaban las prácticas de poligamia y homosexualidad, las cuales suprimieron. Forzaban a las mujeres que en ocasiones iban con los pechos descubiertos a cubrirse con la típica blusa indígena, el *huipil*. A los hombres que usaban taparrabos les hacían usar pantalones blancos, que se convirtieron en el atuendo típico en los siglos por venir.

Poco después de la invasión española, el papado confirió a la Corona de Castilla la completa supervisión del establecimiento eclesiástico en América, a cambio de la conversión de los indios y del mantenimiento económico de la Iglesia. En 1536 esta alianza Iglesia-estado introdujo en la Nueva España la Inquisición, gracias a la cual términos como "herejía", "delito" y "traición", se convirtieron casi en sinónimos. Los clérigos aplicaban castigos rigurosos.[19]

[19] Sobre el papel institucional y las prácticas reales de la Inquisición, los tribunales eclesiásticos y los órganos jurídicos del estado, consúltese Michel Foucault, *Vigilar y castigar*, 4a. ed. (México, Siglo XXI, 1980). El padre Zumárraga fue el primer inquisidor y orientó su persecución tanto

Sostenidos por los diezmos, las cuotas por servicios religiosos y el ingreso por los alimentos producidos por los indios en las inmensas posesiones agrícolas de la Iglesia, los curatos también financiaban y administraban escuelas, hospitales y la caridad, al tiempo que adoctrinaban a las masas en la nueva fe. Beneficiándose de los privilegios estatales y del poderoso instrumento de la Inquisición, la Iglesia surgió como una fuerza económica dinamizadora y productiva, calculando sus variadas empresas según normas racionales orientadas a la ganancia. Al invertir sus ingresos en préstamos hipotecarios y otros créditos a las empresas privadas en la minería, el comercio y la agricultura, con intereses más bajos que las tasas del mercado, la Iglesia se convirtió en la mayor institución de crédito de México. Sus "bancos" rurales, por ejemplo, engrasaban toda la economía agrícola. Para 1700, el ingreso de los fondos de la Iglesia americana estaba manteniendo el establecimiento eclesiástico no sólo en España y Portugal, sino también en Italia. En resumen, la Iglesia era simultáneamente terrateniente, banquero y capitalista.

Políticas de la Corona

En un principio, las primeras políticas españolas en sus colonias de América iban más en la dirección de la libre empresa que en la del feudalismo. En 1492 los "Reyes Católicos" de los reinos unificados de Castilla y Aragón ordenaron la expulsión de los musulmanes y los judíos, recolectando considerables riquezas de las propiedades de los deportados. Desde los días del dominio islámico de España (711 hasta 1031), los musulmanes y los judíos demostraron bastante tolerancia recíproca y hacia los cristianos. Ayudaron a crear la cultura española en muchas formas perdurables. Lingüísticamente, por ejemplo, muchos términos árabes se introdujeron en el español cotidiano, como "ojalá" ("quiera Alá"), que adquirió el sentido de "así sea".

En el curso de las Cruzadas católicas y la expulsión de los musulmanes y judíos (conocida en la historia española como la Reconquista, de 1031 a 1492), España había establecido un estado centralizado, administrado por una burocracia de *letrados* (legistas de formación universitaria) y dependiente de la exportación de materias primas (más que de bienes manufacturados) a otras partes de Europa. Como la industria textil española no podía competir con las lanas y sedas más baratas de Francia, Holanda o Inglaterra, el monopolio del ganado lanar controlado privadamente (la *mesta*) encontraba más provechoso exportar lana virgen que paños castellanos.

La vida comercial española se basaba en un próspero sistema mercantil de gremios de producción, monopolios privados, empresas navales y monopolios

contra los colonos insumisos como contra los indios que seguían prácticas no cristianas o que de alguna manera se resistían a las demandas del clero, especialmente en las cuestiones de acaparamiento de tierras y cobros de tributos a los antiguos nobles indios. El castigo de este último "pecado" fue una de las causas de la rebelión del Mixtón en 1541.

mercantiles protegidos por el estado. Por consiguiente, con los recientes avances en las posibilidades de navegación a largas distancias, las élites dirigentes españolas fijaron sus ojos en las nuevas riquezas ultramarinas.

Durante la Reconquista, gran parte del poder militar y político de la nobleza feudal española se había derrumbado. Surgieron nuevos valores e instituciones: una fuerte autoridad en la forma de un estado monárquico, un catolicismo militante, recompensas para las proezas militares y el logro individual, el uso de lazos familiares y conexiones con la Corte (*personalismo*) para ganar riqueza y prestigio; la mira en el comercio, la producción gremial o la toma directa de tierras o riquezas más que en las nuevas técnicas de producción y el destaque correspondiente de las hazañas individuales para adquirir grandeza. Dados estos nuevos valores y las inmensas distancias y riesgos implícitos en el comercio ultramarino, la Corona pensó práctico dejar que la libre empresa patrocinada por el estado condujera las exploraciones del nuevo mundo.

Los individuos o grupos privados pagaban su propio desplazamiento. Comerciantes respaldados por el estado ayudaban a financiar las expediciones ultramarinas para abrir rutas comerciales marítimas hacia las Indias y las preciosas telas bordadas, las especias exóticas y otras riquezas famosas de aquellos lugares. La tradición militarista de la Reconquista aportaba muchos exploradores voluntarios, acostumbrados a actuar con valor y codicia.

Para sorpresa y alegría de los mercaderes, exploradores y futuros conquistadores, se encontró un destino intermedio: América. Mejor piloto que geógrafo, Colón creyó haber descubierto las Indias y por eso llamó "indios" a los habitantes de América. México y Perú (que entonces incluía a la actual Bolivia) mostraron ser los premios mayores, cargados de no previstas riquezas: oro, plata y fuerza de trabajo local acostumbrada a pagar tributos, tanto en productos como en trabajo. La riqueza obtenida en previas invasiones (por ejemplo, la de Cortés en Cuba) financiaba las siguientes (México y después Perú).

Cortés era un representante del espíritu de la "libre empresa". Fundó explotaciones mineras en el sur de México, abrió las primeras minas de plata en Taxco y estableció una amplia gama de actividades empresariales además de la agricultura. Para 1569, su hacienda de 400 000 hectáreas en Oaxaca daba a su hijo un fabuloso tributo anual en pesos de oro. La hacienda de Cortés incluía una naciente industria de la seda basada en la morera, dos ingenios azucareros, trigo, frutas, caballos, vacas, ovejas, cerdos y corrales de mulas criadas en Tehuantepec para el servicio de las minas del norte. En México, el afortunado conquistador o colonizador se convertía en empresario minero, ranchero, comerciante y productor de cosechas comerciales en las haciendas y de textiles en los obrajes.

Aunque alentando la libre empresa, la Corona se aseguraba de conservar el control. Firmaba *capitulaciones*, o contratos, con el jefe de cada expedición ultramarina, asignándole un área para la conquista y garantizándole ciertos títulos en caso de tener éxito en su aventura. La capitulación obligaba al explorador a pagar a la Corona un tributo sobre la riqueza obtenida en el extranjero.

Aquellos aventureros que conquistaban territorios sin haber firmado primero un contrato por lo general lo firmaban más tarde, para protegerse de los competidores en el mercado de la conquista. Las violentas disputas entre los colonos se hicieron legendarias, con los rivales incluso matándose unos a otros. Esos pleitos facilitaban a la Corona mantener su autoridad, aunque los conquistadores no se resignaban gustosamente a las restricciones de la Corona.

Apenas se había completado la invasión de México cuando la Corona empezó a socavar la autoridad de los conquistadores, reduciendo su estatus al de gobernadores reales ordinarios y en algunos casos revocando sus anteriores capitulaciones y sustituyéndolas con designaciones reales. En 1523 la monarquía prohibió las encomiendas, poniendo la mayoría de las mayores bajo jurisdicción real (incorporándolas a la Corona). Esto no afectó a las haciendas de Cortés.

La Corona declaró a todos los colonizadores españoles, a sus descendientes y a los indios, vasallos del rey. Envió virreyes y otros funcionarios para imponer la disciplina real a los levantiscos pobladores. Esta medida irritó a los colonizadores, y en 1566 una conspiración organizada por Alonso de Ávila (hijo de un prominente conquistador) para hacer rey de México al hijo de Cortés fue aplastada en embrión. Ávila y su hermano fueron decapitados y sus cabezas expuestas públicamente como advertencia contra futuras conspiraciones contra la Corona.

Para 1575, las mayores encomiendas (sin contar la de Cortés), que producían el 75% del tributo de la Nueva España, habían sido incorporadas por la Corona. Esto aseguró a la monarquía y a los monopolios mercantiles españoles inmensos ingresos por exportaciones tan importantes como el azúcar y las pieles, así como la cochinilla (tinte rojo extraído de ciertos insectos) y el índigo (tinte azul extraído de un arbusto) esenciales para la industria textil europea en expansión.

A partir de que España logró esta relativa prosperidad a través del comercio internacional, inmensamente enriquecido por el "quinto real" de la Corona de los metales preciosos y los ingresos del comercio colonial, la monarquía y los comerciantes españoles guardaron celosamente sus poderes monopolistas, reflejados en la autoridad concentrada en la Casa de Contratación y en el Consulado (gremio de comerciantes) de Sevilla y, desde 1717, de Cádiz. Las regulaciones estatales y el poder de los acaudalados importadores impidieron que las manufacturas de Nueva España alcanzaran un punto en el que pudieran desafiar o superar la importación de bienes de lujo y manufacturados desde Europa. Frecuentemente se producían conflictos económicos entre el poderoso consulado de comerciantes de la ciudad de México y la oligarquía mercantil de Sevilla.[20]

[20] Por ejemplo, el cacao era una importante cosecha para exportación en el primitivo México colonial, pero para mediados del siglo XVII España había trasladado sus cuotas comerciales y sus oportunidades de inversión a Venezuela, contribuyendo así a la defunción del cacao como aportador de dinero para los comerciantes y productores mexicanos, y su ascenso a la posición de principal exportación de Venezuela. Venezuela luego exportó la mayor parte de su cacao a México, en donde constituía un componente básico de la dieta diaria.

Periódicamente, la Corona declaraba fuera de la ley la producción de aceite de oliva, vino, ciertos textiles y otros productos que podían competir con los principales productos de España. Como consecuencia, la mayoría de los obrajes y los talleres de artesanos prósperos se aglomeraban en torno a las minas, las haciendas y los centros urbanos, aunque unos pocos vendían en los mercados nacionales e internacionales. Ni siquiera los productores de bienes agrícolas podían desarrollar una producción a gran escala si la Corona era convencida por los comerciantes del puerto de Veracruz de que podría surgir una élite colonial competitiva.

Después de su decreto de 1523 contra el uso del sistema de encomiendas y su prohibición de que los colonos usaran mano de obra no pagada (excepto para los esclavos africanos), la Corona instituyó métodos alternativos de reclutamiento de mano de obra. Introdujo el "repartimiento", regulado por sus corregidores. Esto lanzó a los colonizadores a una fiera competencia por conseguir esa preciosa mercancía productora de excedentes: la fuerza de trabajo. Los fabulosos descubrimientos argentíferos de 1546 y los correspondientes elevados salarios y "partidos" (participaciones del metal extraído) ofrecidos a los trabajadores atrajeron a un gran número de indios a las minas del norte.

Después de la epidemia de 1576 a 1579, la escasez de mano de obra se volvió aún más severa, y la Corona permitió que el sistema de "repartimientos" dejara su lugar a otro de trabajo "libre" contratado en el mercado de trabajo sin ninguna clase de limitaciones. Para 1602, el "repartimiento" estaba casi acabado. Solamente quedaban 140 comunidades indias en encomiendas privadas (comparadas con 480 en 1560). La mano de obra "libre" (asalariada) predominaba en la mayoría de las minas y en casi todas las haciendas.

En la principal zona productora de plata de Nueva España, Zacatecas, para 1598 no existían indios de repartimiento y sólo 130 esclavos africanos, comparados con 1 014 trabajadores libres. El trabajo asalariado se volvió también común en los obrajes textiles, en otros talleres, en el transporte y en el comercio, así como entre los artesanos, sirvientes, cargadores, barrenderos y en las multitudes encargadas en la ciudad de México de las operaciones de desagüe. Pocos de los colonizadores —y menos que nadie los comerciantes, mineros, hacendados y manufactureros— se lamentaron cuando la Corona decretó el fin oficial del repartimiento en 1632.

Así, para principios del siglo XVII, la mano de obra asalariada y diferentes formas de trabajo endeudado se habían convertido en prácticas comunes. Existían variedades regionales, por supuesto. Éstas incluían reductos de esclavitud en algunas zonas costeras y partes del noreste; el uso de la encomienda y levas de trabajadores en Yucatán y Chiapas, y una tendencia a fines del siglo XVIII hacia el peonaje endeudado en las haciendas.[21]

[21] Otras variaciones incluían la persistencia del *repartimiento* agrario en partes de Oaxaca y Guadalajara hasta el siglo XVIII. En la mayor parte de Oaxaca, por otra parte, los indios conservaban mucha de su propia tierra en parcelas dos o tres veces mayores por familia que las parcelas

Por otra parte, el trabajo libre a menudo equivalía a pagar trabajo forzado, trabajo endeudado o al pago en especie, aliviando sólo rara vez la intensa explotación sufrida por los indios. Muchos indios alquilados por un salario caían atrapados en una red de deudas adquiridas en sus compras de necesidades básicas —los primeros pasos en el largo proceso que condujo a la institucionalización en el siglo XIX de las "tiendas de raya". Además, tenían que pagar estipendios a la Iglesia y a las hermandades, así como impuestos reales (relativamente bajos); por otro lado, tenían tareas que desempeñar en sus comunidades, bajo la vigilancia de los caciques y sus subalternos.

Debido a la estructura de bajos salarios y a las grandes cantidades de trabajo doméstico no pagado y a la producción de subsistencia realizada por las mujeres y los niños, los costos de producción de la fuerza de trabajo indígena eran soportados principalmente por los mismos indios. Los productores campesinos usualmente veían cómo sus excedentes se los apropiaban otros, lo que les forzaba a recurrir al trabajo familiar no pagado en la agricultura de subsistencia y la producción artesanal doméstica simplemente para seguir vivos. Estas prácticas reforzaban el sistema mayor de explotación del trabajo "libre" con salarios bajos.

Los colonizadores más prósperos —debido a que se apoyaban en la mano de obra barata y en el uso de medios de producción menos capitalizados que los de los competidores extranjeros— rara vez eran capaces de desarrollar el mercado doméstico de la Nueva España más que regionalmente. Para hacerse ricos, la mayor parte de ellos transferían al mercado internacional sus excedentes mineros y agrícolas, que obtenían a base de sobrexplotación. Así, para las masas agobiadas, las formas no capitalistas de actividad económica, como el pequeño comercio, las artesanías domésticas y la agricultura en pequeñas parcelas de subsistencia se convertían en algo absolutamente necesario y, de manera contradictoria, funcional para la acumulación original de capital de las élites.

Para resumir: en el primer periodo colonial, el estímulo de la Corona a la libre empresa y al sistema laboral de salario libre, junto con sus decretos para hacer que la mayor parte de los territorios americanos fueran provincias reales en vez de propiedades independientes para individuos emprendedores, sirvió bien a sus intereses. Todos los derechos políticos y económicos estaban circunscritos por la Corona, la que legalmente poseía toda la tierra y controlaba la principal fuente de riqueza, la mano de obra de los indios. Estas políticas servían también a los intereses de la oligarquía mercantil española y a los nacientes grupos capitalistas del norte de Europa. La monarquía permitía a algunos coloni-

---

que poseen actualmente. En Yucatán, las encomiendas privadas no fueron abolidas sino en 1786, y los indios estaban también sometidos a levas por los oficiales de la Corona. En la zona fronteriza nororiental de Nueva España, de agricultura mixta (ganado y alimentos), la mano de obra libre era complementada por un sistema llamado *congrega*, mediante el que los terratenientes capturaban a indios nómadas que los atacaban y los llevaban a trabajar en sus haciendas como prisioneros de guerra. En la Nueva España central, en donde vivía la mayoría de la población, las haciendas agrícolas eran trabajadas en su mayoría por mano de obra libre.

zadores suficientes oportunidades para acumular generosos excedentes. De esta manera la Corona dio pasos suficientes —al menos por el momento— para prohibir la formación en Nueva España de un grupo rival de mineros, comerciantes, manufactureros y terratenientes capaces de amenazar seriamente su hegemonía, facilitando al mismo tiempo la acumulación de capital de las élites en la Nueva España.

Rivalidades intercoloniales e intercambio desigual

España tuvo menos éxito en sus tratos con sus rivales mercantilistas coloniales en Europa. La Armada española fue derrotada a mediados del decenio de 1580. La consolidación de la supremacía naval británica y de la superioridad comercial holandesa aparecieron a continuación, acompañadas por la penetración británica y holandesa en la América española. La piratería, el contrabando, la trata de esclavos y el pillaje dominaron los dos siglos siguientes.

En palabras de Marx, "los tesoros expoliados fuera de Europa directamente por el saqueo, la esclavización y las matanzas con rapiña, refluían" hasta Holanda, Inglaterra y otras potencias europeas "y se transformaban allí en capital".[22] La plata y el oro mexicanos que fluían a través de España para ir a pagar los bienes manufacturados del norte de Europa o los costos de la guerra y el imperio, acabaron la mayor parte de las veces en manos de los banqueros genoveses, holandeses y alemanes o en las de los nacientes industriales ingleses. De hecho, el gremio mercantil español (Consulado) se convirtió en frente y conducto para el capital de los comerciantes y primeros fabricantes del norte de Europa.

Los mercaderes españoles establecidos en México formaron monopolios comerciales, realizando su comercio a través de los puertos del Atlántico y el Pacífico, Veracruz y Acapulco. Ellos y sus descendientes residieron por lo general en la ciudad de México, también centro comercial en expansión. Algunas veces, más de la mitad de los embarques españoles hacia América iba destinado a México. Desde Acapulco, los barcos llevaban la plata mexicana y peruana a las Indias Orientales a cambio de las sedas y especias codiciadas por los europeos. En palabras de Adam Smith:

> En China e Indostán, el valor de los metales preciosos [...] era mucho mayor que en Europa y aún sigue siéndolo [...] La plata del nuevo continente parece ser de esta manera una de las principales mercancías mediante las que el comercio entre los

[22] Marx, *El capital*, ed. cit., tomo I, vol. 3, pp. 942-943. Así, aunque en cierto sentido, como afirma Randall, "la adquisición de México no fue económicamente provechosa para España", ciertamente sí lo fue para otros europeos. Los costos del imperio siempre reducen y tienden crecientemente a socavar las ganancias —pero sólo podemos especular cómo se las hubiera arreglado España sin la plata mexicana. Véase Laura Randall, *A comparative history of Latin America, 1500-1914* (Ann Arbor, 1977), volumen sobre México, p. 113.

dos extremos del viejo mundo (Europa y Asia) se lleva a cabo, y es mediante él como, en gran medida, estas distantes partes del mundo están conectadas la una con la otra.[23]

Los mercaderes españoles se encontraron que transferían sus ganancias hacia las operaciones de banca y de seguros de las que dependían. Como Tomás de Mercado, un teólogo dominico de la Nueva España, escribía acerca de los mercaderes sevillanos: "Hacia todas las Indias ellos embarcan grandes cargamentos de toda clase de mercancías, y regresan con oro, plata, perlas, cochinilla y pieles en enormes cantidades [...] para asegurar sus cargamentos (que valen millones) tienen que contratar seguros en Lisboa, Burgos, Lyon y Flandes, porque son tan inmensos sus fletes que ni los mercaderes de Sevilla ni de veinte ciudades como Sevilla son capaces de asegurarlos."[24] Entre tanto, el desarrollo manufacturero español encontró mayores inhibiciones por el impacto inflacionario de la plata de las colonias.

La estructura monopolista de este comercio mundial expandido facilitó el drenaje de enormes excedentes de México. Algunos cálculos disponibles relativos a principios de 1700 sitúan la *ratio* del valor de las exportaciones de la Nueva España respecto de sus importaciones en cinco a uno. Añadiendo la recaudación directa de tributos, podemos apreciar las pérdidas de México en beneficio de la "madre" patria. Con tanto hincapié en el comercio global, era poco lo que quedaba para el desarrollo de un mercado doméstico dinámico para México.[25]

Si la minería era el motor de la economía colonial mexicana, el capital mercantil era su aceite. Los comerciantes tenían el capital inicial con el que sacar provecho del descubrimiento de nuevas y fabulosas minas de plata en 1546 y de la introducción del proceso de patio en 1557, mediante el cual la plata se extrae de la ganga mediante su amalgama con mercurio, permitiendo la explotación de menas de baja graduación. Los monopolios mercantiles y la Corona predominaban en el valioso comercio de la plata y el oro.

Después de los grandes hallazgos de plata, hubo una rápida expansión de la actividad económica en los centros mineros de las regiones montañosas de Guanajuato, San Luis Potosí, Pachuca y, sobre todo, Zacatecas. La expansión minera generó un acrecentado comercio interno y externo, las actividades productivas relacionadas y la invasión y desarrollo de Santa Fe (en el actual Nuevo México) y Nuevo León (el actual Monterrey). Para 1609 cerca del 65% de las exportaciones de la Nueva España eran de plata.

[23] Adam Smith, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (Nueva York, Random House, 1937), pp. 204-207, citado en James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank y Dale L. Johnson, *Dependence and underdevelopment: Latin America's political economy* (Nueva York, Anchor, 1972), p. 21.

[24] Citado en John Lynch, *Spain under the Hapsburgs* (Londres, Oxford-Basil Blackwell, 1964), vol. I, p. 141.

[25] Un informe anual típico de los ingresos del tesoro real en la Nueva España a fines del siglo XVIII muestra más de 11 millones de pesos recaudados, 72 % de los cuales fueron a España y la mayor parte del resto a la burocracia colonial en México.

Pero, aunque se hacían grandes fortunas en la minería, era un negocio arriesgado, como lo ilustra su declinación a mediados del siglo XVII. La minería dependía notablemente de las escasas reservas de mano de obra, pues muchos trabajadores morían en las minas o se rebelaban contra las condiciones de trabajo. La minería también dependía del crédito, de los suministros de mercurio, de los decretos burocráticos reales y de la maquinaria, el transporte y los cauces de comercialización. Había empresas mineras pequeñas así como otras muy grandes, y la competencia era intensa. Además, los intermediarios ejercían el control oficial de las utilidades mineras en buena parte: los mineros tenían que aceptar los precios ofrecidos por los "aviadores", agentes de los grandes comerciantes de plata de la ciudad de México.

En 1634 España decidió enviar su mercurio a Perú en vez de a Nueva España y recaudar la deuda por el mercurio y la sal enviados a Nueva España. La subsiguiente declinación de la producción minera de México no fue tan grave como suele suponerse, puesto que los comerciantes criollos de México inyectaron nuevos créditos en el sector minero, se hicieron nuevos descubrimientos, y aumentó la fundición local de la plata. Luego, con la renovada disponibilidad de mercurio de España a fines de la década de 1660 y con la ayuda del capital local, la minería se recuperó, superando en el periodo de 1675-1690 la producción máxima alcanzada en Zacatecas en el decenio de 1620. Después de 1700, el valor total anual de la plata y del oro acuñados (en su mayor parte plata) aumentó gradualmente —de tres millones de pesos a trece millones para 1775.[26]

Desde 1770 hasta 1820, la industria minera fue organizada como un gremio, el Cuerpo de Minería, que estaba encabezado por un Tribunal General y manejado principalmente por criollos. El tribunal estimuló un auge a fines del siglo XVIII rebajando los precios del mercurio, creando "bancos" de crédito con capital local y permitiendo a los extranjeros invertir en la minería. Sin embargo, los trabajadores de las minas siguieron haciendo huelgas y rebelándose, y los nuevos descubrimientos de minas de plata hicieron más que todas las reformas del tribunal combinadas. El valor de la plata y el oro acuñados subió a más de 27 millones de pesos al año para 1805, cuando más de 3 000 minas estaban empleando a unos 35 000 trabajadores. Un número adicional de obreros, refinadores, artesanos, porteadores, vendedores ambulantes, tenderos, especuladores, prostitutas, y así sucesivamente, gravitaba en torno a las minas, unos

[26] P. J. Bakewell, *Silver mining and society in colonial Mexico: Zacatecas, 1546-1700* (Cambridge, Cambridge University Press, 1971), pp. 223-35; Richard Boyer, "Mexico in the seventeenth century: transition of a colonial society", *Hispanic American Historical Review* 57, núm. 3 (1977), pp. 445-78; D. A. Brading, *Miners and merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810* (Cambridge, Cambridge University Press, 1971), pp. 8-12; Israel, *Race, class, and politics*, pp. 30-33; y Lynch, *Spain*, vol. 2, pp. 199-200. Éstas y otras obras revisan con eficacia el argumento de Borah de que las epidemias fueron la causa de la decadencia de la minería a mediados del siglo XVII, y la tesis de Chaunu del fracaso de México como mercado. Véase Woodrow Borah, *New Spain's century of depression* (Berkeley, University of California Press, 1951), pp. 5-54; y Pierre Chaunu y Huguette Chaunu, *Seville et l'Atlantique, 1504-1650* (París, 1955-59), vol. VIII.

cuantos haciendo sus fortunas, la mayoría no. Problemas técnicos como las inundaciones, combinados con la creciente inquietud laboral, llevaron a una grave crisis a fines del periodo colonial. El valor de acuñación de la plata cayó hasta menos de 4 millones de pesos en 1810.

Los mexicanos que habían hecho sus fortunas en las minas fueron incapaces de conservar el control de todo el proceso. Ningún minero mexicano, por ejemplo, era capaz de financiar la importación de las plantas de bombeo especiales de Europa, aunque en 1803 la Corona promulgó un decreto permitiendo su importación.[27]

Los ricos comerciantes de Nueva España no sólo financiaban las minas sino que también ejercían su influencia en la agricultura, las manufacturas y una multitud de actividades especulativas. Los comerciantes del siglo xvii en la ciudad de México, aunque en su mayoría de origen europeo, incluían cierto número de criollos que aumentaban su capital cultivando buenas relaciones con altos funcionarios del estado y de la Iglesia, y entrando en arreglos de créditos y asociaciones con burócratas de niveles menores. Al aceptar sobornos, préstamos o promesas de participación en las utilidades, los burócratas se convirtieron de hecho en "empleados" de los comerciantes.

La corrupción estaba tan extendida que todo empresario criollo tenía seguramente un contacto en la burocracia estatal. Los comerciantes conspiraban con los burócratas para engañar a la Corona en los impuestos, el comercio y las prohibiciones de manufacturas. Las alianzas, asociaciones y matrimonios cimentaban los intereses económicos y sociales comunes de los criollos ricos y de los peninsulares (como eran llamados los españoles) activos en el comercio, la minería, la agricultura o la manufactura.[28]

Para 1604 el capital comercial había ayudado a financiar unas veinticinco fábricas textiles (obrajes) sólo en la ciudad de México, y muchas otras en Cuernavaca, Puebla, Texcoco, Tlaxcala y Querétaro. Una de las mayores empleaba a 120 trabajadores, mientras que otras empleaban entre 50 y 100 —cifras importantes para cualquier empresa manufacturera de aquella época.

Produciendo principalmente textiles de algodón y lana —la manufactura de la seda prosperó durante un siglo pero no pudo sobreponerse a la competencia de Asia— los obrajes concentraban trabajadores en condiciones inhumanas. Algunos obrajes usaban el sistema de "dar trabajo afuera", permitiendo que los indios de las aldeas vecinas hicieran el hilado inicial. La tendencia en

[27] España no respondió a los intentos británicos de vender su maquinaria para construir canales de drenaje y herramientas similares para "modernizar la minería". Véase Brading, *Miners*; Walter Howe, *The mining guild of New Spain and its Tribunal General, 1770-1821* (Nueva York, Greenwood Press, 1968), y Robert W. Randall, *Real del Monte: A British mining venture in Mexico* (Austin, University of Texas Press, 1972).

[28] Doris M. Ladd, *The Mexican nobility at independence 1780-1826* (Austin, University of Texas Press, 1976), pp. 34-36. Véase también Richard Lindley, "Kinship and credit in the structure of Guadalajara's oligarchy, 1800-1830", University of Texas, 1976, y Louisa Schell Hoberman, "Merchants in seventeenth-century Mexico City", *Hispanic American Historical Review* 57, núm. 3 (1977), pp. 479-503.

la mayoría de los lugares era hacia la concentración de la producción bajo un solo techo (manufactura) y hacia un control centralizado por los propietarios del obraje o por la burguesía mercantil, que a menudo eran uno solo. La tecnología del torno de hilar, la devanadera, el telar horizontal y la maquinaria movida por agua, sin embargo, a menudo seguía siendo primitiva. El dueño típico de un obraje era un residente español (o sus descendientes) que tenía otros intereses económicos, como comerciante (mercader) por lo común, pero cada vez más también en otras áreas.

Para un inmigrante ocasional, ser dueño de un obraje era un medio de ascenso social, que abría las puertas de los principales grupos de élite de la Nueva España. Unos pocos de las decenas de miles de nuevos pobladores españoles que llegaban masivamente a México durante el siglo XVI, se desenvolvieron muy bien en áreas selectas de la industria manufacturera, así como en las industrias menos desarrolladas relacionadas con artículos de cuero, espuelas, alfarería y textiles. El sistema español de gremios fue introducido muy tempranamente (gremio de herreros, 1524; sombrereros, 1561; sederos, 1584; laneros, 1592; bordadores en hilo de oro, 1599; etc.), y muchos inmigrantes trabajaban como artesanos, mientras que otros se dedicaban al pequeño comercio como tenderos, servían como vigilantes o peones, o se unían a las filas del estado llano.

Los mercaderes, aunque nunca llegaban a tener el control completo sobre otros propietarios del proceso de producción textil, lo dominaban de principio a fin. En los textiles de algodón, por ejemplo, proporcionaban las materias primas (algodón de las tierras bajas, algunas veces de plantaciones propiedad de los mercaderes), transporte, crédito, instrumentos productivos y canales de ventas finales. Los mercaderes y otros propietarios de obrajes cada vez más contrataban artesanos por salarios. En los textiles de lana, los comerciantes españoles y criollos dominaban los procesos de producción y distribución en medida aún mayor, al principio esclavizando a los indios y eventualmente apoyándose en un sistema de trabajo asalariado que a veces ligaba a los trabajadores mediante un sistema de deudas.

Los artesanos y otros sufrían un proceso de proletarización gradual aunque incompleto, perdiendo el control de gran parte de sus medios de producción y de la venta de sus productos finales. El sistema legal colonial respondió a estas realidades en 1790 y 1810, cuando las regulaciones que aseguraban la penetración gremial en la producción textil fueron eliminadas legalmente para conceder a la burguesía mercantil un mayor control de la industria y la mano de obra textil.

En el nivel nacional, los obrajes llegaron a emplear a miles de trabajadores, constituyendo en algunas instancias el motor económico de los principales centros de población —por ejemplo Puebla, con sus 20 000 trabajadores en los textiles de algodón y una población de 70 000 en 1810. Por otra parte, las regiones dominadas por tales centros manufactureros prosperaban en el comercio. En Puebla, treinta obrajes a principios del siglo XVII estimulaban un activo comercio que unía a las ciudades de Veracruz, La Habana, Caracas y Lima, así como

su propio mercado regional de productos agrícolas y artículos manufacturados y artesanales. Este crecimiento parcial pero vigoroso en el mercado doméstico es la razón por la que los estudios más recientes han considerado al siglo XVII no como uno de depresión sino como uno de transición hacia el capitalismo, la diversificación económica y el desarrollo de poderosas economías regionales.

No obstante, con los altibajos del mercado y del abastecimiento de capital (créditos de los mercaderes o de la Iglesia, suministro de materias primas, etc.), había frecuentes reorganizaciones en la propiedad de los obrajes, lo que desalentaba el desarrollo de una clase manufacturera coherente. Periódicamente se daban épocas de dificultades económicas que provocaban despidos masivos de trabajadores y un problema recurrente de desempleo urbano, lo cual empeoró durante los últimos cincuenta años de periodo colonial.

Además, siglos de colonialismo generaron lo que el sociólogo Peter Singelmann ha llamado una "desarticulación" de los mercados para la producción y circulación de mercancías.[29] Un mercado, el más lucrativo, era internacional, y se dedicaba al comercio de bienes primarios para el lujo europeo y de bienes de capital importados por las clases altas. El otro mercado era nacional o regional, e incluía la distribución de alimentos, ropa y algunos instrumentos de producción entre la población general para su supervivencia y reproducción. Aunque ambos mercados se apoyaban en gran medida en la mano de obra barata, el sector exportador y el mercado doméstico no estaban bien sintonizados, y la realización de excedentes en el primero permanecía independiente del tamaño del segundo. Las élites reforzaban continuamente los lazos con Europa enviando su dinero de vuelta a España, o reinvirtiéndolo en la producción para la exportación, o importando bienes de capital para el mismo fin, o comprando productos importados para su propio consumo.

Los salarios en la mayoría de los sectores de la economía permanecieron bastante estables desde 1650 hasta el final de la época colonial, y el nivel de explotación de los incorporados en la fuerza de trabajo no cambió perceptiblemente. Ya fuera en monopolios estatales, como la producción de tabaco, o en el sector privado, los trabajadores seguían laborando de doce a quince horas diarias a cambio de salarios miserables. Sobre esa base, por ejemplo, la Real Fábrica de Tabacos de Querétaro empleaba a 3 000 obreros, de los que el 60% eran mujeres, y obtenía unas ganancias regulares por año de más del 100 por ciento.[30]

Así pues, había pocos incentivos tanto para el estado como para las élites de la Nueva España para incrementar la producción mediante la mecanización, al menos al paso que marcaban los fabricantes europeos. La correspondiente mayor productividad del capital europeo promovió un proceso de intercambio desigual entre Nueva España y Europa.

[29] Peter Singelmann, "Peripheral capitalist development and the persistence of peasant production: the contradictions of an incomplete transition", texto presentado en el Quinto Congreso Mundial de Sociología Rural, México, D.F., 7-12 de agosto de 1980.

[30] Para más sobre este tema, véase Susan Deans-Smith, *Bureaucrats, planters, and workers: the making of the tobacco monopoly in Bourbon Mexico* (Austin, University of Texas Press, 1992).

Como el historiador de la economía Jeffrey Bortz ha señalado:

> Las exportaciones europeas derivaban de una productividad especial mayor que la de las colonias, permitiendo el envío (a las colonias) de bienes manufacturados y de las herramientas de producción. Las exportaciones mexicanas derivaban de los frutos de la naturaleza y los bajos costos de la fuerza de trabajo, lo que permitía enviar al extranjero bienes complementarios para la acumulación europea (y hacían a México dependiente) en el sentido de que su reproducción económica estaba basada en el desarrollo de la productividad en los países metropolitanos.[31]

Agricultura comercial y resistencia popular

A medida que la minería florecía y más gente se trasladaba a las zonas mineras, aumentaba la demanda de productos agrícolas, lo mismo que la necesidad de mano de obra. Ambas cosas conducían a una reducción de las tierras de los indios. Los terratenientes buscaban aumentar el volumen de la mano de obra sin tierra desposeyendo por la fuerza a los indios, lo que servía también para eliminar la competencia de los productores indios en los crecientes mercados interno y externo.

Para servir a los florecientes centros mineros, se organizó la agricultura sobre una base más comercial: la cría de caballos y mulas para trasladar la riqueza; el cultivo de azúcar y maíz para alimentar a la fuerza laboral que la producía, y el establecimiento de inmensos campos de trigo, molinos de harina y molinos de azúcar (o *ingenios* —literalmente máquinas—) en las *haciendas* que se extendieron por toda la Nueva España. En palabras del geógrafo y hombre de letras alemán Alexander von Humboldt:

> Las excursiones a través de la parte montañosa de México ofrecen los más obvios ejemplos de la benéfica influencia de las minas sobre la agricultura [...] La fundación de una ciudad sigue inmediatamente al descubrimiento de una gran mina [...] Las "haciendas" están establecidas en las proximidades; la escasez de alimentos y los altos precios causados por la competencia de los consumidores favorece a los productos agrícolas [...] De este modo, naciendo sólo del deseo de ganancia [...] una mina [...] se vincula muy pronto a las tierras largo tiempo abandonadas.[32]

Los hacendados y comerciantes hicieron fabulosas fortunas en el curso de la comercialización agrícola. Los productos agrícolas de la Nueva España —cochinilla, índigo, seda, algodón, pieles, grasa, productos de cuero, azúcar— eran negociados cada vez más a cambio de bienes manufacturados europeos, inclu-

[31] Jeffrey Bortz, "Wage determination in Mexico", manuscrito inédito (1981), e "Industrial wages in Mexico City, 1939-1975" (UCLA, 1982).

[32] Citado en Frank, *Latin America*, pp. 235-36.

yendo armas españolas, papel, telas finas, libros, vino, aceite de oliva y jabón. Regiones enteras se apartaron de la producción minera o agrícola para la exportación y desarrollaron una agricultura comercial. De hecho, durante las épocas de baja producción minera, como a mediados del siglo XVII o entre 1805 y 1810, la producción agrícola para el mercado interno tendía a superar a la minería en valores totales. (Un observador estimaba el valor de la producción agraria en casi cuatro veces la de la minería en 1810.) Los hacendados a menudo compraban propiedades de tamaño medio, especialmente en la llamada "canasta del pan" de México, el Bajío (el área mayor de Guanajuato).[33]

Mediante el cambio de sus inversiones según las oportunidades del mercado, la parcelación temporal en tiempos difíciles de sus tierras cuando necesitaban dinero líquido, muchos hacendados participaban también en la minería o el comercio. Como ha observado la historiadora social Doris M. Ladd, los hacendados ricos eran:

> muy activos en las industrias procesadoras de la Nueva España. Los mineros invertían grandes sumas de dinero en haciendas refinadoras para procesar las menas de sus minas [...] En México, cuando se trataba de grandes riquezas, "el comerciante", "el minero", "el financiero", "el hacendado" resultaban ser con gran frecuencia una misma persona.[34]

Los pequeños propietarios (rancheros), los agricultores que labraban tierras alquiladas y los medieros existían también, con el mayor número de rancheros prósperos estableciéndose en la región del Bajío. Mientras que la mayoría de los pequeños productores experimentaban condiciones miserables, aquellos que producían bienes que requerían estrecha supervisión o trabajadores muy fuertemente motivados (productos de jardinería, cochinilla, animales pequeños, huevos, e incluso a veces algodón, tabaco o vino) en ocasiones podían competir con los hacendados.

Los patrones de posesión de la tierra y las prácticas agrícolas variaban. En el sureste había pocas haciendas y muchos poblados indios. En Chiapas y Yucatán, haciendas tecnológicamente primitivas explotaban a las comunidades indias de subsistencia. En el centro de México, había más haciendas, aunque su número seguía siendo superado por el de los poblados indios. En el norte, las haciendas apenas superaban a los poblados indios, y había aún más ranchos (pequeñas propiedades o granjas familiares, de plena propiedad o rentadas).

A medida que avanzaba el siglo XVIII, un número de indios cada vez mayor se sumaba a las filas de la fuerza laboral libre para trabajar en las nuevas minas y en las haciendas comerciales en expansión o en las parcelas agrarias pequeñas o medianas. Los trabajadores libres algunas veces podían obtener el apoyo

[33] José María Quiroz, "Memoria de estatuto. Idea de la riqueza que daba la masa circulante de Nueva España a sus naturales producciones", en *Colección de documentos para la historia del comercio exterior de México* (México, 1959).

[34] Ladd, *The Mexican nobility*, pp. 50-51.

de las autoridades coloniales si el hacendado les prohibía abandonar la hacienda. Esto retardaba el crecimiento del peonaje endeudado, aunque muchos campesinos seguían siendo dependientes de los terratenientes más poderosos durante las epidemias o en los tiempos de dificultades económicas. Igualmente, a mediados del decenio de 1770, se declaró legal que los terratenientes entregaran a sus trabajadores junto con sus tierras en caso de venta de sus propiedades.

El hacendado seguía la tradición española de organizar sus tierras para que funcionaran como unidades autosuficientes. Una hacienda típica incorporaba actividades agrícolas, artesanías, comercio e incluso ocasionales obrajes dentro de sus dilatados límites. Además de los trabajadores asalariados, los hacendados utilizaban aparceros, medieros y campesinos de las comunidades indias vecinas, a todos los cuales trataban con paternal condescendencia, y frecuente violencia, especialmente en el rudo trato a las mujeres.

Al constituir una burguesía agraria emergente pero desigualmente desarrollada, los hacendados más prósperos emparentaban con las familias más prósperas de la minería, el comercio y las manufacturas. Los hacendados más ricos eran a menudo ausentistas. Los rangos medios de la burguesía agraria emergente consistían en "mayordomos" (administradores que recibían una participación menor de las utilidades), "arrendatarios capitalistas" (que pagaban a los hacendados una renta y retenían las utilidades de la producción), y rancheros prósperos. Algunos de estos elementos también desarrollaban sus propias empresas comerciales (por ejemplo, ingenios, propiedades urbanas, comercio del azúcar, etcétera).[35]

Las mujeres, incluyendo a las que poseían propiedades o no estaban económicamente desposeídas, enfrentaban muchas dificultades bajo el pesado patriarcado del colonialismo. Ocasionalmente se alzaba alguna voz clamando contra el sistema patriarcal, pero era silenciada de inmediato. Por ejemplo, la monja y poetisa del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz escribió líneas sumamente razonadas exponiendo la hipocresía y estupidez de los hombres, condenando el patriarcado y defendiendo la inteligencia de las mujeres. Sor Juana señalaba que el matrimonio sometía a las mujeres a la miseria y los abusos. A los cuarenta y dos años fue privada de su biblioteca, instrumentos musicales, pluma y tinta. Algunos decían que sor Juana escribió con sangre a partir de entonces. Murió un año después (1695).[36]

Steve Stern ha señalado que aunque las mujeres no podían destruir el sistema patriarcal de dominación, ciertamente sabían cómo desafiarlo y modifi-

[35] Enrique Semo, *Historia mexicana: economía y lucha de clases* (México, Era, 1978), pp. 83-87, 163-69; Friedrich Katz, "Labor conditions in XIX century Mexican haciendas", *Hispanic American Historical Review* 54, núm. 1 (febrero de 1974), pp. 1-47; y John H. Coatsworth, "Obstacles to economic growth in nineteenth-century Mexico", *The American Historical Review* 83, núm. 1 (febrero de 1978), pp. 87-88.

[36] Para más información sobre este tema, véase Jean Franco, *Plotting women: gender and representation in Mexico* (Nueva York, Columbia University Press, 1989), y Stern, *The secret history*, pp. 312-14.

car sus prácticas. Las mujeres resistían los actos violentos de sus maridos contra ellas, que iban desde las habituales palizas hasta el homicidio, apelando a parientes influyentes y formando redes de amistades femeninas para la protección o la retribución. De ésta y otras maneras a menudo eran capaces de forzar a los hombres a moderar la autoridad masculina aparentemente incuestionable en el hogar y en la comunidad. Algunas mujeres utilizaban también en su provecho sus prácticas espirituales y medicinales. Bastantes de ellas aprendieron también a aproximarse con éxito, aunque no existiera parentesco, a figuras patriarcales como los hacendados, los jueces de la Inquisición o las autoridades seculares coloniales. Como resultado, un esposo o pariente masculino abusador podía recibir azotes públicos —una forma de castigo que desalentaba el exceso de violencia contra las mujeres pero que también reforzaba el poder de las autoridades masculinas de clase alta sobre los hombres de clase baja. La Inquisición, quintaesencia de institución patriarcal, castigaba frecuentemente a las "brujas", aunque ocasionalmente también llevaba a los delincuentes masculinos ante los tribunales.[37]

Fueran indios, africanos, miembros de las castas o blancos pobres, las clases inferiores de Nueva España (y más adelante, también algunos elementos de las clases intermedias[38] emergentes) no aceptaban su sometimiento o abuso pasivamente. Muchos autores del periodo colonial de México, utilizando el lenguaje y perspectiva que impregna sus fuentes primarias, equiparan a las "clases bajas" con los grupos "no blancos" o "indios", borrando así el importante papel que la posición de *clase* representaba para definir cómo actuaba una persona o se la estereotipaba. Aceptando muchos de los estereotipos de sus fuentes, algunos escritores retrataban a los indios como de carácter "pasivo" u "obediente" así como inclinados al "alcoholismo" o la "pereza"; o, alternativamente, que habían encontrado en el cristianismo un solaz preferible a la explotación que sufrían antes de la llegada de los españoles.[39]

[37] Ruth Behar, "Sexual witchcraft, colonialism, and women's powers: views from the Mexican Inquisition", en Asunción Lavrin, comp., *Sexuality and marriage in colonial Latin America*, pp. 178-206 (Lincoln, University of Nebraska Press, 1989); Stern, *The secret history*, pp. 318-19.

[38] Utilizamos el término "clase intermedia" en lugar del más común de "clase media". Véanse las primeras páginas del cap. 2.

[39] Para citar sólo un ejemplo: "Habían conocido una pobreza agobiante durante el antiguo régimen, y en el nuevo la estaban encontrando perpetuada y a veces aumentada; pero parecía menos penosa ahora debido a que los franciscanos, siguiendo el ejemplo de su dulce fundador, hicieron de la pobreza una virtud." Véase R. C. Padden, *The hummingbird and the hawk: conquest and sovereignty in the Valley of Mexico, 1503-1541* (Columbus, Ohio State University Press, 1967), p. 241. La descripción de las revueltas de la clase baja en las páginas siguientes pretende compensar la literatura más destacada sobre el México colonial en su excesivo realce de la adaptación de los indios, africanos y castas a la dominación de clase, la aculturación, etc. —no porque tal cosa no ocurriera, sino porque al concentrarse en esos elementos las publicaciones no profundizan ni comentan la contradicción de clase básica, y la correspondiente represión, que engendra tal adaptación. Además, la adaptación era un proceso de doble vía, con la mayor parte de los colonialistas y sus descendientes adoptando aspectos de la cultura indígena.

El hecho de que los indios emprendieran activas rebeliones desde la invasión de los españoles ha sido bien documentado, y las revueltas indias probablemente ocurrían más frecuentemente de lo que indican las evidencias escritas. Frente a la expansión española a lo largo y ancho del territorio mexicano, muchos indios que no se rebelaban activamente abandonaban sus comunidades o se refugiaban en las montañas. Algunos cometieron suicidio colectivo antes que ser esclavizados, y algunas mujeres se negaban a seguir procreando. Además, como bajo cualquier sistema de explotación, los indios resistían abiertamente y de manera cotidiana, trabajando más lentamente, haciendo mal sus tareas, etcétera.

Los indios huastecos de las riberas del río Pánuco (en los actuales estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí) combatieron encarnizadamente a los españoles. Miles de ellos fueron quemados vivos. Otros fueron capturados y enviados al Caribe como esclavos. Pero algunos otros sobrevivieron y condujeron acciones de guerrilla durante más de doscientos años. De hecho, en época tan reciente como mediados del siglo XIX, algunos huastecos se encerraron en sus propias comunidades, practicando un autodeclarado anarquismo. Rebeliones indias serias ocurrieron en la región de la Huasteca durante las dos últimas décadas de la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911), y esos indios ayudaron a iniciar la Revolución mexicana de 1910. Muchos de ellos seguían resistiendo activamente la opresión en el decenio de 1990.

Las comunidades mayas de Yucatán también combatieron contra los españoles durante muchos años. Francisco de Montejo, y después sus descendientes, los sometieron finalmente sólo después de quemar vivos a sus jefes, cortar los brazos y piernas de los prisioneros varones y colgar o sofocar a las mujeres. Más de 500 españoles perecieron en estas primeras batallas. Luego, en 1761, los mayas se levantaron bajo el liderazgo de Jacinto Canek, protestando contra los tributos excesivos. En 1846-1848 pelearon una sangrienta revolución contra las clases altas predominantemente blancas, la llamada "guerra de castas de Yucatán".

En 1531, los yopes de las costas de Guerrero se unieron con algunos de sus antiguos enemigos para combatir la gran amenaza del dominio español. La masiva y sanguinaria rebelión del Mixtón de 1541 en el área de Zacatecas-Jalisco, al occidente de México, tuvo como resultado la muerte del conquistador Alvarado y condujo a un prolongado periodo de lucha de guerrillas. Iglesias y monasterios fueron sus primeros objetivos. (Ésta, como algunas otras de las primeras rebeliones indias, incluyó la participación de algunos caciques que buscaban la autonomía de los españoles con objeto de establecer un control independiente sobre la mano de obra india.)

También en occidente los mineros de Tepic se rebelaron en 1598 y una vez más bajo la dirección de Mariano en 1801. Y más recientemente, durante la dictadura de Díaz, los indios de esta región se refugiaron en la sierra de Nayarit, desde donde lanzaron sus ataques contra los hacendados.

Los chichimecas, como eran llamados los grupos norteños de cazadores y recolectores (otomíes, zacatecas, etc.), lucharon contra el avance de los espa-

ñoles y sus aliados indios con extrema ferocidad en el triángulo formado por las minas de plata de Guadalajara, Saltillo y Querétaro. Con sus correrías a lo largo de la carretera de Zacatecas a la ciudad de México y otros lugares, causaron más pérdidas en vidas y propiedades que cualquier conflicto hispano-indio anterior. Para 1570 toda la frontera ardía con la rebelión, y los chichimecas avanzaron sobre Guadalajara y llegaron a unos cien kilómetros de la ciudad de México.

Los españoles respondieron organizando el primer ejército regular español en la Nueva España (compuesto principalmente por criollos) y una red de guarniciones armadas (*presidios*) para llevar a cabo una política de guerra "a sangre y fuego". También esclavizaron a los indios de la frontera. La victoria final de los españoles y los criollos (en el decenio de 1600) ocurrió solamente gracias a su fuerza de fuego superior combinada con un programa de "pacificación" que incluía el reclutamiento para el ejército de los chichimecas capturados; concediéndoles privilegios especiales (incluyendo títulos de nobleza), dinero, alimentos y ropa, y asimilándolos en la nueva religión (el catolicismo). Incluso entonces, los pacíficos indios pueblo del actual Nuevo México impidieron eficazmente el avance español organizando secretamente una revuelta armada que expulsó a los recién llegados en 1680 y los mantuvo fuera de sus territorios durante doce años.

En el noroeste, los yaquis de Sonora resistieron gran parte del avance de los blancos hasta el siglo xx. Sus revueltas amenazaron al régimen de Díaz, y fueron brutalmente reprimidos. Los guerreros yaquis capturados eran enviados como esclavos a cosechar tabaco en Oaxaca.

En el sur, los indios de Oaxaca guardaron celosamente sus casi autónomas comunidades a lo largo del periodo colonial, levantándose repetidamente contra los abusos de los corregidores o los sacerdotes. Por ejemplo, en 1660, más de veinte ciudades de Oaxaca se rebelaron, protestando contra el repartimiento; los campesinos mataron a los oficiales reales y saquearon los cofres reales. Durante los siguientes uno o dos años unas doscientas comunidades de Tehuantepec se rebelaron y tomaron el control de gran parte del Istmo durante más de un año. A mediados del decenio de 1990, sus descendientes se movilizaron contra los planes de crear un nuevo "canal de Panamá" que atravesara el Istmo.

En toda la Nueva España se produjeron docenas de movimientos milenaristas de retorno a sus antiguos dioses y diosas. Los indios de Chiapas montaban insurrecciones periódicas contra la dominación extranjera, y en 1712 la revuelta tzeltal creó una confederación basada en una mítica virgen vengadora. Los indios de Chiapas se levantaron en armas nuevamente en 1994 bajo la bandera secular de los zapatistas.

Casi toda la resistencia india se centraba en retener o reconquistar sus tierras, o en oponerse al trabajo forzado. Las cuestiones se definían regional más que nacionalmente (aunque no en el caso de los zapatistas de 1994). El esfuerzo por conservar las raíces comunales o su identidad era una parte importante de su lucha. A menudo las mujeres ocupaban puestos de liderazgo. William

B. Taylor ha señalado que las mujeres de México dirigieron los ataques en por lo menos una cuarta parte de los 142 tumultos estudiados por él. Stern ha descrito cómo las mujeres desarrollaron "una etiqueta de género para las revueltas", en la que distinguían entre figuras paternas responsables e irresponsables en la estructura de poder patriarcal: "Las mujeres se apoyaban en su propia sensibilidad de género de la justicia moral —como esposas, madres y viudas ultrajadas— para justificar la intimidación física o los ataques a las autoridades abusivas o extorsionadoras." De esta forma las mujeres eran capaces de proteger sus propios intereses y simultáneamente levantar a comunidades enteras para emprender acciones, como sucedió en el que se conoce como "tumulto del maíz" en la ciudad de México en 1692.

A menudo las autoridades coloniales, en un esfuerzo por evitar la derrota militar o la extensión de la insurrección, así como para mantener una fuente constante de mano de obra emigrante, negociaban armisticios y compromisos con las comunidades rebeldes —y seguidamente ejecutaban o apresaban a los líderes locales. Cuando las negociaciones fracasaban, la respuesta del estado era siempre la fuerza bruta —una lección de historia que señalaron los zapatistas de 1994 en Chiapas.

De esta manera, la resistencia indígena a la explotación era activa y a veces armada, no sólo pasiva o cultural. Para 1810, los indios seguían constituyendo una mayoría de la población —cerca del 60% de una estimación de 6 millones. Los caciques y las autoridades menores constituían cerca del 7% de la población indígena a principios del siglo XVII, pero cada vez más emigraban a las ciudades, junto con ocasionales trabajadores rurales emigrantes capacitados. De este nuevo sector urbano emergió un nuevo tipo de mexicano: el indio hispanohablante o emigrante rural que imitaba las maneras de los blancos y mestizos urbanos.

Los africanos, que empezaron a ser llevados a Nueva España de forma regular a fines del siglo XVII para ayudar a llenar el vacío dejado por la precipitada disminución demográfica de los indios, también se resistían al sometimiento. Los primeros esclavos llegaron a México en pequeños grupos junto con Cortés, uno de cuyos más fieles tenientes era un negro católico llamado Juan Garrido que se convirtió en "conquistador" por su propio derecho.[40]

Más esclavos fueron llegando en las dos décadas siguientes, y la primera "alarma negra" en México data de 1537, cuando un levantamiento de esclavos fue brutalmente aplastado. El momento más alto de la importación de esclavos (que nunca se realizó en escala masiva) fue durante el auge minero de 1580-1635, una época en la que también llegó un gran número de inmigrantes españoles.

En general, la Corona desalentaba la esclavitud como medio de explotación laboral, particularmente tras el final del auge minero. Los *tlacotin* y los *mayeques* de la época de los aztecas fueron reasentados inicialmente en las comunidades

[40] Véase Peter Gerhard, "A black conquistador in Mexico", *Hispanic American Historical Review* 58, núm. 3 (1978), pp. 451-59.

indígenas, en donde gozaban de los mismos derechos que los comunes a los que se unían en las tareas cotidianas y en el pago de los tributos a los blancos. Así, sólo los negros eran esclavos en el periodo colonial.

Hacia mediados del siglo XVII, los mulatos superaban a los negros casi por cuatro a uno, estimándose el total combinado en unos 165 000. Muchos negros eran libres, por haber logrado comprar su libertad. Otros habían huido y formado bandas de "cimarrones". Mientras que algunos trabajaban en las minas, para 1650 aquellos todavía esclavizados se limitaban sobre todo a las zonas azucareras de Oaxaca o las costas de la Nueva España. Los españoles (conocidos como *peninsulares*) y los *criollos* a menudo usaban esclavos en tareas especializadas —como sirvientes, como capataces del trabajo de los indios y como amas y concubinas.

La resistencia provenía tanto de los cimarrones como de los esclavos. Las bandas de cimarrones se opusieron a los intentos de los peninsulares y criollos por reconquistarlos a lo largo de ambas costas y en el interior de la Nueva España desde 1607 hasta 1611. Atacaron las principales rutas de transporte, como la que unía a Puebla con Veracruz. Uno de sus líderes, el ex jefe africano llamado Yanga, finalmente aceptó un compromiso con las autoridades coloniales, y a sus seguidores se les concedió que pudieran vivir en su propia ciudad autónoma a cambio de la promesa de devolver a los futuros esclavos huidos. Hubo otros levantamientos de cimarrones, en 1617-1618, que fueron controlados por la fuerza o mediante compromisos. Más rebeldes obtuvieron permiso para establecer una comunidad en la sierra cerca de Córdoba, Veracruz, que recibió el nombre de San Lorenzo de los Negros. Y en 1646 se produjo un breve enfrentamiento entre los mulatos y los soldados blancos en la guarnición de Veracruz.

Revueltas de negros y mulatos estallaron periódicamente durante la época colonial.[41] En general, negros y mulatos se opusieron a la burocracia real y buscaron la atmósfera urbana más libre y menos reglamentada de los criollos y mestizos, entre quienes encontraban mejores ocasiones de crear sus propias oportunidades. Para 1810, quedaban menos de 10 000 esclavos negros —y su espíritu rebelde impregnó las guerras de independencia (1810-1822).

Un pequeño número de otros pueblos entraron en México durante la época colonial: judíos, árabes, europeos de otros países. Algunos asiáticos, principalmente filipinos, y un puñado de chinos, llegaron en los galeones de Manila.

[41] Por ejemplo, en 1611, unos 1 500 negros se amotinaron en la ciudad de México durante el entierro de una mujer negra que se decía había muerto a consecuencia de una paliza dada por su amo. Se denunció un complot, y en 1612 las autoridades torturaron y ajusticiaron a los líderes de las hermandades negras, lincharon a otros treinta y cinco hombres y mujeres en la plaza principal, y expusieron sus cabezas en picas. En 1665 hubo varios levantamientos de negros y mulatos en la ciudad de México, y todos ellos fueron aplastados con ayuda de la Inquisición. Para más información sobre negros y mulatos, véase Gonzalo Aguirre Beltrán, *La población negra de México, 1519-1810: Estudio etnohistórico* (México, Fuente Cultural, 1946); Patrick J. Carroll, *Blacks in colonial Veracruz: race, ethnicity, and regional development* (Austin, University of Texas Press, 1991); y Colin Palmer, *Slaves of the white god: blacks in Mexico, 1570-1650* (Cambridge, Harvard University Press, 1976).

Los asiáticos se dedicaron al pequeño comercio, usualmente como ambulantes, y como otras minorías tendieron a adoptar nombres españoles.

La mezcla de todas las diferentes razas creó los estratos sociales conocidos como *castas*. Los miembros de las castas solían ser pobres; sólo unos cuantos lograron posiciones desde las que explotar a los indios o africanos. Los mulatos, zambos y afromestizos sufrían de la degradación racista más que los mestizos que, hasta cierto punto, compartían el desprecio de los blancos racistas por los indios y negros. Esto se debía en parte a la escala de colores del racismo y al énfasis social dado por las élites dirigentes a la piel clara (o como ellos lo llamaban, a la "pureza de sangre"). Aunque la mayor parte de los mestizos tenían rasgos indios, algunos poseían una complexión más clara que otros.

Las castas constituían cerca del 6% de la población en 1700 y el 19% en 1810, aproximadamente igual al número de blancos —aunque de hecho la mayor parte de los cálculos estadísticos supuestamente basados en el fenotipo en realidad tomaban en cuenta las posiciones de clase. Por ejemplo, los inmigrantes blancos europeos que descendían a las clases inferiores eran descritos y conocidos como "castas", "vagabundos" o cualquier otra categoría distinta a la de "blanco". Especialmente en el norte, pero también en el centro y en menor grado en el sureste del país, la gran mayoría de las castas, incluyendo a los blancos pobres, trabajaban junto a los indios, actuando como competidores directos por la tierra y los salarios. Fue esta gente la que, después de indios y negros, sufría más a causa del racismo. En las palabras prejuiciadas de los comerciantes del consulado de México, en escrito a las Cortes Españolas en 1811:

> [Las] castas, cuyos brazos tardos se emplean en el peonaje, servicio doméstico, oficios, artefactos y tropa, son de la misma condición, del mismo temperamento y de la misma negligencia del indio [...] Ebrios, incontinentes, flojos, sin pundonor, agradecimiento ni fidelidad. [Los] blancos que se llaman españoles-americanos muestran la superioridad sobre los [...] indios [...] por sus riquezas heredadas, por su carrera, por su lujo, por sus modales y por su refinamiento en los vicios.[42]

Debido a su opresión, las castas estaban siempre dispuestas a unirse a las numerosas rebeliones de los subordinados en las ciudades de la Nueva España conocidas como tumultos o, a ojos de las élites blancas, "desórdenes de la plebe". Incluso algunos criollos, aunque aterrorizados por estos levantamientos salvajes, ocasionalmente se unían a ellos, o intentaban utilizarlos o dirigirlos con objeto de amenazar a los *gachupines* (nombre despectivo dado a los españoles peninsulares), sus rivales por el poder que controlaban el comercio y la burocracia. Casi en todos los tumultos las masas se lanzaron contra los símbolos de riqueza y poder estatal asaltando los negocios y destruyendo las oficinas gubernamentales, las cárceles y los depósitos de valores.

[42] Citado en Stanley J. Stein y Barbara H. Stein, *La herencia colonial de América Latina* (México, Siglo XXI, 1970), p. 57.

Los tumultos, pues, constituían la amenaza mayor y más recurrente al poder colonial español y a la hegemonía de las élites blancas. Eran un profundo fenómeno de clase, con matices de nacionalismo anticolonial.[43]

El tumulto particularmente violento de 1624, provocado por el arzobispo Juan Pérez de la Serna, un criollo, y el virrey español Marqués de Gelves, su rival, arrasó la ciudad de México. Tiempo después, el *visitador* (inspector nombrado por la Corona) Martín de Carrillo y Alderete envió al rey una descripción de las condiciones que lo provocaron. Esta descripción señala, primero, que la conspiración fue organizada, dirigida e impulsada por el clero, es decir, por la clase que a juicio de la Corte es el principal y más firme soporte del gobierno español; en segundo lugar que, si se estudia el curso de los sucesos, se hallará que toda, o casi toda, la plebe era cómplice, y en tercer lugar, que el odio a la dominación española está profundamente arraigado en todas las clases de la sociedad, especialmente entre los españoles que se establecieron en la ciudad de México, por lo que fue uno de los medios principales utilizados para excitar a la plebe.[44]

La escasez de alimentos y el desorbitado aumento de los precios de éstos provocó la devastadora "revuelta del maíz" en 1692. Las mujeres encabezaron el movimiento, y la multitud quemó el palacio virreinal, la casa de gobierno y las oficinas de la Audiencia (tribunal real), y saqueó 280 tiendas y almacenes. Como en 1624, se oyeron gritos de "¡Mueran los gachupines!" Las propiedades de la Iglesia fueron respetadas. El orden se restableció cuando los soldados del virrey abrieron fuego sobre la multitud.

La principal división de clase en la sociedad colonial era la que separaba a un pequeño conjunto de élites burocráticas, religiosas, mineras, terratenientes, manufactureras (obrajes) y comerciantes urbanas de un inmenso campesinado y una clase obrera que producían la riqueza comercializable; las élites, sin embargo, no siempre estaban unidas. A menudo se encontraban en competencia por la escasa fuerza de trabajo, peleando por los despojos del colonialismo, discutiendo las políticas de la Corona y disputando sobre la cuestión del estatus y el poder asociados a la sangre española "pura" (gachupines contra criollos). Dentro del clero, los frailes tendían a aliarse con la Corona, su burocracia,

[43] Sobre el carácter de clase de estos tumultos, véase Chester Guthrie, "Riots in seventeenth-century Mexico City: a study in social history with special emphasis on the lower classes", tesis de doctorado, University of California-Berkeley, 1937; y N. J. Stowe, "The Tumulto of 1624: Turmoil at Mexico City", tesis de doctorado, University of Southern California, 1970.

[44] Archivo General de Indias, Sevilla, sección i, Patronato Real 224. Sucesivos *visitadores* (por ejemplo Pedro de Quiroga y Juan de Palafox y Mendoza) verificaron la existencia de vastos conflictos de clase y odio "en todas las clases de la sociedad" contra el colonialismo español. Un incidente menor desencadenó el *tumulto* de 1624, al que se unieron casi todos los grupos. Mientras los ricos aseguraban sus puertas y ventanas, los *castas*, negros, indios y blancos pobres salían de sus barrios miserables, tomaban las calles y se amotinaban, formando una multitud de unos 30 000 individuos. Siguió una auténtica batalla: las masas enfurecidas asaltaron el palacio, arriaron las banderas reales y pusieron en fuga al virrey para salvar su vida. Sólo cuando la milicia abrió fuego contra la multitud se aplacó el tumulto.

y los caciques indios, mientras que los obispos seculares y los curas (cuyo número de criollos era cada vez mayor), se alineaban con los terratenientes coloniales, los mineros, los propietarios de obrajes y los comerciantes (también criollos en número cada vez mayor). Por consiguiente, cuando el virrey Gelves llegó a Nueva España en 1621 para acabar con el contrabando y la insubordinación general de los colonos, intentó también disciplinar a los sacerdotes seculares, que respondieron cerrando las iglesias.

El clero secular en las iglesias (el único terreno en donde se podía hablar con relativa libertad) se convirtió en el principal portavoz contra la burocracia colonial y la autoridad de la Corona. Algunos funcionarios de la Inquisición y obispos peninsulares se unieron al clero secular. En 1642 el virrey Juan de Palafox y Mendoza concedió a los criollos algunos cargos en la milicia y la burocracia y garantizó a los hacendados algunas de sus peticiones de mano de obra indígena y de posiciones en la nueva flota comercial; durante los siguientes años intentó reducir la riqueza y poder de los jesuitas. (Los jesuitas fueron más tarde convertidos en chivos expiatorios y expulsados, como explicaré en el próximo capítulo.)

Las concesiones a los criollos fueron anuladas por los aumentos de los impuestos de la Corona para financiar la flota y por un derrumbe general en aquellas actividades económicas de los colonizadores que representaban una amenaza para los monopolios reales, así como por los nombramientos de la Corona de una mayoría de altos representantes de la Iglesia de entre los españoles nativos. Las tensiones entre los virreyes y el clero secular se prolongaron con altibajos hasta las guerras de independencia.

Los motines por alimentos, causados por malas cosechas, y la especulación con los precios, que a veces se transformaban en tumultos en gran escala, se convirtieron en una forma importante de rebelión en el siglo XVIII, gran parte del cual se caracterizó por fracasos en las cosechas y condiciones económicas desastrosas para las masas. La recuperación de la población y periódicas crisis económicas provocaban excedentes de mano de obra, migraciones indígenas en busca de trabajo, y un volumen importante de vagabundeo y bandidaje. La cólera fermentaba.

En resumen, el periodo colonial de México presenció de principio a fin el establecimiento gradual de un capitalismo dependiente embrionario bajo la tutela de un estado poderoso, pero también generó el empobrecimiento de las masas y una movilidad ascendente limitada o bloqueada. Estas condiciones desencadenaron repetidos levantamientos populares (tumultos) que en última instancia tuvieron el potencial para romper los lazos de México con la "madre" patria e incluso desafiaron el poder de las élites tradicionales y la burguesía emergente de la "Nueva España".

CAPÍTULO 2

INDEPENDENCIA Y GUERRA CIVIL, 1770-1880

Sólo tenemos esto que deciros a ti y a los venerables y santos sacerdotes. ¿Por qué no recordaron o se dieron cuenta cuando el gobernador empezó a matarnos?

Respuesta de los capitanes indios al Obispo de Yucatán, 1848[1]

Los ciudadanos trabajadores están condenados a ser simples instrumentos pasivos de la producción para el beneficio exclusivo del capitalista.

Ponciano Arriaga a la Convención constitucional de 1856-1857[2]

La fuerza que impulsaba la economía en el último periodo colonial de México era un capitalismo embrionario, estimulado por el capital mercantil que controlaba la mayor parte de la riqueza mineral apropiada y gran parte de la producción manufacturera del país. Las formas que este capitalismo adoptaba en México[3] eran variadas, y reflejaban los materiales socioeconómicos de los que brotaban. Éstos incluían tanto las tradiciones comunales indígenas como las de la nobleza española; invasión, esclavitud, pillaje y la "acumulación original de capital"; la separación de los trabajadores y los artesanos de los medios de producción, y su transformación en mano de obra libre para la acumulación de capital en una escala ampliada; la producción para un mercado externo, y la producción para un mercado doméstico de rápido crecimiento. El reclutamiento de la mano de obra ocurría en un mercado libre y abierto, y los capitalistas —hacendados, comerciantes, propietarios de minas y fabricantes— se beneficiaban de los frecuentes episodios de hambruna, desempleo y endeudamiento de las masas que les permitían pagar salarios extraordinariamente bajos. Las familias de las élites engordaban en la medida en que las pobres enflaquecían. Estaba muy extendido el empleo de mano de obra infantil.

Las fuerzas del capitalismo temprano se hicieron más importantes gracias a las rivalidades intercoloniales intensificadas entre los grandes poderes. La in-

[1] Para el texto completo de esta réplica, fechada el 19 de febrero de 1848, véase Moisés González Navarro, *Raza y tierra: la guerra de castas y el henequén* (México, El Colegio de México, 1970), pp. 309-10.

[2] Ponciano Arriaga, *Voto particular del C. Ponciano Arriaga sobre el derecho de propiedad* (San Luis Potosí, Imprenta "Al Libro de Caja", 1959).

[3] El término "México" se utiliza en este capítulo tanto al referirnos a la nación independiente de México como a la colonia de la "Nueva España" anterior a la conquista de la independencia en 1822.

troducción en España de las "reformas borbónicas" y la expulsión de los jesuitas aceleraron la transición de México desde las primitivas formas mercantiles de acumulación de capital a las formas capitalistas. Los conflictos de clase adoptaron muy pronto formas nuevas, más complejas e intensas, que añadieron una dimensión política más fuerte a los tumultos tradicionales. Estos desenvolvimientos gestaron una revolución social abortada en el decenio de 1810 y, al mismo tiempo, la conquista de la independencia nacional de México en 1822 (una especie de contrarrevolución patrocinada por las élites criollas).

Los conflictos de clase que dieron origen al movimiento de independencia siguieron dando forma al nuevo estado nacional y a patrones de acumulación de capital durante las siguientes décadas. Después de la independencia, la economía de México sufrió una disolución gradual del modo capitalista-mercantil de acumulación y su sustitución por otros más puramente capitalistas.

El periodo de 1770-1880, considerado de modo global, puede observarse mejor como un proceso económico continuo con tres momentos políticos de ruptura: 1810-1822; 1846-1848, cuando Estados Unidos tomó militarmente casi la mitad del territorio de México, incluyendo casi todo el actual suroeste de Estados Unidos además de California, y 1854-1867, que comenzó como una guerra civil liberal-conservadora y acabó como una guerra de liberación nacional contra la ocupación militar francesa. El primer momento político estableció la soberanía nacional; el segundo dividió a la nación en dos; y el tercero creó una nación-estado estable para los objetivos de la acumulación capitalista en escala ampliada.[4]

La competencia europea y las reformas borbónicas

A finales del siglo XVIII, los competidores europeos de España invadieron los mercados coloniales y socavaron la prosperidad de la red comercial monopolista Cádiz-América. En 1762 los ingleses tomaron La Habana y Manila y amenazaron con ocupar Veracruz, el puerto clave de México. Contrabandistas ingleses, franceses, holandeses y (a partir de 1776) norteamericanos penetraban cada vez más la red española de comercio colonial y absorbían porciones cada vez mayores del excedente económico de México.

En un esfuerzo por hacer frente a estos retos, España ejecutó una serie de cambios políticos conocida como "reformas borbónicas", por la dinastía de los Borbones, que habían sustituido a los Habsburgos en 1701. La mayor parte de las reformas que se dieron durante el reinado de Carlos III (1759-1788), introdujeron el sistema administrativo de "intendencia" al estilo francés, y centralizaron aún más el control político de España sobre México. Al mismo tiempo,

[4] Si bien es mío el análisis de este capítulo sobre la economía política de México en el siglo XIX, deseo agradecer a los historiadores Gilberto Argüello y Barbara A. Tenenbaum por sus útiles sugerencias y bien informadas opiniones.

las reformas hicieron concesiones económicas y ocasionalmente también políticas a la élite criolla de México, como por ejemplo más puestos en la burocracia. También abolieron las diferencias jurídicas basadas en la etnicidad y pusieron límites a los monopolios económicos de la Iglesia.

Para defenderse de sus rivales europeos, las reformas borbónicas decretaron la formación de un ejército y una milicia. Muy pronto las clases más bajas protestaron por las levas forzosas. Este agravio, añadido a otros, desencadenó una serie de revueltas populares en centros de población importantes como Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelia y Pátzcuaro. Así que, en realidad, el ejército se utilizaba para controlar a las masas mexicanas descontentas, especialmente a los indios.

Lugar prominente entre las reformas borbónicas ocupaba la serie de Decretos de Libre Comercio que comenzaron en 1765 y liberalizaron gradualmente el comercio durante las décadas siguientes. Estos decretos reducían y equiparaban los impuestos para Veracruz, Buenos Aires y otros puertos importantes con el objetivo de reducir el contrabando abriendo canales limitados a través de los que los comerciantes extranjeros pudieran operar de forma legítima, y por medio de los cuales los comerciantes mexicanos podrían, por primera vez, negociar con otras partes de América Latina y (en el caso de los granos) con las islas españolas del Caribe.

Como se pretendía aumentar las exportaciones de productos españoles a las colonias, los decretos no permitían la reexportación de importaciones europeas. No obstante, la constante expansión de los decretos de libre comercio en el último tercio del siglo ayudó a crear una edad de oro para todo el comercio europeo y mexicano. El libre comercio, entonces como ahora, favorecía a las naciones económicamente poderosas contra las débiles que no tenían fuerza suficiente para competir. Aun así, el libre comercio estimuló la expansión económica de México, que se convirtió en la colonia más importante de España y la única que albergaba a numerosos millonarios. Los pocos afortunados eran jefes de grandes casas comerciales en México o propietarios de grandes intereses mineros, agrícolas o manufactureros, y solían ser los mismos individuos.

Desde 1779 hasta 1803, la producción minera en México casi se duplicó. La producción agrícola e industrial aumentó también notablemente. Para fines del siglo XVIII, la producción manufacturera de México estaba valorada en 72 millones de pesos por año, de los que el 25% consistía en la preparación de vituallas para la exportación, 15% de textiles, y 20% de velas y jabón. El cuadro 2 revela el volumen ascendente de las exportaciones del área durante los años finales de la era colonial, así como el mercado doméstico en expansión para productos agrícolas y manufacturados.

Ese crecimiento de la producción doméstica, junto con la preferencia del monopolio de Cádiz por sostener sus viejos lazos con los manufactureros europeos, contribuyó a que la administración borbónica reconociera que técnicas de administración más eficientes y reformas económicas en las colonias podrían sostener mejor al imperio que los más dedicados esfuerzos por satisfa-

cer los sueños irreales sobre una súbita transformación capitalista de España. Para financiar sus guerras con Francia e Inglaterra, España buscaba aumentar sus ingresos provenientes de las colonias con los fondos públicos remitidos a España, y con los impuestos al comercio con América.

Los ingresos de la Corona de las actividades económicas de México *se cuadruplicaron* entre 1763 y 1792. El valor de las exportaciones de las colonias aumentó más del 50% en el decenio de 1780 comparado con el de 1770 —a pesar de una grave sequía, una epidemia, y la consiguiente reducción de la producción entre 1784 y 1787. La minería era responsable del grueso de las exportaciones. Una duplicación, aproximadamente, de los precios de los granos, los alimentos y el ganado entre 1779 y 1803 benefició a la agricultura de hacienda, lo que aumentó enormemente la producción a costa de los campesinos terriblemente explotados.

Un aumento en los diezmos (la décima parte de lo producido entregado a la Iglesia por los campesinos, artesanos y otros pequeños productores), simultáneo a un aumento en los precios de los alimentos, llevó a muchos mexicanos de zonas rurales al borde de la supervivencia y llevó aún más a la concentración de tierras en manos de unos pocos. Para 1800, el número de haciendas (grandes y medianas) en el valle de México era de 150. Unas 50 de éstas proporcionaban todo el maíz consumido en la ciudad de México, cuya población había crecido hasta 137 000 habitantes (todavía muy por debajo de la población azteca en Tenochtitlán). La mayoría de las ventas se producían en una plaza de mercado libre más que a través de los mercados y bodegas del estado.

CUADRO 2
Estimación del producto económico de México, *ca.* 1791-1809
(*expresado como mercado anual en pesos*)

Sector	*Mercado doméstico*	*Mercado de exportación*	*Total*	*Porcentaje*
Agricultura	133 782 625	4 844 685	138 627 310	62
Industria	54 744 047	257 264	55 001 311	25
Minería	924 259	27 026 741	27 951 000	13
	189 450 931	32 128 690	221 579 621	100
porcentaje	86	14	100	

FUENTES: Estos cálculos se basan en estimaciones sobre el mercado de consumo hechas por José María Quirós, *Memoria de estatuto* (Veracruz, 1817), tal como fueron elaboradas por Doris M. Ladd, *The Mexican nobility at independence, 1780-1826* (Austin, University of Texas Press, 1976), p. 26, y David A. Brading, *Miners and merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810* (Cambridge, Cambridge University Press, 1971), p. 18. Incluyen cierta especulación acerca del consumo anual promedio. En una larga nota Doris M. Ladd explica los detalles de estas compilaciones, apoyándose críticamente en los cálculos del economista Fernando Rosenzweig Hernández, "La economía novohispana al comenzar el siglo XIX", *Ciencias Políticas y Sociales* 9, núm. 33 (julio-septiembre de 1963), pp. 45-94.

Atemorizada por la Revolución francesa, en 1793 la Corona cortó sus lazos con la Francia republicana y temporalmente unió fuerzas con Inglaterra contra el levantamiento revolucionario francés. En 1795, la Corona publicó decretos que creaban nuevos consulados (gremios de mercaderes) en Veracruz y Guadalajara. Para entonces, los ingresos de la Corona se habían vuelto muy dependientes de las actividades de los comerciantes españoles y criollos que operaban en México. Los nuevos consulados representaban un nuevo intento de ponerse a la altura de la situación real mediante cambios legales y administrativos. De hecho, su creación reconocía el fin del monopolio del consulado de la ciudad de México. Los comerciantes de Veracruz quitaron a los mercaderes de la ciudad de México el control de la cochinilla de Oaxaca y de otras redes comerciales regionales. Los comerciantes nacidos en México que obtenían su riqueza del crecimiento del mercado doméstico vieron aumentadas sus ambiciones y expectativas.

Inglaterra buscaba controlar el lucrativo comercio colonial con las colonias americanas, lo que en 1796 condujo a una reanudación de la guerra entre Inglaterra y España. Necesitando su flota para la guerra, España autorizó el derecho de los criollos a fletar sus productos en sus propios barcos hacia y desde España. En la práctica, a las naciones neutrales se les permitió también participar en estos fletes, de manera que para la primera mitad de 1799, de cada treinta barcos extranjeros que tocaban el puerto de Veracruz, veinticinco eran de registro estadunidense. Trece años antes, Thomas Jefferson había expresado los objetivos expansionistas de la emergente república del norte: "Nuestra confederación debe ser vista como el nido, desde el que toda América, norte y sur, ha de ser poblada."[5]

Económicamente, era mucho lo que estaba en juego. Los comerciantes estadunidenses destinaban agentes a Veracruz, y las principales casas comerciales en México hacían otro tanto en ciudades de Estados Unidos. Los agentes extranjeros también emprendían aventuras militares y conspiraciones para intentar "liberar a México" de la dominación española. Éstas incluyeron la "Asociación Mexicana", de Wilkinson, en 1805, con apoyo del gobierno de Estados Unidos; el agente británico Williams, enviado en 1808; el incremento del número de agentes bonapartistas franceses, en 1809, y las expediciones militares estadunidenses en Tejas.

Rebelión desde abajo

En el curso de las reformas borbónicas, las numerosas guerras de España y las dificultades cada vez mayores para las masas, la Corona decidió convertir en chivo expiatorio por los problemas que enfrentaba en sus colonias a la independiente y bien organizada orden religiosa de los jesuitas. Los jesuitas de

[5] Citado en R. W. Van Alstyne, *The rising American empire* (Nueva York, Oxford University Press, 1960), p. 81.

América Latina eran bien conocidos por su elevada preparación intelectual, sus valiosas propiedades y su tendencia a inclinarse a favor de los derechos humanos de los indios. La expulsión por la Corona de más de 400 jesuitas de México en 1766-1767 fue ostensiblemente un esfuerzo por demostrar que todavía "conservaba el control", al tiempo que trataba de liberar a la monarquía de la excesiva influencia clerical eligiendo atacar al grupo más vulnerable. De hecho, esto sirvió para enriquecer a las élites, que engordaron con las tierras y propiedades de los jesuitas.

Irónicamente, la orden de expulsión proporcionó un buen pretexto para las protestas políticas contra la "arbitrariedad" del colonialismo español. Masas de campesinos alzados, obreros y desempleados tomaron ciudades, asaltaron cárceles e insultaron a las autoridades locales. El visitador José de Gálvez, emisario de la Corona, estaba espantado. Descrito por los historiadores como un gobernante "suave" comparado con sus predecesores, ordenó ahorcar a 85 personas, azotar a 73, el encarcelamiento de otros 674 y el exilio de 117. Todas las víctimas de su "suave" gobierno eran indios o miembros de las castas.

Diecinueve años más tarde, en 1786, el pueblo se rebeló una vez más. Las clases bajas de la ciudad de México saquearon y quemaron los graneros de los hacendados. El año siguiente, nuevos tumultos estallaron en Acayucan y Papantla cerca de la costa del Golfo. Los indios tomaron ambas ciudades y las conservaron hasta la llegada de las tropas desde Veracruz. Una vez más, las mujeres representaron un papel importante en esta "rebelión desde abajo".

Para las masas, el hambre, las epidemias, la muerte, la emigración y la desintegración familiar acompañaron la concentración de la tierra y de la riqueza, en particular después de 1795. Episodios recurrentes de sequías y heladas, seguidos por lo común de malas cosechas y epidemias, castigaron a México. El historiador de la economía Enrique Florescano ha resumido las consecuencias: muerte del ganado, despidos de los trabajadores de las haciendas, ruina de pequeños y medianos agricultores, hambrunas, huelgas en minas y obrajes, declinación del comercio, emigración masiva de cientos de familias desempleadas hacia zonas menos castigadas por la escasez y el hambre, estancamiento de los salarios rurales y los de los jornaleros urbanos, alza constante de los precios, más y más campesinos sin tierra y descontento en el campo, y creciente tensión social en las ciudades.[6] Las élites económicas utilizaban sagazmente las malas cosechas periódicas para aumentar su propia riqueza y poder mediante la especulación con los precios y la monopolización de las tierras.

[6] Enrique Florescano, *Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810)* (México, El Colegio de México, 1969), pp. xvi-xvii, *passim*. Florescano atribuye el fuerte aumento de la población en el último tercio del siglo, en parte, a las anteriores buenas cosechas de mediados de la década de 1750 y desde 1762 hasta 1770. Pero parece igual de probable que los campesinos y trabajadores, sufriendo tan extremas penalidades, recurriesen a tener más hijos para los objetivos de la producción de subsistencia y supervivencia económica. Por todas partes empezaron a surgir minúsculas parcelas cultivadas, a medida que la gente intentaba compensar la escasez de alimentos y la inflación.

Las guerras de España a fines de siglo redujeron su comercio y contribuyeron a disminuir los ingresos de la Corona. Desde 1793 hasta 1807, las remisiones del comercio de las Indias cayeron del 20% del ingreso regio a un 9%. España intentó mantener vivo el comercio permitiendo el comercio neutral (1797-1799), asignando buques de guerra al transporte de mercancías, y permitiendo a las colonias comerciar con no beligerantes. Cuando estos esfuerzos fracasaron y la guerra volvió a estallar con Gran Bretaña, la Corona implementó el "Acta de Consolidación de los Ingresos Reales" (1805) que pretendía la redención de las hipotecas pertenecientes a las capellanías y fundaciones pías. Las élites acaudaladas de México habían legado estas hipotecas a la Iglesia. Durante los tres años siguientes la Corona recaudó una cuarta parte de las hipotecas.

Esto disgustó al clero y a parte de las élites de México —aunque los muy ricos soportaron la crisis y algunos comerciantes y prestamistas sacaron provecho del relativo debilitamiento del sistema crediticio de la Iglesia. El alto clero, que vivía de los diezmos, no sufrió, pero sí el clero inferior, que dependía en gran medida de las capellanías. Incluso un cura criollo relativamente acomodado como Miguel Hidalgo y Costilla (considerado el "padre" de la independencia mexicana), que era hijo del administrador de una hacienda, sufrió el embargo de una de sus tres propiedades cuando no pudo redimir su deuda. Los nobles españoles y criollos se quejaron amargamente. Dependían decisivamente del sistema de crédito para financiar sus asuntos económicos y sus lujosas fiestas, para pagar los impuestos reales, para obtener los permisos reales de los vínculos y mayorazgos (derechos especiales sobre propiedades hereditarias), y para mantener el sistema de primogenitura que permitía a un noble legar sus riquezas en perpetuidad al mayor de sus hijos. Los más afectados fueron los productores pequeños y medianos, que sufrieron la reducción de los créditos resultante y el aumento de las tasas de interés.

La mayor parte de las élites de México se vieron atrapadas en el ciclo de inversiones y utilidades incrementadas en empresas productivas tanto para los mercados internos como para los externos. En última instancia las ganancias llevaban ventaja sobre el prestigio en sus mentes, como cuando, hacia el final del periodo colonial, la nobleza aceptó renunciar a la institución del mayorazgo. Prohibido antes por España, el mayorazgo había llegado a estar tan agobiado por obligaciones que ya no resultaba económico.

En medio de todos estos cambios, pronto se produjeron murmullos audibles acerca del "mal gobierno", en torno al que los mexicanos de cualquier raza o clase podían unirse. Como dijo un poderoso terrateniente: "Esta continua extracción [por la Corona] es por lo que nuestras colonias han sido mantenidas en un estado de infancia; la agricultura sigue atrasada... Pues bien, si en semejante estado debemos aun sufrir la extracción de los fondos píos, ¿alguien podrá dudar de nuestra total ruina?"[7]

[7] Citado en Enrique Semo, *Historia mexicana: economía y lucha de clases* (México, Era, 1978), p. 204.

Los abastecedores, comerciantes y contrabandistas europeos y estadunidenses —especialmente los británicos— quebraron fácilmente el viejo monopolio comercial español. Los gremios mercantiles con sus bases en México, que habían controlado La Habana, La Guaira, Maracaibo y Campeche (importantes puertos comerciales intercoloniales), perdieron también su control a favor de los comerciantes europeos, puesto que muchos productos europeos entrampaban Veracruz. Por otra parte, algunos comerciantes de Veracruz pasaban a ser agentes de los empresarios extranjeros.

Gran parte del comercio tradicional imperial e intercolonial español pasó a manos de intereses comerciales multinacionales, que representaban casi la mitad de las importaciones de México hacia fines del periodo colonial. Los esfuerzos de España en la renovación política y económica, así socavados, llegaron a un final humillante en 1808 con la invasión y toma militar de España por las tropas francesas de Napoleón que defendía ideales republicanos y burgueses.

La burguesía naciente

A comienzos del siglo XVIII, los mercaderes criollos miraban codiciosamente los mercados en expansión que ofrecía Gran Bretaña. Parte del Caribe estaba ya efectivamente bajo control británico. Para 1810, los comerciantes británicos estaban fortaleciendo las relaciones comerciales con toda la América "española". Los criollos suramericanos partidarios de la independencia nacional, como Francisco de Miranda y Simón Bolívar contaban con fondos y armas inglesas y estadunidenses. Los industriales, comerciantes, tratantes de esclavos y traficantes de armas de Europa y Estados Unidos anticipaban los inmensos mercados que surgirían en América Latina si los movimientos de independencia tenían éxito.

El vínculo "liberal" que unía los intereses comerciales y políticos ingleses con los de las élites criollas no era el liberalismo político de los ideólogos jacobinos de la Revolución francesa de 1789. Tampoco era el liberalismo revolucionario de los insurgentes esclavos y proletarios de piel oscura que aplastaron a los ejércitos ingleses y franceses en Santo Domingo y Haití tras varios años de lucha, creando la primera nación independiente de América Latina, Haití, en 1804. Más bien, el vínculo liberal era el *liberalismo económico.* Este liberalismo defendía el "libre comercio" —la doctrina clave en la transición del mercantilismo al capitalismo en todo el mundo, tanto como es la bandera del neoliberalismo en la actualidad.

Dentro de la naciente burguesía comercial y productiva de México, un grupo en ascenso de terratenientes, fabricantes, mineros y comerciantes criollos (y mestizos, considerados criollos), deseaban consolidar y ampliar sus riquezas recientemente ganadas. Se consideraban a sí mismos "españoles" en prestigio pero "criollos" en sus carencias. Si se presentaba la oportunidad, estaban más que dispuestos a apoderarse del poder político. Los terratenientes,

especialmente los que estaban enriqueciéndose rápidamente, empezaron a afirmar políticamente sus intereses de clase. Lo mismo hicieron otros prominentes criollos.

La principal tensión entre las élites se daba entre la oligarquía colonial burocrático-mercantil (incluyendo al alto clero y a los militares), en gran parte vinculada con el consulado de la ciudad de México, y la burguesía mexicana emergente, que incluía a los comerciantes de los consulados de Veracruz y Guadalajara, que ansiosamente rubricaron el lema de "libre comercio".

El objetivo de la naciente burguesía mexicana de maximizar las utilidades era atemperado, sin embargo, por su formación histórica en el contexto del tradicionalismo español. Durante siglos, todas las élites coloniales —incluyendo, técnicamente, a los indios nobles— se habían llamado a sí mismos españoles y habían buscado asumir los valores de la nobleza europea. Los títulos se compraban con facilidad. Tanto el clero como los militares disfrutaban de privilegios especiales, conocidos como "fueros", tales como la inmunidad jurídica. Los burócratas coloniales, incluyendo a los criollos, disfrutaban también de un estatus especial —a menudo en la burocracia un abogado tenía tantos derechos como un comerciante rico.

Las élites defendían los valores del progreso y la piedad, la empresa innovadora, la unidad de clase y la lealtad a la estirpe. Sus lecturas favoritas iban desde textos sobre las más recientes innovaciones tecnológicas hasta historias de milagros religiosos. Como observó Ladd: "La gran riqueza estaba organizada con el fin de maximizar las relaciones familiares y minimizar las distinciones criollas y peninsulares. Se centraba en los recursos de México, y era producida por la mano de obra mexicana, la tecnología mexicana y el capital mexicano [...] los empresarios ricos eran capitalistas según la tradición hispánica."[8]

Aunque envueltas en las retóricas liberales, racionalistas o radicales de la Ilustración o de las revoluciones francesa y norteamericana, las demandas de las élites de México se limitaban en la práctica a un modesto reformismo. Resintiendo el monopolio del poder político detentado por los "gachupines", los nativos enriquecidos buscaban formas de eliminar las restricciones coloniales sobre el mercado y de eludir los impuestos al comercio regional (alcabalas) y los impuestos reales y eclesiásticos que frenaban su avance económico. Objetaban tener que pagar por la defensa de España en sus inacabables guerras con las potencias europeas rivales. Como lamentaba fray Servando Teresa de Mier: "Puesto que España es incapaz de proteger su comercio y no quiere permitir que otros exporten nuestros productos o que importen los suyos, y nos ha privado de fábricas e industrias, la guerra europea es más cruel para nosotros que para ella, y en última instancia es costeada con nuestro dinero."[9] En su perió-

[8] Doris M. Ladd, *The Mexican nobility at independence, 1780-1826* (Austin, University of Texas Press, 1976), pp. 29, 52.

[9] Citado en R. A. Humphreys y John Lynch, *The origins of the Latin American revolutions, 1808-1826* (Nueva York, Alfred A. Knopf, 1966), p. 27. Sobre las tensiones entre criollos y peninsulares, véase Hugh M. Hamill, Jr., *The Hidalgo revolt: prelude to Mexican independence* (Gainesville, Uni-

dico *Diario de México* en 1806, el futuro insurgente Carlos María de Bustamante reprendía al virrey por su apoyo "a un reducido número de crueles monopolistas que en años de escasez aumentan sus fortunas a costa de la sangre de los desposeídos".[10] Algunos clérigos hablaban de reducir las grandes haciendas. El obispo de Michoacán lamentaba la "miserable y vil" situación de los pobres. Incluso un virrey llegó a denunciar la codicia de los terratenientes.

Los terratenientes objetaron durante largo tiempo contra la "protección" que ofrecía la Corona a los indios y a las tierras de los pueblos indios, deseando por el contrario ampliar sus haciendas en un mercado libre y abierto. Muchos hacendados y dueños de pequeñas propiedades en expansión empezaban a hablar seriamente de la autonomía política para México.

A pesar de toda su fascinación con los ideales de la nueva burguesía llegados de fuera y de su resentimiento contra el despotismo colonial, la naciente burguesía de México seguía oprimida por los perfiles de su pasado colonial. Rara vez era económicamente autónoma, y su dominación política y cultural por un estado exterior limitaba aún más su capacidad de pensar y actuar de forma independiente. Había ido creciendo acostumbrada a contar con los favores del estado.

Pero estaba lejos de ser "subdesarrollada" en cuanto a las capacidades o rasgos económicos normales de las primitivas burguesías capitalistas —de hecho, su voracidad y satisfacción de explotar a otros, a juzgar por sus propios antecedentes históricos (escrituras, libros de cuentas, proclamaciones, etc.), igualaban o excedían a los de sus contrapartes europeas. Sin embargo, seguía siendo relativamente débil en el contexto social más amplio en el que operaba —y, por lo tanto, *se había desarrollado de forma incompleta como una clase socioeconómica autoconsciente y autoperpetuadora.*

Así es como la primera burguesía mexicana miraba al estado y a los aliados extranjeros entre las burguesías más poderosas en busca de apoyo, especialmente contra las amenazas de rebelión de las masas. Se debatían entre su necesidad de ganancias y el miedo a las masas empobrecidas. Esto ayuda a explicar por qué dieron la bienvenida a la expansión del ejército de la Corona hasta unos 40 000 efectivos en 1810. Necesitaban al ejército para controlar el volcán de descontento que iniciaba su erupción desde abajo. Un tumulto sacudió la importante ciudad portuaria de Veracruz en 1808. Además, la mitad de los soldados no eran españoles y algunos de sus oficiales eran criollos.[11]

Cada vez eran más los campesinos forzados a entregar sus tierras al sistema en expansión de las haciendas; más y más desempleados o jornaleros se aglomeraban en las ciudades ya desgarradas por los conflictos. A principios del

versity of Florida Press, 1966); Salvador de Madariaga, *The fall of the Spanish American empire* (Nueva York, Collier, 1963); y H. G. Ward, *Mexico in 1827* (Londres, Henry Colburn, 1828), vol. I.

[10] Citado en Florescano, *Precios*, p. 191.

[11] Sobre el papel del ejército español en México, véase Christon I. Archer, *The army in Bourbon Mexico, 1716-1810* (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1977), y Lyle McAllister, *The "fuero militar" in New Spain, 1764-1800* (Gainesville, University of Florida Press, 1957).

siglo XIX, el científico alemán Alexander von Humboldt recorrió México, en parte con el fin de enviar sus informes a industriales y comerciantes británicos y del norte de Europa. Quedó impresionado por la profundidad de los problemas de la colonia y predijo "una explosión de conflicto social".[12]

Una crisis en la producción agrícola desde 1808 hasta 1810 debilitó la economía de México y aumentó aún más el desempleo. Con la propagación de epidemias y hambrunas, una inmensa población flotante de trabajadores inquietos y desesperados vagaba por el país. Incluso los hacendados padecieron la crisis. Debían sumas inmensas por préstamos de la Iglesia y de los comerciantes. Tenían que pagar la mayor parte de los salarios en efectivo y necesitaban más créditos para seguir creciendo. La competencia en los mercados regionales llevó a muchos a aumentar su escala de producción, forzando nuevos desembolsos de efectivo y mayores endeudamientos.

Las clases intermedias y los trabajadores pobres

Sumándose a las condiciones de México que llevaron a von Humboldt a prever una "explosión de conflicto social" estaban las aspiraciones crecientes de las clases medias —reducidas en número pero que, igual que las masas, experimentaban un rápido cambio social y discriminación racial o social. Hay gran confusión teórica acerca del concepto de "clases medias". Algunos estudiosos de historia de México equiparan a los mestizos con la "clase media", mezclando así raza y clase. Pero la clase determinaba la raza mucho más que lo contrario. Muchas personas que se llamaban a sí mismas españolas eran mestizas; muchos mestizos y castas en general eran obreros o campesinos, como lo eran cierto número de criollos, y algunos indios, sobre todo caciques, eran considerados mestizos. Otros autores agrupan al clero, los abogados y los intelectuales junto con los pequeños productores (o la "pequeña burguesía tradicional" en el pensamiento europeo) como "clase media", pasando así por alto el hecho de que la pequeña burguesía posee, o al menos usa, sus propios medios de producción y emplea otros. Los intelectuales y profesionales, por supuesto con algunas excepciones, raramente poseen algo más que su fuerza de trabajo y bienes personales y son o autoempleados o empleados por otros.

Las "clases intermedias" (en plural) es un concepto más exacto que el de "clase media" (en singular), porque son varios los grupos que componen esta categoría. Son "intermedias" no debido a los supuestos niveles "medios" de ingreso, propiedad o poder, sino porque *están situados en una posición intermedia entre las principales clases sociales que o bien poseen los medios de producción o aplican su fuerza de trabajo para activarlos.* En otras palabras, las clases intermedias no constituyen el polo principal de una contradicción de clase bipo-

[12] Alexander von Humboldt, *Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España* (México, Porrúa, 1966), p. 452.

lar —tal como la de señor-siervo, burguesía-proletariado, y así sucesivamente. Están "atrapadas en el medio", ahora alineándose con un polo, luego con el otro, y casi siempre dividiéndose entre ellas mismas, siempre "intermedias" respecto del conflicto de clase central de la sociedad en cuestión.

La expansión económica de la era de la reforma borbónica fue acompañada por un aumento del papel de los comerciantes medianos y pequeños y de los transportistas de nivel medio. Éstos habían prosperado a pesar de la naturaleza primitiva de su sistema de distribución, que dependía de los cargadores indígenas (*tamemes*), de otras "bestias de carga" (mulas, etc.), y de los difíciles caminos y brechas montañosas. Sumándose a ellos los mineros mejor pagados, artesanos prósperos, mineros en pequeña escala y ocasionalmente indios prósperos y castas dueños de propiedades, durante décadas habían venido formándose unas clases medias de piel aún más oscura y con expectativas crecientes.

A principios del siglo XIX, las clases intermedias podían contar entre sus miembros a los dueños de sus propios medios de producción, bien fuesen campesinos tradicionales dueños de pequeñas parcelas (rancheros), artesanos productores de artículos sencillos, o incipientes capitalistas ocasionales. Maestros de los gremios, rancheros aislados, dueños de talleres y artesanos, todos ellos empleaban a otros y constituían la "pequeña burguesía tradicional" de México.

Su forma de producción de mercancías simples, sin embargo, soportaba una gran presión. El poder financiero del capital comercial sobre la pequeña burguesía había generado una separación creciente entre los productores de artesanías y sus medios de producción. El capital mercantil estaba debilitando también el control de las organizaciones gremiales sobre los miembros del gremio y sobre la fuerza de trabajo empleada por los maestros artesanos. Los comerciantes estaban introduciendo factorías de capitalismo temprano, la distribución de cuyos productos controlaban con un sistema de monopolios regionales, nacionales e internacionales. Si bien ocasionalmente un pequeño productor lograba acumular capital, expandir las ventas o el comercio, y empezar a organizar la producción sobre una base capitalista, más a menudo era una sección de la clase comerciante existente la que empezaba a tomar posesión directa de la producción.[13]

Más poderosos e influyentes que los productores tradicionales de pequeños artículos, algunos otros elementos de la pequeña burguesía disfrutaban del éxito en la agricultura y el comercio. La pequeña burguesía rural, cuyos miembros más afortunados se elevaron hasta las filas de la burguesía agraria, incluía a rancheros prósperos, arrendatarios de pequeñas haciendas o tierras de la Iglesia, y algunos mayordomos que establecían empresas ganaderas, ingenios azucareros y otras empresas propias. En el norte de México, incluyendo el actual suroeste de Estados Unidos, el *vaquero* se estaba convirtiendo en un personaje colorido y de carácter independiente. El vaquero poseía su propio

[13] Karl Marx, *El capital*, ed. cit., tomo III, vol. 6, pp. 134-136.

caballo y armas, y era libre de transmitir la autoridad patriarcal del hacendado a aquellos "por debajo" de él o incluso para desafiar al hacendado si la ocasión lo propiciaba. Algunos vaqueros lograron ascender en la escala de la pequeña burguesía rural. Aunque la pequeña burguesía campesina empleaba a otros, generalmente tenía dificultades para competir con la burguesía agraria y los monopolios comerciales.

La pequeña burguesía comercial incluía una amplia variedad de personas, que iban desde vendedores callejeros hasta pequeños y medianos mercaderes y comerciantes, contrabandistas, muleros y transportistas de nivel medio, y pequeños tenderos. Algunos de sus miembros —en particular los contrabandistas y muleros prósperos— acumulaban bonitas sumas de capital, pero muchos de ellos, como la mayoría de las personas de clase media de México, vivían vidas austeras de esforzado trabajo.

Aquellos pocos que lograban sostener y expandir su acumulación de capital eran admitidos en las filas de las clases superiores, y algunos incluso compraban títulos de nobleza. Algunos estudios de caso regionales llevados a cabo por estudiosos mexicanos y extranjeros han revelado una notable flexibilidad en el acceso al estatus de clase superior, algo que probablemente constituyó durante muchos años una válvula de seguridad para contener la revolución en el periodo colonial.

Diversos grupos dentro de las clases medias no poseían ningún medio de producción ni formaban parte de las pequeñas burguesías que acabamos de examinar. No eran ni campesinos, ni obreros, ni propietarios de tierras, ni capitalistas. Eran profesionales, *letrados* burócratas, intelectuales, sacerdotes o militares. Durante el siglo XVIII, abogados, periodistas, maestros, párrocos, oficiales de baja graduación y otros profesionales emergieron como grupos medios producidos por las florecientes universidades y escuelas. La economía en rápida expansión a fines de ese siglo incrementó algunas de sus expectativas, así como las de los trabajadores mineros mejor pagados o de los artesanos y rancheros prósperos, o comerciantes y dueños de minas en pequeña escala.

El factor de raza representó un papel en la lucha de las clases intermedias por su definición social. Para los miembros más instruidos de las castas, el patronazgo del gobierno o el alistamiento en el ejército eran los únicos medios de conseguir riquezas. Muchos aspiraban a los valores de las clases altas asociados con la riqueza y con la piel blanca en el México colonial. Su supuesta ideología de "clase media" estaba fuertemente marcada por los valores de la burguesía naciente y de la nobleza titulada. Miraban de arriba abajo el trabajo manual —no desde las alturas de una clase totalmente "superior" a éste, sino desde los bancos de trabajo y los surcos de labranza a los que podrían verse obligados a regresar en cualquier momento.

Así pues, las clases intermedias de México carecían de cohesión y de una ideología de clase propia. Ni la pequeña burguesía ni la inteliguentsia y grupos profesionales estaban social o psicológicamente unidos en torno a una clase común o a un programa ideológico. Adhiriendo por lo general a los valores de

las clases altas, la mayoría de sus miembros estaban marginados incluso de un nivel medio de ingreso o prestigio. Presionadas constantemente hacia las filas de la clase obrera, el campesinado o los escalones inferiores de los establecimientos del estado, la Iglesia o el comercio, las clases intermedias —especialmente la inteliguentsia y los profesionales— experimentaban expectativas económicas y políticas ascendentes, aunque siempre bloqueadas.

Al final, muchos de ellos se convirtieron en voceros de un movimiento anticolonial por la independencia. Estaban muy dispuestos a gritar "¡Mueran los gachupines!" Sintiéndose víctimas de raza y clase, fácilmente daban expresión a lo que de hecho eran demandas de las masas: el fin de la esclavitud, de la recaudación de tributos y del racismo en todas sus formas (independientemente de que excluyeran a los "indios" de sus propios círculos). Económicamente oprimidas, las clases intermedias daban la bienvenida al fin de los impuestos de la Corona y la Iglesia. Las reformas solamente podían beneficiarlas (fueran agrarias o de otro tipo).

Detrás de la aceptación por parte de algunas élites de las ideas revolucionarias burguesas que llegaban a México desde el extranjero, se hallaban intereses económicos definidos con los que las clases intermedias podían identificarse aunque no disfrutar de ellos todavía. Incapaces de afirmar el poder por sí mismas, las clases intermedias compartían un "interés de clase" particular con la naciente burguesía: el miedo a las masas trabajadoras. Aunque de sus filas podía surgir ocasionalmente un líder revolucionario capaz de identificarse con los pobres, la mayor parte de ellos sólo podía afirmar su liderazgo en una lucha anticolonial uniendo sus esfuerzos a los de aquellos elementos burgueses que compartían su resentimiento contra España. Juntas, las clases intermedias y la burguesía podrían conseguir lo que ninguna de ellas podía conseguir por sí sola.

La pobreza, desesperación e inquietud que agobiaban a la población en general no eran indiferenciadas. Mientras muchos perdían, algunos se beneficiaban. Los pequeños propietarios de tierras, los arrendatarios capitalistas, y unos pocos rancheros encontraban en la reducción del campesinado una oportunidad para ampliar sus posesiones y beneficios. Obteniendo más manos campesinas al proseguir su avance dentro de los "ejidos" indígenas, conseguían también, como Marx observaría al describir la primitiva transformación capitalista de las áreas rurales en general, "un cultivo más eficiente, al hacer uso de los servicios alquilados de sus vecinos pobres".[14]

En vísperas de la independencia de México, gran parte de la población estaba cada vez más depauperada y sobrevivía mendigando, trabajando como jornaleros, como campesinos arrendatarios o medieros, o trabajando parcelas de subsistencia que les concedían los hacendados, a los que servían como peones endeudados. Los que se ligaban a las haciendas solían vivir mejor que sus semejantes "libres" en busca de jornales.

[14] Karl Marx, *Elementos fundamentales (Grundrisse)*, (México, Siglo XXI), 1988.

La mayoría de los mexicanos eran campesinos, jornaleros agrícolas, mineros, cargadores, empleados de obrajes, aprendices, trabajadores de diversos tipos (incluyendo algunos esclavos) —proletarios en un sentido amplio, pero de ninguna manera un proletariado industrial moderno (incluso según los patrones de principios del siglo XIX). Explotadas durante siglos, estas masas trabajadoras habían luchado en vano periódicamente para derrocar a las fuerzas que las mantenían sometidas. Y estaban más que ansiosas de reanudar la lucha.

El único enemigo común que existía, haciendo posible la independencia nacional y cierto grado de unidad interracial e interclasista entre los mexicanos, era el propio estado colonial y los peninsulares que constituían sus voces de mando político y detentaban también un considerable poder económico. Fue contra este colonialismo y estos "gachupines" que muchos mexicanos, aunque de ninguna manera todos ellos, pudieron ponerse de acuerdo, finalmente, para combatir.

Ya tarde en la noche, individuos idealistas de las clases intermedias y altas se reunían en sus casas para discutir los cambios políticos. Desde fuera observaban los rostros oscuros de las masas hambrientas. ¿Cuánto tiempo habría de pasar para que estallara un tumulto mayor que provocara un alzamiento social devastador?

Las guerras de clase por la independencia

Las guerras de independencia de México (1810-1822) fueron luchas interclasistas profundamente anticoloniales, que lograron establecer la soberanía nacional pero fracasaron en hacer una revolución social. Ninguna clase aislada o fracción de clase fue capaz de afirmar o mantener la hegemonía sobre la oleada de rebelión que arrasaba el país.

Políticamente, la principal condición previa para el movimiento de independencia fue la constante erosión del sistema tradicional español de control de las colonias americanas, que alcanzó su clímax en 1808 cuando el ejército de Napoleón ocupó España y apresó a Carlos IV. En aquella época, incluso el virrey de México se puso del lado de los criollos descontentos en contra de un sistema colonial que se desintegraba. Sociedades secretas como el Club Literario y Social de Querétaro y los francmasones complotaban para derrocar a los burócratas coloniales. (La francmasonería era una organización social fraternal y secreta influyente en el fermento social de las burguesías europeas, estadunidenses y latinoamericanas de los siglos XVIII y XIX.)

Luego, en 1810, ocurrió la explosión —no por casualidad, en aquella parte de México con la actividad más orientada al capitalismo y la más intensa diferenciación social: la región norcentral conocida como el Bajío, rica en minería, manufacturas y agricultura. Un párroco, el cura Hidalgo, tras recibir un mensaje de que el complot para la revuelta había sido descubierto por los españoles, convocó al pueblo a una misa en Dolores, Guanajuato, en donde dio su

histórico "Grito de Dolores" el 16 de septiembre de 1810: "Hijos míos, ¿haréis el esfuerzo de recuperar estas tierras robadas hace trescientos años a vuestros antepasados por los odiados españoles?...¡Viva nuestra santa madre de Guadalupe! ¡Viva América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines!"[15]

Tomando literalmente las palabras de Hidalgo, los fieles echaron mano a sus machetes y arrasaron la alhóndiga de Guanajuato, una fortaleza llena de tesoros reales en donde las tropas españolas y los criollos ricos se habían refugiado. Prendieron fuego a las fortificaciones y casas españolas. Muy pronto se reunió un ejército de 80 000 hombres, arrasando las ciudades y empujando a los soldados españoles y criollos en su huida hacia el sur. Ahí, en la mayor región del Bajío, se originaron las tradiciones mezcladas de lucha de clases armada e idolatría religiosa, simbolizada por los indios que llevaban la bandera de la Virgen de Guadalupe a la primera línea de los combates.

Otros grupos campesinos se alzaron también. En el sur, el cura de piel morena, más indio que mestizo, José María Morelos, organizó un grupo guerrillero que pronto se convirtió en ejército. Apasionado antirracista, Morelos prohibió el uso del término "mestizo". Los campesinos y los depauperados se agrupaban en torno a las condenas de Morelos de "todos los ricos, criollos y gachupines" y de su plan de repartir entre los pobres la mitad de todas las riquezas capturadas. En 1813, el Congreso de Chilpancingo convocado por Morelos resolvió acabar con la esclavitud y todas las distinciones de casta; establecer un impuesto sobre el ingreso; abolir los monopolios estatales, los impuestos a las ventas y los tributos; garantizar el derecho a la propiedad privada y establecer salarios más elevados para los pobres. Cuando los obispos españoles le excomulgaron por "ateo y materialista", Morelos excomulgó a los obispos por traidores a Cristo.

Los triunfos militares de los crecientes ejércitos populares de Hidalgo y Morelos forzaron a los criollos ricos a pedir ayuda a España. Sin embargo, cuando más adelante los criollos comprendieron que la explosiva amenaza de clase proveniente de abajo no podía ser contenida ni siquiera con la ayuda española, muchos de ellos optaron por la independencia. Como manifestó en su famosa "Carta desde Jamaica" de 1815 el "Libertador" de Sudamérica, Simón Bolívar, el principal agravio de los criollos era que España no hubiera dado a las élites suficiente autoridad para mantener el "respeto" entre los indios y castas alzados. Estos plebeyos, decía Bolívar, amenazan con destruir toda América con su revolución. "Hemos sido privados de una tiranía activa, puesto que no se nos ha permitido ejercer sus funciones", se lamentaba. En otras palabras, los grupos económicos ascendentes habían sido mantenido alejados de los más altos puestos del gobierno en la América española y en consecuencia se les había impedido ejercer la dictadura de clase tan necesaria para evitar la ruptura y el caos de la revolución desde abajo. El 15 de septiembre de 1821, el Ac-

[15] Hay varias versiones de las palabras exactas de Hidalgo, pero ésta es la que se utiliza más frecuentemente.

ta de Independencia de Guatemala proclamó abiertamente la independencia "con objeto de prevenir las consecuencias que serían terribles en la eventualidad de que fuera el pueblo quien la proclamase".[16]

Durante el decenio de 1810, la mayor parte de las élites de México y algunas de las clases intermedias repartieron pragmáticamente sus apuestas distribuyendo su apoyo financiero y respaldo ideológico entre todos los grupos políticos, desde los más monárquicos hasta los que buscaban la autonomía o incluso la independencia. Como anotaría más tarde el insurgente Carlos María de Bustamante: "Si hubiéramos de castigar a todos los que faltaron a sus deberes en esta revolución, ora haciéndonos la guerra desvergonzadamente, ora haciendo un ejercicio de equilibrio para caer de pie, ora quedándose en sus casas como gatos al calor de la lumbre mientras sus hermanos se acuchillaban unos a otros en las batallas, sería necesario ejecutar a dos tercios de nuestra población." A lo que el ideólogo liberal José María Luis Mora, que había perdido a un hermano en la causa insurgente, añadiría:

> Muchas personas hubieran apoyado fuertemente a la revolución con su influencia y riqueza a no ser por el hecho de que estaban profundamente temerosos de perderlo todo en el desorden general; por eso es que [...] hombres que verdaderamente amaban y estaban comprometidos con su tierra natal no sólo abandonaron la causa de Hidalgo sino que de hecho empuñaron las armas contra ella.[17]

A fines de 1810, el ejército de Hidalgo estaba llegando a las afueras de México cuando, por razones desconocidas, Hidalgo decidió no atacar la metrópoli sino que, por el contrario, condujo a sus tropas hacia el oeste y tomó Guadalajara. Luego, en enero de 1811, los soldados realistas consiguieron una victoria que desmoralizó y dispersó a varios miles de las tropas de Hidalgo. En julio, el propio Hidalgo fue capturado, juzgado por la Inquisición, despojado de los hábitos y ejecutado.

En 1813, el general Félix Calleja, español, y su ejército constituido principalmente por criollos, atacó y finalmente se impuso al bien disciplinado ejército de Morelos que amenazaba la ciudad de México. Dos años después, Morelos también sufrió la misma degradación y fue asimismo ejecutado. Las acciones rebeldes continuaron durante los cinco años siguientes, pero principalmente en las regiones al sur de la ciudad de México. Uno de los principales líderes fue Juan Álvarez, un campesino afroindio.

En 1820, un golpe de estado en España derrocó a Fernando VII y permitió la reintroducción de la Constitución liberal de Cádiz de 1812. Ésta incluía leyes que protegían a los indios y las tierras de los indios amenazando así la ya

[16] Citado en Humphreys y Lynch, *Origins* p. 263.

[17] Carlos María de Bustamante, *Cuadro histórico*, vol. 2, pp. 610-11, y José María Luis Mora, *México y sus revoluciones*, vol. 3, pp. 33, 362, todo ello citado en Ladd, *The Mexican nobility*, p. 114.

tambaleante hegemonía rural de los criollos. Las Cortes reinstalaron también el Acta de Consolidación, que una vez más amenazaba la fuente de crédito interno de las élites. Las Cortes juraron limitar el derecho de la Iglesia a adquirir propiedades y abolir los fueros eclesiásticos y militares. Como es natural, los criollos ricos consideraban imprudente la lealtad a España bajo estas nuevas condiciones, y buscaron un líder distinto a Calleja, alguien que perteneciera a sus propias filas.

Encontraron a su hombre en el hacendado Agustín de Iturbide, hijo de un acaudalado comerciante español (vasco) y de una criolla, que años antes había luchado contra Hidalgo, Morelos y Álvarez. Iturbide consiguió persuadir al virrey para que le nombrase comandante del ejército español en el sur. Luego se reunió con Vicente Guerrero, importante líder indígena de la guerrilla del sur, y le convenció de formar una alianza para liberar a México del dominio español.

Los oficiales partidarios de Iturbide aceptaron renunciar al fuero militar, mientras que los liberales que se unieron a Iturbide le obligaron a aceptar la abolición de la esclavitud y el otorgamiento de la plena ciudadanía a los negros, "orientales" y europeos residentes en México. Iturbide buscó también ganarse el favor de los realistas, atrayéndolos gradualmente a su "Ejército Trigarante". Las tres garantías eran: "Unidad", entre criollos y españoles; "Religión", para tranquilizar a la Iglesia, e "Independencia", significando solamente autonomía de España.

El 27 de septiembre de 1821, el ejército de Iturbide tomó la ciudad de México. Iturbide recibió la comunión en la Catedral e instaló un parlamento de coalición: estableciendo de hecho el autogobierno. Se desplegó la nueva bandera tricolor de la nación: blanca por la religión, verde por la independencia y roja por la sangre de la unión. Un año después, en septiembre de 1822, Iturbide abolió las definiciones raciales de los documentos de ciudadanía y de los censos.

A pesar de que Iturbide había aceptado honrar la Constitución de Cádiz y las leyes de las Cortes de 1820 y 1821, en febrero de 1822 las Cortes rechazaron la Constitución para México. Esto endureció la posición política de las élites criollas y sus recientes aliados gachupines, que ya habían empezado a experimentar algunos beneficios económicos por haber proclamado el autogobierno, particularmente después de que el nuevo gobierno abrió aún más los puertos mexicanos al comercio mundial.

Los impuestos se rebajaron del 16 al 6%. A los muleros se les permitió el libre comercio hasta las fronteras del norte. Los impuestos de guerra sobre el comercio del pulque y la minería fueron reducidos. Se eliminaron los impuestos a la importación del mercurio y la maquinaria para las minas, los oficios y la agricultura. Los productos agrícolas y los artículos manufacturados mexicanos ya se podían exportar libres de impuestos. Las industrias del tabaco y los textiles de algodón, que habían experimentado un auge gracias a la producción de guerra para los ejércitos populares, recibieron del nuevo gobierno nacional aranceles protectores que restringían las importaciones.

Los criollos en los sectores comercial, minero y agrario, con el fin de proteger su comercio, nombraron a sus hijos comandantes de los ejércitos regionales. Si bien estos "protectores del comercio" militares se convirtieron en ocasiones en "caudillos" anticoloniales radicales, la mayor parte de ellos se agruparon en redes de caudillos y caciques y se volvieron influyentes en la serie de golpes y contragolpes que siguieron a la independencia cuando las élites se dedicaron a pelear entre ellas.

Iturbide no sentía simpatía por las ideas liberales republicanas. En mayo de 1822 rechazó la autonomía para México y se autoproclamó emperador Agustín I del México "independiente". Cinco meses después disolvió el parlamento. A ojos de sus críticos de tendencias republicanas a los que había encarcelado —muchos de ellos de las clases intermedias— el "emperador" estaba desnudo. Iturbide no confiaba en nadie, incluyendo a su comandante en el puerto de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, un hacendado y antiguo oficial realista al que Iturbide intentó atraer a la ciudad de México.

Previendo una inminente oleada de rebelión republicana contra Iturbide, Santa Anna tomó el control de Veracruz, proclamó una república, y llamó a la restauración del parlamento de 1821. Grupos en otras regiones se unieron a la revuelta en nombre del federalismo republicano y empezaron a marchar hacia México. Antes que enfrentar una humillante derrota militar, en febrero de 1823 Iturbide abdicó y partió al exilio. (Regresó en julio de 1824, en un intento por recuperar el poder político, sólo para ser capturado y ejecutado como traidor.)

Así, el experimento de Iturbide de independizarse de España bajo una monarquía constitucional fracasó, en gran parte debido a la negativa de España a reconocer el autogobierno de México y al torpe trato dado por Iturbide a sus opositores. Fueron las fuerzas del liberalismo republicano (que Santa Anna declaró oportunamente representar) las que consumaron la conquista de la independencia de México.

Luchas en lo alto

Entre 1822 y 1857 la joven nación experimentó más de cincuenta gobiernos distintos, desde la monarquía y la dictadura hasta la república constitucional. Las élites de México luchaban por el poder procurando al mismo tiempo frenar las demandas de las masas. Las rivalidades entre las élites se reforzaban por la multiplicación y fragmentación de los mercados, los bloques de poder regionales en competencia y el apalancamiento económico de los capitalistas y estados extranjeros, cuyo apoyo financiero era bienvenido por las élites pero cuya intervención militar muchos temían.

Los rancheros, herreros, abogados, fabricantes artesanales y otros elementos de las clases intermedias que habían tenido influencia en el ala radical de las fuerzas insurgentes anticoloniales buscaban ahora nuevas oportunidades de bienestar económico. La expansión posterior a 1821 en el comercio inter-

nacional provocó un incremento en el comercio, la producción y el papeleo pequeñoburgueses. Aunque algunos líderes de clase intermedia de la revolución anticolonial consiguieron puestos en el gobierno después de la independencia, no obtuvieron ni poder económico (clase) ni hegemonía política (estado). Las clases intermedias eran demasiado débiles, fragmentadas y estaban demasiado confundidas para lograr tal cosa.

Por el contrario, comenzó una época en la que los oligarcas locales y los caudillos regionales, muchos de ellos con sus propios ejércitos, lograron control sobre campesinos, obreros y desempleados. El control fue institucionalizado a través de una compleja cadena de mando que se extendía desde el caudillo, pasando por el cacique local, el cura, el alcalde, el hacendado o el mayordomo, el dueño de la fábrica o taller o su capataz, y el "capitán" (a menudo un contratista de mano de obra). Las personas estaban ligadas al sistema a través de su dependencia del patronazgo personalizado, que implicaba redes elaboradas de pagos y favores. El legado colonial de *personalismo* y corrupción se profundizaba.

A menudo se supone que las guerras de independencia debilitaron la economía de México, pero existe considerable evidencia de que esto sólo fue cierto en áreas selectas, particularmente en Guanajuato y Michoacán. La mayoría de las minas no fueron dañadas por la guerra, y la lentitud en la recuperación de la minería después de las inundaciones de 1805-1821 tuvieron más que ver con la pérdida de los suministros asegurados del mercurio español de bajo precio que con una destrucción real causada por la guerra. La minería no recuperó su nivel de producción de 1805 hasta 1850. La producción textil y de tabaco experimentó un gran auge, y en el decenio de 1820 se duplicaron las exportaciones. Funcionarios ingeniosos se quedaban con parte del comercio de la cochinilla o se dedicaban al contrabando, a medida que emergía una nueva clase de especuladores —la que Ladd ha llamado de los "militares comerciantes" y Argüello los "ejércitos del comercio".[18]

La economía de la nueva nación se basaba en mercados regionales dominados por oligarcas locales. Los comerciantes y capitalistas más prósperos tenían fuertes lazos con el capital extranjero, y al menos uno de ellos (Béistegui) tenía la mayor parte de sus inversiones en Europa. Muchos contaban con renta de la tierra (rural y urbana), favores del Estado, comercio, préstamos de dinero y empresas financieras especulativas para su acumulación de capital inicial.

A pesar del crecimiento regional y de las historias de éxito individual, la recuperación económica general de México posterior a la independencia fue lenta y desigual por décadas. Había numerosos obstáculos aparte de la inestabilidad política. Durante las guerras de independencia murió más de medio millón de personas. En ausencia de toda esa mano de obra, la acumulación de capital tuvo que proceder más lentamente que entre las poblaciones estadunidenses y europeas en expansión. Muertes adicionales resultantes de las subsiguientes guerras internas e internacionales de México, la alta mortalidad infantil y los bajos

[18] Ladd, *The Mexican nobility*, y las conversaciones del autor con Gilberto Argüello.

promedios de vida debidos a la mala alimentación, la falta de higiene o el exceso de trabajo limitaban más aún los recursos de mano de obra. La población apenas crecía en absoluto —desde cerca de 6 millones en 1810 hasta 8.7 millones en 1874— y México no alcanzó el nivel de alfabetización estadunidense de 1800, del 80%, hasta el decenio de los ochenta del siglo XX.

Había todavía otros obstáculos al crecimiento económico. La montañosa geografía de México y su primitivo sistema de transportes planteaban grandes problemas. La nueva nación carecía de excedente económico, el que fue drenado primero por las fuerzas del colonialismo y luego por la "fuga de capitales" durante las guerras de independencia. El retiro (o expulsión) del capital español dejó escasez de fondos. A esto se añadió una deuda externa en ascenso; patrones de intercambio desiguales en el comercio con Europa y Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio de la nación a manos de este último a partir de 1848 (incluyendo las lucrativas vetas de oro de California). Por último pero no en último lugar, México sufría de ineficiencia en su organización económica —ejemplificada por partes de la agricultura de hacienda o por los diezmos de la Iglesia, así como por la maraña de permisos oficiales y fiscales o regulaciones de impuestos heredadas de los tiempos coloniales y mantenidas durante muchas décadas.[19]

Aquí, la gente desesperada recurrió a la producción artesanal o a los cultivos de subsistencia, reforzando las "economías domésticas" de producción de pequeños artículos; más allá, una nueva fábrica textil, un molino de papel o una cosecha de exportación se introducía para la producción con mano de obra asalariada o a destajo en gran escala. Por todas partes la rebelión de clase y los conflictos militares amenazaban con estallar.

Las potencias extranjeras acechaban a lo largo de las costas con barcos de guerra y tropas, siempre prontas a recolonizar una tierra vulnerable rica en recursos naturales. El punto de vista de la burguesía industrial y colonizadora británica en 1824 queda resumido por el ministro de asuntos exteriores George Canning: "El clavo ha sido remachado, la América Española es libre, y si no manejamos nuestros asuntos de mala manera, será inglesa."[20] Para la burguesía británica, en particular para los propietarios de grandes firmas comerciales, bancos e industrias, la consolidación y expansión del poder británico sobre una base global dependía de impedir el desarrollo industrial autónomo de América Latina, abriendo al mismo tiempo los mercados mundiales mediante el li-

[19] Véanse los brillantes trabajos de John H. Coatsworth, tales como "Obstacles to economic growth in nineteenth-century Mexico", *American Historical Review* 83, núm. 1 (febrero de 1978), pp. 80-100, y *Growth against development: the economic impact of railroads in Porfirian Mexico* (DeKalb, Northern Illinois University Press, 1981). Para buenas revisiones de los obstáculos a que se enfrentan México y América Latina para "alcanzar" económicamente a las naciones más industrializadas del mundo, véase E. Bradford Burns, *The poverty of progress: Latin America in the nineteenth century* (Berkeley, University of California Press, 1983); Stuart Voss, *Latin America's middle age: from imperial reform to world depression* (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999).

[20] Citado en James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank y Dale L. Johnson, *Dependence and underdevelopment: Latin America's political economy* (Nueva York, Anchor, 1972), p. 30.

bre comercio, en el que contaban con ventajas competitivas. En general, los capitalistas extranjeros veían las ventajas del libre comercio y por ello se alinearon junto a los hacendados, mineros y exportadores de México y en contra de los emergentes intereses industriales mexicanos.

Los nuevos gobiernos de México debían a los ciudadanos y gobiernos europeos —en particular a Gran Bretaña— más de 76 millones de pesos, incluyendo las sumas adelantadas para compra de armas a los insurgentes independentistas. Los bancos ingleses privados prestaron otros dieciséis millones de pesos en 1824. (México se declaró insolvente en 1827, pero a cambio garantizó a Gran Bretaña un trato comercial favorable como parte del arreglo.) Los sucesivos gobiernos mexicanos condonaban las órdenes de expulsión de los inversionistas españoles si éstos prestaban dinero al Estado. De esta forma, algunos españoles conservaban su estatus como miembros prominentes de la burguesía mexicana.

Mediante el libre comercio, los productos manufacturados británicos invadieron el mercado mexicano. Ya desde 1824 los textiles de algodón constituyeron el 30% de las manufacturas importadas a través de Veracruz, debilitando de esta manera la industria textil mexicana, que representaba cerca de una cuarta parte de las empresas manufactureras mexicanas.

Pero en las dos primeras décadas posteriores a la independencia, México no cayó bajo el control de ninguna otra nación. Desanimados por la caótica situación interna, los capitalistas extranjeros preferían operar en las esferas de la deuda pública, los créditos y el comercio, más que en las nuevas inversiones directas o en la conquista militar. Hasta 1850, sólo los españoles tenían grandes inversiones en las manufacturas mexicanas: los ciudadanos franceses, alemanes, británicos y estadunidenses tenían inversiones de menor cuantía.

La única área en la que los capitalistas extranjeros, especialmente de Gran Bretaña, mantenían un interés activo, era la minería. Seguían invirtiendo en la rehabilitación de las minas y recibían la mayor parte de las ganancias de la creciente producción resultante. México dependía más que nunca del oro y la plata para sus ingresos por exportación (86% en 1872), mientras que las pieles, el sisal y el ixtle (fibras usadas para hacer cuerdas) ocupaban el primer lugar en las exportaciones agrícolas, seguidos por el café.

Para 1870, Inglaterra y Estados Unidos sumaban el 70% del comercio de México. Hasta 1884, cuando el dictador Porfirio Díaz renegoció la deuda externa y empezó a cortejar a los inversionistas extranjeros, los primeros intentos de industrialización fueron principalmente una cuestión doméstica. Sin embargo, los patrones de desarrollo industrial de base nacional se veían bloqueados por las prácticas de libre comercio (incluyendo el contrabando a México de productos manufacturados extranjeros que evadían los aranceles gubernamentales) y por las presiones de los tenedores de obligaciones extranjeros para que el gobierno les pagase.

Considerando las deudas externas de México y sus déficit presupuestarios y de balanza de pagos (que empeoraban cuanto más "libre" se hacía el comercio), era cosa fácil para los extranjeros continuar con el proceso de financiar

el "desarrollo económico" de México en su propio beneficio. Los préstamos externos iban seguidos por la acumulación de deudas y la adquisición de propiedades como pago, aumentando con ello el flujo de capital hacia fuera de México. Mariano Otero fue uno del puñado de mexicanos capaces de observar y lamentarse de que "el comercio ya no es más que el instrumento pasivo de la industria y el comercio extranjeros [...] y hoy esos gabinetes, en todo sometidos al espíritu mercantil, están profundamente interesados en mantenernos en un estado de miseria y atraso del que el comercio extranjero saca todas las ventajas".[21]

Para 1867, la deuda externa del estado había ascendido a 375 millones de pesos y su deuda interna a 79 millones —mientras que el ingreso público todavía no llegaba ni a los 20 millones de pesos. Las devaluaciones de la moneda y la inflación, entonces como ahora, beneficiaban a los comerciantes y a los dueños de grandes propiedades, a expensas de aquellos cuyo trabajo producía la riqueza —saqueando a los artesanos, obreros y campesinos no sólo su ingreso real sino también gran parte de sus propiedades.

Agiotistas, liberales y conservadores

Además de los préstamos externos, ¿dónde podía el gobierno mexicano obtener el capital que tanto necesitaba? El ejército, la Iglesia y los hacendados eran obvias posibilidades. Pero si se quería salvar el escaso capital, ello significaría recortar la paga de los 18 000 funcionarios y 5 000 soldados, que recibían más de la mitad del presupuesto federal, o confiscar las propiedades de la Iglesia, o imponer contribuciones a la burguesía criolla. Difícilmente tolerarían tal cosa, e incluso podía caer el gobierno.

De manera que los sucesivos gobiernos se volvieron hacia otra fuente: los agiotistas, prestamistas que surgieron como una poderosa fracción de la burguesía comercial mexicana.

Lejos de actuar como los usureros anticuados, los agiotistas constituían una naciente comunidad bancaria interesada en conseguir el control monopolístico de diversas actividades productivas. Su influencia sobre el Estado, desesperado por conseguir fondos, los ayudó a invertir en las manufacturas, el comercio, la minería y la agricultura. Las ganancias que los agiotistas hacían con sus préstamos al gobierno —el estado les pagaba la parte más sustanciosa de los derechos a la importación recaudadas en los puertos de entrada— a menudo se invertían en empresas productivas.

La estructura de la deuda estatal, así como sus fuentes de ingreso con los derechos de importación y sus políticas y prácticas comerciales, en última instancia contribuían a una acumulación original de capital por los capitalistas tanto nacionales como extranjeros. Una serie de acuerdos financieros hechos con el gobierno por empresarios nacionales y extranjeros les dieron no sólo apo-

[21] Mariano Otero, *Obras* (México, Porrúa, 1967), vol. 1, p. 178.

yo estatal sino una corriente constante de pagos con los que incrementar sus intereses económicos. Gran Bretaña, Francia y España fijaron las deudas tanto públicas como privadas mediante convenios diplomáticos —y ningún diplomático mexicano estaba libre del temor a una intervención militar extranjera si el Estado no pagaba sus deudas o garantizaba concesiones económicas alternativas. Como demostró la historiadora económica Barbara Tenenbaum, los agiotistas, a través de sus muchos tratos con los capitalistas extranjeros, en ocasiones utilizaban los convenios diplomáticos para mejorar sus propias oportunidades de recuperar sus inversiones. Otros miembros de la burguesía comercial, como los hermanos Martínez del Río, aumentaron también su capital de esta manera, transformándose con el tiempo en burguesía industrial. El capital extranjero aumentaba por el capital generado internamente por los agiotistas, quienes a su vez construían alianzas con los capitalistas extranjeros.[22]

Aunque los agiotistas más afortunados diversificaban sus inversiones en los textiles y otras industrias domésticas, la manufactura interna de muchos productos no era suficiente para abastecer a un mercado doméstico plenamente desarrollado. Por ejemplo, no se producía suficiente algodón para la industria del vestido doméstica, y por lo tanto México importaba algodón en bruto de Estados Unidos, procesándolo en México. Como las presiones de la deuda externa y el libre comercio seguían aumentando, los aranceles protectores, muy fuertes durante gran parte de las décadas de 1820 y 1830, existían solamente para los productos terminados para el decenio de 1840.

Durante los primeros años posteriores a la independencia, los agiotistas-comerciantes-terratenientes eran hegemónicos dentro de la burguesía. Junto con el sistema crediticio de la Iglesia, el capital agiotista tendía a mezclarse con el capital inmobiliario, en un proceso ascendente de despojar al campesinado. Los agiotistas compraban las haciendas arruinadas por la crisis económica de 1808-1810 o incapaces de pagar sus deudas a tiempo, y las organizaban sobre una sólida base económica. El número de haciendas se duplicó entre 1810 y 1854, perteneciendo a la Iglesia una quinta parte de las mismas. Además, los agiotistas prosperaban gracias a las guerras internas de México —y cada uno de los nuevos generales triunfantes tenía que arreglarse con ellos en primer lugar.

Para la mayor parte de las familias más ricas de México, la independencia significó la eliminación de los intermediarios comerciales rivales y los monopolistas españoles y un fortalecimiento de las relaciones comerciales con Gran Bretaña, en las que México producía y exportaba productos minerales y agrícolas a cambio de artículos manufacturados ingleses. Las luchas entre las élites por el poder político eran más entre familias que entre fracciones de clase basadas en capitales individuales, pues los monopolios familiares usualmente se extendían a todas las principales actividades económicas. En su urgencia por construir o consolidar monopolios en competencia unos con otros, las familias

[22] Barbara A. Tenenbaum, "Merchants, money, and mischief: the British in Mexico, 1821-1862", *The Americas* (enero de 1979), p. 335.

mexicanas acaudaladas sólo ocasionalmente prestaban un hincapié alterno al desarrollo económico nacional. Este hincapié en ocasiones coincidía con los conflictos político-ideológicos entre las filosofías del "liberalismo" y el "conservadurismo" (que eventualmente se convirtieron en banderas de diversas fuerzas de clase contendientes en la guerra civil de 1854-1867).

A partir de la independencia, a falta de partidos políticos, la red social de la masonería se convirtió en un espacio conveniente para el combate político. Los liberales, más fuertes en las provincias que en la ciudad de México y más comprometidos en la agricultura y la minería, propugnaban una federación al estilo de la de Estados Unidos. Ayudados por el primer embajador estadunidense en México, Joel Robert Poinsett, un notorio intervencionista en los asuntos internos de México que consideraba a los mexicanos "ignorantes y corruptos",[23] los liberales organizaron logias masónicas según el rito de York.

Vinculados a la exportación de productos minerales y agrícolas a cambio de artículos manufacturados y de lujo importados, los oligarcas liberales intentaban mantener la economía exportadora basada en el libre comercio. Medidas como los aranceles para proteger a las nacientes industrias tenían muy poco atractivo para ellos.

Siempre que conseguían el poder del Estado, los liberales atacaban a la Iglesia, a menudo por razones económicas. Por ejemplo el Juzgado, de propiedad de la Iglesia, era la principal institución bancaria de México, y puesto que normalmente garantizaba sus deudas con bienes raíces, la Iglesia ejercía considerable control sobre la tierra. Para favorecer sus propios intereses en bienes raíces, los liberales buscaron repetidamente eliminar los impuestos de la Iglesia sobre la producción agrícola. Pero los privilegios especiales, o "fueros", excusaban a los clérigos de los procedimientos normales civiles y jurídicos, lo que hacía difícil para un gobierno liberal recortar el poder de la Iglesia.

Los conservadores, por su parte, tenían estrechos vínculos con la Iglesia y eran partidarios de un gobierno central fuerte. Muchos de ellos pertenecían al rito escocés de la masonería y habían sido partidarios del gobierno español. Veían los aranceles como un modo de proteger la industria textil local, de fortalecer las manufacturas y de avanzar hacia la industrialización por la vía del control sobre las aduanas, que podrían prohibir el libre ingreso de importaciones europeas. Puesto que había frecuentes cambios de gobierno, cada uno de ellos necesitado de ingresos, el estado utilizaba los aranceles para aumentar los ingresos, aunque también servían de tiempo en tiempo para financiar algún programa de industrialización. Los líderes conservadores incluían a los terratenientes en gran escala menos interesados en la agricultura capitalista que los hacendados liberales, así como a algunos comerciantes fabulosamente ricos y a algunos de los primeros industriales.

[23] Citado en Lewis Hanke, comp., *History of Latin American civilization: sources and interpretations* (Boston, Little, Brown, 1967), p. 25. Todavía en 1981, la masonería mexicana seguía afirmando contar con 1.7 millones de miembros, veintiséis de treinta y un gobernadores estatales, y ocho miembros del gabinete.

Igual que los liberales, los conservadores querían reactivar las minas —pero usualmente con el fin de desarrollar el mercado doméstico. A veces encontraban apoyo entre los comerciantes de nivel medio del interior que estaban integrados en el mercado interno y deseaban invertir sus excedentes en la producción de manufacturas, la minería o la agricultura comercial.

En la práctica, las diferencias liberal-conservadoras entre las élites en temas de política económica eran menores, hasta tal punto estaban entretejidos sus intereses económicos. Tanto liberales como conservadores en la burguesía se enriquecían gracias al estado, cambiaban de lado en momentos de cambio político en el nivel estatal, y utilizaban al estado para controlar o reprimir las revueltas campesinas, las huelgas u otras formas de protesta laboral. En términos de desarrollo industrial, tanto el liberal Esteban de Antuñano como el conservador Lucas Alamán trataron de impulsar una industria textil moderna.

Gran parte de la lucha liberal-conservadora por el poder del estado reflejaba intereses competitivos dentro de las clases o grupos distintos al de la burguesía. Por ejemplo, algunas de las clases intermedias urbanas (profesionales, burócratas e intelectuales liberales) se oponían a los militares y al clero. El cuerpo de oficiales estaba dividido entre liberales y conservadores, pero unidos en su determinación de mantener sus fueros. Los militares conservaban el poder de las armas, así como sus nuevos intereses comerciales. Junto con los agiotistas, eran un potente árbitro en los asuntos internos nacionales. Los terratenientes que sobrevivieron al hundimiento de los créditos a menudo establecieron alianzas con el ejército y la Iglesia con objeto de controlar la inquietud campesina y asegurar fuentes de crédito. Gran parte del capital minero mexicano iba hacia la propiedad inmobiliaria, igual que lo hacía parte del capital comercial. Otros terratenientes se alinearon con los liberales en su anticlericalismo, previendo el día cuando las propiedades de la Iglesia serían confiscadas y (presumiblemente) pasarían a formar parte de las suyas.

Manuel Escandón y otros agiotistas colocaron a Alamán como cabeza del Directorio General de la Industria en 1842, en parte para vigilar el desarrollo del mercado doméstico. Los decretos del Estado favorecían la industria doméstica, junto con avances educativos y tecnológicos en agricultura. Los industriales se organizaron en asambleas de fabricantes, a las que se concedió poder de veto en la Constitución de 1843 en cuestiones de aranceles. La correspondencia diplomática británica revela que los extranjeros poseedores de bonos desaprobaban estos planes de industrialización y presionaban para la continuación del viejo patrón de exportación de productos agrícolas y minerales y la importación de bienes manufacturados. En gran medida sus presiones tenían éxito. Al final, la tarea de Alamán consistió en beneficiar al comercio más que a las manufacturas domésticas, recopilando estadísticas y proyectando nuevas oportunidades de mercado con el fin de expandir el comercio interno y externo de México.

El estado, en vez de industrializar a México, seguía ayudando a que los agiotistas y grupos de intereses relacionados encontraran los mejores mercados, se mantuvieran unidos en cuestiones financieras y similares, y acumularan con-

tratos federales adicionales para transportes y otros proyectos de construcciones públicas. El estado aplazaba el pago de sus deudas a sus acreedores extranjeros, a quienes los agiotistas también servían. Seguía siendo un estado inestable, debilitado por las discusiones entre políticos contendientes liberales y conservadores, la competencia entre los caudillos regionales, la insurrección desde abajo y las invasiones extranjeras.

Invasiones, revueltas y guerra

Cada vez que las rebeliones populares interrumpían el flujo de dividendos, se producían intervenciones militares. Entre 1823 y 1861, México sufrió un promedio de una invasión cada seis años. En 1829, los españoles ocuparon brevemente Tampico. En 1838, durante la llamada Guerra de los Pasteles, los franceses invadieron Veracruz, abandonándolo sólo cuando México garantizó el pago de una deuda de 600 000 pesos.

Estados Unidos fue el más afortunado de los agresores. Habiendo ganado su independencia casi medio siglo antes que México, la república norteña llevaba largo tiempo codiciando las tierras latinoamericanas. En 1823, el presidente James Monroe proclamó la Doctrina Monroe, advirtiendo inútilmente a las potencias europeas que se mantuvieran fuera de América. El embajador Poinsett fue instruido para que explorara la posibilidad de incorporar a Estados Unidos el noreste de México (actualmente Tejas).

Para 1820, miles de pobladores estadunidenses que huían de la depresión económica de 1819 se habían mudado junto con sus esclavos al noreste de México. Los presidentes John Quincy Adams y Andrew Jackson ofrecieron a México millones de dólares para comprar ese territorio. Los mexicanos no estaban interesados en la oferta, y por el contrario abolieron la esclavitud en 1829 y prohibieron que siguiera la inmigración a lo que hoy es Tejas. México ofrecía protección a los esclavos huidos. Los estadunidenses blancos asentados en "Texas", que superaban a los mexicanos por seis a uno, consideraban a los mexicanos como partidarios de los negros y por lo tanto "inferiores".

En 1835-1836, los pobladores (y unos cuantos de sus amigos mexicanos "inferiores") iniciaron una lucha sangrienta para la secesión de los asentamientos de Tejas de México. Por último derrotaron y capturaron al general mexicano Santa Anna, quien firmó la entrega del territorio, realizándose así la formación de la República de la Estrella Solitaria con Sam Houston como su presidente. Houston declaró: "La raza anglosajona debe extenderse por toda la extremidad meridional de este vasto continente [...] Los mexicanos no son mejores que los indios y no veo razones por las que no debamos [...] tomar sus tierras."[24] En 1845 Estados Unidos se anexó la República como estado de Te-

[24] Citado en Gilberto López y Rivas, *The Chicanos* (Nueva York, Monthly Review Press, 1973), p. 17.

jas. A principios de 1846 el ejército estadunidense ayudó a tomar California y proclamó la República de la Bandera del Oso. Los mexicanos arrojados de sus hogares armaron una revuelta en Los Ángeles y liberaron "su" ciudad en el otoño de 1846, sólo para volverla a perder pocos meses más tarde.

No es sorprendente que los mexicanos sintieran que se había declarado una guerra contra ellos. Cuando una patrulla de Estados Unidos y otra de México tuvieron un enfrentamiento en abril de 1846, el presidente James K. Polk, el cual, como el presidente Andrew Jackson antes que él, había estado buscando una excusa para apoderarse no sólo de California y Tejas sino también de otras partes del norte de México, declaró que sangre estadunidense había sido vertida en suelo de Estados Unidos. El congresista Abraham Lincoln pidió a Polk que indicase exactamente dónde había ocurrido esto, pero sin resultado. En realidad el combate había tenido lugar muy dentro del territorio de México, cerca del río Bravo, unos 250 kilómetros al sur de la frontera entre Tejas y México (el río Nueces). Polk utilizó el incidente como pretexto para declarar la guerra e invadir México.

La doctrina racista del Destino Manifiesto acababa de ponerse de moda. Ésta proclamaba que era el "destino" de los Estados Unidos ocupar todo el continente norteamericano. Para 1847, el *Congressional Globe* informaba que la toma de México era "el destino de la raza blanca [...] el destino de la raza anglosajona".[25] Se enardeció el fervor patriótico y muy pronto Estados Unidos contó con 70 000 tropas y milicias voluntarias en México, superando en número de efectivos y en potencia armamentística a los mexicanos.

Frente a la embestida "yanqui", las élites de México se mostraron poco más valerosas que Santa Anna anteriormente. Con sus representantes políticos, se preocuparon por impedir que la resistencia popular se saliera de su control delegando toda la autoridad militar en el ejército regular, al que sí podían controlar. Ellos ya tenían sus manos llenas intentando aplastar una rebelión popular de 300 000 mayas en Yucatán y una serie de levantamientos contra su dominio de clase por campesinos, obreros y desempleados en las regiones centrales. Una masiva rebelión campesina en Oaxaca, Guerrero y Michoacán entre 1842 y 1844, seguida por otra encabezada por Luciano Velázquez en la región de la Huasteca de Veracruz entre 1845 y 1849, había generado entre las masas mexicanas nuevos levantamientos para asaltar las haciendas y devolver "la tierra a quien la trabaja". Movimientos agrarios que iban desde el bandidaje social y el anarco-comunalismo hasta el milenarismo católico e indio se extendían por todo México.

[25] El *New York Herald*, a favor de la guerra, añadía: "es parte de nuestro destino civilizar ese hermoso país". Citado en James D. Cockcroft y Hedda Garza, *Amazing lost stories of our multicultural history* (Danbury, Franklin Watts, 1999), cap. 1, "Heroes or traitors?" Hay que recordar que durante las décadas anteriores a la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, éste ya había venido proclamando esta racista misión "civilizadora", mientras exterminaban a los americanos nativos y los expulsaban violentamente a las regiones al oeste del río Misisipí.

Los campesinos dirigían su cólera no sólo contra los terratenientes, comerciantes e industriales, sino también contra la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, replicando al obispo de Yucatán, que les había pedido que depusieran sus armas, un grupo de capitanes indios que dirigían la revuelta maya escribieron (por mano de un amanuense) en 1848:

> Sólo tenemos esto que deciros a ti y a los venerables y santos sacerdotes. ¿Por qué no recordaron o se dieron cuenta cuando el gobernador empezó a matarnos? ¿Por qué no os levantasteis o mostrasteis interés por nosotros cuando los blancos nos estaban asesinando de tal manera? ¿Por qué no lo hicisteis cuando cierto padre Herrera hizo cuanto quiso con los pobres indios? Este sacerdote puso su silla sobre un pobre indio, lo montó y empezó a herir su vientre a latigazos. ¿Por qué no os importó cuando sucedió esto? ¿Y ahora os acordáis, ahora sabéis que hay un Dios verdadero? [...] Si las casas y las haciendas de los blancos están ardiendo, es porque antes ellos quemaron la ciudad de Tepich y todas las chozas donde vivían los pobres indios, y los blancos se comieron todo su ganado.[26]

Esperando contener estas rebeliones campesinas, muchas familias prominentes colaboraban con los invasores estadunidenses, acelerando así la derrota de un cuerpo de oficiales mexicanos poco deseoso de combatir y de miles de campesinos y trabajadores alzados que genuinamente defendían el honor de la nación.

Entre tanto, ciudadanos de Estados Unidos iniciaron un movimiento pacifista. El senador Daniel Webster denunció la guerra contra México como "anticonstitucional". El prominente líder afroamericano del movimiento abolicionista de la esclavitud Fredrick Douglass la llamó "una guerra desafortunada y cruel" que estaba convirtiendo a México en "una víctima del amor al poder de los anglosajones..." El famoso escritor y naturalista Henry David Thoreau se negó a pagar impuestos para la guerra. Encarcelado, recibió la visita de su también famoso amigo, el escritor Ralph Waldo Emerson.

"—Henry David —preguntó Ralph—, ¿qué estás haciendo aquí?

"—Ralph Waldo —replicó Thoreau—, ¿qué estás haciendo tú ahí fuera?"

El futuro presidente de Estados Unidos Ulysses S. Grant, teniente del ejército, describió "una enormidad de homicidios" y otras atrocidades cometidas por las tropas estadunidenses, señalando "cuánto parecen disfrutar ellos [los tejanos] de los actos de violencia". Concluía Grant: "No tenemos ningún derecho moral a invadir México [...] Yo me opongo enérgicamente a esta guerra, una de las más injustas jamás peleadas por una nación más fuerte contra otra más débil." Más tarde, Grant escribió, "Yo estaba horrorizado por la guerra contra México [...] sólo que no tuve el suficiente valor moral para dimitir."

El general Zachary Taylor, que encabezó la invasión inicial, informó de "atrocidades vergonzosas" de los *rangers* de Texas, que dejaron las calles de Monte-

[26] El texto completo de esta carta, fechada el 19 de febrero de 1848, se reproduce en González Navarro, *Raza y tierra*, pp. 309-10.

rrey, en palabras de uno de los oficiales, "resbalosas de [...] espuma y sangre". El general Winfield Scott, que comandó la toma de la ciudad de México, reconoció que "homicidios, robos y violaciones de madres e hijas en presencia de los hombres atados de sus familias han sido actos comunes". Un soldado escribió un libro llamado *Mis confesiones* que describía escenas como su entrada en una cueva en la que voluntarios estadunidenses estaban muy ocupados arrancando el cuero cabelludo y destazando a mujeres y niños mexicanos.[27]

El sexto presidente de Estados Unidos, el senador John Quincy Adams, juzgó la anexión de Texas como un acto desvergonzado de agresión para expandir la sureña "esclavocracia". Urgió públicamente a los oficiales del ejército a dimitir y a los soldados a desertar. Unos 5 331 hombres alistados, el 13% del ejército regular, desertaron, lo que también hicieron varios miles más de reclutas. Fue la tasa de deserción más alta en la historia de Estados Unidos —más del doble de la tasa de deserción de la igualmente impopular e injusta guerra de Vietnam más de un siglo después. También se produjeron motines, pero los oficiales no castigaban a los amotinados por temor a que las deserciones aumentases aún más.

Muchos inmigrantes recientes, irlandeses católicos, que habían huido del hambre de la papa y del colonialismo inglés sólo para ser enrolados en el ejército de Estados Unidos iniciaron las deserciones decidiendo formar el "Batallón de San Patricio" y luchar al lado de sus "hermanos" mexicanos católicos, víctimas similares de una potencia superior. Se les unieron por lo menos cuatro esclavos en su campamento y, más tarde, más de otros mil conscriptos. Una quinta parte de los *San Patricios,* como afectuosamente los llamaban los mexicanos, eran ciudadanos nativos de Estados Unidos. El resto eran inmigrantes europeos (la mitad de ellos irlandeses).

El general Zachary Taylor escribió que estaba asustado de "ver cómo nuestras filas disminuyen cada día". Trató de imponer disciplina mediante la tortura, lo que inspiró la canción más frecuentemente cantada por los soldados durante la guerra:

> *Sergeant, buck him and gag him, our officers cry,*
> *For each trifling offense which they happen to spy,*
> *Till with bucking and gagging of Dick, Pat and Bill,*
> *Faith, the Mexican's ranks they have helped to fill.*[28]

[27] Para todas las citas y descripciones de incidentes, véase Rodolfo Acuña, *Occupied America: a history of chicanos* (Nueva York, Harper Collins, 1988), pp. 13-16; James D. Cockcroft, *Latin America: history, politics, and U.S. policy* (Chicago, Nelson-Hall Publishers, 1996), p. 89; Cockcroft y Garza, *Amazing lost stories,* cap. 1; Hedda Garza, *Latinas: Hispanic women in the United States* (Danbury, Franklin Watts, 1994), pp. 23-24; Carey McWilliams, *Al norte de México* (México, Siglo XXI, 1968), p.102.

[28] Robert Ryal Miller, *Shamrock and sword: the Saint Patrick's battalion in the U.S.-Mexican war* (Norman, University of Oklahoma Press, 1989), p. 31 (cita de Taylor), y pp. 155-56 (cita de la canción). Para más sobre el batallón de San Patricio, véase Cockcroft y Garza, *Amazing lost stories,*

(¡Sargento! Átalo y amordázalo, gritan nuestros oficiales
a cada minúscula falta que casualmente descubren,
porque atando y amordazando a Dick, Pat y Bill
es como ayudan a llenar las filas de los mexicanos.)

La ciudad de México fue tomada el 14 de septiembre de 1847. El general Santa Anna escapó, pero unos jóvenes cadetes (los Niños Héroes), defendieron el Castillo de Chapultepec, y al verse perdidos se envolvieron en banderas de México y se arrojaron murallas abajo gritando "¡Viva México!" Los escolares todavía recitan sus nombres. La mayor parte de los miembros del batallón de San Patricio perecieron en las primeras batallas o fueron capturados durante el ataque a la ciudad de México y llevados ante un pelotón de fusilamiento, a pesar de los ruegos de los mexicanos para que fueran perdonados. Cada año se celebran ceremonias en su honor en Irlanda y en la ciudad de México en la Plaza de San Jacinto, en donde hay una placa de mármol con sus nombres. Muchos irlandeses-norteamericanos de San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos portan la bandera del batallón de San Patricio en los desfiles anuales del Día de San Patricio, usualmente como forma de animar a la defensa de los derechos de los inmigrantes.

La guerra de Estados Unidos contra México se prolongó hasta la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, mediante el que Estados Unidos obtenía cerca de la mitad del territorio de México. El jefe del equipo negociador estadunidense, Nicholas Trist, recordaba que en el momento de firmar el tratado él "sintió vergüenza como americano [...] Fue algo de lo que cualquier americano honrado debe avergonzarse."[29] Las élites mexicanas dieron la bienvenida a los 15 millones de dólares de indemnización concedidos a México por los términos del tratado, esperando que ayudarían a llenar las vacías arcas del tesoro y cooperar a restablecer una apariencia de orden social. Utilizaron ese dinero para acabar con lo más fuerte de la rebelión maya.

Enseguida brotaron revueltas agrarias por todas partes. En 1849 Eleuterio Quirós encabezó a unos mil campesinos para la toma de Río Verde, San Luis Potosí, una revuelta que rápidamente se extendió hasta Guanajuato y Querétaro y abarcó la Sierra Gorda. El representante liberal José María Luis Mora llamó a la total supresión de todas las revueltas indígenas que sacudían la nación.

En 1854, Estados Unidos pagó a México 10 millones de pesos en la compra Gadsden [Tratado de la Mesilla] de más territorio (ahora parte del sur de Arizona). El gobierno mexicano estaba encabezado una vez más por Santa Anna, que había demostrado ser un genio para adaptarse a las nuevas situaciones po-

y el video documental de Mark Day, *The San Patricios* (Day Communications). Sobre la guerra entre México y Estados Unidos e importantes antecedentes en Texas y California, véase Acuña, *Occupied America*, y Garza, *Latinas*, pp. 22-27.

[29] Citado en *New York Times*, 6 de mayo de 1997. Para más detalles sobre los orígenes del tratado y su impacto histórico en el presente, véase Richard Griswold del Castillo, *The Treaty of Guadalupe Hidalgo: a legacy of conflict* (Norman, University of Oklahoma Press, 1990).

líticas. Comportándose para entonces como monarca absoluto en todo menos en el nombre, el presidente Santa Anna utilizó los fondos del tratado de Gadsden para reprimir las revueltas campesinas y financiar su propia magnificencia.

Con sus conquistas en México, Estados Unidos obtuvo ricos territorios que muy pronto serían el escenario de la fabulosa carrera del oro de California. Por otra parte, México perdió cerca de 50 000 vidas. Además, otros 100 000 mexicanos residentes en los territorios conquistados pasaron a ser fuerza de trabajo para el capital estadunidense.

Los propietarios de ferrocarriles y minas, industriales, rancheros, agricultores y grandes terratenientes empezaron inmediatamente a violar las cláusulas del Tratado de Guadalupe Hidalgo que garantizaban los derechos de propiedad y civiles de aquellos mexicanos que habían permanecido en lo que es actualmente el suroeste de Estados Unidos. En las décadas siguientes, los ciudadanos estadunidenses de ascendencia mexicana, perdieron unos 10 millones de hectáreas. La cláusula del tratado que garantizaba el respeto a la cultura y lengua de los mexicanos (una base legal frecuentemente olvidada por los experimentos de educación bilingüe en el siglo xx) fue sistemáticamente violada. Los blancos pobres eran igualmente despojados o explotados, aunque no sometidos a los extendidos linchamientos sufridos por mexicanos e indios.[30]

La guerra civil y la Constitución de 1857

La resistencia más popular en México contra las repetidas invasiones extranjeras fue la conducida con tácticas de guerrilla por parte de ejércitos regionales. Muchos radicales y liberales de las clases medias reafirmaron su voz en asuntos nacionales, y en algunos casos encabezando los levantamientos populares. Muchos de estos mismos líderes fueron al exilio cuando los conservadores periódicamente conseguían poderes dictatoriales en las décadas de 1840 y 1850. Cuando regresaban llevaban con ellos las ideas de Fourier, Proudhon, Owen, Saint-Simon y Marx, con lo que impregnaban la lucha de masas con términos tales como "socialismo", "anarquismo" y "fraternidad". Los exiliados europeos de las revoluciones derrotadas de 1848 también llevaron aquellas ideas a tierras mexicanas.

Hasta fines del decenio de 1840, las peleas intrafamiliares de las élites rara vez habían costado la vida de uno de los suyos. Cada intento de establecer hegemonía en las disputas por el libre comercio y el proteccionismo, el federalismo y el centralismo, limitación de las actividades de la Iglesia y expansión de las mismas, había recurrido a los ejércitos de los pobres, mientras que los líderes de las élites negociaban compromisos o incluso cambiaban de lado según el equilibrio de fuerzas y la disponibilidad de oportunidades para su propio engrandecimiento financiero.

[30] Véase Acuña, *Occupied America*, y Griswold del Castillo, *The Treaty*.

Después de la invasión estadunidense, sin embargo, las cuestiones políticas y sociales se definieron de forma mucho más clara. Las clases más bajas aumentaron sus exigencias de justicia económica y sus rebeliones se extendieron a medida que experimentaban el poder de la guerra de guerrillas. Muchos líderes pequeñoburgueses y hacendados comerciales aumentaron sus demandas para confiscar las riquezas de la Iglesia. Las ideas procapitalistas y anticapitalistas llenaban el aire.

Gran parte de la burguesía reconocía la necesidad de consolidar una república constitucional, con un poder ejecutivo lo suficientemente fuerte como para incrementar sus intereses económicos y apaciguar o contener la creciente inquietud de las capas inferiores. Algunas de las élites se agrupaban detrás de un líder popular llamado Benito Juárez, un abogado autodidacta originario de la etnia zapoteca.

Huérfano desde los tres años, Juárez fue educado por un tío campesino que acostumbraba pegarle. A los doce años, escapó de la crueldad del tío y entró a servir como criado en la "gran ciudad" de Oaxaca. Más adelante estudió en el seminario católico. Rechazando la oportunidad de hacerse sacerdote por la forma como él había visto que la Iglesia maltrataba a los indios, Juárez prefirió estudiar física y leyes en el nuevo instituto "liberal" de Oaxaca. Para pagar sus estudios, atendía como mesero a otros estudiantes más ricos. Sirvió como teniente en la milicia oaxaqueña. A la edad de veintisiete años, fue elegido para el Congreso de su estado. Se recibió de abogado y defendió a los indios más pobres. Luego obtuvo el nombramiento de juez, se casó con Margarita Maza, la hija rubia y de ojos azules de una rica familia de inmigrantes italianos, y fue elegido gobernador de Oaxaca (1847 a 1852). A ojos de las élites, Juárez se había vuelto más o menos aceptable. Parecía inteligente y digno de confianza. Profundamente religioso, creía en Dios y en la decencia humana. Como gobernador, se comportó de forma honesta y responsable. Construyó muchas escuelas y animó a las jóvenes a asistir a la escuela (cosa poco frecuente en aquella época). Por otra parte, los conservadores cercanos a la Iglesia consideraban peligrosas estas ideas liberales. Pero para gran parte de la burguesía, este hombre de baja estatura y fuerte complexión tenía una presencia autoritaria que combinaba el liberalismo con la religiosidad, la popularidad con una reserva social honorable, en una palabra: "equilibrio".[31]

Para 1854, Santa Anna y sus aliados clericales y militares habían establecido un régimen represivo que encarcelaba, ejecutaba o exiliaba a sus oponentes de forma masiva. El mismo Juárez fue arrestado y enviado a los húmedos y oscuros calabozos de la prisión militar de la isla fortaleza de San Juan de Ulúa. Acciones como ésta tenían el efecto de unificar a las facciones liberales en pugna, conocidas como "puristas" y "moderados". Los puristas obtenían su apoyo principal de la pequeña burguesía urbana, de los rancheros y de algún hacenda-

[31] Para información sobre Juárez y su época, véase D. Ross Gandy, *Benito Juárez: the making of modern Mexico* (Springfield, Enslow Publishers, 1998).

do ocasional como el apasionado ideólogo anticlerical Melchor Ocampo. Junto con los artesanos, intelectuales y abogados liberales declaradamente urbanos o asentados en las ciudades, eran partidarios de las pequeñas o medianas propiedades agrícolas como alternativa al sistema "ineficaz" de las inmensas propiedades rurales que esclavizaban a los campesinos como peones endeudados. Los artesanos, que enfrentaban una creciente proletarización, abogaban también por el anticlericalismo y por la ideología de las pequeñas empresas familiares. Los puristas eran dirigidos por hombres como Juárez, Ocampo y Ponciano Arriaga.

Los liberales moderados, por otra parte, recibían apoyo de la burguesía comercial, de algunos grandes industriales, de la mayor parte de los hacendados, y de muchos ex ministros y funcionarios gubernamentales purgados por la dictadura conservadora. Los moderados eran encabezados por hombres como Ignacio Comonfort y los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada.

En 1854, después de varios meses de encarcelamiento, Juárez se reunió con Ocampo y Arriaga en su exilio de Nueva Orleáns, Luisiana, en donde se ganó la vida enrollando cigarros. Margarita Maza de Juárez se quedó en su tierra atendiendo a sus numerosos hijos, vendiendo todo lo que poseía y tejiendo para ganarse el sustento.

Los líderes liberales exiliados decidieron apoyar la rebelión antigubernamental en Guerrero, dirigida por el viejo guerrillero ya enriquecido para entonces, Juan Álvarez. Le enviaron una declaración de principios, muchos de los cuales fueron incorporados en el "Plan de Ayutla" de Álvarez. Juárez embarcó rumbo al puerto de Acapulco, en la costa de Guerrero, y se unió al ejército de Álvarez, que marchaba contra la ciudad de México. Santa Anna no fue capaz de frenar la expansión de esta revuelta y, cuando escuchó que los campesinos del norte y el oeste se estaban sumando a la rebelión, prefirió huir al exilio.

A mediados de 1855 el ejército de Álvarez entró triunfalmente en la capital de la nación. Los liberales instalaron a Comonfort como presidente e introdujeron lo que se conoce como la Reforma Liberal. La administración moderada de Comonfort fue muy pronto desafiada por los enfurecidos conservadores que, inquietos por sus decretos legales que afectaban a sus intereses ventajosos, proclamaron un gobierno alternativo respaldado por segmentos del ejército. Para 1857 la guerra civil se extendía por todo México.

El problema para el gobierno de Comonfort era una vez más el de las arcas vacías. Por ello promulgó en 1855 la Ley Juárez, aboliendo los fueros clericales y militares, y en 1856 la Ley Lerdo, prohibiendo que cualquier "corporación" pudiera poseer propiedades. Tanto la Ley Juárez como la Ley Lerdo se transformaron luego en los Artículos 26 y 27 de la Constitución de 1857. Las "propiedades corporativas" incluían no sólo las tierras de la Iglesia, sino también los ejidos campesinos. Bajo la protección de la nueva Constitución, los hacendados partidarios de los moderados —así como los burócratas liberales, ambiciosos comerciantes y prestamistas, algunos rancheros y especuladores de tierras diversos— estaban legalmente capacitados para comprar o confiscar enormes cantidades de tierras comunales indígenas. Se garantizó a los trabajadores el

derecho constitucional a "asociarse", pero los gremios artesanales fueron definidos como de "propiedad corporativa".

Para asegurarse de que ciertos fondos entrasen al tesoro inmediatamente, el gobierno de Comonfort prometió que se pagarían a la Iglesia las tierras confiscadas, recibiendo el gobierno parte del precio de la transferencia y un impuesto de venta del 5%. Esta estrategia recaudó algún dinero a corto plazo, pero sólo pospuso el intento de capturar el premio financiero más atractivo (distinto a las tierras indígenas) prometido por la reforma liberal: las legendarias riquezas de la Iglesia.

Para el momento en que los liberales finalmente unificaron sus diversos decretos de desamortización en 1859, gran parte de las riquezas de la Iglesia se habían disipado, habían huido o resultaron exageradas desde el principio. Tanto los gobiernos y ejércitos conservadores como los liberales habían utilizado aquellas riquezas para pagar los gastos de la guerra civil desde 1857 hasta 1859. Parte de ellas habían sido rescatadas por agentes de la Iglesia mediante subterfugios; algunas fueron hurtadas y consumidas por las fuerzas liberales, y otras fueron convertidas por los especuladores en papel —conduciendo a la rápida depreciación del valor del peso. Finalmente, los intereses extranjeros obtuvieron parte de la riqueza de la Iglesia mediante complicadas negociaciones de empréstitos firmadas con gobiernos anteriores.

De los 16 millones de pesos de las propiedades nacionalizadas vendidas en la ciudad de México en 1861 para ayudar a financiar al recién elegido gobierno de Juárez, sólo un millón fue recibido, yendo el resto para pagar créditos, pagarés y bonos. Para administrar un gobierno o hacer concesiones ocasionales al campesinado o a los obreros, se necesitaba más dinero. Juárez suspendió los pagos de la deuda externa durante dos años y ordenó la confiscación de todas las restantes riquezas de la Iglesia.

"La guerra del pueblo"

Los conservadores escenificaron un potente retorno gracias a la ayuda que les dio la intervención militar europea. En 1861, con Estados Unidos empantanado en su propia guerra civil, Gran Bretaña, Francia y España firmaron un acuerdo tripartito mediante el cual se repartían México. Las tropas españolas desembarcaron en Veracruz ese mismo año, pero no se quedaron largo tiempo. Los franceses tomaron a su cargo la operación militar, invadiendo la ciudad de México en 1862 y ocupándola hasta 1867 para proteger al más famoso "emperador" desde Iturbide, el archiduque Maximiliano de Austria.

En una carta de uno de sus generales, Napoleón III revelaba los motivos de Francia detrás de esta empresa audaz, pero arriesgada: "Si se establece un gobierno estable allí con ayuda de Francia [...] habremos establecido nuestra benéfica influencia en el centro de América, y esa influencia, creando vías inmediatas para nuestro comercio, procurará para nosotros las materias primas indispen-

sables para nuestra industria."[32] Francia ya se había apoderado de Argelia en el norte de África y en Asia había invadido Vietnam. Era de suponerse que México abriría las puertas a un imperio francés en América Latina.

Para derrotar a los conservadores y a los franceses, los liberales mexicanos tenían que conseguir el apoyo de las masas hambrientas. Respondiendo tanto a las demandas campesinas como a los precios ascendentes de las exportaciones agrícolas y de las tierras, los liberales establecieron una reforma agraria. Como en la confiscación de las riquezas de la Iglesia, la reforma sólo sirvió para acelerar los mismos procesos económicos que en primer lugar habían estimulado. La alcabala del 5%, o impuesto al comercio, hacía imposible para la mayor parte de los campesinos competir con los grandes terratenientes que se aprovechaban de ellos para romper legalmente la "propiedad corporativa".

El monopolio de la tierra fue incrementado por los decretos de "tierras baldías" promulgados por Juárez en 1863 con objeto de recaudar fondos para enfrentar a los invasores franceses. En cuatro años, unos dos millones de hectáreas de tierras de primera calidad, la mayor parte pertenecientes a indígenas que no poseían títulos legales, pasaban a manos de latifundistas a razón de unos 6 centavos por hectárea. Leyes similares de tierras baldías en 1883 y 1894 agravaron este proceso. Los terratenientes criollos (y algunos mestizos) pudieron conseguir así lo que ni siquiera las élites coloniales habían sido capaces de hacer: ¡apoderarse de la inmensa mayoría de las tierras indias!

Ocasionalmente, alguna purista voz liberal se elevaba contra la trampa de la legislación de la reforma agraria y su motivación capitalista subyacente. Por ejemplo, Arriaga dijo proféticamente a los delegados ante la convención constitucional de 1856-1857 que el Artículo 27 inevitablemente produciría un "capitalismo monopolista". Su propuesta de acabar con los latifundios fue unánimemente rechazada por los delegados, cuyas voces reflejaban los intereses de clase que representaban. Arriaga percibió correctamente que bajo el Artículo 27, "los ciudadanos trabajadores están condenados a ser simples instrumentos pasivos de la producción para el beneficio exclusivo del capitalista".[33]

Ideológicamente, los liberales enarbolaban la bandera del antifeudalismo para combatir tales voces de razón, pero otros mexicanos, incluyendo a muchos de los delegados constitucionales, habían reconocido mucho tiempo antes que México nunca había sido feudal. Como afirmó Mariano Otero en 1842:

[32] Citado en Alonso Aguilar, *Dialéctica de la economía mexicana* (México, Nuestro Tiempo, 1968), p. 188.

[33] Arriaga, *Voto particular*. En realidad, el quebranto de las tierras comunales comenzó formalmente a partir de la independencia de México, y alcanzó su clímax con la reforma liberal. También, en ocasiones una crisis económica hizo que los campesinos quisieran dividir un ejido y trabajar o vender sus parcelas privadas, como sucedió en 1896 en la comunidad totonaca de Veracruz después de una caída de los precios de la vainilla y algunas rebeliones fracasadas. Véase Roger Bartra, *Estructuras agrarias y clases sociales* (México, Era, 1976); Emilio Kouri, "The business of the land: agrarian tenure and enterprise in Papantla, México, 1800-1910", tesis de doctorado, Harvard, 1996.

> Cuando se nos ha dicho muy seriamente que tenemos una aristocracia, cuando hemos sido exhortados a ponerla al día y cuando se nos ha hablado de la nobleza europea y del clero feudal, nadie sabía de lo que estaba hablando; las palabras han sido lamentablemente tomadas por cosas, y un error de lenguaje ha conducido a otro en política [...] la aristocracia mexicana no era en absoluto similar a la europea: fue [...] una parodia [...] y los individuos que la componían [...] vivían indolentemente del capital, disfrutando sus ganancias.[34]

De hecho, los liberales tenían un credo que iba más allá de su santurrón antifeudalismo e incorporaba los mismos ingredientes de sus propios intereses de clase: fuerza de trabajo asalariada, inmigración extranjera, tierras libres no-corporativas, propiedad privada, industria privada, libertad de religión, educación secular libre y libre comercio e inversión (lo que aumentaba la inclinación de la burguesía hacia el capital extranjero). También aquí Arriaga manifestó una advertencia realista:

> Al decretar la libertad de comercio, industria y otras franquicias, se hacen grandes concesiones a los extranjeros, reflejando escasamente la imposibilidad de que nuestra industria y nuestras artesanías compitan con los extranjeros, dados los tres siglos de atraso, monopolio y servidumbre que pesan sobre el pueblo de México.[35]

El disfraz de la nueva agresión a las tierras indias con la retórica liberal de reforma agraria y de "granjas familiares" sugiere la extensión en que la lucha de clases campesina contra el latifundismo se había convertido en una amenaza seria para las élites terratenientes de México. Los movimientos de "la tierra para quien la trabaja" se habían propagado. Además, sacerdotes radicales, antiguos oficiales del ejército y agitadores izquierdistas habían infiltrado las filas de las rebeliones campesinas prestándoles cierto grado de coherencia ideológica, muchas ideas radicales y ocasional liderazgo.

Sin embargo, durante los años de guerra civil, los campesinos, como otras clases sociales, estaban lejos de haberse unificado, y muchos menos de haberse aliado en forma organizada con otros grupos. Sólo rara vez conseguían ganar victorias electorales, por ejemplo, la legislatura estatal de Querétaro promulgó una ley de salario mínimo para los jornaleros rurales, y la legislatura de San Luis Potosí confiscó unas cuantas haciendas, entregándolas a los campesinos.

Un inmenso subproletariado urbano de vendedores callejeros, mendigos, emigrantes, vagabundos, semiempleados y desempleados —coloquialmente llamados por las élites "los léperos"— constituían, junto con los trabajadores rurales temporeros, la mayoría de la fuerza laboral. Eran reclutados tanto por los liberales como por los conservadores para combatir en la guerra civil. Muchos, como los campesinos, estaban económica y espiritualmente ligados a la

[34] Otero, *Obras*, p. 162.
[35] Arriaga, *Voto particular*

Iglesia, la que tenía un elaborado sistema para absorber gran parte de sus mezquinos salarios y distribuir luego caridades.

Algunos subproletarios se convirtieron en asaltantes de caminos, que hacían lucrativos negocios durante los años de guerra civil, aumentando la falta de estabilidad que el desarrollo capitalista necesitaba. A menudo protegían a los humildes muleros y artesanos, al tiempo que dirigían sus golpes contra los extranjeros y los ricos.

Doblemente desafiadas por su propia guerra civil y por la turbulencia social de las clases bajas, las élites de México estaban más que ansiosas por buscar apoyo económico y militar en el extranjero. Los oligarcas conservadores desempeñaron un papel clave en invitar y apoyar la ocupación del ejército francés de 1862-1867. Un antiguo comandante esclavista de la Confederación, el general John B. Magruder, prestó sus servicios a los franceses. En 1858, Juárez ofreció ceder tierras a Estados Unidos para la posible construcción de un canal que facilitaría el comercio interoceánico a través de Tehuantepec y Baja California (Tratado McLane-Ocampo), a cambio del reconocimiento de su gobierno. Luego, entre 1865-1866, el ejército de Juárez reclutó a unos 3 000 veteranos de la guerra civil norteamericana mediante ofertas de buenas pagas y bonos sobre tierras para su lucha contra los franceses.

Así como las élites nacionales aprendieron muy bien la lección colonial de que gobernar es igual a saquear, también su adopción de la ayuda y hábitos extranjeros formó parte de su herencia colonial. Ya desde los días de los Borbones, y más aún durante la ocupación francesa, muchos miembros de las clases altas eran conocidos como "los afrancesados", debido a su adopción de las costumbres francesas y sus actitudes pretenciosas. Estas costumbres se reforzaron durante un breve periodo.

La ocupación francesa señaló el primer experimento moderno en la historia de lo que las potencias imperialistas emergentes desarrollarían más adelante como un arte notable: "la guerra contrainsurgente". Una tropa de élite de soldados franceses fue entrenada y equipada para acabar con la guerra de guerrillas de la resistencia mexicana conducida por campesinos y obreros. La estrategia francesa incluía todas las técnicas terroristas de la moderna contrainsurgencia combinadas con un recurso político al pueblo mediante una seudorreforma agraria, proclamas democráticas y cambios culturales en la educación y la ciencia. Las tropas francesas quemaron aldeas enteras y llevaron a hombres, mujeres y niños ante pelotones de fusilamiento. Como expresó un oficial francés en estos versos:

> *Llegamos, matamos, despojamos, pasamos y sin pestañear*
> *dejamos tras de nosotros una tierra quemada y apestosa*
> *y las cosas que hacemos a sangre y fuego*
> *han de ser gloriosas, o serán nuestra vergüenza.*[36]

[36] Gandy, *Benito Juárez*, extraído de Ralph Roeder, *Juárez and his Mexico: a biographical history* (Nueva York, Viking, 1947), p. 572.

El colmo de la ironía para los conservadores de México fue que los franceses, practicando la contrainsurgencia, llevaban a cabo lo que equivalía al programa liberal en lo referente a educación, tierras, propiedades y libertad de prensa y comercio. Los franceses revalidaban la confiscación y venta de las propiedades de la Iglesia. Prometían la restauración de los ejidos indios —ante el horror de los hacendados. Incluso comenzaron la construcción del primer ferrocarril de la nación.

Como los liberales encabezaban el movimiento de liberación nacional antifrancés, la causa liberal fue identificada con la independencia y el honor nacionales de México. Este hecho, junto con los programas franceses de contrainsurgencia, dejó a los conservadores en una situación peor a la que tenían antes de propiciar la invasión francesa. La primera "guerra popular" victoriosa contra el imperialismo y sus técnicas de contrainsurgencia no ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en Argelia, Cuba o Vietnam, sino en México en la segunda mitad del siglo XIX. Fue ganada por campesinos y obreros analfabetas en su mayoría utilizando tácticas guerrilleras de "golpea y huye": una verdadera guerra de guerrillas, o sea "una guerra de guerras pequeñas".[37]

La mayoría de los campesinos no peleaban únicamente una guerra nacionalista contra invasores extranjeros, sino una guerra de *clase*, una "guerra popular". No podían ser "pacificados" ni por las técnicas de la contrainsurgencia francesa ni por las políticas anticampesinas de tierra arrasada y deportación practicadas por ocasionales oficiales del ejército liberal. Siempre que era posible, Juárez designaba a oficiales del ejército regular para dirigir la guerra obrero-campesina de liberación nacional: hombres como el brigadier general Porfirio Díaz, que ganó sus credenciales liberales y "nacionalistas" gracias al importante papel que desempeñó en la primera gran victoria mexicana, la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, que es actualmente una fiesta nacional celebrada por los mexicanos y sus descendientes en todo el mundo (especialmente en las ciudades de Estados Unidos). En esta batalla, Díaz aprovechó la ventaja que le ofreció un súbito aguacero que dejó resbalosas de lodo las pendientes de la fortaleza que defendía. En el momento en que los soldados franceses resbalaban colina abajo, Díaz los atacó y obligó a huir. La inesperada victoria atrajo a muchos mexicanos a la causa nacionalista de los liberales.

Probablemente esto también salvó a Estados Unidos, puesto que en aquel momento el sur esclavista estaba ganando la guerra civil y una victoria francesa en Puebla hubiera conducido al reconocimiento por parte de Napoleón III de la Confederación. Es probable que también Inglaterra hubiera seguido su ejemplo y el bloque económico del norte antiesclavista de la Confederación hubiera sido roto.[38] No es sorprendente que el gobierno de Abraham Lincoln diera su reconocimiento diplomático al gobierno de Juárez en México y que más adelante le suministrara armas.

[37] Gandy, *Benito Juárez*, extraído de Ivie E. Cadenhead, Jr., *"Benito" Juárez* (Nueva York, Viking, 1947), p. 113.

[38] El autor agradece a Ross Gandy haberle señalado este hecho.

Para ayudar a financiar la guerra, Juárez decretó la confiscación de las propiedades de los mexicanos que hubieran ayudado a los franceses, basándose en que eran "traidores a la patria". Por lo menos unas 200 familias burguesas principales sufrieron la expropiación, reduciendo la fuerza del ala conservadora de la burguesía criolla y aumentando la del ala liberal. Terratenientes, rancheros, industriales y pequeñoburgueses radicales ganaron también con estas medidas y otras similares del gobierno juarista. Las familias burguesas que aceptaron la autoridad estatal vieron protegidas sus propiedades. Muchos grandes comerciantes y algunos industriales se sometieron al movimiento juarista sólo en el último momento, bajo la doble presión de la guerra popular de liberación y la amenaza de expropiación.

Aunque costó 50 000 vidas mexicanas, la guerra popular contra 40 000 soldados franceses triunfó finalmente a principios de 1867, al menos en su aspecto nacionalista. Maximiliano se rindió, fue juzgado por una corte marcial y el 19 de junio fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. (Para entonces ya su esposa Carlota, princesa belga, había perdido la razón.) Juárez rechazó los llamados internacionales que pedían clemencia para la vida de Maximiliano, respondiendo que el "emperador" había ordenado y ejecutado la pena de muerte para todos los soldados o simpatizantes juaristas.

Hay en México murales pintados en el siglo xx que muestran a un austero y moreno indígena (Juárez), enfrentando a un alto y rubio nórdico (Maximiliano), con las bocas de los rifles de la guerrilla escupiendo fuego contra la cabeza del emperador: un raro símbolo de la venganza indoamericana contra la Europa imperialista. Actualmente, por todas partes en América Latina se ven estatuas de Juárez, y es recordado mundialmente por su famosa declaración al entrar en la ciudad de México, el 15 de julio de 1867: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz."

Victorioso al fin, Juárez pudo reunirse con su esposa Margarita, que había estado procurando la ayuda estadunidense mientras residía en Washington, en donde murieron dos de sus hijos, uno de disentería y el otro de cólera. Juárez describió en una ocasión a Margarita como una persona de "fuerza titánica", diciendo "lo poco que soy se lo debo a ella".[39] Su éxito político y militar, sin embargo, se lo debió en última instancia a las clases bajas de México. Exhausta, Margarita murió en 1871, y Juárez murió de un ataque al corazón un año más tarde.

Un estado nacional y capitalista

La victoria de la guerrilla sobre los franceses dejó a los segmentos más reaccionarios de la burguesía mexicana aislados políticamente. La mayor parte del

[39] Gandy, *Benito Juárez*, extraído de Florencia Zamarripa, comp., *Los apuntes para mis hijos de Benito Juárez* (México, Centro Mexicano de Estudios Culturales, 1968), p. 7.

clero y el cuerpo de oficiales, junto con algunos hacendados y empresarios más tradicionalistas vinculados a ellos, se encontraron en el lado perdedor y frente a una insuperable oleada liberal. Ansioso por conducir el estado mexicano finalmente independiente, se encontraba un puñado de oficiales y un gran número de propietarios de tierras, fabricantes pequeños y medianos, artesanos, profesionales, héroes guerrilleros campesinos que iban envejeciendo y diversos grandes prestamistas, comerciantes, mineros e industriales.

Después de la retirada militar francesa, el estado juarista siguió basándose en una alianza de muchas clases —pero era la fracción agroexportadora de la burguesía la que tendía a dominar. Los hacendados comerciales, fabricantes, mineros y gran parte del capital de la banca comercial detentaban el poder hegemónico de clase. Todas estas fuerzas favorecían el desarrollo capitalista moderno y estaban ansiosas por asociarse con el capital comercial y extranjero de los países más industrializados, sus aliados "naturales".

Los muchos años de guerra interna e internacional concluyeron así con el establecimiento de un estado-nación bien definido, victorioso en la guerra y firmemente comprometido con la "libertad", es decir, libertad para un desarrollo capitalista incontrolado. La reforma liberal fue más que una agresión por partes de la burguesía terrateniente-comerciante-industrial en contra de las propiedades y tradiciones de la Iglesia (diezmos, etc.). Representó también un fuerte golpe a los gremios, acelerando la separación de los artesanos de sus medios de producción y su incorporación a la fuerza de trabajo asalariada de la industria textil. Muy significativamente, la reforma sentó la base legal para el debilitamiento final de los campesinos que los despojaría de sus tierras convirtiéndolos en trabajadores asalariados "libres" o en peones endeudados. Así fue como la reforma echó los cimientos tanto en las zonas rurales como en las urbanas para un desarrollo más rápido de las formas capitalistas de producción.

Gran parte del éxito del movimiento juarista contra el clero y los franceses derivó de su éxito al armar alianzas de clase y al ofrecer posibilidades de avance a los elementos de grupos no elitistas —pequeños agricultores, artesanos, obreros, mestizos, profesionales y otros— al menos en el ámbito de los derechos democráticos y de la oportunidad de organizarse. Muchos profesionales (en su mayoría abogados) tomaron partido no por convencimiento sino por urgencia de trabajar (empleomanía) y por su devoción a los beneficios del corrupto sistema de recompensas políticas. Los artesanos, por su parte, se habían organizado en sociedades de "ayuda mutua" en 1853-1855, y en 1861 consolidaron su Gran Familia Artística, que, con las aportaciones de sus miembros, garantizaba la atención médica. Los sastres, los comerciantes en pequeña escala, carpinteros, tapiceros, sombrereros, costureras, albañiles, picapedreros, plateros y otros artesanos formaron organizaciones similares en el decenio de los sesenta. Se organizaron también bancos obreros y uniones de crédito.

Las cooperativas de productores compartían el rasgo capitalista de la propiedad privada pero se oponían a la gran burguesía, que obstruía su camino para la creación de una sociedad de productores pequeños e iguales. Las coo-

perativas se unieron a la huelga minera de Real del Monte en 1872 y a las huelgas de sombrereros y trabajadores textiles de 1875. Para 1880, existía un centenar de tales "sociedades de ayuda mutua" en la ciudad de México; la mayor parte de sus miembros, llamados mutualistas, eran artesanos, cuyas familias constituían una sexta parte de los 300 000 habitantes de la capital (al fin igual a la de Tenochtitlán).

A medida que la producción y el transporte industrial y minero crecían durante la segunda mitad del siglo XIX, también lo hacía el proletariado. La industria textil del algodón duplicó su capacidad instalada entre 1854 y 1879. Una estimación aproximada de la población económicamente activa en 1861 mostraba un 61% de jornaleros en la agricultura y la minería y otro 2.5% con empleos estables en factorías o en talleres artesanales. Para 1877, cálculos igualmente aproximados mostraban que el proletariado empleado en forma regular incluía cerca de 100 000 mineros, 100 000 muleros, 25 000 obreros textiles y tabacaleros, 60 000 artesanos urbanos, 12 000 ferrocarrileros y miles de otros trabajadores asalariados y destajistas en la industria o en la construcción: un total de cerca del 9% de la fuerza laboral adulta.

A pesar de tal expansión del trabajo asalariado, gran parte del proletariado seguía experimentando formas de explotación preindustriales o semindustriales. Muchos residían en miserables barracas proporcionadas por los empleadores capitalistas y estaban atados por deudas a las tiendas de raya. Todos ellos estaban sometidos a repentinos despidos y sustituciones por culpa de una inmensa reserva de mano de obra que hacía cola ante las puertas de las fábricas, bocas de minas y demás centros de reclutamiento de fuerza de trabajo para un solo día de labor. Hijos e hijas de campesinos emigraban cada vez más a las ciudades en una búsqueda desesperada de medios de supervivencia. Cerca de una tercera parte de las mujeres urbanas estaban empleadas como sirvientas domésticas. El desempleo rondaba en torno a un 50%. Casi todo el proletariado estaba sobrexplotado. Las peores condiciones eran las padecidas por los miles de mujeres y niños empleados en la industria (más de un tercio de la fuerza de trabajo textil) o en la minería.

El proletariado en lenta expansión, que trabajaba largas jornadas por muy bajos salarios en la minería, el transporte y la construcción, o en las fábricas y talleres de textiles, papel, vidrio, licor, trigo, tabaco, jabón, cuerdas y otras, empezaron a organizarse gradualmente con ayuda de los artesanos. Entre 1872 y 1880, varias organizaciones locales de trabajadores se unieron a todo lo ancho del país en el Gran Círculo de Trabajadores, la Gran Confederación de Trabajadores, el Congreso de los Trabajadores y organizaciones similares que incorporaban a miles de miembros. Estas organizaciones apoyaban la ayuda mutua, la defensa de los obreros y una gran variedad de ideologías radicales (humanismo cristiano, liberalismo, socialismo utópico, internacionalismo proletario y anarquismo) que iban conquistando partidarios en los países en proceso de industrialización, además de unas pocas conservadoras, aunque en la práctica eran generalmente reformistas.

La lucha de la clase obrera durante todo el siglo XIX fue impulsada por artesanos, mineros, ferrocarrileros y obreros textiles. Pero sufrió las contradicciones de la conciencia pequeñoburguesa de muchos de sus líderes artesanos, que también se organizaban en contra de las manufacturas importadas, una demanda compartida por aquellos industriales textiles cuyas fábricas, al modernizarse, contribuían a la inviabilidad de los talleres artesanales y a la proletarización de los artesanos mismos. Además, muchas de las demandas de los trabajadores tendían a eliminar condiciones atrasadas tales como la tienda de raya, las multas, el trabajo nocturno, las jornadas de quince horas o el trabajo infantil, al tiempo que defendían la educación laica y pública como vía para el avance del proletariado.

En sus primeros años, algunas organizaciones obreras recibieron donaciones del estado liberal, como parte de una negociación política por haber respaldado a los liberales contra los conservadores y los franceses. Otras permanecieron independientes del estado y, en las elecciones hechas posibles gracias a la introducción por la reforma liberal del sufragio universal masculino, conquistaron posiciones políticas e incluso la hegemonía en los gobiernos locales de varios municipios. El Gran Círculo de Trabajadores actuaba a menudo como mediador entre el estado y los trabajadores descontentos.

La evolución hacia lo que llegaron a ser unos programas revolucionarios y huelgas militantes con mayor conciencia de clase en vísperas de la Revolución mexicana de 1910 fue tomando forma en debates que llenaban las páginas de publicaciones radicales artesanales, anarquistas y obreras: *La Voz de los Trabajadores, La Internacional, El Socialista, El Obrero Internacional, El Hijo del Trabajo,* y así por el estilo. Docenas de estos periódicos empezaron a circular en los años sesenta y setenta, a menudo por corto tiempo o clandestinamente debido a la creciente represión que sufría el naciente movimiento proletario. La mayoría pedía autonomía para los gobiernos municipales, el control para los obreros, aldeas campesinas libres, derechos para las mujeres y una u otra forma de una república social universal.[40]

El estado capitalista mexicano moderno data de este periodo de guerra civil entre liberales y conservadores, la guerra de liberación nacional contra los franceses y el periodo que sigue. La política de expropiaciones de Juárez contra la Iglesia y los propietarios burgueses que rehusaban cooperar fue el anuncio del enérgico intervencionismo estatal del presidente Lázaro Cárdenas en los treinta. Igualmente, los precedentes de la "protección" y de la regulación de las actividades de campesinos y obreros por parte del moderno estado constitucional se inscribieron en la Constitución de 1857. El estado moderno, como entidad nacional entronizada por encima de los intereses de las corporaciones tradicionales o de las oligarquías privilegiadas (el *ancien régime*), y supuesta-

[40] Para más datos sobre los movimientos proletarios emergentes en México, véase James D. Cockcroft, *Precursores intelectuales de la Revolución mexicana, 1900-1913* (México, Siglo XXI, 1968), y John M. Hart, *El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931* (México, Siglo XXI, 1980).

mente orientada hacia el "bien público" más que hacia cualquier grupo (o clase) de especial interés, estaba ideológicamente concebida y jurídicamente consolidada por la reforma liberal y la guerra antifrancesa de liberación nacional.

En México, esta definición ideológica capitalista del estado reflejaba la hegemonía de clase de las fracciones triunfantes de la burguesía. Como el establecimiento de este estado se arraigaba en la guerra interna de clase contra segmentos reaccionarios de las élites y ciertas formas no-capitalistas tradicionales de apropiación de la riqueza (la Iglesia, gremios de artesanos y comunidades indígenas) y la guerra externa contra invasores extranjeros, el nuevo estado mexicano poseía cierta legitimidad popular. Por consiguiente, tenía más opciones para controlar la rebeldía de las masas y la creciente acumulación de capital y para consolidar la alianza "natural" de la burguesía liberal triunfante con los capitalistas extranjeros —a expensas de las clases bajas y de la Iglesia y para el beneficio conjunto del capital nacional y extranjero (cada vez más estadunidense).

Ahora firmemente establecido, el estado mexicano debía asumir o las formas burguesas democráticas o las dictatoriales oligárquicas, dependiendo de las condiciones de la lucha de clases que en última instancia define las formas asumidas por cualquier estado. Desde 1867 hasta 1880, las libertades burguesas florecieron, mientras que los ciudadanos urbanos disfrutaban un grado de libertad de expresión sin precedentes. Pero iban a perder cada vez más este privilegio a medida que tanto la burguesía en proceso de modernización como los hacendados tradicionales iban encontrando necesario acudir a una represión estatal más enérgica para contener la lucha de clases.

La solución final de la guerra civil de México y la derrota del ejército francés no puso término en absoluto a la resistencia obrera o campesina. Algunos ejemplos de la continuada radicalización de la lucha de clases en las zonas rurales serían los siguientes:

- Desde 1836 hasta 1910, el estado de Veracruz fue escenario de revueltas campesinas casi constantes.
- Entre 1857 y 1881, una rebelión agraria encabezada por Manuel Lozada (el "Tigre de Álica") en Nayarit se extendió a Jalisco y cubrió ambos estados.
- Desde 1868, la rebelión de Julio López Chalco se extendió a comunidades campesinas en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México y Puebla, hasta que Benito Juárez mandó ejecutar a López en 1869. Las últimas palabras de López se dice que fueron: "¡Viva el socialismo!"[41]
- En 1869, hacia el sur, estalló un movimiento mesiánico de chamulas en el estado de Chiapas.
- Entre 1877 y 1881 resurgió el movimiento campesino de Sierra Gorda, incorporando un programa detallado de socialismo agrario.

[41] Hart, *El anarquismo*, p. 41.

- Entre 1877 y 1883, la región maicera de San Luis Potosí experimentó otra rebelión campesina.
- En 1879, una rebelión dirigida por el socialista Alberto Santa Fe en San Martín Texmelucan, Puebla, proclamó una "Ley del Pueblo" inspirada en el socialismo utópico, provocando otras rebeliones agrarias en Morelos, Guerrero y San Luis Potosí.

Frente a este tipo de inquietud social, en la que las ideologías radicales iban ganando influencia, sólo una dictadura despiadada podía sostener la dominación de clase de la burguesía de México. A diferencia de la primera mitad del siglo XIX, las dos últimas décadas estarían marcadas por la estabilidad de un estado claramente definido al servicio de los intereses de las fracciones agro-minera exportadora e industrial-financiera de la burguesía, junto con el capital extranjero. El papel del capital comercial en la estimulación de la producción expandida y una transición hacia el capitalismo moderno continuarían aún, pero con cambios en las fuerzas y relaciones de producción, permitiendo más que una simple "acumulación original de capital". Estaba en marcha una era de empresas monopolistas nacionales y extranjeras que explotaban la mano de obra barata para la acumulación de capital en una escala ampliada.

Pero lejos de constituir un proceso uniforme, el desarrollo capitalista de México continuaría de una manera desigual, combinando varias formas de explotación de la mano de obra y de la producción. Este proceso se reflejaría tanto en el estado como en la lucha de clases que siguió. En cierto sentido, las guerras interiores y exteriores de México no habían hecho más que empezar.

CAPÍTULO 3

DE LA DICTADURA A LA REVOLUCIÓN, 1880-1920

De los campos los burgueses se adueñaron
explotando los veneros que en el subsuelo encontraron
mientras tanto los millones de pesos al extranjero
se llevaban los patrones con escarnio verdadero

Canción revolucionaria mexicana

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas.

Atribuido a Emiliano Zapata en vísperas de la Revolución de 1910-1920

Debilitado por las deudas de guerra y las disputas entre los liberales, el estado demócrata-burgués mexicano dejó paso a otro oligárquico-dictatorial, dirigido por Porfirio Díaz, héroe de guerra y de origen mestizo. Díaz administró el país como una reserva capitalista para sus amigos mexicanos y extranjeros. Su dictadura de 35 años de duración (1876-1911, el "Porfiriato") desarrolló las comunicaciones, la electrificación, los transportes, la industria y la agricultura comercial mediante concesiones a intereses comerciales extranjeros y nacionales y al uso de mano de obra asalariada y forzada. Una fuerza de policía rural, los "rurales", patrullaba el país, al tiempo que un ejército fuerte aplastaba las huelgas. La censura y los calabozos silenciaban a los disidentes.

Hacia finales del porfiriato fue surgiendo un importante proletariado industrial con creciente conciencia de clase. Docenas de huelgas industriales, mineras y ferroviarias se produjeron entre 1906 y 1908. La mayor parte incluían tanto a hombres como a mujeres, y casi todas eran animadas por el ilegal Partido Liberal Mexicano (PLM), cuyos objetivos revolucionarios incluían derechos iguales para las mujeres. Aunque aplastadas con gran costo de vidas humanas, las huelgas debilitaron las pretensiones de legitimidad del régimen de Díaz. Además, en 1906-1908, el PLM organizó revueltas armadas en varios estados. Luchadores experimentados de aquellas acciones armadas infructuosas desempeñaron un papel de primer orden en las victorias militares que arrojaron a Díaz del poder en 1910-1911.[1]

[1] En nombre de la objetividad, el académico estadounidense ocasional ha quitado importancia al proletariado industrial mexicano emergente o a la influencia de las huelgas y motines del PLM entre 1906 y 1908 para debilitar el régimen de Díaz. Los estudiosos mexicanos, sin embargo, concuerdan por lo común en afirmar su decisiva importancia. Véase, por ejemplo, la unanimidad

En Morelos, un pequeño agricultor llamado Emiliano Zapata, que había sido despojado de sus tierras por los ricos, respondió al grito de guerra del PLM: "¡Tierra y libertad!"

Dos mil kilómetros al norte, respondió un eco lejano: "¡Viva Villa!"

En unos pocos años, Zapata se encontró sentado junto a un fornido vaquero mestizo conocido como Francisco "Pancho" Villa (su verdadero nombre era Doroteo Arango) en el palacio presidencial de la ciudad de México. El país nunca volvería a ser el mismo.

De generación en generación se fue corriendo la voz, en canciones, poemas y leyendas. Los mexicanos recordaron su Revolución con mayor pasión incluso que la invasión estadunidense de 1846-1848. Actualmente, es posible encontrar a algún viejo campesino que dice que todavía puede ver a Zapata cabalgando en su caballo blanco a lo largo de las escarpadas colinas que dominan los ejidos nuevamente robados. En las celebraciones oficiales o después de ruidosas reuniones de bebedores, el visitante de Morelos todavía puede oír el apasionado grito de "¡Viva Zapata!" Los movimientos revolucionarios nuevos como el de los zapatistas de Chiapas a mediados de los noventa hacen eco al viejo grito de guerra.

Para 1910-1911, cuando la Revolución mexicana entró explosivamente en escena, el 96.6% de las familias rurales carecía totalmente de tierras. Los altos funcionarios del gobierno describían la situación como "agricultura capitalista basada en la mano de obra barata [...] trabajada por un proletariado rural".

De toda la superficie de México, los extranjeros poseían entre el 14 y el 20%. Los inversionistas estadunidenses poseían más industrias que los mexicanos, dominaban los ferrocarriles y la minería y, junto con los británicos, controlaban el petróleo mexicano —casi una cuarta parte de la producción mundial en 1921.

El analfabetismo abarcaba al 84% de la población. La brecha entre ricos y pobres se había ensanchado más que nunca antes, aunque un puñado de obreros industriales la pasaban mejor que sus semejantes campesinos, y había más gente de clase intermedia compitiendo por empleos en la burocracia estatal.

La fuerza impulsora del levantamiento revolucionario del decenio de 1910 fue el campesinado rural y el proletariado. Sin embargo, estas fuerzas se dividieron en 1915, provocando algunas de las más sangrientas batallas de la Revolución. Para el momento en que la triunfante facción revolucionaria burguesa votó la Constitución en 1917, cerca de 2 millones de mexicanos habían perecido (el 12% de la población). Zapata se negó a rendirse pero en 1919 murió asesinado en una emboscada cuando se dirigía a una "conferencia de paz".

Los resultados del derramamiento de sangre de la Revolución fueron: un campesinado derrotado, un movimiento obrero mutilado que dependía de los favores estatales, un conjunto de élites heridas y divididas pero victoriosas di-

---

en este punto entre las diferentes interpretaciones de la Revolución ofrecidas en Héctor Aguilar Camín, comp., *Interpretaciones de la revolución mexicana* (México, Nueva Imagen, 1979). La monografía estándar sobre el PLM es James D. Cockcroft, *Precursores intelectuales de la revolución mexicana, 1900-1913* (México, Siglo XXI, 1968).

rigidas por industriales, hacendados y empresarios y caudillos regionales decididos, y un triunfo en el papel, la Constitución de 1917, un documento muy progresista para su época.

Las notables características de la Revolución de 1910-1920 fueron, primero, su explosiva confrontación inicial de clase que enfrentó a campesinos y proletarios, por un lado, contra grandes terratenientes y capitalistas por el otro y, segundo, sus marcadas características antiextranjeras y antimperialistas (nacionalismo). Aunque la burguesía estaba dividida, con las fracciones industrial-financieras más "modernas" intentando afirmar su hegemonía sobre las más oligárquicas y tradicionales, este conflicto entre clases privilegiadas era secundario respecto de la necesidad por parte de ambas fracciones burguesas de derrotar a los campesinos y obreros e impedir que las clases bajas vencieran definitivamente a las clases altas. En este sentido, no hubo una revolución social, sino sólo una revolución política, e incluso esta revolución política fue menos completa de lo que suele decirse.

El estado capitalista "revolucionario" que se estableció en lugar del viejo estado capitalista oligárquico, necesitaría tiempo para consolidarse. Muchos eran los competidores por el poder estatal. Pero la mayor parte de ellos demostraron ser muy aficionados a manipular la retórica revolucionaria para sus objetivos capitalistas.

Díaz en el poder

El estado demócrata-burgués de los liberales se dividió muy pronto y dio lugar a otro dictatorial-oligárquico. En 1871, los liberales se dividieron en tres campos, con Juárez conquistando un cuarto término como presidente por los votos del Congreso después de que ningún candidato consiguiera una mayoría de los votos populares. El 19 de julio de 1872 murió el presidente Juárez, y una elección presidencial especial celebrada en octubre resultó ser una competencia de dos hombres en la que Sebastián Lerdo de Tejada derrotó a Porfirio Díaz. En 1876, Lerdo decidió buscar la reelección, pero los liberales sufrieron nuevas divisiones internas, dando a los militares una oportunidad de afirmar su influencia. Proclamando el lema de "No reelección" y atrayendo a los oficiales disidentes, Díaz tomó el poder en noviembre de 1876.

Siguió un periodo de crisis política durante el cual ninguna fracción aislada de la burguesía logró la hegemonía. Estados Unidos retrasó el reconocimiento del nuevo gobierno hasta obtener cierto número de concesiones en 1877, incluyendo indemnizaciones por daños sufridos por dueños de propiedades estadunidenses durante las recientes guerras de México y el derecho de los ciudadanos estadunidenses a tener propiedades en territorio mexicano. El libre comercio se extendió a lo largo de los más de 3 000 kilómetros de frontera mexico-estadunidense, desde Tamaulipas en el este (en donde su práctica había sido legalizada desde 1861), hasta Baja California en el oeste. Díaz garantizó

también a Estados Unidos el permiso para que sus tropas atravesaran la frontera persiguiendo a indios hostiles como los apaches.

Antes de dejar su cargo para permitir el ascenso a la presidencia del secretario de la guerra Manuel González (1880-1884), Díaz persuadió al Congreso mexicano para que autorizase contratos lucrativos excepcionales para que compañías estadunidenses construyeran las principales líneas férreas desde México hasta las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. González, incapaz de hacer frente a los retos fiscales que amenazaban al estado aún gravemente endeudado, interrumpió los pagos de salarios de muchos burócratas gubernamentales; los gritos pidiendo su caída se volvieron ensordecedores. Díaz ganó fácilmente las elecciones de 1884, y reformó la Constitución para permitir su reelección en 1888.

De inmediato Díaz se dedicó a curar las viejas heridas de las élites nacionales, concediendo favores estatales a los grandes terratenientes, comerciantes e industriales independientemente de sus posiciones anteriores en la guerra civil liberal-conservadora. (En su vida personal, había iniciado este proceso en 1881 al casarse con la hija de un prominente político del gobierno de Lerdo.) Esto sentó las bases para el comienzo de una constante acumulación de capital en gran escala: un capitalismo total. La transformación económica fue posible en gran parte por una estabilidad política sin precedentes, el aumento de la población en tiempos de paz y el estímulo dado por un estado oligárquico-dictatorial a los capitalistas locales y extranjeros.[2]

En un esquema que en cierta forma se repetiría un siglo más tarde en nombre del "neoliberalismo", la dictadura de Díaz institucionalizó un aparato represivo y un sistema ideológico que destacaba la estabilidad política, la ciencia, la tecnología y el progreso material como alternativas a los años precedentes de "caos e idealismo". Los lemas de la administración "Poca política y mucha administración" y "Orden y progreso" expresaban la nueva ideología. El objetivo era "modernizar" a México.

Un grupo de hombres de negocios y tecnócratas conocidos como los "científicos" se convirtió en el cerebro de Díaz. Eran positivistas y darwinistas sociales que afirmaban que en la política y en la economía todo debía hacerse de acuerdo con las leyes de la "ciencia" más que según las de la "metafísica" o la "religión". Inspirados por las ideas de Charles Darwin sobre el progreso evolutivo y la "supervivencia del más apto", popularizadas por el sociólogo Auguste Comte y el historiador Herbert Spencer, los "científicos" habían ganado riqueza y estatus con las medidas de la Reforma liberal adoptadas contra la Iglesia

[2] Para un análisis sobre los cambios económicos ocurridos durante el porfiriato, véase John H. Coatsworth, *Growth against development: the economic impact of railroads in Porfirian Mexico* (DeKalb, Northern Illinois University Press, 1981); Stephen H. Haber, *Industry and underdevelopment: the industrialization of Mexico, 1890-1940* (Stanford, Stanford University Press, 1989), y Francisco Valdés Ugalde, *Autonomía y legitimidad: los empresarios, la política y el estado en México* (México, Siglo XXI, 1997), pp. 72-79. Véanse también los primeros capítulos de Cockcroft, *Precursores intelectuales*.

y los ejidos. Estaban enamorados de las supuestas virtudes del capital y la cultura extranjeras. Desalentaban o excluían a aquellos intelectuales y profesionales que no aceptaban su modo de pensar.

La educación, que era para las élites, encarecía la enseñanza del inglés porque, en palabras del educador Ezequiel Chávez, "se creía necesario [...] dada la creciente unión entre el pueblo angloamericano y nuestro pueblo".[3] Justo Sierra, ministro de educación, llamaba a la "sajonización" de México —incluyendo más inmigración estadunidense y europea —para desarrollar la cultura y la economía de la nación. En 1887 se creó la escuela normal nacional, y desde entonces hasta 1919 casi todos los libros de texto mexicanos se convirtieron en el negocio privado de Appleton Publishing Company de Nueva York y eran autores estadunidenses quienes los escribían.

Muchos de los "científicos" tenían vínculos con el capital francés que, de todo el capital extranjero, era el más comprometido en el desarrollo del mercado doméstico. Los capitalistas franceses ayudaron a establecer un banco emisor, el Banco Nacional de México, que a su vez ayudó a iniciar los grupos bancarios privados de Puebla y Monterrey.

En un principio, la administración de Díaz facilitó préstamos y utilizó aranceles proteccionistas para ayudar a los industriales mexicanos en áreas como los textiles, el cemento, el acero, la cerveza y los artículos de piel. La burguesía mexicana celebró el fuerte apoyo que le otorgaba el estado, aunque algunos individuos resintieron ocasionalmente los "favoritismos" de Díaz. Un par de docenas de familias comerciantes, muchas de ellas de ascendencia extranjera, llegaron a dominar la industria del país.

Los mayores avances en la producción y el comercio se dieron en los decenios de 1890 y 1900. Los salarios industriales mejoraron ligeramente, las clases intermedias crecieron y hubo un aumento en la producción para el mercado doméstico. Aun así, los bajos salarios de la mayoría de los mexicanos les impedían convertirse en consumidores de mercado masivos. Para los inversionistas, la producción para la exportación era más redituable que invertir en el mercado doméstico. Durante un tiempo, casi todos los intereses de burgueses y grandes terratenientes prosperaron: comerciantes, nuevos banqueros e industriales, propietarios de minas, políticos militares y civiles liberales (la mayor parte de los cuales se habían enriquecido durante el periodo de la Reforma liberal), hacendados que empleaban mano de obra asalariada o endeudada, antiguos "conservadores" opositores de la Reforma, e incluso la Iglesia católica, que restableció gran parte de su influencia económica y social en la vida de todos los días.

En términos de producción total, los inversionistas extranjeros encabezados por los intereses estadunidenses tomaron el control de la mayor parte de la economía. Para 1911 los extranjeros poseían la mayor parte de los ochenta

[3] Citado en Josefina Vázquez de Knauth, *Nacionalismo y educación en México* (México, El Colegio de México, 1970), p. 55. Para más información sobre educación, incluyendo el papel de los maestros en la Revolución mexicana de 1910 en adelante, véase Mary Kay Vaughan, *The state, education, and social classes in Mexico, 1880-1928* (DeKalb, Northern Illinois University Press, 1982).

mayores establecimientos comerciales e industriales. De estos ochenta, veintiuno eran estadunidenses y veintitrés británicos; sólo seis eran mexicanos. El resto eran franceses, alemanes, españoles, canadienses, o una combinación (incluyendo dieciséis con participación mexicana). Cerca de un 90% de toda la inversión en minas era extranjera (el 80% de Estados Unidos). Ya desde 1890, un antiguo ministro de hacienda del estado demócrata-burgués expresó su satisfacción a la Cámara de Diputados "al ver a los extranjeros como dueños de las altas finanzas, de instituciones de crédito, de las plantas de energía eléctrica, del telégrafo, de los ferrocarriles y de todo aquello que significa cultura y progreso de México."[4]

Estados Unidos predominaba. Para 1897, las inversiones estadunidenses en México totalizaban más de 200 millones de dólares y excedían a las inversiones estadunidenses en el resto de América Latina, en Canadá, en Europa o en Asia. Durante los catorce años siguientes, esta cifra se quintuplicó, y para 1911 se estimaba que las inversiones estadunidenses eran mayores que las de la burguesía mexicana y el doble de las de todos los demás inversionistas. El 83% de las inversiones estadunidenses estaba en los ferrocarriles y las minas, con Anaconda, Phelps Dodge y U.S. Mining, Smelting and Refining a la cabeza. En el petróleo, un estadunidense llamado Edward L. Doheny, ayudado por préstamos de intereses bancarios y comerciales mexicanos, creó la Mexican Petroleum Company, que más adelante fue absorbida por la Standard Oil de Rockefeller. Para 1911 Estados Unidos estaba recibiendo el 74% de todas las exportaciones mexicanas. Los intereses británicos ocupaban el segundo lugar respecto de Estados Unidos en minería y metalurgia.[5]

El gobierno de Díaz introdujo un conjunto de medidas económicas para "modernizar" a México. Primero, renegoció la deuda externa. Luego introdujo un nuevo código comercial (1884) que empezó por eliminar los aranceles proteccionistas y expandir el sistema bancario. Entre 1887 y 1892, introdujo nuevos códigos de minería que otorgaban al capital privado derechos sobre el subsuelo. Su eliminación de las tasas de mercado locales (alcabalas), que habían favorecido a las oligarquías regionales, facilitó el crecimiento y unificación del mercado doméstico, así como la centralización del poder económico y político en la ciudad de México. Los caciques seguían siendo animados a actuar, pero ahora en una mayor coordinación con el gobierno federal. Para 1894, México logró su primer presupuesto equilibrado.

La construcción de unos 19 000 kilómetros de vías férreas redujo el costo

[4] Matías Romero, citado en Charles C. Cumberland, *Mexico: the struggle for modernity* (Nueva York, Oxford University Press, 1968), p. 196.

[5] Todas las inversiones extranjeras entre 1900 y 1910 triplicaron las de 1876 a 1900. Para más sobre el tema, véanse los ensayos de Fernando Rosenzweig y Luis Nicolau d'Olwer en la historia en varios volúmenes compilada por Daniel Cosío Villegas, *Historia moderna de México* (México, Hermes, 1956-1974). Sobre el papel influyente de Doheny en la historia de México y Estados Unidos, véase Dan La Botz, *Edward L. Doheny: petroleum, power, and politics in the United States and Mexico* (Nueva York, Praeger, 1991).

del transporte en más de quince veces para 1900. La red ferroviaria conectó los mercados regionales y ayudó a consolidar un mercado doméstico nacional. Construido mediante el trabajo indígena asalariado y poseído por el capital extranjero, vinculaba las ricas áreas mineras del norte y centro de México con los importantes puertos del golfo, las ciudades costeras de Texas y centros industriales como Chicago y Pittsburgh. Esto facilitó la exportación de materias primas y de fuerza laboral en la forma de trabajadores mexicanos emigrantes, cuyos envíos de dólares, entonces como ahora, mantuvieron con vida las frágiles economías de muchos pueblos y familias.

Más capaces de monopolizar los mercados, controlar el empleo y las condiciones salariales y asegurar una rápida expansión económica, muy pronto unidades de producción en gran escala pusieron a los pequeños productores, artesanos individuales, comerciantes, al campesinado y al proletariado en una posición precaria. No obstante el impresionante crecimiento económico durante el porfiriato, los salarios reales cayeron de cuarenta y dos a treinta y seis centavos por día, una ración de hambre; continuó la mala alimentación; el promedio de esperanza de vida estaba en unos treinta años.

Debido a estas condiciones de vida tan duras y a la ausencia de guerras, la población casi se duplicó —desde cerca de 8.7 millones en 1874 hasta 15 millones en 1910— una tasa de crecimiento que no se volvería a alcanzar hasta después de la segunda guerra mundial, cuando empezaría el segundo periodo de crecimiento económico en orden de importancia. Por lo menos aquí, casi un siglo después que en Estados Unidos, existía el volumen adecuado de la fuerza laboral necesaria para la acumulación de capital en escala ampliada buscada durante tanto tiempo.

En el norte de México, grandes inversiones estadunidenses en minería, hierro, acero y agricultura estimulaban la inflación salarios-precios y la migración masiva desde el interior de México hacia puestos de trabajo mejor pagados más al norte y en Estados Unidos. Masas de campesinos en busca de mejores salarios empezaron a moverse de cosecha en cosecha y de granja a fábrica por grandes extensiones de territorio. En Estados Unidos sustituyeron cada vez más a los inmigrantes chinos (excluidos en 1882) y japoneses (excluidos en 1907), y se convirtieron en la principal fuerza de trabajo en la minería, los ferrocarriles, partes de la industria y, sobre, todo, en la agricultura. El número de mexicanos residentes en el país del norte se triplicó entre 1880 y 1910. En el que quizá fue el mayor movimiento de un pueblo jamás registrado en la historia, aproximadamente una octava parte de la población mexicana acabaría por trasladarse permanentemente a Estados Unidos entre 1890 y 1933, la mayor parte de la misma reclutada por empleadores estadunidenses y sus agentes mexicanos.

Sobre la base de las mejoras en los transportes, la maquinaria moderna importada y la mano de obra barata, la producción industrial de México casi se triplicó durante el porfiriato, mientras que la producción agrícola y ganadera casi se duplicó. Las industrias textil y de bebidas se modernizaron. Nuevas industrias, como la del hierro y el acero, empezaron a desarrollarse. En las mi-

nas, la electricidad sustituyó al vapor; se introdujeron las perforadoras de aire comprimido y los procesos a base de cianuro y electrólisis, y el manganeso remplazó casi totalmente al mercurio como agente transformador para la plata. Grandes cantidades de mineral podían procesarse en un solo día. Gran parte de la fuerza de trabajo pudo ser eliminada, en particular de entre el 40% empleado como cargadores y el 25% como picapedreros: obviamente un gran ahorro de salarios.

Las ganancias mineras se dispararon hasta 200% entre 1876 y 1911. La producción minera y metalúrgica aumentó diez veces. México se convirtió en el segundo mayor productor de plata en el mundo. (La plata mexicana siguió siendo el principal valor de cambio con Asia incluso después de la introducción del patrón oro en 1905.) Otras producciones minerales en México también aumentaron, y para 1910 el cobre, el hierro y el cinc habían remplazado a la plata en tonelaje producido.

Durante todo el porfiriato, el valor de todas las exportaciones aumentó un promedio de 6% al año, y la porción de valor exportador de la minería fue disminuyendo progresivamente —desde dos tercios en 1889 hasta menos de la mitad para 1911. Parte del más bajo porcentaje de la minería derivaba de una caída en los precios de la plata causada por el cambio de 1905 al patrón oro, lo que a su vez provocó un serio problema de balanza de pagos debido al aumento de las transferencias de valores fuera de México en exportaciones de plata y costos más elevados de las importaciones, así como reducciones del crédito —todo lo cual contribuyó a una crisis económica en vísperas de la Revolución mexicana de 1910-1920.

Durante el porfiriato, las bombas hidráulicas, motores eléctricos, segadoras, tractores y cosechadoras fueron salpicando los campos de México. La producción de algodón aumentó para llenar las necesidades de la industria textil en expansión. En azúcar, nuevos motores eléctricos y molinos de metal (ya no de madera) y las obras de irrigación mejoradas más que cuadruplicaron la producción. La fuerza laboral se pagaba con salarios en dinero, o algunas veces con cupones, aceptados para las compras de los trabajadores en la tienda de la compañía. Morelos en particular —el estado natal de Zapata —se convirtió en una vasta red monopolizada de ingenios azucareros rurales y, después de Hawai y Puerto Rico, la región productora de caña de azúcar más productiva del mundo. Para 1908, los diecisiete propietarios de los veinticuatro modernos ingenios azucareros y treinta y seis haciendas cultivadoras de caña de azúcar poseían más del 25% de las tierras de ese estado.[6]

Los intereses trigueros estadunidenses, que necesitaban cuerdas para engavillar, y los fabricantes de maquinaria agrícola como International Harvester convirtieron a Yucatán en una economía basada en la producción de sisal,

[6] Véase John Womack, Jr., *Zapata y la revolución mexicana* (México, Siglo XXI, 1969), pp. 48-49; Arturo Warman, *...y venimos a contradecir* (México, Ediciones de la Casa Chata, 1976), pp. 73-74; y la siguiente nota.

o henequén, una fibra de agave. Firmas comerciales como la Olegario Molina Company firmaron contratos a largo plazo con International Harvester estabilizando los precios del henequén y asegurando el acceso mutuo al mercado. Al auge de la economía de Yucatán en esa época se le llamó "esclavitud por deudas", porque los indios, peones de hacienda y pequeños campesinos eran alojados o alquilados por las haciendas-plantaciones y estaban atados a una tienda de raya. El peonaje endeudado o "esclavitud por deudas" existía también en muchas otras partes de México (como en el Valle Nacional de Oaxaca), pero en la mayoría de las zonas prevalecía el "trabajo asalariado libre". Los aldeanos y campesinos, forzados a abandonar sus tierras por los intereses intrusos de las haciendas y las agroindustrias, tenían que vender su fuerza de trabajo sobre una base temporal o estacional. Muchos campesinos desplazados se mudaban a las ciudades, en donde se convertían en miembros del nuevo proletariado industrial.

Las estimaciones sobre el tamaño del proletariado industrial (incluyendo a los mineros) para 1900 iban del 8 al 15% de la fuerza laboral adulta. Usando estadísticas del gobierno de Díaz, los investigadores del Colegio de México y el historiador del trabajo Jorge Basurto calcularon que había 107 000 trabajadores en las minas y 624 000 en las manufacturas. El nuevo siglo comenzó en México, por lo tanto, con la mano de obra asalariada firmemente establecida en gran escala para los objetivos de la acumulación de capital.[7]

Durante todo el siglo XIX nuevas cosechas comerciales como las de chile, café, chicle, maguey, tomate y garbanzo habían sido introducidas, convirtiendo a muchas economías locales en áreas agroexportadoras y a la fuerza de trabajo en trabajo asalariado. Según el censo de 1910, el 80% de la población dependía de los salarios agrícolas y trabajaba para 20 000 terratenientes.

Los hacendados y los especuladores de tierras se beneficiaban de las políticas estatales. Por ejemplo, entre 1881 y 1906, como resultado de la legislación sobre baldíos, cerca de un cuarto de la nación fue sometida a operaciones de deslinde por empresas privadas, que recibieron como pago cerca de un tercio de la tierra deslindada; a menudo se beneficiaban vendiéndola a los hacendados. Además, un acta de aguas federales aumentó el número de vías de agua clasificadas como propiedad del estado, y éste entonces alquilaba o vendía los "derechos de uso" a los hacendados —despojando todavía más a los campesinos e indígenas, a quienes también se negaba el acceso al agua o a las tierras de pastoreo para sus animales.

Así fue como México vio una monopolización capitalista generalizada de los medios de producción y la consiguiente conversión de la mayoría de los cam-

[7] Jorge Basurto, *El proletariado industrial en México, 1850-1930* (México, UNAM, 1975), pp. 25-27. Para 1900, había muchos más trabajadores que eran asalariados libres, no sujetos por formas de disciplina laboral intermedias o no capitalistas como son esclavitud, servidumbre, peonaje endeudado, destajismo, mediería, etc. Esto marcó un paso importante en la transición a la acumulación de capital en escala ampliada, una transición en fuerte auge durante el porfiriato. Véase Domenico E. Sindico, "Modernization in XIX century sugar haciendas: the case of Morelos (from formal to real subjection of labor to capital)", *Latin American Perspectives* 7, núm. 4 (otoño de 1980), pp. 83-99.

pesinos en proletariado asalariado o desempleado. Al mismo tiempo, el México rural se caracterizaba por variaciones regionales y compleja estratificación social interna que implicaba a los "capitanes" (contratistas de mano de obra), a los capataces, transportistas, rancheros, medieros y trabajadores de tiempo completo o parcial, incluyendo a cientos de miles de jornaleros. Los rancheros —pequeños y medianos propietarios de tierras impregnados de la cultura popular— constituían una pequeña burguesía rural partidaria de la ideología de la reforma agraria, con su discurso sobre propiedades "medianas" y "familiares".[8] Los trabajadores, medieros y parcelarios de las haciendas cultivaban minúsculas parcelas de tierra concedidas por los hacendados y en ocasiones alquilaban mano de obra asalariada de las filas de otros campesinos desposeídos. Ellos mismos solían ser trabajadores asalariados, puesto que no podían sobrevivir solamente con su propia producción y debían ganar el capital necesario para hacer productivas sus parcelas.

Díaz y sus consejeros estaban bien conscientes de lo que sucedía y lo veían en términos capitalistas. El ministro de agricultura Lauro Viadas resumía así la cuestión:

> La agricultura, ante todo y sobre todo, es un negocio, y en cada negocio el volumen y seguridad de las ganancias son lo que determina el carácter de la empresa [...] La agricultura en gran escala se afirma y excluye a la agricultura familiar en pequeña escala; toma posesión de la tierra, atraída, y yo diría que fuertemente atraída, por las ventajas económicas que brotan de las dos causas siguientes: 1] El elevado costo de los medios de vida [...] El alto precio de estos bienes lleva primero a una elevada ganancia para los cultivadores y subsiguientemente, a un alto precio de la tierra arable, lo que la pone al alcance sólo de los empresarios capitalistas. 2] Lo barato de la mano de obra, que reduce, relativa si no es que absolutamente, el costo de la producción y ocasiona con ello el efecto arriba mencionado de elevar las utilidades agrícolas.[9]

La mano de obra femenina era aún más barata que la masculina, pues generalmente ganaba sólo la mitad que los hombres, y puede haber representado hasta una quinta parte de la fuerza de trabajo asalariado de la nación (sin contar a las trabajadoras domésticas). Cuando en 1908 un inquisitivo periodista estadunidense preguntó al alcalde del Valle Nacional de Oaxaca por qué los plantadores no usaban molinos baratos para moler el maíz, le respondieron: "Las mujeres son más baratas que las máquinas."[10] Para ayudar a mantener a

[8] Véase Frans J. Schryer, "A ranchero economy in northwestern Hidalgo, 1880-1920", *Hispanic American Historical Review* 59, núm. 3 (1979), y "The role of the rancheros of central Mexico in the Mexican revolution", *Canadian Journal of Latin American Perspectives* 4, núm. 7, 1979.

[9] Citado en Andre Gunder Frank, *Latin America: underdevelopment or revolution* (Nueva York, Monthly Review Press, 1969), p. 238, y James Cockcroft, *Precursores*, ed. cit., p. 34.

[10] El reportero era John Kenneth Turner, y la cita es de Francie R. Chassen-López, "'Cheaper than machines': women and agriculture in Porfirian Oaxaca, 1880-1911", en Heather Fowler-Salamini y Mary Kay Vaughan, comps., *Women of the Mexican countryside, 1850-1990* (Tucson, The

sus familias frente al extendido despojo campesino, más y más mujeres entraban al mercado laboral o se empleaban en la producción artesanal y en el comercio. Gran número de mujeres eran reclutadas por las industrias de "servicios sexuales" que proliferaban en los centros petroleros, mineros e industriales de todo México.

Los levantamientos populares eran aplastados brutalmente. Matanzas, violaciones, latigazos, hambre y deportaciones forzadas eran el perverso "orden y progreso" promovido por los ideólogos mexicanos del capitalismo moderno. A base de modernizar a una masa informe de 100 000 hombres mal equipados, indolente y con exceso de oficiales en 1875, transformándola en una fuerza bien equipada y disciplinada de 40 000 hombres en 1910, se creó un ejército fuerte que garantizaba la estabilidad política. Para prever las posibles revueltas militares y suprimir los levantamientos de campesinos y mineros, Díaz creó además un cuerpo de policía rural de élite, los rurales, que se convirtió en una auténtica guardia pretoriana del capital privado y el estado.

Por ejemplo, los indios yaquis rebeldes de Sonora y Chihuahua fueron sometidos militarmente a principios del decenio de 1890. Sus protestas ponían en peligro las plantaciones en rápida expansión de garbanzos y otros vegetales para exportar a los mercados de Estados Unidos. Muchos de los yaquis fueron deportados a las plantaciones de henequén de Yucatán o a los campos de tabaco de Valle Nacional, en donde trabajaban como verdaderos esclavos en lo que un diplomático estadunidense describió como "colonias penales de las que muy pocos regresan".[11] La más famosa lideresa yaqui, Teresa Urrea (1873-1905), fue deportada en 1892 a Arizona. Más tarde trabajó muy estrechamente con los organizadores sindicales del Partido Liberal Mexicano (PLM) en el suroeste de Estados Unidos. Debido a su inmensa popularidad entre los trabajadores y sus habilidades en las artes curativas de la medicina popular (que llegó a hacerla internacionalmente famosa), la gente de ambos países la llamaba "Santa Teresa de Cabora".[12]

El rápido aumento de los ingresos de algunos mexicanos y el empobrecimiento de otros estaba produciendo una nación de violentos contrastes, pero éstos no eran el resultado del "feudalismo" o el "tradicionalismo" como algunos autores han supuesto. Por el contrario, eran resultado del desarrollo de las formas modernas de producción capitalista combinadas con formas sociales

University of Arizona Press, 1994), p. 41. Véase también Teresa Meade, "Gender: 1821-1910", en Michael S. Werner, comp., *Encyclopedia of Mexico: history, society and culture* (Chicago, Fitzroy Dearborn, 1997); Margaret Towner, "Monopoly capitalism and women's work during the Porfiriato", *Latin American Perspectives* 4, núm. 1-2, 1977, pp. 90-105; y Vivian Vallens, *Working women in Mexico during the Porfiriato, 1880-1910* (San Francisco, R&E Research Associates, 1978).

[11] Cónsul de Estados Unidos en Veracruz William W. Canada, citado en Cockcroft, *Precursores*, p. 140.

[12] Para más información sobre "Santa Teresa", véase Hedda Garza, *Latinas: Hispanic women in the United States* (Danbury, Franklin Watts, 1994), pp. 40-41, y Paul Vanderwood, "Santa Teresa: Mexico's Joan of Arc", en Judith Ewell y William H. Beezley, comps., *The human tradition in Latin America: the nineteenth century* (Wilmington, Scholarly Resources, 1989), pp. 215-32.

y políticas dictatoriales de control sobre una población pertinaz. Las zonas rurales, las minas y los campos petroleros no se caracterizaban por el supuesto "feudalismo" sino por un verdadero capitalismo de principios de siglo. México como país era menos una nación independiente que un país empresarial: esto es, un país capitalista en donde los inversionistas extranjeros ejercían influencia notable sobre las tomas de decisiones económicas.

Podría parecer que Díaz y las políticas que él patrocinaba e instituía, estaban bien afianzadas para principios del decenio de 1900. Pero las semillas de la discordia eran evidentes en todos los niveles: en los conflictos dentro de la burguesía sobre las ventajas de los lazos con el capital extranjero como algo opuesto a una mayor independencia; en las tensiones entre las fracciones agroexportadoras e industrial-financieras de la burguesía; en la inquietud por parte de los comerciantes y productores pequeñoburgueses arruinados o bloqueados por las fuerzas del capital monopolista; en el resentimiento entre intelectuales y profesionales dejados fuera del poder por un régimen autoritario restrictivo; en la amargura entre los burócratas de bajo nivel por haber sido bloqueados para ascender a los rangos superiores; en el desbordante descontento entre campesinos, indios y mujeres por los abusos físicos y la pérdida de tierras y derechos comunales, y en una creciente inquietud entre los proletarios urbanos por las miserables condiciones de trabajo y salarios. Sumado a todo esto, había un partido político clandestino de oposición que lentamente iba construyendo una base de apoyo, especialmente entre los trabajadores: el PLM.

El movimiento precursor

Las dos primeras décadas del porfiriato estuvieron marcadas por una división en el movimiento de los trabajadores urbanos en dos sectores. La mayor parte de los maestros artesanos y de los obreros mejor pagados, respaldados por los intelectuales moderados, deseaban obtener un *modus vivendi* con la dictadura de Díaz. El sector más radical incluía a miembros del proletariado industrial y a empleados de los talleres artesanales, apoyados por los intelectuales radicales, que empezaban a buscar soluciones más revolucionarias y proletarias. Durante la primera década del siglo XX, cuando un incremento de la producción en la industria textil, de bebidas, cemento, ladrillos, minería, impresión y de cigarros y cigarrillos estaba asestando el golpe final a todos salvo a una minoría de artesanos independientes, el reducido artesanado junto con números cada vez mayores de proletarios industriales empezaron a plantear demandas revolucionarias. Estallaron varias huelgas, generalmente organizadas por el PLM. Durante todo el porfiriato se produjeron 250 huelgas, principalmente en textiles, tabaco, ferrocarriles, minería y panaderías.

Organizado oficialmente en 1905, el PLM tenía sus raíces en los cientos de "clubes liberales" fundados a principios de siglo por irritados liberales e intelectuales burgueses de las clases intermedias descontentos por el autoritaris-

mo del régimen y sus concesiones al clero.[13] Los líderes del PLM, como los anarquistas Ricardo y Enrique Flores Magón y Antonio Díaz Soto y Gama (que más tarde sería un importante portavoz político e ideólogo de Zapata), radicalizaron el anticlericalismo en pro de la democracia de esos clubes y avanzaron sus demandas en una dirección clasista campesina y proletaria, lo cual les hizo perder a algunos de sus miembros burgueses y aceleró su supresión por el gobierno, pero también atrajo a un número creciente de obreros y campesinos. El PLM llegó a ser conocido como "los magonistas", por los tres hermanos Flores Magón: Ricardo, Enrique y Jesús.

El PLM hizo circular extensamente su programa reformista, parte significativa del cual se incorporaría a la Constitución de 1917. Exigía la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo, acabar con el trabajo infantil, y el fin del latifundismo, "la tierra para el que la trabaja", protección de los derechos humanos de los emigrantes mexicanos a Estados Unidos, el fin de la interferencia estadunidense en los asuntos de México, y un sólo periodo para el presidente.

El periódico clandestino del PLM, *Regeneración*, financiado principalmente con donativos de los trabajadores, llegaba a casi todas las zonas del país y para 1906 había alcanzado ya una circulación de 30 000 ejemplares. Era un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de Díaz, que encarcelaban y exiliaban a sus editores, incluso los asesinaban, y obligaban a inmovilizar las prensas, pero los patrocinadores del periódico siempre encontraban la manera de continuar su publicación.

En 1906 el PLM organizó una huelga contra una subsidiaria de Anaconda en la mina de Cananea en Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Los líderes de la huelga exigían para los trabajadores mexicanos paga igual que la de los estadunidenses y la promoción de los mexicanos a algunas de las posiciones ocupadas por ciudadanos del país vecino. Unos 275 voluntarios armados de Estados Unidos bajo las órdenes de seis *rangers* de Arizona ocuparon temporalmente Cananea, antes de ser remplazados por 2 000 soldados mexicanos que aplastaron la huelga. Murieron cerca de mil mineros. Como las protestas en las minas continuaron durante los años siguientes, las tropas de caballería de Estados Unidos se movilizaron a lo largo de la frontera entre Sonora y Arizona.

En 1906, el PLM se interesó en la organización político-militar y proclamó una ideología revolucionaria opuesta al imperialismo y a favor de los obreros y campesinos y los elementos progresistas de las clases medias y de la burguesía. Decenas de miles se unieron a su causa.

Desde 1906 hasta 1907 y nuevamente en 1908, el PLM organizó una serie de revueltas armadas en varios estados norteños y otros lugares, junto con una oleada de huelgas por todo el país. Todas estas revueltas y huelgas fueron aplastadas

[13] Para más información sobre el PLM y este periodo, véase Cockcroft, *Precursores*; Juan Gómez Quiñones, *Sembradores, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano: a eulogy and critique* (Los Angeles, Chicano Studies Research Center, UCLA, 1977); John M. Hart, *El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931* (México, Siglo XXI, 1980); y W. Dirk Raat, *Revoltosos: Mexico's rebels in the United States, 1903-1923* (College Station, Texas A&M University Press, 1981).

militarmente, de forma especialmente violenta en la zona de Veracruz de Río Blanco-Orizaba, en donde se produjeron dos matanzas sucesivas de trabajadores textiles en huelga (la huelga textil se extendió por todo el país). La segunda matanza tuvo lugar el 8 de enero de 1907, cuando familias de trabajadores se aproximaban a Río Blanco para recuperar los cuerpos de los muertos de la primera matanza. Las tropas federales mataron a unos mil miembros de las familias que se acercaban —hombres, mujeres y niños— en la que fue la matanza más sangrienta de todo el porfiriato.

En 1906, la Gran Liga de Empleados de Ferrocarril, que contaba con unos 10 000 miembros y estaba dominada por el PLM, lanzó la que un periódico llamó "una de las huelgas más serias registradas en nuestro país".[14] Los trabajadores ferrocarrileros atacaron de nuevo en 1908, interrumpiendo el tráfico por ferrocarril durante seis días. Sus líderes llamaron a la huelga cuando les mostraron un telegrama de Díaz en el que les recordaba lo que les había sucedido a los huelguistas de Río Blanco. Los huelguistas ferrocarrileros fueron posteriormente fusilados.

Tras el fracaso de sus primeros levantamientos armados, el PLM declaró contar con diversas unidades guerrilleras operando en todo México. Estados Unidos reforzó con tropas la frontera entre 1908 y 1910. En agosto de 1910 ocurrió otro levantamiento armado del PLM en la región de la Huasteca de San Luis Potosí.

Aunque pocas en número, las mujeres en lucha contra Díaz —especialmente periodistas— avanzaron hasta sus primeras filas. Incluían a la maestra Juana B. Gutiérrez de Mendoza y a Elisa Acuña y Rosete, del periódico *Vesper* (1901), cofundadoras en 1907 del grupo de la ciudad de México "Socialistas mexicanas". Frecuentemente arrestadas, se encontraron en la cárcel con otras mujeres opositoras de Díaz, como la poeta Dolores Jiménez y Muro. Estas tres activistas fueron obligadas a huir a Estados Unidos. Fundaron un grupo feminista proobrero, las Hijas de Cuauhtémoc. Gutiérrez de Mendoza y Acuña y Rosete se unieron posteriormente al ejército de Zapata, llegando la primera a comandante de tropa.

"El trabajador es el brazo, el corazón del mundo", escribió la maestra de escuela, poeta y organizadora sindical Sara Estela Ramírez del periódico *La Corregidora*. Importante vocera del PLM, murió en 1910 a la edad de veintinueve años.[15] Mujeres trabajadoras, particularmente en las industrias textil y de cigarros y cigarrillos, fueron militantes activas en las huelgas del PLM.

El PLM animaba a las mujeres a engrosar sus filas como miembros de pleno derecho. Su líder más famoso y el más frecuentemente encarcelado, Ricardo Flores Magón, escribía en *Regeneración*:

> Las mujeres trabajan más que los hombres, se les paga menos, y la miseria, los malos tratos y los insultos son hoy como ayer la más amarga cosecha de toda una exis-

[14] *El Estandarte* de San Luis Potosí, citado en Cockcroft, *Precursores*, p. 133.
[15] Citado en Garza, *Latinas*, p. 45.

tencia de sacrificio [...] La servidumbre no reconoce sexos; la infamia [el capitalismo] que degrada a los hombres igualmente te degrada a ti.[16]

La "compañera" de Ricardo Flores Magón, María Talavera (el PLM juzgaba críticamente los matrimonios celebrados tanto por la Iglesia como por el gobierno de Díaz) fue descrita por *Los Angeles Times* como "una anarquista brillante y valerosa que se arriesga más que cualquiera de los hombres".[17] Igual que Ricardo, a menudo era arrestada y encarcelada por las autoridades estadunidenses. El *New York Times* observó en 1911 que "las mujeres han desempeñado un papel espectacular en la revolución".[18] Muchas de estas mujeres revolucionarias provenían del PLM, o se sentían inspiradas por él, y su columna vertebral fue conocida como el "movimiento precursor" de la Revolución mexicana.

Desde su exilio estadunidense a principios del decenio de 1900, los líderes del PLM organizaron a los trabajadores emigrantes mexicanos, de larga actividad en el suroeste de Estados Unidos, en donde la palabra "huelga" se escuchó antes que su equivalente inglés *strike*. El gobierno estadunidense y los detectives de Pinkerton perseguían a los organizadores sindicales magonistas, apaleándolos y encarcelándolos o manteniéndolos en constante inquietud como "inmigrantes ilegales", así como abriendo su correspondencia y coordinando las operaciones de inteligencia con la dictadura de Díaz. Los archivos muestran que los gobiernos mexicano y estadunidense coordinaban sus acciones represivas contra el PLM en ambos lados de la frontera.

Ricardo Flores Magón, que acabaría muriendo en circunstancias misteriosas en la prisión de Fort Leavenworth en 1922, y otros exiliados políticos mexicanos, recibieron considerable apoyo de las comunidades mexicanas rápidamente crecientes de Los Ángeles y el suroeste de Estados Unidos. Los trabajadores estadunidenses y mexicanos en los movimientos insurgentes anarquista y socialista, dirigidos por personas como Emma Goldman y Eugene V. Debs, se unían a las campañas en defensa de los líderes del PLM cada vez que éstos eran encarcelados. La cooperación internacionalista del PLM con radicales sindicalistas estadunidenses como Industrial Workers of the World (IWW, fundado en 1905) condujo a acusaciones espurias del gobierno de Díaz de que el PLM era "antimexicano". El gobierno atacó el papel del PLM en las revueltas surgidas desde 1906 hasta 1908, las acciones militares subsiguientes en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, y la liberación armada del norte de Baja California a principios de 1911, llamando a los rebeldes patrocinados por Estados Unidos "filibusteros".

El PLM perdió a algunos de sus miembros después de declarar en junio de 1908 su total compromiso con una ideología anarquista. (A diferencia de los socialistas, los anarquistas pedían la abolición del estado.) Algunos prominentes

[16] *Regeneración*, 24 de septiembre de 1910, citado en Garza, *Latinas*, p. 44.
[17] Citado en Garza, *Latinas*, p. 48.
[18] *New York Times*, 10 de mayo de 1911, citado en Garza, *Latinas*, p. 45.

líderes del PLM que se oponían al giro hacia el anarquismo, permanecieron en la organización hasta 1911 o incluso más tarde, pero las diferencias ideológicas de opinión causaron problemas mayores después de 1908. Debs y otros muchos socialistas estadunidenses interrumpieron su apoyo al PLM a principios de 1911 cuando decidieron respaldar el movimiento revolucionario del candidato presidencial opuesto a Díaz, Francisco I. Madero, prominente figura política burguesa. Entre tanto, los mexicanos de Estados Unidos partidarios del PLM continuaban luchando. En la cima de la organización del IWW, más de la mitad del total de las cuotas anuales de la unión provenían de los trabajadores inmigrantes mexicanos, y la mitad de las víctimas de la famosa matanza de Ludlow en las minas de John D. Rockefeller en Colorado eran mexicanos, en su mayor parte mujeres y niños.[19]

Después de una gran depresión económica en 1907, desencadenada por un pánico en Wall Street, se quebrantó la unidad de la burguesía mexicana. Los banqueros se debilitaron repentinamente. Algunos capitalistas mexicanos respondieron trasladando sus inversiones a las manufacturas nacionales, lo que fortaleció a la creciente fracción industrial de la burguesía en comparación con las fracciones financiera y minera. La fracción industrial compró también las fábricas pequeñas que no pudieron sobrevivir a la crisis.

El gobierno de Díaz, alarmado ya por las revueltas armadas del PLM, tomó entonces una serie de medidas desesperadas que no satisficieron a nadie. Intentando frenar una avalancha sobre los bancos en 1908, el ministro de finanzas José Yves Limantour empezó a solicitar préstamos de los hacendados, alienando así a muchos en el entramado político de terratenientes y caciques del porfiriato. Los bancos fueron sobreampliados, se solicitaron más créditos, la producción minera se hundió, las industrias empezaron a cerrar, y muy pronto el desempleo sobrepasó la marca del 50 %. La escasez de alimentos causada al malograrse las cosechas y el hincapié del porfiriato en las exportaciones agrícolas profundizaron la crisis.

El gobierno intentó frenar la hemorragia económica otorgando las concesiones petroleras más valiosas a una firma británica, El Águila; comprando a los propietarios estadunidenses participaciones mayoritarias en los ferrocarriles, y cancelando los contratos ferroviarios con la Mexican Petroleum Company de Doheny. El gobierno estadunidense no consideró equitativos estos pasos. Después de todo, la producción mexicana de petróleo estaba aumentando: se *cuadruplicó* en 1910. Temiendo que los británicos estaban ganando posiciones junto a Díaz, los funcionarios estadunidenses empezaron a reconsiderar la opor-

[19] Garza, *Latinas*, pp. 45-50; Dan Georgakas, *Solidarity forever: the IWW reconsidered* (Chicago, Lakeview Press, 1985), pp. 30-53; Juan Gómez-Quiñones y Luis Leobardo Arroyo, *Orígenes del movimiento obrero chicano* (México, Era, 1978), pp. 77-78, *passim*. Sobre el papel absolutamente esencial de los mexicanos en las luchas por la justicia social y los derechos democráticos en Estados Unidos, generalmente omitido en los libros de historia estándar de "estudiosos" no latinos, véase James D. Cockcroft, *The Hispanic struggle for social justice* (Danbury, Franklin Watts, 1994); *Latinos in the struggle for equal education* (1995), y *Latinos in the making of the United States* (1995).

tunidad de volverse a acercar al gobierno de Díaz. El mismo Díaz dijo al periodista estadunidense James Creelman a principios de 1908 que no se presentaría a la reelección en 1910, cuando ya tendría ochenta años. Había comenzado la rebatiña por la sucesión.

Dentro de la burguesía, los financieros norteños, industriales y terratenientes eran los más descontentos. Achacaban la deteriorada situación económica a Limantour y los "científicos", así como al senil y retraído carácter del dictador y de los viejos que le rodeaban. Los futuros presidentes Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles eran oriundos todos ellos del norte. Ellos y otros como ellos comprendían que un cambio político para aumentar su voz en el gobierno podría mejorar sus empresas frente a los monopolios extranjeros (incluso si a menudo había de ser en alianza con los mismos) y expandían el mercado doméstico atrayendo al campesinado a la economía de consumo. Durante todo su gobierno, Díaz se había visto forzado a conceder mayor autonomía a los gobernadores de los estados norteños, en donde las élites se introducían cada vez más en la producción industrial y en el poder financiero y político, beneficiándose a menudo de las alianzas con los capitalistas estadunidenses, que tenían el 22 % de sus inversiones mexicanas en sólo tres estados del norte (Sonora, Chihuahua y Coahuila).[20]

La fracción financiera de la burguesía tenía fuerza en la mayor ciudad del norte, Monterrey, un próspero centro industrial. Estados norteños completos eran prácticamente "propiedad" de unas cuantas familias burguesas, siendo el caso más notorio el de Chihuahua, en donde la camarilla "liberal" Terrazas-Creel poseía la mayor parte de las tierras cultivables del estado y tenía grandes inversiones en ganado, algodón, la banca, los textiles y otras industrias manufactureras. También la producción agrícola del norte, particularmente en el noroeste, había sido provechosamente comercializada y se basaba en el trabajo asalariado.

Gran parte de la burguesía norteña respaldó el movimiento del Partido Democrático desde 1908 hasta 1909, cuando apoyaba la candidatura presidencial del general Bernardo Reyes. Sus primeros partidarios incluían a los futuros presidentes Madero (1911-1913) y Carranza (1917-1920), así como algunos "científicos". Díaz estaba dividido entre otorgar su apoyo a Reyes y a la burguesía industrial-financiera o al vicepresidente Ramón Corral, que representaba la red política subterránea de terratenientes-caciques fieles a la dictadura. Finalmente decidió enviar a Reyes a una misión de estudios militares en Europa y aceptar para sí mismo la nominación presidencial.[21]

[20] En San Luis Potosí, por ejemplo, de unas veinte familias de élite, trece estaban dedicadas a la industria, y dos de estos industriales fueron gobernadores durante todos los años del porfiriato a excepción de seis (durante los cuales fue un hacendado el que ocupó el cargo). Véase Cockcroft, *Precursores*, p. 27; Friedrich Katz, *La guerra secreta en México*, 2 vols. (México, Era, 1982), vol. 1, p. 24, citado en Valdés Ugalde, *Autonomía*, p. 91.

[21] Para más sobre los antecedentes de la Revolución mexicana y de los sucesos que la marcaron de 1910 a 1917, véase Rodney D. Anderson, *Outcasts in their own land: Mexican industrial*

En ese punto, la mayor parte de la burguesía urbana, en especial los industriales, y los terratenientes "modernos" de las zonas rurales comercializadas, dieron su apoyo al norteño Madero. Aunque era amigo personal tanto de Díaz como de Limantour, Madero había sido uno de los primeros sostenedores financieros del periódico del PLM *Regeneración*. Esto le hizo más fácil representar a la descontenta clase media y a la pequeña burguesía y también solicitar el apoyo de la única fuerza revolucionaria en escena, el PLM.

De hecho, Madero era un representante ideal para la burguesía en su hora de necesidad. La familia de Madero era muy respetada. Tenía intereses en el comercio, la banca, ganadería, producción de algodón, vinaterías, minería, refinación de minerales, hierro y acero y las industrias de guayule (hule) y textil. También se decía que en 1910 debía 8 millones de pesos a los bancos mexicanos. El propio Madero era el epítome de la ingenuidad e idealismo de la visión demócrata burguesa que veía el gobierno civil, la ley civil y el comportamiento civil —respaldados cuando fuese necesario por una fuerza militar adecuada— como componentes clave del proceso ordenado de la política "democrática". Él dejó claro este punto de vista en su libro de amplia circulación *La sucesión presidencial en 1910*, que pedía la modernización del sistema político.

Madero tenía amigos importantes dentro y fuera del gobierno, en casa y en el extranjero. Como Díaz, era un masón de alto grado. El año que pasó Madero estudiando tecnología agrícola en la Universidad de California en Berkeley y el hecho de que su hermano Gustavo poseyera acciones de la Standard Oil (lo que supuestamente ayudó a financiar la campaña electoral de Madero en 1910) sugerían una inclinación hacia la cooperación con Estados Unidos que podría haber sido un anuncio de la futura intervención de éste; que eventualmente apoyó a Madero tras bambalinas. Más tarde Madero recompensó a la Standard Oil con lo que un historiador definió como "una de las concesiones de negocios más parciales que puedan imaginarse".[22]

Irónicamente, la campaña presidencial de Madero en 1910 se basó en el lema original de Díaz "Sufragio efectivo, no reelección". En los escasos discursos que pudo pronunciar durante su campaña, Madero se opuso a las leyes de la Reforma liberal basándose en que violaban la libertad política y que los intereses religiosos ya no constituían una amenaza. Solamente hizo promesas vagas a los campesinos, al tiempo que informaba a los trabajadores que no habría re-

workers, 1906-1911 (DeKalb, Northern Illinois University Press, 1976); Anita Brenner, *The wind that swept Mexico* (Austin, University of Texas Press, 1971); Coatsworth, *Growth*; Cockcroft, *Precursores*; Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida* (México, Ediciones "El Caballito", 1973); François-Xavier Guerra, *México: del antiguo régimen a la revolución*, 2 vols. (México, Fondo de Cultura Económica, 1988); John M. Hart, *El anarquismo*, y *Revolutionary Mexico: the coming and process of the Mexican revolution* (Berkeley, University of California Press, 1987); Friedrich Katz, *La guerra secreta; The life and times of Pancho Villa* (Stanford, Stanford University Press, 1998); y *Francisco Villa: su vida y sus tiempos* (México, Era, 1998); Alan Knight, *The Mexican revolution*, 2 vols. (Cambridge, Cambridge University Press, 1986); y muchas otras fuentes citadas a lo largo de este capítulo.

[22] Hart, *Revolutionary Mexico*, p. 245.

ducciones en la jornada laboral o aumentos en los salarios "sino la libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan [...] el pueblo no pide pan, pide libertad".[23]

El PLM consideraba la política electoral de Madero "un crimen, porque el mal que aflige al pueblo mexicano no se cura con quitar a Díaz y poner en su lugar a otro hombre [...] Nuestras boletas electorales van a ser las balas que disparen nuestros fusiles."[24] También Díaz se oponía al sueño electoral de Madero, y le encarceló en San Luis Potosí. Pero el 5 de octubre de 1910, Madero escapó de la cárcel y huyó al exilio de Estados Unidos, desde donde emitió su llamado a la insurrección armada conocido como "Plan de San Luis Potosí". Puso la fecha del 20 de noviembre para el levantamiento nacional. Comprendía que su llamado podía desencadenar una ola revolucionaria que arrollaría no sólo a los porfiristas sino a todo el aparato burgués del estado, introduciendo un sistema revolucionario obrero-campesino de redistribución de la riqueza basado en la clase. El PLM, único aparato político-militar con experiencia en escena contrario a Díaz, propugnaba eso precisamente.

De hecho, la respuesta popular al llamamiento de Madero a un levantamiento armado fue instantáneo. En las numerosas batallas armadas lanzadas contra la dictadura, las fuerzas militares más importantes en el norte procedían de las filas del PLM y de los grupos armados liderados por Pascual Orozco, de Chihuahua, y (en menor medida) por Villa, mientras que los del sur provenían del ejército campesino conducido por Zapata en Morelos. Madero era un líder sin ejército propio, que lo organizaba todo desde el otro lado de la frontera. Entre tanto, las tropas del PLM ganaron una importante batalla en Casas Grandes, Chihuahua (diciembre), y prosiguieron adelante para tomar Mexicali, Baja California (enero), y Guadalupe, Chihuahua (febrero).

En tan gran necesidad de una victoria militar, Madero regresó a México para exigir el mando de las fuerzas revolucionarias que avanzaban sobre Zaragoza, Chihuahua. A punto de ser derrotado, Madero y otros se retiraron a la plaza fuerte del PLM, Guadalupe, en donde el comandante local Prisciliano G. Silva les dio una buena acogida. Llegaron tropas de refuerzo del PLM desde el otro lado de la frontera al mando de Lázaro Gutiérrez de Lara, miembro del ala de la minoría socialista del PLM. La mayoría del PLM, dirigida por Flores Magón, había mantenido en secreto sus planes de rebelión sin informar de ellos al ala socialista, lo que produjo resentimientos internos. Madero y Gutiérrez de Lara planearon en privado combinar sus fuerzas y "arrestar" al confiado Silva, que era leal a Flores Magón. El 14 de febrero de 1911 tomaron prisionero a Silva.[25] No es sorprendente que después de esto las diferencias ideológicas y los conflictos personales internos se profundizasen, tanto en el PLM como en la Revolución mexicana.

Buscando todavía una victoria militar, Madero fue con sus seguidores armados para entrar en batalla en Casas Grandes, Chihuahua, en donde fue de-

[23] Cockcroft, *Precursores*, p. 149.

[24] *Regeneración*, 3 de septiembre y 8 de octubre de 1910, citado en *ibid.*, pp. 162-63.

[25] *Ibid.*, pp. 181-82.

rrotado (6 de marzo). La batalla decisiva contra el ejército de Díaz tuvo lugar a principios de mayo en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue ganada por las tropas de Orozco, muchas de las cuales habían peleado lado a lado con los soldados del PLM en los primeros encuentros.

Las pérdidas militares de Díaz, que en gran parte fueron posibilitadas por los combatientes del PLM, forzaron al dictador a llegar a un compromiso con Madero, consagrado en los tratados de paz de Ciudad Juárez del 17-21 de mayo de 1911. Estos tratados permitieron a Díaz marchar al exilio, nombraron un presidente interino y anunciaron nuevas elecciones presidenciales para octubre. Pero la elección de Madero ese año no trajo la paz, el pan ni la libertad. La Revolución mexicana de 1910-1920 apenas acababa de empezar.

Revolución I: 1910-1913

Antes de su elección, Madero ordenó a las diversas bandas guerrilleras y ejércitos revolucionarios, incluyendo al suyo propio, que entregasen las armas. Muchos combatientes, confiando en sus declaraciones de que el ejército nacional regresaría a sus cuarteles ahora que las "elecciones democráticas" habían sido programadas, obedecieron su orden. Zapata se encontró con Madero y explicó que sus tropas campesinas no podían entregar las armas sin antes recibir garantías acerca de una reforma agraria. Madero le aseguró que en cuanto las armas fuesen entregadas, podría comenzar la reforma agraria. En agosto de 1911, el general Victoriano Huerta fue enviado a Morelos para supervisar la entrega de las armas de los zapatistas. Después de que la mayoría de los campesinos hubieron arrojado sus armas en un montón, Huerta ordenó a sus tropas abrir fuego contra ellos.

Tres meses más tarde, Zapata publicó su "Plan de Ayala", llamando a continuar la revolución hasta que las tierras fueran devueltas a los campesinos y se estableciera un régimen de justicia social. Los zapatistas volvieron a armarse, y se desencadenó en toda su furia una guerra de campesinos y obreros armados contra la burguesía. Mediante brillantes tácticas guerrilleras, las fuerzas de Zapata tomaron los centros principales de producción de azúcar, comercio, comunicaciones y administración gubernamental, dirigiéndolos como comunas basadas en las tradiciones campesinas de autogobierno: "la comuna de Morelos".[26]

En el norte, el PLM había establecido ya su comuna. Había tomado el norte de Baja California y la gobernó en gran medida según los principios anarquistas de igualitarismo y democracia local directa desde enero hasta junio de 1911. Sin embargo, sus éxitos en Baja California debilitaron al PLM en todos los demás lugares ya que tuvo que llevar a cuadros importantes desde el interior de México para defender su territorio liberado. Esto, unido a las dificultades ideo-

[26] La frase es de Gilly, *La revolución interrumpida*. Para más información sobre Zapata, véase Womack, *Zapata*.

lógicas internas y a problemas de liderazgo, como la traición de Gutiérrez de Lara contra Silva, causaron que el PLM perdiera prestigio en el resto de la nación.

Además, estaban surgiendo grandes movimientos de masas que desafiaban a Madero y a la burguesía. Por ejemplo, en marzo de 1912 Orozco declaró su oposición revolucionaria a Madero con un programa que incorporaba muchas de las demandas de clase del PLM. (La camarilla Terrazas-Creel respaldó oportunistamente a Orozco.) Y había otros levantamientos de clase por toda la nación. Como ha demostrado con documentos el historiador John M. Hart, las propiedades estadunidenses se convirtieron en blancos favoritos de las masas mexicanas alzadas.[27]

Para muchos campesinos depauperados, pequeños rancheros, comuneros indios o proletarios urbanos, la solución parecía obvia: recuperar la tierra y el agua, apoderarse de las fábricas, proveer para uno mismo, la familia y la comunidad y no para el patrón o el extranjero. Y esto es lo que miles de jornaleros y campesinos empezaron a poner en práctica. Sus acciones provocaron un incendio arrasador, a medida que los ejércitos campesinos, la tropa (los "federales" que fueron tan denostados en los corridos populares de este periodo) e incluso las bandas armadas comandadas por caciques cubrieron México de lado a lado con combates armados.

Los revolucionarios más activos del campesinado eran los trabajadores asalariados y jornaleros sin tierras. Como Luis Cabrera, partidario de la reforma agraria, dijo ante la Cámara de Diputados a fines de 1912: "La población rural [...] al no poseer ejidos, se ve forzada a vivir seis meses de jornales y los otros seis agarra su rifle y se vuelve zapatista."[28] Entre tanto, los medieros, arrendatarios y aparceros solían estar demasiado atareados tratando de alimentarse a sí mismos y a sus familias para poder tomar las armas. Algunos de ellos, sometidos a la autoridad de los hacendados (los llamados "acasillados") ni siquiera oían hablar de los sucesos que sacudían a México.[29]

Las mujeres revolucionarias o "soldaderas", entre las que algunas se autonombraban "generalas", desempeñaron un papel importante en la Revolución mexicana. Muchos niños también empuñaron el fusil. Era una época de fieras lealtades, mezcladas con mucho abuso de las mujeres, en donde una curiosa combinación de licencia y respeto dio origen a las "mujeres en armas" de México. Una ex tortillera llamada "La China" comandaba toda una unidad del ejército de Zapata. La maestra de escuela socialista Juana B. Gutiérrez de Mendoza llegó a coronela zapatista. Las mujeres también eran numerosas en los "batallones rojos", formados por trabajadores urbanos que se unieron a la lucha de la guerra civil después de que las fuerzas revolucionarias se dividieron en 1915. Más tarde,

[27] Véase Hart, *Revolutionary Mexico*.

[28] Citado en Antonio Díaz Soto y Gama, *La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata, su caudillo* (1960), p. 133.

[29] El autor expresa su agradecimiento a los ejidatarios de Michoacán, algunos de los cuales vivieron en haciendas hasta 1935, por haberle contado historias de su propia vida acerca de la falta de participación de los acasillados en lo que sucedió realmente.

muchas de estas heroínas revolucionarias de la vida real fueron transformadas mitológicamente por la cultura patriarcal mexicana bien fuese en prostitutas o en valientes seguidoras de los campamentos "torteando" para sus compañeros.[30]

Mientras la guerra de clases ardía, la "democracia parlamentaria" de Madero iba a la deriva. El general Huerta estaba cada vez más impaciente con los debates del Congreso socialmente improductivos y con la incapacidad del ejército para estabilizar la situación. En 1913, él y algunos de los generales partidarios de Díaz decidieron montar un golpe militar. Este golpe generó intercambios de artillería en la ciudad de México que duraron diez días y mataron a incontables civiles, por lo que es recordado como "la decena trágica".

La conjura para nombrar presidente a Huerta fue incubada en la embajada de Estados Unidos (el "pacto de la embajada"). El golpe tuvo como consecuencia el asesinato del presidente Madero y de su vicepresidente, aunque no está claro quién ordenó estas muertes. Basándose en investigaciones de archivos, el historiador Friedrich Katz concluyó que el embajador alemán en México creía que Madero había desagradado a sus anteriores protectores de la Standard Oil al no darles suficientes concesiones petroleras, causando que el gobierno de Estados Unidos le retirara su apoyo.[31]

No fue ésta la primera ni sería la última vez que los Estados Unidos intervinieran en México. La doctrina de política exterior de México sobre la no intervención en los asuntos internos de otras naciones fue un resultado de la reacción pública a experiencias como ésta.

Revolución II: 1913-1914

La opinión pública mexicana consideró entonces a Huerta y a los partidarios de Díaz que lo rodeaban como "usurpadores" y "contrarrevolucionarios". Campesinos y obreros se apresuraban a unirse a Zapata en el sur o a Villa en el norte. Durante los tres años siguientes, ejércitos regionales populares se enfrentaron a las tropas federales a todo lo ancho de México en un verdadero diluvio de balas.

Finalmente, los revolucionarios se dividieron en dos amplios campos contendientes, uno "radical" dirigido por Zapata y Villa y otro "moderado" dirigido por el terrateniente y capitalista norteño Venustiano Carranza, un ex gobernador bajo Díaz, y su talentoso general en jefe, Álvaro Obregón, que había estudiado hasta el sexto grado, aprendido mecánica y cultivado garbanzos con éxito en sus tierras del estado norteño de Sonora. Carranza decretó la pena de muerte para los prisioneros, aumentando aún más la carnicería.

[30] Para más información, véase Fowler-Salamini y Vaughan, *Women*; Garza, *Latinas*, pp. 44-48; María Herrera-Sobek, *The Mexican corrido: a feminist analysis* (Bloomington, Indiana University Press, 1990); Elizabeth Salas, *Soldaderas in the Mexican military: myth and history* (Austin, University of Texas Press, 1990), y Shirlene Soto, *Emergence of the modern Mexican woman. Her participation in revolution and struggle for equality, 1910-1940* (Denver, Arden Press, 1990).

[31] Véase Katz, *La guerra secreta*.

Las fuerzas de Carranza-Obregón fueron conocidas como los "constitucionalistas", en una representación simbólica de la supuesta defensa por sus líderes de las normas constitucionales y de la legitimidad democrática. Incluían a muchos profesionales de clase media y a prósperos agricultores, rancheros e incluso terratenientes que compartían los antecedentes de clase y los objetivos de la dirigencia. Muchos soldados rasos proletarios y campesinos se unieron también a sus filas, creyendo en las promesas propagandísticas, como la que hizo Carranza antes de un ataque el 23 de septiembre de 1913: "Una vez que el conflicto armado [...] haya concluido, la formidable y majestuosa lucha social tendrá que empezar, la guerra de clases, tanto si nosotros lo queremos como si no."[32]

Obregón comprendía la importancia estratégica de estar abiertos a la izquierda y agrupó en torno suyo a muchos intelectuales y nacionalistas de tendencias izquierdistas con fuertes tendencias "jacobinas" (o sea radicales). Carranza escuchó el consejo de Obregón y decretó leyes de reforma obreras y agrarias progresistas a fines de 1914 y principios de 1915, lo que ayudó a atraer mayor apoyo popular. Sin embargo, no deseaba formar una alianza abierta con la clase obrera.

Por otra parte, Obregón comprendía que semejante alianza era necesaria para ganar la guerra civil e implementar el proyecto político de la fracción modernizadora de la burguesía industrial-financiera. Las ideas socialistas y anarco-sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial de los trabajadores urbanos —que fue clausurada por Huerta en mayo de 1914— no le parecían peligrosas. Él creía que "el principal objetivo del socialismo es tender una mano a los oprimidos con el fin de establecer un equilibrio mayor entre el capital y los trabajadores".[33] En otras palabras, el socialismo podía ser cooptado para servir a los objetivos capitalistas.

Otro constitucionalista radical de la época era Salvador Alvarado, antiguo propietario de un pequeño negocio en Sonora que introdujo medidas socialistas como gobernador de Yucatán entre 1915 y 1917. Una declaración que hizo en 1919 ilumina aún más el carácter burgués del "socialismo" de los constitucionalistas:

> Hoy día hay una fórmula para el bien colectivo, a saber, la socialización del estado... [bajo un estado socializado] el capitalista será capaz de dedicarse a sus negocios en paz sin las ansiedades que hoy inquietan sus horas. El capital, que no es más que trabajo acumulado, estará de perfecto acuerdo con el trabajo real y efectivo, porque cada uno necesita del otro como base incuestionable para el bien de todos.[34]

[32] Citado en Jesús Silva Herzog, *Breve historia de la Revolución mexicana* (México, Fondo de Cultura Económica, 1947), vol. 1, pp. 34-35.

[33] Álvaro Obregón, *Discursos* (México, Biblioteca de la Dirección General de Educación Militar, 1932), vol. 1, p. 279.

[34] Salvador Alvarado, *La reconstrucción de México: Un mensaje a los pueblos de América* (México, J. Ballescá y Cía., 1919), vol. 3, pp. 91-94.

En Yucatán, Alvarado estaba respaldado por 7 000 efectivos, peones cuyas deudas eran perdonadas, trabajadores a los que se permitía organizarse, y hacendados de segunda fila que eran designados para administrar los departamentos del estado que regulaban el mercado del henequén y prosperaban gracias al triple aumento en los precios mundiales de la fibra estimulado por el estallido de la primera guerra mundial. El dinero de los contratos para la venta de henequén con la International Harvester ayudó a financiar los gastos de guerra de los constitucionalistas, como lo hicieron los fondos obtenidos de las ventas de hule a empresas estadunidenses en el vecino estado de Campeche.

Los partidarios de Villa, por otro lado, provenían de diversas clases sociales. El mismo Villa era un trabajador de aspecto fornido que no fumaba ni bebía, pero que según se dice podía bailar mucho más tiempo que nadie. Tenía un muy fuerte sentido de la justicia. Había sido fanático admirador de Madero desde que el presidente mártir ayudó a salvarle la vida en 1912 cuando el general Huerta estuvo a punto de mandarlo ejecutar. De modo que Villa daba acogida en su campamento a cualquiera que pudiera mostrar credenciales maderistas, y su ejército y estado mayor absorbieron a gran parte de la burocracia gubernamental de Madero. (Martín Luis Guzmán, que más tarde sería famoso novelista, sirvió como secretario en el campo de Villa.)

En los rangos más elevados de los seguidores de Villa se encontraban más vaqueros o charros, rancheros y tenderos pequeñoburgueses que campesinos comuneros; los soldados rasos eran por lo general vaqueros, peones agrícolas, jornaleros, agricultores migrantes que habían perdido sus tierras, mineros, ferrocarrileros y desempleados. Los objetivos de los villistas estaban así más orientados hacia los obreros y pequeñoburgueses que hacia los campesinos, aunque muchos villistas estaban muy interesados en reclamar tierras. Los caudillos villistas, como capataces de grandes haciendas, rancheros, vaqueros o agricultores independientes habían mandado a campesinos, pero pocos de ellos habían experimentado personalmente el hambre de tierra. Los obreros villistas, a diferencia de los campesinos sin tierras, estaban más interesados en empleos lucrativos que en trabajar la tierra ellos mismos.

Las tierras tomadas por el ejército de Villa a menudo eran conservadas por el estado, no entregadas a los campesinos. La tierra y la reforma agraria eran no obstante exigidas por más villistas de lo que suele reconocerse.[35] Villa expropió muchas de las tierras de la camarilla Terrazas-Creel, pero otros intereses industriales y financieros de esta camarilla sobrevivieron. La dinastía Terrazas-Creel consiguió reafirmar su poder después de 1920, cuando reconoció al nuevo estado "revolucionario", y sus miembros celebraron matrimonios mixtos con algunos de los "nuevos revolucionarios". (Hoy día, los Creel forman un importante grupo industrial.) Además, la mayoría de las propiedades estadunidenses en las

[35] Para evidencia acerca de esto, véase Katz, *Life and times*. Para más información sobre los villistas, véase Katz, *ibid.*, y *La guerra secreta*; y las observaciones personales de John Reed cuando iba con Villa, en John Reed, *Insurgent México* (Nueva York, International Publishers, 1969).

zonas villistas le pagaban impuestos a Villa (incluyendo la American Smelting and Refining así como las que poseía William Randolph Hearst) y así estaban protegidas de los campesinos. Villa dependía de Estados Unidos para conseguir armas y municiones, obtenidas a cambio de ganado y dinero en efectivo.

Huerta se dirigió a los británicos en busca de ayuda. Lord Cowdray, presidente de la empresa petrolera El Águila, le facilitó un préstamo que le ayudó a mantenerse en el poder. Huerta desconfiaba del nuevo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Rechazó a un enviado especial que Wilson mandó para que intentase comprarle. El presidente Wilson opinaba que Huerta era antidemócrata. Lo que estaba realmente en juego, por supuesto, no eran las inversiones en la democracia por parte de las potencias imperialistas competidoras —su prolongado apoyo a Díaz desmentía tal cosa— sino su deseo de controlar todo el petróleo mexicano. Las reservas de México eran grandes y la producción iba en aumento. Estados Unidos controlaba el 70%; Gran Bretaña el 27 por ciento.

El presidente Wilson procedió a retardar el reconocimiento del régimen de Huerta y estableció un bloqueo económico y un embargo de armas contra México. El secretario de estado William Jennings Bryan telegrafió a los representantes de Estados Unidos en México el 24 de noviembre de 1913, diciéndoles que la política respecto a Huerta consistía en "enajenarle las simpatías extranjeras y [...] obligarle a marcharse", recurriendo, en caso necesario, a "medios menos pacíficos para echarle".[36]

Los constitucionalistas obtuvieron fácilmente ayuda financiera y militar del gobierno y de los intereses petroleros estadunidenses. El presidente Wilson se lamentaba de que las ocasionales reformas sociales de Huerta, que superaban a las de la administración de Madero, podrían prolongar su permanencia en el poder. Por consiguiente, Wilson levantó el embargo de armas el 3 de febrero de 1914, con el fin de acelerar la ayuda militar a las fuerzas antihuertistas, especialmente a los constitucionalistas. Al mismo tiempo, el magnate petrolero Edward L. Doheny y otros inversionistas estadunidenses proporcionaron millones de dólares a los constitucionalistas de Carranza, en forma de créditos y equipos militares, y rehusaron pagar impuestos a Huerta.

En abril de 1914, declarando que tenía que impedir que un "barco cargado de municiones" alemán desembarcara y entregara su cargamento a Huerta, Estados Unidos envió a sus infantes de marina y fuerzas navales a ocupar Veracruz. En realidad, las armas y municiones en el barco alemán eran de fabricación estadunidense, compradas en Estados Unidos por los agentes de Huerta y embarcadas vía Europa para despistar a las autoridades federales estadunidenses. El hecho de que finalmente acabaran en un vapor alemán de la línea American-Hamburg había sido una simple coincidencia y no algo planeado originalmente. Eso no importaba: Wilson necesitaba un pretexto con el fin de

[36] US State Department, *Papers relating to the foreign relations* (Washington, Government Printing Office, 1914), p. 444.

afirmar el poder de Estados Unidos para determinar el curso de los acontecimientos internos de México.[37]

Cientos de civiles mexicanos perecieron durante el bombardeo e invasión de Veracruz. Los intentos latinoamericanos de mediación en el conflicto México-Estados Unidos provocó que el presidente Wilson dijera a sus diplomáticos que si fracasaban todos los intentos de alcanzar una solución tendiente a la democracia, "entonces el arreglo tendrá que venir de las armas, bien sean las nuestras o las de los constitucionalistas".[38]

La ocupación estadunidense de Veracruz tuvo graves consecuencias económicas para Huerta. Edith O'Shaughnessy, casada con el encargado de negocios de Estados Unidos en México, manifestó en aquellos momentos: "Con la toma de Veracruz, a través de cuyas aduanas entra una cuarta parte de todas las importaciones, Huerta está perdiendo un millón de pesos por mes, más o menos. Ciertamente le estamos aislando y debilitando a gran velocidad. 'El poder es el derecho.' Podemos empezar a enseñar esto en las escuelas."[39]

En Estados Unidos, Samuel Gompers y algunos otros líderes de la American Federation of Labor (AFL) apoyaron la invasión de México, mientras que los líderes obreros más izquierdistas protestaban enérgicamente contra la misma. El líder de los trabajadores mineros de izquierda William D. Haywood, todavía dolorosamente impresionado por la matanza de Ludlow, dijo a quienes le acusaban de falta de patriotismo que "es mejor ser traidor a un país que ser traidor a tu clase".[40]

Pronto los enemigos de Huerta empezaron a converger sobre la ciudad de México, con una carrera entre Zapata y Obregón para ver cual de los dos llegaba primero. Huerta transfirió tropas del norte de la ciudad de México al este, anticipando un avance militar de Estados Unidos sobre la capital desde Veracruz. De esta manera, la invasión estadunidense de Veracruz tuvo el efecto de permitir a Obregón un acceso más fácil a la ciudad de México desde el norte y ganar la carrera contra Zapata. Culpando al presidente Wilson de sus dificultades, Huerta dimitió el 8 de julio de 1914.

La invasión estadunidense redundó en ventaja para el campo constitucionalista también en otras formas. Cuando Carranza sacó a sus fuerzas de la Convención de Aguascalientes de octubre de 1914, comandada por las fuerzas antihuertistas, debido a las voces radicales que allá prevalecían, halló un refugio para ellas en el puerto de Veracruz ocupado por Estados Unidos. Allí podía al mismo tiempo controlar las lucrativas aduanas. Simultáneamente, Carranza hablaba públicamente de "arrojar a los invasores yanquis" y de "salvar la soberanía nacional". De esta manera podía reclamar el crédito por la mar-

[37] Véase Michael G. Meyer, "The arms of the Ypiranga", *Hispanic American Historical Review* 50, núm. 3 (agosto de 1970), pp. 543-56.

[38] US State Department, *Papers* (1914), p. 510.

[39] Edith O'Shaughnessy, *A diplomat's wife in Mexico* (Nueva York, Harper, 1916), p. 290.

[40] Citado en Gregg Andrews, *Shoulder to shoulder? The American Federation of Labor, the United States, and the Mexican revolution 1910-1924* (Berkeley, University of California Press, 1991), p. 33.

CUADRO 3
Intervenciones estadunidenses en México, 1906-1920

1906
Unos 275 voluntarios estadunidenses mandados por los *rangers* de Arizona, ocuparon temporalmente Cananea, Sonora, para ayudar a acabar la huelga dirigida por el PLM contra la empresa de cobre estadunidense. Cerca de cien trabajadores fueron muertos por los soldados mexicanos

1907-1916
La caballería de Estados Unidos y tropas regulares se movilizaron repetidamente en la zona fronteriza de Sonora-Arizona y otras áreas a lo largo de la frontera mexico-norteamericana para aplastar huelgas obreras en el suroeste de Estados Unidos y "contener" la Revolución mexicana.

1912-1913
El "pacto de la embajada [de Estados Unidos]" convirtió al general Huerta en presidente mediante un golpe militar contra el presidente Madero, elegido democráticamente.

1914-1915
Tropas estadunidenses tomaron Veracruz, con el resultado de cientos de civiles muertos durante la invasión, en un intento por aislar a Huerta, que se había alineado con los intereses petroleros británicos; Washington bloqueó los embarques de armas a Villa y Zapata y dio reconocimiento diplomático, préstamos y armas al hacendado Carranza, "primer jefe" del ala moderada de la Revolución, antivillista y antizapatista.

1916-1917
El general John J. Pershing dirigió a 6 000 efectivos en una invasión del norte de México, pero no logró capturar a Pancho Villa ni derrotar a su ejército.

1919-1920
Los planificadores militares estadunidenses elaboraron un "Special Plan Green", de 20 centímetros de grueso, para una invasión de México "y la sustitución de las tropas estadunidenses por efectivos mexicanos nativos" en caso de que hubiera problemas en los campos petroleros o a lo largo de las fronteras. El plan especial para una invasión fue mantenido hasta 1942, cuando México se convirtió en aliado de Estados Unidos en la segunda guerra mundial.

cha de las tropas estadunidenses de Veracruz, que siguió muy pronto a su llegada al puerto.

La misma Convención de Aguascalientes resultó un asunto tumultuoso. Soldados villistas y zapatistas llenaron el abarrotado vestíbulo de la convención con armas listas a disparar. Los ponentes de todas las tendencias señalaban posiciones que reflejaban muy bien las tendencias burguesas constitucionalistas y la identificación de zapatistas y villistas con los oprimidos. En cierto momento, el antiguo militante del PLM Antonio Díaz Soto y Gama, un abogado radical

influyente en el grupo de asesores de Zapata, creó una terrible confusión en la convención cuando arrugó una bandera mexicana en su puño declarando que simbolizaba "la mentira de la historia" puesto que "nuestra independencia no fue independencia para la raza nativa, sino sólo para los criollos", un desafío sensacional que hizo que varias pistolas se levantaran apuntando a su pecho.[41]

Las líneas de clase que separaban a las fuerzas de Zapata y Villa de los constitucionalistas seguían predominando en las mentes del "Centauro del Norte", como había sido llamado Villa por la prensa burguesa, y del "Atila del Sur", como había sido descrito Zapata. En diciembre de 1914, los dos hombres se encontraron por primera vez, al sur de la ciudad de México. Los observadores registraron cuán nerviosos y lacónicos se mostraban ambos hombres. Pero la mención de algunos de los líderes constitucionalistas hizo que se disparase este repentino estallido:

> Villa: —Son hombres que siempre durmieron en almohadas de pluma.
> Zapata: —¡Esos cabrones! En cuanto ven la más pequeña oportunidad, bueno, ¡quieren sacar provecho para llenarse sus bolsillos! Bien ¡al diablo con ellos![42]

Zapata y Villa se pusieron de acuerdo para luchar contra el enemigo común —representado a sus ojos por los constitucionalistas. Cada uno regresó a su respectivo cuartel general, dispuesto a prepararse para el asalto que había de seguir.

Revolución III: 1915-1920

Los constitucionalistas Obregón y Carranza estaban también movilizándose para la guerra civil. Comprendiendo la necesidad de separar a los trabajadores urbanos de sus antiguos aliados, los campesinos, Obregón acabó por convencer a Carranza de la necesidad de aceptar el apoyo de los obreros. La clave era la Casa del Obrero Mundial, con sus 50 000 miembros, cuya base estaba en la ciudad de México pero que tenía afiliados regionales esparcidos por toda la nación. La Casa había sindicalizado a los trabajadores industriales en fábricas de zapatos, imprentas, cervecerías, fundiciones, molinos y diversas industrias medianas y pequeñas, y había organizado huelgas en áreas urbanas. Gradualmente había evolucionado desde su ideología anarquista hasta una mezcla de ideas que combinaba el anarcosindicalismo (que intentaba sustituir al estado por un sindicato industrial nacional) con las muchas ramas del socialismo que por entonces se difundían en México.

A principios de 1915, Obregón dio a la Casa ayuda material a cambio de que organizase a sus miembros en "batallones rojos" para ayudar a derrotar a los

[41] Citado en Robert E. Quirk, *The Mexican revolution, 1914-1951: the Convention of Aguascalientes* (Nueva York, The Citadel Press, 1963), pp. 109-11.

[42] *Ibid.*, pp. 135-38.

ejércitos de Villa y Zapata. El acuerdo entre Obregón y la Casa dividió a los trabajadores y campesinos y condujo a la victoria militar de Carranza.

La decisión de la Casa de respaldar a los constitucionalistas fue el punto clave en la Revolución mexicana. Firmó la condena de la naciente guerra obrero-campesina contra la burguesía. Además de estar en una necesidad desesperada de alimentos y otros productos, los miembros de la Casa tenían diferencias culturales que los separaban de los campesinos. No se sentían favorablemente impresionados por la aparente religiosidad de los zapatistas, su hábito de llevar la bandera de la Virgen de Guadalupe por las calles de México, o por la costumbre de algunos villistas de saquear las casas. Explicando tiempo después su propio papel al optar por los "batallones rojos", que ayudó a organizar y dirigir, el miembro de la Casa Rosendo Salazar señaló que en condiciones tan difíciles que bordeaban la muerte por hambre, la Casa se permitió a sí misma "ser comprada" por Obregón,[43] socavando así su anterior autonomía y conduciendo a su final desaparición en agosto de 1916.

Pero a corto plazo la alianza entre la clase trabajadora urbana y la burguesía dio a los trabajadores urbanos una nueva oportunidad para extender su movimiento y consolidar su posición. Los seis batallones rojos de la Casa sumaban 7 000 efectivos y representaron un papel clave en la serie de victorias militares constitucionalistas que se sucedieron. Las mujeres obreras de la ciudad de México organizaron a 1 500 ácratas (los contrarios a toda autoridad), para servir junto a los batallones rojos.[44] Éstos ayudaron a empujar a Villa de regreso hasta la norteña Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde su ejército, reducido de tamaño, quedó aislado. Así se introdujo una cuña entre los villistas y los zapatistas, que no podían ayudar a Villa desde sus plazas fuertes en Morelos cientos de kilómetros al sur. Además, algunos batallones rojos avanzaron contra los zapatistas, ayudando a mantenerlos recluidos en el sur.

Hasta este momento, el impulso de la Revolución reflejaba la relativa unidad de obreros y campesinos. Esta unidad quedó rota por la alianza entre la clase trabajadora urbana, con sus ideas izquierdistas y su récord de huelgas militantes contra el capital, y la burguesía ilustrada representada aquí por Obregón, con su disposición a hacer concesiones al proletariado cuando fuese necesario. Desde 1915 en adelante, la clase obrera organizada en México permaneció estrechamente asociada con el estado, que empezó a practicar un estilo retórico e incongruente de lo que el politólogo Arnaldo Córdova llamó la "política de las masas".[45]

El gobierno concedió la mayoría de las demandas de los trabajadores en la huelga de mayo de 1916 respaldada por la Casa, cuyos miembros habían aumen-

[43] Véase Rosendo Salazar, *La Casa del Obrero Mundial* (México, Costa Amic, 1963), así como otras obras de Salazar, especialmente, con José G. Escobedo, *Las pugnas de la gleba, 1907-1922* (México, 1922), 2 vols.; véase vol. 1, pp. 157-60.

[44] Véase Hart, *Revolutionary Mexico*, pp. 242-43 (pie de foto).

[45] Arnaldo Córdova, "México: revolución burguesa y política de masas", en Aguilar Camín, comp., *Interpretaciones*, pp. 55-89.

tado a 90 000. Uno de los firmantes de los acuerdos fue Luis Morones, que en 1918 fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), un pilar en apoyo de los gobiernos burgueses de la década de los veinte. Por otra parte, en febrero de 1916 el gobierno clausuró el cuartel general de la Casa y encarceló a sus dirigentes regionales. Luego ordenó al ejército que aplastara la huelga general que se desarrolló desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto. El propio "primer jefe" Carranza desempolvó un estatuto de Juárez fechado en 1862 que decretaba la pena de muerte para cualquiera que "atentase contra el orden público". La "política de masas" era obviamente la del puño de hierro en guante de terciopelo.

Mientras tanto, Estados Unidos proporcionó armas a la facción de Carranza y, en octubre de 1915, otorgó el reconocimiento diplomático a su gobierno. Como escribió en sus notas privadas el secretario de estado de Estados Unidos Robert Lansing, Carranza era el menor de los males y podía ser ganado mediante la diplomacia del dólar, mientras que Zapata y Villa podrían ser más intransigentes: "El problema real que Carranza tendrá que enfrentar es financiero. No tiene crédito: su papel moneda carece de valor; su fuente de ingresos es incierta y sus soldados están sin paga. En esto podemos ayudarle."[46]

México había estado en situación de insolvencia con sus bonos desde 1913. El departamento de Estado de Estados Unidos conferenció con Thomas W. Lamont, socio principal de la banca de inversión J.P.Morgan & Company, y elaboró un plan para que un comité internacional de banqueros manejara las negociaciones con México con el fin de replantear los pagos de la deuda y planear garantías para préstamos futuros. El comité de banqueros estaba, en palabras del Departamento de Estado, "bajo la dirección de banqueros estadunidenses y la política del gobierno de Estados Unidos con respecto a México [habrá de ser] la influencia dominante en las operaciones de este grupo". Como explicó León J. Cánova, de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado: "En el momento actual tenemos la sartén por el mango. Somos los banqueros del mundo."[47] El presidente Wilson, al señalar que "los amos del gobierno de Estados Unidos son los capitalistas y los fabricantes combinados", fue más tosco en reconocer el surgimiento de Estados Unidos como potencia imperialista mundial:

> ¿Saben ustedes el significado del solo hecho de que en el último año o dos hemos [...] dejado de ser una nación deudora para convertirnos en una nación acreedora? [...] Nos corresponde financiar al mundo en cierto grado importante, y aquellos que financian al mundo deben comprenderlo y dirigirlo con sus espíritus y con sus mentes.[48]

[46] Citado en Robert F. Smith, *The United States and revolutionary nationalism in Mexico, 1916-1932* (Chicago, University of Chicago Press, 1972), p. 576.

[47] *Ibid.*, pp. 580-81.

[48] Citado en Ferdinand Lundberg y Lyle Stuart, *The rich and the super-rich* (Nueva York, Bantam, 1969), p. 890; y Scott Nearing y Joseph Freeman, *Dollar diplomacy* (Nueva York, Monthly Review Press, 1969), p. 273.

Estados Unidos cortó el suministro de armas a Villa. En respuesta, éste lanzó un ataque punitivo contra la ciudad fronteriza de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. Entonces Estados Unidos ordenó al general John J. Pershing invadir México con 6 000 efectivos y capturar a Villa. Las tácticas guerrilleras de Villa trazaron círculos en torno al frustrado general, y la expedición Pershing se retiró de México en enero de 1917. Pero aunque fracasó en su misión principal, la expedición sí cumplió una cosa que facilitó el camino de Carranza hacia la victoria: mantuvo a Villa combatiendo en dos frentes e hizo real la amenaza de que otra invasión estadunidense podría ser lanzada contra Zapata. En consecuencia, algunos de los zapatistas entregaron sus armas y pidieron la amnistía a Carranza.[49]

Las derrotas militares de Villa en 1915-1916 y el creciente aislamiento de Zapata en el sur hizo posible para la triunfante ala moderada constitucionalista realizar la Convención Constitucional de Querétaro a fines de 1916. La Constitución de 1917 finalmente aprobada por los delegados fue un triunfo para el ala liberal de la democracia burguesa. Las fuerzas "jacobinas" leales a Obregón lograron salir vencedoras en muchos, aunque no en todos, los debates. Además de garantías para la propiedad privada y el sufragio [masculino] efectivo, la Constitución incluía los siguientes artículos: el Artículo 3º, que limitaba severamente los poderes de la Iglesia; el Artículo 27, que establecía la reforma agraria y la propiedad nacional de todos los minerales y subsuelos, incluyendo el petróleo, y el Artículo 123, garantizando a los trabajadores el derecho a formar sindicatos y a conducir huelgas "legales", con tribunales de arbitraje en los que habría representaciones iguales de los obreros, los empleadores y el gobierno.

Aun así, la Constitución de 1917 todavía confería la autoridad definitiva a la "nación", cuyo único representante era el poder ejecutivo del estado: el presidente. Así, el fuerte ejecutivo de los días de Juárez y Díaz se convirtió en la ley de la tierra, legitimando el poder del estado capitalista para gobernar y controlar el país.

Sabiamente, Carranza firmó la Constitución, aunque se oponía a gran parte de ella. No firmarla hubiera significado renovar la guerra civil. Como presidente elegido constitucionalmente desde 1917 hasta 1920, ignoró los artículos progresistas de la Constitución y gobernó con mano firme. Aprobó menos fondos para medidas sociales que Madero o Huerta en sus épocas respectivas, de manera que los largos años de guerra de clases sólo produjeron escasas ganancias para los campesinos y obreros, y no una verdadera revolución social.

Mientras tanto, Zapata y Villa continuaban luchando una guerra de guerrillas para hacer real la revolución social. Un agente de Carranza se infiltró en las filas de Zapata y le atrajo a una "conferencia de paz". Cuando se aproximaba al lugar de la conferencia el 10 de abril de 1919, Zapata fue emboscado y asesinado. Esto dejó al movimiento zapatista dividido y sin dirección.

[49] Womack, *Zapata*, pp. 300-17, 346-51.

Irónicamente, Carranza sufrió un destino similar en mayo de 1920 cuando, después de que intentó dejar a Obregón fuera del poder nombrando a su propio sucesor, un miembro partidario de Obregón de su propia guardia personal le asesinó. Villa, después de cinco años de guerra de guerrillas, aceptó un ofrecimiento de paz y se estableció en una hacienda que le dio el gobierno. Fue asesinado en 1923. Nuevas evidencias descubiertas en los archivos por el historiador Friedrich Katz sugieren que los gobiernos estadunidense y mexicano representaron un papel importante en el asesinato de Villa. El hombre convicto del asesinato de Villa fue liberado tras cumplir una pequeña parte de su larga sentencia y fue recibido por el presidente Obregón. Según un informe de la Oficina de Investigación de Estados Unidos (antecedente del FBI), una carta del sucesor de Obregón, Calles, señalaba que la condición final impuesta por el gobierno de Estados Unidos para el reconocimiento del gobierno de Obregón había sido el asesinato de Villa.[50]

Lecciones de la Revolución

La cuota de sufrimiento humano durante la Revolución mexicana fue espantosa. Cerca de dos millones de mexicanos perecieron (el 12 % de la población); muchos otros fueron heridos. Gran número de muertes fueron resultado de una atención médica y sanitaria inadecuada, así como por el hecho de que los generales imponían la pena de muerte a los soldados capturados, un precedente establecido por Carranza en 1913.

La división de obreros y campesinos en facciones enemigas facilitó la tarea a la burguesía. No obstante, la lucha combinada de obreros y campesinos, a pesar de haber sido tan duramente golpeados y divididos finalmente, socavó el estado oligárquico-capitalista y conquistó para la clase trabajadora derechos que se les habían negado durante largo tiempo. Su lucha hizo posible las limitadas concesiones democráticas y reformas sociales que caracterizaron a la Revolución mexicana. Y fue su lucha, mediante sus repetidos ataques a los poderosos burgueses extranjeros que databan de la huelga de Cananea organizada por el PLM, lo que dio fuerza real al nacionalismo y antimperialismo de la Revolución.

Las luchas obreras y campesinas fueron también responsables de la disposición de la burguesía a compartir el poder en el nuevo estado posterior a Díaz con cierto número de caudillos militares, caciques regionales, líderes obreros, propietarios de pequeños negocios, intelectuales y burócratas —las clases intermedias y la pequeña burguesía. Desafortunadamente, estos elementos demostraron ser fácilmente corruptibles. Su aceptación de los favores del estado, de puestos en la administración y la oportunidad de forjar políticas favorables a los capitalistas en gran escala reforzaron las tradiciones de corrupción en los

[50] Katz, *Life and times*.

puestos más altos y de posponer las anunciadas reformas (reforma agraria, convenios laborales, etc.). Puesto que estos individuos de la clase intermedia ganaban estatus, riqueza y poder cooperando así y beneficiándose del nuevo estado, una creciente convergencia de intereses de clase empezó a producirse, atando cada vez más a los principales miembros de las filas altas y medias de la pequeña burguesía y clases intermedias a la burguesía propiamente dicha.

Irónicamente, la ideología que iba a legitimar el proyecto hegemónico de la burguesía fue el de la "gloriosa Revolución mexicana", particularmente como se personificó en las declaraciones antimperialistas de Carranza, en la retórica de la reforma agraria, y en el llamamiento a todos los mexicanos a unirse y evitar un nuevo derramamiento de sangre. Así como el liberalismo se convirtió en la ideología de la burguesía en el siglo XIX, así "la Revolución" se convirtió ahora en la bandera ideológica que legitimaría el gobierno de la burguesía en el siglo XX.

En términos de los intereses clave de los campesinos y obreros, la Revolución no triunfó; pero tampoco fue abortada o "interrumpida".[51] Fue *derrotada*. Pero dado que el proyecto revolucionario del proletariado urbano y rural era de carácter histórico, desde antes de 1910 así como después de 1920, no podemos decir que los obreros y campesinos perdieran la guerra. Perdieron una batalla, pero la guerra continuó, aquí pacíficamente, allá violentamente, en las décadas por venir.

Sin embargo, no es así como suele verse la Revolución mexicana. Algunos autores la caracterizan como una verdadera revolución social, o como una revolución que derribó al feudalismo. Otros explican la derrota de los campesinos y obreros como un producto de su subdesarrollo político. Otros más ven el problema como falta de liderazgo en la forma de un partido de vanguardia. Cada una de estas tres interpretaciones tiene alguna falla.

Con respecto a la primera, no hay duda de que algunos elementos burgueses deseaban limpiar el paisaje de las haciendas y del peonaje endeudado con el fin de hacer prosperar la agricultura capitalista y las explotaciones de "tamaño mediano", tal como unos pocos habían intentado hacer medio siglo antes. Pero la noción de una "revolución burguesa contra el feudalismo" simplifica excesivamente una realidad mucho más compleja, incluyendo el dominio real del modo de producción capitalista antes de 1900. Tampoco podía la Revolución ser reducida al objetivo de sustituir la "acumulación originaria" de capital por una "acumulación de capital en escala ampliada", puesto que la última ya había comenzado. La Revolución simplemente eliminó los obstáculos para su continuación y avance.

Respecto de la segunda y errada interpretación, decir que el proletariado estaba "subdesarrollado" como clase, es al mismo tiempo condescendiente y distorsionada. Quizá la masiva penetración del capital monopolista extranjero

[51] Véase Gilly, *La revolución*, y algunas de las opiniones ofrecidas en Aguilar Camín, comp., *Interpretaciones*.

afectaba al llamado subdesarrollo de la burguesía mexicana, pero tenía un impacto contrario en la medida en que ello concernía a la clase trabajadora. Concentraba y centralizaba miles y miles de trabajadores en las fábricas, minas, patios de ferrocarril y molinos, formando así objetivamente un proletariado moderno (para su época), no un proletariado subdesarrollado.

Subjetivamente, este creciente proletariado se manifestaba, aunque erráticamente, en una forma militante y con ideologías típicamente proletarias (anarquismo, anarcosindicalismo, socialismo, etc.). La actividad desplegada con sus huelgas masivas en Cananea, Río Blanco, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, y en otras partes apenas reflejaba su subdesarrollo como clase. De hecho, precisamente debido a su *desarrollo*, sus miembros eran con frecuencia asesinados, como lo fueron cuando se abatió a los huelguistas en Río Blanco, Orizaba, y en Cananea en 1906-1907. Este mismo *desarrollo* del proletariado ayuda a explicar la ferocidad con que la guerra de clases llegó a ser tan sangrienta durante la Revolución. Entre los proletariados del mundo al inicio del siglo XX, el de México fue uno de los más militantes y avanzado en sus perspectivas de clase.

Pero había muchos campesinos y obreros cuya conciencia de clase seguía siendo inestable y confusa. En las áreas rurales, la confusa conciencia del campesinado estratificado reflejaba el hecho de que muchas formas de producción económica se combinaban —desde la agricultura capitalista en gran escala con maquinaria moderna hasta los cultivos de subsistencia tradicionales. Los campesinos, que actuaban para apoderarse de los medios de producción, anhelaban también la restauración de sus derechos sobre la tierra.

Respecto de la tercera interpretación errónea, de hecho México tenía una organización político-militar de vanguardia: primero en el PLM (hasta 1911) y luego en el "ejército del sur" zapatista. Así como la Comuna de París prefiguró el posible futuro del poder proletario en Europa hacia el final del siglo XIX, así la "comuna de Morelos" encarnó el posible futuro del poder obrero-campesino en América Latina a principios del siglo XX.

Otros factores, incluyendo el carácter limitado de las organizaciones de vanguardia, causaron la derrota del levantamiento obrero-campesino. Estos fueron la división entre campesinos y obreros en 1915, el regionalismo geográfico, las rivalidades de liderazgo personal e ideológico, la intervención de Estados Unidos y, no menos importante, el fracaso de la "comuna de Morelos" para llegar más allá de sus zonas liberadas y ofrecer un programa revolucionario concreto que reconociera *todas* las demandas obreras y campesinas e invitar a concretar alianzas de clase. La extensión de semejante programa con el modelo de la "comuna de Morelos" para respaldarlo, hubiera contribuido a una mayor unidad de la clase baja y la clase intermedia, capaz de transformar toda la estructura social de México.

De igual manera, el breve gobierno de la Convención de Aguascalientes de fines de 1914 y principios de 1915, que unió por corto tiempo a las fuerzas villistas y zapatistas, carecía de un programa revolucionario multiclasista claro y específico. La cuestión que surge, por supuesto, es la de qué hubiera sucedi-

do durante la fase de 1911-1915 de la Revolución si los líderes campesinos y obreros con conciencia de clase hubieran efectivamente organizado bien fuese una coalición de movimientos sociales o un partido de vanguardia comprometido con un programa revolucionario nacional que no estuviera dañado por los principios antiestatales y antiorganizativos del anarquismo. Porque en ese caso, como confirmaron más tarde las revoluciones anticapitalistas en otras partes del mundo, la burguesía muy bien pudiera haber sido derrotada en sus esfuerzos por dividir y controlar a las fuerzas revolucionarias.

Por último, si todas las explicaciones mencionadas de la Revolución y sus resultados están equivocadas, también lo está la creencia romántica de que la lucha de clases hoy día es la misma que la de ayer —la noción de que la Revolución mexicana es "permanente". Sin negar las raíces históricas de la lucha de clases contemporánea, debemos reconocer que México cambió considerablemente a partir de 1910— y aún más después de 1940 y después de 1968. Además, todos estos cambios estuvieron directamente relacionados con la Revolución de 1910-1920, y la consiguiente alteración e intensificación de la guerra de clase antimperialista durante los años veinte y treinta.

En resumen, la lucha de clases de campesinos, obreros y elementos de la clase intermedia se complicó por las confusas herencias de "la Revolución mexicana en el poder". Después de 1940, la "Revolución en el poder" estuvo expuesta cada vez más a ser una contrarrevolución social y a una dictadura de partido único.

Por eso fue que la Revolución mexicana no podía ser permanente. Pero la lucha de clases continuó, ajustándose necesariamente a las nuevas condiciones y aprendiendo de las lecciones del pasado. Quizá las tres lecciones históricas más importantes de la Revolución fueron: 1] el peligro de entregar las armas prematuramente y de confiar en los ofrecimientos de paz (los zapatistas en Morelos en 1910); 2] la trampa de permitir que se produjera una división antagonista entre la clase obrera y el proletariado rural y el campesinado (los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial en 1915), y 3] la necesidad de reconocer e incorporar las demandas y necesidades especiales de los oprimidos, especialmente de las mujeres y los indígenas.

CAPÍTULO 4

EL CORPORATIVISMO Y CÁRDENAS: 1920-1940

Cárdenas es como el sol: brilla sobre todo pero no calienta a nadie.
Dicho mexicano

La Revolución mexicana desmanteló un viejo estado oligárquico. Ahora era preciso construir uno nuevo. Empezando en 1917, los segmentos triunfantes de la burguesía, dirigidos por la burguesía industrial y financiera del norte (la llamada dinastía norteña, todavía influyente en la actualidad), emprendió su proyecto político para reconsolidar el estado capitalista mexicano a lo largo de nuevas líneas.

Cualquier estado, como ya hemos visto, se desarrolla de acuerdo con los intereses generales de la clase dirigente de su sociedad, o de una combinación de clases dominantes o fracciones de clase. Sirve para reproducir y reforzar las condiciones económicas de vida prevalecientes. Así fue como el estado mexicano siguió siendo un estado capitalista.

En cualquier sociedad el estado desempeña una variedad de funciones y puede adoptar muchas formas diferentes. Pero sigue siendo siempre el organizador de la sociedad en interés de la estructura de clases tomada globalmente. Si bien el estado está arraigado en la infraestructura económica de la que brota y a la que a su vez afecta, siempre conserva cierto grado de autonomía de la infraestructura.[1]

En la situación inmediatamente posrevolucionaria en México durante los años veinte, ninguna clase social o fracción de clase importante podía reclamar una hegemonía total o al menos bien definida. Era el tipo de situación que el marxista italiano Antonio Gramsci teorizaba como "equilibrio catastrófico".[2] La burguesía mexicana, victoriosa y en proceso de modernización, era todavía débil, y enfrentaba a la más poderosa burguesía de Estados Unidos con sus inmensas inversiones en sectores clave de la economía mexicana. Además, la

[1] Existe una vasta literatura teórica sobre el estado. Para una buena iniciación, véase Colin Hay, *Re-stating social and political change* (Bristol, Open University Press, 1996), y Martin Oppenheimer, *The state in modern society* (Atlantic Highlands, Humanities Press, 1999). Sobre el estado mexicano en particular, hay una creciente literatura demasiado extensa para citarla aquí sin mostrar injustos favoritismos. No obstante, las notas de pie de página de este libro mencionan muchos de estos trabajos.

[2] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (Nueva York, International Publishers, 1971).

burguesía mexicana tenía que luchar contra los rivales dentro de su propia clase y dentro de la Iglesia, que pretendían restaurar el antiguo orden oligárquico. Enfrentaba también retos por parte de los campesinos, obreros y radicales de la clase intermedia que exigían la puesta en práctica de las reformas prometidas por la Revolución y la Constitución de 1917.

Debido al continuo caos económico y a las renovadas luchas de poder entre las figuras políticas rivales y los caudillos militares, la política estatal hasta 1934 fue incongruente, en cierto momento económicamente nacionalista y en otro sometida a los intereses económicos extranjeros. Esto complicaba la construcción de un nuevo estado "moderno", que sólo adoptaría una forma más estable tras la fundación de un partido político nacional en 1929 y de reformas sociales y nacionalistas suficientes a mediados de los años treinta para aliviar las presiones de la constante agitación desde abajo.

Para mitigar la inquietud de las clases bajas y consolidarse, el nuevo estado capitalista de partido único tuvo que adoptar rasgos *corporativistas*[3] que sujetasen a su tutela a las organizaciones de masas de obreros y campesinos. Cada uno de los grupos de intereses —empresarios, obreros, campesinos, maestros y así sucesivamente— era animado a formar organizaciones con las que el estado pudiera trabajar. Para 1940, el estado ya era capaz de regular a las organizaciones de obreros, campesinos y clases intermedias en interés de un desarrollo capitalista más estable.

El "equilibrio catastrófico", la incierta situación económica y las tradiciones personalistas de corrupción de México impulsaron la influencia de los caudillos militares nacionales y regionales, que dirigían gran parte del aparato del estado, empezando por las presidencias del "primer jefe" Carranza y del general Obregón (1917-1924). Muy pronto los caudillos fueron capaces de convertirse —junto con muchos de los abogados, intelectuales y agitadores que se unían a sus gobiernos— en poderosos burócratas políticos que engordaban con los favores del estado a los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros.

La estructura capitalista de la economía condicionaba las políticas del estado, con el resultado de que se tomaban decisiones que facilitaban el desarrollo económico capitalista, y el correspondiente enriquecimiento de los burócratas y caudillos, que a menudo lograban unirse a las filas de la burguesía al separarse del gobierno. Con el tiempo, esta alianza informal estado/burguesía dio origen a una nueva élite política que fue conocida como "la familia revolucionaria".[4]

[3] "Corporativismo" se emplea aquí para describir un sistema político que para su legitimidad y perpetuación cuenta con una política de masas, en donde el estado capitalista otorga modestas concesiones a los movimientos populares y sujeta a las organizaciones de masas a su tutela y en donde quienes se resisten a tal incorporación son generalmente reprimidos con la fuerza del estado. El partido oficial sirve como comité administrativo de los asuntos de las organizaciones de masas en los asuntos de elecciones nacionales y locales. Varios autores han empleado el concepto "corporativismo" para el sistema político mexicano. Para un resumen, véase Arnaldo Córdova, "El desafío de la izquierda mexicana", *Nexos* 18 (junio de 1979), pp. 3-15.

[4] Véase Frank R. Brandenburg, *The making of modern Mexico* (Englewood Cliffs, Prentice-Hal, 1964).

El historiador Jean Meyer caracterizó el proceso como "dinero público que va a las empresas privadas por medio del Estado, o mejor dicho, por medio de los hombres que son el Estado".[5] El politólogo Francisco Valdés Ugalde lo ha dicho de este modo: "Los políticos se convirtieron en hombres de negocios gracias a la apropiación privada de los dineros públicos."[6]

Muchos "revolucionarios" se hicieron grandes capitalistas durante la década de 1920. Típico de este patrón fue Aarón Sáenz, pionero del influyente "grupo Sáenz". Durante sus desempeños a cargo de diversos puestos de gabinete en los gobiernos del decenio de 1920, Sáenz, antiguo miembro del estado mayor del ejército de Obregón, amplió los intereses de su empresa de construcción, con ayuda del estado, a empresas de refinación de azúcar, turismo, pulpa y papel, productos alimentarios, acero y banca, llegando a poseer para 1970 un imperio por valor de 150 millones de dólares.[7]

Empleando una retórica revolucionaria para cooptar a la mayoría y la represión del estado para aplastar a los elementos más militantes o izquierdistas, el nuevo estado de los años veinte y treinta demostró ser cada vez más capaz de introducir medidas "modernizadoras" que alentaban el crecimiento del capital monopolista. Estos pasos incluían la financiación estatal de la infraestructura económica; el cierre de las haciendas improductivas; reajuste o modificación del dominio del capital extranjero, especialmente en el petróleo; control corporativista de los movimientos obrero y campesino, y sometimiento del ala reaccionaria de la Iglesia. Esta tarea resultó difícil al principio por el alto nivel de conflicto de clases en México y por las tensiones entre las clases. Por ejemplo, hubo 1 289 huelgas entre 1920 y 1924, antes de que el "pacto social" entre los trabajadores urbanos de la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) y el presidente Obregón garantizase finalmente la paz laboral.

La división y derrota del desafío obrero-campesino de 1910-1915 y la subsiguiente tutela del estado sobre la fuerza de trabajo y su apoyo al capitalismo, con el tiempo proporcionaron suficientes oportunidades para que varios elementos burgueses importantes del periodo de Díaz (banqueros, industriales, terratenientes, etc.) recuperasen y aumentasen su fuerza económica. De hecho, grupos económicos tan poderosos como el grupo Monterrey y el del Banco Nacional de México, de capital privado, cuyas raíces se remontaban hasta el porfiriato, se beneficiaron de la situación. Los miembros más reaccionarios del grupo Monterrey, las familias Garza y Sada, diversificaron sus industrias de cerveza y vidrio entrando a la banca y al comercio, y para 1936 se habían conso-

[5] Jean Meyer, *Estado y sociedad con Calles 1924-1928*, en *Historia de la Revolución mexicana*, vol. 11 (México, El Colegio de México, 1977), p. 308, citado en Francisco Valdés Ugalde, *Autonomía y legitimidad: los empresarios, la política y el estado en México* (México, Siglo XXI, 1997), p. 116.

[6] Valdés Ugalde, *Autonomía*, p. 116.

[7] Para éste y otros ejemplos, véase Nora Hamilton, *The limits of state autonomy: post-revolutionary Mexico* (Princeton, Princeton University Press, 1982). Para más información sobre la evolución de la burguesía mexicana después de 1920, véase Roderic A. Camp, *Mexico's leaders: their education and recruitment* (Tucson, University of Arizona Press, 1980).

lidado en las compañías de *holding* VISA y FICA. Para combatir a los sindicatos en el nivel nacional, en 1929 Luis G. Sada fue la punta de lanza de la fundación de la organización empresarial Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana). El grupo del Banco Nacional de México, dirigido por la familia Legorreta, era menos reaccionario, pues toleraba o apoyaba medidas de reforma social. Ayudó a negociar la enorme deuda externa de México y en décadas posteriores ayudó a colocar los bonos mexicanos en los mercados estadunidenses y europeos.

Pero la burguesía mexicana no logró alcanzar su propia hegemonía de clase. Una razón de ello fue que el capital extranjero todavía dominaba la economía mexicana, que dependía de Estados Unidos en un 69% de sus importaciones y un 60% de sus exportaciones (principalmente materias primas, minerales y productos agrícolas). Hasta la nacionalización del petróleo en 1938, las compañías extranjeras dominaron casi totalmente la industria petrolera, la minería, la metalurgia, la industria textil y las principales áreas del comercio.

Otra razón por la que la burguesía mexicana seguía siendo relativamente débil era que la lucha de clases se intensificaba periódicamente, poniendo en cuestión su poder potencial. Razones adicionales, por supuesto, eran las crisis económicas que asolaban a México, como las de 1929 y la década siguiente.

Tanto el estado como la economía se desarrollaban sobre la base de las clases contendientes. Bajo el capitalismo, el estado desempeña un papel activo en la formación de clase e incluso en la creación de clases, así como en la acumulación de capital o de excedente económico. Cuando las vitales fracciones burguesas emergentes impulsan hacia delante el desarrollo del capitalismo buscando la hegemonía tanto económica como política, a menudo tienen que enfrentar la resistencia de fracciones más viejas de la clase dirigente, incluyendo a los indolentes propietarios de tierras, algunos miembros de la burguesía mercantil, ciertos banqueros atados a intereses extranjeros y otros por el estilo. Simultáneamente, todos estos intereses económicos dominantes pueden verse amenazados en común por fermentos de las capas inferiores, especialmente por aquellos que han sido proletarizados por el avance inexorable del capitalismo: por ejemplo, campesinos y obreros, como sucedió durante la Revolución mexicana. A falta de una transformación revolucionaria tanto de lo económico como de lo político en su interés propio, la siguiente mejor solución en tales situaciones, desde el punto de vista de quienes se benefician de la estructura globalmente explotadora, es delegar (o *aceptar*) suficiente poder por parte del estado (autonomía relativa) para satisfacer, en palabras de Engels, "las necesidades económicas de la situación nacional".[8]

De hecho, esto es lo que la mayor parte de la burguesía mexicana hizo a mediados de los años treinta, aunque de ninguna manera por su gusto. Fue entonces cuando las raíces corporativistas del estado mexicano moderno fueron finalmente establecidas.

[8] Friedrich Engels, carta a Danielson, 18 de junio de 1892, citado en Hal Draper, *Karl Marx's theory of revolution: state and bureaucracy* (Nueva York, Monthly Review Press, 1977), p. 585.

Interferencia extranjera y lucha de clases renovada

Tras el asesinato de Carranza en mayo de 1920, los ejércitos de Sonora mandados por Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, y apoyados por trabajadores armados de la CROM, consiguieron estabilizar la situación lo suficiente como para permitir la elección de Obregón. Eran varios los grandes capitalistas que desconfiaban del general Obregón. Los intereses agrícolas de la American Association of Mexico, entre otros, alentaron acciones de ruptura para desestabilizar a su gobierno.[9]

Estados Unidos rehusó dar su reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón, temiendo la expropiación de sus intereses petroleros bajo el Artículo 27 de la Constitución. Desde 1919 hasta la segunda guerra mundial, Estados Unidos regularmente diseñó planes de contingencia para una intervención militar unilateral que garantizase el acceso a los recursos petroleros. Una versión del "Special Plan Green" (para México) tenía más de 20 centímetros de grueso y, en lenguaje quizá relevante para los años venideros, llamaba a "la protección de los ciudadanos e intereses estadunidenses a lo largo de la frontera; la toma del petróleo de Tampico y de las cuencas carboníferas al sur de Eagle Pass; el bloqueo de los principales puertos mexicanos; el avance sobre la ciudad de México desde Veracruz; avances al sur de la frontera a lo largo de las vías férreas, y la ocupación y sustitución de las tropas de Estados Unidos por una policía mexicana bajo la dirección y control del mando norteamericano".[10]

Obregón aseguró a Estados Unidos que el Artículo 27 no era retroactivo y que por lo tanto no afectaría a las propiedades ya concedidas a los intereses petroleros extranjeros, pero Washington quería esa garantía por escrito. Thomas W. Lamont, de J. P. Morgan & Company, negoció un acuerdo con el gobierno de Obregón, concerniente a la deuda externa de México, estimada en tres veces más de lo que había sido en 1911 (sin contar mil millones de dólares adicionales en demandas extranjeras privadas). Finalmente, en 1923, los dos países firmaron los Acuerdos de Bucareli, que reafirmaban la cláusula no retroactiva

[9] Valdés Ugalde, *Autonomía*, p. 109, citando a Lorenzo Meyer, *Los grupos de presión en el México revolucionario, 1910-1940* (México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1973).

[10] John Child, *Unequal alliance: the Inter-American military system, 1938-1978* (Boulder, Westview Press, 1980), p. 13 (basado en US War Department, War Plans Division, "General Mexican War Plan", Entry 282, RG 165 y Entry 365, RG 407, US National Archives). Semejantes planeaciones de contingencias militares probablemente continúan en la actualidad. En Caspar Weinberger, *The next war* (Nueva York, Regnery, 1997), el ex secretario de defensa de Estados Unidos esboza un escenario de una invasión de México en 2003 para derrocar a un narco-gobierno y bloquear el flujo de refugiados a Estados Unidos. Para mayor información sobre el intervencionismo con el fin de proteger "su" petróleo, véase Jonathan C. Brown, *Oil and revolution in Mexico* (Berkeley, University of California Press, 1993); Brown y Alan Knight, comps., *The Mexican petroleum industry in the twentieth century* (Austin, University of Texas Press, 1992); Linda B. Hall, *Oil, banks, and politics: the United States and postrevolutionary Mexico, 1917-1924* (Austin, University of Texas Press, 1995), y Lorenzo Meyer, *México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942* (México, El Colegio de México, 1968).

que Obregón había aplicado al Artículo 27 y obligaba a México a pagar compensaciones por los daños ocasionados durante la Revolución a propiedades estadunidenses. Esto, junto con el asesinato de Pancho Villa, condujo a que Estados Unidos finalmente concediera su reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón.

El reconocimiento de Estados Unidos llegó en el momento más oportuno para Obregón, cuyo poder estaba siendo amenazado por generales rebeldes irritados por sus recortes en el presupuesto del ejército y que nominalmente dirigía su antiguo ministro del tesoro, Adolfo de la Huerta. Lo que desencadenó la revuelta fue la elección que hizo Obregón de Calles, su ministro del interior, para que se presentase como candidato a la presidencia en las elecciones de 1924. (La Constitución prohibía a Obregón sucederse a sí mismo.) Igual que Obregón, Calles era un constitucionalista sonorense, y el temor a su posible radicalismo empujó a muchos conservadores, hacendados y líderes católicos a alinearse junto a de la Huerta. Lo mismo hicieron algunos demócratas de clase media molestos por el carácter personalista y arbitrario de la sucesión presidencial.

Cierto número de nacionalistas contrarios a los Acuerdos de Bucareli y algunas organizaciones obreras independientes, que no estaban vinculadas a la alianza Obregón-CROM, se unieron también a la rebelión delahuertista. Los obreros estaban cada vez más resentidos por las tácticas de mano dura del corrupto líder sindical de la CROM, Luis Morones, que en forma rutinaria ordenaba el asesinato de los líderes obreros rivales, en particular de los de tendencia anarquista de la CGT (Confederación General de Trabajadores, que anteriormente, en los años veinte, había llegado a tener casi tantos miembros como la CROM). La American Federation of Labor (AFL) apoyaba a la CROM, y el presidente de la AFL, Samuel Gompers, proclamó a mediados de 1924 su satisfacción al ver lo que él llamaba "la rápida separación de las enseñanzas de las autoridades anarquistas y sindicalistas europeas que en tiempos anteriores eran tan prontamente aceptadas".[11] Luciendo resplandecientes anillos de brillantes, alguna corista colgada del brazo y viajando en un Cadillac a prueba de balas, Morones (que antes había sido un electricista anarquista) era el arquetipo del gángster disfrazado de líder sindical.

Durante unos pocos meses durante el levantamiento de de la Huerta, hubo feroces batallas entre las fuerzas rivales, costando la vida a 7 000 mexicanos. Tres cosas inclinaron la balanza militar a favor de Obregón y salvaron a

[11] Citado en Gregg Andrews, *Shoulder to shoulder? The American Federation of Labor, the United States, and the Mexican Revolution 1910-1924* (Berkeley, University of California Press, 1991), p. 195. Sobre los anarquistas, otros izquierdistas y la interacción entre varias organizaciones estadounidenses y mexicanas en este periodo así como en los años siguientes, véase Juan Gómez-Quiñones, *Mexican American labor, 1790-1990* (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994); John M. Hart, *El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931* (México, Siglo XXI, 1980); Donald C. Hodges, *Mexican anarchism after the Revolution* (Austin, University of Texas Press, 1995), y Daniel La Botz, "Slackers, wobblies and radicals: the impact of American exiles and migrants on the Mexican labor movement and state, 1917-1927", tesis de doctorado, University of Cincinnati, 1998.

su gobierno: los suministros bélicos de Estados Unidos; el apoyo de los campesinos militantes, cuyos intereses eran representados en el parlamento por el Partido Nacional Agrarista, dirigido por gente como Díaz Soto y Gama, antiguo consejero de Zapata, y el apoyo de la CROM, que organizó brigadas obreras y campesinas para ayudar a aplastar la revuelta. Estados Unidos intervino con mayor decisión aún del lado de Obregón enviando un crucero para bloquear el puerto petrolero de Tampico e impedir que las fuerzas contrarias a Obregón recibieran armas de fuentes externas anónimas. El 12 de junio de 1925, el secretario de estado Frank B. Kellogg dejó claro cuál era el precio por todo este apoyo:

> Debe quedar muy claro que este gobierno seguirá manteniendo al actual gobierno de México sólo en la medida en que éste proteja las vidas de norteamericanos y los derechos de los norteamericanos y cumpla sus acuerdos y obligaciones internacionales. El gobierno mexicano se enfrenta ahora al juicio de todo el mundo.[12]

Calles fue elegido en 1924 y procedió a intentar legitimar su poder apelando al nacionalismo de los mexicanos. Ordenó a los propietarios de pozos petroleros cambiar sus títulos por bonos a cincuenta años, contando desde la fecha de su adquisición: una violación clara de los Acuerdos de Bucareli. Los magnates petroleros exigían a gritos la intervención de Estados Unidos. Pero la opinión pública estadunidense se mostraba tibia. Los ciudadanos de Estados Unidos recordaban aún la humillación militar que Villa infligió a Pershing. Después del derramamiento de sangre de la primera guerra mundial, no estaban interesados en embarcarse en otro compromiso militar. Todavía peor, los escándalos del *Teapot Dome* que sacudieron a Washington a principios de los años veinte habían dado mala fama a figuras punteras del petróleo en México como Doheny y Albert B. Fall.

En 1927, el presidente Calvin Coolidge nombró a un nuevo e inteligente embajador en México: Dwight Morrow que, igual que Thomas W. Lamont, era socio de J. P. Morgan & Company. Morrow era un diplomático astuto. Decoró su casa de Cuernavaca con artesanías mexicanas y comisionó al gran muralista Diego Rivera para pintar un fresco en el palacio municipal local, halagando así el orgullo nacionalista mexicano. En esto no hacía sino imitar las acciones del gobierno mexicano. A principios de los años veinte, el ministro de educación José Vasconcelos había subsidiado un impresionante renacimiento mural, escultórico y literario que ayudó a legitimar al nuevo estado y su retórica nacionalista e indigenista, aunque sucesivos gobiernos no fueron capaces de garantizar a los indios auténticos derechos iguales o de instrumentar una reforma agraria que fuese algo más que simbólica.

Morrow y Lamont formaron un equipo eficaz. El ministro de finanzas Alberto Pani había fundado el Banco de México en 1925 y estimulado las conversaciones sobre los controles al capital extranjero. Pani explicaba que esto no

[12] Citado en Meyer, *México y Estados Unidos*, p. 87.

CUADRO 4
Intervenciones estadunidenses en México, 1920-1941

1920-1941
El "Special Plan Green" sobre una posible invasión de México para asegurar el acceso a los recursos petroleros, mantenido hasta 1942 cuando México se convirtió en aliado de Estados Unidos en la segunda guerra mundial.

1920-1923
Estados Unidos rehusó reconocer el gobierno electo hasta que éste firmó los Acuerdos de Bucareli con los que se protegían los intereses petroleros de Estados Unidos, y hasta que fue perpetrado el asesinato de Villa.

1924
Durante el levantamiento contra el gobierno, Estados Unidos suministró a Obregón equipos militares y envió un crucero para proteger el puerto petrolero de Tampico.

1932-1933
Estados Unidos deportó a más de 300 000 inmigrantes mexicanos, agravando el desempleo en México.

1938-1941
Después de que México nacionalizó el petróleo, Estados Unidos interrumpió su programa de compra de plata y retuvo los préstamos.

representaba "ninguna nivelación socialista utópica" sino que más bien tendía a estimular la empresa privada y la "formación y estimulación de una clase media autónoma".[13] Los Acuerdos Pani-Lamont de 1925 crearon un clima adecuado para renovar la cooperación mexico-norteamericana en el desarrollo capitalista de México. Los banqueros extranjeros aceptaron el nuevo banco estatal, al tiempo que México prometió devolver los ferrocarriles, parcialmente nacionalizados en los años finales de la dictadura de Díaz, a administradores extranjeros: una señal clara de que la banca estatal apoyaba a la empresa privada.

El embajador Morrow se reunía frecuentemente con el presidente Calles para estrechar relaciones más amistosas. En 1927 la Corte Suprema de México declaró inconstitucional la legislación petrolera del alquiler por cincuenta años. Dictaminó que los extranjeros que hubieran adquirido derechos sobre el subsuelo antes de 1917 tenían derecho a su concesión a perpetuidad. Morrow y Calles estaban completamente de acuerdo en que la cooperación entre el capital estadunidense y el mexicano representaba la clave para la futura prosperidad de México. Calles declaró públicamente que los intereses de México "pueden

[13] Citado en Robert F. Smith, "The Morrow mission and the international commission of bankers on Mexico: the interaction of finance diplomacy and the new Mexican elite", *Journal of Latin American Studies* 1, núm. 2 (noviembre de 1969), p. 150.

satisfacerse sólo dentro de los límites establecidos por el así llamado sistema capitalista actual" y prometió "salvaguardar los intereses de los capitalistas extranjeros."[14]

Mientras tanto, durante los años veinte y treinta, la lucha de clases continuaba. La CROM organizó el Partido Mexicano del Trabajo y aseguró a los obreros que éste se transformaría en un "partido de clase". Pero en 1925 la CROM propuso una legislación —posteriormente incorporada a la Ley del Trabajo de 1931 todavía en gran medida vigente a mediados de los años noventa— que dio al estado un voto decisivo en los juicios de arbitraje sobre conflictos laborales: garantizaba al estado el poder de permitir o denegar una petición de huelga o para supervisar, como lo expresaba la propuesta de la CROM, "un equilibrio entre los diversos factores de la producción, que armoniza los derechos de trabajadores y empleadores" y marcaba una importante subordinación de la CROM ante el estado, pues los líderes sindicales importantes, anticipando los favores estatales al trabajo, ya no tomaban en serio la idea de formar un partido de clase. Mediante su "pacto social" con el estado, la CROM creó no un partido de clase sino una colaboración de clase.

A cambio de sus acuerdos para poner freno a las huelgas, a los líderes de la CROM se les permitía participar en los gabinetes de Calles y recibían licencias del gobierno para sus actividades sindicales. En ocasiones la CROM ayudaba al gobierno en su represión de las acciones laborales independientes, como la huelga de los ferrocarrileros de 1926, entre quienes predominaban los comunistas. El número de huelgas reconocidas oficialmente declinó a gran velocidad, desde 300 por año a principios de los años veinte hasta 71 en 1925 y a sólo 12 en 1928, no pasando de 60 hasta 1934 (año en que hubo 202).

En las zonas rurales ardía la guerra de clases. Campesinos y obreros se organizaban en ligas agrarias y sindicatos, presionando constantemente al estado por la reforma agraria y por armas para defenderse contra los pistoleros mercenarios de los hacendados. Obregón y Calles pretendían atraer a los campesinos bajo su tutela satisfaciendo las demandas de algunos de los pueblos más militantes y ligándolos dentro de un sistema de créditos estatales para semillas, fertilizantes y utensilios. Por otra parte, lanzaban repetidos ataques contra los grupos de campesinos independientes dirigidos por socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, como la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz.

El estado apoyaba el desarrollo de una burguesía agraria y comercial protegiendo de la legislación de la reforma agraria a los hacendados comerciales, en particular a los que producían para la exportación. También los favorecía con préstamos estatales. En 1926, el estado estableció un banco de crédito agrario, un banco de crédito ejidal y una comisión de irrigación. Todos estos favorecían a los propietarios privados, grandes y pequeños, y alentaban el crecimiento de una burguesía agraria —incrementada por antiguos oficiales del ejército o fun-

[14] Citado en James W. Wilkie, *The Mexican revolution: federal expenditure and social change since 1910* (Berkeley, University of California Press, 1967), p. 62.

cionarios civiles premiados por sus servicios con tierras distribuidas por el estado. Para alejar a los campesinos militantes de las grandes propiedades agrícolas capitalistas, el estado estimulaba la "colonización" —el establecimiento de nuevas parcelas pequeñas y medianas en zonas nunca antes cultivadas. Ocasionalmente se expropiaba alguna hacienda que no era productiva, con el resultado de que los campesinos beneficiados fuesen en lo sucesivo menos combativos.

Muchos campesinos reconocían que estaban siendo manipulados y engañados. Los de la región del Bajío, al oeste y norte de la ciudad de México, estaban especialmente resentidos. La Iglesia, que llevaba largo tiempo oponiéndose a la reforma agraria de cualquier tipo que fuese, azuzaba a los campesinos contra los "comunistas" del gobierno. Muchos se convirtieron en soldados en la "rebelión cristera" de 1926-1929, encabezada por clérigos insatisfechos con la promulgación de Calles de las disposiciones anticlericales de la Constitución, especialmente la educación laica obligatoria (Artículo 3º). Otros campesinos tomaron las armas para ayudar al gobierno a aplastar la revuelta, que no concluyó sino cuando el embajador Morrow intervino para negociar un acuerdo suavizando la imposición de las medidas anticlericales.[15]

En 1928, poco después de ser elegido presidente, Obregón fue asesinado por un oscuro fanático católico. Para entonces, Calles era uno de los mayores terratenientes de la nación y la figura principal de la política de México. El Congreso designó para la presidencia a un partidario de Calles, el abogado Emilio Portes Gil, antiguo gobernador del estado norteño de Tamaulipas, hasta que se pudieron celebrar nuevas elecciones en 1929.

Para estabilizar más aún la situación, Calles y sus partidarios organizaron a principios de 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR, actualmente PRI), primer partido político nacional. Proclamando representar a la Revolución y a todas las fuerzas y facciones sociales, el PNR consiguió reunir a la mayoría de los partidos rivales, oficiales del ejército y caudillos, para dar cohesión a las burocracias política, civil y militar.

Durante las siguientes generaciones, el partido político "oficial" de México controlaría todas las elecciones nacionales y dirigiría los gobiernos locales y federal. Los resultados de la elección de 1929 dejaron esto bien claro. Un oscuro funcionario del PNR llamado Pascual Ortiz Rubio ganó fácilmente la presidencia contra el más experimentado y mucho mejor conocido José Vasconcelos, que competía bajo la rúbrica del Partido Nacional Antirreeleccionista. Los increíbles y fraudulentos resultados de la votación fueron de 1 948 848 contra 110 979 votos.

Ortiz Rubio gobernó hasta 1932, cuando se atrevió a disentir de Calles en algunas cuestiones políticas menores y fue obligado a dimitir. Fue sucedido por

[15] La rebelión cristera fue un asunto complejo, que mezcló la protesta agraria con el anticomunismo, la rebeldía contra el gobierno y las cualidades redentoras de la Virgen de Guadalupe. La Iglesia católica, aunque dividida entre progresistas y conservadores, la apoyó. Véase David C. Bailey, *Viva Cristo Rey! The Cristero rebellion and the church-state conflict in Mexico* (Austin, University of Texas Press, 1974).

el banquero millonario Abelardo Rodríguez (1932-1934), una marioneta más dócil a Calles. De hecho, todo el periodo 1928-1934, durante el cual la maquinaria política del PNR aceleró notablemente su actividad, fue conocido como el "maximato" por el título no oficial de "jefe máximo" atribuido a Calles.

Pero el estado, a pesar de su creciente poder, seguía enfrentando problemas con los obreros y campesinos. En 1926, Calles había advertido a los sindicatos militantes independientes para que se alinearan con la nueva realidad de los sindicatos obreros "oficiales" bajo la tutela estatal. Pero en 1928 la CROM, buscando recomponer su reputación de colaboracionismo de clase y con el fin de reconquistar a sus miembros decepcionados que estaban dándose de baja por montones, se retiró de su pacto con el gobierno.

En 1929, el estado respondió cortando los fondos a la CROM y concediendo su apoyo brevemente a algunos de los sindicatos revolucionarios de izquierda. Estallaron combates entre éstos y la CROM. El gobierno, satisfecho al ver reducida la fuerza de la CROM, actuó entonces igual que lo había hecho Carranza en 1916, volviéndose contra los sindicatos izquierdistas en una campaña brutal de ataques de pistoleros y represión. Líderes comunistas y anarcosindicalistas fueron asesinados. Así, aunque la sindicación iba aumentando y el inicio de la depresión económica mundial estaba colocando a los obreros en una situación todavía más difícil que llevaba a una radicalización en aumento, la creciente represión estatal significaba que muy pocas huelgas eran reconocidas oficialmente.

Dentro de la CROM, que todavía representaba a la mayoría de los sindicatos, surgió un ala "radical" bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, que había estado activo en las huelgas de maestros de los años veinte. Aunque se oponía al Partido Comunista (fundado en 1919) por introducir la "política" en la tarea "apolítica" de la organización laboral, Lombardo Toledano se declaraba "marxista". Era partidario de una eventual "transformación socialista del régimen burgués", pero, como advertía a sus seguidores en 1932, "no podemos proclamar o alabar la dictadura del proletariado [...] porque estamos viviendo en un periodo de capitalismo organizado".[16]

El líder Morones atacó a Lombardo Toledano, quien contra su voluntad dimitió de la CROM, llevándose tras él a muchos de los militantes. En octubre de 1933, los disidentes de Lombardo Toledano se reunieron en una convención obrera nacional para fundar la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).

Los comunistas, otros izquierdistas y la CGOCM de Lombardo Toledano (que para 1934 incluía a cerca de la mitad de los obreros organizados de la nación) demostraron una fortaleza particular en industrias pesadas básicas como la minería, el petróleo, la electricidad, la industria textil y los ferrocarriles. De la misma manera que Morones había emergido anteriormente como la nueva alternativa estatal "revolucionaria" a los radicales de la Casa del Obrero Mundial, Lombardo Toledano empezó entonces a surgir como aliado potencial del esta-

[16] *Futuro*, mayo de 1934, pp. 54-61.

do y como alternativa a la renovada militancia obrera de principios de la década de 1930 —en la que él mismo había desempeñado un papel destacado.

El proletariado rural, la clase más numerosa de México, planteó también sus demandas de reforma. El sufrimiento de los campesinos y obreros se intensificó después de 1931, cuando México salió del patrón oro y el valor del peso disminuyó, en beneficio de los capitalistas estadunidenses.

Todo esto sucedía en un momento en el que Calles y Morrow buscaban recortar los gastos de bienestar social con el fin de reducir el déficit presupuestario. En 1932-1933, la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, de influencia comunista, fue severamente atacada; su milicia campesina fue desarmada. Para 1934, los obreros y campesinos en casi toda la extensión de México estaban a punto de ebullición.

Cárdenas

La depresión mundial comenzó en 1929. Una vez que los efectos de la súbita desaceleración de la actividad económica de Estados Unidos alcanzaron a México, el número de desempleados mexicanos (la mayoría trabajadores despedidos) subió vertiginosamente, triplicándose para 1933. Para aquellos que fueron suficientemente afortunados de poder trabajar, el salario mínimo no cubría ni siquiera un tercio de las necesidades básicas de la familia promedio.

Además, el gobierno de Estados Unidos convirtió a los trabajadores emigrantes mexicanos en chivos expiatorios del alto desempleo que afligía a la fuerza laboral estadunidense, arrestando y deportando a más de 300 000 trabajadores y a sus familias, muchos de ellos ciudadanos estadunidenses, agravando así el desempleo y la inquietud social. Los sindicatos norteamericanos respaldaban las deportaciones, aunque los obreros mexicanos desempeñaron papeles de liderazgo en muchas huelgas importantes, como la huelga del algodón de 1933 en California. El virus del racismo antimexicano se había extendido durante las dos décadas anteriores y no era posible frenarlo. Samuel Gompers, presidente de la American Federation of Labor (AFL), resaltaba repetidamente la supuesta inferioridad productiva de los mexicanos. El movimiento eugenista, que propugnaba una "limpieza biológica" dirigida contra la gente de color, diseminó sus virulentas ideas en las escuelas y los medios de comunicación de masas. Un popular escritor seudocientífico afirmaba que el emigrante mexicano era "inferior" porque había "nacido comunista". Libros y artículos periodísticos llamaban a los mexicanos "amenaza genética" y trataban de demostrar "científicamente" que los mexicanos eran racialmente inferiores. Leyes de esterilización basadas en la eugenesia se difundieron por Estados Unidos, permaneciendo en los libros en veintiséis estados hasta una fecha tan reciente como la de 1980. Los ataques a los inmigrantes mexicanos y a los ciudadanos estadunidenses de ascendencia mexicana llegaron a ser tan graves que en 1932 el jefe del departamento de agricultura de Estados Unidos tuvo que acudir a la ayuda de los empresarios

estadunidenses en la agricultura, la minería y la industria declarando públicamente: "Hemos dependido de esta gente; no son una carga social sino hombres y trabajadores honrados que han ayudado mucho a desarrollar este país."[17]

En su convención del partido en diciembre de 1933, el gobernante PNR presentó sugerencias para reformas sociales y económicas propuestas por líderes más jóvenes ansiosos de ascender en el escalafón. Estos "jóvenes turcos" reescribieron el Plan Sexenal que Calles había presentado. Recomendaron reducir la dependencia de México de los mercados extranjeros y de las exportaciones minerales y agrícolas. Urgieron a la promoción de la reforma agraria y de la industria mediana y pequeña. En el plan incluyeron la asistencia estatal a las empresas mexicanas más que a las extranjeras y una propuesta de apoyo para el desarrollo de una empresa petrolera nacional.

El presidente Rodríguez, un instrumento de la maquinaria política de Calles, ya próximo al término de su mandato encontró conveniente implementar algunos de los aspectos progresistas del renovado Plan Sexenal antes de dejar el puesto. Aprobó un decreto de salarios mínimos y elaboró una reforma constitucional que convertía en "socialista" la educación pública. En el pensamiento español y latinoamericano de aquella época, educación socialista significaba "racionalista y laica", diferenciándola de la "religiosa y clerical".

Siguiendo el consejo de Calles, los delegados de la convención nombraron para la presidencia a un candidato respetado y socialmente progresista, el general Lázaro Cárdenas, general brigadier durante la Revolución y gobernador de Michoacán entre 1928 y 1932. Calles estaba convencido de que podría controlar al joven Cárdenas, de cuarenta años por entonces, de la misma forma como había controlado a los anteriores presidentes. Como ministro de la guerra a principios de 1933, Cárdenas había hecho su apuesta al ordenar el desarme de la milicia campesina de Veracruz; al hacer esto, Cárdenas aseguró prácticamente su nominación para la presidencia, puesto que la base social de su rival más importante estaba entre los campesinos veracruzanos militantes.

En su campaña presidencial, Cárdenas se mezcló con la gente. Abogaba por la negociación colectiva, un aumento de los salarios mínimos y otras medidas de bienestar comúnmente recomendadas en los países capitalistas más industrializados de la época. Al apoyar la reforma agraria, Cárdenas resaltaba la protección de la propiedad privada y favorecía las pequeñas parcelas privadas por encima de las comunales. También reconocía la existencia de la lucha de clases —"algo esencial dentro del régimen capitalista"— y prometía apoyo para la clase obrera.

Obviamente Calles había aceptado la idea de reforma. Además, un gobierno reformista había tomado el poder en Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuyo embajador en México, Josephus Daniels, llegó antes de que Cárdenas tomara posesión de la presidencia y empezara a hablar de

[17] Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 41-26-139, IV/241 (73) (03)/1, 27 de enero de 1932.

reforma social, educación, bienestar de las masas y del indiscutible derecho de México a desarrollar una ideología de revolución social. El programa de compra de plata de 1934, que permitía a Estados Unidos comprar enormes cantidades de plata mexicana, ayudó a Cárdenas a financiar sus planes de desarrollo económico.

De manera que Cárdenas no esperaba hostilidad por parte de Estados Unidos. "Estados Unidos no intervendrá en nuestros asuntos internos —dijo en diciembre de 1935—: primero, debido a la Política del Buen Vecino y, segundo, porque está profundamente preocupado por resolver los problemas que han surgido dentro de su propio territorio."[18]

Si Cárdenas quería convertirse, en términos modernos, en "su propio hombre" o en "capitán de su propio equipo", tenía que desafiar a la poderosa maquinaria de Calles, con su control del partido político nacional y sus conexiones con las grandes empresas, los líderes obreros de la vieja guardia (CROM), la comunidad de inversionistas extranjeros y el ejército (aunque ahí el general Cárdenas contaba con algún apoyo). De manera que Cárdenas comenzó su gobierno haciendo cambios en el PNR, la burocracia del gobierno y el ejército. Aumentó los salarios y beneficios a los militares, mejoró su educación, cortejó y conquistó el apoyo de los soldados rasos, promovió a los oficiales jóvenes y gradualmente maniobró para situar a los generales en una posición de neutralidad. A continuación emprendió la tarea de cerrar la vieja brecha entre el gobierno y la Iglesia católica. En su segundo gabinete, designó al general católico Saturnino Cedillo ministro de agricultura y declaró concluida la "era de persecución religiosa".

Históricamente, los nuevos líderes se habían dirigido a los sindicatos —Obregón a la Casa del Obrero Mundial en 1915 y a la CROM en 1920, y Calles también a la CROM. En esta ocasión, la CGOCM de Lombardo Toledano, en rápido crecimiento, estuvo disponible para Cárdenas.

La CROM había perdido muchos de sus principales sindicatos (impresores, metalúrgicos y obreros textiles), a medida que los trabajadores de base se habían ido desilusionando por la corrupción de sus líderes y el fracaso de Calles en otorgar los beneficios de bienestar social prometidos. En el primer año de la presidencia de Cárdenas (1934-1935), se desencadenó una serie de huelgas contra compañías como la Mexican Tramways Company (canadiense), la Huasteca Petroleum Company (Standard Oil), Fábrica de Papel de San Rafael (capital hispano-francés) y la Mexican Telephone and Telegraph Company (aliada de la American Telephone and Telegraph), de la que Calles poseía gran cantidad de acciones. Estas huelgas respetaban la tradición de continuar la militancia laboral contra el capital extranjero, que se remontaba hasta la erupción de las huelgas antimperialistas de la época de Porfirio Díaz, y mostraban una vez más que

[18] Citado en Wayne A. Cornelius Jr., "Nation-building, participation, and distribution, the politics of social reform under Cárdenas", en Gabriel A. Almond y Scott C. Flanagan, comps., *Development episodes in comparative politics: crisis, choice, and change* (Boston, Little, Brown and Company, 1973), p. 84.

el proletariado mexicano no estaba subdesarrollado si se le comparaba con la débil burguesía mexicana.

En julio de 1934, la CGOCM estalló una huelga general nacional para protestar contra la alianza del gobierno con los patronos en las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje. El ejemplo moral y espíritu combativo de la CGOCM al dirigir la lucha para conseguir más empleos y salarios decentes tuvo como resultado la afiliación de más de la mitad de todos los trabajadores organizados de México para fines de ese año. Según cifras oficiales, el número de huelgas ascendió de 13 en 1933 hasta 642 en 1935 —un cálculo no oficial situaba esa cifra en más de un millar para la primera mitad de 1935 solamente. En el distrito de La Laguna en la parte central del norte de México, en donde se producía la mitad de todo el algodón del país, en 1935 los trabajadores agrícolas sindicalizados declararon 104 huelgas.

La Ley Federal del Trabajo mexicana, proclamada en 1931, había afirmado el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y declarar huelgas, pero sentando las bases para la regulación estatal del trabajo garantizando al estado el derecho a declarar las huelgas legales o inexistentes y a reconocer o ignorar las elecciones y mesas directivas de todos los sindicatos obreros. De esta forma el estado capitalista estaba en buena posición para desempeñar su función de clase de ser el órgano de una clase (la burguesía) sobre otra (el proletariado), de ser responsable de "la ley y el orden" que legaliza y facilita la dominación de clase, y de crear las agencias apropiadas para el mejoramiento o resolución de las confrontaciones entre las clases. En estas circunstancias, el movimiento laboral no corrió a abrazar a Cárdenas. Por el contrario, hizo estallar una serie de huelgas.

De este modo, el intento de Cárdenas por llevar adelante un programa de reforma social y de recuperación económica se enfrentó a un complejo conjunto de problemas. Primero, la variante mexicana del corporativismo favorecía marcadamente a la presidencia, dejando gran parte del viejo aparato de Calles bajo el control del partido político dominante, la CROM, y de numerosas agencias gubernamentales. Segundo, la gran empresa estaba presionando a Cárdenas para que avanzara cautelosamente con su programa de reforma social o incluso para que lo abandonara. Tercero, había aumentado la amenaza de clase que desde abajo desafiaba al estado y al mismo tiempo daba a Cárdenas una oportunidad para usarlo para sus propios fines. Y esto es lo que hizo Cárdenas para contrarrestar la maniobra de las fuerzas de Calles. Dio todo su apoyo a la fuerza más poderosa detrás de la inquietud laboral, la CGOCM.

Al reconocer el derecho de los obreros a la huelga y al propiciar el desarrollo de la CGOCM (con ayuda gubernamental y decisiones jurídicas contra las corporaciones privadas recalcitrantes), la administración de Cárdenas amplió la alianza estado-trabajadores comenzada por Obregón y Calles. En febrero de 1936, la CGOCM, con el apoyo de Cárdenas, se convirtió en el movimiento sindical nacional reconocido oficialmente y fue rebautizado como Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Bajo su secretario general Lombardo Toledano, la CTM reunía unos 3 000 sindicatos y 600 000 trabajadores.

Pero la manipulación de Cárdenas de la fuerza laboral era enormemente compleja, asistiendo aquí, reprimiendo allá —y a largo plazo continuando el papel estatal de controlar la mano de obra. Comprometido con la reforma del capitalismo más que con su destrucción, Cárdenas no podía ponerse enteramente del lado de los trabajadores sin arriesgarse a un cambio tal en el poder de clase que el propio sistema capitalista corriera peligro. De forma similar, los trabajadores de base podían tomar ventaja de un ilimitado apoyo presidencial para organizar un ataque en gran escala contra la burguesía y en busca del poder estatal, sin tomar en cuenta la alianza de sus líderes con el gobierno. Por otra parte, si Cárdenas se alineaba por completo con las clases poseedoras en contra de la fuerza laboral, los líderes sindicales podrían abandonar su alianza con el gobierno, agravando también el peligro de un ataque proletario directo contra la burguesía y el estado. Cárdenas eligió seguir el camino medio y evitar una sangrienta guerra de clases.

Las acciones de Cárdenas a todo lo largo de su régimen fueron desde aprobaciones del socialismo hasta negaciones de que lo buscase; desde un apoyo decidido a los trabajadores en huelga hasta declarar las huelgas ilegales; desde aparecer en manifestaciones obreras hasta enviar tropas para reprimirlas. Esto constituía toda una empresa, con Cárdenas empleando la política del palo y la zanahoria con los trabajadores para consolidar un capitalismo regulado y apoyado por el estado.

Las medidas de educación "socialistas" de Cárdenas reflejaban su decisión de entrenar una fuerza laboral mejor preparada. Como afirmaba el presidente en una circular del 30 de junio de 1934, "Es necesario estimular una enseñanza utilitaria y colectivista que prepare a los alumnos para la producción, que fomente el amor al trabajo como obligación social."[19] Un aumento en el presupuesto de educación ayudó a reducir el analfabetismo, elevando las tasas de alfabetización al 50% de los hombres y 42% de las mujeres para 1940. Los documentos gubernamentales de este periodo consideraban claramente la educación socialista como "educación para la responsabilidad comunitaria". La retórica socialista sobre educación, como en otras áreas, tenía por objeto superar a los revolucionarios más radicales activos por aquel entonces en partes estratégicas de la sociedad, incluyendo las escuelas, en donde los maestros tenían una larga tradición de militancia laboral y compromiso social. El tema ideológico más congruente de la administración de Cárdenas era la creación no de un régimen socialista sino de un gobierno que habría de ser "liberal, democrático y nacionalista".

En su programa Cárdenas contaba con el apoyo de la línea política adoptada por el líder obrero más popular, Lombardo Toledano, que afirmaba que si el capitalismo tenía que ser abolido eso sólo sucedería en un futuro distante después de la ruptura con el "feudalismo" y el "imperialismo", necesaria para

[19] Citado en Arnaldo Córdova, *La ideología de la revolución mexicana* (México, Era, 1973), p. 235.

establecer la libertad económica y política que México necesitaba. Esta línea llegó a tener aún más influencia cuando se convirtió en parte de las tácticas del Frente Popular impulsadas por la Internacional Comunista en su oposición al ascenso del fascismo. (En México, las fuerzas organizadas de la extrema derecha conocidas como "sinarquistas" y su apéndice paramilitar, las "camisas doradas", representaban una amenaza creciente.)

Así, las condiciones prevalecientes en México eran tales que ninguna clase o fracción de clase por sí sola estaba en condiciones de imponerse fácilmente. Aunque muchos oligarcas rurales poseían inversiones urbanas interrelacionadas, la burguesía tenía intereses en bienes raíces e industriales en conflicto. Incluía también a numerosos elementos "compradores" cuyos intereses estaban estrechamente vinculados con los de extranjeros, y éstos estaban en conflicto con los industriales "nacionalistas" de tendencia más independiente.

Con la burguesía mal llamada "nacional", débil y dividida, aparentemente otras clases tenían una buena oportunidad para eliminar de una vez por todas su hegemonía parcial. Pero éstas eran demasiado débiles. Incluían una pequeña burguesía relativamente sin dirección y muchos grupos indistintos de clases intermedias. Los trabajadores y campesinos cooptados dependían del estado, un hecho que recortaba la autonomía de su desafío. En una situación semejante, sin ninguna clase o fracción de clase capaz de afirmar una hegemonía claramente definida, el estado se presentaba como árbitro natural y poder central en la guerra de clases de México.

Este aumento en la importancia del papel del estado fue de hecho bien recibido por las fracciones de la burguesía en proceso de modernización, cuyos miembros habían estado ocupados desde 1917 con su propio "proyecto hegemónico"[20] de consolidar el estado capitalista sobre una nueva base. Como ha señalado el historiador Steven Haber, el uso dado por Cárdenas a los fondos del estado para obras públicas, construcción de carreteras y otros proyectos, así como su presupuesto de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, actuaba en beneficio de los mayores inversionistas de México.[21] Estos elementos necesitaban permitir que se satisficieran algunas de las demandas de las masas y la pequeña burguesía mediante reformas sociales dirigidas por el estado con el fin de evitar un desafío revolucionario desde abajo, tan grave potencialmente como el de 1910-1915. Muchos industriales y banqueros dieron la bienvenida

[20] Véase Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*. Un proyecto hegemónico como éste normalmente toma forma en tiempos de crisis, a menudo durante una transición de una etapa de desarrollo económico a otro; también, durante un periodo de transición política (relacionado a su vez con un cambio económico). En el curso de una crisis determinada, una clase particular o fracción de clase (a menudo la ascendente) intenta llevar adelante la transición y los objetivos de clase que persigue mediante la lucha ideológica, la construcción de alianzas y otras formas de lucha política. El objetivo del proyecto es lograr el dominio sobre el estado y sus aparatos ideológicos, transformar al estado de maneras correspondientes, subordinar o derrotar los proyectos rivales y los intereses de clase detrás de ellos: en resumen, alterar el equilibrio del poder en la sociedad como un todo.

[21] Haber, *Industry*.

a este aumento en la intervención estatal, incluso de reformas sociales, siempre que tales medidas controlasen la lucha de clases y si la burguesía ganaba a un aliado (el estado) en su proyecto hegemónico de mantener el capitalismo y lograr un poder político estable.

Como en la teoría de Gramsci, así sucedía en la realidad de México: ningún proyecto hegemónico del grupo que fuese era necesariamente claro ni estaba bien articulado, ya que era oscurecido por formaciones diferentes y contrapuestas de nuevas alianzas de clase y fuerzas sociales —nuevos "bloques de poder" (como la alianza de la CROM de Morones con Obregón y, brevemente, con Calles, quienes por su parte estaban muy ocupados incrementando sus propios intereses capitalistas en el cultivo de garbanzos y en la construcción, respectivamente). Además, los proyectos hegemónicos eran arriesgados, puesto que las ideas que acompañaban a su propaganda implicaban un cambio en las relaciones sociales básicas y la ideología dominante, con la correspondiente inestabilidad (tal como el periodo de Cárdenas y los llamamientos al "socialismo"). No existían garantías de que la competencia no fuese a conducir a la ruina común de las fuerzas contendientes, o de que no fuesen a abrirse las puertas a una transformación más revolucionaria (o contrarrevolucionaria) de la sociedad. Pero cualesquiera que fuesen las circunstancias de crisis y antagonismo de clase agravado que hubiesen prevalecido en el pasado, usualmente conducían a una u otra forma de proyecto hegemónico edificado sobre nuevas alianzas de clase. La historia estaba llena de tales experiencias.

En el caso de México, los elementos modernizadores en la burguesía podían romper, o al menos disciplinar, a cualquier fracción burguesa que se les opusiera contando con el apoyo de las corrientes desarrollista y reformista dentro de la burocracia del estado y del partido político nacional —al menos en la medida en que los movimientos obrero y campesino permaneciesen vivos. Pero este uso del estado como recurso de poder clave, en vez del uso de una clase única y unida (bien fuese el proletariado o la burguesía), significaba que no podía haber ni un programa de industrialización "nacionalista burgués" independiente para un desarrollo económico autónomo desde arriba, ni una revolución entera desde abajo. El estado podía solamente introducir suficientes reformas para mantener bajo control la lucha de clases. Además, tanto el estado como las fracciones burguesas contendientes estaban estructuralmente limitadas por la dependencia de la economía mexicana respecto de las condiciones externas —deuda externa acumulada, acuerdos con accionistas extranjeros y depresión económica mundial.

El gobierno de Cárdenas se propuso apoyar a los segmentos más modernos y patrióticos de la burguesía, los más arraigados en las áreas de producción controladas nacionalmente, a expensas de los grupos "compradores" e imperialistas. También desarrolló buenas relaciones con algunos de los más poderosos grupos financieros de México. De forma semejante a la administración de Roosevelt en Estados Unidos, procuró una mayor regulación de la economía por parte del estado, con objeto de aliviar la depresión económica y preservar

la propiedad privada. Fomentó la empresa privada permitiendo que la mayor empresa de desarrollo del gobierno, la Nacional Financiera (fundada en 1934) recibiera préstamos adicionales del Banco de México para suscribir inversiones privadas y para proporcionar el capital inicial para empresas industriales.

Además, al duplicar el volumen del gasto federal destinado al desarrollo económico entre 1934 y 1937, el gobierno de Cárdenas impulsó efectivamente al país sacándolo de su crisis económica. Entre 1929 y 1933, el producto interno bruto (PIB) había caído un promedio de 2.7% por año, pero entre 1934 y 1940 había ido aumentando a una tasa promedio anual de 4.5%. En palabras del historiador James Wilkie: "Las bases para una rápida industrialización estaban firmemente establecidas para cuando Cárdenas dejó su cargo. De hecho, el volumen de producción de manufacturas aumentó casi tan rápidamente durante la era de Cárdenas como lo hizo durante la siguiente época de [su sucesor Manuel] Ávila Camacho."[22]

Respondiendo a las demandas de los trabajadores, al principio Cárdenas salvaguardó el derecho de los trabajadores o del estado a tomar las fábricas, bien fuesen las que tenían su maquinaria productiva inactiva o aquellas cuyos propietarios desobedecían las leyes laborales o las decisiones de los tribunales. Elementos militantes de la clase obrera se impacientaron y en 1934-1935 aceleraron el ritmo de las huelgas y movilizaciones de masas, forzando a Cárdenas a formar, al menos por un tiempo, una alianza "antimperialista" con el proletariado, el campesinado y el segmento "anticomprador" de la burguesía, y a favorecer las movilizaciones de masas con el fin de contrarrestar las fuerzas del resto de la burguesía, incluyendo a los leales a Calles y a la renaciente derecha política.

En medio de esta sostenida inquietud social y política, el 11 de junio de 1935 Calles volvió a la arena política para denunciar a todos los huelguistas acusándolos de comportamiento antipatriótico que equivalía a traición. Denunció a los líderes sindicales, especialmente a Lombardo Toledano. A continuación desafió a Cárdenas a restablecer el orden o sufrir las consecuencias. Cárdenas respondió el 13 de junio con una declaración a medio camino entre las demandas de los trabajadores y la férrea oposición de Calles. Cárdenas consideraba razonables muchas de las demandas de los obreros y declaraba que satisfaciendo algunas de ellas la situación económica podría hacerse más estable, asumiendo que las concesiones a la fuerza laboral fuesen garantizadas "dentro de las posibilidades económicas del sector capitalista". Para tranquilizar a los empresarios, Cárdenas advertía que "en ningún caso el presidente de la República permitirá excesos de ningún tipo o cualquier clase de actos que impliquen transgresiones de la ley o agitaciones innecesarias".[23]

La clase obrera —dirigida por los huelguistas, sindicatos independientes como los de los ferrocarrileros y electricistas, y líderes nuevos como Lombar-

[22] Wilkie, *The Mexican revolution*, p. 265.

[23] Citado en Joe C. Ashby, *Organized labor and the Mexican revolution under Lázaro Cárdenas* (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1967), p. 27.

do Toledano— respondieron a los ataques de Calles amenazando con otra huelga general, llamando a Calles traidor a la Revolución, y formando el Comité Nacional para la Defensa Proletaria (que pronto sería reconstituido como CTM). Esta nueva coalición obrera aplaudió la declaración de Cárdenas del 13 de junio, y desde aquel momento en adelante "el movimiento obrero estuvo casado con Cárdenas, y él, a su vez, con el movimiento obrero [...] pero el gobierno conservó, siempre, el poder en su mano".[24]

Entre tanto, en la burguesía había muchos que se oponían a las reformas de Cárdenas. Los trabajadores organizados enfrentaban *lockouts* y se empleaban guardias blancas contra los campesinos que tomaban tierras y contra los burócratas del estado que intentaban poner en práctica la reforma agraria. El foco de la lucha de clases nacional se situó en Monterrey, primer centro industrial de la nación y verdadero semillero de la reacción burguesa. En febrero de 1936, cuando los trabajadores en huelga inmovilizaron la ciudad, Cárdenas aprovechó la ocasión para lanzar sus famosos "Catorce puntos" —la declaración que mejor refleja su estrategia populista y corporativista. Se trataba de un amplio llamamiento populista a casi todas las clases y grupos sociales, particularmente a los que contaban con algún tipo de poder real o potencial, con el fin de ponerlos bajo la regulación del estado.

Los "Catorce puntos" de Cárdenas animaban a los trabajadores a formar un "frente unido", con el que negociaría el gobierno "con exclusión de los grupos minoritarios que puedan decidir continuar" (por ejemplo, la CROM). Advertía a los industriales que en caso que interrumpieran la producción en las fábricas "debido a las demandas de los sindicatos", las fábricas podrían según derecho ser entregadas "a sus trabajadores o al gobierno" (una advertencia contra el uso por parte de los propietarios del cierre de fábricas y el *lockout*). Por otra parte, también animaba a los empleadores "a asociarse en un frente unido" —lo que muchos de ellos hicieron rápidamente, formando cámaras de comercio e industria en muchas ciudades de todo el país. Cárdenas aplaudía el crecimiento de la industria, ya que el gobierno "depende de su prosperidad para obtener sus ingresos a través de los impuestos". Y urgía a los capitalistas "a no seguir provocando agitaciones", porque "esto traerá la guerra civil".[25]

Todo esto reflejaba la parte corporativista de la estrategia de Cárdenas para desviar la lucha de clases hacia canales menos peligrosos bajo la regulación del estado. Mientras alentaba a multitud de organizaciones —obreros, campesinos, burócratas, ejecutivos de la gran empresa, propietarios de pequeñas empresas, maestros y otros más— a negociar con el estado y (cuando fuese posible) a afiliarse en el partido político nacional, al mismo tiempo los mantenía separados unos de otros, garantizándoles el reconocimiento por el estado como entidades legales. Así, Cárdenas podía fincar los cimientos del nuevo estado capitalista

[24] *Ibid.*, p. 273.

[25] El texto completo de este discurso histórico puede encontrarse en Lázaro Cárdenas, *Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas, 1928-1940*, vol. 2 (México, Siglo XXI, 1978).

que había sido el proyecto político de la burguesía, herida pero triunfante desde 1917.

A lo largo de 1936, Cárdenas siguió asegurando a los grandes capitalistas (principalmente a los de Monterrey) que no tenía intenciones de nacionalizar la industria. De cuando en cuando Cárdenas hablaba de la necesidad de "socializar los medios de producción" pero con esto sólo se refería a la regulación de la propiedad productiva de propiedad privada, tal como estaba siendo introducida en muchos otros países capitalistas industrializados durante la gran depresión de los años treinta.[26]

Durante las turbulencias de clase de 1935 y 1936, muchos personajes políticos antes leales a Calles observaron los cambios en el ejército y los favores que ofrecía el estado a los políticos partidarios de Cárdenas. Éstos estaban cada vez más aterrados ante la vista de decenas de miles de trabajadores marchando por las calles, amenazando con la huelga general en apoyo de Cárdenas. Entendieron por fin el giro en la balanza política cuando vieron que el presidente armaba a 100 000 campesinos y a un número menor de obreros para formar milicias obreras y campesinas con el propósito de resistir a los reaccionarios armados y a las "amenazas imperialistas". Sabían que esas milicias estaban bajo el control del ministro de defensa y podían ser utilizadas para controlar cualquier intento de revuelta armada. Así, pragmáticamente, trasladaron su apoyo de Calles a Cárdenas.

Calles y Morones de la CROM se vieron superados por la novedosa alianza de los trabajadores con el gobierno y el deterioro de sus propias filas. Pocos protestaron cuando ambos fueron deportados en abril de 1936.

Otra vez más, una nueva dirección política había satisfecho a medias las demandas de los trabajadores, y al hacer esto había sustituido a los líderes más antiguos y recalcitrantes (como Obregón y Calles hicieron contra los carrancistas en 1919-1924). Una vez más fueron las acciones de la clase trabajadora, mediante huelgas y manifestaciones en gran escala, las que precipitaron el cambio. Y una vez más el nuevo gobierno se movilizó para ayudar a satisfacer algunas de las demandas de los trabajadores y para encaminar al movimiento —en palabras de Cárdenas— "dentro de las posibilidades económicas del sector capitalista".

Entre los cambios que introdujo Cárdenas durante esta época turbulenta estuvieron los controles federales de los precios y la designación de agentes federales para administrar algunas de las empresas que se resistían a las demandas de los obreros o que estaban siendo desorganizadas por las huelgas —por ejemplo, los ferrocarriles, las instalaciones eléctricas y algunas fábricas y empresas agrícolas. Gradualmente Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles y estableció la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se convirtió en una

[26] Cárdenas dijo a una delegación de industriales y banqueros que incluso en los casos más extremos de comportamiento no cooperativo por parte de la gran empresa, "lo más que podría suceder sería que ciertas ramas serían apartadas de la esfera de los intereses privados para convertirse en servicio social". Citado en Ashby, *Organized labor*, p. 37. Lo que se "retira", por supuesto, siempre puede ser devuelto.

poderosa fuerza estatal en la industria eléctrica. Todas estas medidas significaron un aumento en la influencia de obreros y campesinos sobre las instituciones económicas clave.

Esta influencia proletaria naturalmente despertó en la burguesía la preocupación de que finalmente los obreros y campesinos pudieran conquistar la hegemonía política. Sin embargo, esto era improbable, puesto que Cárdenas estaba aumentando también la reglamentación estatal del movimiento proletario. Es verdad que introdujo reformas en la agricultura y la industria que en ocasiones permitieron una mayor intervención de los trabajadores en la administración de algunas empresas aisladas. Pero esta intervención fue de corta vida, pues Cárdenas también se ocupó de nombrar burócratas del estado para administrar y controlar las reformas, con el fin de que los obreros fueran disciplinados y que su producción aumentase. Una vez concluida la inquietud laboral, los negocios podían proseguir como de costumbre.

Las políticas de reforma agraria de Cárdenas, que sentaron las bases de una agricultura capitalista apoyada por el estado, tipificaban el populismo y corporativismo de su administración. A fines de los años veinte y principios de los treinta, gran parte de las zonas rurales se habían visto hundidas en la violencia, con los campesinos empeñados en una lucha feroz contra las "guardias blancas" de los latifundistas. A menudo los únicos aliados de los campesinos para exigir la ejecución de la reforma agraria tanto antes como después del ascenso de Cárdenas a la presidencia eran los maestros rurales, más de 200 de los cuales perecieron bajo las balas de los pistoleros a sueldo de los grandes terratenientes. Muchas maestras y campesinas desempeñaron un papel clave en la defensa de las tierras comunales y de las parcelas familiares. Cárdenas fue sensible a los problemas de los campesinos. Su administración distribuyó más de 20 millones de hectáreas, el doble de todo lo distribuido por los regímenes posteriores a 1917. También respondió, aunque sólo fuese en parte, a las demandas de las mujeres, garantizándoles el derecho al voto para la Cámara de Diputados y para optar a cargos públicos. Proporcionó también la incapacidad por maternidad a las empleadas del estado.

Irónicamente, como ha señalado la historiadora Mary Kay Vaughn, la reforma agraria y las campañas de alfabetización que la acompañaban a veces reforzaban el patriarcado acentuando la domesticidad femenina y la familia campesina estable como objetivo. La mayoría de las mujeres rurales eran conservadoras y religiosas en su aspecto social y no se podían relacionar fácilmente con los movimientos feministas de clase intermedia que estaban surgiendo en torno a las cuestiones del sufragio o el divorcio. Los instructores de alfabetización urbanos impulsaban la "educación socialista" y otras ideas novedosas, ayudando a que muchas mujeres campesinas, al darse cuenta de las presiones que sufrían, se decidieran a cambiar sus conductas. Las demandas de las mujeres campesinas estaban relacionadas con la preservación y restauración de la familia y la comunidad más que con el empoderamiento de género o con las últimas modas llegadas de las grandes ciudades. Pero en formas sutiles los al-

tibajos revolucionarios y la propia tenacidad y creatividad de las mujeres, así como su creciente exposición a las nuevas ideas y oportunidades para mejorar sus vidas, socavaron o subvirtieron el patriarcado. Los cambios tecnológicos que acompañaban a la reforma agraria empezaron a beneficiar a las mujeres. Los ejemplos incluían un mayor empleo de la máquina de coser doméstica y del molino de nixtamal que reducían en muchas horas las tareas cotidianas de las mujeres empleadas en actividades tradicionales, para no mencionar su agotamiento. El número de molinos se multiplicó por seis durante la presidencia de Cárdenas. La mayoría de los campesinos apreciaban los esfuerzos de Cárdenas y empezaron a llamar afectuosamente a su nuevo presidente "Tata" ("padre", en náhuatl), como algunos llaman actualmente a su hijo, el jefe de gobierno de la ciudad de México y aspirante presidencial Cuauhtémoc Cárdenas —una curiosa mezcla de patriarcado, personalismo y presidencialismo típica de México.

Basándose en el Artículo 27 de la Constitución (que protegía la propiedad privada y los ejidos), el programa de tierras de Cárdenas preveía créditos estatales y ayudas a las pequeñas propiedades agrícolas privadas y a los ejidos productivos. Los ejidatarios aumentaron en cuatro veces sus parcelas irrigadas, o lograron su irrigación en parte. La reforma agraria facilitó la expropiación de muchas de las tierras improductivas u ociosas de los latifundistas, aunque en este punto el gobierno tenía que actuar con mano suave. Aunque algunos de los hacendados habían sido asesinados durante la Revolución o habían marchado al exilio, muchos habían sobrevivido para reconstruir o expandir sus haciendas, con sus filas engrosadas por los "hacendados revolucionarios" —oficiales del ejército y políticos que, con el estímulo estatal, habían amasado inmensas propiedades agrarias para sí mismos.

Cárdenas permitió a los grandes terratenientes conservar 150 hectáreas de riego o el equivalente y mantener su control en cuestiones de crédito, insumos técnicos, salarios y comercialización. Como es usual, cuando distribuía tierras a los proletarios rurales —como en el caso del prolongado conflicto entre trabajadores y patrones en la próspera zona azucarera de Los Mochis, Sinaloa, en 1938— Cárdenas dejó sin afectar las propiedades de los principales productores (en este caso la United Sugar Company) y rehusó conceder ningún aumento salarial a los trabajadores. Por otra parte, no titubeó en enviar tropas federales cuando los caciques regionales, aliados con los intereses petroleros conservadores y extranjeros, trataban de frenar sus supuestas "reformas ateas y bolcheviques", como en el caso de la revuelta rápidamente reprimida de mediados de 1938 dirigida por el general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí.

De forma similar, en las zonas de distribución de tierras más radical, donde la inquietud laboral era más intensa, muchas de las mayores propiedades agrícolas e instalaciones productivas fueron protegidas de la expropiación. En Yucatán, por ejemplo, Cárdenas dejó las plantas procesadoras de henequén en manos de los hacendados de segundo nivel establecidos por Alvarado en 1915 como administradores de la comercialización del henequén, y en consecuencia éstos pudieron conservar el control de la mayoría de los campesinos de la zona.

Cárdenas utilizó la reforma agraria para impedir la inminente parálisis agrícola y el estallido del campesinado, no sólo en Yucatán y Sinaloa sino también en la conflictiva región de La Laguna, en el norte de México, que fue elegida para un ambicioso proyecto patrocinado por el estado para la producción colectiva en tierras ejidales. (A lo ancho del país, menos del 10% de todos los agricultores ejidatarios trabajaban en forma colectiva; la mayoría cultivaba pequeñas parcelas individuales dentro del ejido.) Cárdenas dejó las tierras más productivas de La Laguna en manos de doce corporaciones, el 70% de las cuales eran propiedad de extranjeros. De hecho, el tercio más rico de las tierras de La Laguna, con más de dos tercios de los pozos artesianos, no fue afectado por su reforma agraria. Las reformas fueron provechosas, pues La Laguna, Yucatán y las regiones del noroeste y el norte de México, en donde los ejidos recibieron el mayor apoyo, experimentaron aumentos en la producción para la exportación. Esto contribuyó a un auge subsiguiente en la agricultura capitalista.

En otras partes del México rural seguía predominando el desempleo, causado en parte por la creciente mecanización de la producción y del casi monopolio por corporaciones capitalistas de tierras fértiles, agua, créditos y tecnología, lo que forzaba a los ejidatarios a contratarse como peones e incluso a alquilar sus tierras a los agricultores particulares y luego a trabajarla para éstos. A pesar de la creación del banco ejidal respaldado por el estado, diseñado para ayudar a aliviar sus dificultades económicas, muchos ejidatarios siguieron obteniendo créditos de los agricultores asociados privados o de prestamistas, a pesar de lo explotadoras y usurarias que fuesen las tasas de interés. A menudo los empleados del banco ejidal habían trabajado antes para los antiguos bancos privados o mantenían relaciones de amistad con los latifundistas; además, el banco ejidal era ampliamente conocido por su corrupción.

Congruente con su política de estilo corporativista de mantener a las diferentes organizaciones de masas separadas unas de otras, Cárdenas tomó precauciones para impedir a las organizaciones campesinas —a las que inicialmente había ayudado a desarrollarse mediante acuerdos políticos en todos los niveles— que se afiliasen a la CTM (sindicato obrero oficial). También mantuvo a los sindicatos de empleados bancarios, a los sindicatos de empleados públicos y a los sindicatos de maestros fuera de la CTM. Como escribió el historiador Lyle Brown:

> No había duda de que Cárdenas deseaba confederaciones obreras y campesinas separadas que tuvieran que contar con su apoyo y sobre las que pudiera ejercer el control que fuese necesario para mantenerlas funcionando en armonía con los objetivos de su administración [...] Tanto los comunistas como Lombardo Toledano hablaban de la importancia de unir a los grupos obreros y campesinos en una gran organización proletaria, pero Cárdenas era un político demasiado sagaz para permitir semejante acción.[27]

[27] Lyle C. Brown, "General Lázaro Cárdenas and Mexican presidential politics, 1933-1940: a study in the acquisition and manipulation of political power", tesis de doctorado, University of Texas, 1964, p. 211.

La mayor organización agraria era la Confederación Campesina Mexicana (CCM), formada inicialmente para apoyar la candidatura presidencial de Cárdenas. Incorporando la mayoría de las ligas campesinas, fue rebautizada como Confederación Nacional Campesina (CNC) en 1938, época en la que declaraba representar a 3 millones de campesinos y trabajadores rurales. Algunos de sus militantes luchaban contra el control férreo de los caciques y burócratas del gobierno e intentaban crear un movimiento independiente, pero los comunistas influyentes decidieron seguir al lado de Cárdenas "socavando desde adentro" a la CNC.

La reforma agraria de Cárdenas se vio restringida en 1936-1937, cuando los trastornos combinados en el campo y en las ciudades contribuyeron a una disminución de la producción alimentaria y a un marcado aumento de los precios de los alimentos. Para entonces, sin embargo, la reforma había conquistado para Cárdenas la adoración de cientos de miles de mexicanos rurales y había garantizado al campesino una dignidad no experimentada desde los días de Zapata.

Como ya vimos, la reforma agraria sirvió en primer lugar para preservar y estimular el sistema privado de cultivo agrícola comercial. En mayo de 1938 el gobierno abrió la Oficina de la Pequeña Propiedad, que expedía certificados de inafectabilidad. Entre 1930 y 1940, el número de propiedades agrícolas de propiedad privada aumentó en un 44 por ciento. En 1940, unas 800 000 personas seguían viviendo en haciendas, cuando el gobierno reconoció que México seguía siendo fundamentalmente un país de grandes haciendas. Más de la mitad de la tierra cultivable consistía en haciendas de más de 5 000 hectáreas. Más del 60% de los campesinos elegibles para recibir tierras tenían o parcelas inadecuadas o ninguna tierra en absoluto.

Así pues, no es coincidencia que el neolatifundismo surgiera inmediatamente como forma dominante de la agricultura capitalista en México. Floreció precisamente en las áreas más importantes de la tan discutida reforma agraria de Cárdenas. En última instancia, la reforma agraria evitó la guerra civil y la violencia, al tiempo que la producción capitalista se duplicó varias veces.

La incapacidad del gobierno de Cárdenas para mantener el ritmo de la distribución de tierras a partir de 1937, junto con una inflación desbocada y el cuestionamiento por parte de la fuerza laboral organizada de la corrupción entre los burócratas, colocó al gobierno en una situación difícil. La misma política de Cárdenas, cada vez más ambivalente con respecto a las huelgas, aumentaba el problema. La ideología fascista de los sinarquistas empezó a penetrar entre aquellos campesinos que la reforma agraria había ayudado en poco o nada, entre la clase intermedia que padecía la inflación y entre personajes ultrarreaccionarios del clero y el comercio. Para 1940, los sinarquistas sumaban cerca de medio millón, algunos de ellos organizados en unidades paramilitares.

Una huelga intermitente y de larga duración de los trabajadores petroleros, que se prolongó desde 1936 hasta 1938, incitó una vez más a los trabajadores sindicalizados contra el capital extranjero. El tema de la "intervención impe-

rialista" llenaba las páginas de los periódicos. Los obreros petroleros en huelga exigían que el gobierno anulase todos los contratos previos e insistían en que las empresas aceptaran una escala salarial más elevada. Para principios de 1938, estaban reclamando una huelga general nacional para forzar la nacionalización. Muchos observadores se preguntaban si Cárdenas no debía concluir definitivamente su programa populista o en caso contrario enfrentar un duelo de poder con los generales del ejército conservadores.

Así pues, el tiempo estaba maduro para una acción decidida del gobierno contra un viejo enemigo común, los intereses petroleros extranjeros. Según el conocido historiador y economista mexicano Jesús Silva Herzog, influyente asesor presidencial en aquella época: "Si el general Cárdenas no hubiera llevado a cabo la nacionalización [petrolera], su gobierno no hubiera podido mantenerse en el poder."[28]

En su mayor parte, las compañías petroleras habían dejado de explorar por nuevos pozos y habían agotado los antiguos. La producción había llegado a un punto máximo en 1921, y para 1937 el petróleo mexicano representaba solamente un 3% de la producción mundial de la Standard Oil de Nueva Jersey. La primera preocupación de las compañías era el ejemplo que podría establecer la nacionalización en áreas petroleras más críticas del mundo y en otros sectores de inversión en el mismo México. Cárdenas, que aceptó las propuestas salariales que las compañías hicieron finalmente a los trabajadores en huelga, se sintió insultado por su insistencia en que aquellas fueran puestas por escrito y por su negativa a aceptar una participación parcial garantizada en la producción petrolera de México. Las compañías querían o todo o nada. En consecuencia, el 18 de marzo de 1938 Cárdenas expropió las explotaciones petroleras controladas por extranjeros.

Las compañías replicaron con un "bloqueo" de las ventas de petróleo a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Inglaterra rompió relaciones diplomáticas, y el gobierno de Roosevelt dio por terminado el acuerdo de la plata. Se exigió una indemnización inmediata, y los préstamos externos fueron retenidos o retardados. Éstas y otras presiones económicas forzaron a Cárdenas a devaluar el peso y dirigirse a las potencias del Eje como una salida para el petróleo mexicano. En 1941, se levantó el boicot al petróleo, una vez que se concluyeron las negociaciones acerca de un acuerdo de indemnización. (Finalmente México pagó más de 200 millones de dólares a las compañías.)

Se produjo entonces una demostración masiva de respaldo público a la acción de independencia económica realizada por Cárdenas, incluyendo la aprobación de la Iglesia. Millones de personas contribuyeron con lo que podían a un fondo nacional de indemnización, creado para pagar a las empresas petroleras.

Cárdenas aprovechó este momento de unidad nacional para consolidar aún más un modelo corporativista de organización social y política. El partido político nacional fue rebautizado como Partido de la Revolución Mexicana (PRM,

[28] Jesús Silva Herzog, *El petróleo mexicano* (México, 1941), p. 5; entrevista personal, 1964.

actualmente PRI). Éste incorporó a las principales organizaciones de masas, agrupadas en cuatro "sectores": obrero (CTM), campesino (CNC), "popular" y militar. El sector popular incluía a los sindicatos de maestros y empleados del gobierno excluidos de la CTM, a los pequeños agricultores no pertenecientes a la CNC, a profesionales y otros grupos no pertenecientes a la CTM o a la CNC, a las organizaciones de jóvenes y de mujeres, y otras. En 1940, el sector militar se fusionó con el sector popular.

Retirada del radicalismo

Cárdenas se apresuró a asegurar a los inversionistas extranjeros que el caso del petróleo era excepcional y que sus inversiones serían protegidas mientras sirvieran a los intereses nacionales y se conformaran con la ley mexicana. Cárdenas no tenía intenciones de ir más allá de lo necesario para resolver estas crisis, o de debilitar los objetivos desarrollistas de largo plazo "dentro de las posibilidades económicas del sector capitalista", como probó rápidamente con sus acciones en contra de los trabajadores posteriormente a la expropiación. Rompió una huelga de brazos caídos de los mineros, dirigida principalmente contra la Anaconda Copper Company, y las compañías mineras recibieron garantías de que no se producirían más expropiaciones. La distribución de tierras a los campesinos, como ya se dijo, fue cortada de raíz.

No obstante las reformas "antimperialistas" y económicas de Cárdenas, para 1940 México dependía más que nunca de las exportaciones, particularmente con Estados Unidos, que representaba el 87% de su comercio exterior. El número de trabajadores comprometidos en huelgas había descendido drásticamente, de 145 000 en 1935 y 113 885 en 1936, a 61 732 en 1937, 13 435 en 1938, 14 486 en 1939 y 19 784 en 1940. Sin embargo, en 1940 los trabajadores petroleros y ferroviarios seguían en huelga. Cárdenas respondió rechazando sus demandas y exponiendo "la necesidad de poner fin a situaciones extremas que podrían poner en peligro el interés colectivo".[29] Los trabajadores petroleros, oponiéndose al plan de Cárdenas de reorganizar la fuerza laboral de la industria según líneas corporativistas controladas por el estado, decidieron salirse de la CTM. Cárdenas envió tropas federales para romper una huelga en la refinería de Azcapotzalco. Esto quebró la columna vertebral del movimiento de huelga pero no la militancia de los trabajadores.

Cárdenas, como Calles, no podía volver a competir por la presidencia. En 1939 eligió al general moderado Manuel Ávila Camacho, su ministro de defensa, para la elección de 1940, contando con él para llevar adelante el programa de desarrollo industrial de la década siguiente —o, como lo manifestó en su úl-

[29] Citado en Albert L. Michaels, "The crisis of cardenismo", *Journal of Latin American Studies* 2 (mayo de 1970), p. 70.

tima comunicación pública importante, la tarea de "unificación, paz y trabajo". Los sucesivos presidentes reprodujeron estos temas cada seis años.

La elección del sucesor de Cárdenas, sin embargo, no estuvo libre de conflictos. Los conservadores, la mayoría de los gobernadores de los estados, la mayor parte de los militares y los capitalistas más poderosos estaban a favor de Ávila Camacho, pero varios sindicatos y ligas campesinas respaldaban al general Francisco Múgica, que había conquistado una reputación de radical en el gobierno de Cárdenas por su defensa de las causas de los obreros y por su apoyo a la expropiación petrolera. No obstante, las directivas de la CTM y de la CNC apoyaron a Ávila Camacho a principios de 1939, e impusieron su preferencia a los afiliados. De igual manera, el PRM impuso la disciplina partidaria a sus disidentes y llevó a cabo una campaña nacional bien financiada para asegurarse de que Ávila Camacho triunfase. La retirada del radicalismo se consolidó cuando los nubarrones de la guerra en Europa y Asia impulsaron un giro ideológico de los grupos más progresistas para abandonar la tendencia a continuar el proceso de reforma y mantener la postura antimperialista, cambiándola por otra consistente en urgir a la "unidad nacional" entre todas las fuerzas democráticas contra el fascismo —y, por consiguiente, apoyar al candidato del PRM Ávila Camacho. La CTM sustituyó su lema de "lucha de clases" por otro de "unidad nacional".

No obstante, las difíciles condiciones económicas provocaron que un número notable de mexicanos de todos los ámbitos se agrupasen detrás de un candidato de oposición: el general Juan Andreu Almazán, uno de los nuevos "millonarios revolucionarios". Inicialmente Almazán obtuvo el apoyo de los capitalistas de Monterrey y del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), recientemente formado (1939). Pero también contaba con el respaldo de los viejos partidarios de Calles, incluyendo al antiguo dirigente de la CROM, Morones, y a muchos trabajadores hartos de la manipulación corporativista que el estado ejercía sobre sus vidas.

Temerosos de que la candidatura de Almazán pudiera desencadenar impredecibles fuerzas de las clases más bajas, los capitalistas de Monterrey consideraron trasladar su apoyo a Ávila Camacho, quien les aseguraba el desarrollo económico contando con que la empresa privada habría de ser el foco de su administración. También se les prometió que ellos mismos podrían nombrar al gobernador de su estado y a los presidentes municipales. De hecho, estas "consultas" entre el sector privado y el estado sirvieron para que los intereses económicos privados fuesen reconocidos como derechos "oficiales". También, el futuro presidente Miguel Alemán llegó a un acuerdo con los sinarquistas para que éstos no presentaran candidatos a esas elecciones a cambio de tierras ejidales. Aunque algunos grupos comerciales nacionales y extranjeros ayudaron a financiar las campañas tanto de Almazán como de Ávila Camacho, los intereses estadunidenses se inclinaron hacia el segundo, aparentemente, como el grupo Monterrey, prefiriendo la continuidad y estabilidad política a la probable inquietud social que la presidencia de Almazán podría provocar.

Ambos candidatos realizaron sus campañas sobre plataformas similares: protección de la inversión mexicana y extranjera; conciliación de clases; ley y orden, y apoyo a la empresa privada, incluyendo las pequeñas propiedades familiares con preferencia a los ejidos. Después de una campaña marcada por la violencia y las acusaciones de fraude, como era de esperarse Ávila Camacho surgió como triunfador por el inverosímil resultado de 2 476 641 votos contra 151 101.

Como la segunda parte de este libro examina en detalle, la elección de 1940 representó en último análisis una victoria de los intereses combinados de las burguesías nacional y extranjera. Según las palabras de la politóloga Nora Hamilton, "la alianza conservadora controló una vez más al estado, con la única diferencia de que el estado mismo había sido reforzado a través de su control, por la vía del nuevo partido de gobierno, de la clase obrera y el campesinado, y a través de la legitimidad revolucionaria dada al estado por el gobierno de Cárdenas".[30]

Ni siquiera la acción histórica y antimperialista de Cárdenas contra las compañías petroleras en 1938 dañó gravemente el esquema general del desarrollo capitalista, con su fuerte dependencia del capital extranjero. De hecho, agrupó suficientemente a los campesinos y obreros en torno al gobierno para permitir la conclusión del proyecto político de la fracción modernizadora de la burguesía: la consolidación del partido político nacional; los pasos finales de la práctica corporativista de organizar distritos electorales separados ligados al partido y dependientes del estado (CTM, CNC, etc.); la limitación de las reformas populistas y la declaración periódica de su "fin", y el establecimiento de un estado fuerte para facilitar el desarrollo capitalista en colaboración con el capital extranjero en nombre del nacionalismo y la Revolución.

Aunque injustamente dura con Cárdenas, que despertaba inmenso afecto en millones de obreros y campesinos, la amarga declaración de un guardafrenos del ferrocarril en la novela de Mariano Azuela *La nueva burguesía*, reflejaba indudablemente el sentimiento de muchos mexicanos, entonces lo mismo que hoy: "¿No es verdad, Campillo, que lo único que México tiene que agradecer a Cárdenas es que el costo de la vida es cinco veces más alto que cuando él llegó al poder? [...] ¿y cuántos miles se están muriendo de hambre porque no hay trabajo?"[31]

Estado y acumulación

Es conveniente concluir la primera parte de este libro con una breve observación acerca de la continuidad histórica en el desarrollo y evolución del estado mexicano, la lucha de clases y los patrones de acumulación de capital. Todo el periodo 1880-1940 del desarrollo económico capitalista fue estructuralmente

[30] Nora L. Hamilton, "The state and class conflict: Mexico during the Cárdenas period", en Maurice Zeitlin, comp., *Classes, class conflict, and the state* (Cambridge, Winthrop Publishers, 1980), p. 358.

[31] Citado en Michaels, *Crisis*, p. 57.

el mismo, basado en las exportaciones agro-mineras y en una fuerte inserción en las relaciones del capitalismo mundial. En 1940 la población de México era sólo de 19.6 millones, el 70% de ella todavía rural y los dos tercios de la misma todavía analfabetos. El número estimado de haciendas era de 11 470, quizá más que en 1910, mientras que la porción de territorio nacional controlado por terratenientes en gran escala era del 42%, comparado con el 60% en 1910. Y aunque las alianzas políticas habían sufrido cambios y se habían producido altibajos revolucionarios masivos —en 1910-1920 y nuevamente en los años treinta— ninguna de las fuerzas políticas que administraron los diferentes gobiernos dudaron de la validez del papel pro-capitalista del estado, establecido en la Constitución de 1857 y reforzado en la Constitución de 1917.

Las décadas sucesivas a 1940 presenciaron cambios en las fuerzas de producción y un fuerte apoyo del estado al desarrollo capitalista que ayudó a convertir a México en un país semi-industrializado. Pero seguía siendo un país capitalista de un tipo especial. La dependencia del capital extranjero, la confianza del capital doméstico en la mano de obra barata, y otras fuerzas ya apuntadas, contribuían a las grandes divisiones entre ricos y pobres que vinieron a caracterizar al México contemporáneo. Igualmente, el estado corporativista, que tuvo su origen en el periodo anterior a 1940, fue un factor crítico en el subsiguiente patrón desigual y opresivo de desarrollo industrial.

Es conveniente, por lo tanto, resumir aquí la naturaleza de este estado corporativista, que vino a desempeñar un papel tan crucial en el periodo posterior a 1940. En el corporativismo mexicano, los actores políticos no eran tanto individuos o miembros de organizaciones, sino que eran el partido político gobernante y las organizaciones de masas, que funcionaban de arriba abajo. Para los propósitos de las políticas y de la toma de decisiones por parte del estado, lo que existía eran entidades organizadas; en ese sentido, no existía nada que no estuviera organizado. Debido a que el partido oficial detentaba el monopolio del poder dentro de las organizaciones de masas, ningún otro partido político, viejo o nuevo, tenía ningún efecto político apreciable, al menos dentro del sistema electoral, a no ser que se cambiasen las "reglas del juego" (como sucedió en los años noventa).

Aunque los anarquistas, socialistas, comunistas y otros izquierdistas mexicanos desempeñaron un papel decisivo al organizar a los campesinos y obreros desde las décadas finales del siglo XIX, el estado corporativista y su partido los calificaban de "subversivos", manteniéndolos así en una constante posición de minoría. En el sistema corporativista, las organizaciones basadas en la clase obtenían concesiones periódicas del estado o del capital, por un lado, y el estado era un instrumento de control político sobre las masas trabajadoras por el otro.

A ojos de muchos disidentes políticos mexicanos, por lo tanto, la lucha contra el capitalismo corporativo y el imperialismo sustentados por el estado necesariamente se convirtió en una búsqueda de un sindicalismo obrero genuino representativo de los intereses de los obreros o los campesinos. Se convirtió en una lucha por establecer una base de masas organizadas para un movimiento

social proletario urbano y rural capaz de democratizar al estado y transformar la estructura económica. Una ardua tarea en cualquier circunstancia, resultaba aún más dificultosa por la facilidad con que un estado fuerte podía desviarla de sus objetivos finales mediante la cooptación y la represión y con las prácticas del "presidencialismo" y el "populismo".

El presidencialismo, o poder centralizado en manos del presidente haciendo a otras ramas del gobierno estrictamente secundarias, contaba en México con una larga tradición. Se remontaba directamente hasta los caudillos y presidentes del siglo XIX, y de forma indirecta hasta los virreyes coloniales. Fue entronizada en la Constitución de 1917 y proseguida por todos los presidentes del estado posterior a 1917.

El populismo en México, como en cualquier otro país, era un programa y movimiento que propugnaba demandas igualitarias favorables al pueblo y relativamente ajenas a las clases, un enfoque de "algo para cada quien". La mayor parte de los escritos sobre populismo, sin embargo, tienden a confundir tres áreas sobrepuestas: 1] la ideología; 2] las alianzas de clase, y 3] el movimiento social (esto es, la práctica ideológica y política de una clase o una alianza de clase). En cualquiera de estas tres áreas, el populismo tiende a prevalecer sólo bajo ciertas condiciones históricas. En las sociedades capitalistas, el populismo ha surgido generalmente como programa de una fracción ascendente de la burguesía en su lucha contra los rivales de clase de dentro y de fuera. En el caso de México, estos rivales de clase por la hegemonía eran la oligarquía terrateniente, la fracción "compradora" de la burguesía, los radicales de clase media, y los obreros y campesinos. Como en los sucesos del periodo 1920-1940 de la historia mexicana —y particularmente las reformas de Cárdenas— tan claramente revelaron, la fracción modernizadora de la burguesía era capaz de lograr su objetivo de crecimiento y prosperidad sólo con la asistencia de un movimiento populista basado en alianzas de clase y un estado fuerte que tomase una posición ideológica populista.

Cualquier clase o fracción de clase puede utilizar el populismo como programa, porque el uso del populismo va siempre orientado hacia objetivos de clase específicos. El proletariado lo utiliza para conseguir reformas; la fracción burguesa ascendente lo usa para ganar hegemonía y para limitar las demandas de la clase proletaria a reformas en vez de revolución.

Como ya vimos en capítulos anteriores, el populismo *como ideología* ha existido en México desde hace mucho tiempo, primero bajo la rúbrica ideológica de la independencia, luego bajo la rúbrica de la Reforma liberal y por último bajo la de la Revolución mexicana. El teórico de la sociología Ernesto Laclau ha escrito que las formas contemporáneas de populismo en México emergieron con el colapso del régimen de Madero y prevalecieron en el subsiguiente "largo proceso de la Revolución mexicana".[32] Según esta lógica, el populismo mo-

[32] Véase Ernesto Laclau, *Política e ideología en la teoría marxista* (México, Siglo XXI, 1977), p. 215 n.

derno existió por lo menos desde 1913, y habrá de continuar hasta que la Revolución sea completada. En otras palabras, Laclau ve la Revolución como "permanente" en México. En un sentido retórico o de propaganda, por supuesto, esto es así, pero cuando se percibe el populismo en un sentido ideológico tan estrecho, el concepto pierde sus aspectos específicos de alianzas de clase y movimiento social.

Es más útil considerar el populismo mexicano como un fenómeno específico que prevalece sólo en ciertos momentos históricos: en este caso, en el periodo de Cárdenas, en donde claramente ocupó un lugar central en la realidad política mexicana. La coyuntura histórica ayuda a explicar por qué. El imperialismo estaba debilitado y absorbido por sus problemas en sus países de origen: las rivalidades entre las distintas potencias imperialistas se habían agudizado en un nivel global; la agitación de clase desde abajo aumentaba rápidamente, y la burguesía mexicana se hallaba dividida. Quienquiera que fuese el presidente —y ningún presidente mexicano dejó nunca de utilizar los estímulos *ideológicos* populistas— el grado de populismo varía directamente con el estado de la lucha de clases y la fortaleza relativa del imperialismo.

Como veremos más adelante, la estructura económica de México experimentó cambios radicales a raíz de 1940, cambios que tuvieron un impacto directo en el carácter de la estructura de clase y de la lucha de clase. Pero una continuidad histórica se mantuvo en el nivel estatal e ideológico. Esa continuidad se encarnaba en las prácticas de cooptación y represión, corporativismo, presidencialismo y populismo del estado capitalista, que ayudaban a hacer inteligible la aparente "estabilidad política" de México en el siguiente medio siglo o más allá.

SEGUNDA PARTE

LA ERA DEL CAPITALISMO MONOPÓLICO





MÉXICO CONTEMPORÁNEO

CAPÍTULO 5

EL ESTADO, EL CAPITAL EXTRANJERO Y EL CAPITALISMO MONOPÓLICO

El nacionalismo es un fenómeno que existe en todo el mundo. Por lo que respecta al nacionalismo de México, esa nación abre sus puertas a los extranjeros, como siempre lo hizo en el pasado. De modo que el nacionalismo no es un problema en México.

Henry Ford II, 2 de diciembre de 1970

Pero ¿acaso hay algún otro país en el mundo en donde la clase trabajadora [...] haya tenido un descenso en su poder de compra de más del 50% en un periodo de ocho años y que no tengamos una revolución social?

Nicholas Scheele, presidente de Ford Motor Company en México, 1991

El estado y la empresa privada son, en el fondo, la misma cosa.

Agustín Legorreta, director del Banco Nacional de México (Banamex)

Yo me imagino que los problemas de México vienen de que la gente con dinero lo pone en bancos extranjeros y que por eso es que aquí en México somos tan pobres. Ese dinero podría estar construyendo fábricas e industrias aquí.

Campesino michoacano emigrante[1]

Gracias a los cimientos sociales más sólidos proporcionados por las reformas de Cárdenas en los años treinta, la acumulación de capital en escala ampliada a partir de 1940 prosiguió durante varios años en una atmósfera de estabilidad política inusual. Para fines de los cincuenta, los economistas alababan la relativa fortaleza de las tasas de crecimiento del PIB (producto interno bruto) considerándolo un "milagro económico". México se estaba transformando rápidamente en un gigante económico semindustrializado y altamente urbanizado, destinado a ser el segundo socio comercial en importancia de Estados Unidos después de Canadá. (Fue el tercero hasta 1997, cuando sobrepasó a Japón.)

Pero una estructura de clases desequilibrada y una distribución del ingreso desigual (todavía hoy más desigual que en la India o Puerto Rico), junto con la estructura de la demanda existente y el carácter de la burguesía y el estado, daban como resultado que en México el estado y la burguesía se concentrasen

[1] Todas las declaraciones citadas fueron ampliamente reproducidas en la prensa, excepto la del trabajador migratorio, cuya afirmación proviene de James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1981.

en la producción de lo que Marx teorizaba como bienes del "Sector II" (bienes de consumo), principalmente para la minoría rica de la nación, como opuestos a los bienes del "Sector I" (bienes de capital e intermedios, los medios de producción). Por su parte, el capital extranjero trasladaba cada vez más sus actividades a la industria pesada e intermedia (incluyendo las ventas de tecnología), agroindustria, turismo y los sectores financiero y exportador de la economía, con el resultado de que vino a desempeñar un papel preponderante en el carácter del crecimiento económico de la nación y de la toma de decisiones económicas del estado. Igual que en el pasado, los préstamos externos y la deuda externa de México se convirtieron en objetos de negociación para la influencia de los capitalistas extranjeros.[2]

En términos de los programas económicos, las ideas de "modernización" y "desarrollo económico" ocupaban el lugar central. El desarrollo se medía en términos de tasas de crecimiento del PNB con poca consideración para las consecuencias medioambientales o humanas. Un número cada vez más reducido de grupos poderosos de capitalistas monopólicos y de empresas transnacionales[3] dirigían el trabajo de cada vez más millones de personas de clase intermedia, proletarios, campesinos y subproletarios depauperados. Para las masas, no había ningún "efecto de goteo" de los miles de millones de dólares que se vertían en el "desarrollo" de la economía mexicana. Para 1998, el capitalismo monopólico se mantenía firme en la silla y México estaba tan nítidamente dividido entre ricos y pobres como lo había estado en 1910.

[2] En general, las ventas de tecnología de los países más industrializados a los países menos industrializados en vías de desarrollo, derivan de la tendencia histórica del capital a expandirse más rápidamente en el Sector I, producción de los medios de producción, que en el Sector II, producción de artículos de consumo. Más temprano en la historia de los países más industrializados, la alta composición orgánica del capital del Sector I (la relación de capital constante, o instrumentos y materias primas de producción, con capital variable o fuerza de trabajo: única fuente de plusvalor y ganancia) ha sido balanceada por una composición orgánica más baja en el Sector II, lo que permite una tasa de ganancia generalizada aceptable. (El crecimiento de la composición orgánica del capital genera la tendencia de la tasa de ganancia a caer). A medida que más y más trabajadores se van sindicalizando en países como Estados Unidos, los capitalistas introducen más maquinaria en la producción del Sector II, provocando que la composición orgánica del capital crezca allí también, y ejerciendo más presión sobre los capitalistas para encontrar otras áreas donde restablecer el patrón acostumbrado de tasas de ganancia. Encuentran esas áreas en los países menos industrializados que están emprendiendo su industrialización, al principio en el Sector II de producción de esos países, y eventualmente también en su Sector I.

[3] Las transnacionales son corporaciones que tienen su base en un país pero obtienen gran parte de sus ingresos, materias primas y capital de operación de muchos otros países, mediante la propiedad de subsidiarias extranjeras, empresas mixtas con gobiernos o inversionistas extranjeros y una gran variedad de otros medios. La fuerza impulsora detrás del ascenso de las transnacionales es la necesidad de las corporaciones de crecer y mantener su rentabilidad, así como de lograr el control de la mayor cantidad posible de los recursos y el capital del mundo. *La transnacional, un producto lógico del capital monopólico que ha superado a las naciones, constituye el corazón económico del imperialismo moderno.* El término "transnacional" es preferible a "multinacional" porque es un concepto menos ideológico y más preciso, que combina los aspectos de control implícitos en "nacional" con los aspectos globales de "trans".

A principios de siglo, la palabra *imperialismo* se usaba comúnmente para caracterizar la exportación de capital desde los países ricos e industrializados a las áreas del mundo menos desarrolladas, con el fin de resolver las crisis periódicas de sobreproducción que sufría el capitalismo y para obtener los muy necesarios recursos naturales para el mantenimiento y expansión de la producción (sin los que ninguna economía capitalista puede prosperar). Estos primeros países imperialistas industrializados, incluyendo a Estados Unidos, estaban experimentando el ascenso del capital monopólico. A menudo el término *imperialismo* se aplicaba tanto a la invasión y ocupación militar de tierras extranjeras, como a la colonización estadunidense de Puerto Rico o a la colonización francesa de Vietnam y Argelia.

Después de la segunda guerra mundial, cuando tantas naciones colonizadas del mundo rompieron las ataduras del colonialismo para convertirse en naciones independientes (especialmente en Asia y África), el término "neocolonialismo" se puso de moda para caracterizar a su prolongada dominación económica bajo el imperialismo (esto es, el capital monopólico y la exportación de capital para resolver las crisis de sobreproducción, mientras recorre el mundo en busca de recursos naturales). Estas antiguas colonias, junto con América Latina, vinieron a ser conocidas como el *tercer mundo* (distinto tanto de las potencias capitalistas principales como del campo soviético). Sin embargo, el imperialismo económico, tal como lo definimos aquí, sigue operando como un agente determinante —aunque no el único— en el " maldesarrollo" de la economía y la política de México.

Comenzando en los años cuarenta, la "revolución verde" incrementó el rendimiento de muchas cosechas pero empeoró las condiciones de buena parte del campesinado en las zonas rurales de México. Los campesinos mexicanos sirvieron como fuente de alimentos baratos y mano de obra barata para la industrialización de México. Sobrevino un proceso de proletarización del campesinado y de creciente migración hacia las ciudades de México y Estados Unidos. El "desarrollo económico" de México se edificaba sobre las espaldas no sólo de los obreros sino, sobre todo, de los "superexplotados" —indígenas, campesinos, emigrantes, mujeres, y de los "obreros pobres" (o "depauperados").

Los trabajadores son "sobrexplotados" cuando reciben un salario (o a menudo ningún salario en el caso de las mujeres) por su fuerza de trabajo *por debajo* de su valor mínimo, o lo que necesita un trabajador para el sostenimiento mínimo de él mismo o de su familia. Las *tasas* de ganancia de los patrones superexplotadores, por supuesto, se elevan de forma correspondiente, aunque la suma total de las ganancias por ventas dentro de México resultaban a veces disminuidas por la consiguiente incapacidad de los trabajadores mal pagados para convertirse en consumidores fijos de los bienes producidos.

Dependiendo de las circunstancias económicas prevalecientes, el estado mexicano dio a sus "programas de desarrollo" y de "modernización" diferentes giros retóricos, tales como por ejemplo la "sustitución de importaciones" (1940 a 1955, para favorecer la producción nacional de bienes de consumo) y "desa-

rrollo estabilizador" (1956 a 1970, para continuar la industrialización reduciendo al mismo tiempo la inflación). En 1965, México añadió a su política de industrialización un programa de áreas fronterizas de maquiladoras (plantas de ensamblaje) de propiedad extranjera.

Una crisis política en 1968 coincidió con los primeros signos de lo que más adelante serían crisis económicas mayores. Por consiguiente, en los setenta el estado ofreció dos nuevos "giros" a sus políticas de "desarrollo". Primero, procuró aumentar la producción de bienes de capital (Sector I), y luego, anunciando nuevos y fabulosos descubrimientos petroleros, cambió a un "desarrollo basado en la exportación de petróleo" (1977 a 1982). Para financiar estos programas, el estado solicitó y recibió cuantiosos préstamos. También reimpulsó su retórica nacionalista, aunque haciendo nuevas concesiones al capital extranjero.

Por último, cuando a fines de 1982 México ya no pudo pagar los intereses de su deuda externa, el estado anunció su "bancarrota" y un "reajuste económico" basado en los dictados de sus acreedores. A su vez esto provocó que México entrara en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC) en 1994, así como una "reestructuración de la economía" bajo la bandera del "neoliberalismo".

Bajo el neoliberalismo, el "desarrollo" debía basarse en una estrategia orientada al mercado, dirigida por el sector privado y basada en las exportaciones, que abriría el país todavía más al capital extranjero, similar a lo que la dictadura de Díaz intentó un siglo antes. La privatización de sectores estatales de la economía, una reducción del gasto social y la apertura de la economía de México a la inversión extranjera se convirtieron en las marcas identificadoras de la política del estado. El neoliberalismo sirvió como ideología y como práctica política. Esta fase neoliberal posterior a 1982 aceleró notablemente la "petrolización" y "maquiladorización" de la economía y generó una crisis económica aún peor.

En la era posterior a la segunda guerra mundial, el estado mexicano se convirtió cada vez más en un estado autoritario-tecnocrático. Los graduados de la *Ivy League* educados en Estados Unidos conocidos como tecnócratas se apoderaron gradualmente de los ministerios más relacionados con la economía, y en las décadas de 1980 y 1990 llegaron hasta a ocupar la presidencia. Estos cambios —junto con las crisis económicas cada vez más profundas, las crecientes presiones del capital privado sobre el estado, las denuncias de los medios de comunicación de los vínculos existentes dentro del estado con el tráfico de drogas, los movimientos populares de protesta y los levantamientos armados localizados— condujeron finalmente a una "crisis del estado de partido único" que examinaremos en capítulos sucesivos. Este capítulo ofrece una base inicial para la comprensión de *las raíces económicas de la crisis política de México.*

EL ESTADO AUTORITARIO-TECNOCRÁTICO

Después de las reformas de Cárdenas, un estado autoritario y cada vez más tecnocrático impuso la "estabilidad política". Como si quisiera simbolizar el compromiso del estado con la estabilidad y la socialización del pueblo con los ideales de la armonía social y la unidad nacional, el sucesor de Cárdenas, general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), empezó su gobierno revocando la reforma "socialista" de la educación y siendo el primer presidente desde Díaz en declararse creyente de la fe católica. En 1941, las organizaciones de negocios que Cárdenas había hecho obligatorias fueron declaradas "entidades de interés público para consulta con el estado". Una "Ley de disolución social", que establecía largas sentencias de cárcel para cualquiera que intentara "disolver" la sociedad, fue aprobada por el Congreso ciegamente obediente del partido gobernante, presumiblemente para defender la nación contra cualquier intento "subversivo" del fascismo. En realidad, la Ley de disolución social duró tres décadas y fue repetidamente invocada para intimidar o reprimir a los reformistas de izquierda y a los disidentes revolucionarios. Entre los grupos de oposición, sólo la fascista Unión Nacional Sinarquista creció en forma apreciable durante los años de la guerra, declarando contar con 800 000 miembros en 1946.

Durante la segunda guerra mundial, Ávila Camacho hizo revisar el Código Laboral para restringir el derecho de los empleados públicos a hacer huelgas y para hacer más fácil el despido de trabajadores. Para simbolizar el fin, o "institucionalización", de la Revolución mexicana, el partido oficial gobernante fue rebautizado en 1946 como PRI: Partido Revolucionario Institucional. El sucesor de Ávila Camacho, el presidente Miguel Alemán, declaró fuera de la ley al Partido Comunista y luego negó el registro al partido político sinarquista.

El estado representaba un papel central en la "modernización" económica de México. Enmascaraba sus políticas frecuentemente antindígenas, antimujeres, anticampesinos, antiobreros y antidemocracia detrás de las banderas ideológicas del "nacionalismo revolucionario" y de la "democracia directa". Se presentaba como defensor de los ideales "nacionalistas revolucionarios" según los cuales los campesinos, obreros, estudiantes y otros habían hecho grandes sacrificios y conseguido al menos algunos avances. Estos ideales incluían la propiedad nacional de los recursos naturales; la reforma agraria; el "sufragio efectivo y no reelección"; universidades y escuelas preparatorias estatales "autónomas"; "indigenismo" y, mucho después de que las mujeres conquistaran su derecho al voto en 1953, "derechos iguales para las mujeres". Cada uno de los voceros del gobierno y cada líder del PRI, de arriba abajo hasta el distrito local, se autoproclamaba representante de "los pobres" y de "los humildes".

Invocando las figuras de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, Carranza, Obregón y Cárdenas, el estado siempre era capaz de acusar a sus oponentes de ser antipatriotas o de ir "contra la nación". Después de aplastar violentamente las manifestaciones estudiantiles por la democracia en 1968 apoyándose en estos argumentos demagógicos, el gobierno decidió colocar a uno de los ins-

piradores de los estudiantes, el incendiario revolucionario anarquista Ricardo Flores Magón, en el panteón de los héroes nacionales, a pesar de las anteriores denuncias de la burguesía de que el internacionalismo proletario de Flores Magón era "antimexicano". Entretanto, el propio estado que estaba tras los asesinatos de líderes campesinos como Rubén Jaramillo, de Morelos, un veterano del ejército de Zapata muerto en 1962 por las tropas federales, erigía monumentos con sus bustos en las plazas de los pueblos.

La herencia revolucionaria de las luchas de obreros y campesinos que dieron origen a este mal llamado estado "revolucionario" era enseñada en cada nivel de la sociedad —no sólo en las escuelas (grados promedio completados para 1997: séptimo para los varones, un poco menos para las mujeres), sino también en la prensa "libre" (controlada indirectamente por el estado), así como en las organizaciones políticas y sociales y en los clubes de manzana, talleres y ejidos. En todas partes se les hablaba a los mexicanos trabajadores de *su* contribución a la creación de una nación fuerte e "independiente". Al mismo tiempo, el estado subrayaba el derramamiento de sangre y la violencia que su contribución había ocasionado, dejando a la gente convencida de que a toda costa era preciso impedir otro estallido de guerra civil. Se aseguraba a los ciudadanos que, aunque fuese gradualmente, los antiguos objetivos populares seguían siendo perseguidos y que sería posible llegar a alcanzarlos si la gente trabajaba duro y no causaba problemas.

Durante décadas el estado gastó sumas inmensas haciendo propaganda de este modelo normativo de "nacionalismo revolucionario" junto con el modelo político de una "democracia directa". Ninguno de estos modelos volvió nunca ni siquiera a aproximarse a los niveles de credibilidad que tuvieron bajo Cárdenas. La "democracia directa" fue institucionalizada en el maquillaje corporativista de los tres sectores del PRI. Durante casi tres décadas muchos campesinos, obreros y gente de las clases intermedias (además de algunos segmentos de los pobres) sentían que al menos tenían una representación simbólica en "sus" sectores del partido, (la CNC de la mano de obra rural, la CTM de la mano de obra urbana y por último el sector "popular"). El poder real seguía estando en el comité ejecutivo nacional del partido, constituido por doce miembros, y en la presidencia constitucionalmente poderosa de la nación.

Una técnica clave utilizada por el estado para mantener la paz social consistía en canalizar las divisiones entre las personas, siempre que era posible, en "grupos competidores" según líneas corporativistas. Obreros, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes y grupos depauperados eran mantenidos tan separados como fuese posible, mientras que las divisiones de clase y raciales eran enmascaradas por las ideologías del populismo, la unidad nacional y la armonía de las clases. De esta manera, la era de relativa estabilidad política de México se prolongó hasta 1968. (Algunos dirán que duró hasta 1988, cuando el candidato del PRI perdió las elecciones presidenciales pero, por el más mínimo de los márgenes, fue declarado vencedor por el tribunal electoral dominado por el PRI.)

"Los más fácilmente explotables"

Como observamos en la primera parte, a lo largo de toda la historia de México la extrema explotación de los indígenas y su participación en la lucha de clases tuvo su paralelo en lo que sucedía con las mujeres trabajadoras de México. Por consiguiente, el estado autoritario-tecnocrático posterior a 1940 dedicó bastante jarabe de pico a estos grupos al tiempo que no hacía nada para alterar la *estructura* básica de su opresión. De hecho, el estado aumentaba su opresión de muchas maneras: primero, reforzando la estructura capitalista de la economía y, segundo, promoviendo cínicamente las ideologías del *indigenismo* y, más tarde, los "derechos iguales de las mujeres" para aparentar una ilusión de progreso.

El indigenismo consistía en un respeto oficialmente proclamado por la herencia indígena del país —una de las pocas, aunque contradictorias, realizaciones de la Revolución, tal como ejemplifican los murales de Rivera, Siqueiros, Orozco y otros. De hecho, el indigenismo servía al objetivo de debilitar la cultura indígena e integrar a los indios de México en la economía nacional e internacional. Como ideología y práctica de integración, el indigenismo fue institucionalizado en 1936 con la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, que en 1948 fue incorporado en el Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo de bajo presupuesto. Esta institución trató de vincular a los indígenas más estrechamente con la economía nacional. De hecho, o disfrazaba o legitimaba la explotación y engaño de los indios ejercido de forma rutinaria por los caciques, grandes terratenientes, comerciantes, prestamistas, reclutadores de emigrantes, agentes de la agroindustria y dueños de granjas, fábricas o talleres. La antropóloga e historiadora Marcela Lagarde señala que los programas del INI eran "dirigidos y programados por antropólogos que proclamaban estar a favor del indio, pero cuyo objetivo era que dejase de ser tal". Los antropólogos Ricardo Pozas e Isabel H. de Pozas observaron que el "verdadero contenido" del indigenismo era "convertirse en un medio expeditivo para la explotación de los conglomerados humanos más fácilmente explotables".[4]

Lo mismo podría decirse de las mujeres trabajadoras, debido a la estructura capitalista de la economía. En otro nivel, debido al patriarcado, podría incluso decirse en cierto grado de *todas* las mujeres. El legado precolonial y poscolonial del machismo estaba muy profundamente asentado en la cultura mexicana —como lo estaban el patriarcado y el machismo en casi todo el mundo contemporáneo.[5] En México, estos valores patriarcales elevaron a las mujeres so-

[4] Marcela Lagarde, "El indigenismo, un proceso ideológico" (tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1974), p. 79; Ricardo Pozas e Isabel H. de Pozas, *Los indios en las clases sociales de México* (México, Siglo XXI, 1971), pp. 99-100.

[5] Hay abundante literatura sobre el machismo mexicano y latinoamericano, la mayor parte de la cual pasa por alto sus raíces en el patriarcado europeo. Para más datos sobre este tema, véase Hedda Garza, *Latinas: Hispanic women in the United States* (Danburt, Franklin Watts, 1994), pp. 14-16. La otra cara del machismo mexicano era el *marianismo*, o exagerada adoración a la figura de "María", como en el caso de la Virgen de Guadalupe, de alguna manera como última represen-

bre un pedestal u otro, usualmente el de la virtuosa esposa o madre, aunque manteniéndolas siempre "en su sitio". Garantizar a las mujeres el derecho al voto en 1953, igual que garantizar a los indígenas un reconocimiento simbólico con la ideología del indigenismo, equivalía a una concesión perfectamente manejable dentro de un sistema político en donde el partido gobernante siempre ganaba oficialmente (hasta 1997).

En México, como en cualquier otro lugar, las mujeres mantuvieron durante largo tiempo diferentes posiciones de clase, y diferentes convicciones políticas o de otro tipo. Sin embargo, debido al patriarcado y al sexismo, las mujeres seguían teniendo una relación doble con el modo capitalista de producción: primero, como trabajadoras, dependiendo de lo que hicieran (trabajo doméstico y de subsistencia no asalariado; trabajo agrícola o fabril; maestra, empleada, etc.), y segundo, por el sistema de valores patriarcales, a través de sus familias o parientes masculinos, cuyas actividades y actitudes reforzaban su subordinación como trabajadoras no asalariadas.

En esta nueva e importante conceptualización, *la producción de fuerza de trabajo se realiza sobre una base cotidiana tanto como generacional, organizada a través de la familia en un marco patriarcal.* Su importancia se manifiesta en la resistencia del capital a socializar los costos de esta forma de producción prestando servicios públicos comunitarios, atención prenatal gratuita, centros de atención diurna, licencias de maternidad y paternidad pagadas, servicios gratuitos de lavandería y cafetería, educación gratuita en todos los niveles y otros similares. Sin esta forma de producción, la producción como un todo —tanto de bienes de capital e intermedios como de bienes de consumo— sería imposible, puesto que sin fuerza de trabajo activada no puede haber producción.

La producción de fuerza de trabajo *no tiene que ser feminizada o no asalariada.* Acostumbraba evolucionar de tal suerte bajo el capitalismo patriarcal, en gran medida para beneficio de otros, especialmente de los empleadores que no gastaban ni un centavo para sufragar los costos de criar generaciones de trabajadores. Los costos de la producción de fuerza laboral podrían ser asumidos por la sociedad como un todo, pero la socialización de estos gastos normalmente ocurría sólo en el grado en que lo demandaban los movimientos sociales. La expansión global de gigantes corporativos como McDonald's reflejaban la capitalización, no socialización, de la producción de fuerza de trabajo.

Si bien los salarios pagados eran fáciles de medir, era difícil medir el valor monetario de la inmensa suma de las mal llamadas "horas hombre" proporcionadas a los capitalistas gratuitamente en la producción de fuerza de trabajo. Sin embargo, un claro signo de su importancia y magnitud era la resistencia ofrecida por la mayoría de los empleadores y sus representantes políticos a todos los intentos de socializar los costos de la producción de fuerza de trabajo.

tación de lo bueno y puro (y en el caso de la Virgen, salvadora de la humanidad sufriente). Bajo el patriarcado, se esperaba de las mujeres de México que de una u otra forma estuviesen "a la altura" de este exigente ideal.

Es preciso señalar que las mujeres de México, al producir la fuerza de trabajo de la sociedad que es la fuente última de toda riqueza, compartían la producción de fuerza de trabajo con otros grupos —por ejemplo, los agricultores de subsistencia no asalariados y los artesanos familiares, algunos de los cuales eran hombres. Bajo el capitalismo, el "papel familiar socialmente asignado" de las mujeres en la reproducción cotidiana de la fuerza laboral —alimentar, vestir, criar, educar en los valores de la sociedad y atender a la familia y a los miembros de la comunidad— era constantemente reforzado por el sistema de valores patriarcal y machista porque los empleadores, en su carrera competitiva para acumular, necesitaban minimizar los costos de la fuerza de trabajo y su mantenimiento. En otras palabras, al capitalismo le interesaba mantener a las mujeres en una posición no pagada de trabajo familiar o en empleos de bajos salarios ¡o en ambos!

De hecho, las mujeres eran "sobrexplotadas" —no sólo en la producción de fuerza de trabajo, sino también en las formas más tradicionalmente reconocidas. Ahí, gracias al sistema de valores patriarcales prevaleciente, el simple hecho de haber nacido mujer era utilizado para sobrexplotarlas. Ocurría esto, en primer lugar, a través de la ideología de la supuesta inferioridad femenina y de su propensión a la preñez, que se utilizaba para justificar el pagarles salarios más bajos (o, cuando quedaban embarazadas, para justificar su despido). En segundo lugar, se producía mediante la práctica casi cotidiana del acoso sexual en los centros de trabajo que obligaba a muchas mujeres a renunciar o, más a menudo, las exponía a ser despedidas al negarse a realizar los actos sexuales que se esperaban de ellas. Esta forzada rotación de empleos era causa a su vez de que se pensase que las mujeres eran incapaces de "conservar un empleo" y en consecuencia eran "poco confiables" y "menos calificadas" para un salario decente.

Puesto sucintamente, *el patriarcado estructuró (es decir, mantuvo y exageró) la sobrexplotación de las mujeres*. Por eso es que cualquier análisis de clase tiene que ser *de género* si se quiere que refleje la realidad.[6]

Las relaciones de producción de la fuerza de trabajo afectaron a todas las clases sociales de diversas formas. Por ejemplo, socialmente se esperaba que los salarios de los hombres fuesen suficientes para proporcionar provisiones para mantener a sus familias, tanto si lo eran de hecho como si no (el sistema de valores patriarcal de "el hombre trae la comida a casa"). Debido a la naturaleza *de género* de la clase, las relaciones de poder eran más complejas que un simple conflicto de clase "patrón-obrero". Un ejemplo *dentro de una clase* se daba cuando un marido se unía a sus compañeros trabajadores en una huelga. Actuaba en pro de sus propios intereses de clase. Pero, al menos a corto plazo, esta actitud iba en contra de las necesidades de su esposa, puesto que la pérdida del salario reducía la capacidad de ella para comprar las provisiones necesarias para

[6] Para un trabajo feminista pionero tras esta reconceptualización, véase Wally Seccombe, *A millennium of family change: feudalism to capitalism in northwestern Europe* (Nueva York, Verso, 1992), y *Weathering the storm: working-class families from the industrial revolution to the fertility decline* (Nueva York, Verso, 1993).

desempeñar sus "deberes" cotidianos (trabajo no asalariado) de alimentar y vestir a su familia.

Hablando estrictamente, pues, si bien podemos decir con verdad que los hombres que ganaban salarios por debajo de la norma eran sobrexplotados, también debemos observar que las mujeres sobrexplotadas lo eran dos o tres veces más. Su trabajo en la producción de fuerza de trabajo no sólo era subpagado. Era *no* pagado —lo que significa sobrexplotación. Y, para aquellas mujeres que también trabajaban fuera de casa, o que llevaban a casa trabajo contratado fuera como hacían muchas costureras (llamado "trabajo en casa" en la economía "informal"), su "doble jornada" era en realidad, en términos de sobrexplotación, una "triple jornada".

En verdad, si pudiéramos medir la magnitud de esta triple sobrexplotación de las mujeres, resultaría que es aún más que triple, puesto que en la fuerza de trabajo asalariada las mujeres ganaban no sólo salarios por debajo de la norma sino considerablemente menos de lo que recibía un hombre por un gasto equivalente de fuerza de trabajo. Más aún, en el caso de México, se contaba a las mujeres por debajo de su número real como parte de la fuerza de trabajo en el sector formal de la economía —en donde eran más de una tercera parte a fines de 1998, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). Usualmente no se cuenta a las mujeres que hacen "trabajo en casa" subcontratado, como sucede con otros millones más en la economía informal.

De acuerdo con los cálculos estadísticos del informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas de 1995, las contribuciones económicas de las mujeres fueron globalmente infravaloradas en una medida de 11 billones de dólares. Solamente el trabajo doméstico no pagado de las mujeres se estimaba en el equivalente en el mercado del 15 al 30% del producto interno bruto (PIB). Los estimaciones globales de las Naciones Unidas y de otros organismos mostraron que las mujeres proporcionaban dos tercios de todas las horas de trabajo del mundo, obteniendo sólo una décima parte del ingreso mundial y poseyendo menos de una centésima parte de la riqueza.[7]

El exagerado grado de sobrexplotación de las mujeres fue la razón de que la lucha de la clase trabajadora por mejorar globalmente implicaba temas de género como las luchas por los derechos iguales de las mujeres y la socialización de la producción de fuerza de trabajo. Pero los valores patriarcales impregnaban tan profundamente las filas de los líderes principalmente varones de los trabajadores sindicalizados en México, que apenas en los años ochenta y en los noventa algunos líderes hombres —y sólo unos pocos— captaron el verdadero significado de la triple opresión de las mujeres para la clase trabajadora como un todo. La mayoría de los líderes hombres de los sindicatos alababan de labios para afuera las luchas de las mujeres sin dar ningún paso concreto

[7] Citado por el profesor Peter F. Bell de la State University of New York-Purchase en su ensayo inédito "Thailand's economic miracle: built on the backs of women" (1997), 4, 10. Véase también Ann K. Nauman y Mireille Hutchison, "The integration of women into the Mexican labor force since NAFTA", *American Behavioral Scientist* 40, núm. 7 (junio-julio de 1997), pp. 950-56.

para alterar la estrategia general de los sindicatos —o, por otra parte, la inferior representación de las mujeres en la dirigencia sindical.

Pero para los años ochenta y los noventa las mujeres estaban desempeñando un papel central en la fuerza de trabajo que generaba las exportaciones y las ganancias por divisas y también estaban reclamando sus derechos como trabajadoras. Las mujeres eran el grueso de la fuerza de trabajo de las maquiladoras y la industria textil y productoras clave de bienes agrícolas y artículos alimentarios. Además, considerando el turismo como una exportación porque a menudo atrae más divisas que cualquier otra exportación a excepción del petróleo, las mujeres eran determinantes para la industria turística, no sólo en los servicios hoteleros y de restauración, sino a menudo mediante las aportaciones de "servicios sexuales", aunque muchas de las "ventas" se realizaban entre los varones mexicanos.

A lo largo de las décadas, para mantener a las mujeres en su situación de "triplemente sobrexplotadas", el estado autoritario-tecnocrático mexicano ayudó a organizar y reforzar el sistema de valores del patriarcado y el machismo y sus prácticas (es decir, pegar a las mujeres), convirtiendo simultáneamente a las mujeres en bienes de consumo para el mercado capitalista como trabajadoras asalariadas subpagadas y como objetos sexuales para los machos mexicanos y la industria turística en auge desarrollada en gran parte con fondos y promoción del estado. Desde el final de la segunda guerra mundial, el imperialismo exportó a México los pertrechos del sexismo y el correspondiente mensaje ideológico empacado en programas de televisión, libros de caricaturas, novelas baratas y otros anzuelos culturales. El doble mensaje consistía en las mujeres como objetos bellos —activas y apasionadas "latinoamericanas fogosas"— pero pasivas y dispuestas a aceptarlo todo de sus situaciones de sobrexplotación. También se hacía propaganda de las mujeres como buenas consumidoras (algo llamado por algunos "la feminización del consumo"). Los mensajes contradictorios sólo eran superados por la simultánea celebración de los "derechos iguales" de las mujeres y de las superlativas realizaciones de las mujeres como madres, amantes, amas de casa, devotas practicantes y sustentadoras de "hogares limpios" y de "la plenitud de la vida familiar" —sin dejar por ello de sobrexplotarlas todo el tiempo como mano de obra barata o no asalariada y de colocarlas en las filas de los muy pobres (lo que algunos llaman "la feminización de la pobreza").

Aunque no pueda decirse que es algo exclusivo de México, el machismo está particularmente institucionalizado allí. Hasta los años setenta, pocas mujeres se atrevían a enfrentarlo abiertamente, y muchas de ellas internalizaban su sistema de valores. Esta doble norma sexual se aplicaba a todas las clases sociales. De hecho, el presidente de la nación era admirado por el número de amantes de que podía alardear.

Obviamente inconsciente de los problemas enfrentados por las mujeres de Estados Unidos, un trabajador emigrante mexicano que acababa de regresar de California me dijo una vez que "¡allá la mujer le pega al hombre en vez de

que el hombre le pegue a la mujer!" Oyendo esto, su mujer parecía escéptica. La licencia socialmente aceptada que tiene cualquier trabajador mexicano para dominar completamente a su mujer servía, en efecto, como una especie de perversa "compensación" por la explotación que él mismo tenía que sufrir en el trabajo —al tiempo que debilitaba gravemente su propia integridad y sentido de autoestima. Esto reforzaba la habilidad de los capitalistas para dominar a la mano de obra tanto masculina como femenina.

Un aspecto ilustrativo de los obstáculos a la igualdad de las mujeres en las clases intermedias —además de los estructurales puestos por las fuerzas activas del capital— eran las manipulaciones por parte del estado de los "derechos de las mujeres" o de las "feministas". El gobierno envió a su fiscal general (varón) a encabezar la delegación mexicana al Congreso Internacional de Mujeres celebrado en la ciudad de México en 1975 ("Año Internacional de la Mujer"). Ese mismo año decretó una enmienda de ley sobre la igualdad de derechos de las mujeres, que seguidamente ignoró: la mayoría de las mujeres asalariadas seguían recibiendo salarios inferiores a los de los hombres por trabajos físicos o intelectuales semejantes. En el año de elecciones de 1997, cada uno de los partidos políticos presentó al menos una candidata mujer. Una lesbiana fue elegida como miembro del Congreso. En resumen, había una apariencia de progreso para las "minorías", mientras que la realidad era que los obstáculos estructurales a la igualdad de las mujeres seguían siendo casi los mismos.

Hablando en general, las mujeres de la minoría acomodada de las clases intermedias y de la clase alta, la mayor parte de las cuales explotaba a otras mujeres (como sirvientas, cuidadoras de niños, etc.) y gastaba poca energía produciendo la fuerza de trabajo comercial, ayudaban a la burguesía a mantener un sistema patriarcal. Se esperaba de ellas que fuesen "buenas esposas" y adornos atractivos para los hogares de los hombres, y pocas de ellas eran admitidas en las filas de las posiciones políticas o de las profesiones de categoría. Cuando las mujeres alcanzaban posiciones profesionales prestigiosas, a veces recibían una paga y un estatus iguales a los de los hombres (aunque los estereotipos sexuales no se quebrantaban por ello). Esto se debía a su *estatus de clase.* No era raro, por ejemplo, que una profesora presidiera o participara en una reunión de alto nivel intelectual y que sus puntos de vista fuesen escuchados —típicamente con una referencia de algún colega masculino a la contribución de su "bella y encantadora colega".

A pesar de todo ello, por varias décadas gran número de mexicanos fueron conscientes de las manipulaciones ideológicas del estado. Así, cuando empezaron a superar sus divisiones y a crear al menos una apariencia de unidad popular, buscando un cambio bien fuese reformista o revolucionario, el estado respondió con violentas represiones y con la correspondiente justificación ideológica de "defender la Revolución y la nación contra complots extranjeros, comunistas, terroristas, etc.". Mujeres y hombres, como trabajadores en huelga eran acusados de ser antipatriotas o destructores de "la armonía entre el capital y el trabajo". Matanzas de campesinos desarmados, hombres y mujeres,

ocurrían con mucha frecuencia. En este aspecto las mujeres sí conseguían la igualdad. La matanza de estudiantes y otros ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en 1968, sin embargo, señaló un punto crítico que, como veremos en capítulos posteriores, en última instancia fue contraproducente y condujo a un desafío exitoso al sistema de partido único.

El papel del estado en la economía

Antes de la era del neoliberalismo, el papel central del estado mexicano en la economía derivaba de tres cosas: la relativa debilidad de la burguesía; la correspondiente fuerza relativa de los obreros y campesinos en la lucha de clases (aunque el partido oficial mantuviera a la mayoría de ellos en organizaciones corporativas separadas), y el carácter ilegítimo del poder del imperialismo sobre México. El estado se presentaba a sí mismo como garante de los intereses de "la nación", pretendiendo estar "por encima" de las clases o regiones contendientes. De esta forma el estado representaba con mayor facilidad su papel corporativista de árbitro último.

Debido a que la naturaleza de cualquier estado corresponde a la naturaleza de las fuerzas de clase que dominan el sistema de producción económica, el estado mexicano seguía siendo capitalista. Por consiguiente, el estado negociaba directamente con la burguesía, con el capital extranjero y con los estados imperialistas, usualmente aceptando sus consejos y aplicándolos a la política económica en general. Cada gobierno sucesivo buscaba reducir los costos del capital privado y aumentar las ventas y los márgenes de ganancia. El estado desempeñaba un papel activo en asistir, estimular y complementar al capital privado. Puesto que el capital privado, incluso en los países más industrializados, halla difícil permitirse el lujo de las grandes inversiones exigidas por la moderna revolución científica y tecnológica, el estado mexicano presupuestaba fondos para investigación y desarrollo y para la producción de tecnologías mejoradas —aunque no alcanzaba la escala de su importación de maquinaria y *know how* extranjeros. En las áreas de investigación y tecnología, como en todas las demás, las inversiones del estado facilitaban la acumulación de capital en el sector privado pero sólo raramente se centraban en atender las necesidades cotidianas del resto de la ciudadanía.

Anteriormente a la era que siguió a 1982, de "restructuración y privatización" neoliberal de la economía, el estado contribuyó con un 40 % o más de las inversiones totales en cada década (excepto en los cincuenta). Las inversiones del estado eran principalmente en infraestructura económica u otras áreas útiles al capital privado (energía, irrigación, transportes, servicios, servicios financieros, etc.). Favorecida por este tipo de subsidio estatal y por el mantenimiento de una relativa estabilidad política, la economía capitalista de México experimentó un salto de 120% en producción industrial y un aumento de 100% en producción agrícola desde 1940 hasta 1960. Los propagandistas lo llamaron el

"milagro económico mexicano". Estimulada inicialmente por las incrementadas demandas estadunidenses de alimentos y materias primas durante la segunda guerra mundial y la guerra de Corea, y ayudada por un abundante suministro de mano de obra posibilitado por el rápido aumento de la población —de 19.6 millones de habitantes en 1940 a 35 millones en 1960 (72 millones en 1982, y una estimación de 100 millones para el 2000)— la economía mexicana mostró tasas de crecimiento del PIB importantes entre 1950 y 1970, cuando un 6% por año no era raro.

El estallido de la segunda guerra mundial distrajo a las principales potencias imperialistas, que ya no prestaron demasiada atención a los asuntos internos de México permitiéndole así dar los primeros pasos de un programa de industrialización propio. Con su vecino del norte imposibilitado de exportar la cantidad acostumbrada de productos manufacturados, México aumentó las tarifas proteccionistas para defender sus propios productos y emprendió la sustitución de importaciones. La producción industrial subió un 35%. Mientras tanto, las exportaciones de México se duplicaron durante la guerra, debido en parte a que Estados Unidos, para ayudar a financiar su producción de guerra, compraba grandes volúmenes de plata, minerales y productos alimentarios mexicanos. Estados Unidos también otorgó préstamos al programa de industrialización de México. Además, cierto número de inversionistas estadunidenses, huyendo de las regulaciones de precios y los altos impuestos de época de guerra, invirtieron en México.

Inmediatamente después de la guerra, los capitalistas estadunidenses aumentaron sus inversiones y empezaron a comprar muchas de las nuevas industrias de México. Las nuevas inversiones extranjeras directas empezaron a crecer rápidamente en 1946; se duplicaron en los cincuenta, se triplicaron en los sesenta, se cuadruplicaron en los setenta, casi se duplicaron en lo que las Naciones Unidas llamaron la "década perdida para el desarrollo" de la América Latina deprimida económicamente en los ochenta, y se duplicaron con creces en la primera mitad de los noventa. Para 1996, la inversión extranjera directa total en México alcanzó los 67 708.3 millones de dólares, una suma mayor que el PIB de muchas naciones. Más de la mitad del capital extranjero estaba situado en las manufacturas, y más de un tercio en servicios financieros (banca, seguros, etc.; véase cuadro 11).

El gran volumen de la inversión extranjera y estatal hizo posible la instalación de tecnologías cada vez más nuevas y de sus productos en la cultura y la industria —tractores, segadoras, fertilizantes, semillas híbridas, herramientas—, todo lo cual aceleró el crecimiento económico de México. La industria y la agricultura experimentaron un grado sin precedentes de concentración a medida que unidades productivas dispersas, artesanos, obreros y campesinos eran trasladados a factorías modernas o a grandes explotaciones agrícolas. Los incrementos de la productividad resultante y las tasas de ganancia más elevadas facilitaron la centralización (monopolio) del capital en manos de la gran burguesía y los capitalistas extranjeros. La producción en línea de montaje de

automóviles y varios bienes de consumo duraderos y no duraderos agudizaron las diferencias de clase entre trabajadores y propietarios. Los campesinos desposeídos se trasladaron a las ciudades, y para 1960 México era urbano en un 50% (definiendo como "urbanas" a las comunidades de más de 2 500 habitantes).[8] Para los noventa, era urbano en un 75%: uno de los países más urbanizados del mundo.

Hasta fines de los años sesenta, cuando los signos de crisis económica y de inquietud social se volvieron inconfundibles, el programa de industrialización de México era considerado como de "desarrollo estabilizador". Si bien es cierto que se produjo un desarrollo económico, éste estaba lejos de ser estabilizador; sin embargo, hizo a México más industrializado que la mayoría de los demás países latinoamericanos.[9]

El gobierno de posguerra de Miguel Alemán (1946 a 1952), primer presidente civil que lograra cumplir enteramente su plazo de mandato desde Juárez, tipificaba el nuevo espíritu de colaboración con el capital extranjero que la burguesía mexicana y sus socios en el estado estaban llevando a cabo. La antigua regla no escrita de que aquellos situados en lo más alto de los cargos públicos podían hurtar los dineros públicos sin riesgo de represalias era reafirmada de maneras descaradas. En donde antes los burócratas de rangos inferiores tenían por lo menos que fingir ser cuidadosos, bajo Alemán todos utilizaban la misma excusa: "El presidente Alemán encabeza y yo le sigo."

El mismo Alemán, después de hacer una fortuna con peculados y negocios con los capitalistas estadunidenses, incluyendo asociaciones con el magnate hotelero Conrad Hilton, dejó su cargo en 1952 convertido en millonario —pero sólo después de erigir una estatua de sí mismo de nueve metros de altura a la entrada de la Universidad Nacional. (Una generación más tarde, estudiantes indignados la derribaron.) Alemán prosiguió actuando durante décadas como el principal personaje de la nación en la industria del turismo, tan esencial para obtener las divisas necesarias para cubrir los déficit comerciales de México. Los sucesores de Alemán en la presidencia mantuvieron esta herencia colonial y poscolonial de corrupción, aunque ninguno de manera tan sensacional como lo hizo Alemán hasta la llegada del neoliberalismo y el campeón del TLC, el presidente, posteriormente caído en desgracia, Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994).

[8] Tal es el criterio de la oficina mexicana del censo. Sin embargo, hay algunas poblaciones rurales de poco más de 2 500 habitantes que no parecen de ninguna manera zonas de "gran ciudad".

[9] Los logros de México en cuanto a industrialización fueron posibles por no haberse convertido en un "enclave económico" colonial o neocolonial, lo que caracterizó gran parte de su producción y su comercio desde la conquista española hasta la nacionalización del petróleo en 1938. Durante aquellas primeras épocas, México produjo principalmente bienes minerales y agrícolas para la exportación e importó bienes manufacturados y materias primas para la producción, lo que a menudo ocurrió en "enclaves" controlados por extranjeros. Sin embargo, la Revolución y las reformas de Cárdenas debilitaron suficientemente los controles extranjeros sobre la economía como para permitir a la burguesía y al estado mexicanos empezar a afirmar cierta influencia sobre las partes clave de la economía, especialmente en energía, minerales, turismo, industria ligera e infraestructura económica.

Bajo Alemán, la corrupción del estado y la colaboración con el capital privado alcanzaron nuevas cotas en las zonas rurales. Su administración restableció la llamada ley de amparo para proteger a todos los terratenientes privados de confiscaciones indebidas. Alemán amplió la extensión legal de las propiedades rurales desde 100 hasta 300 hectáreas de riego, o incluso hasta 50 000 hectáreas de tierras áridas de pastoreo. Su gobierno impuso la parcelación y privatización de las tierras ejidales, ofreciendo al mismo tiempo a los agricultores privados subsidios e incentivos para mejorar su tecnología y productividad. Envió tropas federales y a las tradicionales "guardias blancas" de los latifundistas para desbandar a las organizaciones campesinas progresistas.

Irónicamente, la preservación o creación de pequeñas propiedades agrícolas o de ejidos muy parcelados, sirvió para mantener la ilusión de una reforma agraria en marcha y para desviar la lucha de clase rural por canales reformistas. La función del ejido y el minifundio (pequeña parcela de subsistencia) se convirtió, en palabras del sociólogo Roger Bartra, en un "absorbedor de golpes" para la violencia social inherente a la rápida expansión de la agricultura capitalista.[10] La red de la vieja burocracia de los ejidos y de los caciques, los intermediarios comerciales y los tecnócratas del estado acabó convirtiéndose en fuerza mediadora que efectivamente permitía a las burguesías bancarias, agrarias e industriales (mexicanas y extranjeras) expandir su poder económico y definir el futuro económico de la nación sin la rebelión extendida en el campo. Un libro mexicano publicado en 1968 reflejaba el papel de la mano de obra campesina, de la inversión extranjera y de la monopolización de la tierra en este proceso:

> Después de 1940, durante la guerra la demanda de productos agrícolas mexicanos se incrementó nuevamente en parte de los Estados Unidos: 1] el desarrollo agrícola dependió más de fuerzas externas (demanda y suministro de insumos) que del mercado doméstico; 2] las mejores tierras, las irrigadas y las que cuentan con otros recursos, como capital, trabajo, crédito e insumos, comienzan a concentrarse en ciertas regiones y en manos de unos cuantos propietarios; 3] dicho crecimiento abrió las puertas al capital extranjero, con lo que comienza el proceso de control de la agricultura nacional [...] el minifundio constituye realmente el 86 por ciento de las unidades de producción [...] En 1960, dos por ciento de los predios sumaban el 70.1 por ciento del valor de las ventas [...] en Estados Unidos el 10 por ciento de las haciendas daban el 40 por ciento de las ventas, y esto se considera ya un alto grado de concentración. Esto significa que la agricultura [mexicana] es un magnífico negocio para unos cuantos, mientras que la gran mayoría de la población trabajadora vive en condiciones miserables [...] El neolatifundismo es simplemente el resultado natural de la actual estructura de poder, esto es, de la estructura de clase en el campo.[11]

[10] Roger Bartra, "Peasants and political power in Mexico: a theoretical model", *Latin American Perspectives* 2, núm. 2 (verano de 1975).

[11] Rodolfo Stavenhagen *et al.*, *Neolatifundismo y explotación de Emiliano Zapata a Anderson Clayton & Co.* (México, Nuestro Tiempo, 1968), pp. 19, 30-31, 75-78, 86-87.

El estado estimuló aún más y guió el proceso de expansión capitalista manteniendo una de las tasas de impuestos más bajas de América Latina. Buscaba préstamos internacionales y ofrecía créditos del estado e incentivos en impuestos a la industria privada, al tiempo que permitía el envío relativamente libre de ganancias al extranjero para los inversionistas extranjeros. El estado invertía también grandes cantidades en la infraestructura económica, otorgando un subsidio estatal de 3 mil millones de dólares a las compañías privadas desde 1953 hasta 1972 a través de precios más bajos ofrecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la compañía de petróleos estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex). En educación pública, redujo a la mitad la tasa de analfabetismo entre 1940 y 1970 y creó escuelas preparatorias y universidades para las clases intermedia y alta.

El más importante papel del estado en la acumulación de capital para los intereses privados, sin embargo, fue su imposición de una estricta disciplina laboral y una escala de bajos salarios. Desde 1939 hasta 1946, el salario real de los obreros manufactureros cayó en un 50%; no recuperó su poder de compra de 1939 (ya entonces realmente *muy bajo* debido a la desbocada inflación) hasta 1968. Una encuesta de 1963 reveló que el 65% de los gastos promedio de una familia urbana y el 84% para una familia rural iban destinados a los suministros alimentarios básicos, en ambos casos una indicación de pobreza extrema. El estado cerraba los ojos ante las condiciones de trabajo ilegales, mantenía un nivel bajo de seguridad social, y no ofrecía compensaciones al desempleo. Dos tercios de la población no recibían ninguna participación en los beneficios del crecimiento económico que la fuerza laboral ayudaba a generar.[12]

Como demuestran los cuadros 5 y 6, la situación se volvió aún peor bajo el neoliberalismo. El cuadro 5 muestra el poder de compra del salario mínimo experimentando una especie de caída libre en los años ochenta y los noventa.

En 1997, un trabajador que ganase el salario mínimo podía comprar menos de un tercio de lo que esa misma cantidad de pesos habría comprado en 1980. El poder de compra del salario mínimo legal, habiendo caído casi un 75%, bastaba para comprar menos de la quinta parte de lo que una familia de cinco personas necesitaba para mantenerse. Todavía peor, menos del 40% de la "población económicamente activa" recibía el salario mínimo. (La "población económicamente activa" estaba compuesta por unos 38.1 millones de personas a fines de 1997, de los cuales sólo 14 millones trabajaban en el sector formal, la mayor parte de ellos cubiertos por la seguridad social, y los otros 24 millones trabajaban en el sector llamado subterráneo o informal.) El poder de compra

[12] Jeffrey Bortz, "Industrial wages in Mexico City, 1939-1975" (tesis de doctorado, History Department, UCLA, 1982); Jeffrey Bortz *et al.*, *La estructura de salarios en México* (México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1985); Bortz y Ricardo Pascoe P., "Salario y clase obrera en la acumulación de capital en México", *Coyoacán* 1, núm. 2, enero-marzo de 1978, pp. 79-93; Pablo González Casanova, *La democracia en México* (México, Siglo XXI, 1965); e Ifigenia M. de Navarrete, "Income distribution in Mexico", en Enrique Pérez López *et al.*, comps., *Mexico's recent economic growth* (Austin, University of Texas Press, 1967), pp. 13-72.

CUADRO 5
Poder de compra del salario mínimo legal, 1980-1997

Año	*Salario mínimo**	*Índice de precios al consumo*	*Poder de compra***
1980	163.0	100.0	163.0
1981	210.0	126.0	166.7
1982	294.0	202.8	144.9
1983	489.0	386.2	126.6
1984	748.0	614.5	121.7
1985	1 155.0	963.2	119.9
1986	1 961.3	1 679.5	116.8
1987	4 131.5	4 020.6	102.8
1988	7 749.9	8 040.4	96.4
1989	8 732.7	10 156.6	85.9
1990	10 034.0	13 180.4	76.1
1991[a]	11 777.5	16 070.7	73.3
1992	12 975.5	18 427.4	70.4
1993	14 023.5	20 608.1	68.1
1994	14 864.9	22 050.7	67.4
1995	16 261.0	29 767.5	54.6
1996	20 180.0	40 000.0	51.5
1997 (est.)	24 300.0	48 800.0	49.8

* pesos corrientes

** pesos constantes de 1980

[a] El sistema monetario mexicano cambió en 1991 con la eliminación de tres ceros del valor de la moneda. Así, 1 000 pesos se convirtieron en un nuevo peso. Para facilitar las comparaciones, en este cuadro el salario mínimo de todos los años ha sido expresado en "viejos pesos".

FUENTES: Leopoldo Solís, *La crisis económico financiera 1994-1995* (1996); INEGI, *Cuadernos de información oportuna, 1994-1997.*

de los "salarios contractuales" de los obreros industriales sindicalizados también cayó a plomo (60%), *ya que en 1996 cayó por debajo del salario mínimo de 1976.*

Además, en los noventa los trabajadores de México tuvieron que enfrentarse a los intentos de obligarlos a proveer los fondos para la privatización del sistema de seguridad social (pensiones, atención de salud, incapacidad de los trabajadores), perdiendo finalmente la batalla contra la privatización de sus pensiones y teniendo que comprar planes de retiro privados. En la ciudad de México, la desnutrición aumentó 600% en 1995, año en que las políticas neoliberales ayudaron a sacar de sus empleos a cerca de dos millones de mexicanos (rivalizando la tasa de desnutrición con la de Etiopía).[13]

[13] *Le Monde Diplomatique* (ed. mexicana), 2 de junio de 1997, citando un documento de política de enero de 1997 por el politólogo Edward J. Williams para el Center for Strategic and Internatioonal Studies.

El cuadro 6 ilustra la desigual distribución del ingreso familiar en México. Desde 1958 hasta 1977, cuando la economía de México experimentó su mejor tasa de crecimiento en el PIB, el ingreso del 5% más rico de mexicanos se disparó de 22 a 47 veces el ingreso del 10% más pobre. Las clases intermedias aumentaron en número, aunque pocas de sus familias vieron mejorada su suerte. Sólo en una década, la de los setenta, cuando empezó el auge del petróleo, un porcentaje significativo (cerca de la mitad) de familias mexicanas aumentaron su participación en el ingreso nacional —y eso sólo escasamente.

Bajo el neoliberalismo de los ochenta y los noventa, la situación empeoró mucho más aún. Casi todas las familias, excepto el 10% más alto, recibieron porciones *menores* del ingreso familiar nacional de las que habían recibido antes, ¡y para obtenerlo tuvieron que trabajar aún más duro! Según el Banco Mundial, esto dejó a México con uno de los casos más graves del mundo de mala distribución del ingreso. En 1996, el 10% de las familias más ricas del país representaban un 42.8% del ingreso, mientras que el 20% de las familias más pobres sólo recibían el 4.5%. México ocupaba el cuarto lugar del mundo en número de multimillonarios (en dólares). La revista *Fortune* incluía a quince de ellos en su lista de 1996 de los 447 individuos más ricos del mundo. La riqueza de los 24 multimillonarios de México es igual a lo que poseen los 24 millones de las personas más pobres de la nación.[14]

Disciplina laboral

El proletariado industrial sindicalizado se rebeló a menudo contra esta situación de empobrecimiento, pero tenía que enfrentar una batalla cuesta arriba contra los líderes colaboracionistas de la CTM y de la CNC, que se alineaban con el PRI y se convertían en "hombres del estado".[15] La mayoría de los sindicatos de la CTM deducían una suma de las aportaciones de sus miembros como una "contribución" para el PRI; los fondos no invertidos en el partido o simplemente robados por líderes sindicales corruptos a menudo eran invertidos en la industria estatal. Por su parte el estado subsidiaba fuertemente a estas organizaciones sindicales oficiales y, cuando era necesario, enviaba tropas para reprimir a los sindicalistas o huelguistas independientes o de tendencias izquierdistas. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 1941 el sindicato de trabajadores de la industria de guerra organizó una marcha hasta la lujosa mansión del presidente Ávila Camacho en las Lomas de Chapultepec exigiendo ser oídos. Tropas federales mataron a nueve e hirieron a once. Luego, en 1943 y 1944, huelgas espon-

[14] Dan La Botz, "Inside Mexico's massive crisis", *Against the Current*, noviembre-diciembre de 1996; *Democracy in Mexico: peasant rebellion and political reform* (Boston, South End Press, 1995), p. 119, citando a *Multinational Monitor*, noviembre de 1994.

[15] Esta afortunada frase pertenece al obituario que Dan La Botz dedicó al fallecido líder de la CTM Fidel Velázquez en *Mexican Labor News and Analysis*, núm. 121 (22 de junio de 1997), situado en 103144.2651@compuserve.com.

CUADRO 6

Distribución del ingreso familiar, 1950-1996

(en porcentajes)

	1950		*1970*		*1977*		*1984*		*1994*		*1996(e)*	
Deciles *10% de familias*	*p.d.*	*acum.*	*p.d.*	*acum.*	*p.d.*	*acum.*	*p.d.*	*acum.*	*p.d.*	*acum*	*p.d.*	*acum.*
I	2.43	2.43	1.42	1.42	1.08	1.08	1.70	1.70	1.59	1.59	1.59	1.59
II	3.17	5.60	2.34	3.76	2.21	3.29	3.11	4.81	2.76	4.35	2.90	4.49
III	3.18	8.78	3.49	7.25	3.23	6.52	4.20	9.01	3.67	8.02	3.81	8.30
IV	4.29	13.07	4.54	11.79	4.42	10.94	5.32	14.33	4.64	12.66	3.98	12.28
V	4.93	18.00	5.46	17.25	5.73	16.67	6.41	20.74	5.67	18.33	5.01	17.29
VI	5.96	23.96	8.24	25.49	7.15	23.82	7.85	28.59	7.06	25.39	6.40	23.69
VII	7.04	31.00	8.24	33.73	9.11	32.93	9.71	38.30	8.74	34.13	7.42	31.11
VIII	9.63	40.63	10.94	44.17	11.98	44.91	12.16	50.46	11.34	45.47	10.02	41.13
IX	13.89	54.52	16.62	60.79	17.09	62.00	16.75	67.21	16.11	65.58	16.11	57.24
X	45.48	100.00	39.21	100.00	38.00	100.00	32.79	100.00	38.42	100.00	42.76	100.00

p.d. = por decil acum = acumulado (e) = estimado

FUENTES: INEGI, *Estadísticas históricas de México* (1978), vol. I, y *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994*; Banco de México, *Indicadores económicos*

táneas estallaron por toda la nación protestando por el recorte de tiempo de guerra en los salarios, un aumento del 300% en los precios y las correspondientes superganancias que se amontonaban para los grandes negociantes. Ellos también fueron reprimidos, todavía más violentamente.

A pesar de ello, algunos izquierdistas y antifascistas siguieron ejerciendo influencia en ciertos sindicatos industriales clave después de la guerra. En consecuencia, el presidente Alemán completó una purga sin cuartel de progresistas dentro de los sindicatos según el espíritu de la guerra fría y del macartismo, que se extendía entonces por ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Ayudando como punta de lanza en la cacería de brujas se encontraba un corrupto dirigente de la CTM llamado Fidel Velázquez, que había remplazado a Vicente Lombardo Toledano en 1941. En su juventud, durante la década de los años veinte, Velázquez había admirado al ostentoso jefe gángster de la CROM, Luis Morones.

Asqueado por la forma inflexible con que Velázquez había aplastado el pensamiento libre y el trabajo militante, Lombardo Toledano abandonó el PRI en 1947 para fundar el Partido Popular (a partir de 1960 rebautizado PPS, o Partido Popular Socialista, que irónicamente se convirtió más tarde en un señuelo del PRI dentro de la oposición). Velázquez y el comité ejecutivo de la CTM expulsaron a Lombardo Toledano y a tres de sus seguidores del comité y de la CTM.

En 1948, Velázquez trabajó a la par con el estado para aplastar al Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros. Impuso el liderazgo de Jesús Díaz de León, alias "El charro" (por su afición a vestirse como tal). El alias de Díaz de León se extendió prontamente por todo el movimiento laboral, propagando el término "charrismo", sinónimo popular de violencia, corrupción, anticomunismo y antidemocracia por parte de los líderes sindicales patrocinados por el estado.

Pero los trabajadores no se sometían de buen grado al charrismo. Entre 1958 y 1962 estallaron una oleada de hasta 60 000 huelgas por año, que arrancó con la huelga de ferrocarriles de 1958 a 1959, a la que siguieron huelgas en petróleos, comunicaciones, educación y agricultura. Miembros del sindicato ferrocarrilero votaron para desafiliarse del PRI, y durante ocho meses el sindicato experimentó una auténtica democracia interna. El gobierno rompió la huelga utilizando al ejército y encarceló a sus líderes comunistas. El renombrado muralista comunista David Alfaro Siqueiros estuvo preso durante cuatro años; los líderes huelguistas Valentín Campa y Demetrio Vallejo permanecieron en prisión durante más de una década. Trabajadores de teléfonos, petróleos, maestros y otros trabajadores o campesinos que intentaron apoyar a los huelguistas ferrocarrileros o plantear demandas democráticas propias fueron atacados y arrestados.

Dos décadas más tarde David Vargas Bravo, un aliado clave de Velázquez y Díaz de León en la instalación del charrismo en el sindicato ferrocarrilero, detalló públicamente los pasos autoritarios y anticonstitucionales dados por la administración del presidente Adolfo López Mateos para reprimir esta inquietud laboral —así como las prácticas estatales similares ejercidas a partir de en-

tonces (las huelgas de médicos y enfermeras de 1964-1965, la huelga estudiantil de 1968, etc.). El heroico legado de la oleada de huelgas de 1958-1962 ayudó a inspirar una creciente agitación laboral en los setenta y principios de los ochenta, lo que a su vez ayudó a conseguir la libertad de los líderes encarcelados.

Fidel Velázquez, o "Don Fidel" como era conocido, gobernó sobre la fuerza laboral con puño de hierro durante casi cincuenta y seis años, muriendo en 1997 a la edad de noventa y siete. Él tipificaba el liderazgo sindical antizquierdista y antidemócrata oficial de México que se solidificó después de la cacería de brujas de la posguerra. Estaba vinculado a los favores del estado, al colaboracionismo de clase y a las aspiraciones y valores de las clases altas. A cambio de enviar matones a sueldo para asesinar o golpear a los sindicalistas disidentes y para garantizar la "paz" laboral, los líderes sindicales recibían lujos personales que los elevaban hasta los salones de la burguesía. Además, obtenían periódicamente pagos institucionales para sus organizaciones, estando siempre seguros de poder embolsarse la mejor parte. Por ejemplo, en 1962 se promulgó una ley de reparto de utilidades para calmar la inquietud laboral; después de que los líderes sindicales tomaron su porción, fue muy pequeña la porción de las utilidades que llegó verdaderamente a los trabajadores de base.

Con Velázquez al timón, la CTM se salió de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL, una organización inspirada por Lombardo Toledano) y la prosoviética Federación Mundial de Sindicatos (FMS) y se unió a la notoria Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT, fundada en 1951), anticomunista, y a la International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). El uso por parte de la ORIT de "trucos sucios" para ayudar a que los intereses de Estados Unidos derribasen gobiernos democráticos en América Latina muy pronto llegó a ser legendaria.

Cuando la ORIT se desacreditó por completo, la dirección anticomunista de la AFL-CIO se alió con los ejecutivos de la transnacionales y el gobierno de Estados Unidos para fundar (en México, en 1962) el American Institute for Free Labor Development, o AIFLD. Principalmente con fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de Estados Unidos, pero también con cuotas de corporaciones transnacionales y de miembros de la AFL-CIO, la AIFLD trabaja estrechamente con la Agencia Central de Inteligencia contra los gobiernos progresistas y sindicatos de toda América Latina, protegiendo al capital extranjero en la región.

La tutela del estado sobre la fuerza laboral organizada dejaba poco espacio para que las clases trabajadoras de México pudieran actuar por su cuenta. Tanto si trataba de conseguir y conservar un empleo, de disfrutar unos pocos beneficios sociales puestos por escrito en un contrato de trabajo o simplemente de inscribirse en una lista de espera para solicitar un empleo temporal, el trabajador se veía inevitablemente enredado en una maraña de "mordidas" y cuotas para los charros y sus lacayos, a menudo otros trabajadores. Esto humillaba y dividía a los trabajadores, enriquecía la extensa y profundamente arraigada red de charrismo y desalentaba las protestas. Como los sindicatos de-

sempeñaban un papel de primer orden en el mercado laboral y eran los únicos representantes legalmente reconocidos de los trabajadores, muy pocos podían permitirse dejar de pagar sus cuotas sindicales o desacatar las órdenes. De manera ritual, los miembros de la CTM y la CNC "aprobaban" las direcciones impuestas desde arriba por la burocracia laboral y política que se autorreproducía. Muy rara vez sucedía que pudieran elegir democráticamente a sus líderes, tomar sus propias decisiones o llevar adelante la lucha de clases sobre una base independiente. Cuando llegaban a hacer cualquiera de estas cosas, tenían que hacer frente a una severa represión, incluyendo el asesinato.

En las relaciones capital-trabajo, la disciplina laboral en beneficio de los empleadores estaba garantizada por el mismo sindicato, supuesto protector de los intereses de los trabajadores. Velázquez se hizo famoso por su uso de "contratos de protección" (para proteger a los patrones de la militancia sindical) y por sus "sindicatos fantasmas" (conocidos por los patrones y el estado pero no por los trabajadores). Los contratos laborales eran renovados cada año o cada dos años, y los líderes sindicales oficiales hacían poco más que arreglar estos contratos —usualmente pidiendo exactamente lo suficiente para mantener tranquilos a los miembros del sindicato pero muy raramente obteniendo ganancias económicas suficientes para mejorar sus vidas.

Las leyes que regían las conductas laborales estaban notablemente inclinadas en favor del capital. Por ejemplo, los tribunales de conciliación y arbitraje podían tomar una de estas tres medidas en caso de huelga: la acción era "legal", "ilegal" o "inexistente". Puesto que las dos últimas tenían como resultado la intervención del estado y también prohibían la restitución de los salarios correspondientes a los días de trabajo perdidos durante la huelga, y puesto que los tribunales podían dilatar su decisión durante meses, los trabajadores insatisfechos a menudo posponían sus acciones o arreglaban la cuestión pacíficamente. Si a pesar de todo decidían estallar la huelga, frecuentemente obtenían la aprobación del gobierno —a veces tácita, a veces explícita— antes de actuar.

Como resultado de la política deliberada del estado y los charros, muchos sindicatos se limitaban a una sola planta. Por consiguiente, el número de sindicatos creció mucho más rápidamente que el número de sus afiliados, aumentando la atomización de la fuerza laboral organizada. Para 1970, cerca del 42% de todos los trabajadores industriales empleados estaba concentrado en el Distrito Federal, y la CTM contaba con al menos un 75% de todos los sindicalizados. Confederaciones sindicales títeres o "satélites" del PRI representaban a casi todo el resto. Para la década de los noventa, la industria no estaba tan concentrada en el Distrito Federal como en el pasado, y en el nivel nacional la CTM controlaba un porcentaje menor de trabajadores sindicalizados, mientras que los sindicatos "satélite" controlaban un volumen casi igual.

Con el incremento de la industrialización y la migración a las ciudades, el tamaño del proletariado urbano creció considerablemente. El porcentaje de trabajadores asalariados (con o sin empleo fijo) saltó de 46% de la población económicamente activa en 1950 a un estimado 75% en 1982, y el porcentaje

CUADRO 7
Población económicamente activa por sectores, 1940-1995
(en porcentajes)

	1940	*1960*	*1970*	*1990*	*1995*
Fuerza de trabajo total (en millones)	5.86	11.27	13.18	30.71	37.91
Agricultura	65	54	35.3	17.3	15.7
Industria	15	19	19.8	21.2	23.2
Minería/petróleo	2	1	0.9	0.9	nd
Manufacturas	11	14	15	14.6	—
Construcción	2	4	3.6	5.2	nd
Electricidad	0.4	0.4	0.3	0.5	nd
Servicios	19	27	29.5	35.1	34.1
Comercio y turismo	8	10	8.1	10.1	nd
Transportes/comunicaciones	3.1	3	2.7	3.4	nd
Otros servicios	9	13	18.7	21.6	nd
Trabajadores desempleados o emigrantes a Estados Unidos	nd	nd	9.2	26.4	27.0
No especificados	—	—	6.0	—	—

nd = no hay datos disponibles

FUENTES: INEGI, *Censos de población y vivienda (1940-1990)* y *Conteo de población y vivienda* (1995); US Bureau of Census, *US Statistical Abstract*

empleado en manufacturas alcanzó el 19% ya en 1960 y el 23.2% para 1995 (véanse cuadros 7 y 8). Comparado con casi todo el resto de América Latina, el proletariado industrial de México era grande. Cerca de la mitad del mismo estaba sindicalizado en 1997, según Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de trabajadores de teléfonos, aunque otros cálculos lo sitúan en 14%. Además, la mitad de los sindicalizados estaban cubiertos por "contratos de protección" favorables a los empleadores.

Como muestra el cuadro 8 los trabajadores mejor pagados acabaron en las grandes industrias monopolizadas, muchas de ellas dominadas por el capital extranjero. Para mediados de la década de los ochenta, estas grandes empresas ocupaban a cerca de 1.8 millones de obreros industriales (aproximadamente un 57% de la ocupación industrial total) y pagaban el 67% de todos los salarios industriales de México. En contraste, las firmas pequeñas o medianas empleaban al restante 43% de la mano de obra industrial que recibía el 33% de los salarios. De acuerdo con el censo industrial de 1975, las cien compañías mayores representaban la mitad de la producción industrial y cerca de un tercio del PIB de México. En 1991, una importante revista de negocios de México informaba que diez grandes conglomerados únicamente realizaban el 56% de las ventas, el 61% de los activos y el 53.7% del empleo en México. Un año después, el eco-

CUADRO 8
Distribución de la industria por tamaño, número de empleados y salarios pagados, 1985-1993

	Industria pequeña			*Industria mediana*			*Industria grande*		
	1985	*1988*	*1993*	*1985*	*1988*	*1993*	*1985*	*1988*	*1993*
Núm. empresas	125 940	133 188	255 851	6 905	6 254	7 291	2 230	2 004	2 285
porcentaje	93.3	94.2	96.4	5.1	4.0	2.8	1.7	1.4	0.8
Núm. trabajadores	666 742	677 502	1 037 633	751 860	679 994	790 854	1 850 748	1 348 200	1 417 555
porcentaje	20.4	25.0	32.0	23.0	25.1	24.0	56.6	49.8	44.0
Salarios pagados (millones de nuevos pesos)	429	2 402	9 242	687	4 896	17 845	2 296	14 677	43 118
porcentaje	12.6	10.9	13.2	20.1	22.3	25.4	67.3	66.8	61.4
Salario promedio anual por trabajador (pesos corrientes)	643	3 598	8 907	914	7 201	22 564	1 241	10 886	30 417
Salario promedio anual por trabajador (pesos de 1993)	14 061	8 507	8 907	19 980	17 018	22 564	27 122	25 730	30 417

FUENTE: *Censo industrial* (1986, 1989 y 1994).

nomista Carlos Morera concluía que 150 familias controlaban cerca de una cuarta parte del PIB de México.[16]

Interactuando mediante compañías tenedoras y fusiones con otras firmas en el comercio, la banca y los servicios, las mayores empresas industriales, por su parte, se convirtieron en miembros de poderosos "grupos de capital privados". Para 1980, de los cincuenta "grupos de capital privados" más grandes, diecisiete tenían participación de capital extranjero. Las corporaciones extranjeras representaban el 40% de la producción industrial de México. En 1997, bajo el estímulo del neoliberalismo para proseguir la monopolización de las exportaciones mexicanas, el 2.7% de las compañías exportadoras representaban el 80% de las exportaciones. El sector exportador empleaba a una décima parte de la fuerza laboral del país. Todas estas cifras reflejaban la concentración y centralización del capital (y de los trabajadores) bajo el control de un pequeño número de grupos de capital privados y de empresas manufactureras, bancarias y exportadoras —en resumen, el desarrollo del capitalismo monopólico en México.

A pesar de la mano de hierro de la CTM, cada cierto tiempo se producían protestas entre los obreros de base que para 1997 contribuyeron a una división importante en la CTM. Los empleadores de los sectores monopólicos de la producción, tanto de empresas dominadas por el estado como de las privadas, reaccionaron a la inquietud laboral trasladando a otros lugares sus inversiones o sus plantas. Por ejemplo, a causa de la rebelión de los ferrocarrileros en 1959, las inversiones en equipos ferroviarios se derrumbaron, mientras que se disparaba la inversión en los sectores automovilístico y aeronáutico. Para 1980 México contaba con la quinta mayor infraestructura del mundo en transporte aéreo (aeropuertos, etc.) y una industria automovilística gigantesca. Por su parte, las demandas de salarios decentes por parte de los trabajadores de la industria automotriz provocaron finalmente que esa industria trasladara la mayor parte de su producción desde el México central a la zona norte del país, en donde la instalación de "sindicatos de empresa" con salarios más bajos era cosa fácil.

Para mediados de los setenta, la industria de automóviles y camiones, dominada en gran parte por Estados Unidos, se había convertido en la rama industrial de más rápido crecimiento de la nación (13% anual). A principios de los ochenta empleaba a 140 000 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, que producían anualmente medio millón de vehículos para el mercado nacional y 2 millones de motores de automóvil para exportar a Estados Unidos. Chrysler, Ford y General Motors (GM) —en ese orden— representaban el 60% de las ventas. La razón de que las compañías estadunidenses trasladaran su producción de Detroit a México era obvia: un obrero de la industria automotriz en Estados Unidos ganaba un promedio de 14 dólares la hora, mientras que en México el mismo obrero ganaba solamente 3.90 dólares la hora (1979).

[16] *Business Trends*, 1972, 1977; John Warnock, *The other Mexico: the North American triangle completed* (Montreal, Black Rose Books, 1995), pp. 84-86.

Los trabajadores mexicanos de las industrias automotriz y eléctrica prendieron la mecha de la rebelión entre los obreros de base a mediados de los setenta y principios de los ochenta, en forma muy semejante a como lo habían hecho los ferrocarrileros en la década de 1950. En respuesta, las compañías automotrices huyeron del Distrito Federal igual que lo habían hecho en Detroit. Convirtieron el norte de México en la novísima zona de "desarrollo" automotriz. Los salarios en la nueva planta de GM en Ramos Arizpe eran una cuarta y una quinta parte de los del Distrito Federal, y los sindicatos de empresa "blancos" eran una práctica corriente en el norte. Para mediados de los noventa, las más recientes plantas automotrices de México eran seguramente las más modernas del mundo y se habían convertido al estilo japonés de producción en "equipo" con su hincapié en la velocidad y en menos trabajadores. Estos trabajadores eran notablemente educados, mal pagados y sobrecargados de trabajo, y frecuentemente renunciaban al empleo. Ganando tan poco como 1.25 dólares por hora, tenían sindicatos prácticamente inútiles o carecían de ellos.

En parte para racionalizar la organización de la fuerza laboral y en parte para controlar los signos recurrentes de indulgencia entre los afiliados, la CTM y el estado buscaban constantemente centralizar a todas las organizaciones de trabajadores industriales en un supuesto bloque de unidad. En 1955 organizaron el Bloque de Unidad Obrera (BUO); en 1960 fundaron la Central Nacional de Trabajadores (CNT); y en 1966 fusionaron estas dos organizaciones con algunos de los sindicatos nominalmente fuera de su control para formar el Congreso del Trabajo (CT). En realidad un brazo del PRI, el CT reunió a líderes de unas treinta y dos confederaciones de sindicatos. Estuvo dominado por el líder sindical Velázquez hasta la muerte de éste, tras de la cual se dividió.

Sobrexplotación

Todos los sucesos descritos en la sección anterior, junto con el nacimiento del sector industrial maquilador de muy bajos salarios, con "sindicatos de empresa" o sin sindicación —y en el que tres cuartas partes de los trabajadores eran mujeres—, ayudó a situar a los mexicanos entre los trabajadores industriales peor pagados de todo el mundo. Las muchas décadas de sobrexplotación del proletariado industrial contribuyeron a la incapacidad de México para completar su industrialización sobre una base estable y en constante expansión. La sobrexplotación o la reducción de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo (los costos necesitados para que los trabajadores puedan mantenerse a ellos mismos y a sus familias), como demostró Marx, "transforma, dentro de ciertos límites, el fondo de consumo necesario del trabajador en un fondo para la acumulación de capital".[17]

[17] Karl Marx, *El capital*, tomo I, vol. 3, pp. 759-760.

Las formas fundamentales de la sobrexplotación son: aumento en la intensidad del trabajo, extensión de la jornada laboral y, sobre todo, pago de la fuerza laboral por debajo de su valor. México experimentó las tres. Los salarios totales se redujeron a menos del estricto mínimo necesario para cubrir los costos diarios del proceso de producción de fuerza de trabajo sobre una base diaria y generacional (alimentación, alojamiento, vestido, etc.) y como la burguesía y el estado rehusaban asumir estos costos, tenían que ser cubiertos por la clase obrera asalariada y no asalariada en su totalidad. Las mujeres como trabajadoras y cabezas de familia únicas (cerca de un tercio de los hogares mexicanos en 1998 eran encabezados por mujeres) cargaban con el grueso de estos costos. Los trabajadores y sus familias sólo podían sobrevivir cuando todos los miembros de la familia, o casi todos, buscaban alguna forma de ingreso económico. Cada vez más los niños y las personas de edad también tenían que trabajar, por lo menos en empleos de medio tiempo. Los envíos de dólares por parte de los miembros de la familia que trabajaban en Estados Unidos ayudaban inmensamente.

A medida que más familias de clase obrera adoptaban una "estrategia familiar" de salarios múltiples, más mujeres entraban en la fuerza de trabajo. Los empleadores les daban la bienvenida, pues era más fácil explotarlas, más fácil despedirlas (por ejemplo, con el pretexto del embarazo), y para ellas era más difícil organizarse en sindicatos. Para 1982, las mujeres constituían una cuarta parte de la fuerza laboral en el sector de la economía formal; para 1997, eran más de un tercio. Más de 2 millones de mujeres estaban empleadas en la industria, principalmente en la textil, en procesadoras de alimentos, en la electrónica y en las maquiladoras.

De acuerdo con la estrategia de la familia obrera (y de la tradición patriarcal), una mujer asalariada, aunque sea cabeza de familia, a menudo entrega sus ganancias a la autoridad masculina "responsable": un padre, un tío, un marido desempleado, incluso un hermano. Frecuentemente debe tomar con disimulo el dinero para sus propias necesidades o diversiones. Además, en el centro de trabajo la mujer era generalmente acicateada para que trabajase más duro y más deprisa, al tiempo que a menudo se esperaba que otorgara servicios sexuales a sus superiores masculinos durante los descansos o al acabar la jornada. Debido a estos abusos, y a pesar de ellos, las mujeres empleadas en las maquiladoras empezaron a formar sindicatos en los setenta, encontrando una represión tan violenta que, cuando no fracasaron completamente en sus luchas, tuvieron que aceptar ser incorporadas por sindicatos locales de la CTM o "satélites" del PRI. Un sindicato consiguió permanecer independiente pero se hundió cuando la compañía matriz asentada en San Diego clausuró la maquiladora.

Experiencias posteriores mostraron que las mujeres de la maquila, en vez de ser "dóciles" y "sumisas" como esperaban los empleadores, estaban penosamente conscientes de la injusticia con que eran tratadas y estaban preparadas para resistir, aunque inseguras acerca de la mejor forma de mejorar su situación. En el caso de las mujeres casadas, o de las solteras que eran las principales pro-

veedoras de sus familias, a menudo no parecía haber otra opción sino aceptar aquellas duras condiciones, porque una desobediencia abierta sólo conducía a la pérdida del empleo y a que los niños y demás miembros dependientes de la familia se murieran de hambre.[18]

En cualquier país, la acumulación de capital depende de un mercado nacional en expansión dinámica y del hecho de que los trabajadores adecuadamente pagados son mejores consumidores —un factor importante en la realización y expansión de la producción. El "milagro" del crecimiento industrial mexicano fue un pobre ejemplo de un ciclo de acumulación de capital autosustentable y en constante expansión: sólo el 35% del PIB fue a los salarios en 1970, cerca de la mitad de la cifra de Estados Unidos y menos que eso para otros países de América Latina. Puesto que los sueldos incluían los salarios pagados a los gerentes de las empresas, a los burócratas del estado y a las clases medias, la participación real en el PIB que llegaba a quienes en última instancia lo generaban —los obreros y campesinos— era todavía menor.

Además, como antes señalamos, el poder de compra de los salarios fue descendiendo cada año, perpetuando aquella acumulación de capital basada en los salarios bajos. Al igual que lo venía haciendo desde su inicio en épocas coloniales, la burguesía de México siguió eligiendo maximizar las ganancias basadas en salarios bajos y en el mercado externo para unos pocos artículos selectos en vez de elevar los salarios y en última instancia expandir los mercados tanto interno como externo. La disponibilidad de una fuerza laboral numerosa y mal pagada también desalentaba los intentos por desarrollar una capacidad tecnológica indígena.

El fracaso de México en maximizar la utilización de la mano de obra y la remuneración para los objetivos de una producción y consumo social expandido, se reflejaba en el hecho de que a principios de los ochenta los censos sólo describían a un 27% de la población como "económicamente activa", comparado con el 39% a principios de siglo —la cifra ascendió a un 35% a mediados de los noventa. Estas cifras eran más bajas que las de muchos otros países de América Latina. México nunca trató de absorber su fuerza laboral disponible, pues la burguesía siempre prefirió conservar un gran ejército de reserva de desempleados y subempleados con el fin de mantener bajos los salarios.

Según el secretario de Trabajo en 1981 existían 8.5 millones de subempleados. El líder de la CTM, Velázquez, declaraba que había más de 2 millones de desempleados según el testimonio del propio gobierno. En otras palabras, unos 10.5 millones de mexicanos o el 52.5% de la fuerza de trabajo carecían de empleo suficiente. Sólo para evitar el aumento del desempleo, era preciso crear

[18] Sobre las mujeres en la industria de las maquiladoras, véase José Antonio Alonso Herrero, *Mujeres maquiladoras y microindustria doméstica* (México, Fontamara, 1991); Devon G. Peña, *The terror of the machine: technology, work, gender, and ecology on the U.S.-Mexico border* (Austin, University of Texas Press, 1997); y Suan Tiano, *Patriarchy on the line: labor, gender, and ideology in the Mexican maquila industry* (Filadelfia, Temple University Press, 1994).

800 000 nuevos empleos cada año. El censo de 1980 mostró que el 42.6% de la población tenía menos de quince años de edad. Millones de esos adolescentes entraron seguidamente al mercado de trabajo, en donde el estado y los empleadores, practicando las "reducciones de plantilla" y la "austeridad económica para las masas" del neoliberalismo, les fallaron completamente. Más de un millón de nuevos empleos cada año tenían que ser creados en el año de crisis de 1995, un año en el que cerca de dos millones de mexicanos perdieron sus empleos. Según cálculos, los que vivían de la economía "informal" o invisible representaban el 70% de la población, y el número de los reducidos a la pobreza alcanzaba un 80%. El "desarrollo económico capitalista deformado" de México empezó a repercutir en el país de una manera desastrosa.

El efecto de "bomba de succión"

Bajo el neoliberalismo, los capitalistas estadunidenses y de otros países aceleraron notablemente su penetración de la economía mexicana. La inversión extranjera se disparó hasta ocho veces más, superando el nivel de 67 mil millones de dólares de 1996, desde menos de 8 500 millones en 1980 (véase cuadro 11). Los inversionistas extranjeros tomaron las empresas estatales a precios de saldo y colocaron enormes sumas para inflar el mercado de valores mexicano.

La base para la predominante influencia de Estados Unidos en la economía de México se había establecido hacía mucho tiempo, cuando Estados Unidos emergió de la segunda guerra mundial como líder indisputado del mundo capitalista. Desde 1945 hasta 1978, las compañías y bancos estadunidenses invirtieron aproximadamente 150 mil millones de dólares en el extranjero, creando un imperio comercial ultramarino que para 1980 generaba medio billón de dólares en ventas, 20 mil millones en ganancias por año y una cuarta parte del PIB mundial. La participación de México en esta inversión había aumentado en cerca de un 4%, la mayor parte en los sectores manufacturero y financiero. La tasa de utilidades del 18.3% en las inversiones en México era la más elevada de toda América Latina.

El capital extranjero se concentraba en las áreas de crecimiento más rápido y más avanzadas tecnológicamente de la economía mexicana, particularmente en las industrias de bienes de capital y de productos intermedios básicos, lo cual era cada vez más lo que sucedía con la mayor parte de las inversiones de las naciones más ricas del mundo. Para 1997, las compañías estadunidenses declaraban inversiones en el exterior por valor de 3.72 billones de dólares. Las siete naciones más ricas del mundo contaban con más del 70% del PIB global.[19]

La legislación de "mexicanización", una serie de leyes impuestas antes del neoliberalismo de los ochenta y noventa, permitían el control mexicano del 51%

[19] *Dollars and Sense*, mayo-junio de 1997, p. 21; *El Nuevo Topo* (San Francisco), núm. 10 (primavera de 1998).

de cualquier industria y lo exigían en áreas estratégicas como la de la minería. Esta legislación fue casi eliminada en 1989. Pero incluso en su momento de auge, rara vez desanimó a los inversionistas extranjeros, que a menudo dominaban las empresas "mexicanizadas", concentrando la propiedad de las acciones en sus propias manos y alentando la dispersión de la participación mexicana entre gran número de socios menores.[20] Además, la "mexicanización" no se aplicaba muy a menudo, y muchas firmas seguían siendo 100% de propiedad extrajera —General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, General Electric, Kodak, Sears, Anderson-Clayton, Dow Chemical y muchas otras empresas estadunidenses de entre las primeras filas de las 500 principales empresas manufactureras de Estados Unidos clasificadas según sus ventas, conocidas como las 500 de *Fortune*.

Invirtiendo en empresas conjuntas, los capitalistas extranjeros encontraban a menudo más fácil tomar préstamos de las instituciones de crédito públicas y privadas mexicanas y diversificarse en otras líneas de negocios. Las corporaciones estadunidenses financiaban el 71% de sus inversiones directas en México a través de capital estatal o privado mexicano. Una investigación de la Harvard Business School realizada en 1976 reveló que la mitad de las filiales mexicanas de las 187 transnacionales con matriz en Estados Unidos más fuertemente implicadas en la inversión manufacturera extranjera directa en todo el mundo eran o adquisiciones o filiales de otras empresas previamente establecidas. Para principios de los años setenta, tres cuartas partes de todas las inversiones extranjeras eran adquisiciones de compañías ya existentes. Más tarde, los esquemas de "privatización" y de "libre comercio" del neoliberalismo reforzaron aún más esta tendencia.

Los capitalistas estadunidenses aprovecharon a fondo las oportunidades que se les ofrecían en México. De las 500 corporaciones de *Fortune*, 277, o el 55%, realizaron operaciones en México en 1977. De las 100 principales compañías estadunidenses, el 71% tenía inversiones en manufacturas mexicanas. Ya en 1970, las transnacionales con matriz en Estados Unidos tenían por lo menos el 47% y usualmente un control aún mayor de sectores tan decisivos de la economía mexicana como la minería y la metalurgia, el cobre y el aluminio, los productos de petróleo y coque, la industria química, maquinaria eléctrica y de otros tipos, equipo de transporte, automóviles, hule, alimentos y bebidas y el comercio. Controlaban el 100% del tabaco, el 88% en computadoras y equipos de oficina y el 86.4% de productos químicos y farmacéuticos. Las empresas estadunidenses dominaban la programación televisiva, los hoteles turísticos y los servicios relacionados. Las áreas de más rápido crecimiento en la inversión de Estados Unidos eran el petróleo, la petroquímica, los equipos de transporte y la maquinaria.

De forma significativa, las transnacionales se localizaban en los sectores de la producción industrial que contaban con los niveles más altos de concentra-

[20] Muchos mexicanos prestaban sus nombres ("prestanombres") a inversionistas extranjeros, disfrazando la penetración extranjera y la toma de la economía. Corrupción, sobornos y presiones económicas aplicadas por los inversionistas y acreedores extranjeros diluían aún más los efectos de la "mexicanización".

ción de capital. Según los economistas Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarrago, para principios de los años setenta casi dos tercios de las inversiones de transnacionales, en comparación con menos de un tercio de inversiones mexicanas, estaban situadas en sectores con una concentración de más del 50% —las cuatro empresas más grandes del sector representaban más de la mitad de la producción total del sector. Estos sectores monopólicos tendían también a ser los más dinámicos, verdaderos motores de la acumulación de capital. Como tendían también a ser de capital intensivo, agravaban el problema de desempleo de México reduciendo el número de horas laborables requeridas para mantener la producción y para seguir elevando el volumen de capital necesario para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por consiguiente, cuando en 1964 Estados Unidos dio por terminado el programa "bracero", que legalmente había contratado a unos 450 000 trabajadores mexicanos por año para trabajos agrícolas temporales en California, Texas y otros estados desde 1942, México intentó crear más empleos a través de su Programa de Industrialización de las Fronteras de plantas ensambladoras de trabajo intensivo (maquiladoras). El gobierno mexicano permitió que las maquiladoras importaran partes libres de derechos aduanales, mientras que el gobierno de Estados Unidos permitía el retorno de los productos ensamblados de manera semejante. Un ministro mexicano de Industria y Comercio dijo que el objetivo era "ofrecer una alternativa a Hong Kong, Japón y Puerto Rico para la libre empresa".[21] Para 1972, cerca de una tercera parte del valor de todos los componentes estadunidenses enviados al extranjero para ser ensamblados se dirigían a México, y para 1977 más de mil millones de dólares en productos ensamblados en maquiladoras eran enviados a Estados Unidos cada año. ¡Y esto sucedía *antes* del TLC y de la muy acelerada maquiladorización de la economía bajo el neoliberalismo!

Los trabajadores mexicanos recibían salarios mucho menores que los pagados a trabajadores estadunidenses en las mismas industrias, trabajaban jornadas más largas y producían más por hora con mayores riesgos para su salud. Por ejemplo, las mujeres que desempeñaban operaciones de ensamblados electrónicos con sus ojos desnudos producían el 25% más que sus colegas estadunidenses que utilizaban microscopios. De las empleadas por las 500 plantas establecidas en la zona fronteriza entre 1965 y 1975, la mayoría (el 85%) eran mujeres solteras mal pagadas de entre dieciséis y veintitrés años de edad. Además de las empresas estadunidenses tradicionales como GM, Dupont, Dow Chemical y otras semejantes, firmas tan diversas como Transitron Electronic Corp., Litton Industries, Fairchild Camera, Hughes Aircraft Co. y Lockheed Aircraft, la mayor parte de las cuales estaba entre los primeros veinte clientes subsidiados por el Pentágono, se trasladaron a México.

El programa de maquiladoras demostró ser particularmente provechoso para los intereses de Estados Unidos. Una transnacional pagaba salarios acor-

[21] Citado en NACLA, *Mexico 1968* (Nueva York, NACLA, 1968).

des con las normas mexicanas pero vendía los productos terminados en Estados Unidos según las normas de precios estadunidenses, mucho más altas. Además, partes considerables de los salarios devengados por los empleados de las maquiladoras se gastaban en el lado estadunidense de la frontera.

Antes de que el estado adoptara la política neoliberal, México permitió el establecimiento de maquiladoras extranjeras también en el interior del país. Hacia 1982, las compañías estadunidenses poseían unas 700 maquiladoras en México. Para finales de 1998, México ostentaba cerca de 4 000 maquiladoras, la mayor parte de las cuales seguían sobrexplotando a mujeres jóvenes. Japón y Corea del Sur también establecieron algunas maquiladoras. Cada vez que surgía el descontento laboral o había una recesión, las maquiladoras despedían personal de forma rutinaria, cerraban o se mudaban a otra parte de México. Cada nuevo local de tales plantas experimentaba un pequeño salto económico hasta la siguiente crisis.

Como consecuencia, lejos de reducirse, las tasas de desempleo en aquellas ciudades penetradas por las maquiladoras se elevó, avivada por la llegada de miles de personas de otras regiones del país en busca de trabajo. De 1965 a 1982, menos de 140 000 empleos fueron creados por las maquiladoras. Bajo el neoliberalismo, especialmente después del establecimiento del TLC en 1994, la economía se "maquiladorizó", elevando el número de empleos en maquiladoras hasta un millón en 1998.

El patrón de desempleo persistió en la mayoría de las zonas de maquila. La única posible excepción fue el increíble auge de Ciudad Juárez en la frontera suroccidental de Texas, que tenía sus propios problemas especiales, incluyendo los conocidos contrastes de riqueza y pobreza, una población que se duplicó en una sola década hasta alcanzar 1.6 millones (1998), una carencia de viviendas de 70 000 unidades, asesinatos en serie de mujeres, desapariciones relacionadas con el tráfico de drogas y contaminación. El gobierno de Ciudad Juárez prohibió durante largo tiempo la sindicación de los 200 000 trabajadores de las maquiladoras en la ciudad, 65% de ellos mujeres, la mayor parte de las cuales ganaba 3.25 dólares por una jornada laboral de diez horas y trabajaba seis días a la semana.

El estado mexicano trató repetidamente de justificar su generosidad con los inversores extranjeros basándose en que proporcionaban empleos y ayudaban a la industrialización de México aportando inyecciones de capital y la maquinaria que tanto se necesitaban. Los cuadros 9, 10 y 11 presentan un perfil de la inversión extranjera directa en México entre 1960 y 1996 que sugiere otra cosa diferente. Para los años 1960-1984, los inversionistas extranjeros sacaron de México más del doble de las nuevas sumas que invertían. Esto se conoció como el "efecto de bomba de succión" de la inversión extranjera, *drenando el capital de México.*[22]

[22] Los inversionistas de Estados Unidos representaban más del 70% de la inversión externa directa, mientras que los de Inglaterra, Alemania Occidental, Suiza, Japón y Francia constituían la mayor parte del resto.

CUADRO 9
Inversión extranjera directa e ingreso, 1960-1996
(en millones de dólares)

Año	*Nueva inversión externa directa*	*Ganancias netas de la inversión externa*
1969-70	4 288	8 687
1980	1 623	1 473
1981	1 701	2 120
1982	627	2 645
1983	684	1 785
1984	1 430	2 030
1985	1 729	1 793
1986	2 424	1 631
1987	3 877	1 727
1988	3 157	1 644
1989	2 500	1 714
1990	3 722	2 541
1991	3 565	2 561
1992	3 600	2 913
1993	4 901	3 391
1994	8 026	4 571
1995	9 773	3 556
1996	7 535	4 193

FUENTES: Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, *Sexto informe de gobierno* (1994) y Banco de México, *Indicadores del sector externo* (1997)

Más adelante, cuando México introdujo las políticas neoliberales para abrir la economía todavía más a los extranjeros, las condiciones se volvieron tan lucrativas que las nuevas inversiones extranjeras se dispararon hasta cinco veces más en sólo una década (1985 a 1995). Los extranjeros triplicaron sus inversiones en manufacturas e incrementaron más de doce veces su participación en los servicios (bienes raíces, seguros, banca, empresas de inversiones en la Bolsa de Valores mexicana, etc.). Ya no pudieron seguir sacando de México más dinero del que invertían por año, pero sus utilidades en las nuevas inversiones iban del 35 al 85% por año y *la suma de su ingreso más que se duplicó*. Gran parte de la nueva inversión extranjera era especulativa y estaba sujeta a huidas repentinas, como sucedió exactamente antes y durante el colapso del peso en 1994-1995. Por consiguiente, la tan proclamada "infusión de capital extranjero" fue, todo lo más, inestable e indigna de confianza.[23]

[23] Como señaló el informe anual del Banco Mundial en 1993, la mayor parte del capital extranjero nuevo que entró a México a principios de los noventa era "dinero caliente" para los mercados de acciones y bonos. La inversión extranjera directa en empresas productivas decreció realmente por un tiempo. Sin embargo, véase el capítulo 8 acerca del gran incremento en la actividad de las maquiladoras extranjeras bajo el neoliberalismo, especialmente después de la instrumentación del TLC.

CUADRO 10
Utilidades por inversión extranjera directa más pagos de intereses sobre la deuda externa 1980-1996
(en miles de millones de dólares)

Año	*Utilidades*
1980	7.0
1985	11.3
1990	11.9
1993	13.6
1994	16.4
1995	17.2
1996	17.7

FUENTES: Poder Ejecutivo Federal, *Informes de gobierno*; Banco de México, *Indicadores económicos*

CUADRO 11
Inversión extranjera directa, 1980-1996
(en millones de dólares)

Año	*Total*	*Agricultura*	*Minería y metalurgia*	*Manufacturas*	*Comercio*	*Servicios*
1980	8 458.8	8.4	419.6	6 559.8	745.5	716.5
1985	14 628.9	6.2	276.0	11 379.1	1 125.4	1 842.2
1988	24 087.4	9.6	380.5	16 718.5	1 502.2	5 476.6
1989	26 587.1	28.9	390.0	17 700.9	1 888.5	6 578.8
1990	30 309.5	90.0	483.9	18 893.8	2 059.9	8 781.9
1991	33 874.5	134.9	514.9	19 857.4	2 447.4	10 919.9
1992	37 474.1	174.2	523.5	20 958.2	3 198.3	12 619.9
1993	42 374.1	208.7	578.6	23 278.7	3 958.2	14 350.6
1994	50 401.0	216.7	590.6	26 482.7	4 593.9	18 517.1
1995	60 173.6	226.5	660.9	32 024.2	5 605.6	21 658.4
1996	67 708.3	226.5	668.3	36 771.5	6 010.8	24 031.2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, *Anuario estadístico* (1995) y Banco de México, *Indicadores de sector externo* (enero de 1997)

"FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA" DE TECNOLOGÍA E IMPERIALISMO CULTURAL

Parte del poder de las transnacionales estadunidenses en México derivó de la ventaja inicial que disfrutaban por su tecnología y reservas de capital en comparación con México. Aunque en los ochenta y los noventa la supremacía tecnológica de Estados Unidos se vio desafiada por Japón y Europa occidental, hasta los sesenta Estados Unidos todavía representaba más de dos terceras partes de todos los ingresos basados en patentes y licencias correspondientes a las seis

naciones capitalistas más activas en el ámbito de las patentes.[24] Para 1970, los fondos para investigación y desarrollo en Estados Unidos, de los que más de la mitad se pagaban con dinero de los contribuyentes (a pesar de que la mayor parte de sus productos permanecía en manos de las transnacionales), llegaba a los 40 mil millones de dólares por año, suma muy superior al PIB de la mayor parte de los países y 2.5 veces más que lo gastado en investigación y desarrollo por todas las naciones de Europa occidental juntas.[25] Por supuesto, la cantidad no implicaba calidad, como cualquier consumidor estadunidense puede verificar. La actividad corporativa de Estados Unidos en tecnología era monopólica u oligopólica, con ventajas cuantitativamente mensurables pero cualitativamente insegura.

Es de todo punto claro que, cuando tratan con países más débiles, las transnacionales usan las ventas de tecnología para ayudar a "desnacionalizar" sectores económicos estratégicos, como el petróleo, sobre todo a través de la capitalización de los insumos tecnológicos. Bien fuese mediante tratos de *joint-ventures* o con simples convenios sobre licencias, una transnacional estipulaba que parte o toda la tecnología proporcionada debía ser pagada mediante una participación en acciones, junto con el pago de una suma alzada o una regalía continua, calculada por lo general como un porcentaje de las ventas netas. Las renegociaciones posteriores de los convenios tecnológicos incluían a menudo la exigencia de una participación en acciones. Algunas veces los términos del pago de tecnología implicaban un aumento de la razón deuda/acciones que podía conducir a alguna especie de "venta" o "transferencia" de acciones para el suministrador de la tecnología.

Si bien la producción industrial mexicana se quintuplicó entre 1940 y 1965, las importaciones de bienes industriales o de capital extranjeros o de repuestos (principalmente de Estados Unidos) aumentaron 12.5 veces. Esto no sólo se sumó directamente a la acumulación de capital de las corporaciones estadunidenses, sino que también les proporcionó una ventaja decisiva para aumentar sus inversiones en áreas relacionadas de la economía mexicana. Las compañías estadunidenses "amarraban" sus ventas de tecnología a futuras ventas y posibilidades de expansión, usando toda una panoplia de instrumentos, incluyendo patentes, licencias, y convenios de *know-how*. No obstante, como señalan los economistas Fajnzylber y Martínez Tarrago, la mayor parte de la tecnología que importaba México era inadecuada tanto en términos de costo como de utilización de mano de obra. Llegan a la conclusión de que "cada vez menos y menos empleos productivos" se creaban "por unidad de capital inver-

[24] *Financial Times*, 3 de febrero de 1969.

[25] Yu. A. Sergeyev y N. Yu. Strugatshya, "Scientific and technical development, the monopolies and the patent system", reimpreso del periódico de investigación ruso *SSHA: Ekonomik, Politika, Ideologiya* en *Idea* 15, núm. 2 (verano de 1971), y UNCTAD, *Transfer of technology* (Nueva York, UN Conference on Trade and Development Secretariat, Junta del Acuerdo de Cartagena, TD/107, 29 de diciembre de 1971).

tido" y que el capital era cada vez más remunerado "a expensas de los ingresos de los trabajadores".[26]

Empezando en la década de 1950, la mayor parte de las transnacionales estadunidenses se interesaron en exportar inversiones de capital, tecnología y bienes de capital en vez de simplemente productos manufacturados, buscando en el extranjero una salida para su propia sobreproducción de bienes de capital y un acceso a fuentes de mano de obra barata con el fin de obtener tasas de ganancia superiores a las nacionales. Después, los productos manufacturados en un país como México eran a su vez vendidos allí mismo o, más generalmente, exportados con muy buenas ganancias.

Para garantizar la continuidad de la reproducción de estas plusganancias y protegerse contra una potencial nacionalización o "mexicanización", las transnacionales usaban su supremacía tecnológica como una palanca. Muchas de ellas conservaban pleno control de las fábricas; algunas optaban por empresas conjuntas, y otras más preferían las ventas directas de tecnología a empresas estatales ya que podían hacerlo a precios elevados. En 1970, Business International Corporation, una firma consultiva de transnacionales, sugirió que "se ha iniciado una nueva era de inversiones internacionales, en la que la característica predominante es la explotación de tecnología [...] Si las licencias de tecnología y los contratos de administración pueden proporcionar suficientes ingresos y control sin necesidad de propiedad de acciones, tanto mejor en términos de [la amenaza del] nacionalismo económico."[27] Un informe de la Agencia para el Desarrollo International (AID) estadunidense señalaba en 1972 como punto central la necesidad de "incrementar ininterrumpidamente las ventas al extranjero de bienes de capital y productos tecnológicamente intensivos de Estados Unidos".[28]

Como consecuencia, el secretario de estado de Estados Unidos Henry Kissinger hizo de las llamadas "transferencias de tecnología" (en realidad ventas) un punto central de su agenda en la reunión de 1976 de la Organización de Estados Americanos. Para los ochenta, la insistencia de las transnacionales en encontrar garantías globales para "su" tecnología y otros *derechos de propiedad intelectual* (DPI) alcanzó máxima intensidad. Los DPI se convirtieron en foco principal de todas las discusiones internacionales sobre comercio, como medio de garantizar protección a las inversiones de capital en todo el mundo. El GATT y el TLC entronizaron los DPI. El GATT los llamó TRIP (por *Trade Related Intellectual Property Rights*).

Como el médico e investigador de tecnología Vandana Shiva señala amargamente, el acuerdo de TRIP en el GATT, negociado por un puñado de representantes de transnacionales a puerta cerrada, equivalía a "bioimperialismo: la creencia

[26] Véase Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarrago, *Las empresas transnacionales: expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana* (México, FCE, 1976).

[27] Business International Corporation, "Nationalism in Latin America" (septiembre de 1970), pp. 21, 29.

[28] "Technical cooperation with Iran", informe a la Agencia para el Desarrollo Internacional, 11 de abril de 1972, p. 9.

de que sólo el conocimiento y la producción de las corporaciones occidentales [y japonesas] necesitan protección [pero que el conocimiento de los agricultores y habitantes de los bosques del tercer mundo no la necesitan]." Los DPI, de acuerdo con Shiva, "no protegen ni a las personas ni a los sistemas de conocimiento" y "sólo se reconocen cuando el conocimiento y la innovación generan utilidades, no cuando satisfacen necesidades sociales [...] Al reducir el conocimiento humano al estatus de propiedad privada, los derechos sobre la propiedad intelectual reducen el potencial humano para innovar y crear; transforman el libre intercambio de ideas en robo y piratería" —incluyendo la piratería de los conocimientos de los agricultores y habitantes de los bosques en el tercer mundo sobre las plantas, árboles y semillas locales, de gran interés para las compañías farmacéuticas que repentinamente se han vuelto "conscientes del medio ambiente".[29]

Las ventas de tecnología ayudaron a aumentar la dominación extranjera de la economía de México y permitieron a las transnacionales evadir las leyes nacionalistas que ostensiblemente tendían a regular la inversión extranjera. Como se dice que afirmó el gerente de una filial estadunidense en México en 1975: "El uso de pagos por tecnología es la forma legal más sencilla de transferir las ganancias fuera del país."[30] Las transnacionales de la industria farmacéutica mexicana, por ejemplo, utilizando diversos trucos en su contabilidad interna, particularmente con el sistema de "fijación de precios de transferencia" mediante el cual reducían los precios de sus exportaciones y aumentaban los de las importaciones de tecnología (utilizando en ocasiones una tercera "oficina fantasma" ficticia como intermediaria), se calcula que ganaban hasta 400 millones de dólares por año solamente por este concepto.[31]

La fijación de precios de transferencia y la práctica de disfrazar las utilidades como costos por las importaciones de tecnología permitieron a las transnacionales incrementar su acumulación de capital en México. Al elevar sus "costos" declarados, reducían el monto de las utilidades declaradas y los impuestos que debían pagar asentando precios más bajos (subvalorando) para sus exportaciones de los artículos producidos en México por la "cara" tecnología importada. Así, la fijación de precios de transferencia tenía como resultado el *descapitalizar* parcialmente a México, ¡con el pretexto de capitalizarlo! Esos aspectos disfrazados de la acumulación imperialista de capital nunca aparecían en las estadísticas de utilidades extranjeras, tales como las del cuadro 10. Para 1970, la llamada transferencia de tecnología, mediante los trucos de fijación de pre-

[29] Vandana Shiva, *Biopiracy: the plunder of nature and knowledge* (Boston, South End Press, 1997), pp. 79, 81, 122.

[30] Citado en Richard S. Newfarmer y W. F. Mueller, *Multinational corporations in Brazil and Mexico: structural sources of economic and neoeconomic power* (Washington, Report to the Subcommittee on Multinational Corporations of the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, agosto de 1975), p. 17.

[31] Gary Gereffi, "Drug firms and dependency in Mexico: the case of the steroid hormone industry" (Yale University & Harvard University Center for International Affairs, mimeógrafo, 1977).

cios de transferencia, estaban remitiendo de México a Estados Unidos dos veces más dinero que las ganancias declaradas oficialmente.[32] Más adelante, bajo el neoliberalismo, la mayor parte de las regulaciones del estado sobre remisiones extranjeras de utilidades fueron eliminadas.

Aunque periódicamente el gobierno mexicano proclamaba de labios para afuera la idea del desarrollo tecnológico independiente, en realidad nunca gastó más del 0.6% del PIB en investigación y desarrollo. Los objetivos de sus investigaciones se orientaban a reproducir la tecnología de Estados Unidos. La investigación para satisfacer las necesidades de las masas era prácticamente inexistente. Se diseñaban "cuadros de costos comparativos" y luego se discutía si sería más económico y conveniente para el crecimiento económico importar el *know-how* extranjero junto con las instalaciones productivas completas, o invertir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología indígenas, y por lo general ganaba la primera opción. Pero frecuentemente México no podía importar una pieza de maquinaria sin importar el paquete completo de ciencia y tecnología en que insistían las transnacionales, incluyendo el *know-how*, haciendo así que sus decisiones sobre el desarrollo económico fuesen inseparables de sus enfoques de cuestiones culturales como la producción de conocimientos, es decir, de la educación.

Gran parte del éxito de la expansión y sobrevivencia histórica del imperialismo derivó no sólo de su maximización y mantenimiento de ventajas en tecnología sino también de las fuentes intelectuales de la tecnología: la ciencia y la educación. En el periodo entre 1940 y 1970, las fundaciones Rockefeller y Ford gastaron millones de dólares en proyectos educativos mexicanos, gran parte de ellos en becas y entrenamiento profesional. Esta "ayuda" pública y privada de Estados Unidos iba principalmente a las universidades privadas y escuelas técnicas o de administración de empresas de México. Los profesionales mexicanos entrenados a menudo limitaban sus servicios a la élite acomodada, al estado o a corporaciones privadas (a menudo extranjeras); o bien emigraban (la llamada "fuga de cerebros" típica de tantas naciones del tercer mundo).

De forma similar, cuando el estado mexicano creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la década de los setenta (el más ambicioso esfuerzo jamás realizado, aunque con recursos modestos, para desarrollar una ciencia y tecnología más autónomas), la mayoría de los estudiantes graduados enviados al extranjero por Conacyt jamás regresaron. Luego, con el giro del estado hacia el neoliberalismo y su hincapié en la privatización y garantías a los derechos de propiedad intelectual del capital extranjero, el estado mexicano desmanteló sus modestos esfuerzos previos para una producción más independiente de conocimiento y redujo al mínimo las inversiones públicas (incluyendo los fondos para la producción interna de bienes de capital). Lo sustituyó por un enfoque autoritario de la investigación compatible con los objetivos con-

[32] Fajnzylber y Martínez Tarrago, *Las empresas;* Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, *La inversión extranjera en México* (México, FCE, 1973).

templados por el neoliberalismo. La pieza central de este nuevo enfoque fue el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un club neoliberal elitista fundado en 1985 para gratificar con buenos salarios a unos pocos cientos de investigadores cuidadosamente seleccionados. En el proceso, el estado politizó el conocimiento licenciando u obstaculizando a numerosos intelectuales prominentes de las ciencias físicas y sociales que se negaban a dejarse comprar por el neoliberalismo.

Muchos de los institutos de investigación más importantes de México fueron privatizados o clausurados, incluyendo el Instituto para la Investigación de Recursos Bióticos, fundado en 1975 y famoso por sus investigaciones de campo sobre metales pesados y envenenamiento por pesticidas. Otras víctimas del enfoque autoritario del neoliberalismo del conocimiento fueron el prestigioso Centro para el Ecodesarrollo de la ciudad de México y los programas del Colegio de México de estudios sobre energía, estudios medioambientales y estudios sobre mujeres. Los proyectos originales del Conacyt se vinieron abajo. Su presupuesto, incrementado con préstamos del Banco Mundial, se dirigió entonces hacia la investigación industrial para empresas privadas. Los proyectos y desembolsos presupuestarios de sus "centros de investigación" fueron declarados información privada. Los beneficiarios de las nuevas políticas del Conacyt incluían a transnacionales como IBM, Nestlé y Ericsson. Como concluía una notable investigación: "Las interacciones de las fuerzas mexicanas con las globales o transnacionales [...] y la descomposición del sistema político mexicano han minado progresivamente las capacidades indígenas para la ciencia y la investigación."[33]

El capitalismo siempre tendió a reproducirse a sí mismo dondequiera que afirmó su dominio como modo de producción; y esta reproducción, aunque desigual en la práctica, se daba también en las áreas superestructurales de la ciencia y la cultura. Cualquiera que haya experimentado la difusión del idioma inglés y de las normas culturales de Estados Unidos en el extranjero, junto con las exportaciones de Coca-Cola, personajes de Disneylandia y tecnología estadunidense, puede apreciar inmediatamente la validez del concepto "imperialismo cultural". Para 1960, *Selecciones del Reader's Digest* tenía una circulación superior a la de cualquier otra revista en México, y los artículos y modas al estilo de Estados Unidos, incluyendo los automóviles último modelo o la música rock y pop, eran imitados por la burguesía mexicana y los segmentos acomodados de las clases intermedias tan devotamente como antiguamente habían imitado a los franceses. Turistas, revistas, películas y programas de televisión estadunidenses empezaron a inundar México. A pesar de su propio nacionalismo y rica cultura, muchos mexicanos se encontraron imitando y aspirando a los valores y objetivos del "gringo" tradicionalmente odiado.

[33] Mauricio Schoijet y Richard Worthington, "Globalization of science and repression of scientists in Mexico", *Science, Technology, & Human Values* 18, núm. 2 (primavera de 1993), pp. 209-30. Sobre las transnacionales beneficiarias de las políticas neoliberales del Conacyt, véase Schoijet, *La ciencia mexicana en la crisis* (México, Nuestro Tiempo, 1991), pp. 117-18.

Al final, las ventas de tecnología contribuyeron no sólo a la acumulación de capital para el vendedor, sino también a un desarrollo capitalista deformado y económicamente subordinado para el comprador. Tanto la burguesía mexicana como las no mexicanas, directa o indirectamente, fueron capaces de acumular capital como resultado de las "transferencias de tecnología" a expensas de la clase trabajadora, que en última instancia era la que operaba la tecnología. Pero las burguesías no mexicanas, siendo vendedoras de tecnología, acumularon mucho más capital y de manera más rápida.

A pesar de su "milagro" de crecimiento económico, México experimentó un patrón cada vez más profundo de *descapitalización relativa*, manifestada en la salida de ganancias declaradas (y, en el caso de la fijación de precios de transferencia, no declaradas), pagos por patentes de tecnología, licencias, regalías y "paquetes de *know-how*", amortizaciones de la deuda, desequilibrios comerciales, "fuga de cerebros" y temas similares. Debido a la dependencia de los préstamos externos, el capital y la tecnología, debido a la participación en gran escala del estado en inversiones productivas y de infraestructura, y debido al dominio de los monopolios capitalistas privados nacionales y extranjeros, para los setenta el sistema económico de México se había convertido en un capitalismo monopólico dependiente con una fuerte inversión por parte del estado. El capital de Estados Unidos no controlaba totalmente la economía, pero conservaba suficiente influencia para marcar una diferencia crítica, y en eso consistía la dependencia económica de México.

Más adelante, bajo el neoliberalismo de los años ochenta y noventa, el estado mexicano siguió desempeñando un importante papel en la economía. Sin embargo, ya no en el papel de inversor principal, sino como agente para la privatización de empresas estatales y para abrir las puertas a una inversión extranjera incontrolada y al envío de utilidades al extranjero. El sistema económico mexicano se convirtió en uno de capitalismo monopólico dependiente, puro y simple, integrado de manera abierta a la economía "global" (básicamente estadunidense).

La "revolución verde"

Mano a mano con los programas de industrialización de México se daba una transformación del campo mexicano, a costa de la mayoría de los campesinos. Introducida en el mundo por primera vez por la Fundación Rockefeller y el ministro de agricultura de México en 1943, la "revolución verde" aumentó los rendimientos mediante la instrumentación de un "paquete de insumos" (semillas híbridas, fertilizantes químicos, insecticidas, regulación sistemática del agua, provisión de créditos favoreciendo las agroexportaciones). Ésta y otras políticas estatales relacionadas sustituyeron eficazmente muchas hectáreas de cultivos alimentarios tradicionales con artículos especiales para la exportación, que iban desde frutas y vegetales hasta ganado y forrajes. La industria procesadora de

alimentos también fue desarrollada para la exportación. La producción agrícola mexicana se multiplicó por seis.

Para principios de los años setenta, la cría de ganado y la industria forrajera se habían convertido en el terreno más importante para la acumulación de capital en el México rural. Un tercio de la tierra utilizable fue mantenida ociosa en beneficio de los ganaderos y el 64% de las tierras agrícolas de México en explotación se dedicaron al ganado. El número de cabezas de ganado y la cantidad de hectáreas para pastoreo en Chiapas se duplicó entre 1967 y 1976, reduciendo los campos de maíz y frijol de los campesinos. Inmensas zonas arboladas fueron taladas para la industria exportadora maderera y para los proyectos hidroeléctricos apoyados por el Banco Mundial que muy pronto encauzaron los ríos de Chiapas para generar el 60% de toda la electricidad de México. Los campesinos se enfrentaron a la necesidad de importar productos forestales básicos para cocinar y para calefacción. Todo esto acabó provocando ochenta y seis grandes protestas de los indios y campesinos despojados de sus tierras y un incremento en el nivel de violencia contra el campesinado ejercida por los matones a sueldo de los rancheros y por el ejército y la policía mexicanos.

La producción nacional de sorgo (empleado en la engorda de ganado para exportación) se duplicó. México empezó importando grandes cantidades de maíz para alimentar a sus habitantes, la mayor parte de los cuales rara vez comía carne. Para los ochenta, las transnacionales habían conseguido el control de las importaciones alimentarias de México y Continental Grain había empezado a exportar maíz mexicano a la Unión Soviética. *Animales y consumidores extranjeros estaban comiéndose más productos alimentarios básicos producidos en México que el propio pueblo mexicano.*

Los créditos bancarios del Banco Rural (Banrural), estatal, y los dos bancos privados más grandes, el Banco de Comercio y el Banco Nacional de México, financiaron la producción de sorgo de los ejidatarios, pequeños propietarios y agricultores en gran escala. La familia Carretero de Tamaulipas, el estado del noreste que producía una cuarta parte de toda la cosecha de sorgo de la nación, manejaba el 40% de la comercialización del sorgo mediante contratos de ventas directas a la transnacional Ralston-Purina con matriz en Estados Unidos. Otro 40% correspondía a la agencia alimentaria estatal mexicana, multimillonaria en dólares, Conasupo, que a su vez lo vendía directamente a Ralston-Purina, Anderson Clayton, International Multifoods, Malta, o a la "empresa mixta" privada-estatal Alimentos Balanceados Mexicanos (Albamex). En el Bajío (como se conoce al centro tradicional de producción alimentaria de México en la gran área de Guanajuato), una cuarta parte de la producción de sorgo era absorbida por Ralston-Purina —que, junto con Anderson Clayton, extraía 3 millones de toneladas de maíz y 6 millones de toneladas de sorgo por año del consumo humano para dedicarlos a la industria de alimentos para animales.

La miseria y la amenaza de morir de hambre despertaron la rebeldía de algunos campesinos, en Chiapas como en otros lugares. El Centro Nacional de Investigación Agraria advirtió repetidamente a los presidentes de la nación de los

crecientes síntomas de revuelta rural, pero el gobierno, cómplice de las tendencias de "modernización" de la agricultura, miraba para otro lado. Mientras tanto, los precios de garantía puestos por el estado a los productos agrícolas actuaban en beneficio de las grandes unidades de producción mecanizada con alta productividad laboral, reduciendo aún más las perspectivas de los productores campesinos. Conasupo —supuestamente encargada de proporcionar a las masas alimentos a bajo costo— establecía precios apenas decentes a las cosechas sólo para seguir engañando a los campesinos. Al mismo tiempo, Conasupo pagaba por muchos de los insumos importados para las industrias agrícolas y la mayor parte de las importaciones de maíz de la nación. En definitiva los precios subían, nunca bajaban.

Durante muchos años, las importaciones de alimentos representaron aproximadamente un quinto del déficit de la balanza de pagos mexicana. Junto con la escasez de productos alimentarios producidos localmente, causada por el hincapié del estado y la revolución verde en la producción mecanizada masiva para la exportación, estas importaciones ayudaban a elevar la tasa de inflación de México. Luego, bajo el neoliberalismo, el hincapié en la agricultura mecanizada en gran escala para la exportación alcanzó su apogeo. Una enmienda constitucional de 1992 eliminó la protección legal a los ejidos, al tiempo que la gran empresa agrícola avanzaba para absorber las tierras comunales o de los pueblos que no había acaparado todavía o vinculado indirectamente a su cadena de mando global.

Según la declaración de guerra de los zapatistas de Chiapas contra el estado mexicano, la enmienda constitucional de 1992 fue la "causa original" de la insurrección, puesto que amenazó el único medio de supervivencia cultural y económica que aún le quedaba al campesinado principalmente indígena de la región: el ejido. La "causa final" de la rebelión zapatista fue el TLC que, reduciendo las tarifas sobre las importaciones de maíz, amenazaba con inundar el mercado mexicano con maíz más barato de Estados Unidos privando así a los campesinos del ingreso que esperaban obtener con la venta de sus excedentes de maíz. En resumen, el final del sistema del ejido y la instrumentación del TLC significaban la muerte para el campesinado de Chiapas.

Un informe de 1997 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, describía la situación del campo mexicano como "una auténtica crisis". Concluía diciendo que el neoliberalismo y el TLC habían llevado a la expansión de la producción de frutas y vegetales para exportación, a la eliminación de los precios de garantía de Conasupo para los productos de los agricultores y a una reducción de siete veces en el volumen de los créditos otorgados por Banrural a las tierras dedicadas a alimentar a la población mexicana. Banrural, enfrentado a la privatización, trataba casi exclusivamente con un tercio del 1.1 millón de agricultores mexicanos que contaban con "potencial productivo para la exportación".[34]

[34] Citado en *La Jornada*, 9 de junio de 1997.

La revolución verde, que inició esas tendencias medio siglo antes, fue incubada en México y muy pronto se extendió al resto del tercer mundo. Fue como un sueño hecho realidad para la gran empresa agrícola moderna. Continental se unió a Cargill, Cook Industries, Burge Corp., Luis Dreyfus Corp. y Garnac para obtener el control de más del 80% del comercio mundial de granos. (Más adelante Cook se retiró, cuando las firmas japonesas empezaron a desempeñar un papel más importante.)

La agroindustria ataba a los productores campesinos a sus intereses a través de la otorgación de créditos e insumos técnicos. Del Monte desarrolló el mayor complejo de maquinaria agrícola en el Bajío. John Deere y Ford también establecieron prósperas fábricas de tractores en la región. Muchas transnacionales firmaron "contratos agrícolas" en México, proporcionando adelantos financieros a los agricultores importantes para cubrir el monto tanto de la compra de semillas como del pago de jornales, y recuperando luego esos adelantos sobre la base de la producción obtenida. Esto ayudaba a cimentar la alianza entre la burguesía rural mexicana y el capital extranjero. Grandes empresas —especialmente transnacionales cuyas inversiones diversificadas les permitían pagar mejores salarios y obtener tasas de productividad más elevadas que las compañías mexicanas— controlaban cada vez más a los productores rurales convirtiéndose en árbitros de los salarios, precios, selección de productos (rechazando arbitrariamente parte de una cosecha), comercialización y el uso último y la distribución de los productos agrícolas.

En 1950, los agricultores mexicanos utilizaban solamente 3 500 toneladas de fertilizantes por año. En 1980, usaban más de un millón de toneladas. Sólo el 3.5% de los agricultores absorbía más de dos tercios de los insumos modernos, incluyendo la irrigación y la inversión de capital agrario total. Para 1982, cerca de un 85% del crédito agrícola iba a parar al 0.5% más alto de los terratenientes. Incapaces de competir con los tiburones protegidos por el estado, los peces chicos del mar agrícola estaban cada vez más agobiados. Los neolatifundistas, muchos de ellos aliados con transnacionales, acumulaban inmensas extensiones de propiedades rurales a medida que reducían a los campesinos a condiciones de virtual servidumbre.

Las uniones de crédito oficiales, las cooperativas de energía y las plantas fertilizadoras convirtieron fácilmente a todos los pequeños propietarios que quedaban en un mercado cautivo para sus suministros, imponiéndoles tasas más elevadas que las ofrecidas a los terratenientes en gran escala, cuyas organizaciones profesionales tenían mejores relaciones con el mundo oficial. Ya desde 1965, cuatro quintas partes de los campesinos e indios que habían recibido parcelas de tierra en épocas anteriores, gracias a la reforma agraria del Valle del Yaqui en Sonora, habían perdido sus tierras.

Comentando acerca de los mecanismos de crédito de la desposesión campesina, el analista agrícola John W. Barchfield observaba:

> La asociación más común del ejidatario con los dueños del capital privado supone una serie de acuerdos que es equivalente al arrendamiento. El ejidatario recibe una gratificación por el uso de su parcela [...] y, si tiene suerte, se le permite participar como peón en su propia tierra [...] En ambos casos [del Banco Rural del estado y de los prestamistas privados], sin embargo, se produce una humillante yuxtaposición en la que el ejidatario se ve privado de su autonomía y sometido a las decisiones de los irresistibles intereses burocráticos o comerciales [...] que canalizan [...] los excedentes del ejido [...] para apoyar al capital [agro]industrial nacional e internacional.[35]

La mayor parte de los costos y riesgos de la producción real en el campo se pasaba así a los campesinos dueños de parcelas pequeñas o medianas. La mano de obra campesina era generalmente subvalorada y a menudo ni siquiera era remunerada. Por ejemplo, los niños y otros miembros pobres de las familias, a menudo mujeres, trabajaban sin paga alguna. Las cosechas servían para cubrir los pagos de intereses (del 18 al 100%). Muchas son las tretas en uso. Éstas, además de los bajos precios pagados a los productores campesinos por los intermediarios comerciales, representaban una transferencia de valor constante (calculada en 300 millones de dólares entre 1942 y 1961 y en miles de millones a partir de entonces) del campesinado a los elementos más favorecidos de la sociedad. Del precio pagado por los alimentos por un consumidor urbano, muy poco era lo que quedaba en manos del productor campesino.

Los campesinos dueños de propiedades pequeñas o medianas recibieron a crédito los nuevos insumos tecnológicos de la revolución verde. Si no pagaban a tiempo perdían sus tierras o sus derechos de aguas, o se veían obligados a alquilar o hasta a vender sus tierras. Diversas reformas a las leyes agrarias permitieron el arrendamiento de las parcelas ejidales. "¿Arrendar parcelas? —gruñó un campesino de Sonora en 1963—. Aquí se arriendan ejidos enteros."[36] Para 1970, aproximadamente un 70% de los ejidos de Sonora estaban arrendados; en otras zonas de agricultura capitalista de alto rendimiento, como el valle de Zamora en Michoacán, famoso por su industria de la fresa, controlada por Estados Unidos, y por la aportación de mano de obra emigrante barata para Texas y California, la cifra de ejidos arrendados se aproximaba al 80 por ciento.

Semejante "desarrollo agrícola moderno" supuso importantes inversiones desde su mismo comienzo. Puesto que sólo el 7% de las tierras cultivables de México pueden producir buenas cosechas sin irrigación, el gobierno dedicó el 15% de *todas* sus inversiones entre 1941 y 1946 a proyectos de riego. Después de la guerra, nuevos fondos para la revolución verde llegaron provenientes de la Fundación Ford, la AID de Estados Unidos, los programas de ayuda de la Comunidad Económica Europea y el Banco Mundial. El estado participaba además canalizando los fondos, limitando la distribución de tierras, renovando la legis-

[35] John W. Barchfield, "The structure of power and the deformation of agrarian reform in Mexico", *Revista del México Agrario* 14 (1981).

[36] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1963.

lación agraria, regulando algunos precios agrícolas y subsidiando los costos sociales de producción e infraestructura (carreteras, electrificación, combustibles, almacenamiento) de manera favorable a la burguesía rural y a la agroindustria moderna.

Basándose en la tendenciosa suposición de que los terratenientes en gran escala eran más receptivos al cambio tecnológico que los "simples" campesinos, y en el reconocimiento de que sólo los latifundistas podían permitirse los nuevos y costosos insumos, la Fundación Rockefeller y el ministro de agricultura de México enfocaron el desarrollo agrícola de posguerra a algunas regiones selectas, especialmente los estados del norte, que tenían un alto grado de concentración de la tierra en manos de los antiguos porfiristas y nuevos terratenientes "revolucionarios". Para los años ochenta, la región del Pacífico norte poseía el 53% de la superficie irrigada de la nación, comparada con sólo un 1.7% para el sur. Pero el sureño estado de Chiapas, principalmente indígena —el más pobre de México— contenía más de una cuarta parte de los recursos hidráulicos potenciales del país.

Aunque la mayoría de los sucesivos presidentes declaraban que ya no quedaban tierras por distribuir, el estado respondía a los movimientos de protesta campesina expropiando periódicamente unas cuantas grandes propiedades, distribuyendo nuevas tierras o satisfaciendo viejas reclamaciones de tierras. Por ejemplo, durante el periodo culminante de la revuelta campesina en Morelos dirigida por Rubén Jaramillo, el régimen de Adolfo López Mateos (1958-1964) decretó que fuesen distribuidas 12 millones de hectáreas, más del total combinado de los tres presidentes anteriores. Sin embargo, sólo el 25 % fue realmente entregado. Por otra parte, una pequeña minoría de los ejidos favorecidos por el estado alcanzaban un tamaño propio de agroindustria, contribuyendo a un aumento de seis veces en el alquiler de mano de obra asalariada por parte de los ejidos (que a menudo eran otros ejidatarios) en los años sesenta. La reforma de la tierra ya estaba con mucho muerta en el momento de la llegada del neoliberalismo, que oficialmente acabó de enterrarla.

Desde el inicio de la revolución verde, la agroindustria alquiló el grueso de la mano de obra rural, pero absorbió menos mano de obra por unidad de producción cada año debido a la creciente mecanización. Debido a la oportunidad de explotar a las mujeres con bajos salarios, la mayor parte de la mano de obra masculina empleada por la industria procesadora de alimentos fue sustituida por mano de obra femenina, con lo que el desempleo masculino aumentó correlativamente.

El desempleo, inducido por la mecanización y la desposesión campesina, aumentó notablemente en las comunidades agrarias —y con él, el alcoholismo, el ánimo de revuelta, la violencia y la emigración. El número promedio de días laborados por el proletariado rural y los jornaleros declinó de 190 por año en 1950 a 65 en 1980. En los años sesenta el salario promedio anual de los jornaleros disminuyó, y 3 millones de habitantes en zonas rurales emigraron a las ciudades. Muchos de los primeros emigrantes eran mujeres jóvenes de entre

trece y dieciséis años que buscaban la manera de ayudar a sus empobrecidas familias. El movimiento hacia las ciudades o a Estados Unidos aumentó mucho desde entonces.

A pesar de todas esas dificultades, aquellos campesinos desposeídos y reducidos a trabajar tierras marginales generaban aún el 40% de la producción de maíz de México, a menudo en pendientes inclinadas. Se veían forzados a alquilar sus tierras buenas a las agroindustrias, para las que se convertían en obreros asalariados o jornaleros.

Unos 5 millones de campesinos desplazados se apuntaron en el programa de braceros entre México y Estados Unidos durante sus veintidós años de existencia (1942-1964). Hasta cuatro veces esa cifra, conocidos como "ilegales", intentaron "pasar" como braceros. El acuerdo de los braceros fue iniciado como una medida de emergencia en tiempo de guerra para resolver la escasez de mano de obra de Estados Unidos en agricultura, ferrocarriles y otros sectores, y para combatir el sindicalismo militante en Estados Unidos. Periódicamente se ponía al día y fue quedando cada vez más bajo el control directo de la agroindustria o de sus agentes, ocasionando extensas quejas en ambos países acerca de los abusos contra los braceros y los "ilegales".

El encargado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que supervisó el programa "bracero" durante los cinco últimos años, lo llamó "esclavitud legalizada".[37] El programa ayudó a crear la agroindustria en Estados Unidos y a mantener bajos los salarios de otros trabajadores. También ensanchó la brecha entre ricos y pobres en las zonas rurales de México, puesto que los propietarios de parcelas medianas y pequeñas que emigraban a menudo tenían que rentar o incluso entregar sus tierras. Los braceros y los "ilegales" por igual eran despojados en cada uno de los puntos de su viaje. Por ejemplo, un experimentado emigrante michoacano relataba:

> Aquí en México formaron un banco y nosotros teníamos que depositar ahí cierto porcentaje de nuestros dólares, y ese banco se hizo rico a costa de nosotros los braceros. Al final el banco desapareció y todos los ahorros de los braceros se perdieron.[38]

Finalmente, la mano de obra organizada en Estados Unidos y otros intereses empezaron a exigir la terminación del programa "bracero", pero el flujo migratorio continuó, igual como lo hicieron los abusos —contra hombres y mujeres por igual. Leonel Castillo, comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, la "migra" tan odiada por los emigrantes) dimitió en 1979, declarando a la prensa que la política del INS era una "desdichada mancha negra" y que los inmigrantes mexicanos eran como "trabajadores forzados".

Muchos campesinos que no salían de México emigraban en el interior, y no sólo a las ciudades. El censo de 1970 reveló la existencia de un millón doscien-

[37] *Dallas Morning News*, 30 de abril de 1980.

[38] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1981.

tos mil agricultores migratorios, que representaban más del 20 % de la población rural, siguiendo a las cosechas de una parte a otra del país.

A medida que un número cada vez mayor de campesinos desesperados iba llegando a los barrios bajos urbanos a fines de los años sesenta y principios de los setenta, la población agraria real en México disminuía en números absolutos, no obstante una tasa anual de crecimiento de la población de más del 3%. Las oleadas de migración rural a las ciudades servían para mantener un excedente de mano de obra para la industrialización, el comercio y los servicios, mantener los salarios deprimidos y proporcionar esquiroles. Quienes hallaban empleos estables en las ciudades abandonaban sus pequeñas parcelas en el campo, mientras que quienes no lograban encontrar trabajo a veces regresaban al campo para ingresar en la agricultura de subsistencia en los poco estudiados brotes de "migración inversa".

Entre tanto, la estructura de bajos salarios rurales atraía a las transnacionales de la agroindustria en busca de mayores tasas de ganancia que las existentes en sus países de origen. Las diferencias de salarios entre los agricultores mexicanos y los de California revelaban la base de las plusganancias de la agroindustria en México. En su famoso libro sobre "el imperialismo de la fresa", el agrónomo de las Naciones Unidas Ernest Feder calculó una diferencia anual de 95 millones de dólares en las utilidades de las agroindustrias de la fresa basadas *únicamente* en el hecho de que los trabajadores agrícolas mexicanos ganaban una décima parte de los salarios pagados a sus homónimos de California. Cálculos semejantes podrían realizarse para otros cultivos rentables. Del Monte, para escapar del sindicalismo militante inspirado por el movimiento United Farm Workers (UFW) de César Chávez, trasladó su producción total de espárrago blanco a México en 1975, obteniendo ganancias de más de 8 millones de dólares anuales por este producto exportándolo a todo el mundo. Una amenaza similar de traslado a México enfrentaron los restantes 30 000 trabajadores de la industria de la fresa en California (muchos de ellos mexicanos) que en 1997 trataron de unirse a la UFW.[39]

Durante el auge de la revolución verde y luego bajo el TLC, las transnacionales establecieron las tendencias de distribución de tierras mediante su impacto en los rendimientos, las ganancias y la demanda del mercado global. Para fines de los años setenta, las frutas y verduras representaban casi un tercio de toda la producción agrícola de México y la mitad de las exportaciones agrícolas del país (para los mercados estadunidenses de invierno y primavera). La congelación, enlatado, embotellado y preparación de sopas y salsas, que constituían el 90% del procesamiento de alimentos industrial en México, quedaron en manos de las transnacionales. A menudo en "empresas conjuntas" con mexicanos, se apropiaron de un tercio o más del producto bruto total y de las utilidades de la industria alimentaria de México.

La agroindustria extranjera estaba satisfecha de compartir su dominio

[39] Ernest Feder, *Imperialismo fresa* (México, Editorial Campesina, 1978).

con los neolatifundistas, ciertos caciques y poderosos intereses privados o públicos comerciales o bancarios mexicanos, porque éstos eran los más capacitados para imponer sistemas de producción, crédito y mercadeo a la fuerza de trabajo rural. Estos "locales" se las arreglaban para arrendar ejidos y parcelas, y para imponer contratos de trabajo. Ahorraban a las transnacionales la necesidad de dejar inactivo su capital en tierras o de soportar los problemas endémicos de la producción agrícola, incluyendo no sólo el mal tiempo sino también el riesgo de nacionalización o de tomas de tierras por los campesinos.

Utilizando semejantes métodos, United Brands (antes United Fruit) y una serie de transnacionales medianas y pequeñas conocidas como "capitalistas chachareros" introdujeron la gran industria de la fresa, la cual, después de arruinar la ecología humana y natural de Irapuato en el estado de Guanajuato, se trasladó a Zamora, en el estado contiguo de Michoacán. Los inversionistas estadunidenses generalmente lograban amortizar toda su inversión en esta industria en un solo año. De forma similar, junto con inversionistas mexicanos, Ralston-Purina e International Multifoods se hicieron con el control de la industria avícola.

La leche condensada, evaporada y en polvo pasó a ser una operación de Nestlé. Pero para los años ochenta, el 35% de los mexicanos nunca bebía leche. Esto se debía a que la industria procesadora de alimentos consumía el 30% de la producción mexicana de leche para exportación, y muchos capitalistas agrarios criaban ganado para la exportación de carne más que para la venta doméstica de leche. Por otra parte, el mexicano medio consume cinco botellas de refresco por semana, 45 veces su consumo de leche. Solamente Coca-Cola representa el 42% de las ventas de refrescos, que aumentó un 31% entre 1976 y 1979 (comparado con menos del 10% para la leche). Campañas publicitarias de alto impacto vendiendo las fórmulas para bebés como un sustituto "moderno" para la lactancia materna en México (y en países similares con agua impura y poca refrigeración) contribuyeron a incrementar la desnutrición, las enfermedades y la tasa de mortalidad infantil.

Anderson Clayton, que en 1967 ocupó el segundo lugar en ventas entre las empresas mexicanas, dominaba la industria del algodón. En 1975, decidió dejar de financiar el cultivo mexicano de algodón. La producción cayó más del 50% y cerca de medio millón de agricultores mexicanos quedaron sin trabajo. El gobierno de México se hizo cargo de la financiación, pero Anderson Clayton siguió controlando el procesamiento. Al mismo tiempo, Anderson Clayton expandió sus inversiones a la producción de alimentos para ganado, chocolate, semillas para siembra, aceites comestibles, pollos e insecticidas, un modelo de diversificación seguido por otras transnacionales como Heinz, John Deere y Ralston-Purina. De esta forma, la agricultura mexicana llegó a estar dominada por extranjeros —desde la producción y venta de maquinaria y fertilizantes hasta el procesamiento y comercialización de productos agrícolas.

El predecible resultado de la revolución verde fue la concentración de la tierra en escala semejante a la de los días finales del porfiriato. Para 1970, la mitad de las propiedades agrícolas de México eran tan minúsculas que no repre-

sentaban tanto propietarios de tierras sino agricultores sin tierra con acceso a parcelas de subsistencia para complementar el ingreso que pudieran tener vendiendo su fuerza de trabajo a otros. Desde 1967 hasta 1976, un periodo de gran crecimiento económico, la ingestión de calorías promedio por mexicano disminuyó un 10%. La desnutrición empeoró a partir de entonces.

Las enfermedades proliferaron, a medida que la agroindustria en México impregnaba los campos (y con frecuencia también a los campesinos que se encontraban trabajando en ellos) con pesticidas como el DDT y docenas de otros agroquímicos prohibidos en Estados Unidos o clasificados por las Naciones Unidas como extremadamente peligrosos. El daño medioambiental se extendió por todas partes, y los mantos acuíferos se contaminaron. En 1991 empezaron a declararse casos de cólera.

Para 1997, el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF) informaba que dos millones de niños mexicanos estaban "en peligro" por vivir en extrema pobreza; 70 000 de ellos vivían permanentemente en las calles de las ciudades. La mano de obra infantil iba en aumento. Un millón de menores (por debajo de los catorce años) trabajaba en la agricultura, y más de 100 000 menores estaban trabajando en las principales ciudades. La prostitución infantil se estaba convirtiendo en un gran problema.

Mientras tanto, las corporaciones extranjeras aumentaban sus demandas de "protección de patentes" en la agricultura y sus esfuerzos por convertir a los agricultores mexicanos en proveedores de semillas gratuitas para que pudieran desarrollarse las nuevas semillas híbridas, y en consumidores que pagasen los costos de las nuevas semillas "más productivas". Más adelante, la agroindustria extranjera y las compañías farmacéuticas utilizaron las cláusulas de protección de derechos del GATT y el TLC para garantizar gran parte de la protección que ya habían empezado a obtener gracias a la revolución verde, incluyendo un dominio absoluto sobre los 43 mil millones de dólares del mercado mundial de plantas medicinales.[40]

La revolución verde ayudó a que, para 1980, México fuese ya el noveno mayor productor de alimentos del mundo, cuando tenía que importar el 25% de sus alimentos de Estados Unidos. México era el sexagésimo en esperanza de vida y en consumo de alimentos por persona. Un gigantesco agroexportador, México *importaba* 3 mil millones de dólares en maíz, granos, frijoles, azúcar y grasas y aceites comestibles en 1981, una suma mayor que el valor total de sus exportaciones agrícolas. Para principios de los años noventa, México se había convertido en "el tercer mayor consumidor de productos agrícolas estadunidenses"[41] —*antes* de que el TLC abriera aún más las puertas hacia el mercado mexicano.

[40] En junio de 1997, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron un plan de asistencia técnica de diez años de duración para eliminar el uso de DDT en México. Sobre el trabajo y la prostitución infantiles, véase *Mexican Labor News and Analysis* II, núm. 23 (16 de diciembre de 1997), y III, núm. 4 (16 de febrero de 1998).

[41] Véase Tom Barr, Harry Browne y Beth Sims, *The great divide: the challenge of U.S.-Mexico relations in the 1990s* (Nueva York, Grove Atlantic, 1994), p. 387.

La investigadora de las Naciones Unidas Cynthia Hewitt de Alcántara concluía su muy aclamado estudio sobre la revolución verde en México definiéndola como

> desperdicio: desperdicio de recursos naturales [...]; de insumos agrícolas manufacturados (y de las divisas necesarias para adquirir muchos de ellos) [...]; desperdicio de utilidades generadas por el rápido cambio tecnológico, que fueron a un consumo conspicuo o a una inversión especulativa [...]; sobre todo, desperdicio de la capacidad humana representada por los campesinos sin tierra, los ejidatarios y los colonos [dueños privados de tierras estatales en colonias agrarias] a quienes se arrebató el control sobre su propia tierra en el curso de la tecnificación agraria.[42]

Pero no era desperdicio a los ojos y los bolsillos de las burguesías nacionales y extranjeras que resultaban beneficiadas. Para éstas, la revolución verde y las políticas estatales integradas a ella establecían cuatro piedras angulares para su acumulación de capital en escala ampliada. Primero, proporcionaban alimentos a un costo relativamente bajo —al menos hasta 1965— para las poblaciones urbanas, manteniendo bajos en consecuencia los costos de la fuerza de trabajo y el nivel de los salarios industriales. Segundo, generaban una población excedente relativa de campesinos desplazados que servían como fuerza de trabajo para la industrialización y como ejército de reserva de desempleados, ayudando así a sostener una base de salarios bajos y limitando la capacidad del trabajo organizado para declarar huelgas o aumentar sus beneficios sociales (ejerciendo el mismo tiempo un impacto en cierto modo similar bajo su forma inmigrante en Estados Unidos). Tercero, proporcionaban materias primas baratas (algodón, tabaco, cáñamo, etc.) para la industria. Finalmente, a través de su estimulación de las exportaciones agrícolas, se convirtieron en una fuente principal de divisas, utilizadas luego para la importación de bienes de capital para la producción industrial y de artículos para el consumo suntuario. La revolución verde y la "modernización" agrícola demostraron así que eran una *condición* básica para el "milagro económico" de la industrialización y su correspondiente pauperización de millones de mexicanos.

Industrialización y descapitalización

Los miles de millones de dólares de capital que los inversionistas extranjeros inyectaron en México después de la segunda guerra mundial penetraron las cimas gobernantes de la economía. Como ya señalamos, incluyeron empresas conjuntas con empresas mexicanas privadas y estatales. Esto creó una conexión estructural que unió al capital extranjero con el capital monopólico de México,

[42] Véase Cynthia Hewitt de Alcántara, *La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970* (México, Siglo XXI, 1978), pp. 300-301.

la burocracia política y los líderes sindicales colaboracionistas de clase. El estado autoritario-tecnocrático que surgió de ahí no separó el capital público del privado en una economía "mixta", sino que *más bien practicó un capitalismo respaldado por el estado.*

El estado, declarando actuar en beneficio del capital "nacional" y de "la nación", subsidiaba al capital monopólico, tanto al nacional como al extranjero. Energía, fertilizantes, productos de papel y transporte aéreo, ferroviario y carretero del estado estaban disponibles para los capitalistas a precios muy inferiores a las normas internacionales; el estado también subcontrataba proyectos de obras públicas lucrativos a empresas privadas. El presupuesto federal destinaba sumas aún mayores (5 mil millones de dólares en 1980) para la *importación* de bienes de capital y partes de repuesto, de cuyo uso el capital privado era quien más se beneficiaba. El estado también invertía en actividades consideradas por el capital privado como demasiado poco rentables o riesgosas y, durante las recesiones, se dedicaba a "cebar la bomba" de la economía para estimular su recuperación.

Con anterioridad a la ofensiva política que condujo a la introducción del neoliberalismo, los capitalistas mexicanos en gran escala fueron los primeros en reconocer que sus negocios no podían prosperar y la estabilidad social no podía mantenerse a no ser por el papel desempeñado por el estado en la economía. Parafraseando a un banquero mexicano, el economista Alonso Aguilar describió acertadamente el papel del estado: "El deber del estado consiste en poner humildemente la mesa, y la tarea de la empresa privada consiste en comer lo que encuentra sobre ella."[43] Agustín F. Legorreta, director del Banco Nacional de México (privado), fue más directo: "El estado y la empresa privada son, en el fondo, la misma cosa."[44] Los gastos del estado ascendieron de sólo un 8% de producto interno bruto (PIB) en los años treinta a un 25% en los sesenta, a 45% o más en los setenta y, con la expansión en la producción de petróleo, a más del 50% a principios de los ochenta, cayendo nuevamente hasta un 21% para los años noventa.

Los cuadros 12 y 13 revelan el carácter de la semindustrialización de México. El cuadro 12 muestra la distribución de la actividad manufacturera en 1960 y los lentos cambios que empezaron a aparecer para principios de los setenta a medida que se hacían esfuerzos para enfrentar la naturaleza subdesarrollada del capital y de los bienes intermedios. Para 1968, los bienes de capital representaban el 50% de las importaciones de México mientras que las materias primas para producción industrial (bienes intermedios) representaban otro 32%. La sustitución de importaciones se había convertido así en intensiva de importaciones. Además, las empresas que producían bienes de capital estaban

[43] Véase Alonso Aguilar y Fernando Carmona, *México: riqueza y miseria* (México, Nuestro Tiempo, 1967), p. 65.

[44] Citado en Alonso Aguilar, "La burguesía no sólo manda, gobierna", *Estrategia* 28 (julio-agosto de 1979), pp. 2-32.

CUADRO 12
Tipo de actividad manufacturera 1960-1994
(en porcentajes, en precios constantes de 1980)*

	1960	*1975*	*1980*	*1985*	*1990*	*1994*
Bienes de consumo perecederos	61.1	47.0	46.2	41.6	39.4	38.7
Bienes intermedios	27.6	33.5	30.6	37.0	38.1	37.0
Bienes duraderos y bienes de capital	9.1	17.5	21.4	19.7	20.7	22.4
Otras industrias	2.2	2.0	1.8	1.7	1.8	1.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*Excepto para 1960, que está en precios constantes de 1960.
FUENTES: UNIDO, Desarrollo Industrial, *Informe mundial* (1996, Sección México); para 1960, Banco de México, *Informe anual*

CUADRO 13
Producto interno bruto (PIB) por actividad económica, 1970-1996
(en porcentajes, precios constantes de 1993)

Año	*Producto interno bruto**	*Agricultura*	*Total de la industria*	*Industria manufacturera*	*Construcción*	*Comercio mayoreo y menudeo*	*Transporte y comunicaciones*	*Otros servicios*
1970	486 744	12.2	32.7	23.7	5.3	25.9	4.8	24.4
1980	922 338	8.2	32.7	22.1	6.4	30.0	6.4	24.6
1985	1 005 190	8.5	31.7	21.3	5.4	26.6	6.2	27.0
1990	1 087 822	7.8	33.0	22.8	5.0	25.7	6.6	27.0
1994	1 206 674	6.0	27.0	19.0	5.0	22.3	9.7	35.0
1995	1 131 889	6.5	26.5	19.2	4.0	20.0	9.8	37.2
1996	1 189 537	6.2	27.8	20.3	4.2	19.8	10.2	36.0

*En millones de pesos de 1993
FUENTES: INEGI, *Sistema de cuentas nacionales* (1980-1995); Banco de México, *Informes anuales* (1980-1996)

dominadas por capital extranjero, que en 1970 recibió el 70% del ingreso por la producción de bienes de capital: 20% fue a firmas estatales y 10% a compañías mexicanas privadas.[45]

La administración del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) intentó corregir el problema complementando la industrialización de sustitución de importaciones con el desarrollo de la industria pesada. Los planes de desarrollo tecnológico de México coincidían, conscientemente o no, con los del im-

[45] Banco de México, informes anuales; y Carlos Perzabal, *Acumulación capitalista dependiente y subordinada: el caso de México ,1940-1978* (México, Siglo XXI, 1979), p. 128.

perialismo estadunidense. Las transnacionales estaban empeñadas en un nuevo empuje exportador llamado eufemísticamente "transferencias de tecnología" (esto es, ventas de tecnología) como medio para resolver su crisis de liquidez —puesto que la mayor parte de las ventas de tecnología eran pagadas al contado con transferencias de efectivo a través de instituciones de crédito internacionales. Debido a los crecientes costos de producción y a la sobreproducción doméstica, las transnacionales estaban también comprometidas en una estrategia de vender más instalaciones industriales en el extranjero, particularmente en áreas de salarios bajos y en expandir mercados domésticos como los de México. Esta comercialización de tecnología y exportación de capital constituían la forma de acumulación de capital de crecimiento más rápido para las transnacionales con base en Estados Unidos y se había vuelto crucial para su supervivencia y crecimiento. Además, el imperialismo estadunidense estaba momentáneamente a la defensiva después de la derrota de Vietnam; el dólar ya no era hegemónico en el mercado monetario internacional; los términos del comercio se habían endurecido debido a las actividades de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y cárteles similares; había recesión en Estados Unidos además de estagflación (alto desempleo junto con inflación); las rivalidades interimperialistas se habían intensificado y por todo el mundo surgían gobiernos revolucionarios y movimientos de liberación. Así, México fue uno de los primeros casos en que se puso a prueba la estrategia del imperialismo de Estados Unidos de desplazar parte de su propia crisis sobre las espaldas de las clases trabajadoras del tercer mundo.

Los asesores del presidente Echeverría proclamaban en 1972 que la Ley sobre Registro de Transferencias de Tecnología, instrumentada a través de Conacyt, daría al gobierno capacidad de prever e impedir que las transnacionales "despojaran" a México mediante los trucos de la fijación de precios de transferencias. Pero también concedían que no había ninguna forma adecuada de disciplinar a las transnacionales a no ser que se examinaran sus libros de contabilidad, lo que exigiría una revolución. Tres años más tarde, Conacyt reconocía públicamente el fracaso de la ley de 1972 sobre transferencias de tecnología —y en general la estrategia de desarrollo de los treinta años anteriores. Los ahorros derivados de las ventas de tecnología registradas habían sido insignificantes. Los registros habían sido irregulares y sólo después de que los contratos ya habían sido negociados.

Pero el estado mexicano, casado como estaba con los intereses del capital monopólico privado, se aferró a su estrategia, y desde 1976 hasta 1980 la importación de bienes de producción se triplicó —a pesar de los planes de desarrollo del estado que demagógicamente pedían que México se convirtiera en exportador de bienes de capital.[46] En 1980, los bienes de consumo duradero y los bienes de capital ascendieron al 21.4% de la actividad manufacturera de

[46] Por ejemplo, un documento de Nafinsa-Unida, "A strategy to develop capital goods in Mexico" (México, Nacional Financiera, 1977).

México, retrocediendo ligeramente bajo el neoliberalismo y no superando la marca de los años ochenta sino en 1994 (y entonces sólo por un punto porcentual). Bajo el neoliberalismo, la producción de bienes intermedios se disparó primero y luego se estancó (véase el cuadro 12). En otras palabras, la tendencia subyacente de desarrollo débil o incompleto del capital y los bienes intermedios siguió imperturbable. Además, como ya señalamos antes, cualquier pretensión a una independencia tecnológica aunque fuese relativa desapareció totalmente.

De los bienes de capital desarrollados en los setenta, por ejemplo, más del 80% eran importados. El estado cooperaba con el capital extranjero ofreciendo incentivos como la eliminación de todos los impuestos de importación *ad valorem* sobre materias primas y componentes y del 75% sobre la maquinaria, recortes del 75% en impuestos sobre las ventas, recortes del 15 al 20% en impuestos sobre el ingreso, y aumentos en los descuentos por depreciación. Se calculaba que por cada dólar de inversión extranjera nueva que entraba al país, dejaba de 2.50 a 3.00 dólares en utilidades, regalías, otros pagos y trucos en fijación de precios de transferencia sobre importaciones de tecnología —una base estructural de la "dolarización" de la economía y de la relativa descapitalización (el efecto de "bomba de succión" de la inversión extranjera). Nuevas concesiones se hicieron al capital extranjero bajo el neoliberalismo, que aumentaron el porcentaje de bienes de capital importados hasta 90% y, como ya vimos, aceleraron la maquiladorización y relativa descapitalización de México.

El cuadro 13 muestra el estancamiento y descomposición de la actividad manufacturera como un porcentaje del PIB de México entre 1970 y 1996. Las porciones de la agricultura y el comercio al por mayor y al menudeo también declinaron. Los ganadores en el reparto del PIB fueron las comunicaciones y transportes (duplicándose al 10.2%) y "otros servicios" (desde un cuarto hasta más de un tercio del PIB, a medida que el capital extranjero invadía la banca, los seguros, los bienes raíces y los servicios financieros aprovechando la luz verde concedida por el GATT y el TLC). Puesto que la porción de las manufacturas había alcanzado su cima en 1970, resultaba obvio que México nunca llegó más que a semindustrializarse. Aún más importante es que el cuadro 13 ilustra cómo las políticas neoliberales demostraron ser mortales para los sueños de industrialización de México, exactamente lo contrario de lo que sus defensores prometían.

Además, la actividad manufacturera de México fue siendo cada vez más dominada por el extranjero y más orientada a las exportaciones. La parte de toda la inversión extranjera dedicada a las manufacturas aumentó hasta un 76% para el año 1976, antes de trasladar nuevas sumas a los servicios financieros. La mayor parte de las manufacturas dominadas por el extranjero estaban orientadas a la exportación. De acuerdo con los informes anuales del Banco de México, la porción de bienes manufacturados en las exportaciones totales ascendió del 11 % en 1960 al 22.5% en 1968 y a más del 35% en 1978-1979. Luego, cuando México empezó a reforzar la producción de petróleo para exporta-

ción como la nueva "salvación" de su deslucido "milagro económico", la parte de los bienes manufacturados en las exportaciones descendió a un aproximado 15% en 1981 (frente a la parte del 32% del petróleo, incrementada desde el 21% de 1977).

La mayoría de las exportaciones manufacturadas eran generadas en parte significativa por el capital extranjero, incluyendo las producidas por las plantas maquiladoras estadunidenses primero establecidas en la zona de libre comercio de la frontera norte en los años sesenta. Sin embargo, antes de los ciclos de "auge y quiebra" establecidos allí, los inversionistas de Estados Unidos ya habían empezado a exportar a México tecnologías de manufacturas —como en los cincuenta, cuando enviaron maquinaria obsoleta y cara para "ayudar" a que México empezase a desarrollar un sistema dispendioso, caro e irracional de producir automóviles, para sustituirlo luego con un sistema de producción con las más recientes tecnologías de propiedad y administración directamente estadunidense. Para 1994, la industria automotriz dominada por el extranjero (Ford, GM, Volkswagen, Nissan, etc.) representaba una décima parte del PIB y más de un tercio de las exportaciones de manufacturas (o el 18% de las exportaciones totales). GM era el mayor empleador privado de México. Las facilidades de la industria automotriz estaban a la par con las de la mayoría de las existentes en Japón y Estados Unidos. Una fuerza laboral altamente capacitada, que ganaba una octava parte del sueldo de sus pares en Estados Unidos, mostraba niveles de calidad de productividad iguales o superiores a los de Estados Unidos. Tendencias similares de producción altamente capacitada y productiva con una producción de alta tecnología con bajos salarios eran visibles en las maquiladoras de electrónica y computación propiedad de extranjeros en México.[47]

La experiencia automotriz y electrónica se generalizó muy pronto, a medida que los inversionistas de Estados Unidos insistían en tecnologías más recientes y en aumentar el número de plantas de producción original o de ensamblaje dentro de México. Utilizando utilidades reinvertidas o capital mexicano y mano de obra mexicana altamente productiva y de bajos salarios, producían y vendían artículos acabados para los mercados tanto nacionales como extranjeros. Simultáneamente, Estados Unidos mantenía e incluso aumentaba las ganancias por exportaciones y por sus favorables balanzas comerciales con México sustituyendo la exportación de productos terminados con la de bienes de capital necesitados por las empresas industriales de México. Ganancias adicionales eran acumuladas por la exportación de productos manufacturados en México a otros países latinoamericanos agrupados en mercados comunes regionales.

[47] Las cifras de 1994 son de la revisión de Dan La Botz de María Cristina Bayón, *El sindicalismo automotriz frente a un nuevo escenario: una perspectiva desde los liderazgos*, (México, FLACSO y Juan Pablos Editor, 1997), de *Mexican Labor News and Analysis* II, núm. 23 (16 de diciembre de 1997), y La Botz, *Democracy*, p. 118.

Bajo el TLC y su presumible sucesor, un mercado único hemisférico, este patrón de inversión y comercio estadunidense se agudizó aún más. México contaba con el potencial necesario para convertirse no sólo en un centro de producción de bajos salarios y alta tecnología, sino también en una base de lanzamiento para el comercio de Estados Unidos con el resto de América Latina y otras partes del mundo (en forma parecida a como el Japón utilizaba partes del sureste asiático).

Mientras tanto, los capitalistas mexicanos enfocaban tradicionalmente sus inversiones en la industria ligera, el comercio, la banca, la agricultura, los servicios y el turismo. Los industriales mexicanos más afortunados centralizaban sus propiedades en áreas que utilizaban tecnología avanzada, asociándose con otros capitalistas en "grupos de capital privado" y empleando a menudo a trabajadores sindicalizados disciplinados por los sindicatos de la CTM. De esa manera obtenían mejor productividad. Este proceso iba acompañado por la dispersión de otros trabajadores, usualmente no sindicalizados, en numerosas industrias más pequeñas y menos avanzadas tecnológicamente, que producían menores ganancias y distribuían salarios más bajos (véase cuadro 8).

La distribución sesgada de salarios no era más que el resultado del constante desarrollo del capitalismo monopólico en México (llamado también desarrollo "desigual", desarrollo "subordinado" o "desarrollo deformado" de la economía mexicana). Otros resultados eran el agudo desequilibrio en la distribución de trabajo internamente y el radical aumento en la exportación de mano de obra excedente a Estados Unidos. Los cuadros 7 y 13 reflejan el abandono del sector de subsistencia de la agricultura y la creciente importancia de la industria y los servicios, que para 1995 absorbían más del 57% de la fuerza laboral (comparado con sólo el 34% en 1940 y el 49% en 1970). Entre tanto, el número combinado de trabajadores "oficialmente" desempleados en México y de emigrantes mexicanos en los Estados Unidos saltó desde el 9.4% de la población económicamente activa en 1970 hasta el 27% en 1995.

A pesar de la nutrida emigración, una comparación de los cuadros 7 y 13 muestra que casi un 16% de la fuerza laboral permanecía en la agricultura, aunque ésta representaba poco más del 6% del PIB. En otras palabras, la industria manufacturera, que generaba un 27% del PIB con sólo el 23% de mano de obra, no estaba absorbiendo trabajadores lo bastante rápidamente para levantar a los pobres rurales o a sus semejantes emigrantes, que constituían la mayoría de los desempleados o subempleados de México —calculados en un 40% en los años cincuenta y principios de los sesenta y en *más del 50% en 1998*. Considerando el cambio en la producción de la minería a las manufacturas entre 1910 y 1998, el cuadro de desequilibrio y desigual distribución del trabajo y el ingreso en 1998 se asemejaba en sus proporciones al de 1910.[48]

[48] En 1910, la agricultura representó el 67% de la actividad económica y sólo el 24% de la producción, mientras que la minería y la manufactura representaron el 15% de los empleos y el 23% de la producción.

Hipotecar el futuro de México

El examen del crecimiento de los monopolios quedaría incompleto si no analizáramos el increíble proceso monopolizador de la banca. Para principios de los setenta, siete grupos bancarios privados controlaban cerca de un 85% de todo el capital, mientras que los dos mayores bancos privados, el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco de Comercio (Bancomer), controlaban casi la mitad de todos los recursos bancarios de la nación. Esta poderosa burguesía financiera mantenía estrechos vínculos con el estado —así como con otros bancos, compañías de seguros, financieras, industrias y corporaciones extranjeras.

Una serie de entrelazamientos y superposiciones se desarrolló entre un puñado de los principales bancos privados y las mayores empresas industriales nacionales y extranjeras, todo ello favorecido por el estado. Estos conglomerados mantenían a su vez estrechas relaciones con el sector bancario estatal, que, a través de su capitalización rápidamente creciente, gracias a los ingresos del petróleo, a los préstamos externos y a su diversificación en los sectores "mixtos" (públicos y privados) bancario e industrial, vino a representar casi la mitad de todos los recursos de crédito en México para fines de los años setenta. El sistema estatal de crédito y banca servía cada vez más para engrasar todo el sistema de producción. Estaba ligado a los principales mercados de crédito internacional, encabezados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La industrialización de México seguía siendo estimulada por los créditos internacionales, en su mayoría de bancos estadunidenses y japoneses para la expansión de la infraestructura de Pemex (petróleo) y CFE (electricidad).

Para mediados de 1982 México debía a los bancos de Estados Unidos más dinero que ningún otro país del mundo. Era la nación más endeudada del planeta (85 mil millones de dólares en aquel momento). Quince años después esa deuda se había duplicado hasta 170 mil millones de dólares, a pesar de varias renegociaciones que bajaron de la deuda y tres grandes *bailouts* (rescates) del FMI y Estados Unidos a cambio de la "restructuración" neoliberal de la economía de México y la aceptación de garantizar el pago de las deudas con ingresos del petróleo estatal (véanse capítulos 7 y 8).

La utilización de estas deudas por parte de las potencias extranjeras ya se describió en la primera parte. El papel desempeñado por la estructura de la deuda de un país en vías de desarrollo en la acumulación de los capitalistas extranjeros va más allá de los pagos de intereses o de la apertura de nuevas oportunidades de inversión. En última instancia la fuerza de trabajo produce el excedente económico utilizado para satisfacer los pagos de la deuda externa. La acumulación de capital para el capital monopólico extranjero, aunque se origina en la esfera de la producción mexicana, tiene lugar también en la esfera de *la circulación internacional de dinero* (especialmente a través de la estructura de la deuda). Esta circulación actúa sobre el excedente económico de México y lo traslada cada vez más a manos de las instituciones financieras fuera de México —descapitalizando a México aún más. Igualmente importante es que el imperialis-

mo usa la estructura de la deuda de una nación para intervenir en la toma de decisiones nacionales críticas, como el uso que habrá de darse a los ingresos provenientes del petróleo.

Pero no fue sólo a través de sus empresas mixtas y servicios financieros al sector privado como el estado mexicano desempeñó un papel tan decisivo en la acumulación de capital de los monopolios durante el periodo 1940-1982. El estado mismo ayudó a reunir los recursos necesarios explotando directamente a la fuerza laboral, incluyendo a la mano de obra campesina endeudada a través de sus agencias de crédito. Para 1982, el estado empleaba por lo menos a un millón de trabajadores en sus industrias y bancos, además de otros cuatro millones en empresas mixtas y operaciones subcontratadas. Además, el estado empleaba a un millón cien mil personas en la administración del gobierno federal, y otro millón y medio aproximadamente en el sistema de educación pública, el sistema de seguridad social, las fuerzas militares y de policía, los gobiernos locales y así sucesivamente.

Así pues, al lanzar a México a la vía de una rápida pero incompleta industrialización dominada por el capital monopólico nacional y extranjero, el estado llegó a explotar a la fuerza de trabajo en una escala doble: directamente como empleador de una gran fuerza laboral, incluyendo partes importantes del proletariado industrial sindicalizado, e indirectamente, mediante el desarrollo de una inmensa e improductiva burocracia estatal, que instrumentaba e imponía disciplina laboral y conformismo político mediante una compleja serie de instituciones que llegaban hasta las más remotas comunidades rurales y a los más degradados barrios marginales urbanos. Ningún obrero, ningún campesino, ningún pequeño comerciante, oficinista del estado, vendedor callejero o aspirante a estudiante era inmune a una u otra parte de esta múltiple explotación a manos del principal agente del capital monopólico privado: el estado.

Al final, como ya sabemos ahora, el "milagro económico" mexicano se convirtió en un desastre tan real como la vida misma. En 1982 la crisis de la deuda obligó a declarar la bancarrota y la nacionalización de la banca privada mexicana, que más adelante sería reprivatizada. Una inmensa operación de salvamento económico estadunidense e internacional fue puesto como condición de que México privatizara su sector estatal relativamente fuerte y que introdujera el neoliberalismo. La centralización del capital en manos de unos pocos grupos privados se aceleró notablemente. En 1988, cuando el sector bancario comercial completo fue privatizado, sólo quedaron dieciocho bancos comerciales. Para 1992, unos 234 inversionistas controlaban efectivamente la banca mexicana. Como señaló el historiador de la economía Carlos Marichal:

> Para 1994, de acuerdo con los informes oficiales de la bolsa de la ciudad de México, un grupo de 183 000 individuos —el 0.2% de la población— poseían un capital equivalente al 51% del PIB total. Las utilidades de estos capitalistas durante el año clave de 1993 —el año de la firma del TLC— fueron mayores que la suma de todos

los gastos del gobierno mexicano en educación, salud, programas urbanos, ecología y programas hidrológicos, y todas las inversiones sociales públicas.[49]

En 1994-1995, el escenario de crisis económica de 1982 se repitió a escala mucho mayor. México devaluó el peso y cayó en una depresión económica masiva. Una vez más, el capital se centralizó, dejando sólo trece bancos comerciales. Y una vez más, una operación de salvamento predominantemente del FMI y Estados Unidos de la quebrantada economía de México dejó intactos a los grandes monopolios bancarios. Aun así, *después* del salvamento económico internacional, más de la mitad de los bancos mexicanos se declararon en quiebra. El 1996, el gobierno mexicano tuvo que salvar a esos bancos. Se dice que esto le costó a México el 8.6% de su PIB. El soñado milagro de México se había convertido en una pesadilla real, excepto para unos pocos afortunados.

Los banqueros extranjeros utilizaron estas repetidas crisis para adquirir grandes porciones de los bancos mexicanos a precios de saldo. Por ejemplo, el Bank of Nova Scotia de Canadá adquirió el control del 50% del Grupo Inverlat, el complejo bancario manejado por Agustín Legorreta, uno de los capitalistas más poderosos de México. El mayor grupo bancario español, Grupo Financiero Santander, consiguió el control mayoritario del Banco Mexicano. Banamex cayó bajo el control de unas pocas élites mexicanas acaudaladas de todos los sectores de la economía que habían formado alianzas con intereses extranjeros tan poderosos como Kimberley Clark. El accionista principal de Bancomer pasó a ser Banque de Montréal. El Citibank de Nueva York aceptó comprar Banca Confía en 45 millones de dólares, una vez que el estado mexicano asumió la responsabilidad por su cartera de crédito vencida por valor de mil millones de dólares. El negocio de Citibank se vio un poco empañado por las noticias de que el dueño de Confía había sido encarcelado, acusado de doce delitos criminales, para no mencionar la publicidad dada a las acusaciones del fiscal de Estados Unidos de que el propio Citibank había lavado miles de millones de dólares de un cártel mexicano de narcotraficantes.[50]

Sólo en 1997, México tenía que pagar 40 mil millones de dólares de su deuda externa, en su mayor parte a instituciones bancarias y financieras privadas estadunidenses, japonesas y europeas que ya estaban nerviosas por las temblorosas estructuras de las bolsas, monedas y bancos latinoamericanos, de Europa oriental y asiáticos, que ellas mismas habían ayudado a estimular con tanto entusiasmo mediante sus salvajes transferencias de fondos para hacer megautilidades rápidas en el "nuevo orden mundial" del libre mercado neoliberal. Esta cifra de 40 mil millones de pago de la deuda, a falta de una renegociación o cancelación de la misma, aumentaría radicalmente en 1999 cuando acaben por expirar ciertos "periodos de gracia" concedidos a la deuda de México.

[49] Carlos Marichal, "The rapid rise of the neobanqueros: Mexico's new financial elite", *NACLA Report on the Americas* XXX, núm. 6 (mayo-junio de 1997), p. 28.

[50] *New York Times*, 21 de noviembre de 1997.

Una vez más, igual que en 1910, el capital extranjero (especialmente de Estados Unidos) logró inmenso poder e influencia sobre el futuro económico de México. En su estructura económica y en su dinámica de política estatal neoliberal, México, casi un siglo después de su tan celebrada "revolución", parece un gigantesco almacén de mano de obra barata a disposición de las élites locales y de los inversionistas y acreedores extranjeros. De hecho, la nación fue hipotecada a los extranjeros. En junio de 1997, el director general de *El Porvenir*, un periódico regional, se lamentaba: "Es reprensible que el gobierno informe de sus políticas económicas primero a Washington o Nueva York antes de hacerlo al pueblo o a la prensa [mexicanos]."

Y una vez más, también como a principios de 1900, los mexicanos de todas las clases sociales respondían con indignación a los temblores de los terremotos, del rápido cambio económico, de la creciente presencia de extranjeros y de la corrupción política que sacudía sus vidas cotidianas. Y a través de todo esto, un número sorprendente de ellos encontraban bases para la esperanza.

CAPÍTULO 6

CLASES EN CONFLICTO, DESDE 1940 HASTA HOY

El Banco Rural es nuestro patrón. Nosotros somos los trabajadores y ni siquiera recibimos salario ni tenemos un sindicato.

Grupo de ejidatarios, Michoacán, 1981

Los dueños de los bancos en los países de ustedes se están haciendo cada vez más ricos con nuestra deuda, mientras que nosotros nos volvemos cada vez más pobres.

Doña A., dueña de una recaudería en la ciudad de México y madre de tres hijos, 1987

La costura se está ubicando ahora en los talleres familiares. Ahí, cómo llegamos, se pregunta. Éste y no otro es el drama.

Evangelina Corona, líder del nuevo sindicato de costureras "19 de Septiembre" de la ciudad de México, 1988 (tercer aniversario del terremoto)[1]

Cuando se estudia a las clases sociales como relaciones dinámicas y en evolución, no como entidades estáticas, captar un cuadro preciso y completo de las clases en cualquier momento específico es difícil si no imposible. Tanto la naturaleza de las relaciones de un grupo socioeconómico con los medios de producción como la conciencia del grupo ante esta relación, cambian todo el tiempo. En la evolución del capitalismo, las formas de trabajo están siendo transformadas continuamente: desde el autoempleo hasta el trabajo asalariado, desde la simple producción de mercancías hasta la producción capitalista de mercancías, desde una sociedad de productores aislados hasta una organizada en grupos corporativos. Marx describía esta evolución como una que va "de relaciones entre personas a relaciones entre cosas", del trueque al comercio, que él identifica como la base del "fetichismo de la mercancía" y la "enajenación" experimentada por tantos trabajadores. Y como el capitalismo transforma el trabajo con el objetivo de extraer plusvalor,[2] los conflictos entre clases adoptan formas nuevas y a menudo violentas.

[1] La primera cita es de James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1981. La segunda es de Lourdes Benería y Shelley Feldman, comps., *Unequal burden: economic crises, persistent poverty, and women's work* (Boulder, Westview Press, 1992), p. 83. La tercera es del diario de la ciudad de México *La Jornada*, 19 de septiembre de 1988, citada en José Antonio Alonso, *Mujeres, maquiladoras y microindustria doméstica* (México, Distribuciones Fontamara, 1991), p. 11.

[2] Plusvalor es trabajo excedente, esto es, el valor del producto total de la fuerza laboral empleada más allá del equivalente del tiempo de trabajo socialmente necesario (incluyendo el trabajo doméstico no retribuido de las mujeres), requerido para el mantenimiento de los trabajadores y sus familias.

En el caso de México, la primitiva lucha de clases entre el proletariado y la burguesía inevitablemente se nutrió de las energías de las clases intermedias y de la pequeña burguesía tradicional (dueños o poseedores de sus propios medios de producción, tales como artesanos y campesinos.) Transformó a estos grupos de manera fundamental. La mayor parte de los artesanos y campesinos sufrieron una proletarización, pero algunos individuos "treparon" hasta la burguesía. En este sentido, la estructura de clases era moldeada continuamente por la lucha de clases, aun cuando la lucha de clases estuviera delimitada por la estructura económica.

Este capítulo analiza la evolución de la estructura de clases de México tanto en el campo como en las ciudades en términos de este proceso de formación y transformación de clase. Subyacentes al periodo de lucha de clases desde 1940 hasta la actualidad se introdujeron cambios en la producción capitalista, una segunda ola de "modernización" que siguió a la de 1880-1940. Durante la mayor parte de este periodo, el estado desempeñó un papel mayor y más complejo que el que representó en los días de los "ladrones caballeros" del porfiriato. El estado no sólo regulaba el trabajo (y en menor grado también el capital), sino que también ayudó a crear clases o segmentos de clase. Moldeó o condicionó la estructura de clases y afectó las actitudes de clase y la propia lucha de clases. Tanto si se trataba de campesinos empobrecidos, de habitantes de los barrios bajos urbanos, de trabajadores sindicalizados, de burócratas mal pagados o de tecnócratas influyentes, las clases y grupos sociales de México crecían, declinaban, prosperaban o sufrían en relación con los diversos programas del estado capitalista. En resumen, el estado actuaba como un agente importante de formación o transformación de clase.

Para 1970, las tendencias básicas de la formación contemporánea de clases en México ya estaban establecidas bajo condiciones de la consolidación por parte del estado del capitalismo monopólico dependiente que analizamos en el capítulo precedente. Este capítulo examina tales tendencias básicas: la proletarización del campesinado, así como una "recampesinización" parcial o temporal; un traslape creciente entre diferentes fracciones de la burguesía en gran escala (conocida también como la alta burguesía); el crecimiento de las clases intermedias y su creciente diferenciación interna; el desarrollo de un importante proletariado industrial, con menos de un cuarto del mismo sindicalizado (según estadísticas del gobierno) y la mayoría del mismo mal pagado; explotación laboral en diversas formas, incluyendo la proletarización de la pequeña burguesía tradicional; la fragmentación y atomización de la clase trabajadora como un todo, y la pauperización de la mayoría de los mexicanos, muchos de los cuales emigraban regularmente a Estados Unidos o a las grandes ciudades de México, que empezaban a llenarse de vías rápidas tanto como de barrios bajos. El agotamiento del modelo de "desarrollo estabilizador" y su eventual sustitución por el modelo "neoliberal", así como el surgimiento de crisis económicas y políticas periódicas que comenzó a fines de los años sesenta, contribuyeron a la aceleración de estas tendencias.

Desgraciadamente, las clases sociales no eran reconocibles por las cifras de distribución y de ingreso. Las categorías utilizadas por los expertos en estadística obtenidas de los datos de los censos, borraban frecuentemente u oscurecían las líneas divisorias de las clases. Ocultaban el desempleo o los tipos de empleo. Sobre todo, no eran capaces de captar la complejidad de las estrategias de supervivencia económica adoptadas por las familias obreras, los pueblos rurales, los ejidos o las colonias urbanas (barrios). De hecho, casi todos los que podían trabajar, lo hacían. Para la mayoría de la gente era una cuestión de supervivencia, y hasta cuando todos los miembros de una familia trabajaban apenas sacaban lo imprescindible para sobrevivir. Sin los envíos de dólares de los parientes que trabajaban en Estados Unidos, innumerables familias hubieran sido incapaces de sostenerse.

A la luz de la historia de México examinada en la primera parte y la tradición de sus burguesías de sacar ventaja de grandes reservas de fuerza de trabajo barata, no puede sorprender el hecho de que las principales clases sociales de México siguieran polarizándose después de 1940. De hecho, la brecha mayor en la estructura social de México seguía siendo entre ricos y pobres, con un número creciente de familias de clases intermedias década tras década cayendo del lado más pobre de la división, tal como fue el caso en 1910. A medida que la producción, la distribución y el intercambio se volvían más uniformes y centralizados durante el desarrollo capitalista hacia un capitalismo monopólico, y a medida que el capitalismo integraba cada vez más sus apuestas económicas con las de la burguesía y el estado mexicanos, iba revelándose una línea divisoria muy clara que polarizaba las clases. En uno de los lados de la línea estaba el trío del imperialismo/estado/burguesías interna y externa; del otro lado se concentraban gran parte de las clases intermedias mal pagadas y las masas de obreros y campesinos, así como los subpagados, subempleados o desempleados.

La conciencia de clase, la composición de las alianzas de clase y las movilizaciones sociales eran fenómenos políticos que se alteraban de crisis en crisis en la historia de México de maneras muy complicadas. Sin embargo, la "crisis" en México no era más "permanente" que la misma "Revolución" mexicana. Lo que sí era permanente, sin embargo, era el conflicto de clases, a veces latente, otras veces abierto, o con algo de ambos.

Este capítulo describe las principales tendencias en la formación de clase en la sociedad mexicana a partir de 1940, la mayor parte de las cuales estaban ya establecidas en el momento del levantamiento estudiantil de 1968. Incluye algunos de los cambios que afectaron a esas tendencias como resultado del estado radicalmente diferente que las políticas económicas adoptaron primero en los años setenta y luego en los ochenta y noventa. Capítulos posteriores, utilizando los análisis de la estructura de clases que aquí se ofrecen como telón de fondo, examinarán cómo las clases sociales contendían, y cambiaban, como consecuencia de la crisis política de 1968 y de las nuevas políticas económicas que la sucedieron.

ESTRUCTURA DE CLASES RURAL

Las grandes diferencias en los estándares de vida entre la ciudad y el campo hicieron que un historiador se refiriera en 1965 a la "desequilibrada revolución" de México.[3] Para 1980, en las zonas rurales, la escolaridad alcanzaba sólo 1.3 años, los servicios médicos eran mínimos, el 62% de los habitantes carecía de agua potable, el 80% de los trabajadores adultos sufría de desnutrición, y el 75% de la fuerza laboral recibía un ingreso anual total muy abajo del equivalente del salario mínimo legal. Dos tercios de los desempleados del país residían en el México rural.

En el ámbito rural existían grandes disparidades regionales también en cuanto a riqueza. Diez estados, la mayor parte de ellos en el sur y centro de México, representaban el 80% del desempleo rural y la mayoría de la emigración.[4] La región sur-central (Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala) contaba con el 60% de los minifundios, que cultivaban principalmente maíz. En el noroeste, por otra parte, la agricultura capitalista en gran escala estaba firmemente arraigada y existía un proletariado rural "permanente", complementado por mano de obra temporal migratoria.

Por consiguiente, las generalizaciones acerca de la estructura de clases rural eran difíciles en el mejor de los casos. Aun así, la tecnificación de la agricultura posterior a 1940 alcanzó a todas las regiones. En un grado u otro, los campesinos habían sido despojados y ellos junto con sus tierras habían sido subordinados a las necesidades del capital. Además, se daba una extensa destrucción ecológica, no limitada al noroeste. Por ejemplo, la agricultura comercial redujo gravemente las reservas forestales en Tabasco, estado con ricas reservas de petróleo, incluso antes del auge petrolero de fines de los años setenta y el estrago ecológico que ocasionó. Los fertilizantes químicos y los pesticidas asolaron o destruyeron numerosas áreas rurales en México. Como resultado, algunos estados sureños y centrales como Oaxaca y Guanajuato contenían zonas que semejaban paisajes lunares.

Para 1970, la estructura de clases rural era básicamente bipolar: una élite rica y hordas de campesinos pobres y en su mayoría sin tierras. Pero esas apariencias tan obvias disfrazaban una complejidad más dinámica. Las simples fórmulas que subrayaban la "descampesinización" o proletarización de las masas rurales, por una parte, o la perseverancia de tradiciones campesinas comunales, folclóricas o de otro tipo que mantenían al campesinado como una clase única y coherente, por la otra, no permitían los cambiantes patrones de transformación de clases y estratificación interclasista que acompañaron el acelerado ritmo de la capitalización agrícola a partir de 1940. En cualquier proceso de transformación capitalista, la proletarización acompaña a la continuación

[3] Moisés González Navarro, "México: the lopsided revolution", en Claudio Véliz, comp., *Obstacles to change in Latin America* (Londres, Oxford University Press, 1965), pp. 206-29.

[4] México, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. La mayor parte del resto de la emigración provenía de Durango, Veracruz y Zacatecas.

de los cultivos de tipo campesino; esto es, surge una dialéctica de disolución-reproducción del campesinado, siendo la proletarización la tendencia de largo alcance. La dominación capitalista, junto con las condiciones históricas, geográficas o culturales, subraya las formas específicas adoptadas por esta dialéctica.

En términos de ingreso, los campesinos mexicanos se proletarizaron, pero, como ganaban demasiado poco como peones agrícolas, los cultivos de subsistencia vinieron a complementar sus salarios (y no al contrario, como a veces se ha dicho). En otras palabras, el proceso de descampesinización nunca se completó. Incluso los campesinos que frecuentemente emigraban a Estados Unidos trataban de conservar sus parcelas en México, que sus mujeres e hijos seguían cultivando durante su ausencia.

Si bien en 1950 cerca del 85% de los ejidatarios mexicanos obtenían más de la mitad de su ingreso de la agricultura, en 1998 difícilmente había alguno en ese caso. La mayoría se ocupaban en tareas temporales como parte de un proletariado de bajos ingresos. La inmensa mayoría de los predios no producían lo suficiente ni siquiera para proveer al mantenimiento de los dueños de las tierras (o de los arrendatarios). Así pues, la mayoría de los trabajadores rurales literalmente no podían sobrevivir con sólo una actividad, tanto si se trataba de un campesino propietario de una parcela, de un arrendador o mediero o de un proletario.

La mayoría de la población rural "económicamente activa" era un proletariado rural empleado de forma irregular. Estos trabajadores buscaban su salario en el mismo lugar donde vivían, o seguían el rastro de las diferentes cosechas de estado en estado y de cosecha en cosecha, desde tan al sur como Chiapas hasta tan al norte como Canadá. Una minoría —en 1980 una estimación del 12% de la fuerza de trabajo rural, u 800 000 personas— constituía un proletariado rural "permanente", regularmente asalariado aunque subpagado. (Más del doble del número de trabajadores se contabilizaban en 1980 como peones agrícolas empleados ocasionalmente.) En todo y por todo, unos 2.6 millones de personas en el campo eran clasificadas como "proletariado" por el censo de 1980, un número que ascendió hasta 3.3 millones para 1995 (véase el cuadro 14). Muchos de los regularmente asalariados estaban empleados en pequeñas propiedades o parcelas ejidales que daban trabajo a menos de cinco trabajadores. Sus empleadores, debido al bajo nivel de tecnología en las pequeñas parcelas, a veces tenían que aceptar una pérdida precisamente por tener que pagar esa mano de obra alquilada. Para muchos pequeños agricultores, la única alternativa era morirse de hambre.

Ya desde 1980, doce años antes de que una enmienda constitucional eliminara la protección legal a los ejidos, el 80% de los 28 000 ejidos y comunidades indígenas de México no podían seguir manteniéndose solamente de sus cultivos, aunque "legalmente" representaban el 43% de toda la tierra cultivable. Puesto que estos campesinos se veían forzados a arrendar sus parcelas o a emigrar, ellos, junto con otros pequeños propietarios igualmente desesperados, en realidad poseían menos del 30% de la tierra cultivable —y en su mayor parte eran tierras

CUADRO 14
Clases sociales en el campo

	1970	*1980*	*1990*	*1995*
Proletariado	2 449 454	2 642 662	2 448 362	3 332 600
porcentaje	48.9	46.4	46.2	55.6
Campesinado	2 334 760	2 843 844	2 784 225	2 479 763
porcentaje	45.7	49.8	52.5	41.4
Burguesía	127 104	214 321	67 527	179 008
porcentaje	2.4	3.7	1.3	3.0
Total	5 103 519	5 700 827	5 300 114	5 991 371

FUENTES: INEGI, *Censos generales de población y vivienda 1970-1990* y *Conteo de población y vivienda 1995*

NOTA: Los elementos propietarios de tierras, medieros o aparceros han sido incluidos en la categoría "campesinado", aunque la mayor parte de ellos obtienen la mitad de su ingreso de actividades de trabajo proletario; de los propietarios de tierras prósperos, sólo los terratenientes-capitalistas han sido incluidos en la burguesía.

de secano, montañosas, pedregosas, de alto riesgo y nada productivas. Más del 90% de los ejidos eran unidades no colectivas compuestas por minúsculas parcelas individuales. Ya no existía espacio suficiente para que los hijos de los propietarios recibieran alguna parcela; por consiguiente la mayor parte de ellos iba a engrosar las filas del proletariado rural. Esta tendencia empeoró en "la década perdida para el desarrollo" de los ochenta y, a la luz de la enmienda constitucional de 1992 que permitía la venta de todas las tierras ejidales, auguraba el fin de cualquier posible resto de agricultura comunal viable en México.

En 1997, un bien informado líder campesino de setenta y dos años, habitante de un ejido irrigado en las afueras de Morelia, expresó su opinión de que era sólo cuestión de tiempo que acabara de venderse todo el ejido. Los miembros del ejido, la mayor parte de los cuales eran mestizos, estaban endeudados y no podían sacar lo suficiente de sus cultivos. Sus parcelas ejidales contaban con entre dos y cuatro hectáreas por familia, y utilizaban fertilizantes modernos y tractores. El ejido no estaba en tan mala situación como la mayoría. Simplemente no había suficientes industrias en la región para dar empleo a los campesinos. Todas las familias del ejido tenían varios parientes que emigraban regularmente a Estados Unidos. (En una asamblea en la recién construida escuela secundaria del pueblo —edificada principalmente por los mismos ejidatarios, y pagada con los envíos de dólares de sus parientes—, cuando se preguntó a los estudiantes si esperaban emigrar a Estados Unidos una vez terminados sus estudios, todos ellos respondieron afirmativamente.)[5]

Los pocos ejidos que aún quedaban en México con tierras bien irrigadas —normalmente para cosechas de exportación— eran tan eficientes como cual-

[5] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1997.

quiera de sus competidores. En general, sin embargo, empresas estatales como el Banco Rural y otras instituciones de crédito administraban ejidos enteros (y algunas pequeñas propiedades privadas) como si fueran empresas capitalistas de estado, dando a los "propietarios" campesinos parte de la diferencia entre la inversión del banco y el valor de la producción (que en ocasiones era negativa). La mayor parte de los ejidatarios se veían forzados a buscar trabajo asalariado. Esto se debía a que carecían de capital adecuado, o a que el Banco Rural controlaba sus tierras y su trabajo. Además, la corrupción de los funcionarios civiles y el surgimiento de caciques ejidales (líderes locales), vinculados con agroindustrias extranjeras y con intereses políticos, contribuía todo ello a la pobreza de los ejidatarios.

Los agricultores que permanecían en sus ejidos a menudo se sentían también ellos como proletarios. Un grupo de aquellos mismos ejidatarios mestizos de las cercanías de Morelia, Michoacán, se lamentaba así en 1981:

> El Banco Rural es nuestro patrón. Nosotros somos los trabajadores y ni siquiera tenemos salario ni sindicato. Nos sentimos más explotados por el banco que si fuéramos oficialmente sus empleados. Nuestras ganancias de la agricultura son mucho menores a lo que ganaríamos si fuésemos empleados del banco.[6]

Los elementos campesinos y proletarios que estaban en peores condiciones eran los indios y las mujeres. El censo contó a los indios como un 14% de la población de México, basándose en su capacidad para hablar una de las docenas de dialectos o lenguas indígenas. Mucha gente pobre, sin embargo, era considerada india debido a su trabajo o a su situación económica, de manera que algunos cálculos estadísticos de la porción indígena de la población mexicana llegaban hasta el 30%. Por otra parte, algunos mestizos prósperos se consideraban a sí mismos como blancos, lo que aumentaba la proporción de blancos desde un 1% hasta tanto como un 15%. Una vez más, los factores de clase determinaban la designación o la percepción racial/cultural.

Un 80% de los indios de México eran trabajadores agrícolas, y más de la mitad de éstos carecían de tierras. La tierra que todavía poseían era la peor imaginable y seguía experimentando intrusiones y reducción en beneficio de extraños, especialmente desde que se descubrió petróleo en ciertos lugares (Veracruz, Tabasco, Chiapas). En 1975, para citar sólo un ejemplo, los indios de la comunidad de San Francisco en Chiapas, relataron a los periodistas cómo los soldados del 46 Batallón (con la aprobación de las autoridades locales) los habían asaltado, habían quemado sus casas y los habían arrojado de sus tierras —que fueron luego entregadas a otros no-indios que tenían conexiones políticas.[7]

Hasta el levantamiento zapatista de 1994, la mayoría de los indios estaban dominados por un sistema de caciquismo externo, mediado a través de líderes

[6] Cockcroft, notas de campo inéditas, 1981.

[7] *Excélsior*, 15 de julio de 1975, resumido por Philip Russell, *Mexico in transition* (Austin, Colorado River Press, 1977), p. 112.

comunales cooptados. Los indios también estaban excluidos del gobierno, aunque en 1980 el PRI y el Partido Comunista contaban con un diputado indígena cada uno de ellos en el Congreso. La rebelión zapatista provocó que casi todos los grupos lingüísticos indígenas de la nación se agruparan tras el llamamiento a la autonomía de las comunidades indígenas. Antes de la revuelta, el INI (Instituto Nacional Indigenista) y la CNC (Confederación Nacional Campesina) del PRI, a pesar de la resistencia indígena, impusieron a candidatos pro gubernamentales en las elecciones al Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Este Consejo proclamaba representar a la población india, un tercio de la cual no habla castellano. Sólo una cuarta parte de los niños indígenas asisten a la escuela. Los indios han exigido repetidamente reformas en la poca educación que reciben: más escuelas, más maestros de las propias comunidades lingüísticas indígenas, y que los maestros ya no peguen a los niños que no comprenden o hablan el castellano correctamente. El levantamiento zapatista ayudó a la mayoría de los indígenas de México en su avance hacia una unidad nacional y acogió todas sus demandas, especialmente la exigencia de tierras y recursos adecuados para una agricultura próspera.

Tanto si son indias como mestizas, las mujeres de México experimentaban una doble explotación (y una triple explotación en el caso de las que trabajan en la producción de bienes de capital o bienes de consumo). En el campo, lo mismo que en los barrios bajos urbanos, las mujeres se ocupaban de unos pocos animales o un pequeño huerto, hacían o cosían ropa, atendían a los niños, preparaban las comidas, limpiaban la casa y generalmente vigilaban las necesidades de subsistencia de la familia: todo esto sin paga. Los salarios que los capitalistas pagaban a los trabajadores rurales o urbanos, hombres o mujeres, supuesta pero no realmente cubrían las necesidades básicas para mantener a los trabajadores junto con sus familias —la reproducción constante de la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico no asalariado de las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el sostenimiento de los trabajadores y la aculturación y desarrollo de futuros trabajadores, incrementaba notablemente el plusvalor extraído por los capitalistas de los trabajadores —precisamente porque este trabajo de las mujeres no era remunerado.

Algunas veces, el patriarcado reforzaba esta situación mediante la ley. Durante muchos años los Artículos del 168 al 170 del Código Civil para el Distrito Federal y los Territorios permitían que una mujer tuviera un empleo asalariado sólo si continuaba su papel legalmente asignado de "atender la casa" y si su marido sentía que ella seguiría cumpliendo con sus obligaciones domésticas. Sin embargo, a medida que las demandas de derechos iguales para las mujeres fueron adquiriendo fuerza, y después de que el PRI perdiera su mayoría en el Congreso en las elecciones de medio plazo de 1997, el Congreso mexicano promulgó leyes para prohibir la violación conyugal y empezó a debatir otras reformas del sistema patriarcal, incluyendo una ley que establecía igualdad de oportunidades para las mujeres.

Con todo, las buenas leyes no eran garantía para que cesaran las malas prác-

ticas. En 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó los resultados de su investigación sobre violencia y abuso contra las mujeres en América Latina. Encontró que México estaba a la cabeza, donde un 70% de mujeres experimentaba esos malos tratos. Además, había la necesidad de aborto legal y seguro, que estaba prohibido en México excepto en casos de violación o para salvar la vida de la madre. En México se producen más de un millón de abortos al año, muchos de ellos llevados a cabo en cuartos clandestinos arruinando las vidas de miles de mujeres empobrecidas.

Entre las mujeres de México, las más explotadas son las campesinas. La mayor parte de ellas lleva una vida cruel, sometidas rutinariamente a las golpizas de sus hombres, recluidas en sus casas siempre que es posible, y dando la vida (o la muerte) cada dieciocho meses más o menos. A pesar de sus campañas por el control de la natalidad, el gobierno reconocía que el 10.5% de las mujeres mexicanas no están familiarizadas con los métodos anticonceptivos.

Las mujeres campesinas trabajan en el cuidado de los niños, la preparación de las comidas, en el campo o las artesanías y así por el estilo, excediendo el trabajo realizado por los hombres. Puesto que tantos de sus compañeros masculinos emigran, a menudo son cabezas de familia sin los derechos sociales asociados a esta función. Muchos mexicanos, tanto del campo como de las ciudades, eran incapaces o carecían de la voluntad de imaginar otra alternativa para las mujeres distinta de las que derivan del patriarcado y el capitalismo en constante renovación.

Para mejorar su situación, un número creciente de mujeres mexicanas empezó a emigrar. En 1998 se estima que representaban el 37% de la migración interna y más del 20% de la emigración a Estados Unidos después de 1965. El economista David Barkin concluía que la mitad de los estimados 40 mil millones de dólares de los envíos anuales de los emigrantes en 1996 provenían de la migración interna.[8]

La migración y el empleo ventajoso fueron factores importantes detrás del hecho de que las mujeres mexicanas empezaran a mostrar más autonomía frente a los miembros masculinos de sus familias. Si bien esto contribuyó de alguna manera a un rompimiento de las estructuras familiares tradicionales, ese proceso había comenzado ya durante el auge de la emigración masculina y del abuso contra las mujeres. Al mismo tiempo, como advirtieron muchos investigadores, la dedicación de las mujeres mexicanas a sus familias frente a las dificultades económicas fortalecieron la familia nuclear e hicieron que la unidad del hogar fuese central en la lucha de clase por la supervivencia. Este desarrollo incluso contribuyó a que los hombres ayudasen un poco más en las tareas domésticas, menos por adoptar nuevos valores que por necesidad económica.

Naturalmente, las contradicciones y ambivalentes actitudes tanto entre mujeres como entre hombres abundaban. El proceso de cambio familiar en Méxi-

[8] David Barkin, mesa redonda en una reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos celebrada en Guadalajara, México, 1997.

co era dialéctico y complejo. Al tiempo que los sistemas de parentesco extenso se iban convirtiendo en algo del pasado y había evidencias de tensiones familiares cada vez más agudas, la unidad familiar frente a la crisis económica era también bastante común. Además, un tercio o más de los hogares de México estaban encabezados por mujeres.

Por lo tanto, un análisis serio de las clases en México tendría que incorporar el género y examinar profundamente las "estrategias familiares de supervivencia" que generaban las unidades familiares, incluyendo las de los hogares encabezados por mujeres. Múltiples tipos de trabajo productor de ingreso componían el común denominador de estas estrategias, a menudo con las mujeres en la delantera. Una mejor comprensión de estas tendencias intra-clases exigía estrategias generales más amplias para el cambio político.

La mayor parte de los habitantes del campo en México sufrían las consecuencias de la falta de tierras, el minifundismo y las inadecuadas oportunidades de empleo. A principios de los años ochenta, de aproximadamente 6 millones de campesinos y trabajadores adultos rurales, 3 millones estaban permanentemente desposeídos de tierras y tenían que alquilar su fuerza de trabajo o permanecer desempleados. Cerca de tres cuartos de millón poseían menos de una hectárea de tierra, y un número equivalente poseía menos de cinco hectáreas.

Menos de una cuarta parte de los pequeños propietarios privados tenían como actividad principal el cultivo familiar. La mayoría de estos pequeños propietarios privados y cerca de 2 millones de ejidatarios trabajaban sus propias tierras, bien fuese para ellos mismos como parcelas de subsistencia o en beneficio de personas a las que rentaban la tierra. Números menores de colonos, nacionaleros (ocupantes de tierras estatales cuyo estatus no había sido regularizado) y avecindados (invasores aceptados por la comunidad) también intentaban sobrevivir de esta manera. Semejante "agricultura" ayudaba a complementar el ingreso ganado temporalmente como jornaleros o con las artesanías domésticas, el pequeño comercio, la minería u otras actividades.

En efecto, el cálculo usual de 5 millones de campesinos sin tierra a principios de los ochenta era realista. Un minúsculo porcentaje de la población rural se beneficiaba de las impresionantes estadísticas de producción resultado de la creciente prosperidad de la agroindustria y el neolatifundismo de México.

Si bien todas las estadísticas están sujetas a errores, y aunque hubo cambios considerables entre los grupos no burgueses en el campo, las cifras del cuadro 14 reflejan tanto las proporciones de las clases como la constante proletarización dentro de la estructura de clase rural. Si dividimos al campesinado entre "ricos", "medios" y "pobres", entonces los campesinos ricos constituían cerca del 1% de la población rural como un todo, los campesinos medios cerca del 4% y los pobres (incluyendo los pauperizados) cerca del 33%. Si sumamos los campesinos pobres y el proletariado rural, como hace la mayor parte de los investigadores, entonces más del 92% de la población rural era de proletarios, incluyendo el trabajo familiar no pagado, tal como el de las mujeres y sus hi-

jos (futuros proletarios).[9] Los campesinos pobres estaban frecuentemente en peor situación que los trabajadores sin tierras asalariados y los jornaleros; eran aparceros, medieros, arrendatarios y dueños de pequeñas parcelas cuyo trabajo asalariado representaba la mayor parte de su ingreso y cuyos salarios financiaban los insumos para sus parcelas de subsistencia.

Toda la sociedad rural estaba notablemente estratificada, y cada una de sus capas tendía a explotar a las capas inmediatamente inferiores. Por ejemplo, los campesinos "medios" estaban generalmente a merced de la burguesía para la obtención de créditos, insumos y estatus político y social, y ellos a su vez explotaban a los campesinos y ejidatarios menos prósperos, que a menudo constituían su mano de obra en las épocas de la siembra y la cosecha. Por lo común tenían una relación directa y claramente antagonista con la burguesía rural y conflictos menos serios con los campesinos pobres y proletarios rurales —con quienes compartían el odio de clase hacia los grandes señores burgueses. De forma similar, el escaso número de ejidatarios y de pequeños propietarios que realmente iban prosperando procuraba controlar a los campesinos "medios" y explotaba también a los elementos más pauperizados de la sociedad rural. Y aunque de forma menos clara y antagónica, una serie de contradicciones —de raza, género, lenguaje y costumbres regionales— separaba a millones de habitantes rurales empobrecidos, complicando todavía más la lucha de clases. Además, tales contradicciones a veces se volvían muy antagónicas, como en las disputas por tierras entre diferentes pueblos indígenas. Estos conflictos incluso enfrentaban a facciones del mismo grupo lingüístico unas contra otras, como yo mismo pude observar entre los tarascos de Michoacán en los años ochenta.

De aquellos campesinos que aún poseían tierras, aunque fuese una diminuta parcela ejidal o una de propiedad privada, cerca del 90% calificaba como minifundista empobrecido: agricultores de subsistencia arruinados incapaces de producir lo suficiente para alimentar a sus propias familias. La monopolización de la tierra, la maquinaria, los créditos y los mercados por el gran capital determinaban las condiciones de la producción del pequeño propietario. Pocos campesinos eran capaces de prosperar ni siquiera como *kulaks*, y el movimiento de los productores rurales propietarios seguía el camino de la producción de subsistencia o del proletariado o de ambos, con sólo un puñado de ellos capaz de ascender hasta los grados inferiores de la burguesía rural. Las tradiciones de cultivo colectivo persistían en algunas partes de México, especialmente entre los indígenas, pero el colapso del apoyo estatal a la agricultura ejidal hizo extremadamente difícil para los campesinos tomar esa opción con alguna esperanza de mejorar su suerte.

En general, el proceso de transformación de clase en el México rural fue el empobrecimiento de las masas y su recurso a cultivar una parcela de subsisten-

[9] Mujeres y niños no eran contabilizados en la mayoría de las compilaciones estadísticas, por más que los estudios de casos demostraban que constituían la mitad de la fuerza laboral en las granjas agrícolas de frutas y vegetales del norte de México. Véase John Warnock, *The other Mexico: the North American triangle completed* (Montreal, Black Rose Books, 1995), p. 205.

cia, alquilándose ellos mismos como jornaleros, y utilizando las redes comunitarias, ejidales o de parentesco para apoyarse mutuamente. Esto llevó a los sociólogos a ver la mayor parte de la fuerza de trabajo rural como simultáneamente proletaria y campesina. Aunque existía una línea continua desde el pequeño campesino tradicional hasta el moderno proletario totalmente representativo, muchos trabajadores rurales realizaban ambos tipos de actividad. Aunque el ingreso procedente del trabajo asalariado (esto es, de la actividad proletaria) era en la mayoría de los casos un componente más importante de la supervivencia individual, familiar o de grupo que la agricultura de subsistencia o que otras formas de "autoexplotación" campesina doméstica (tejer, etc.), sigue en pie el hecho de que la combinación de ambas actividades definía a estos trabajadores como una clase diferente tanto del campesinado tradicional como de un proletariado completamente moderno.

Por consiguiente, cuando aquí se utiliza el término *campesino* incorpora esta múltiple actividad de la mayoría de los trabajadores rurales y reconoce que —dado el alto costo de los insumos técnicos de producción para el mercado moderno y la falta de disponibilidad de trabajo asalariado durante el año completo— éstos tenían que reforzar las demandas de tierra tradicionales al estilo campesino simplemente para reproducirse ellos mismos como clase. Como observó en cierta ocasión Arturo Warman, "Para ser 'modernos' y propagar árboles frutales injertados, usar fertilizantes químicos, cosechar alimentos demasiado caros para poder consumirlos ellos mismos, los campesinos tenían que volverse más 'tradicionales.'"[10] En otras palabras, para llegar a fin de mes, los elementos rurales tenían que regresar a la producción artesanal o a la agricultura de subsistencia, para lo cual necesitaban materias primas adecuadas, tierra y agua.

Así pues, la recampesinización acompañaba a la descampesinización. Un sociólogo rural describió a la mayoría de los dedicados a tales actividades campesinas domésticas como "proletarios disfrazados de campesinos".[11] La razón era que formaban parte de un contexto capitalista más grande que generaba su explotación como trabajadores agrícolas subpagados y su recurso a la autoexplotación como cultivadores de subsistencia o productores de artesanías domésticas para los objetivos de supervivencia. Esta doble explotación, como veremos más adelante, se extendía a los subempleados urbanos y también a algunos de los empleados regularmente. Muchos obreros fabriles aumentaban sus ínfimos salarios gracias a los obsequios semanales de alimentos de sus parientes de áreas rurales. En lo que el antropólogo francés Claude Meillassoux llamó "economías domésticas",[12] la autoproducción de comida, habitación primitiva, vestidos o muebles, y otras necesidades por trabajadores rurales y urbanos, especialmente mujeres, ofrecía al capital unas cantidades de fuerza de trabajo por las que el capital nunca tenía que pagar un salario, o bien ofrecían

[10] Arturo Warman, *...y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el estado nacional* (México, Ediciones de la Casa Chata, 1976), p. 15.

[11] Véase Luisa Paré, *El proletariado agrícola en México* (México, Siglo XXI, 1997), pp. 176 ss.

[12] Claude Meillassoux, *Mujeres, graneros y capitales* (México, Siglo XXI, 1977).

salarios ridículos para emplearlos cuando resultase conveniente. En México, los altos niveles de automantenimiento de los trabajadores en general ayudaban a llenar funciones que el capitalismo y su estado evitaban o apenas contemplaban, particularmente la función de seguridad social.

Un resultado del proceso combinado de proletarización y recampesinización fue que las demandas campesinas fueron equiparándose cada vez más a las proletarias. Por ejemplo, en mayo de 1978 unos 5 000 trabajadores agrícolas, encabezados por una federación campesina regional, lograron cerrar con sus huelgas algunas de las agroindustrias de Sinaloa. De forma similar, mujeres trabajadoras de la boyante industria procesadora de alimentos, la mayoría de ellas procedentes de familias campesinas, empezaron a luchar por sus derechos proletarios en los años sesenta, cuando conquistaron el derecho a sindicalizarse. Entonces la CTM se hizo presente para imponer disciplina laboral. Las mujeres reanudaron su lucha a principios de los ochenta, lanzando una oleada de huelgas contra Kellogg's, General Foods y Coca-Cola a pesar de la alianza entre la CTM y las transnacionales. Comprendiendo que su lucha era de carácter internacional, algunas de las huelguistas hicieron contactos con representantes sindicales de Estados Unidos.

En uno de los primeros ejemplos de trabajadores agrícolas de ambas naciones que lograsen internacionalizar con éxito sus luchas, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Obreros Agrícolas (SNTOAC) de la CTM de Sinaloa prestó su apoyo a una prolongada huelga dirigida por el Farm Labor Organizing Committee (FLOC), sindicato del suroeste de Estados Unidos compuesto principalmente por trabajadores migrantes mexicanos de Texas. Cuando la Campbell Soup Company empezó a amenazar con trasladar sus operaciones del medioeste a Sinaloa, los dos sindicatos elaboraron una negociación colectiva conjunta que ayudó a ganar la huelga del FLOC en 1986-1987. El FLOC siguió imponiéndose y ganando numerosas elecciones sindicales por todo el medio oeste y acabó afiliándose a AFL-CIO.

Sin embargo, las demandas proletarias de los trabajadores rurales estaban a su vez relacionadas con su necesidad de tierras productivas. En un estudio de caso del valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo del México central, la socióloga Luisa Paré encontró que el 72% de quienes buscaban tierras o agua eran proletarios rurales, como también lo era el 68% de quienes demandaban mejores salarios, trabajo seguro o mejores condiciones laborales.[13] Paré encontró que la lucha por la tierra de los proletarios era una forma racional de asegurar una fuente de empleo o de encontrar una fuente de ingreso más firme. Actitudes similares fueron encontradas por algunos investigadores universitarios en 1981 cuando entrevistaron a familias campesinas de Michoacán cuyos miembros masculinos adultos emigraban anualmente a Estados Unidos debido a la falta de tierras o de empleos suficientes.[14]

[13] Paré, *El proletariado*.

[14] Véase Cockcroft (con el Grupo de Investigación de la Migración de la UAM-Azcapotzalco), *Trabajadores de Michoacán: historia de un pueblo migrante* (IMISAC-Ediciones "Contraste", 1982).

La lucha por tierras productivas, pues, no era simplemente una terca persistencia de las costumbres campesinas "precapitalistas" o de un "simple modo de producción de mercancías" (agricultura de subsistencia, artesanía). Más bien, era una reacción contra las fuerzas del capitalismo moderno que desarraigó formas anteriores de agricultura de pequeña propiedad o comunitaria, sólo para recrearlas sobre nuevas bases. Un abundante suministro de mano de obra reclutable a un costo mucho menor que el salario medio nacional iba obviamente en interés del capital. El capital —o el estado al servicio de los objetivos del capital— utilizaba su control sobre los utensilios de la agricultura moderna y las redes de crédito y comercialización para apropiarse del grueso de cualquier excedente que pudieran producir los ejidatarios, los agricultores de subsistencia, los aparceros y arrendatarios. Mediante una miscelánea de mecanismos de control, el capital podía al mismo tiempo proletarizar y "recampesinizar" a la fuerza de trabajo rural, esto es, mantenerla a disposición del capital.

Además, el capital convertía a los campesinos y a todos los trabajadores rurales, tanto si eran asalariados o empleados de planta, en consumidores "modernos", haciendo económicamente imposible para ellos el retornar a la producción "precapitalista" como tal. Ahora tenían que obtener algunas de sus necesidades básicas y vender cualquier excedente que pudieran generar en un mercado que, por más remoto que estuviera respecto de ellos, estaba vinculado al proceso nacional e internacional de acumulación de capital. Bien fuese comprando azúcar blanco refinado, refrescos embotellados, los panes cargados de conservadores de Wonder Bread (una subsidiaria de International Telephone and Telegraph) o tortillas empacadas, los productores campesinos y sus empobrecidos parientes urbanos estaban pagando más por una calidad inferior, cuando por generaciones consumieron la mucho más saludable "panela" o "piloncillo" (un azúcar natural), leche y maíz molido. Para hacer esto necesitaban ahora un ingreso mayor en dinero. Así, la "reproducción" de los campesinos de agricultura de subsistencia y de proletarios rurales (y, como veremos más adelante, de los pobres urbanos), a través de múltiples actividades económicas, era impuesta por la dominación del capital.

"Invertir en los pobres"

Los representantes del capital monopólico reconocían que sus estrategias de desarrollo (tales como la revolución verde) en última instancia producían hambre y potenciales rebeliones entre los productores rurales. Comenzando a fines de los años sesenta y principios de los setenta, el Banco Mundial, líder del grupo de empresas de desarrollo internacional patrocinadas por el capital monopólico, junto con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) estadunidense, supuestamente "cambió de rumbo". Como solución a los problemas agrarios que en primer término ellos mismos ayudaron a generar, empezaron a promover la entrega de todavía más insumos técnicos a los agricultores de subsisten-

cia con el fin de "combatir la pobreza". Como en el caso de la revolución verde, eligieron a México como proyecto piloto. Esta vez, sin embargo, en vez de desposeer a los campesinos e incorporarlos como mano de obra libre a las para entonces nutridas filas del proletariado rural y urbano, ahora buscaron mantenerlos produciendo en sus pequeñas parcelas como mano de obra sometida y supervisada.

Como explicó el director de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial, Montague Yudelman: "El sector tradicional de pequeños agricultores tiene que convertirse en productor de excedente agrícola en vez de ser proveedor de mano de obra excedente, como ha sido en el pasado."[15] De esta manera, se esperaba que los agricultores de subsistencia y los productores de artesanías domésticas sirvieran como productores de mercancías baratas para los monopolios de distribución capitalistas, y como reproductores esenciales no asalariados de fuerza de trabajo. En realidad, según el testimonio del propio Banco Mundial, las parcelas de subsistencia de temporal, no irrigadas, ya estaban generando cerca de la mitad del producto agrícola total de México, proporcionando alimentos para el 87% de todos los campesinos.

Este nuevo enfoque del Banco Mundial representaba un intento por mantener a los campesinos produciendo en la tierra, y obtener sus excedentes de producción de alimentos y artesanías mediante el control del mercado para la distribución y la venta de semillas, fertilizantes, insecticidas, maquinaria y la provisión del crédito. El objetivo, en palabras del Banco, era "llevar a los agricultores desde la agricultura de subsistencia a la comercial [...] en la forma de un aumento de la comercialización de los productos agrícolas y de insumos técnicos y servicios".[16] La idea era evitar la fuga de insumos y recursos técnicos a las grandes empresas, para mejor construir una clase más rica de "agricultores familiares", y para mantener un "equilibrio dinámico" de los diferentes tipos y tamaños de unidades agrícolas —lo que el Banco esperaba que podría mitigar el hambre, la polarización de clases y el peligro de revolución. La estrategia fue conocida, algo cínicamente, como "la inversión en los pobres".

El compromiso del Banco Mundial, el gobierno mexicano, y otras agencias de desarrollo para "invertir en los pobres" en el México rural resultó verdaderamente gigantesco. Durante algún tiempo, la derrama de dinero fresco mantuvo a los campesinos atados a la tierra, como lo hizo la estructura de salarios bajos que llevó a muchos campesinos a "recampesinizarse" y a un breve periodo de populismo estatal en los años setenta. Hubo una momentánea nivelación de las tendencias de proletarización para los setenta y ochenta, como aparece en el cuadro 14.

Incluso los menos reconocidos entre los pobres —las mujeres— fueron animadas a producir más. Como indicaba un documento de AID:

[15] Citado en Cheryl Payer, "The World Bank and the small farmer", *Monthly Review* 32, núm. 6 (noviembre de 1980), p. 35.

[16] *Ibid.*

> La contribución [de las mujeres] a la producción debe ser estimulada [...] Estados Unidos reconoce que en los países en vías de desarrollo las mujeres ya poseen habilidades en la producción, procesamiento y comercialización agrícola que proporcionan una base amplia e importante sobre la cual edificar [...] [Estados Unidos favorece] patrocinar actividades económicas de mano de obra intensiva para proporcionar oportunidades de obtención de ingresos; aumentar la productividad mediante la introducción de tecnologías apropiadas, créditos y otros insumos; [...] dando a los individuos control sobre su propia reproducción.[17]

Más que probablemente, el control sobre la reproducción contemplado por AID era el control de la natalidad (o esterilización, tan frecuentemente financiada por AID) y no el control sobre los medios económicos de producción y reproducción de la fuerza de trabajo como tal. Con el fin de evitar dificultades económicas y las posibles hambrunas, esto es, para controlar sus propias vidas y el tamaño de sus familias, las mujeres pobres y de clase obrera de México habían venido demandando cada vez más una serie de métodos de control de la natalidad, incluyendo la legalización del aborto. Sin embargo, la política de control de población de AID y otras agencias occidentales a menudo estaba más al servicio de los intereses de las compañías farmacéuticas que al de las mismas mujeres. Por ejemplo, a pesar de la prohibición de la Food and Drug Administration del Depo-Provera (una forma sintética de la progesterona) para uso contraceptivo en Estados Unidos, AID se convirtió en uno de los principales proveedores de las inyecciones de Depo-Provera para el control de la natalidad en México y otras naciones del tercer mundo. La inyección inhibía la ovulación por un lapso de tres a seis meses, pero algunos experimentos en animales habían mostrado que podía provocar cáncer y otros efectos laterales mortales, razón por la que fue prohibida en Estados Unidos. Al contar con muy pocas opciones distintas, las mujeres de México a menudo recibían con agrado las inyecciones de Depo-Provera, que ofrecían las ventajas de efectividad a largo plazo y de no tener que depender de sus poco confiables compañeros masculinos para limitar el tamaño de la familia.

A principios de los setenta, el Banco Mundial y la Comisión del Río Papaloapan de México lanzaron el primer proyecto piloto en gran escala de "inversión en los pobres", conocido como "Pider". Asistidos por bancos locales, compañías de seguros, la Conasupo, élites provinciales y la agroindustria moderna, Pider comercializó con éxito una zona remota de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz aprovechando la energía del río Papaloapan y el trabajo de 1.5 millones de miembros de familias campesinas de las montañas. Pider estableció agroindustrias para procesar las cosechas de frutas, vegetales y azúcar producidas por la mano de obra campesina. Una minoría selecta de campesinos se convir-

[17] AID, US Delegation, World Conference on Agrarian Reform and Rural Development, Roma, 12-21 de julio de 1979, "Integration of Women in Development" (mimeografiado), 24 de mayo de 1979.

tieron en prósperos *kulaks*, mientras que se extendía una red de tecnócratas pequeñoburgueses, comerciantes e intermediarios. Pero a pesar de las promesas de Pider de beneficiar a los pobres, la mayoría de los campesinos se resistían a las presiones de los ingenieros para que cultivasen nuevas cosechas y utilizaran nuevos insumos técnicos, no porque fuesen tradicionalistas o "retrógrados", sino porque muy pronto aprendieron que las consecuencias eran grandes deudas, pérdidas financieras y la reducción de sus tierras. Cuando fracasaron los intentos de sabotear los planes del Pider, muchos campesinos se retiraron a sus antiguos cultivos de las laderas, en donde al menos sabían que podrían sobrevivir. Finalmente, la mayor parte de los campesinos fueron introducidos en los planes del Pider como obreros o productores de alimentos. Se generaron inmensas cantidades de productos alimentarios baratos, pero los campesinos quedaron en condiciones todavía peores —viéndose obligados a aumentar su agricultura de subsistencia únicamente para mantenerse.[18]

Así, la estrategia de "invertir en los pobres" perpetuaba la recampesinización precisamente porque —en palabras de la socióloga alemana Veronika Bennholdt-Thomsen— "no es la falta de integración del mercado, sino más bien su incremento, lo que conduce al empobrecimiento de los campesinos y a un retroceso hacia el autoconsumo (no a su persistencia)".[19] La participación del gobierno mexicano en tales esquemas ligó a los campesinos a los aparatos del estado, impidió su auto-organización e intensificó su división del trabajo, elevando de esta manera su rendimiento y extendiendo el alcance del potencial conflicto de clase interno.

En la década neoliberal de los noventa, el Banco Mundial siguió teorizando acerca de "tener como objetivo la pobreza". Sin embargo, invirtió menos que nunca antes en programas dirigidos a ayudar a los pobres. Abogaba por la privatización de los sistemas de seguridad social y por la delegación de tareas anteriormente realizadas por el estado a los gobiernos locales o a organizaciones, incluyendo ONG (organizaciones no gubernamentales).

De manera no coincidente, la presencia de trabajadores asalariados permanentes en el campo de México se concentraba por aquel entonces no sólo en el noroeste sino también en las áreas meridionales supuestamente "atrasadas" que habían recibido esta nueva infusión de capital estatal e internacional: Puebla, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas y partes de Veracruz, Morelos y Guerrero —todas ellas con una falsa reputación de estar sumidas en economías campesinas "precapitalistas". En el sector cafetalero, por ejemplo, en donde los propietarios pequeños o medianos tradicionalmente manejaban gran parte de

[18] Hannes Lorenzen, "Investment in the poor: a World Bank project in Mexico", Rome Declaration Group, Gartenhofstrasse 27, Zurich, 1980 (mimeografiado), y John W. Barchfield, "The structure of power and the deformation of agrarian reform in Mexico", *Revista del México Agrario* 14 (1981). Véase también "Rethoric and reality: the World Bank's new concern for the poor", NACLA *Report on the Americas* 29, núm. 6 (mayo-junio de 1996).

[19] Veronika Bennholdt-Thomsen, "Investition in die Armen. Zur Entwicklungsstrategie der Weltbank", *Lateinamerika, Analysen und Berichte* núm. 4 (1980).

la cosecha, el instituto estatal del café había fracasado en su intento por sacar a los cosechadores y cultivadores marginales de la sobrexplotación que padecían. El instituto y una red de transnacionales, grandes exportadores de café, la burguesía agraria media, algunos grandes propietarios capitalistas y los intermediarios comerciales habían mantenido a la mayoría de los trabajadores del café (muchos de los cuales eran mujeres indígenas) en una pobreza abyecta. Unos 25 000 tzotziles, tzeltales y mames habían cosechado las plantaciones propiedad de colonos alemanes de Soconusco, Chiapas, mientras que un número semejante de nahuas, totonacas y otomíes de la sierra norte de Puebla habían recogido las cosechas de La Unión en granjas modernizadas de cien hectáreas cada una.

Esta importante fuerza de trabajo fue complementada en los años setenta y ochenta por 30 000 trabajadores inmigrantes "indocumentados", la mayor parte provenientes de Guatemala pero también de El Salvador, que recibían un mezquino jornal de 2 dólares por jornadas de 13 horas. Mientras que Nestlé y General Foods dominaban el mercado doméstico del café instantáneo, Folgers (Procter & Gamble), Coca-Cola y Anderson Clayton representaban una sexta parte del enorme comercio de exportación de café mexicano. (Debido a las heladas en Brasil a fines de los setenta, el café mexicano ganó momentáneamente un segundo lugar detrás del petróleo en exportaciones.)

De forma semejante, la nacionalización de la industria procesadora de tabaco en los setenta hizo muy poco por alterar la explotación de los cultivadores y cosechadores por los intereses comerciales y extranjeros, con los que la nueva empresa estatal tenía tratos. Los ejidatarios mestizos cultivadores de tabaco explotaban a su vez a los indios y demás jornaleros migrantes que se encargaban de la recolección en la época de la cosecha. Patrones similares existían en la industria del henequén dominada por el estado en Yucatán. También existían en la industria azucarera de influencia estatal en Morelos y otros estados meridionales y costeros.

Tales fuerzas del capitalismo moderno respaldado por el estado convertían el campo mexicano en un cuadro de empobrecimiento y violenta lucha de clases, reforzada por el comportamiento sin escrúpulos de los burócratas del gobierno y de los intermediarios comerciales que explotaban a los campesinos. No eran raros los casos en que un intermediario, conocido como "coyote", compraba maíz a un agricultor de subsistencia a un precio muy por debajo del mínimo federal y luego, durante una época de escasez, lo volvía a vender a aquel mismo campesino a un precio 200 veces por encima de lo que antes pagó por él. Los más empobrecidos se veían reducidos a situaciones propias de la edad de piedra: mujeres con sus hijos cazando pequeños animales o recolectando frutos y hierbas silvestres en las laderas de las colinas o, cuando emigraban a las ciudades, rebuscando en los vertederos de basura en donde comunidades enteras construían chozas, revueltos con los perros vagabundos y las ratas.

A simple vista, la estrategia de "invertir en los pobres" para el México rural, había fracasado. A fines de los años ochenta, cuando resultó obvio que el neo-

liberalismo había conducido a depresiones económicas masivas en América Latina ("la década perdida para el desarrollo"), se introdujo una nueva estrategia conocida como "desarrollo sustentable". A medida que los bosques de todo el mundo desaparecían y que iban empeorando los problemas causados por los desechos tóxicos y nucleares, se lanzó un llamado de alerta para "desarrollar" a los países del tercer mundo de una manera ecológicamente "sustentable". En Río de Janeiro, Brasil, se convocó a una conferencia para salvar el medio ambiente en 1992: la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, o "Cumbre de la Tierra".

La Unión de Científicos Comprometidos anunció el 12 de diciembre de 1992 que una mayoría de científicos galardonados con el Premio Nobel y más de 1 500 miembros de academias científicas de 68 naciones, incluyendo a las 19 mayores potencias económicas, habían publicado un "Aviso a la Humanidad" que llamaba a un "desarrollo sustentable", la reducción de la pobreza y una "igualdad sexual que garantizase a las mujeres el control de sus propias decisiones reproductivas". Reconociendo que "las naciones desarrolladas son las mayores contaminadoras del mundo", llamaba a "una gran reducción de la violencia y la guerra" de manera que el mundo industrializado pudiera financiar "la protección medioambiental".

Toda la charla sobre "desarrollo sustentable", a la que rápidamente hicieron eco campeones del neoliberalismo tales como el Banco Mundial, ayudó a las crecientes o combatientes organizaciones ambientalistas pero no hizo absolutamente nada para mejorar la suerte de los pobres del mundo. Su retórica conquistó más a los activistas medioambientales de lo que ayudó efectivamente a los campesinos, que continuaron perdiendo sus tierras, o a los trabajadores rurales y urbanos, que siguieron siendo subpagados. Además de esto, condujo a un incremento en el acceso al conocimiento campesino sobre la flora y la fauna locales para el beneficio de las transnacionales, incluyendo los intereses madereros, agrícolas y farmacéuticos.

Luego, en nombre de los proyectos neoliberales de "privatización" y "libre mercado", el estado mexicano optó por eliminar la protección constitucional a los ejidos. El porcentaje de proletarios rurales aumentó de forma dramática: de un 46.2% en 1990 a 55.6% en 1995 (cuadro 14).

En muchos aspectos, la pobreza, violencia, migración y lucha de clases en el México rural se hicieron tan intensas a mediados de los noventa como lo habían sido hacia el final del régimen de Porfirio Díaz. Los campesinos seguían agrupándose e invadiendo tierras abandonadas en un intento por asegurar su propia sobrevivencia, y el ejército o los pistoleros de los grandes terratenientes seguían expulsándolos. Las fuerzas armadas mexicanas intervenían regularmente contra estos movimientos campesinos, a menudo llevando a cabo matanzas —y no sólo en los casos de amplia difusión, como los recientes de Chiapas o Guerrero.

CACIQUISMO

Cierto número de movimientos campesinos tenían una historia de cuarenta o cincuenta años de militancia ininterrumpida. Por ejemplo, en 1943 y nuevamente en 1953, Rubén Jaramillo, que en su juventud cabalgó con Zapata, se levantó en guerra de guerrillas en el estado centro-meridional de Morelos. Jaramillo era simultáneamente ministro metodista ordenado y miembro del Partido Comunista. Con la Biblia en una mano y el rifle al hombro, predicaba la revolución. En 1962, después de reunirse con el presidente Adolfo López Mateos, soldados del ejército mexicano los sacaron a rastras a él, a su mujer encinta y a los tres hijos de ambos de su casa en Xochicalco y los masacraron. El movimiento de "la tierra para quien la trabaja" siguió en su nombre y a fines de los años sesenta llegó a abarcar casi toda la nación. En un esfuerzo por reducir la actividad de la guerrilla campesina heredera de Jaramillo en Morelos, el estado colocó un busto de Jaramillo en el centro de una de sus ciudades favoritas. Un campesino enfadado comentó: "Fíjense bien en ese busto: se supone que lo hicieron para honrarle, pero sus asesinos le cortaron los brazos y las piernas."[20]

Un ejemplo más. Grupos de campesinos militantes a todo lo largo del país, que desde fines de los años veinte eran conocidos como *agraristas*, organizaron incontables movimientos nacionales que agrupaban a elementos progresistas de diversas clases sociales. A principios de los sesenta muchos agraristas se unieron al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que se extendió por toda la nación, aunque por breve tiempo. El MLN representó un intento vigoroso de unir a los marxistas, a los intelectuales y artistas escépticos, trabajadores, campesinos y políticos progresistas prominentes como el ex presidente Lázaro Cárdenas, en un movimiento de base amplia para la revitalización de la Revolución mexicana. El movimiento se desintegró cuando Cárdenas quiso distanciarse de las inclinaciones pro castristas de los militantes más jóvenes y cuando el estado reforzó su doble política de represión y cooptación. No obstante, muchos campesinos ex miembros del MLN prosiguieron sus luchas locales. En el estado de Guerrero los dirigía el maestro de escuela Genaro Vázquez, de una familia campesina local, que formó un contingente guerrillero que siguió activo tras su muerte en combate, el 2 de febrero de 1972. (Resurgió como una fuerza poderosa no sólo en Guerrero sino también en otros estados en 1995.)

Desde los sesenta, gran parte de la lucha de clases rural iba dirigida contra el proceso intermediario tradicional del caciquismo. A principios del siglo XX, se usó a los caciques como intermediarios en la introducción o difusión del capitalismo. Después de la Revolución, se esperaba que los "buenos" caciques transmitieran los beneficios asociados a la reforma agraria. Las luchas para sustituir a los caciques "malos" por buenos se convirtieron en un lugar común, pero por lo general fueron en vano. Luego, líderes de la llamada "dinastía norteña", presidentes como Obregón y Calles, sentaron las bases del partido político nacio-

[20] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1973.

nal (PRI) que agrupó a los caudillos militares regionales e integró a los caciques locales con el partido oficial (entonces PNR) y otras organizaciones del estado corporativo. Aunque hubo algunos caciques buenos, particularmente durante la presidencia de Cárdenas (1934-1940), el caciquismo y su corrupción persistieron inexorablemente como una longeva tradición mexicana —tanto en la práctica política como en las vidas diarias de la mayor parte de los ciudadanos.

Los caciques se involucraban en diversas actividades comerciales y financieras. Tanto si eran acaudalados magnates regionales o simples jefes locales con un poco más de palancas políticas o de dinero que el resto de la gente, se volvieron astutos a la hora de proporcionar préstamos y de usar el dinero como medio para hacer amistades entre el pueblo. Sólo unos cuantos llegaron a destacar apoyando a los líderes honestos y no a los corruptos. Un viejo cacique campesino explicó a un grupo de sociólogos rurales: "Siendo de origen humilde, yo hago de todo para servir al pueblo." Había ocupado varios cargos políticos, incluyendo algunos en un nivel nacional, y llevaba una "humilde" vida burguesa.[21]

Más que *resultado* de una falta de participación popular en la política nacional, el caciquismo era su *causa* básica. Marcado por la retórica populista y con un contenido paternalista, el caciquismo se caracterizó desde siempre por una vena de violencia universalmente reconocida, capaz de ser convocada en cualquier momento con la ayuda de los ejércitos privados o de las fuerzas armadas nacionales. El caciquismo ejercía el control mediante el terror armado, y legitimaba el control con espectáculos desarmados (y desarmantes) —como las inauguraciones de nuevas escuelas, clínicas o carreteras. El caciquismo estaba vinculado también al "compadrazgo" y a las ceremonias religiosas o culturales.

Estas costumbres, a su vez, eran económicamente beneficiosas para los comerciantes y caciques locales, así como el "folclor" se convierte en "negocio", no sólo en la forma tradicional de exprimir el dinero a los pobres para organizar ritos ceremoniales, sino en el modo moderno del turismo nacional e internacional. Los indios pobres a menudo se identificaban con sus ricos caciques-explotadores indios, que utilizaban sus danzas tradicionales para recolectar dinero de los turistas, en vez de identificarse con sus empobrecidos vecinos mestizos. Por su parte los mestizos pobres a veces apoyaban a los caciques o empresarios mestizos locales vendiendo géneros mestizos a los turistas. De ésta y otras maneras, el caciquismo socavaba la conciencia de clase.

El caciquismo y su sistema de sobornos, recompensas y control servía de esta manera para disfrazar o distraer la creciente estratificación de clase y el conflicto que ésta propiciaba entre la población rural. Por ejemplo, en un estudio de caso de obreros y campesinos en un centro regional de producción de azúcar, la socióloga Luisa Paré encontró que sistemas muy complejos de caciquismo y estratificación interna azuzaban a los productores ejidatarios contra los cor-

[21] Roger Bartra *et al.*, *Caciquismo y poder político en el México rural* (México, Siglo XXI, 1975), pp. 200-203.

tadores de caña proletarios, que a menudo eran otros ejidatarios a quienes se pagaba directamente con créditos adelantados por el ingenio o el estado.[22]

El caciquismo servía para reforzar la susceptibilidad campesina a seguir la tutela estatal o a ser cooptados. Las organizaciones campesinas eran fácilmente cooptadas una vez que sus líderes lo eran, ya que de forma típica sufrían de escasez de personal capacitado y dispuesto a convertirse en líderes efectivos. Debido a las estructuras paternalistas y autoritarias de las organizaciones, los líderes cooptados podían fácilmente arrastrar tras ellos a los afiliados.

Por otra parte, el estado carecía de recursos suficientes para recompensar a gran número de campesinos cooptados sin llevar a cabo una reforma agraria genuina y masiva, lo que conducía a un patrón de liderazgo campesino que consistía en rebelión, cooptación, rebelión. Por ejemplo, el líder campesino radical Jacinto López, miembro del Partido Popular Socialista (PPS, que ordinariamente cooperaba con el partido político oficial) del fallecido Lombardo Toledano, fue uno de los primeros en organizar a los campesinos sin tierra en un movimiento de masas en los sesenta; fue cooptado mediante un asiento en el Congreso. Luego, en 1969, bien fuese debido a la decepción de sus seguidores o a su propia insatisfacción por estar perdiendo el tiempo sin hacer nada en el Congreso, López se dio de baja del PPS para encabezar un movimiento agrario independiente. Murió poco tiempo después.

Un camino algo diferente fue el seguido por Alfonso Garzón, que a principios de los sesenta ayudó a fundar la Confederación Campesina Independiente (CCI), a menudo en oposición al "sector campesino" de la CNC del PRI y al gobierno. Según las revelaciones que siguieron al caso Watergate, el FBI cooperó con el gobierno mexicano para hostilizar al CCI. Pero en los setenta Garzón y la CCI se convirtieron en brazos del estado al que antes se enfrentaran, a menudo más útiles y eficaces que la CNC. También Garzón hablaba de "servir al pueblo".[23]

Como resultado, la conquista de objetivos reformistas inmediatos o de un cambio social radical a largo plazo en beneficio de los campesinos y trabajadores rurales vino a depender, con gran frecuencia, de líderes de las clases no campesinas o de fracciones de clase. Para llegar a ser líderes, los campesinos necesitaban poseer ya fuera carisma personal o recursos externos. Los más honrados eran a menudo encarcelados o asesinados; otros eran cooptados fácilmente.

Para el caso de que la cooptación de líderes no decapitase por completo la lucha campesina, se institucionalizó un sutil control ideológico: la propaganda diaria a favor de "la ley". Puesto que en realidad eran tantos los abusos ile-

[22] Véase Paré, *El proletariado*.

[23] Véase Bo Anderson y James D. Cockcroft, "Control and cooptation in Mexican politics", *International Journal of Comparative Sociology* VII, núm. 1 (marzo de 1966), pp. 11-28. Reimpreso en varios libros, este artículo y su secuela por Cockcroft, "Coercion and ideology in Mexican politics", aparecieron en James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank y Dale L. Johnson, *Dependence and underdevelopment: Latin America's political economy* (Nueva York, Doubleday-Anchor, 1972), pp. 219-268. Ambos artículos utilizan entrevistas mantenidas por mí con Garzón.

gales que se cometían en el campo, todo el mundo —tanto si se trataba de un buen cacique de trayectoria ascendente como de un campesino pobre en busca de justicia— hablaba de "cumplir la ley" o de hacer cambios progresivos "dentro de la ley, por supuesto". Cuando la ley misma era utilizada como instrumento de opresión y el sistema legal aparecía como un laberinto sin salida para la pobre gente que sólo pretendía mejorar sus condiciones de vida, los movimientos sociales rurales y sus líderes quedaban atrapados en el curioso lenguaje y práctica de las "protestas pacíficas y legales". En gran parte del México rural, los campesinos y obreros seguían manifestando su fe en la ley y rendían pleitesía a los funcionarios públicos con títulos honoríficos como "patrón" o incluso el colonial "don". Esta manifestación de una cultura paternalista era necesaria para la supervivencia diaria. A veces también era útil para obtener una mejora local, tal como agua potable (todavía inaccesible en casi la mitad del México rural en 1998).

Lo que mantenía poco más o menos en funciones todo este opresivo sistema, era el recurso último a la violencia que detentaban el estado y el capital. Durante generaciones, ejércitos privados conocidos como "guardias blancas" habían hostilizado a los campesinos y obreros disidentes en todo el México rural. En los años ochenta, organizaciones paramilitares de derecha como Antorcha Campesina (un auténtico escuadrón de la muerte) asesinaban como parte de su rutina a los campesinos disidentes. A medida que los conflictos de clase se iban agudizando a mediados de los noventa, el presidente Carlos Salinas de Gortari invitó a Antorcha Campesina a afiliarse formalmente al PRI. Como ya antes señalamos, si los movimientos sociales se ponían en marcha, a menudo eran seguidos por matanzas.

A pesar de tantos obstáculos, los campesinos y los proletarios rurales sí reconocían y combatían —a veces de forma sutil, a veces directamente— el opresivo carácter de la dominación del capital y del sistema caciquil. En términos de clase, el enemigo inmediato al que servían los caciques no era difícil de identificar. La insolente actitud de la burguesía rural con respecto a los campesinos y obreros era legendaria.

Sin casi haber necesitado mover un dedo para acumular capital, la burguesía rural se desarrolló como una clase doblemente parasitaria: vivía tanto de los subsidios estatales como de la mano de obra barata de los productores, e invertía al mismo tiempo en tierras y en la producción agrícola, el comercio, la banca regional, la construcción, los bienes raíces urbanos, y las empresas especulativas —y en un consumo llamativo. En gran parte vino a integrarse con los banqueros e industriales urbanos, con la agroindustria extranjera, las instituciones de crédito estatales e internacionales, los exportadores-importadores o los intereses de bienes raíces.

Lejos de ser una banda de latifundistas holgazanes que vivían de las rentas de sus tierras, los elementos dirigentes de la burguesía rural eran hombres de acción, que acumulaban capital en gran escala. Pero para su capital y sus mercados dependían de poderosas fuerzas urbanas, principalmente capital fi-

nanciero doméstico y extranjero (esto es, la combinación de capital bancario e industrial, alguna vez definida por Lenin como imperialismo). También compartían su regulación de la vida cotidiana de las zonas rurales con una combinación de grupos burgueses y pequeñoburgueses de segundo nivel esenciales para su propio engrandecimiento.

Por consiguiente, era más útil para los objetivos analíticos considerar la clase dirigente rural como un bloque de poder constituido por dos amplias capas —la burguesía agraria en gran escala y una burguesía de segundo nivel— subdividida a su vez, cada una de estas capas, en tres segmentos. La burguesía agraria en gran escala estaba formada por el segmento de terratenientes-capitalistas, el agrocomercial y el agroindustrial, cada uno de los cuales estaba en última instancia ligado a los otros dos a través de sus conexiones dependientes del capital financiero con base urbana. La burguesía de segundo nivel estaba constituida por un segmento agrario de escala media, un segmento comercial y un segmento agro-político, algunos de cuyos miembros más afortunados lograban ascender a las filas de la burguesía agraria en gran escala.

Los terratenientes-capitalistas basaban su riqueza en la acumulación de capital y en la propiedad de la tierra. Aunque incluían a unos cuantos latifundistas ineficaces, en su mayor parte estaban orientados hacia la acumulación de capital en una escala extensa, aunque frecuentemente en empresas especulativas. Algunos terratenientes-capitalistas eran nuevos ricos que habían hecho fortuna después de la segunda guerra mundial, mientras que otros eran antiguos funcionarios de la burocracia estatal. Casi todos conservaban algunos aspectos del anticuado populismo paternalista que vinculaba a los terratenientes con los caciques, los burócratas estatales o los intermediarios comerciales en una alianza mutuamente ventajosa que proclamaba demagógicamente estar empeñada en trabajar por los mejores intereses del campesinado. Típicamente representativos de estos terratenientes eran los ochenta y cinco propietarios que controlaban una cuarta parte de las tierras irrigadas de Sinaloa, así como los dedicados a la agricultura capitalista-monopólica en Sonora y otros estados norteños. Todos ellos tenían estrechos vínculos con los intereses agroindustriales de Estados Unidos y algunos eran distribuidores de equipos agrícolas, automóviles o insecticidas estadunidenses.

El segmento agrocomercial de la burguesía agraria en gran escala derivaba su riqueza no de la propiedad de tierras sino del comercio y, ocasionalmente, de la industria. Con la cooperación del estado, este segmento controlaba una considerable porción del mercado de productos agrícolas y financiaba gran parte de la producción agrícola. Los "capitalistas arrendatarios" en gran escala, que rentaban la tierra a los campesinos o a los ejidatarios y comercializaban sus productos, estaban incluidos en el segmento agrocomercial. Estrechamente ligado al estado y a la agroindustria extranjera, este segmento tenía su mayor fuerza en sectores líderes como el de la producción industrial de alimentos para animales.

El segmento agroindustrial derivaba su riqueza de la industria y hasta cierto grado del comercio, pero no de la propiedad de la tierra. Vinculado a la pro-

ducción bien fuese directamente a través de compras a miembros de la burguesía agrocomercial, los agroindustriales poseían los molinos, destilerías y plantas procesadoras de alimentos. Por ejemplo, el grupo Alfa de Monterrey y algunas transnacionales cerveceras controlaban los precios, la producción y la comercialización de la cebada. Tanto el segmento agroindustrial como el agrocomercial de la burguesía agraria en gran escala, más que el segmento capitalista-terrateniente, estaban interesados en modernizar la estructura global del campo.

La burguesía agraria a mediana escala constituía el primero de los tres segmentos de la burguesía rural de segundo nivel. Era principalmente un producto de la reforma agraria. Constaba de agricultores privados independientes de tamaño medio, ocasionalmente ejidatarios y aquellos rancheros modernos que formaron la columna vertebral del periodo relativamente autosuficiente de la agricultura mexicana entre 1940 y 1960. Estos agricultores estaban concentrados en organizaciones de pequeños propietarios, que de hecho incorporaban a muchos "neolatifundistas" o a sus agentes.

Representando menos del uno por ciento de la población rural, la burguesía agraria de escala media constituía no obstante una fuerza política importante en el bloque de poder de la burguesía rural. Aunque generalmente era un defensor conservador de la propiedad privada, la burguesía agraria de escala media incluía algunos elementos neopopulistas que trataban de renovar y modernizar el caciquismo con objeto de proteger su propia posición. Incluía también algunos elementos ineficientes que iban desapareciendo gradualmente de la escena agraria.

El siguiente segmento de la burguesía rural de segundo nivel era la burguesía comercial, que se nutría de la miseria rural en los niveles de producción y cambio más intermedios y bajos que aquellos niveles dominados por el segmento agrocomercial de la burguesía agraria en gran escala. Un sociólogo rural llamó a este segmento la "burguesía rural comercial-usuraria".[24] Sus miembros incluían a prestamistas; "acaparadores" que adquirían los productos de los campesinos endeudados por debajo de su valor y los revendían con ganancia; una amplia gama de intermediarios dedicados al comercio entre agricultura e industria; y comerciantes que traficaban con bebidas embotelladas, mobiliario, plásticos y artículos similares en los centros urbanos provinciales que surgieron como resultado del crecimiento del mercado interno de México. Un grupo relativamente disperso de pequeños capitalistas, la burguesía comercial rural tenía una vasta red de relaciones personales entre el campesinado e introducía relaciones capitalistas sirviendo como intermediaria entre el campo y el gran capital mercantil y financiero o el estado. La burguesía comercial rural formaba así parte del más viejo sistema de corrupción política y económica, así como de agente y beneficiaria de la explosión en el comercio estimulada por la agroindustria moderna y la industrialización.

[24] Armando Bartra, "Sobre las clases sociales en el campo mexicano", *Cuadernos Agrarios* núm. 1 (1976).

El último segmento de la burguesía rural de segundo nivel era la burguesía agro-política. Ésta constaba de los escalones superiores de la burocracia rural, e incorporaba a burócratas locales y federales de alto nivel, a congresistas, caciques políticos regionales, oficiales o comandantes de zonas militares, presidentes regionales del PRI, presidentes de municipios importantes, y otros semejantes. Algunos individuos, mediante la corrupción, se convertían en capitalistas agrarios por propio derecho. La mayor parte estaban siempre prontos a apropiarse de una porción del excedente económico comercializado o apropiado por el estado. Debido a que estos importantes funcionarios ayudaban a la burguesía rural a obtener plusvalor de la producción agrícola, deben ser considerados como parte del bloque de poder burgués y de la clase dirigente rural.

Como en el caso de otras clases sociales rurales, las clases intermedias en el campo se diferenciaban internamente. Sólo una pequeña porción —por ejemplo, algunos intermediarios comerciales, burócratas y caciques— era de ricos. Estos individuos afortunados eran generalmente mestizos, no indios, y tenían "conexiones" con empleadores o bancos estatales mexicanos o extranjeros y con maquinarias políticas regionales. Los más listos para enriquecerse lograban introducirse en las filas de las burguesías agro-política o comercial rural. Por otra parte, un número cada vez mayor —desde los burócratas de nivel inferior hasta comerciantes en pequeña escala y desde modestos agricultores hasta maestros de escuela— vivían en condiciones austeras. Incluso así, el sólo sueño de la movilidad ascendente y su logro ocasional mantenía al sistema en funcionamiento en un grado notable.

No es sorprendente que las actitudes políticas entre estos grupos intermedios fuesen variadas. Algunos individuos se adherían al PRI como un camino de seguridad o de ocasional movilidad ascendente. Otros apoyaban a los partidos de oposición de derecha, generalmente con base religiosa. Otros más se inclinaban hacia posiciones más orientadas a la izquierda y antigubernamentales, como en el caso de muchos maestros sindicalizados y mal pagados que periódicamente se unían a los movimientos regionales contra líderes sindicales no representativos y en busca de salarios decentes. Una minoría de las clases intermedias —tales como los administradores de explotaciones agrícolas o los reclutadores de mano de obra alquilados por las agroindustrias—, incluso cuando estaban muy mal pagados entraban en abiertos conflictos de clase con el proletariado rural.

A pesar de lo compleja que ha sido la evolución de la estructura de clase rural de México, generó tres problemas transparentes que ya estaban explotando en la cara de la triple alianza forjada por el estado con la burguesía, las transnacionales y las agencias de crédito globales. Estos problemas eran: 1] el desempleo masivo; 2] la inadecuada producción de alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales mínimas de la población, y 3] la falta de participación verdaderamente democrática de las masas y de las clases intermedias. Estos problemas condujeron a nuevos, aunque desigualmente desarrollados, levantamientos campesinos, obreros y de las clases intermedias.

Algo era seguro: la lucha de clases rural se había vuelto fundamental para la crisis económica y política que agobia al México contemporáneo. Era estimulada, y de manera muy enérgica, por los cambios que se producían en la economía mundial. A medida que los fracasos recurrentes de los modelos de "desarrollo económico" posteriores a la segunda guerra mundial, incluyendo el "desarrollo sustentable" y el "neoliberalismo", se volvían cada vez más devastadores en sus consecuencias, resultaba obvio que habría más erupciones de movimientos de protesta política y social en las fábricas urbanas, escuelas y barrios bajos de México, así como en el campo. El levantamiento zapatista de 1994 y la abrumadora derrota electoral del PRI en la ciudad de México en 1997 reflejan esta realidad evolutiva basada en la clase.

Estructura de clase urbana

La estructura de clase urbana después de 1940 siguió estando condicionada por la estrecha relación económica de México con Estados Unidos. El papel del estado mexicano en la formación de clases se volvió más determinante, como ya se evidenció en el análisis del proletariado industrial en el capítulo precedente. El estado era también un factor importante que modelaba la evolución de la burguesía urbana y de las clases intermedias.

Para 1970, la burguesía de México no era en la práctica ni autónoma, ni nacionalista, ni progresista —en el sentido de tratar de alcanzar el desarrollo económico de la nación en beneficio de la mayoría de sus ciudadanos. Conocida popularmente como "la oligarquía", la burguesía, al igual que la "revolución" que defendía, estaba tan subdesarrollada como para constituir, junto con el estado, la fuerza más efectiva para suavizar el camino de México hacia una continuada dependencia económica de Estados Unidos y hacia una distribución todavía peor del ingreso y de los beneficios sociales.

Dejando de lado por el momento el caso especial de la "narco-burguesía", la moderna burguesía mexicana conquistó su estatus y poder más por medio de la producción industrial, el comercio y la banca que por la propiedad de la tierra. Ejercía su poder dentro de México mediante su papel influyente en sectores industriales selectos, en el financiamiento y distribución de bienes y servicios, en las redes de poder político nacional y regional. Familias aisladas o clanes familiares se hicieron con monopolios nacionales y regionales. La mayoría estaban agrupadas libremente en fracciones burguesas o "grupos", en los que eran más numerosos los aspectos que los unían que los que los separaban. De hecho, los apellidos idénticos de las familias burguesas prominentes aparecían una y otra vez en numerosas mesas directivas de las principales empresas mexicanas y en las empresas asociadas con capitalistas extranjeros.

A pesar de esta superposición, algunas de las fracciones eran reconocibles por su tipo de actividad económica y por su afiliación organizativa. Por ejemplo, por ley estatal, los capitalistas industriales estaban organizados en la Con-

federación de Cámaras Industriales (Concamin, fundada en 1918), y los capitalistas comerciales en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco, fundada en 1917). Como las entidades estatales-corporativas obligatorias acostumbraban asegurar la "representación" burguesa en la toma de decisiones del estado, tanto Concamin como Concanaco mantenían estrechos vínculos con el gobierno. Incluso obtuvieron algunos de sus miembros de políticos negociantes (o corruptos) que prosperaban gracias a la asociación informal entre el estado y el capital. Este método organizativo corporativista permitía a los burócratas del gobierno conservar cierta autonomía frente al capital, pero también mantener un vínculo directo con él en beneficio de su propia acumulación de riqueza.

Hasta los ochenta, la burguesía utilizó la Concamin, Concanaco y la burocracia estatal para conseguir sus objetivos políticos, más que para lanzar su propio partido. Al mismo tiempo, la burguesía mantuvo siempre una voz independiente a través de organizaciones tan poderosas como las siguientes:

- la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB, nombre dado en los noventa a la antigua Asociación de Banqueros de México, o ABM, fundada en 1928);
- la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, fundada en 1929), un grupo de negocios nacional dirigido por capitalistas muy conservadores de Monterrey y otras partes del norte de México;
- el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN, fundado en 1962), que durante la presidencia de Salinas ascendió hasta la cumbre de la pirámide de organizaciones influyentes de la burguesía, consistente en 1997 en treinta y cuatro acaudalados individuos que representan a los más poderosos grupos económicos de la nación;
- la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS);
- el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, fundado en 1975), la única y más unánime voz de la burguesía hasta el ascenso del CMHN bajo Salinas, con la mayoría de sus directores provenientes invariablemente del CMHN y cerca de la mitad de su representación interior proveniente del escaso 1% de todas sus empresas afiliadas que pertenecieron al CMHN, a la AMIS y a AMCB.

Estas poderosas organizaciones capitalistas eran más que "grupos de presión" o "entidades autónomas". Formaban parte integrante del bloque gobernante. Estaban conectadas al estado mediante la circulación de sus miembros dentro y fuera del gobierno o de su proximidad a los círculos de toma de decisiones del gobierno.

Por ejemplo, hasta fines de 1982 el director del Banco de México, dominado por el estado, y el ministro de finanzas en forma habitual remitían el "segundo" informe anual sobre el estado de la nación a la ABM de los banqueros privados. Después de que los bancos fueron nacionalizados durante la crisis económica de 1982, los miembros del CMHN ganaron su campaña para que el

estado cambiase el curso hacia políticas económicas "neoliberales" —la "privatización" de las empresas estatales. Prosiguieron con la compra de los cuatro mayores bancos estatales y casi la mitad de las otras propiedades privatizadas en *"tratos de novios"*.

Intercambios de tipo "noviero" ocurrieron entre los escalones más altos del gobierno y el capital privado. Reuniones para cenar en mansiones privadas y vacaciones o fines de semana en exclusivos clubes de campo y centros de esparcimiento sellaron informalmente la alianza entre el estado y el capital monopólico.

Como un ejemplo de la forma como funcionaban las cosas podemos tomar una cena ampliamente comentada en la casa del magnate de los negocios y antiguo director del Banco Interamericano de Desarrollo Antonio Ortiz Mena, celebrada en 1993. Estaban presentes el presidente Carlos Salinas de Gortari (sobrino del anfitrión), treinta de los empresarios más ricos de México (incluyendo a la mayoría de los multimillonarios del país) y dos altos funcionarios del PRI. Los informes oficiales sobre la reunión confirmaron que a los hombres de negocios se les pidió contribuir con dinero a la campaña presidencial del PRI para 1994 por una suma igual a más de diez veces la cantidad recaudada por Bill Clinton para su campaña presidencial de 1992. Emilio Azcárraga, jefe de la compañía Televisa que controlaba gran parte de la televisión en México y la televisión en español en Estados Unidos, dijo a la prensa que hubiera estado dispuesto a igualar la suma total de la campaña de Clinton si se lo hubieran pedido. (Azcárraga murió cuatro años después, siendo uno de los individuos más ricos de América Latina, aunque nunca ingresó en el CMHN.)

Algunos de aquellos miembros de la burguesía que en los años treinta toleraron o alentaron una alianza populista con los obreros sindicalizados contra los monopolios extranjeros, y que habían empezado a desarrollar una base manufacturera doméstica viable, fueron posteriormente comprados o absorbidos en parte por capitalistas extranjeros más ricos o mejor equipados tecnológicamente. Otros se convirtieron en grandes capitalistas por propio derecho, adoptando los objetivos del capital monopólico de cualquier nación.

En 1945, la Concamin de los industriales firmó un pacto de cooperación mutua con la obrera CTM. Esto ayudó a mantener bajos los salarios y frenar las huelgas hasta un mínimo, así como a instituir un sistema impositivo regresivo que dañaba a parte de las clases intermedias así como a todos los miembros de las clases bajas, rozando apenas ligeramente a los ricos. (De todos los países latinoamericanos, México todavía tenía en 1998 una de los más bajos ingresos por impuestos como porcentaje del PIB.)

Hasta los años cincuenta, había dos sectores dentro de la Concamin que representaban distintos enfoques ideológicos. Los fabricantes pequeños y medianos, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra, fundada en 1941), defendían los aranceles protectores contra la competencia externa y se beneficiaban del programa de sustitución de importaciones de los cuarenta. Otros industriales, representantes de las empresas

mayores —a menudo empresas "mixtas" con capital extranjero —se oponían a los controles a la importación, tolerando por el contrario o alentando la penetración extranjera de la economía y sustanciosas ganancias para aquellos capitalistas que cooperasen. En los años noventa lo hacían en nombre del "libre comercio": el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

La Canacintra y otros pequeños grupos del comercio se conjuntaron en la CNPP (Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad) y la CNPC (Confederación Nacional del Pequeño Comercio) que seguían siendo la parte de la burguesía mexicana más necesitada de al menos alguna intervención estatal en la economía. También ellos son más proclives que otras partes de la burguesía a encontrar fallas en el neoliberalismo, especialmente en el TLC y el GATT, puesto que tienen mayores dificultades al competir con los monopolios, nacionales y extranjeros.

En la práctica, desde los años cincuenta, las diferencias ideológicas intraburguesas declinaron ante un consenso en el que los sentimientos nacionalistas se expresaban ritualmente mientras seguía su marcha una alianza informal con el capital extranjero. Un economista estadunidense describía esto con aprobación como "una alianza por los beneficios".[25] Las diferencias entre las fracciones burguesas de México o entre éstas y el estado recibieron poca publicidad excepto en momentos de grandes crisis, como sucedió bajo Cárdenas en los años treinta, o nuevamente en 1982 cuando los bancos fueron momentáneamente nacionalizados, y a mediados y fines de los noventa cuando estallaron nuevas crisis. Incluso en estos casos, sin embargo, con excepción de partes del grupo de Monterrey, la burguesía no cortó sus lazos con el estado.

Los comentadores solían describir al grupo Monterrey como voz rectora del conservadurismo de extrema derecha del gran capital. Su resistencia a las reformas de Cárdenas y a cualquier forma de regulación estatal del capital era legendaria. A principios de los años sesenta se opuso a la nacionalización de Adolfo López Mateos de las compañías eléctricas dominadas por intereses extranjeros e hizo campaña contra el programa gubernamental del libro de texto gratuito.

Sin embargo, el grupo Monterrey no era en absoluto una unión cohesionada. Su ala más reaccionaria estaba dirigida por un segundo grupo de capitalistas, cuyo vocero más prominente era Andrés Marcelo Sada. Notorio crítico de las tendencias "socialistas" en el estado y un fanático anticomunista, Sada era director de Celulosa y Derivados, S.A. (CYDSA), grupo químico que incluía a la segunda empresa química más grande de la nación.

Menos reaccionaria pero más poderosa era la fracción del grupo Monterrey llamada "el gran capital financiero". El núcleo de esta fracción constaba del grupo cervecero Visa y el de altos hornos Alfa, ligados ambos a Serfin, uno de los mayores grupos financieros de México. Aunque en competencia con el capital

[25] Clark W. Reynolds, *The Mexican economy: twentieth-century structure and growth* (New Haven, Yale University Press, 1970).

extranjero desde el término de la segunda guerra mundial, el "gran capital financiero" de Monterrey estableció gradualmente vínculos tanto con las transnacionales como con el capital estatal. Por consiguiente, sus tendencias reaccionarias fueron atemperadas por un sentido de pragmatismo económico y político.

Aunque la burguesía de Monterrey seguía haciendo declaraciones críticas contra la intervención estatal en la economía y defendía valores ultraconservadores, no hay que perder de vista que semejante propaganda ayudaba a los intereses de todo el capital monopólico en el sentido de que trasladaba el terreno del debate tan a la derecha que cualquier reforma, incluso la más limitada y simbólica, empezaba a parecer demasiado "revolucionaria" para ser tolerada. Como el resto del capital monopólico mexicano, el grupo Monterrey en bloque, excepto en tiempos de gran crisis, normalmente otorgaba su apoyo —aunque crítico— al estado.

De muchas maneras era igualmente engañoso considerar que el grupo Monterrey tenía un predominio nacional o que su influencia se limitaba a una sola ciudad. Los capitalistas de Monterrey habían diseminado sus inversiones por toda la nación y el extranjero (obteniendo, por ejemplo, una participación en la televisión en español y partes especializadas de la manufactura de vidrio en Estados Unidos). Tenían negocios conjuntos con firmas extranjeras como Coca-Cola; invirtieron grandes sumas en el México central y compartían *holdings* con el "grupo Puebla" de la burguesía. Existían muchas otras fracciones cohesivas de la burguesía mexicana que detentaban un poder notable, conocido por nombres tales como "la fracción central" y "el grupo de los cuarenta".[26] El "grupo Guadalajara" de capitalistas se alzó a una posición de fuerza casi igual a la del grupo Monterrey durante los años sesenta.

[26] La fracción central, que tenía su base en la ciudad de México, era primordialmente el gran capital financiero, una fusión del capital bancario y el industrial con algunos elementos del capital comercial, y tuvo considerable impacto político gracias a su importante papel financiero en actividades económicas públicas y privadas. Fue la voz aislada más importante en la ABM del capital financiero, que tradicionalmente había estado vinculada al principal banco de desarrollo del estado, Nafinsa, y al Banco de México, dos de cuyos principales asesores durante largo tiempo fueron directores de los mayores bancos privados: el Banco Nacional de México y el Banco de Comercio, cada uno de los cuales tenía vínculos con el capital extranjero (véase el capítulo 5). Incluían al grupo del Banco Minero y Mercantil, un grupo de capitalistas independientes del capital extranjero con sus raíces en las cerveceras y tiendas de departamentos del periodo de Díaz, que a su vez estaban vinculados al Banco de Comercio (una fusión de varios bancos y gran parte de la industria química). El "grupo de los cuarenta", así llamado porque la mayoría de sus miembros se hicieron industriales y financieros con ayuda de los programas de industrialización del estado posteriores a 1940, era la fracción de la gran burguesía que tenía los lazos más fuertes con la burocracia estatal. En este grupo es difícil distinguir entre los burócratas y los empresarios privados. El ex presidente Alemán, el antiguo ministro del gabinete de Obregón Aarón Sáenz, y el jefe del departamento del Distrito Federal en 1981 Carlos Hank González, no sólo utilizaron sus altos cargos para acumular capital sino que también invirtieron en grupos financieros tan poderosos como los de Carlos Trouyet (banca, manganeso, acero, celulosa, cemento, papel), o Bruno Pagliai (acero, aluminio, bienes raíces, finanzas). Miembros del "grupo de los cuarenta" eran también muy influyentes en Concamin y Concanaco.

Pero ningún grupo o fracción burguesa era inmune a la crisis económica o al fracaso. El grupo Alfa de Monterrey, por ejemplo, tuvo que declarar en quiebra a muchas de sus empresas en 1982 y emprender un amplio programa de refinanciamiento y reorganización. Después de eso, prosperó en parte mediante un aumento en las exportaciones, que representaban el 25% de sus ventas.[27]

Un grupo nuevo muy significativo en el complejo de poder del México contemporáneo era una sombría red de narcotraficantes extraordinariamente ricos, o señores de las drogas, cuyas organizaciones eran difíciles de identificar debido a la naturaleza criminal de sus empresas. Se decía en los años noventa que en México existía una "narco-prensa" e incluso un "narco-estado". La primera plana del *New York Times* del 23 de febrero de 1997 informaba de unos ingresos estimados sólo para los traficantes de drogas del estado de Sonora, en 10 mil millones de dólares por año, de los que el 60% iba a los funcionarios del gobierno como pago secreto de favores.

Dada la inmensa cantidad de dinero implicado en el negocio multimillonario (en dólares) de la narco-burguesía, y la necesidad de lavarlo y protegerlo, había mucha especulación e incluso cierta evidencia de que los señores de la droga tenían vínculos con prominentes bancos mexicanos y estadunidenses (incluyendo, como se discutió en la sección final del capítulo precedente, al Citibank) y con los gobiernos estatales de México y los gobiernos federales de México y Estados Unidos.

Cualquier análisis del conflicto intraburgués se dificulta por las numerosas contradicciones introducidas por el fenómeno del tráfico de drogas. Por ejemplo, la apertura de la frontera mexico-norteamericana emprendida por el TLC al "libre comercio de mercancías" parecía no sólo enriquecer al capital monopólico sino también facilitar el movimiento de las drogas ilegales. Un amortiguador de los exabruptos del gobierno contra los señores de las drogas (además de la rampante corrupción gubernamental) era el simple hecho de que una cantidad incalculable de divisas extranjeras se vertían a los bancos de México desde el narcotráfico internacional: un importante empujón para la economía de México. Además de esto, había frecuentes rebatiñas por dinero rápido entre muchas de las más poderosas élites burguesas de México, que a veces lo encontraban más fácilmente en el narco-circuito del capital, aunque aún tenían que seguir manteniendo su imagen de "honrados comerciantes escandalizados por el tráfico de drogas".

Algo era cierto: la "carrera de las drogas" de fines del siglo XX era comparable a la carrera del oro y la plata del siglo XVI. Los volúmenes de riqueza involucrados con relación a otras fuentes de ingresos eran notablemente similares, tal como lo eran algunas de las actividades militares y paramilitares asociadas con la intención de "tener parte en la acción". Hasta el impacto de "la riqueza recién descubierta" en la banca y las instituciones del estado era comparable.

[27] *The Economist*, 6 de diciembre de 1997.

La principal diferencia, por supuesto, era la naturaleza oculta de la "carrera de las drogas", y por lo tanto las más complejas maniobras emprendidas por los actores implicados, incluyendo a los que montaban una "guerra de las drogas" notablemente ineficaz y corrupta.

Si bien la mayoría de las divisiones intraburguesas no eran significativas ni ampliamente publicitadas excepto en épocas de grandes crisis, la división entre la gran burguesía y los empresarios establecidos de la pequeña burguesía era siempre reconocible sólo en los terrenos económicos. Los pequeños simplemente no podían competir con los grandes. No obstante, ambos se necesitaban unos a otros por razones económicas y políticas.

Por ejemplo, el pequeño capital y parte del mediano emprendieron toda clase de inversiones "arriesgadas" que el capital monopólico rehusaba intentar hasta que pudiera asegurarse del potencial de crecimiento de las empresas implicadas. Las empresas que tenían éxito eran compradas por el capital monopólico, mientras que las que fracasaban lo hacían sólo a expensas del pequeño capital. Simultáneamente, el capital más pequeño dependía del gran capital y del estado para préstamos, asistencia técnica, transportes, mercadeo y temas semejantes.

Todo el capital, grande y pequeño, estaba en oposición fundamental con el desorden, la "anarquía", el "comunismo", la "agitación del populacho" y las tendencias rebeldes de las clases obreras. Así, el estado reconocía y alentaba a las organizaciones regionales y nacionales de los comerciantes pequeños y medianos en forma muy semejante a como lo hacía con los grandes capitalistas, aunque les otorgaba menos concesiones.

Después de la segunda guerra mundial, las clases intermedias de México entraron en una fase de notable crecimiento. Para fines de los años setenta, los artículos y libros sobre México solían calcular el tamaño de las "clases medias" en un 20 al 30% de la población. Lo mismo hacían muchas estadísticas "oficiales". Por ejemplo, sobre una base estrictamente de ingreso familiar, según el cuadro 6 del capítulo 5, podemos llegar a la cifra de por lo menos 20%. Cerca del 70% de las familias mexicanas en ese cuadro son calificadas como "clases bajas", mientras que el 10% califica como "clase alta" —coloquialmente, los pobres y los ricos.

Sin embargo, todos estos cálculos acerca del tamaño de las "clases medias" eran exagerados. Un examen más estricto del cuadro 6 sugiere que muchos individuos del grupo del 20% de "clase media" eran obreros o empleados: esforzados trabajadores pobremente pagados. El cuadro 6 muestra que el grupo del 20% sufrió globalmente un porcentaje declinante del ingreso familiar total desde 1977. Probablemente algunos descendieron hasta la pobreza extrema. Además, existían cruzamientos dentro de las clases y a menudo las líneas entre las clases son borrosas.

Problemas similares ocurrían con las estadísticas para las personas dedicadas a actividades terciarias, el llamado sector de servicios, que aumentó de un 19% de la población "económicamente activa" en 1940 hasta el 43% en 1979.

según la Secretaría de Planeación y Presupuesto. Esta cifra incluía a muchos pequeños comerciantes, vendedores, sirvientes y trabajadores temporales —una porción considerable del sector terciario.

No obstante, el crecimiento del sector terciario reflejaba una demanda real de servicios financieros y otros generados por el rápido crecimiento y la centralización del capital. La actividad laboral terciaria satisfacía importantes funciones administrativas, financieras y otras relacionadas con la realización (como en el comercio las ventas) y la apropiación (como en la banca) de valor excedente del capital. Además, como observaba el fallecido Harry Braverman:

> Cuanto más productiva ha llegado a ser la industria capitalista —es decir, cuanto mayor es la masa de plusvalor que extrae de la población productiva— mayor se ha vuelto la masa de capital que busca su parte de este plusvalor. Y cuanto mayor es la masa de capital, mayor es la masa de actividades no productivas que sirven solamente para la diversificación de este excedente y su distribución entre diversos capitales.[28]

Muchas personas de las clases intermedias sirven al capital pero existe sin embargo un antagonismo hacia él o hacia el estado. Se compra su fuerza de trabajo, y el capital privado o público se apropia los valores de uso que producen en la realización de los necesarios servicios administrativos o sociales.

El aumento de las ocupaciones en servicios en México a partir de 1940 se vio acompañado por la gradual destrucción por el capital monopólico de la base artesanal de la producción y de los sectores artesanales de la pequeña burguesía tradicional. Los comerciantes y tenderos pequeñoburgueses fueron empujados igualmente hacia los márgenes de la viabilidad por las cadenas de supermercados y tiendas de departamentos del gran capital, ya que la policía, los impuestos y los funcionarios encargados de otorgar las licencias los acosaban constantemente.

Las estadísticas poco confiables sobre la pequeña burguesía tradicional fueron siendo cada vez más y más engañosas. Por ejemplo, la Cámara Nacional del Pequeño Comercio declaraba a fines de los años setenta que existían 1.25 millones de pequeñas empresas comerciales. Pero muchas de éstas eran simplemente minúsculas operaciones de mercado en manos de pobres habitantes urbanos. Como explicó un presidente de esta Cámara: "El que se queda sin trabajo inmediatamente se dedica al pequeño comercio."[29] Más a menudo, las vidas de las personas dedicadas al pequeño comercio estaban insertas en una realidad proletaria bajo una apariencia pequeñoburguesa.

Entre las clases intermedias urbanas se desarrolló una brecha importante en estatus e ingreso entre los burócratas de nivel alto, profesionales selectos (médicos, ingenieros, clérigos, etc.) y los pequeños negociantes prósperos por

[28] Harry Braverman, *Labor and monopoly capital* (Nueva York, Monthly Review Press, 1974), p. 415.

[29] Citado en *UnoMásUno*, 14 de noviembre de 1979.

una parte, y la inmensa mayoría por la otra. Esta mayoría estaba constituida principalmente por burócratas, enfermeras, paraprofesionales, maestros de escuela, oficinistas, empleados de almacenes y pequeños y esforzados comerciantes. Con el empleo de sirvientes y viviendo del excedente redistribuido producido por la mano de obra, las capas más acomodadas de las clases intermedias llegaron a esperar un estilo de vida que contrastaba agudamente con la pobreza en torno a ellas. Tendían a culpar de su decadente situación económica a los vendedores o productores campesinos más que a las fuerzas del gran capital. Económicamente exprimidas, estaban maduras para acoger los llamamientos protofascistas y las soluciones autoritarias; los partidos políticos de derecha encontraban en ellos un terreno fértil para el reclutamiento. Por otra parte, la izquierda también reclutaba en las clases intermedias. Tradicionalmente fuerte en las escuelas y universidades, a donde los hijos e hijas de las clases intermedias iban en gran número a partir de 1950, la izquierda politizaba a muchos estudiantes. (Para 1972 había más de 300 000 estudiantes universitarios y 600 000 estudiantes de preparatoria, sólo un 3% de origen campesino y 7% de la clase obrera.)[30] Los militantes de uniones nacionales y regionales de estudiantes universitarios se vinculaban frecuentemente con elementos de los sindicatos obreros radicales o independientes y con la clase obrera.

Al igual que otros más de las capas medias de las clases intermedias, sólo un puñado de maestros de escuela lograron una situación acomodada, mientras que la mayoría se veía reducida a condiciones de vida proletarias o incluso miserables. Profesión tradicionalmente respetable, la enseñanza se convirtió en un comercio asalariado y los maestros tenían poca influencia en el proceso educativo. La mayor parte de la actividad de "enseñanza" consistía en supervisar aulas sobrepobladas, una especie de trabajo de niñera glorificado. Como agentes del estado, los maestros estaban obligados a reproducir la ideología burguesa dominante y a inculcar en los estudiantes las virtudes del civismo y otros valores que los llevarían a aceptar su posición social o sus oportunidades en la vida. Pero históricamente los maestros habían conquistado su "imagen" pública como defensores de la justicia social, y en el grado en que aprendían (de sus estudiantes) acerca de las quejas de la gente pobre a mejorar la capacidad de los trabajadores jóvenes para analizar críticamente, se convirtieron en agentes importantes en la lucha para transformar a la sociedad.

Esto resultó evidente en los años cincuenta, cuando surgió el Movimiento de Maestros Revolucionarios para infundir vida democrática en el mayor sindicato de maestros de toda América Latina. Othón Salazar encabezó a los maestros en huelga en la toma y conservación de la Secretaría de Educación Pública, y durante un mes el "pequeño gigante", como era llamado este comunista de verbo privilegiado, animó con éxito a los maestros a vincular su movimiento con el de los ferrocarrileros en huelga. Los matones de la CTM atacaron a muchos de

[30] Carlos Alberto Torres, comentario oral en el tercer Congreso de Sociólogos Latinoamericanos, Panamá, 22 de noviembre de 1979.

los maestros. El presidente de México finalmente rompió la huelga garantizando a los maestros un aumento del 17% en los salarios y arrojando a Salazar a la cárcel.

Pero dos décadas más tarde los maestros organizaron un movimiento más grande por la democratización de su sindicato, enriqueciéndolo con algunas demandas feministas que surgían de otras porciones de las clases intermedias, especialmente entre los estudiantes universitarios, 30% de los cuales eran mujeres. Tradicionalmente segregadas de los puestos directivos de los sindicatos, las maestras de escuela (que constituían el 70% del sindicato) conquistaron hasta el 10% de las posiciones directivas del nuevo movimiento: un enorme logro en cualquier sociedad patriarcal. El sindicato sufrió divisiones internas, pero su fracción más militante continuó representando un papel importante en la lucha por democratizar el sindicalismo y la política mexicana hasta bien entrada la década de los noventa.

Comenzando en los cincuenta, la burguesía empezó a compartir una minúscula parte de su poder con un segmento pequeño pero creciente de las clases intermedias: los agentes administrativos y tecnócratas del capital y el estado. A diferencia de los gerentes de empresas de alto nivel o de los ejecutivos "junior", los militares o los oficiales de la policía, o de los burócratas de primera línea del estado, que usualmente ingresaban a las filas de la burguesía en vez de convertirse en una "nueva élite administrativa", estas personas provenían de las capas intermedias de la administración, la investigación científica, la coordinación tecnológica y el control social. Incluían una amplia gama de profesionales de éxito cuyo trabajo era comprado no para producir plusvalor, sino para participar en la planeación, coordinación y funcionamiento generales del capital y el estado.

Muchos de estos profesionales eran entrenados en instituciones mexicanas de altos estudios, incluyendo escuelas de negocios especiales, y algunos se capacitaban en Estados Unidos y en universidades extranjeras. Muchos de ellos se convirtieron en una tecnocracia opuesta a la fuerza de trabajo y enamorada de los valores burgueses y extranjeros. Por definición, eran dependientes de los procesos productivos dominados por las transnacionales. Así, estos tecnócratas fueron definiendo cada vez más la continuada presencia de las técnicas de distribución, intercambio y educación de las transnacionales, como algo beneficioso para sus propios intereses de clase. "Tecnocracia", más que "burguesía", era el término apropiado para este agrupamiento porque incluía a personas de una cantidad de clases que utilizaban posiciones de poder y autoridad en el gobierno para desempeñar las tareas de administración, educación y control.

La tecnocracia estaba reforzada por una forma de imitación ideológica, o cultural, conocida como el "culto a la tecnocracia", que exageraba la importancia de los "expertos" y pedía deferencia para con las soluciones tecnocráticas en cada nivel de la organización social y política. El culto a la tecnocracia, con su correspondiente hincapié en los procesos dominados por las transnacionales de cambio tecnológico y su imitación de los estilos extranjeros, dominaban los

más altos círculos de planeación económica y permeaban el sistema de la educación superior en México. Reforzaba el patrón histórico de dependencia económica, a medida que la tecnocracia era comparada cada vez más con los "científicos" del México porfiriano (1876-1911).

Un resultado del enfoque tecnocrático fue que la búsqueda autoproclamada de México de una ciencia y tecnología indígenas fallaba desde su origen. El objetivo consistía en cerrar la brecha entre México y un país como Estados Unidos. Este enfoque de "cierre de la brecha" impuso a México una serie de normas ya existentes de eficiencia tecnológica, "modelos" de desarrollo económico y el bagaje acompañante de actitudes culturales y tendencias educativas. El culto a la tecnocracia elevó y mistificó así a la tecnología al punto de hacer virtualmente imposible la experimentación independiente. Trabajadores y campesinos eran excluidos del control de la tecnología y se les hacía sentir "impreparados" para abordar cuestiones tecnológicas, incluso a un nivel de taller de reparaciones. Además, el culto a la tecnocracia, y a los tecnócratas que participaban en ella y de ella se beneficiaban, creaba un estrato de funcionarios y burócratas de nivel alto y medio con quienes las fuerzas de la contrarrevolución podían contar —especialmente en situaciones en donde el suministro normal de bienes de consumo o de partes de repuesto podía verse amenazado (como sucedió en el Chile de Allende a principios de los años setenta, por ejemplo).

La "tecno-burocracia" de México constituyó una capa fija aunque fluida de las clases intermedias. Sus miembros establecían de forma habitual medidas de eficiencia capitalista, economías de escala, disciplina laboral, sobornos y corrupción. En los ochenta, se convirtieron en agentes del neoliberalismo y su correspondiente ideología. A medida que entraban nuevos miembros en las filas de la tecno-burocracia, los miembros más viejos quedaban en sus puestos o eran trasladados a otras direcciones de clase —más a menudo a la burguesía que al proletariado.

Los que se mudaban a la burguesía acumulaban capital para ellos mismos y sus amigos, principalmente mediante la corrupción, el otorgamiento de contratos o favores, y cosas semejantes. Un ejemplo histórico fue el grupo conocido como "empresarios del estado", administradores y directores de elevados salarios en unas mil empresas estatales antes de las privatizaciones del neoliberalismo de los ochenta y noventa, de las que la mayor parte de esos mismos individuos volvieron a beneficiarse notablemente. El ejemplo mejor conocido consistió en políticos o candidatos políticos de alto nivel (presidentes, miembros del gabinete, gobernadores, etc.). Estos individuos utilizaban el poder político para acumular fondos con el fin de invertirlos en los sectores monopólicos de la economía y obtener retiros extravagantemente lujosos. Muchos funcionarios pasaban fácilmente de un gobierno presidencial a otro, acumulando capital en el proceso.

Los presidentes de México, limitados a términos de seis años y con un impedimento constitucional para ser reelegidos, se hicieron famosos por hacer tanto dinero como fuera posible mientras podían. Algunos ex presidentes eran

dueños de cadenas de hoteles. Otros poseían cadenas de periódicos. Otros más se retiraban con sus riquezas, aunque fuera autoexiliados como en el caso del muy corrupto campeón del TLC, Carlos Salinas de Gortari. Enfrentado a cargos por delitos criminales contra él y sus colaboradores, Salinas se retiró a Dublín, Irlanda.

Esta cúspide de la pirámide tecno-burocrática y política podría describirse de forma analítica como una "burguesía burocrática". Pero ésta no era la clase dirigente: era sólo una parte de ella, y ciertamente una parte pequeña. Como parte de la burguesía mexicana, y en la medida en que estaba integrada por capital privado mexicano y extranjero, compartía la dirección general del capitalismo y de la política oficial —movida, y de forma enérgica, por las fuerzas del capital monopólico.

Esto no equivale a negar los muchos conflictos políticos a que tenían que enfrentarse los representantes del estado y del capital monopólico, incluyendo conflictos entre ellos mismos. Sin embargo, tales conflictos rara vez llegaban a ser antagónicos, puesto que la evolución del sistema político corporativista tendía a unir, más que a dividir, los intereses de la burocracia estatal con los de la burguesía mexicana y el capital extranjero. Sólo a medida que los fracasos del neoliberalismo empezaron a ser evidentes a fines de los años ochenta, fue que el sistema corporativista empezó a resquebrajarse, al sufrir el PRI una cuarteadura de primer orden que siguió socavando su posición, a saber, las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y 1994 para la presidencia y su elección en 1997 como jefe de gobierno de la ciudad de México.

Quienes argumentaban que México estaba gobernado por una "burguesía burocrática" o al menos por una "tecno-burocracia" —que puesto que el estado gobernaba y los burócratas administraban el estado, eran los burócratas quienes gobernaban— tomaban equivocadamente la forma del gobierno político por la sustancia del gobierno de clase. En la forma el estado era la "presidencia fuerte", pero de hecho incluía a todos los altos funcionarios ejecutivos extraídos de la vida pública y privada. Lejos de ser una fuerza "externa" que independientemente "decidía" apoyar el proceso de acumulación de capital, el estado era él mismo un producto de la lucha de clases y del desarrollo económico capitalista.

Es innegable que los burócratas tomaban decisiones, pero la gama de decisiones posibles que podían tomar estaba definida por la lucha de clases y el poder de la clase dirigente o de sus fracciones dominantes, así como por los capitalistas extranjeros. Además, incluso antes de la llegada del neoliberalismo, el estado compartía cada vez más de sus empresas económicas con el capital privado —una de las razones por las que estas operaciones fueron conocidas como empresas "paraestatales". La momentánea toma de los bancos por el estado a finales de 1982 no alteró este esquema, puesto que los bancos estatales continuaron sirviendo al capital monopólico, eran administrados por muchos de los antiguos gerentes bancarios y fueron posteriormente "privatizados" cuando sus acciones fueron nuevamente vendidas al "público" —a menudo sus antiguos pro-

pietarios. Éste era un buen ejemplo de por qué era una fantasía ociosa argumentar que la burocracia o sus elementos "progresistas" podían convertir el estado capitalista en alguna otra cosa. Por consiguiente, a medida que los proletarios perseguían su liberación tenían que enfrentarse no sólo con la burguesía sino con el mismo estado.

Ciertamente, como mostró la historia, podían presentarse situaciones en las que trabajadores, campesinos o segmentos progresistas de las clases intermedias podían beneficiarse de su alineación junto al estado. Sin embargo, estas situaciones podían limitarse a casos de reforma genuina o a acciones antimperialistas concretas, como sucedió bajo el presidente Lázaro Cárdenas en los años treinta. Los movimientos sociales de México hicieron demandas al estado y periódicamente hallaron conveniente aliarse con fuerzas internas del estado para conseguir sus objetivos, pero las reformas que lograron en esta manera rara vez fueron permanentes.

Sin embargo, si las luchas de los trabajadores pobres, del proletariado industrial y de los campesinos dieran un salto cuantitativo, el correspondiente giro en el equilibrio de poder dentro de la lucha de clases se manifestaría dentro del estado. En esas condiciones excepcionales, podríamos entonces, y sólo entonces, esperar un cambio significativo en el comportamiento de los burócratas estatales hacia alguno de los polos del conflicto trabajo-capital subyacente: pueden instrumentar medidas reformistas socialistas u otras pro obreras o pro campesinas, o, más probablemente, podrían aplastar las movilizaciones con ferocidad militar. Hubo signos de ambas tendencias, especialmente de la militar, en el estado mexicano de los años noventa, aunque se auguró un salto cuantitativo en la lucha de clases, no se hizo efectivo.

Era bien sabido dentro de México que aquellos pocos individuos dentro del gobierno que llegaban a abogar por un cambio genuinamente revolucionario o eran dominados o gradualmente cooptados para posiciones más "pragmáticas" de simple reformismo. Sus reformas acabaron solamente por fortalecer el sistema que generó la necesidad de la reforma en primer lugar. Bajo el neoliberalismo, los reformadores mas genuinos se encontraron a sí mismos "fuera de escena" —una razón por la que el PRI experimentó varias divisiones que empezaron a mediados de los ochenta.

La inmensa mayoría de los burócratas públicos y privados, técnicos, supervisores y similares, formaban parte de las clases intermedias. Muchos de ellos, en términos de ingreso comparativo y naturaleza del trabajo, sufrían de un proceso gradual de proletarización. La paradoja de conseguir una oportunidad mejor en la vida a través de la educación y el acceso a empleos de "cuello blanco" era que los propios trabajos habían llegado a ser descapacitados y rutinizados, sometiendo a sus practicantes al despotismo del capital en los procesos de trabajo que se parecían cada vez más a una línea de montaje proletaria. Aunque muchas de esas personas seguían siendo "clase media" por sus valores, tendían crecientemente a caer del lado menos acaudalado de las clases intermedias cada día más polarizadas.

Complicando estas tendencias en la formación de clases estaba el sistema de tráfico de influencias de México. Este sistema implicaba técnicas tales como las siguientes: la *mordida* o soborno; la provisión de viviendas del gobierno así como de los beneficios de la seguridad social; la distribución de escaños en el Congreso y de puestos de funcionarios; promesas de promoción dentro de la extensa burocracia estatal; ofrecimientos a los intelectuales y profesionales disidentes de destinos lucrativos y prestigiosos en las oficinas de gobierno o en el sistema educativo, y la provisión a personas favorecidas de empleos de alto estatus bien fuera en el sector público o en el privado con ingresos suficientes para emplear a dos o más sirvientes domésticos y comprar bienes de consumo costosos. El mismo sistema corrupto, con su mito de proveer "para todo el pueblo", penetró las filas medias y bajas de las clases intermedias y de las clases bajas, pero con recompensas mucho menores y éxitos muy limitados.

El comportamiento político de las clases intermedias afectó decisivamente el resultado de la lucha de clases en cualquier etapa. Su comportamiento se caracterizó por una ambivalencia política que correspondía a su posición "media" en la estructura de clases —su relativa incapacidad para realizarse en las filas de la burguesía y su genuina angustia ante la gradual proletarización que les era impuesta por las fuerzas del capital. Dependiendo de la intensidad y el carácter del conflicto de clase proletariado-burgués de mayor envergadura y de acuerdo con las circunstancias históricas, una mayoría de las clases intermedias pudo consolidarse tras un extremo político u otro distinto y cambiar muy repentinamente.

Los valores manifestados por algunos en las clases intermedias de México, especialmente entre los burócratas y profesionales mejor pagados, se mezclaban a menudo con nociones autoproclamadas de reforma y de "ayudar a los oprimidos", y una existencia cotidiana materialista basada en el consumismo, el estatus a través de la ostentación de la riqueza, el miedo a la "chusma" y un sentimiento personal de pertenecer a la "gente decente" (ricos y de piel blanca). Un número significativo de empleados de "cuello blanco" de las clases intermedias hizo suya la propaganda del estado y de los medios de comunicación de "anticomunismo" y "antiterrorismo". Pero el carácter opresivo de su trabajo contribuyó a una cualidad dividida en su "conciencia de clase", notada por muchos observadores, lo que ayuda a explicar su tendencia a abandonar sus empleos y unirse a las demostraciones callejeras progresistas, como las del movimiento estudiantil de 1968.

Comenzando en los años cincuenta, estas tendencias ambivalentes entre las clases intermedias se manifestaron en la creación de fuertes movimientos contra el partido político oficial tanto desde la derecha como desde la izquierda. Opuestos al gobierno, generaron contradicciones dentro del estado como la mejor manera de manejar la disidencia —una razón detrás de los subsiguientes intentos de reformar el PRI y la eventual disidencia de la fracción de Cárdenas que examinaremos en los capítulos siguientes.

Al mismo tiempo, muchas personas políticamente preocupadas de las clases intermedias, aunque simpatizaban con los movimientos de oposición, no se

unían a ellos. Permanecían al margen, o expresaban sus posiciones políticas a través del PRI o de otras instituciones estatales. Entre estos últimos, los que sentían simpatías por la derecha presionaban por una mayor represión de los disidentes, mientras que los partidarios de la izquierda abogaban por la reforma. Muchos más rehusaban llegar ni siquiera a eso por temor a "voltear la barca" y quizá empeorar su situación económica personal. La creciente abstención en las votaciones (del 25.8% de votantes registrados en 1952 al 47.5% en 1988) y desviación política (sólo el 33.8% de los votantes elegibles respaldaron al PRI en 1979, y una mayoría asestó al PRI una sonada derrota en 1997) reflejaban un desencanto cada vez mayor.[31]

Oficialmente, las llamadas "clases medias" constituían uno de los tres sectores del PRI —el sector "popular", conocido como Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que incorporaba también a varios elementos organizados de los pobres urbanos. El mayor sindicato de la CNOP era la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Durante años, la CNOP fue más fuerte que los sectores obrero o campesino del partido (la CTM y la CNC, respectivamente), pero comenzando la década de 1960 su fortaleza relativa tendió a disminuir. Carlos Salinas de Gortari, un presidente "de política intervencionista" (1988-1994) que desafió a la vieja guardia del PRI, procuró evitar los choques con la CNOP.

No obstante, como uno de los tres sectores del PRI, la CNOP desempeñó frecuentemente un importante papel en el trato con las crecientes masas de pobres urbanos de México. A medida que nuevos movimientos sociales de elementos descontentos, tanto de pobres urbanos como de clases intermedias, surgían, se derrumbaban y volvían a surgir repetidamente desde fines de los años cincuenta hasta fines de los noventa, periódicamente la CNOP reconquistaba gran parte de su perdida fortaleza. Por ejemplo, bajo el sucesor "no intervencionista" de Salinas, el presidente Ernesto Zedillo, la vieja guardia del PRI empezó a reconducir a la CNOP hacia su antigua fortaleza. Pero Zedillo también aceleró la intervención militar contra los movimientos sociales de los pobres rurales y urbanos, permitiendo así que a menudo el "garrote" de la represión anulase la "zanahoria" del papel de la CNOP.

El proletariado y los pobres

No siendo en absoluto una fuerza unificada, las clases trabajadoras de México estaban fragmentadas y atomizadas. La tasa oficial de sindicalización de las

[31] A veces las personas más jóvenes y más instruidas estaban mejor preparadas para manifestar su descontento. Por ejemplo, estudiantes graduados universitarios, el 15 o 30% de los cuales no podían encontrar empleo, engrosaron las filas de la burocracia estatal en donde ayudaron a organizar y expandir la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (110 000 miembros en 1979), como alternativa combativa a la "oficial" Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado fundada en 1938.

clases trabajadoras —el 24% de la fuerza laboral total— era en realidad mucho más baja, puesto que muchos de los "económicamente activos" no eran contabilizados en las estadísticas de fuerza laboral. Estas estadísticas mostraban un poco más de un tercio de la población de México como "económicamente activo". Muchas mujeres, niños y personas mayores económicamente activas nunca eran contabilizadas. Los hombres empleados de forma irregular a menudo tampoco eran contados. Sin embargo, la mayor parte de las personas no contabilizadas como "económicamente activas" sí trabajaban. Trabajaban como mano de obra familiar, o como pastores, costureras, vendedores callejeros, cargadores, mensajeros, sirvientes, limpiabotas, lavacoches, vigilantes de autos, tablajeros en los mercados y trabajos semejantes. Así pues, en realidad, los que ganan menos del ya inadecuado salario mínimo legal —oficialmente más del 60% de la fuerza laboral —constituyen un porcentaje mucho mayor de la población de lo que se informa.

En general, los segmentos no sindicalizados del proletariado industrial tenían un grado menor de conciencia política que los sindicalizados, aunque sí compartían un sentido de resentimiento de clase e incluso de tiempo en tiempo se organizaban en sus centros de trabajo. De hecho, se producían signos periódicos de una nueva militancia laboral tanto entre los miembros sindicalizados como entre los no sindicalizados del proletariado mexicano.

La lucha de clases en las industrias pequeñas y medianas, en donde había menos sindicatos, era por lo general más brutal y personal que en la gran industria. Las vidas de los trabajadores y las condiciones de las empresas eran más problemáticas, la seguridad laboral era rara, y había menos oportunidades para que el trabajador consiguiera algo más que un aumento salarial simbólico —usualmente a la par con los inadecuados ajustes relacionados con la inflación que se hacían al salario mínimo legal. Muchos propietarios no podían competir con éxito con las grandes empresas favorecidas por el estado y de capital monopólico nacional y extranjero. El neoliberalismo, el TLC y las crisis monetarias de México conducían al fracaso económico de gran cantidad de estas pequeñas industrias y los despidos de cientos de miles de sus empleados.

En las áreas de los barrios bajos urbanos existían muchas fábricas que empleaban menos de cien trabajadores, evitando así la estipulación constitucional de asistencia, vivienda y otros beneficios. Los estudios de casos revelan que los dueños de esas fábricas preferían contratar a migrantes recientes de la misma región rural. A menudo contribuían con donativos para las iglesias de los pueblos de origen de los emigrantes y apadrinaban a los hijos de éstos. Las maquiladoras transnacionales de la zona fronteriza también se introdujeron en algunas regiones rurales seleccionadas. Como hemos venido señalando a lo largo de este libro, la tradición del compadrazgo tiene muchos usos, que van desde la cohesión social hasta el control social.

El capital extranjero estaba involucrado en muchas de esas fábricas o, si no lo estaba, muy pronto intervenía para comprar las más prósperas. La politóloga Susan Eckstein describe las dos mayores fábricas de ese tipo investigadas

por ella, una enlatadora y la mayor fábrica de chocolates de la nación, antes y después de su venta a las transnacionales estadunidenses en 1971. Siempre que era posible, las firmas extranjeras modernizaban la administración pero conservaban los viejos patrones de contratación y las prácticas paternalistas.[32]

Sin posibilidad de pagar los inflados alquileres, muchos de los empleados urbanos no sindicalizados residían o en los barrios bajos que alojaban a los desempleados o subempleados o cerca de ellos. Sus hogares o apartamentos eran reconocibles por su mejor construcción. Vivían acosados por el temor a quedar permanentemente sumergidos en una pobreza abyecta. Estaban desgarrados entre dos deseos opuestos: aferrarse a lo poco que poseían y tal vez mejorar un poco, o arriesgarse a participar en acciones organizadas contra sus patrones, incluso contra el propio sistema político y económico mayor, con el fin de cambiar sus vidas y las de sus hijos. Estaban abiertos a los llamados de los organizadores de sindicatos radicales o a los de sus amigos. Pero, como en el caso de las mujeres empleadas en maquiladoras que se sindicalizaban, cuando luchaban y lograban victorias la forma más práctica de preservar sus conquistas era afiliarse a la CTM o a otras estructuras corporativas, que siempre estaban bien dispuestas a absorberlas.

En cada década un número cada vez mayor de asalariados entraban y salían de las filas de los desempleados o subempleados, reduciendo las barreras que separaban a los trabajadores sindicalizados de los no sindicalizados. Esto era especialmente cierto en la construcción, en donde los propietarios gustaban de rotar a su fuerza de trabajo o usar obreros emigrantes nuevos en sus "cuadrillas". El laberíntico sistema de transporte suburbano de la ciudad de México fue construido por una mezcla de proletarios urbanos, obreros empobrecidos y campesinos (algunos de los cuales se trasladaban semanalmente a la ciudad desde sus parcelas de subsistencia).

De forma similar, en la industria petrolera nacionalizada, cuya fuerza laboral creció aproximadamente de 18 000 en 1938 a 150 000 en 1982, y luego fue reducida en más de la mitad bajo el neoliberalismo, más del 70% de los trabajadores eran contratados sobre una base temporal, y menos de dos tercios de éstos estaban sindicalizados. Pero eran colocados estratégicamente, desempeñando el 60% de las actividades relacionadas directamente con las fases de la producción (exploración, extracción, refinado, petroquímicos). Tanto si estaban sindicalizados como si no, los trabajadores petroleros temporales tenían que comprar sus contratos laborales sobre una base mensual a los sindicatos o a los contratistas laborales privados. Un sistema de caciquismo florecía en este mercado de carne humana, en una medida tal que las luchas entre *charros* por hacerse con los despojos frecuentemente acababan en asesinatos. Los trabajadores petroleros temporales a veces se organizaban y se rebelaban. Por ejemplo, en 1967 y 1975 organizaron violentas manifestaciones contra el charrismo en la ciu-

[32] Véase Susan Eckstein, *El estado y la pobreza urbana en México* (México, Siglo XXI, 2a. ed. aumentada y puesta al día, 1999).

dad de México. Incluso algunos petroleros sindicalizados con empleo permanente (entre los proletarios mejor pagados del país) rompieron con su tradición de despreciar a los temporales y manifestaron su apoyo a sus hermanos de empleo temporal.

Se puso de moda referirse a los semiempleados y desempleados urbanos como "marginados". Esto resultaba engañoso, pues implicaba que constituían una clase (o "masa") separada en los márgenes de la sociedad, extraídos de los principales procesos sociales y económicos de la acumulación capitalista y de la lucha de clases. Lejos de ser marginados, estos millones hambrientos y explotados formaban una vasta fracción de la clase obrera y eran el producto de un proceso en marcha de pauperización, la otra cara de la moneda de la acumulación capitalista. El desarraigo de las zonas rurales, su separación de los medios de producción, su aglomeración en las ciudades, todo ello constituía una parte fundamental del modo capitalista de producción, que fomentaba la reserva de mano de obra que necesitaba para su expansión.

Pero a medida que la producción industrial se volvía más de capital intensivo, cada vez eran menos los nuevos emigrantes a las ciudades o incluso residentes urbanos de largo plazo que podían hallar trabajo asalariado estable o adecuado. Por el contrario, vagaban de un empleo a otro, trabajando por una miseria como vendedores callejeros, vendedores de lotería, sirvientes domésticos, lavanderas, costureras subcontratadas (y otros más dentro del "trabajo doméstico industrial"), carpinteros, peones empleados irregularmente en las fábricas, empleados o propietarios de tiendas en pequeña escala, y así sucesivamente. Bien fuesen técnicamente desempleados o subempleados, la mayoría eran en realidad "superempleados", desempeñando a menudo más de un trabajo por persona y al menos dos empleos por pareja adulta en cada familia. Las mujeres desempeñaban cada vez más trabajo pagado y no pagado, mientras que los niños y los ancianos trabajaban siempre que podían y dondequiera que fuese.

A través de sus largas jornadas laborales y del llamado trabajo independiente realizado en las actividades familiares de subsistencia (autoexplotación, especialmente entre las mujeres), las personas empobrecidas y "superempleadas" del "sector informal" representaban para la década de los ochenta entre dos tercios y tres cuartos de la población trabajadora de México. Contribuían a la extracción capitalista de plusvalor ayudando a satisfacer los costos de la reproducción de fuerza laboral. Quizá el artículo más significativo que producían y mantenían para el capital era la fuerza de trabajo, pero, como veremos en seguida, beneficiaban al capital también de otras maneras vitales.[33]

La inmensa mayoría constituía un subproletariado en un doble sentido: primero, como una población relativa excedente o parte del ejército laboral de reserva; segundo, como un sector que se movía dentro y fuera de las clases tra-

[33] El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en 1995 que 25 millones de mexicanos de los 38 millones de "población económicamente activa" carecían de empleo fijo y trabajaban en el sector "informal" (*La Jornada*, 12 de julio de 1996).

bajadoras agrarias, industriales y de servicios y comerciales. Al aprovecharse de la fuerza de trabajo de este fondo en expansión de obreros hambrientos de empleo, tanto en México como en otros lugares, las transnacionales internacionalizaban las relaciones capitalistas de producción, reorganizando las bases de la explotación y las condiciones del empleo y el desempleo en todas partes, incluyendo a los "países de origen" más industrializados de las transnacionales.

A medida que el capital y la producción trascendían las fronteras nacionales, volviéndose transnacionales, la mano de obra también se hacía más móvil, cruzando las fronteras nacionales —pero a una tasa más lenta que el capital. Para los capitalistas monopólicos con base en los países más industrializados, esto permitía el acceso a un ejército laboral de reserva creciente y a una tasa de ganancia más elevada. A su vez, esto tenía un impacto negativo a largo plazo sobre la fuerza de los sindicatos obreros y las tasas salariales en las naciones más industrializadas, que estaban experimentando también un proceso de "informalización" de los "sectores formales" de la economía (como en la industria electrónica y de repuestos de la industria automotriz de Estados Unidos).

El crecimiento del "sector informal" y la supuesta "nueva división del trabajo internacional" era un viejo proceso derivado de la creación y distribución, por el imperialismo, de la fuerza de trabajo excedente a escala internacional. Las diferencias nacionales en niveles salariales se relacionan en parte con las ventajas del poder acumuladas en el curso del tiempo por las naciones imperialistas. Desde esta evolución histórica del imperialismo se desarrollaron la así llamada "nueva división internacional del trabajo" y la "necesidad de ser competitivos en el mercado global", utilizadas por las transnacionales para llevar más lejos aún su acumulación de capital.

Sin embargo, el cumplimiento de la internacionalización de las relaciones de producción capitalista fue obstaculizada por las guerras antimperialistas de liberación nacional, rivalidades interimperialistas y patrones de desarrollo y conflictos de clase desiguales dentro de las naciones capitalistas. Todas ellas no eran sino formas, o expresiones parciales, de la contradicción entre el trabajo y el capital.

Karl Marx definía una *población excedente relativa* como una "condición de existencia del modo capitalista de producción". El capitalismo industrial, afirmaba Marx, "se funda sobre la formación constante, sobre la absorción mayor o menor y la reconstitución del ejército industrial de reserva o sobrepoblación",[34] independientemente del crecimiento absoluto de la población. En este sentido, las raíces del empobrecimiento de millones de mexicanos tenía poco que ver con el crecimiento de la población como tal (que de hecho había disminuido a partir de 1970) y en cambio mucho que ver con la naturaleza de la producción capitalista y su penetración en las áreas más remotas de las zonas rurales.

[34] Marx, *El capital* (México, Siglo XXI, 1975), tomo I, vol. 3, p. 787. Éste es el origen de la polémica de Marx contra Malthus, tratada para el caso mexicano por Luis A. Serrón, *Scarcity, exploitation, and poverty: Malthus and Marx in Mexico* (Norman, University of Oklahoma Press, 1980).

La población excedente relativa podía adoptar una forma flotante (como en los centros industriales modernos, tan pronto empleados como despedidos), la forma latente (mano de obra agrícola subempleada, mal pagada, pronta a emigrar a la ciudad) o la forma pauperizada (los trabajadores desempleados, huérfanos, niños pobres, desmoralizados, mutilados o achacosos). Cualquier forma que adoptara, crecía en fuerte correspondencia con el aumento de riqueza social, capital en funcionamiento, productividad laboral, y la masa absoluta del proletariado. En su forma vigorosa, Marx expresó ese proceso dialéctico como sigue:

> La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza [...] Cuanto mayores sean, finalmente, las capas de la clase obrera formadas por menesterosos enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Esta es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista [...] La ley según la cual el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo reduce progresivamente, en proporción a la eficacia y la masa de sus medios de producción, la masa de fuerza de trabajo que es necesario gastar, se expresa en el terreno capitalista —donde no es el trabajador el que emplea los medios de trabajo, sino éstos al trabajador— de la siguiente manera: cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será la presión ejercida de los obreros sobre sus medios de ocupación, y tanto más precaria, por tanto, la condición de existencia del asalariado.[35]

En épocas modernas, el carácter antagónico de la acumulación de capital —"acumulación de riqueza en uno de los polos, acumulación de miseria, agonía del trabajo, esclavitud, ignorancia, brutalidad, degradación mental, en el polo opuesto"—[36] generó contradicciones que Marx no podía prever. Dio origen a la pauperización de millones de personas en todas partes, especialmente en países dominados por el imperialismo como México, con burguesías relativamente débiles acostumbradas a contar con mano de obra subvalorada. Entre los problemas sociales generados por la miseria de las masas están las enfermedades, el crimen, la adicción a las drogas y las guerras entre pandillas. Esto contribuía a la creciente tendencia de gran número de pobres a organizarse, ganar conciencia política y resistir o rebelarse. Por su parte, se incurría en gastos considerables para mantener cierto grado de estabilidad y para controlar a las

[35] Marx, *El capital*, cit., pp. 803-804. No es cierto que Marx llamase a las diversas formas de sobrepoblación "las clases peligrosas", un término coloquial que él aplicaba sólo a los vagabundos, criminales y prostitutas —y eso entre comillas. Tampoco sugirió nunca que los más desposeídos, los llamados *lumpenproletariat*, sólo pudieran servir a las causas reaccionarias. Él reconocía en el sufrimiento de la sobrepoblación la misma degradación del trabajo que enajena recientemente a todo el proletariado a medida que el capitalismo se desarrolla.

[36] *Ibid.*

masas de personas empobrecidas, bien fuese a través de servicios públicos, de la actuación policiaca o de la cárcel.[37]

Así, las masas pauperizadas eran al mismo tiempo funcionales y disfuncionales para la acumulación capitalista. Sumas crecientes de capital y energía tenían que ser canalizadas fuera del proceso de acumulación de capital con el fin de crear almacenes de alimentos administrados por el estado (Conasupo); servicios médicos mínimos (IMSS-Coplamar, introducido a principios de los años setenta y que cubría el 15% de la población mexicana aunque dejaba al 42% sin ninguna forma organizada de obtener atención de salud); vivienda; servicios sanitarios, y control militar y policiaco de los cada vez más amplios barrios bajos.

A finales de 1998, los barrios bajos representaban la mitad de la población de la mayor área metropolitana del mundo, la ciudad de México, que contenía más de 23 millones de personas, o cerca de una cuarta parte de la población del país, y adonde llegaban 10 000 o más nuevos residentes cada día. El mayor y más antiguo era Netzahualcóyotl (en náhuatl "coyote que ayuna"), conocido comúnmente como "Neza". Fundado cerca del aeropuerto internacional a fines de los años cuarenta por unos 3 000 ejidatarios, Neza se multiplicó como los hongos hasta convertirse en una selva urbana inmanejable de más de tres millones de habitantes esparcidos por un territorio de cerca de 400 kilómetros cuadrados —una de las "ciudades" más grandes del país. Solamente la mitad de sus residentes estaban empleados, y cerca del 80% de ellos trabajaban fuera de la zona. Por sus lados norte y poniente en las afueras de la ciudad de México estaba otra "colonia proletaria" de carácter demográfico casi idéntico, la Delegación Gustavo A. Madero. Muchos otros suburbios más pequeños salpicaban el resto de la ciudad.

Un estudio de una de estas "colonias proletarias" a principios de los años ochenta encontró que 89% de las cabezas de familia eran proletarios (aunque sólo la mitad de los mismos recibían un salario estable); 10% pertenecían a la pequeña burguesía, y apenas un 1% eran "lumpenproletarios".[38] El estudio halló que gracias a su empleo frecuente aunque irregular en fábricas, y a vivir puerta por medio con proletarios empleados regularmente, los residentes de la "colonia" estaban desarrollando una conciencia de clase más proletaria y se estaban integrando en una cultura de clase más amplia (no "subclase" o cultura

[37] El Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem), una tropa de élite de asalto paramilitar, fue fundado para arrojar a los "invasores de tierras" del extrarradio de la ciudad de México. Sus violentos ataques provocaron una campaña a principios de los ochenta por parte de coaliciones políticas de tendencia izquierdista para exigir su disolución. A mediados de los noventa, unidades del ejército mexicano y escuadras policíacas bien armadas y altamente especializadas patrullaban gran parte de la ciudad de México, ofreciendo un despliegue de fuerza intimidatorio pero costoso. (En 1997 Estados Unidos ocupaba el primer lugar en el mundo por el número de presos per cápita, reflejando el hecho de que el empobrecimiento no se limitaba a las naciones del tercer mundo.)

[38] Véase Pedro Moctezuma y Bernardo Navarro, "Clase obrera, ejército industrial de reserva y movimientos sociales urbanos de las clases dominadas en México: 1970-1976", *Teoría y Política* 1, núm. 2 (octubre-diciembre de 1980), pp. 53-72.

"nacional", aunque esto también existía). Con el empeoramiento de las condiciones económicas para las clases más bajas desde el momento del estudio, sin embargo, se han desarrollado signos de aumento de la criminalidad en algunos de los barrios bajos de México.

Las diversas ocupaciones emprendidas por los depauperados los integraban aún más en el proceso de acumulación de capital, bien fuese mediante su producción directa de plusvalor o a través de su papel en la circulación, distribución y servicio de bienes de consumo. Un buen ejemplo de su producción de plusvalor era su extensa operación de talleres de explotación en el interior de México. Solamente en el Distrito Federal había más de 300 000 maquiladoras de ropa.

En la industria del calzado, en donde eran conocidos como "picas", había muchos más de tales talleres suburbanos a todo lo largo de la nación. Estas operaciones de zapatería producían más de la mitad de todos los zapatos del país (incluyendo otros para la exportación por valor de varios millones de dólares), utilizando maquinaria moderna importada así como cuero y materiales sintéticos importados. El plusvalor producido iba a las compañías curtidoras y zapateras. Cientos de miles de otros talleres similares producían muebles, partes para construcción, artículos de piel, diversos repuestos o partes de automóviles y otros semejantes, para ganancia de los capitalistas.

En los talleres de ropa, los individuos (que cosen en sus casas) o los dueños de los talleres (que contratan a unos cuantos trabajadores para que trabajen en sus casas) poseen parte del capital constante, a menudo maquinaria moderna de corte y confección que han comprado a crédito o con sus ahorros. Sin embargo, dependen de los capitalistas para las materias primas (textiles, piezas de recambio, etc.), que a menudo, al igual que los tradicionales "destajistas" del Lower East Side de Nueva York, subcontratan con ellos el trabajo (el llamado "sistema de trabajo por fuera"). Cuando los "propietarios" del taller suburbano intentan comprar las materias primas por fuera del mercado monopolizado, los precios aumentan más allá de su capacidad para pagar, o simplemente se les niega la posibilidad de compra.

Los estudios de caso han estimado que la tasa de apropiación de plusvalor por los capitalistas que emplean este tipo de trabajo productivo, la mayor parte del cual es femenino, es más del doble de la de las fábricas de ropa en gran escala que contratan a proletarios regulares.[39] Ni siquiera el "propietario" del taller que explota el trabajo de sus vecinos más pobres puede apropiarse de una porción del plusvalor que allí se produce. De hecho, usualmente gana más cuando no tiene que contratar a otros trabajadores, puesto que el "salario" pagado en la autoexplotación es normalmente la mitad o menos del que se le paga a un trabajador contratado (y a su vez éste es menos de la mitad del salario mínimo

[39] Jorge Alonso *et al.*, *Lucha urbana y acumulación de capital* (México, Ediciones de la Casa Chata, 1980); José Antonio Alonso, *Mujeres*, y su *Las costureras domésticas de Netzahualcóyotl* (Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1981), y *Sexo, trabajo y marginalidad urbana* (México, Editorial Edicol, 1981), y Cristina Padilla, "Maquiladoras de Santa Cecilia: ¿marginadas o asalariadas?", tesis de licenciatura, Universidad Iberoamericana, 1978.

legal). Más aún, los dueños de talleres son a menudo emigrantes rurales recientes que no han realizado antes este tipo de trabajo —y que son fácilmente victimizados por los capitalistas que utilizan el sistema de "dar trabajo afuera".

Debido a que el número de talleres suburbanos en diversas industrias ascendió considerablemente durante la era neoliberal de los años ochenta y noventa —en parte debido a los febriles intentos de la clase obrera por compensar sus insatisfactorias ganancias o empleos— no pueden considerarse como modos de producción precapitalistas destinados a desaparecer. Por el contrario, estos talleres eran un producto y una herramienta de la acumulación capitalista moderna.[40] Considerados desde el ventajoso punto de mira capitalista, eran provechosos porque los salarios estaban por debajo de las normas o sencillamente eran inexistentes; no había problema con sindicatos, huelgas o beneficios laborales impuestos por el estado, y gran parte de los costos del capital constante eran pagados por los "propietarios" de los talleres. Además, la tasa de recuperación del costo del capital constante era rápida, una vez que el capitalista recuperaba el costo de las materias primas con la venta de los artículos terminados, pero era bajo para el "dueño" del taller, cuya pagos de gastos fijos y maquinaria se prolongaban durante un periodo mucho más largo.

Los talleres suburbanos propiciaban aún más la acumulación de capital en formas menos directas. El capital se beneficiaba políticamente de la creencia de los operadores de muchos talleres suburbanos de que ellos no eran proletarios debido a que poseían parte de sus propios medios de producción. Sin embargo, ésta era una falsa creencia, puesto que en términos de sus relaciones generales de producción no eran sino proletarios disfrazados cuya propiedad de un humilde taller enmascaraba su inserción en una estructura capitalista más amplia que se apropiaba de los frutos de su labor. De forma similar, los trabajadores contratados por esos dueños de talleres explotadores a menudo tendían a considerar a sus patrones inmediatos como al "enemigo", más que a los verdaderos apropiadores de su plusvalor, los capitalistas que residían en otra parte.

La prueba final, si es que aún se necesita, de que los "propietarios" de los talleres suburbanos y "sus" empleados eran proletarios y no pequeñoburgueses fue dada de una forma dramática inmediatamente después del terremoto de 1985 en la ciudad de México. Con las mujeres y sus máquinas de coser todavía enterradas bajo los escombros, los camiones enviados por los capitalistas ausentes llegaron no para rescatarlas sino para salvar las máquinas. Los soldados impidieron que los voluntarios entraran hasta que las máquinas fueron evacuadas en los camiones. Días más tarde, indignadas costureras caminando con muletas, seguidas por otras costureras que no se encontraban trabajando en el

[40] El famoso historiador de la economía mexicano Sergio de la Peña señaló hace mucho tiempo que el modo de producción capitalista "por dondequiera se extiende, absorbe otros modos de producción" en vez de coexistir con ellos. Véase de la Peña, "Acumulación originaria y el fin de los modos de producción no-capitalistas en América Latina", *Historia y Sociedad* núm. 5 (primavera de 1975), pp. 65-73.

momento del temblor, realizaron una marcha de protesta de miles de personas. Exigían, y obtuvieron en seguida, el derecho a sindicalizarse.[41]

A menudo se asume que la mayor parte de los depauperados consiguen empleo en los servicios o sector terciario de la economía en rápida expansión, pero los estudios de caso indican lo contrario. Es verdad que, por ejemplo, una de cada cinco mujeres empleadas en la ciudad de México en los noventa era sirvienta doméstica, y había un número indeterminado de adolescentes de entre ocho y catorce años dedicadas a trabajo doméstico mal pagado. Sin embargo, un porcentaje mucho mayor estaba empleado en actividades productivas como las de taller o fábrica, o en ostensibles actividades comerciales "independientes" para los propósitos de la acumulación de capital (pero no el de ellos). Una vez más, ahora como dependientes de tienda, "propietarios" de puestos o vendedores callejeros (3 millones de vendedores callejeros solamente en el Distrito Federal), una apariencia pequeñoburguesa enmascaraba una realidad proletaria o depauperada.[42]

Un estudio sobre "misceláneas" —tiendas de una sola pieza que venden tabaco, refrescos embotellados, galletas, aceites y artículos semejantes— encontró que cerca de un tercio de sus productos eran de origen extranjero y más de dos tercios eran enviados directamente desde la fábrica; los precios eran los mismos en todo el Distrito Federal (esto es, precios fijos), y que el "comerciante" local promedio trabajaba quince horas por día y ganaba un 45% menos que el salario mínimo.[43] Los sobornos eran de rutina, y una red de falsos inspectores de salud se nutrían como parásitos de los cientos de miles de tales tiendas, señaladas típicamente por carteles de Coca-Cola. El estado cobraba una serie de pequeños impuestos, y el operador de la tienda estaba obligado también a pagar cuotas a la Confederación Nacional del Pequeño Comercio. Los millones de depauperados dedicados al pequeño comercio de éste y otros tipos eran dependientes para sus "oportunidades mercantiles" de la Federación Coordinadora de Pequeños Industriales y Comerciantes, parte del aparato de "clase media" de la CNOP priista.

Una red "personalista" de funcionarios de bajo nivel de diversas organizaciones estatales se aseguraban de que estos operadores y vendedores de tiendas les pagasen sus cuotas y que acudiesen a los mítines del PRI. La falta de cooperación podía provocar el despojo de una tienda o de una ruta por el funcionario local, o que éste pusiera a otra persona igualmente necesitada al frente de la tienda o puesto, vendiendo uno de los productos a precio inferior. También había otras formas de convencimiento menos delicadas.[44] El proceso no era di-

[41] Para entrevistas con algunas de las costureras implicadas, véase José Antonio Alonso, *Mujeres*. Véase también Silvia Tirado, "Weaving dreams, constructing realities: the Nineteenth of September National Union of Garment Workers in Mexico", en Sheila Rowbatham y Swatsi Mitter, comps., *Dignity and daily bread: new forms of organizing among poor women in the Third World and the First* (Nueva York, Routledge, 1994).

[42] Jorge Alonso *et al.*, *Lucha urbana*, p. 245.

[43] *Ibid.*

[44] Véase Eckstein, *El estado y la pobreza urbana*.

ferente a lo que observamos en el análisis del capítulo 5 acerca del control de la burocracia laboral sobre las cuotas, salarios y empleos de quienes pretendían y conseguían empleo en la gran industria o en las maquiladoras transnacionales.

Los depauperados también contribuyeron a la acumulación de capital en el consumo de bienes. Los barrios bajos ofrecían un mercado inmenso y fecundo para capitalistas grandes y pequeños: para la venta de muebles, productos de madera, suministros escolares y de papelería, refrescos embotellados, licores, tabaco, alimentos procesados o empacados, materiales de construcción y artículos domésticos diversos, casi todos los cuales abarcaban porciones importantes de la inversión de capital monopólico extranjero o mexicano. Los habitantes de los barrios bajos, imposibilitados de viajar a otros lugares para obtener productos a precios razonables, proporcionaban un mercado cautivo que pagaba precios exorbitantes por cualquier cosa desde las tortillas hasta la renta. Aunque algunos de los pobres urbanos llevaban ropa para coser en sus casas o trabajaban en los "talleres domésticos" del suburbio, normalmente no ahorraban ni dinero ni tiempo. Por el contrario, trabajaban duro, producían, distribuían y acababan comprando las mismas cosas que producían a precios inflados.

Al mismo tiempo, la mayor parte de los trabajadores del "sector formal" compraban numerosos artículos y servicios a precios relativamente bajos a las masas empobrecidas pregonando sus mercancías o habilidades en las calles del barrio o en los mercados. Esto ayudaba a reducir la presión sobre lo que el salario podía comprar, e indirectamente subsidiaba a los capitalistas.

Así, tanto en la producción, distribución y venta como en el consumo de los productos, los depauperados eran apenas marginados del sistema nacional e internacional de acumulación de capital. Además, el modo de producción capitalista suplantaba o "absorbía" los modos no capitalistas de producción; no los "preservaba", ni "se combinaba con ellos" ni "coexistía con ellos". Reestructuraba muchas de las formas de actividad económica, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, para el objetivo de la acumulación de capital en gran escala. Lo que parecían "formas no capitalistas" de producción y distribución ofrecían al capital materias primas, ciertas necesidades de vida para la reproducción de la fuerza de trabajo, e incluso productos terminados.

En las zonas rurales, un proceso de descampesinización quedaba disfrazado por la producción campesina para los mercados y para la subsistencia, limitando con ello la consumación de la proletarización en el sentido moderno. Pero en las ciudades un proceso de proletarización y pauperización se disfrazaba a menudo con formas pequeñoburguesas de actividad económica que con gran frecuencia generaban plusvalor y creaban de nuevo estas "formas no capitalistas" de producción y distribución, ayudando con ello a combatir la tendencia descendente de la tasa de ganancia inherente a la producción industrial de capital intensivo, absorbiendo al mismo tiempo a algunos de los desempleados e inculcándoles una ideología que el antropólogo Sol Tax llamó una vez "capitalista centavero".[45]

[45] Sol Tax, *Penny capitalism* (Chicago, University of Chicago Press, 1963).

La extensa pauperización de muchos que resultó, y que acompañó la transformación de algunos en una moderna fuerza de trabajo industrial, negaba los beneficios del estatus proletario (seguridad social, sindicalización, etc.) a millones, al tiempo que limitaba aquellos beneficios conquistados en duras batallas peleadas por el proletariado industrial.

Por éstas y otras razones, el capital monopólico buscó repetidamente fortalecer sus relaciones con las "economías domésticas" basadas en pueblos o barriadas. Esto se reflejó en los programas del Banco Mundial de "invertir en los pobres", que ya examinamos antes en este mismo capítulo. Sin dejar de levantar mega-embalses y otros proyectos destructores del medio ambiente en interés de la agroindustria y del capital privado, el banco acentuaba simultáneamente la financiación de la agricultura de subsistencia y de empresas de vecindades urbanas "independientes".

El 26 de septiembre de 1977, el presidente del Banco Mundial Robert McNamara (antiguo ejecutivo de la Ford y secretario de Defensa de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam) diseñaron el componente urbano de esta estrategia. Dijo que el banco planeaba crear y ayudar a los productores independientes en el desarrollo de operaciones artesanales, talleres domésticos, pequeñas tiendas de alimentos (misceláneas), y otros semejantes. Vinculando al mayor número posible de pobres urbanos a los sistemas de crédito internacionales era una forma más de integrarlos al capital monopólico, que a su vez acumulaba nuevos dividendos en su realización de plusvalor mediante la comercialización de productos artesanales y la venta de sus propios productos en las nuevas tiendas establecidas.

El potencial político de los pobres

Como ya lo han ilustrado numerosos movimientos sociales entre los pobres urbanos y, en 1994, el levantamiento zapatista en Chiapas, el número y la rabia crecientes de los depauperados pueden provocar consecuencias políticas de largo alcance. Sin embargo, de todos los movimientos sociales, los de los depauperados son los menos estables, congruentes o predecibles. Su orientación política a menudo depende de los movimientos sociales y del carácter político de otros grupos de la sociedad, particularmente del proletariado empleado, la pequeña burguesía y a veces de los intelectuales que se convierten en activistas políticos. Los sacerdotes que predican la teología de la liberación coexisten con sectarios y místicos evangélicos en Neza y en otras colonias.

El estado utiliza el populismo y el paternalismo con el fin de limitar a los campesinos y pobres urbanos en su ambición de poseer una parcela de tierra o una habitación y mantenerlos tan dependientes como sea posible de los favores del estado. Muchos de los depauperados tienen así una tendencia a apoyar el *statu quo*, y a tolerar o incluso respaldar los valores capitalistas y reaccionarios. Ocho años de alfabetización, cooptación y trabajo político en Neza mostra-

ron al jesuita Martín de la Rosa que "los valores de la ideología burguesa han sido profundamente incorporados en la conciencia de gran parte de las clases populares".[46] Los datos de sus entrevistas y las de otros sugieren que casi todos los individuos dedicados al pequeño comercio, así como muchos propietarios de talleres, ven sus situaciones como determinadas por fuerzas de clase, sociales y políticas más grandes y fuera de su control, pero aún siguen tendiendo a mezclar los objetivos pequeñoburgueses de búsqueda de ganancias (o de pago de deudas) con los fines proletarios de rebelarse contra la opresión.

Refiriéndose a la "ironía de la organización", la politóloga Susan Eckstein concluye que muchos de los depauperados han mostrado gran voluntad y habilidad para organizarse, sólo para encontrar que sus diversas organizaciones, a través de la cooptación o de las regulaciones gubernamentales, acaban por servir para "legitimar un régimen, extender el ámbito de administración de un gobierno, y reforzar las injusticias sociales y económicas existentes".[47] Cuando la cooptación falla, se recurre a la represión: desde la quema de las chozas de cartón de los colonos invasores hasta el asesinato de los líderes, incluyendo a los curas radicales (como en Torreón y Chihuahua en los setenta, o en Chiapas más tarde).

Pero la cooptación es un juego tramposo. Francisco de la Cruz, un líder cooptado de la colonia más antigua y políticamente consciente, auto-organizada y con su policía propia, la "2 de Octubre" (creada en 1969 por invasores de tierras), declaró que había sido arrestado en marzo de 1981 porque el PRI (al que se había afiliado años antes) le había pedido que se convirtiera en diputado del Congreso "a cambio de vender a mi gente". Muchos progresistas pensaban que él ya se había vendido antes, porque la colonia "2 de Octubre" estaba cada vez más rebosante de la corrupción que él había propiciado.

Aún más ominoso fue lo que sucedió la noche del arresto de de la Cruz. Miles de policías y militares fuertemente armados, muchos a caballo, atacaron la colonia en las primeras horas de la madrugada y la arrasaron hasta los cimientos. Mujeres, niños y ancianos que dormían fueron aplastados en la confusión y luego acarreados hasta campamentos temporales para esperar el "reasentamiento" de algunos de ellos en habitaciones proporcionadas por el estado en otra barriada. La incursión misma no era algo nuevo —durante años el estado había enviado tropas y unidades de élite como el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem) a las colonias militantes para matar, herir o intimidar a sus residentes, reflejando la intensidad de la lucha de clases que abruma las vidas cotidianas de millones de mexicanos empobrecidos.

Pero el salvajismo de la redada del amanecer en la "2 de Octubre" fue una escalada clara y simbólica, que sirvió para advertir a todos los habitantes de suburbios politizados de que ellos podrían ser los próximos. Muy poco después de

[46] Véase Martín de la Rosa, *Promoción popular y lucha de clases: análisis de un caso, Netzahualcóyotl* (México, Taller de Impresiones Populares, 1979), p. 139.

[47] Eckstein, *El estado y la pobreza urbana*, pp. 96 ss.

la incursión, el gobernador de Nuevo León amenazó públicamente al independiente Frente Tierra y Libertad, establecido en un barrio bajo, con una acción similar. Se cree que unas cuantas de las mujeres organizadoras de esos suburbios más tarde se trasladaron a Chiapas para unirse allá a la rebelión zapatista.

Más grupos de choque policiacos de élite emergieron en los años ochenta y noventa, con nombres como "zorros" y "jaguares". En noviembre de 1997 varios miembros de los zorros fueron acusados de torturar y asesinar a seis jóvenes de la colonia Buenos Aires en la ciudad de México. Entonces unos 360 zorros se amotinaron, provocando una confrontación momentánea con tropas del ejército antes de que la paz fuese restaurada. Antes, en 1997, se creía que la policía de Neza había golpeado brutalmente a cuarenta y ocho personas al irrumpir en un concierto de música punk. Obviamente, la vida en los suburbios se parecía a una caldera hirviente.

El reconocimiento del potencial de conciencia política entre los pobres no niega las limitaciones impuestas en una formación social corporativista, controlada y reglamentada como la de México. La socióloga Diane E. Davis ha señalado que a menudo "los pobres y las clases medias tradicionales de México" se han unido "con ciertas facciones locales del capital en contra de otras" y se han alineado "con actores estatales locales [municipales] en contra de trabajadores industriales organizados, entonces en alianza con actores estatales nacionales".[48] Dividir y gobernar a las clases trabajadoras cada vez más atomizadas es, de hecho, una función principal del PRI y de su sistema corporativista.

El gobierno mexicano actuó para reglamentar a los pobres, concentrándolos en ciertas áreas, organizando su comportamiento político a través del sector de la CNOP del PRI y canalizando su actividad económica. No impuso cuotas o leyes laborales a los talleres. Toleraba un alto grado de sobornos, fraudes, brutalidad y complicidad policiaca en los flujos migratorios a las ciudades y especialmente a Estados Unidos. Cuando no estaba expulsando a invasores de las tierras ocupadas, alentaba una falsa "pequeñaburguesización" de los pobres organizándolos en mínimas redes comerciales, regulando sus mercados e introduciendo planes de concesión de tierras y un grado mínimo de servicios públicos —para confirmarlos como "propietarios respetables de casas o departamentos".

El gobierno también patrocinaba o impulsaba la "auto-ayuda" para los ocasionales invasores de tierras, proporcionando entrenamiento o programas de servicios. Por ejemplo, se establecieron "centros de entrenamiento" para mujeres indias que emigraron a la ciudad de México (las llamadas "Marías"). En los centros, las habilidades artesanales de las mujeres eran explotadas para producir muñecas de trapo, vestidos, accesorios de cocina y cosas por el estilo. A las mujeres se les pagaban salarios simbólicos, pero si se atrevían a pedir más se les recordaba que no eran más que "estudiantes" a las que sus "profesores" estaban enseñando "habilidades". A continuación sus productos artesanales eran

[48] Davis, *Urban Leviathan*, pp. 312-13.

vendidos a los residentes de suburbios lujosos como San Ángel y Polanco o, cada vez más desde la instalación del TLC, exportados a Estados Unidos.

Los depauperados eran al mismo tiempo esenciales para el proceso productivo capitalista y una fuerza crítica en la lucha para remplazarlo por otro más democrático, colectivo o socialista. Esto era claramente reconocido no sólo por el PRI, sino también por los imperialistas, que invertían millones de dólares en proyectos de investigación diseñados para controlar o para ganarse a los "marginados", y en armamentos para los aparatos represivos del estado, incluyendo la tecnología militar más sofisticada para los grupos de choque, control de las multitudes, contrainsurgencia y mantenimiento de la "estabilidad interna". Globalmente, a pesar de las pretensiones del neoliberalismo para dejar fuera la intervención estatal y dejar todo en manos del libre mercado, el ritmo frenético de la acumulación de capital nacional e internacional aceleró la intervención estatal. Esto produjo un aumento de la represión, la militarización de la sociedad y la burocratización y organización tecnocrática de grupos sociales. Todas estas tendencias eran evidentes en México.

Pero la mayor parte de las redes organizativas "cotidianas" entre los depauperados en México eran (con un creciente número de excepciones) no progresistas políticamente: mínimos sindicatos del crimen; sistemas familiares dominados por los hombres; sobredependencia de instituciones religiosas o sociales como el "compadrazgo" (que posee un aspecto positivo en términos de supervivencia económica); la deferencia tradicional al "patrón" y los sistemas informales patrón-cliente relacionados, y así sucesivamente. Casi todas estas formas de organización social servían para bloquear la organización política para el cambio progresista.

Desde el punto de vista de los habitantes de los barrios bajos, cuyos movimientos sociales usualmente se limitaban a luchas por servicios públicos, empleos, elecciones de funcionarios locales y cosas semejantes, percibirse a sí mismos como "marginados" de la sociedad en vez de integrados en el más amplio proletariado, implicaba graves consecuencias políticas y humanas. De forma similar, estos organizadores que se autosacrifican y que intentaban instigar o apoyar los movimientos políticos o sociales del suburbio sobre la base de una teoría o suposición de "marginación" era improbable que consiguieran algo más que objetivos temporales basados en la caridad, la autoayuda y la asistencia mutua.

Algo más importante era que la lucha contra la opresión de las mujeres tanto en su forma patriarcal como capitalista era un tema central en cualquier análisis de clase serio y una estrategia potencialmente lograda para el cambio político o social. Como ya hemos visto, las mujeres constituían el principal grupo superexplotado entre los depauperados y gran parte de la clase obrera. Constituyendo bastante más de un tercio de la fuerza de trabajo de México para 1998, las mujeres subsidiaban tanto a las empresas capitalistas como a las economías domésticas —y eran esenciales, no marginales, respecto de ambas (incluyendo las transnacionales propietarias de las plantas maquiladoras). El trabajo domés-

tico gratuito de las mujeres facilitaba a los empleadores pagar menos a todos los trabajadores, mientras que las ideologías y prácticas de género relacionadas hacían a las mujeres todavía más superexplotables.

De todos los movimientos sociales en la historia de la humanidad, los de los pobres urbanos fueron siempre los menos estables o predecibles. Pero su poder se ha manifestado repetidamente. Más recientemente, los pobres urbanos, y especialmente las mujeres, han desempeñado un papel central en numerosos intentos de revolución —Irán, Filipinas, Sudáfrica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, por nombrar sólo unos cuantos. Cualquiera que haya sido el resultado a largo plazo de cada uno de estos intentos de cambio particulares, nadie puede negar su profundo impacto nacional, regional e internacional.

El papel de los depauperados y de las mujeres entre ellos no fue sólo el de un "ejército laboral de reserva", sino también el de un brazo activado enormemente importante de acumulación de capital para los capitalistas domésticos y extranjeros. Reconocer ese papel ha demostrado ser crucial para la lucha de clases en México, que adquirió características de género, étnicas e internacionales crecientemente significativas a partir de 1968.

CAPÍTULO 7

PETRÓLEO Y NEOLIBERALISMO: 1968-1993

Cuando se perpetúan los programas de estabilización [del FMI], justificados por condiciones transitorias, resultan injusticias mayores que las supuestamente corregidas. Fatalmente, los salarios de los trabajadores se comprimen, el capital se centraliza y se reduce el espacio de maniobra del estado. La capacidad del estado para resolver conflictos se anula y se cancela su posibilidad de gobernar.

Presidente José López Portillo, Tercer informe a la nación, septiembre de 1979

Si El Salvador tiene una revolución, entonces los campos petroleros de México, a 300 kilómetros de distancia, serán afectados por la revolución; no podemos permitir ninguna de las dos cosas.

Funcionarios del Departamento de Estado a Enrique Álvarez Córdoba, presidente del Frente Revolucionario Democrático Salvadoreño, relatado por Álvarez a los miembros de la Riverside Church de la ciudad de Nueva York, agosto de 1980[1]

Ahora que el siglo XX se acerca a su término, ha surgido una crisis en el estado corporativista mexicano. Esta crisis parece derivar de una deuda externa colosal y de las fuertes caídas en los precios del petróleo en 1981, 1986 y 1998.[2] Sin embargo, en la actualidad, la del estado mexicano es una crisis tanto económica como política, con causas estructurales que se remontan a periodos anteriores.

Económicamente, la crisis tiene sus raíces en los problemas descritos en los capítulos precedentes: patrones desiguales de acumulación de capital debidos a la dominación extranjera y la dependencia histórica de una burguesía débil en la mano de obra barata; un fracaso correspondiente en desarrollar bien fuese un mercado doméstico grande y dinámico o una producción vigorosa de capital y de bienes intermedios; y los consiguientes niveles más bajos de productividad en el capitalismo mexicano, lo que ha hecho a los productos mexicanos menos capaces de competir con los extranjeros. Esta incapacidad

[1] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1980. Tres meses después, fuerzas ultraderechistas secuestraron a Álvarez y a otros líderes del Frente mientras daban una conferencia de prensa en San Salvador y los asesinaron.

[2] La caída de los precios del petróleo en 1981 contribuyó a la crisis de la deuda de 1982; la caída de 1986 precipitó el desastre de la bolsa mexicana de 1987, y la caída de 1998 socavó todavía más la solvencia del estado.

para competir reforzó la dependencia de la burguesía mexicana de la mano de obra barata, creando un círculo vicioso. También ha contribuido a la creciente dependencia de México del capital extranjero y al agotamiento de los modelos de "industrialización para la sustitución de importaciones" y del "desarrollo estabilizador", seguidos por los fracasos del neoliberalismo.

Este capítulo examina la interacción entre la lucha de clases, el género, la etnicidad, la política y la economía, desde el levantamiento estudiantil de 1968 y durante los doce años de neoliberalismo anteriores a la rebelión zapatista de 1994 y al establecimiento del TLC. El capítulo empieza con un examen de las causas económicas subyacentes a la crisis del estado y la naturaleza contradictoria del estado corporativo capitalista. Luego sigue con la principal expresión política de la incipiente crisis, la revuelta estudiantil de 1968. Después, examinamos los movimientos sociales de los setenta y principios de los ochenta, incluyendo las actividades guerrilleras, la organización campesina, la nueva militancia sindical, las protestas de los pobres urbanos y los importantes papeles desempeñados por las mujeres y los indígenas en esos movimientos. El uso del populismo por parte del estado corporativista para contener los movimientos sociales claudicó frente a la recesión de mediados de los setenta, cuando la burguesía tuvo un papel más importante en la política a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y una campaña desestabilizadora de la CIA. Por último el estado tuvo que reprimir las insurgencias populares mediante sus fuerzas armadas.

En un sistema corporativista regulado por un estado tecnocrático-autoritario, el partido gobernante no estaba organizando a la clase cuyos intereses acostumbraba servir —era el CCE de la burguesía el que se encargaba de eso. Tampoco los sindicatos oficiales representaban a la clase a la que supuestamente servían, sino que eran la "tendencia democrática" y los sindicatos independientes de la nueva militancia laboral los que lo hacían.

El estado intentó dar nuevo lustre a su opacada imagen introduciendo la "reforma política" y "jugando la carta del petróleo". La carrera por expandir la producción petrolera entre 1977 y 1982 ayudó a inflar la deuda pública, ya que el estado se endeudaba gravemente para pagar la imprescindible maquinaria estadunidense. Los pagos de la deuda cada vez más altos y los programas de austeridad del FMI socavaban la capacidad del estado para establecer los programas necesarios para calmar la inquietud popular. Paso a paso, los líderes corporativos de Estados Unidos intentaban recobrar el control del petróleo mexicano (nacionalizado en 1938, arrancándolo al control estadunidense y británico).

Las altas tasas de interés, la caída de los precios del petróleo y la inflación fueron los detonantes del colapso económico de México en agosto de 1982. El estado aceptó un salvamento financiero internacional, a cambio de aceptar "reestructurar" la economía según un modelo de desarrollo "neoliberal". El desarrollo neoliberal se basaba en una estrategia orientada al mercado, dirigida por el sector privado y basada en las exportaciones, que abrió el país aún más al capital extranjero. En septiembre de 1982, el estado nacionalizó los bancos (menos los extranjeros), absorbiendo sus deudas incobrables y compensando a los

propietarios. Los banqueros mexicanos respondieron desafiando el viejo control del PRI sobre el estado, pero no tuvieron éxito. En menos de una década, los bancos volvieron a ser suyos, pero no el estado.

Desde 1982 hasta 1994, el programa de las maquiladoras, dominado por el extranjero y basado en la exportación, tuvo una expansión notable, pues el modelo neoliberal iba resultando notablemente similar al establecido un siglo antes por la dictadura de Díaz. Los sucesivos presidentes redujeron los gastos gubernamentales en programas sociales; congelaron los salarios, disminuyeron los impuestos, "privatizaron" más de mil empresas estatales, pusieron fin a la reforma agraria, empezaron a privatizar los ejidos, ayudaron a desmantelar numerosos sindicatos, expandieron el mercado de acciones y valores, y abrieron el país a los especuladores extranjeros. México se unió primero al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y más tarde al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC).

La pobreza y el descontento se extendieron por todo el país. El desacertado manejo por parte del gobierno del terremoto de 1985 en la ciudad de México socavó aún más la legitimidad del PRI. Los ciudadanos empezaron a emprender acciones directas para resolver problemas que el estado no podía solucionar. En la elección presidencial de 1988 el PRI fue humillado, aunque no vencido. El candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari se proclamó vencedor a pesar de la opinión pública de que él había recibido muchos menos votos que su oponente Cuauhtémoc Cárdenas, cuya facción democrática del PRI había sido anteriormente expulsada por el partido. Después de la elección, Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El corporativismo del estado sirvió durante largo tiempo como una especie de compromiso histórico entre la burguesía y las clases trabajadoras. Ningún polo del conflicto de clases fue nunca lo bastante fuerte para conseguir por sí solo su proyecto hegemónico. Sin embargo, una vez que el estado corporativista se comprometió con el neoliberalismo y con debilitar a los sindicatos, ya no pudo tan fácilmente proseguir su enfoque corporativista de cooptar a los disidentes. Por el contrario, introdujo programas especiales para intentar calmar el descontento social y "comprar" votos en época de elecciones.

Debido a las duras condiciones económicas que les imponía el neoliberalismo, los trabajadores, campesinos y gente pobre de México encontraron difícil sostener los movimientos sociales momentáneamente revitalizados. Al mismo tiempo, la estructura de clases se polarizó más que en ninguna época anterior desde los años treinta.

Las causas económicas de la crisis política

La crisis política tenía causas económicas subterráneas arraigadas en la naturaleza del capitalismo mexicano. El neoliberalismo no fue capaz de manejar estas causas subyacentes, y de hecho empeoró las cosas.

Estas causas podían identificarse en el proceso de industrialización desigual e incompleto que la burguesía y el estado habían venido desarrollando durante y después de la segunda guerra mundial. A pesar de haber alcanzado tasas de industrialización y crecimiento económico superiores a las de la mayoría de los países del resto de América Latina, México nunca logró un crecimiento económico sustentado de forma autónoma, debido a las debilidades de los patrones mexicanos de acumulación de capital y a la dependencia de la economía por parte del capital extranjero.

Desde fines de la época colonial los empleadores mexicanos habían venido confiando para su acumulación de capital en las abundantes reservas de mano de obra barata. Los sectores industriales más "modernos" y dinámicos de la economía de México eran capaces de atraer mano de obra continuamente, y de volverla a expulsar hacia los sectores "tradicionales" de la economía. Las masas hundidas en la miseria proporcionaban un inmenso ejército laboral de reserva. Debido a esto, el capital monopólico, con apoyo del estado, era capaz de oponerse a los avances salariales hasta en las industrias más capitalizadas y ante la inquietud de la fuerza laboral. La burguesía, que siempre pudo contar con la mano de obra barata, nunca necesitó intentar una transformación industrial total.

Bajo el capitalismo, la acumulación de capital en escala ampliada depende de las transferencias de valor continuas y crecientes desde las áreas tradicionales de producción hacia el sector industrial moderno, desarrollo que a su vez depende de producir vigorosamente los medios de producción, y un amplio mercado doméstico de consumidores adecuadamente pagados. México carecía de un pleno desarrollo en ambos sectores.

Desde 1950, las áreas tradicionales de producción (procesamiento de alimentos, textiles, etc.), no transferían valor hacia los otros sectores de la economía, sino que por el contrario principalmente *recibían* valor de aquellos, mediante los precios subsidiados, los insumos de bajo costo y cosas semejantes. Las industrias modernas (metalurgia, manufacturas industriales, etc.) no eran capaces de recibir valor del sector tradicional sobre una base continua y en expansión. Solamente la agricultura, la silvicultura, la pesca, la construcción, la electricidad, los transportes y los servicios transferían continuamente valor —tanto a las áreas de producción tradicional como moderna. También, dado que los salarios eran más elevados en el sector industrial moderno que en los tradicionales, la tasa de plusvalor, o tasa de ganancia, era menor en el sector moderno.

Aunque es muy difícil medir la tasa de ganancia, el economista Abelardo Mariña Flores de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco de la ciudad de México ha calculado que la tasa de ganancia de México disminuyó de un 40% en 1952 al 25% en 1976, el 23% en 1982 y el 20% en 1986. Se recuperó hasta un 27% en 1990, sólo para volver a caer al 23% en 1992 antes del colapso económico de México de 1994-1995. A primera vista, esto puede parecer algo sorprendente. Después de todo, en 1982-1992, la primera década de neoliberalismo, los capitalistas casi duplicaron su tasa de explotación del ca-

pital variable (dinero pagado como salarios para comprar mano de obra, fuente última de todo plusvalor), reduciendo los salarios reales casi a la mitad. Sin embargo, en esa misma década, las inversiones capitalistas en capital constante (renglones no salariales, como el de maquinaria) aumentaron dos veces y media. Por supuesto, es este crecimiento en la composición orgánica del capital (razón de capital constante sobre capital variable) el que subyace a la tendencia estructural de la tasa de ganancia a caer en primer lugar. Ésta fue también una época de grandes devaluaciones del peso, haciendo que la maquinaria importada resultase aún más costosa.

Uno de los resultados de la dependencia de los capitalistas mexicanos de la mano de obra barata y su incapacidad para desarrollar la industria de bienes de capital fue la productividad más baja de la industria mexicana comparada con la de Estados Unidos. A pesar de algunos ascensos momentáneos de la productividad en México, la brecha frente a Estados Unidos se volvió especialmente profunda durante la era del neoliberalismo. A su vez, los productos mexicanos eran menos capaces de competir con los extranjeros, en el interior o en el exterior. Esta incapacidad para competir, sin embargo, solamente sirvió para reforzar la dependencia de la burguesía mexicana de la mano de obra barata, causa básica del débil patrón de acumulación del país.

La fuente tradicional de esta fuente de mano de obra era el campo. No es sorprendente, por lo tanto, que la crisis industrial de México se vinculara simbólicamente con sus crisis agrarias. En 1965 el salario rural promedio era más de lo que el trabajador de una pequeña parcela podía ganar mediante la "autoexplotación" (contar sólo con su cultivo) —una causa de primer orden para que los pequeños agricultores abandonasen más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas de temporal en la década siguiente. Gran parte de estas tierras proporcionaban el grueso de los suministros alimentarios para los centros provinciales y grandes ciudades de México. Además, los precios de mayoreo de los alimentos no se mantuvieron al mismo nivel del costo de la vida de los campesinos (herramientas agrícolas, semillas y otros insumos). Por consiguiente, la monopolización de la tierra y la expansión de la agroindustria arruinaron a un número de campesinos cada vez mayor. Esto aceleró la emigración de campesinos a las ciudades y a Estados Unidos.[3]

La sequía de 1979-1980 acabó de completar el problema agrario de México. En 1980, la nación tuvo que importar una cuarta parte de sus necesidades nutricionales, la mayor parte de Estados Unidos. Para 1981, las importaciones mexicanas de alimentos básicos eran mayores que sus exportaciones agrícolas. Esto redujo los recursos financieros del estado. A falta de encontrar otras fuentes de financiamiento, tales como los impuestos a las grandes empresas o el incremento de otras exportaciones, el estado tenía menos capacidad finan-

[3] El número de campesinos sin tierra se duplicó en los setenta, y siguió aumentando a continuación. Además, la jornada laboral se hizo más dura y peor pagada. El número promedio de días de trabajo por año para los asalariados rurales descendió de 90 en 1970 a 65 en 1980.

ciera para proporcionar habitación, saneamiento y otros servicios para las cada vez más numerosas colonias proletarias.

Además de esto, las transnacionales cuadruplicaron sus inversiones en México durante los años setenta, elevando el nivel de capital requerido para la creación de cada nuevo empleo. Los problemas de productividad de los industriales mexicanos empeoraron estructuralmente con sus desventajas competitivas frente a las transnacionales. El patrón autorreproductivo de la limitada acumulación de capital propio de México se profundizó. Millones de desempleados y subempleados se vieron forzados a emprender las mínimas pero productivas actividades descritas al final del capítulo 6, o trabajos igualmente útiles desempeñados como trabajadores emigrantes en Estados Unidos. Estas actividades, a su vez, retardaban el desarrollo entre las gentes pobres de una respuesta política o de conciencia de clase más organizada contra la opresión, ayudando así a perpetuar el ciclo de salarios bajos, falta de productividad social y de competitividad de la industria mexicana —y el correspondiente control económico del imperialismo sobre México.

Como ya señalamos antes, una inmensa parte de los excedentes económicos de México nunca se filtraban hacia las masas y ni siquiera permanecían en el país. Utilizando cifras oficiales, el economista Edur Velasco Arregui concluye que, bajo el neoliberalismo, la transferencia de valor de México al exterior era equivalente al 15% de la inversión privada interna neta dentro de Estados Unidos en 1996, una importante contribución de México a la restructuración internacional de la producción.

Esta restructuración internacional, llamada a veces erróneamente "globalización económica", comenzó formalmente después de que la crisis económica general en el capitalismo mundial desembocó en la recesión de 1973. La restructuración acompañó a la liquidación de la guerra de Vietnam y a la desigual conclusión de la guerra fría. Respondió a una típica crisis capitalista de sobreproducción, con más bienes producidos que encontraban menos salidas para su consumo. La mayoría de las tasas de ganancia corporativas estadunidenses y europeas alcanzaron su culminación a mediados de los sesenta y empezaron a declinar a partir de entonces. De modo que para recuperar sus tasas de ganancia y expandir sus mercados, las corporaciones occidentales buscaron un mercado mundial mayor y con menores costos de producción mediante inversiones de las transnacionales en el exterior, acuerdos de libre comercio y, especialmente en el caso del capital estadunidense, las políticas tajantes de despido de trabajadores propugnadas por el neoliberalismo y la estrategia de "plantas tránsfugas", que consiste en establecer ensambladoras en áreas de mano de obra de bajo costo como México. Para 1994, las transnacionales basadas en Estados Unidos. empleaban el 40% de su personal en naciones del tercer mundo, y realizaban un tercio de su comercio interno con filiales en esas naciones.[4]

[4] Richard B. Du Boff, "Globalization and wages: the down escalator", *Dollars and Sense* núm. 213 (septiembre-octubre de 1997), pp. 36-40.

Los magnates corporativos buscaban también nuevas fuentes de capital a través de la especulación financiera y de la expansión de mercados de valores en Asia y América Latina, especialmente en México. Esto tuvo el efecto de crear y luego sobrecalentar burbujas financieras que acabaron por estallar, primero en México (1982, 1994-1995) y más tarde en Asia (1997-1998). Debido a los consiguientes despidos de trabajadores y de los severos programas de austeridad impuestos por el FMI con "estabilización salarial", "balance del presupuesto" y "privatización", los trabajadores de México y Asia acabaron absorbiendo la mayor parte de los costos de estas catástrofes.

En las acertadas palabras de Velasco Arregui, bajo el neoliberalismo "la transferencia de plusvalor de la periferia al centro industrializado" se aceleró. En el caso de México, las políticas neoliberales concentraron las inversiones "en pequeñas islas de modernidad, enclaves de la economía globalizada". Esto se conoció como la "maquiladorización" de México. Velasco Arregui señala que, fuera del sector maquilador, la expansión industrial en México estuvo limitada a las áreas de capital intensivo que proporcionaban muy pocos empleos, tales como equipo de transporte, producción metalúrgica y petroquímicos. Para cada nuevo empleo que se creaba, había por lo menos diez nuevos jóvenes ingresando al mercado laboral.[5]

Comenzando a fines de los años ochenta y principios de los noventa, pero especialmente entre 1994 y 1998, el número de plantas maquiladoras en México se quintuplicó hasta cerca de 4 000. Las transnacionales se sentían notablemente atraídas por las estructuras salarial y sindical debilitadas de México y por la laxitud de las disposiciones legales del estado en cuanto a normas medioambientales.[6]

La mayor parte de los aparatos productivos de las nuevas plantas maquiladoras eran de capital intensivo y alta tecnología, incluyendo el uso de la robótica en la industria automotriz.[7] Había pocos vínculos entre la producción del sector maquilador y el mercado doméstico de México, pues los grados superiores del conocimiento de alta tecnología permanecían en manos extranjeras y sólo un 1.4% de los insumos de la maquila se obtenían de compañías mexicanas, por debajo del 2% anterior al establecimiento del TLC en 1994.[8]

[5] Edur Velasco Arregui, "Industrial restructuring in Mexico during the 1980s", en Ricardo Grinspun y Maxwell A. Cameron, comps., *The political economy of North American free trade* (Montreal, McGill-Queen's University Press, 1993), pp. 163-75.

[6] Para más información, véase Daniel La Botz, "Manufacturing poverty: the maquiladorization of Mexico", *International Journal of Health Services* 24, núm. 3 (1994), pp. 403-408.

[7] Para más datos, véase Harley Shaiken, *Mexico in the global economy: high technology and work organization in export industries* (San Diego, University of California Center for U.S.-Mexican Studies, 1990), y "Advanced manufacturing and Mexico: a new international division of labor?", *Latin American Research Review* 29, núm. 2 (1994), pp. 39-71.

[8] Dan La Botz, "Inside Mexico's massive crisis", *Against the Current* (noviembre-diciembre de 1996); Enrique Dussel Peters, "From export-oriented to import-oriented industrialization: changes in Mexico's manufacturing sector, 1988-1994", en Gerardo Otero, comp., *Neoliberalism revisited: economic restructuring and Mexico's political future* (Boulder, Westview Press, 1996), pp. 63-83.

Más de mil maquiladoras se establecieron en México desde la introducción del TLC, época en que el diferencial del salario por hora entre Estados Unidos y México llegó a un impresionante 12 a 1. El número de mexicanos empleados en el sector maquilador, el 75% de ellos mujeres, se elevó de cerca de medio millón en 1993 a un millón para fines de 1998. Esto era mucho menos que el número de personas que estaban perdiendo sus empleos debido al cierre de decenas de miles de plantas manufactureras mexicanas incapaces de competir con las importaciones más baratas de Asia y Estados Unidos bajo las disposiciones de libre comercio del TLC.

Muchos mexicanos empleados en el sector maquilador eran graduados de universidades e institutos técnicos y del bachillerato. Otros tenían educación elemental o inferior. Sin embargo, las tecnologías más nuevas eran tan automáticas y rutinarias en sus operaciones, que a menudo eran mínimos los requerimientos educativos o de capacitación de los empleados en las líneas de montaje. Independientemente de su capacitación o educación previa, los trabajadores mexicanos a menudo superaban a sus iguales estadunidenses en la intensidad, calidad y productividad de su trabajo. Esta realidad, junto con la presión hacia abajo sobre los salarios causada por la superabundancia de mano de obra excedente en México, resultó un sueño hecho realidad para las transnacionales. Para 1990, los salarios de las maquiladoras eran inferiores a los de Asia Oriental.[9]

En México, las maquiladoras japonesas y coreanas aparecieron junto a las más numerosas estadunidenses; algunos capitalistas mexicanos invirtieron también en el sector maquilador. Desde 1994 hasta 1996, mientras que la tasa de crecimiento anual del PIB de México cayó desde el 2% hasta un negativo 607%, la tasa de aumento de la producción en el sector maquilador tuvo una impresionante subida de 30%.[10] Casi todo el valor añadido en México a través de esta producción de maquila iba al extranjero. Se mostraba en las estadísticas como un 40% del valor en dólares de las exportaciones de México, no muy por debajo de los productos del petróleo. En realidad, sin embargo, gran parte del mismo consistía en ventas de las transnacionales y representaba ganancias transnacionales.

Bajo el neoliberalismo, a pesar de la dramática caída de los salarios reales y del marcado incremento en la porción del ingreso de las clases altas en México (véanse los cuadros 5 y 6), el ahorro interno neto de México se hundió 13 puntos, del 18.5% del PIB en 1981 al 5.4% del PIB en 1994 —equivalentes a 87 mil millones de dólares *anuales*. Si todo ese dinero no se ahorraba dentro de México ¿adónde iba entonces?

[9] Du Boff, "Globalization", p. 40; Shaiken, "Advanced", pp. 51-55. Shaiken añade que los empleados no especializados y de salario bajo de las plantas de alta tecnología automotriz en México también pueden dar por resultado "ganancias mayores asequibles [...] por los autos más sofisticados, porque éstos requieren más horas de trabajo", p. 67.

[10] Señalado por el economista Paul Cooney en una presentación en la New York Marxist School, Brecht Forum, 2 de marzo de 1998.

Utilizando técnicas de cálculo reconocidas internacionalmente y meticulosamente cautelosas, Velasco Arregui concluye que el intercambio desigual en el comercio internacional absorbió 30 mil millones de dólares de los "faltantes" 87 mil millones de dólares por año. De esa suma de 30 mil millones de dólares, 10 mil millones provenían de un descenso del 50% en los términos de comercio de México, y 20 mil millones de las transacciones de las maquiladoras transnacionales "de casa" utilizando los trucos de "transferencia de precios" explicados en el capítulo 5. (Sobre los términos de comercio, véase el cuadro 15.) Otros 17 mil millones de dólares abandonaban México como pagos del servicio de la deuda externa y de remisiones de utilidades y derechos por patentes o regalías a las transnacionales. Otros 4 mil millones adicionales se iban en forma de "capital tránsfuga" o "depósitos de residentes mexicanos en el sistema bancario internacional".

El equivalente de otros 6 mil millones de dólares salía de México en forma de la porción de salarios pagados a la fuerza laboral mexicana que iban a los miembros de la familia que habían emigrado a Estados Unidos, menos las remesas de dólares de los emigrantes hacia México. De hecho, esto pagaba por la producción de fuerza de trabajo, o reproducción de la fuerza laboral, que tiene lugar sobre una base cotidiana y generacional y abarca la mano de obra no pagada de las mujeres. Debido a la dificultad de calcular el valor en dólares de este trabajo no pagado de las mujeres, la suma de 6 mil millones de dólares es muy inferior al valor real en dólares gastado en producir la fuerza laboral emigrante. Los restantes 30 mil millones de dólares, concluye Velasco Arregui, iban al "consumo conspicuo" de las clases altas de México y a "las altas tasas de depreciación" de la maquinaria derivadas de "la incapacidad de la burguesía mexicana por desarrollar tecnología".

El prolongado déficit comercial de México a partir de la segunda guerra mundial (excepto durante la primera década de rápida industrialización y el posterior auge petrolero) tenía sus raíces en el legado colonial de vender bienes de consumo a países más industrializados a precios relativamente baratos y "a cambio" comprar caros otros productos. El intercambio desigual era así un producto de las relaciones de poder entre personas en donde el trabajo de generaciones de campesinos y obreros mexicanos subsidiaba el desarrollo económico de las naciones más industrializadas.

Naturalmente, a medida que la economía de México avanzaba a trompicones a través de periódicas devaluaciones del peso y renegociaciones de la deuda (1976, 1982, 1994-1995), el PRI perdía cada vez más cualquier derecho de legitimidad. Los poderes políticos y económicos que dominaban el destino de México seguían pasando los costos de un capitalismo mal desarrollado y un estado mal manejado a las masas trabajadoras. Mientras tanto, según la mayoría de los cálculos, el narcotráfico añadía otros 30 mil millones de dólares a la economía, pero esto era de poca utilidad para el estado. De hecho, aumentaba la corrupción y el crimen y posiblemente contribuyó a los asesinatos de altos líderes del PRI, como examinaremos en el capítulo siguiente.

Las altas tasas de crecimiento del PIB y la naturaleza de capitalismo monopólico de los "años milagrosos" de semi-industrialización generaron nuevas necesidades en la economía. Éstas incluían necesidades en el nivel estatal. Con el fin de asegurar el control social, el estado tenía que afirmar cada vez más su legitimidad mediante costosos programas de reforma social limitada; pero su legitimidad como supuesta democracia era minada por la constante represión policiaca de las protestas populares organizadas, así como por la corrupción del estado. Tales contradicciones impregnaban cada uno de los grandes aparatos estatales.

Así pues, la legitimidad del estado exigía compromisos. Pero estos compromisos estaban siempre condicionados por el papel del estado como agente del capital monopólico y sus propios intereses económicos en las áreas estatales de producción (así como en la subsiguiente privatización de las empresas estatales). Esta tendencia proburguesa y antiobrera por parte del estado corporativista de México creaba constantes fricciones incluso con líderes sindicales tan colaboracionistas como el secretario de la CTM Fidel Velázquez y sus sucesores. Los "charros", después de todo, estaban vinculados más directamente con el proletariado que el estado, y por ello tenían que "cumplir lo prometido" a los trabajadores al menos en un grado mínimo.

Cuando a fines de los años sesenta y principios de los setenta los obreros de base empezaron a organizarse para exigir democracia sindical, los "charros" tuvieron que ocuparse también de las demandas políticas de los trabajadores. Por ejemplo, a mediados de 1977, Velázquez dejó de lado el compromiso de la CTM de un techo del 10% en los incrementos salariales y afirmó demagógicamente la necesidad de "mayor democracia" dentro de la CTM. Esto es un ejemplo de cómo las presiones desde abajo eran habitualmente mediadas dentro de todos los aparatos del estado.

A pesar de que recibía un trato de favor por parte del estado, la burguesía mexicana se mostraba desafiante para afirmar su hegemonía de clase dentro del gobierno *per se*. Por definición la burguesía extranjera estaba excluida, por no ser mexicana. De hecho, en su forma estadunidense, el capital extranjero y sus representantes políticos y militares constituían el único enemigo externo que México tuvo que tomar en serio en el siglo XX, como lo demuestran las intervenciones de Estados Unidos en el periodo 1906-1941 mostradas antes en los cuadros 3 y 4. Por su parte, la burguesía mexicana fue siempre demasiado débil frente a otras fuerzas internas y externas como para manipular al gobierno como instrumento de sus intereses *únicos*. No obstante, el arma más importante en el arsenal político de la burguesía mexicana era el estado autoritario-tecnocrático, un estado sobre el que la burguesía influía, pero que, hablando estrictamente, no controlaba.

Por estas razones, muchas de las tareas democráticas tradicionales de las revoluciones burguesas anteriores, tales como la creación de elecciones libres creíbles, la garantía de libertades civiles básicas y la libertad de organización, habían caído sobre las espaldas de las clases intermedias y bajas de México.

Hasta los años ochenta, las demandas democráticas en México, como otras demandas reformistas, habían derivado su fuerza social e impacto político de las clases trabajadoras y de los miembros disidentes de las clases intermedias. De hecho, éstas eran las personas que expresaban demandas democráticas, *no* la burguesía, que propugnaba su supresión o al menos su desviación hacia canales "seguros" (esto es, regulados por el estado). Sólo en el grado en que la lucha de clases escalaba y que la legitimidad de los modelos del viejo estado corporativista se desintegraba era que un número cada vez mayor de las fracciones burguesas de México ingresaban al activismo político público.

La rebelión estudiantil de 1968

Las políticas del estado no sólo ayudaron a despojar a la gente de sus tierras, extender una fuerza de trabajo de bajos salarios y controlar el trabajo organizado, sino que también contribuyeron a la creación de un sector inflado de clases intermedias —en pequeñas negocios y en las profesiones, así como entre las filas de una burocracia gubernamental excesiva. México, produciendo o importando incontables bienes de consumo de lujo en vez de aumentar la producción de necesidades básicas asequibles, satisfacía los anhelos de movilidad ascendente de las clases intermedias en expansión. Esto formaba parte de lo que algunos observadores llamaron la "americanización" de México en el periodo posterior a la segunda guerra mundial. Los estudiantes de la clase trabajadora empleada regularmente y de las clases intermedias se encontraban con que sus expectativas iban en aumento, mientras que las buenas oportunidades de empleo disminuían.

Encontraron que el éxito en la búsqueda de empleo a menudo dependía de tener buenos contactos dentro de un PRI cada vez más rígido, vuelto hacia dentro y "cerrado". Cada nuevo intento de democratizar al PRI fracasaba. Por ejemplo, a principios de los años sesenta, el nuevo presidente del PRI, Carlos Madrazo, procuró introducir la democracia partidista por fases, pero fue rápidamente removido de su cargo. Los viejos funcionarios del PRI nunca le perdonaron, acusándole de respaldar el levantamiento estudiantil de 1968; poco tiempo después murió misteriosamente en un accidente de aviación.

A medida que el secretismo de las actividades internas del PRI y la incertidumbre de sus victorias electorales se iban haciendo cada vez más obvios, un número cada vez mayor de ciudadanos se alejaba de las urnas. Los mexicanos se volvieron cínicos acerca de sus instituciones políticas y de la corrupción ampliamente difundida que esas instituciones estimulaban en la vida cotidiana.

Tan quebrantada se hallaba la mitología democrática del PRI que cada vez eran más los disidentes que ya no creían que entrar en el partido fuese una alternativa política viable. Dado el fracaso de Madrazo y la creciente rigidez y vejez del sistema político, gran parte de la protesta popular tenía que expresarse a través de la acción directa en las fábricas, los campos y las escuelas, así como en las calles.

CUADRO 15
Pago de la deuda y comercio exterior, 1980-1995
(en miles de millones de dólares)

Año	*Interés y amortización*	*Importaciones*	*Exportaciones*	*Exportaciones como por ciento de las importaciones*
1980	9.9	21.1	18.0	86
1985	14.3	18.4	26.8	146
1990	14.7	41.6	40.7	98
1993	18.1	65.4	51.9	79.4
1994	20.3	79.4	60.8	76.7
1995	25.8	72.4	79.5	109.8
1996	33.1	89.5	96.0	107.3

FUENTES: Poder Ejecutivo Federal, *Informes de gobierno*, Banco de México, *Indicadores económicos*

A medida que el "milagro económico" se revelaba a fines de los años sesenta y principios de los setenta como una catástrofe económica para la mayoría de los mexicanos, jóvenes frustrados se encaminaron a la agitación política, incluso a las acciones guerrilleras, y los disgustados obreros introdujeron una nueva militancia laboral en la política nacional. Las masas empobrecidas urbanas y rurales empezaron a organizarse independientemente del PRI.

La chispa de este estallido social de amplitud nacional fue prendida no por los obreros o los campesinos sino por los estudiantes, que durante largo tiempo fueron un elemento volátil en la sociedad mexicana. Como en el resto de América Latina, comenzando en los sesenta, las esperanzas de un cambio revolucionario —o al menos democrático— despertadas por la Revolución cubana estimularon entre la juventud mexicana una nueva política de agitación social que atrajo la más feroz represión estatal. Los jóvenes estaban motivados por los ideales humanistas y socialistas de Ernesto "Che" Guevara. Simultáneamente, una nueva "teología de la liberación" surgió entre la juventud católica mexicana, inspirada en parte por el cura guerrillero colombiano Camilo Torres.

Algunos de los jóvenes mexicanos se veían a sí mismos como parte de una comunidad internacional de jóvenes que marcó los movimientos de protesta de fines de los años sesenta. Los valores que defendían eran la honradez, la libertad y el compartir, lo contrario a la hipocresía, el autoritarismo y el egoísmo que observaban en el estado del PRI. Socializados en la inspiración de la mitología nacionalista de Morelos, Juárez, Ricardo Flores Magón, Zapata y Lázaro Cárdenas, estos jóvenes veían que sus líderes seguían políticas diametralmente opuestas a los ideales que decían profesar. Los jóvenes querían rescatar esos ideales "de su 'seguro' entierro como estatuas, nombres de plazas y avenidas y lemas con luz neón en las fachadas".[11]

[11] NACLA, *Mexico 1968* (Nueva York, NACLA, 1968).

Las ideologías políticas de la rebelión estudiantil de 1968 en México variaban desde el reformismo bastante tradicional de una rica mezcla de radicalismos magonistas, zapatistas, guevaristas, marxistas (incluyendo trotskistas y maoístas) y un radicalismo católico que llamaba a una alianza obrero-campesino-estudiantil. Esto significaba enfrentar directamente a la clase dirigente y al estado.

El gobierno de México había reconocido prontamente a las revoluciones boliviana y cubana de 1952 y 1959, declarando que México fue el primer país latinoamericano en llevar a cabo una revolución y por ello ya no necesitaba otra. En las escuelas y centros de trabajo el gobierno proclamaba a bombo y platillo su herencia revolucionaria, dando a los mexicanos toda una imaginería de sus propias victorias contra la opresión. El indigenismo y los actos de celebración de la herencia indígena servían para disfrazar la explotación de los primeros habitantes de la nación. Los políticos del PRI hablaban mucho de la reforma agraria y del "reparto de utilidades", pero hacían muy poco.

Había por lo menos otras tres razones por las que el sistema de persuasión ideológica del estado resultaba ineficaz, especialmente con los estudiantes. Primero, las técnicas tradicionales de cooptación habían sido expuestas y criticadas, igual que lo había sido su naturaleza de subterfugio. Segundo, las instituciones estatales eran cada vez más incapaces de recompensar a sus constituyentes en un nivel comparable con la retórica populista del PRI o con las expectativas públicas. Finalmente, los estudiantes estaban en una situación personal más libre que los obreros o los campesinos. Conscientes de los peligros de la cooptación, eran cooptados menos fácilmente.

El gigantesco movimiento democrático desencadenado por los estudiantes de México en julio de 1968 empezó de hecho como una cuestión menor relativa a la represión militar y policial de algunas peleas callejeras entre los estudiantes de una escuela vocacional y una escuela preparatoria. A medida que se extendía la protesta contra la violencia estatal, las organizaciones estudiantiles de las escuelas vocacional y preparatoria anteriormente en disputa se unieron a la organización estudiantil más izquierdista de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) para formar el Consejo Nacional de Huelga (CNH). Muy pronto, manifestaciones de medio millón de personas inundaban el Paseo de la Reforma de la capital, exigiendo el fin de la violencia estatal y el comienzo de la democracia.

Porciones de las capas menos prósperas de las clases medias se fueron uniendo a las marchas populares. Junto con un aumento salarial insatisfactorio, los empleados del gobierno estaban indignados y resentidos por la dislocación causada por los preparativos del estado para los Juegos Olímpicos de octubre de 1968. El espectáculo de su gobierno gastando enormes sumas de dinero para satisfacer a los extranjeros, los aumentos de precios, y la negativa del gobierno a permitirles tomar algunos días de vacaciones durante los próximos juegos no hacían más que aumentar su resentimiento.

Campesinos, habitantes de los suburbios y obreros, todos ellos incubando viejos agravios, empezaron también a unir sus fuerzas con los militantes estu-

diantiles, pidiendo la democratización de los sectores campesino y obrero del PRI. Temerosos del contagio de las demandas democráticas de los estudiantes, la dirigencia del CTM firmó un pacto con el gobierno mediante el que obtenían un alza de los salarios para los miembros de la CTM a cambio de no interferir con la represión de la huelga estudiantil. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz deseaba realizar una acción decisiva antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Este deseo era compartido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que había despachado a Philip Agee y otros agentes a la ciudad de México para ver lo que podían hacer.

Desde el mismo principio de la guerra fría, pero especialmente a partir de la Revolución cubana, la CIA había cultivado elementos dentro del ministerio más importante de México, la Secretaría de Gobernación. El presidente Díaz Ordaz, que había sido secretario de Gobernación bajo el anterior presidente, en agosto organizó una reunión secreta con su titular, Luis Echeverría (que había recibido instrucciones previas de la CIA y que más adelante, en 1970, ascendería a la presidencia). Juntos, los dos funcionarios civiles más importantes de México decidieron llamar al ejército. Violando la tradición latinoamericana de autonomía universitaria, los soldados invadieron la UNAM y tomaron varios miles de prisioneros (incluyendo maestros, personal administrativo y padres de estudiantes). El CNH desapareció en la clandestinidad. Para fines de septiembre, la ciudad de México resplandecía con jips en llamas, autobuses volcados y barricadas.

Luego, el 2 de octubre, manifestantes estudiantiles desarmados marcharon rumbo a la zona habitacional de Tlatelolco. Cuando empezaban a llegar los ríos de manifestantes campesinos y obreros, el ejército y la policía abrieron fuego con armas automáticas. La gente corrió a refugiarse a la iglesia cercana para protegerse de las balas, pero se les cerraron las puertas. Para cuando el humo se hubo disipado, aparecieron cerca de 500 muertos, 2 500 heridos y 1 500 detenidos en camino hacia las cárceles. En los días siguientes, los estudiantes hicieron circular fotografías de ancianas atravesadas por bayonetas y de niños con las cabezas voladas por los disparos. El agente de la CIA Agee quedó muy afectado y más adelante abandonó la agencia, declarando que lo sucedido en la Plaza de Tlatelolco "le está pasando por todo el mundo a personas que tratan de cambiar el sistema".[12]

Desde la época de Porfirio Díaz no se había producido en México una matanza tan espantosa. México tuvo una segunda generación de presos políticos que se sumaron a los de los años cincuenta, los líderes de la huelga ferrocarrilera descrita en el capítulo 5. La proclamada estabilidad del país había llegado a un sangriento y trágico final. Había comenzado una nueva era de crisis para el PRI.

[12] Philip Agee, *Inside the Company: CIA diary* (Londres, Penguin Books, 1975), p. 554, citado en John Ross, *The annexation of Mexico* (Monroe, Common Courage Press, 1998), p. 122.

El fermento posterior a 1968

El presidente Luis Echeverría (1970-1976) empezó su administración prometiendo una "apertura democrática" (una selección de términos que reconocía abiertamente el carácter autoritario del estado). Pero el 10 de junio de 1971, cuando miles de estudiantes y obreros marcharon por las calles de la capital para exigir derechos políticos básicos y la liberación de todos los presos políticos, la policía y grupos de mercenarios los atacaron, matando a once e hiriendo a más de doscientos. Unos treinta y cinco "desaparecieron" (capturados y probablemente ejecutados).

Los frustrados estudiantes y campesinos militantes se lanzaron a la guerrilla rural. La mayor parte fueron eliminados por los militares. Entre 1969 y 1975 una docena de grupos guerrilleros urbanos llevaron a cabo acciones espectaculares: secuestros de aviones, robos de bancos, bombas en edificios, secuestros y emboscadas a la policía. La inteligencia militar recibió el encargo de darles caza, y para 1975 quedó aplastada la lucha armada urbana.

Tanto los movimientos de guerrilla urbana como rural, aunque fracasados, radicalizaron momentáneamente la lucha política, especialmente entre los campesinos pobres y los habitantes de los suburbios urbanos. En 1974, por ejemplo, la colonia Tierra y Libertad de San Luis Potosí extendió sus ocupaciones de tierras urbanas a Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. Su líder, Eusebio García, fue asesinado en 1976, pero el movimiento siguió activo todavía. En 1975, jornaleros rurales, trabajadores emigrantes y campesinos fundaron la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que trabajó estrechamente unida con el Partido Comunista Mexicano.

En el campo, el ritmo de las tomas de tierras por parte de los campesinos ascendió enormemente a mediados de los años setenta. Igual que en el pasado, el ejército patrulló las zonas conflictivas. Muchos campesinos mestizos e indios fueron "desaparecidos", torturados, incluso asesinados, especialmente en estados empobrecidos como Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. Por órdenes de los caciques locales, unos 500 triquis de Oaxaca fueron asesinados en los setenta, y un reinado de terror semejante fue impuesto a la mayoría indígena de la población en el estado fronterizo sureño de Chiapas. A fines de los setenta, más de 200 campesinos de la Huasteca que protestaban desaparecieron o fueron asesinados. A todo lo largo de México, los campesinos que se negaban a afiliarse a la CNC del PRI eran habitualmente remitidos a la cárcel.

El carácter de las demandas y tácticas campesinas variaba según la naturaleza de sus actividades. Los trabajadores agrícolas crearon nuevos sindicatos y hacían huelgas en busca de mejores salarios y condiciones laborales. La CTM respondió incorporando a los jornaleros a sus filas. Para 1981 declaraba haber enrolado a más de 200 000. Los propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas se organizaron para obtener precios mejores y más justos para sus productos.

Además de recuperar sus tierras mediante la fuerza armada, los campesinos por lo general ocupaban e incluso dinamitaban las oficinas municipales,

tomaban rehenes, emprendían largas marchas (hasta la ciudad de México) y desequilibraban la producción. Los campesinos también se movilizaban contra las autoridades estatales para exigir la liberación de presos políticos, el castigo de los asesinos, el desmantelamiento de los grupos de pistoleros paramilitares, el fin de los malos manejos de los fondos públicos y la eliminación de caciques o funcionarios venales.

A medida que nuevas organizaciones campesinas independientes iban apareciendo en los años setenta, empezaron a formar alianzas con otros sectores de la población —ocupantes de predios urbanos (conocidos tanto en el campo como en las ciudades como "paracaidistas" por sus súbitas apropiaciones de parcelas de tierra), obreros de base militantes, maestros, estudiantes y organizaciones de izquierda. Estas alianzas a menudo resultaban débiles, sin embargo, debido a diferencias sobre los fines y las tácticas, como sucedió en el caso de la Coalición Obrera-Campesina-Estudiantil de Oaxaca (COCEO) y de la Coalición del Istmo (COCEI). Aun así, la COCEO obligó a la dimisión de un gobernador en 1977 y la COCEI ganó las elecciones municipales en Juchitán en los ochenta sólo para ser repetidamente reprimida.

Para dividir o cooptar a los grupos campesinos independientes, el gobierno de Echeverría incrementó su populismo demagógico. En 1975, lanzó el Pacto de Ocampo. Este acuerdo agrupó bajo la hegemonía de la CNC del PRI a varias grandes organizaciones campesinas independientes con el fin de apoyar el modesto programa de distribución de tierras de Echeverría y sus experimentos de "colectivización" de unos pocos ejidos. Algunas de las organizaciones campesinas cooptadas siguieron siendo leales partidarias del estado hasta los años noventa.

En 1975, la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui y del Mayo multiplicó la ocupación de tierras en el noroeste de México y forzó al presidente Echeverría a expropiar un latifundio de la hija del ex presidente Calles. Echeverría también devolvió algunas de las tierras en manos de los grandes tiburones de Sonora a sus propietarios originales. Las tierras devueltas no incluían las controladas por la floreciente agroindustria. El otorgamiento de certificados de amparo contra la expropiación presidencial y un *lockout* de la burguesía rural y gran parte del grupo Monterrey diluyeron aún más el impacto de la reforma agraria populista de Echeverría. El siguiente presidente, José López Portillo (1976-1982), pagó sustanciosas indemnizaciones a los terratenientes afectados, declaró delito federal las futuras invasiones de tierras y en general aceptó los deseos de la burguesía agraria.

Los desafíos más graves a la autoridad del PRI y del gobierno en los setenta provinieron de las filas de los obreros organizados, en donde un movimiento independiente de base en pro de la democracia sindical surgió entre algunos de los trabajadores mejor pagados del país. La conciencia política proletaria había ido creciendo a medida que un gran número de trabajadores industriales experimentaba la concentración, disciplina y unificación en centros de trabajo aislados, impuestas por la extensión del capital monopólico. Después de 1968, los trabajadores más jóvenes estaban más abiertos a las ideas marxistas, la soli-

daridad con otros sectores en rebeldía dentro y fuera del país y el cambio social radical. Sus esfuerzos por mejorar los salarios y las condiciones laborales fueron bloqueados por los líderes sindicales charros aliados con los patrones.

En menos de una década, la Unión Obrera Independiente (UOI, fundada en 1972) consiguió el control de cuatro grandes sindicatos del automóvil y del 80% de los trabajadores sindicalizados de la industria de la aviación. Estableció también "comisiones obreras" en los sindicatos ferrocarrilero, petrolero, de la metalurgia, del acero, los teléfonos y la electricidad. Pero tuvo que hacer frente a fuertes represiones. Por ejemplo, una huelga de 120 días de más de 600 trabajadores en la planta de ejes para autos Spicer fue aplastada por efectivos del ejército y pistoleros de la CTM; los huelguistas fueron despedidos.[13]

Un ala más numerosa aunque menos radical de la nueva militancia obrera, la "tendencia democrática", ganó influencia en muchos sectores industriales importantes. Ésta prefería "trabajar dentro del sistema" y respetar las promesas del "señor presidente", de "defender la nación y la institución presidencial". Por tanto los líderes de la "tendencia democrática" disimulaban la naturaleza de clase de la insurgencia democrática, reforzaban el dominio del PRI y difamaban a los militantes obreros progresistas e independientes como desviados "antinacionales" o "comunistas" que carecían de respeto a la presidencia.

En noviembre de 1975, la tendencia democrática del sindicato de trabajadores electricistas SUTERM organizó una manifestación callejera de un cuarto de millón de personas en México D.F., la más numerosa desde 1968. Estos trabajadores tenían simpatizantes dentro del PRI que eventualmente se conocían a ellos mismos por el mismo nombre —"tendencia democrática" (más tarde, "corriente democrática", que incluía al candidato presidencial antipriista de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas).

Desde 1973 y hasta 1977, la nueva militancia laboral generó cerca de 3 600 huelgas y "conflictos laborales" que incluyeron entre uno y dos millones de obreros industriales. (Debido a que las huelgas "ilegales" o "inexistentes" sólo se calculaban aproximadamente, las cifras variaban mucho.) Estudiantes universitarios, empleados bancarios y médicos también fueron a la huelga, lo mismo que los trabajadores de las empresas de zapatos, química-farmacéutica, metalúrgico-minera, eléctrica, ferroviaria y agrícola.

Las mujeres representaban amplias minorías o incluso mayorías en muchos de los sindicatos más progresistas en donde arraigó la nueva insurgencia laboral, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, SNTSS, de 350 000 miembros, en donde las mujeres conquistaron posiciones como representantes sindicales. El Frente Auténtico de los Trabajadores (FAT, fundado en 1960 como federación católica) empezó a luchar por un sindicalismo obrero independiente con una fuerte conciencia feminista. Igual que los hombres, las mujeres enfrentaban el empleo de la fuerza armada y la intimidación por par-

[13] Para más detalles, véase Raúl Trejo Delarbre, *Este puño sí se ve* (México, Ediciones El Caballito, 1987), pp. 23-58.

te del estado para romper las huelgas, tales como las organizadas por mujeres militantes en la compañía telefónica estatal Telmex, en los setenta y ochenta.

A medida que estudiantes, maestros y antiguos guerrilleros se unían a los campesinos y obreros para organizar alianzas populares más amplias durante los años de Echeverría, el gobierno daba rienda suelta a matones armados llamados "halcones", que disparaban contra los manifestantes pacíficos. Pistoleros conocidos como "porros" patrullaban los corredores de las escuelas preparatorias y universidades, golpeando a los disidentes políticos. Cientos de personas eran secuestradas y desaparecidas. Valerosos intelectuales mexicanos compararon públicamente las acciones del gobierno del PRI con la "guerra sucia" de los años setenta en Argentina, famosa por la sangrienta eliminación de miles de ciudadanos denunciados como disidentes.

Se sospechaba que las escuadras de paramilitares de derecha de México eran apoyadas por la CIA, igual que otros grupos semejantes en toda América Latina. Estas sospechas se reforzaron cuando, en febrero de 1977, el *New York Times* informó que tiempo antes Echeverría había aceptado dinero de la CIA cuando fungía como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz.

En 1976, los trabajadores electricistas de la "tendencia democrática" agruparon a los sindicatos estudiantiles y a más de 300 organizaciones para formar el Frente Nacional de Insurgencia Obrera, Campesina y Popular. Entonces los electricistas declararon una huelga nacional. El 16 de julio de 1976, "el señor presidente" mostró su respeto por la "tendencia democrática" llamando al ejército. Las tropas invadieron y ocuparon todas las principales instalaciones eléctricas para que rompieran la huelga. Más tarde, cientos de huelguistas fueron despedidos. Un año después, los soldados invadieron la UNAM para romper una huelga de empleados universitarios que estaba atrayendo a miles de simpatizantes del resto del movimiento obrero insurgente. El Partido Comunista Mexicano (PCM) fue decisivo en la huelga de la UNAM. Los actos represivos del estado asestaron un golpe muy severo a la nueva militancia obrera.

Hablando un lenguaje populista, el presidente Echeverría finalmente se las arregló para hacer volver a algunos disidentes estudiantiles y guerrilleros a la "familia revolucionaria" oficial, concediéndoles cargos de nivel medio en varios departamentos sociales. Junto con otros presidentes tercermundistas, Echeverría reprendía duramente a las transnacionales y abogaba por "un nuevo orden económico internacional" (aprobado por las Naciones Unidas en 1974). Intentó también construir puentes con las comunidades mexicanas de Estados Unidos adulando a los líderes prominentes del movimiento chicano.

El presidente Echeverría impuso algunas cargas fiscales simbólicas a los ricos, fundó la colectivización de algunos ejidos seleccionados y dirigió una pequeña parte del comercio nacional hacia Europa y Japón. Pero sus modestas reformas fueron obstaculizadas por la falta de una base de clase adecuada (así como del apoyo) en las masas, una burocracia deshonesta e ineficaz y una crisis fiscal agravada por la recesión internacional de 1973-1975 y las presiones extranjeras para reducir la deuda del estado. Las presiones del FMI forzaron una

devaluación del peso de casi un 100% a finales de 1976, duplicando prácticamente la deuda externa real (hasta casi 50 mil millones de dólares), así como el costo real de los bienes de capital importados —en detrimento de las empresas no monopólicas y en beneficio de las transnacionales.

Los intentos de Echeverría por desarrollar la industria de bienes de producción endeudó a México todavía más. Un aumento de nueve veces en las importaciones de bienes de producción en los setenta contribuyó notablemente a un aumento de seis tantos en la deuda externa del sector público, una tendencia que fue empeorando con el tiempo. (El cuadro 16 muestra cifras para bienes de producción importados que subestiman los costos reales puesto que representan sólo el valor declarado de bienes específicos y omiten otros diversos costos asociados con su importación.) El costo total de las importaciones de bienes de producción representaba hasta un tercio de la deuda externa del sector público. Solamente los intereses y pagos de amortización de la misma deuda representaban entre la mitad y un tercio del valor en dólares de todas las exportaciones de México (véase el cuadro 15). México tenía que correr cada vez más rápido sólo para seguir en el mismo lugar.

Entre tanto, las burguesías nacional y extranjera empezaron a organizarse para aumentar su influencia sobre el estado debilitado, aunque todavía dominante. Los grandes hombres de negocios del grupo Monterrey estaban alarmados por la retórica "colectivista" de Echeverría, igual que lo estaban muchas transnacionales con base en Estados Unidos, cuyos ejecutivos alertaron a Washington acerca de los problemas que se estaban cocinando "en nuestro patio trasero". El FBI y la CIA, como lo evidencian documentos hechos públicos más tarde bajo la Freedom of Information Act, recibieron órdenes de desestabilizar el gobierno de Echeverría.

Operando a través de la oficina del agregado jurídico de la embajada de Estados Unidos, el FBI se infiltró en las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública y en las oficinas del procurador general. Los agentes del FBI patrocinaron actos de terrorismo con el fin de achacárselos a la izquierda mexicana y dividir a la oposición del PRI. El director del FBI J. Edgar Hoover escribió al agregado jurídico acerca de su "satisfacción ante la oleada de ametrallamientos nocturnos" y le felicitaba por la "detonación de bombas estratégicas y efectivas".[14]

[14] NACLA *Report on the Americas*, enero-febrero de 1978. Véanse también los números siguientes de la misma publicación: julio-agosto de 1976; enero de 1977; marzo de 1977; julio-agosto de 1977; septiembre-octubre de 1977; enero-febrero de 1978; marzo-abril de 1978; mayo-junio de 1978 y septiembre-octubre de 1978. El autor reconoce con gratitud la ayuda del fallecido profesor Sheldon Liss del Departamento de Historia de la Universidad de Akron por la compilación de gran parte de este material. El *New York Times* informó el 22 de noviembre de 1977 que el FBI "realizaba extensas operaciones en México para acabar con los grupos comunistas de allí que podían filtrarse a través de la frontera". Más de cien páginas de material facilitado por la Freedom of Information Act están disponibles para ser consultadas en las oficinas centrales del FBI en Washington. Para más comentarios sobre el FBI y la CIA en México y América Latina, véase Cockcroft, "Che Guevara and the FBI", *Monthly Review* 49, núm. 11 (abril de 1998), una reseña del libro de Michael Ratner y Mi-

CUADRO 16
Bienes de producción importados y deuda pública externa, 1980-1995
(en miles de millones de dólares)

Año	*Bienes de capital*	*Materias primas*	*Producción total de bienes*	*Deuda externa del sector público*
1980	8.8	5.6	14.4	33.8
1985	10.8	4.6	15.4	72.7
1990	24.6	8.5	33.1	77.8
1995	24.0	12.5	36.5	100.9

FUENTES: Poder Ejecutivo Federal, *Informes de gobierno*; Banco de México, *Indicadores del sector externo*

La burguesía mexicana cerró filas en 1975 para formar el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reduciendo aún más el espacio de maniobra del estado. Declarando la necesidad del gran capital de participar más abiertamente en la vida política de la nación, el CCE agrupó a las directivas de ABM, CMHN, Concamin, Concanaco, Coparmex y otros grupos capitalistas. El CCE coordinaba las principales fracciones de la gran y mediana burguesía e intentaba aumentar la influencia ya dominante del capital monopólico sobre el estado.

La "fracción central" (gran capital financiero con base en la ciudad de México), el grupo Monterrey y la derechista Coparmex de la burguesía norteña estuvieron en primera fila en la fundación del CCE. Las declaraciones públicas de dos de sus principales representantes, Agustín F. Legorreta y Andrés Marcelo Sada respectivamente, reflejaban su misión. "No empresa privada contra el estado, sino empresa privada con el estado", dijo Legorreta, "la economía mixta es la garantía de que México seguirá el camino de la democracia y la libertad".[15] "Nunca más", añadió Sada, la gran empresa asumirá "un estatus de ciudadanía de segunda clase frente al medio político nacional".[16]

Conservando la separación formal de la burguesía y el estado, el CCE procuraba asegurar su supremacía sobre la cumbre de la tecno-burocracia estatal *insistiendo* en que el estado actuase como garante de los intereses de la burguesía. El CCE estaba claramente dominado por los poderosos hombres de negocios del CMHN. El CCE de inmediato se lanzó públicamente a cortejar a los "votantes de clase media" y propugnó la "privatización" de las empresas estatales. Sin embargo, consciente de la campaña de desestabilización que estaba siendo montada por la CIA, Sada, y otras fuerzas reaccionarias, la administración de Echeverría inicialmente montó en cólera contra este tipo de actividad. El secretario de Ha-

chael Steven Smith, *El Che Guevara y el FBI. El expediente de la policía política de Estados Unidos sobre el revolucionario latinoamericano* (México, Siglo XXI, 2000). Véase también John Ross, *The annexation of Mexico* (Monroe, Common Courage Press, 1998).

[15] ABM, *Informe del congreso directivo a la convención anual*, 1973.

[16] *UnoMásUno*, 11 de marzo de 1978.

cienda José López Portillo atacó públicamente al CCE y a las fuerzas del "nazi-fascismo".[17]

Luego el CCE desempeñó un papel central en las manipulaciones políticas en torno a la sucesión presidencial de 1976. No pudo elegir al próximo presidente, pero al menos pudo influir en su política. Echeverría eligió a López Portillo, quien, una vez que tomó posesión como presidente, se despojó de su retórica populista y antifascista e instrumentó un programa de austeridad al estilo del FMI y una "alianza para la producción" aprobada por el CCE.

El presidente López Portillo también designó obedientemente a prominentes personajes burgueses para su administración —hombres como el director de Pemex Jorge Díaz Serrano, socio en las empresas texanas del antiguo jefe de la CIA y futuro presidente de Estados Unidos George Bush. Además, en beneficio del CCE, López Portillo aprobó una ley de "banca múltiple" (esto es, banca no especializada) que hizo posible que los 243 bancos privados del país se hubiesen consolidado en 63 grandes bancos para 1981.[18] En resumen, la formación del CCE produjo una presencia más directa de la gran burguesía dentro del estado corporativista, facilitando así, aún más que antes, la expansión del capital monopólico.

La agudización de los conflictos trabajo-capital de los años setenta iba produciendo tanto entre los trabajadores como en la burguesía un cuestionamiento crítico de las formas tradicionales de la posición populista estatal, el charrismo, el caciquismo y la manipulación burocrática estatal de las instituciones corporativistas. Los grupos capitalistas, unidos en el CCE, vieron que el conflicto charro/bases estaba reduciendo la productividad laboral, mientras que un número creciente de proletarios veía al charrismo como un obstáculo para su avance. La "clase" política que tradicionalmente había mediado en los conflictos entre las clases ya no podía seguir controlando fácilmente a estas fuerzas. Veía su populismo demagógico ("política de masas") desafiado por ambas clases principales. Durante los últimos días del régimen de Echeverría fueron muchos los que creyeron los rumores de que en las calles de México había tanques preparándose para un golpe militar: una clara señal de la gravedad de la incipiente crisis estatal.

Sin recursos suficientes para continuar comprando a los disidentes, el presidente Echeverría y su sucesor López Portillo cedieron a las presiones de la burguesía mexicana, el FMI, el gobierno de Estados Unidos y la vieja guardia del PRI (dirigida por el líder de la CTM, Fidel Velázquez). Aplastaron militarmente las huelgas obreras y estudiantiles de 1976-1977. Las puertas de las cárceles se cerraron sobre la "apertura democrática" de Echeverría, cuando el estado se inclinó ante el viejo orden económico del FMI: devaluaciones del peso, congelaciones

[17] *El Día*, 17 de mayo de 1975.

[18] Los cuatro bancos principales, poseedores del 70% de los fondos de la banca privada, aumentaron sus utilidades más de diez veces durante el mismo periodo. Para más datos, véase Francisco Valdés Ugalde, *Autonomía y legitimidad: los empresarios, la política y el estado en México* (México, Siglo XXI, 1997), p. 198.

de salarios, y condiciones operativas más convenientes para la inversión privada. En 1977 el gobierno garantizó el control efectivo de Velázquez de la CTM sobre el Instituto Nacional de la Vivienda y el nuevo Banco Obrero a cambio de su promesa de cooperar con un tope del 10% a las alzas de salarios impuestas por el recién elegido presidente López Portillo en obediencia del FMI.

Los salvajes actos de represión de 1976-1977 y la imposición estatal de "topes" causaron que toda la fuerza laboral se centrara en la lucha para defender conquistas económicas anteriores. Esta postura defensiva de los trabajadores significó la disminución del número de huelgas.[19] La nueva insurgencia laboral siguió reclutando partidarios, pero los charros, viejos y nuevos, utilizaban las protestas laborales "economicistas" para reafirmar su influencia sobre la tendencia democrática. Por una parte, una segunda fila de democratizadores, que se habían mantenido en la retaguardia en el periodo anterior, se adelantaron al foro en algunos sindicatos del Congreso del Trabajo (CT).

Los organizadores laborales independientes de izquierda empezaron a resaltar más que nunca antes la necesidad de una mayor solidaridad con otros sectores de la población. Un ejemplo revelador fue la larga huelga en Monclova (Coahuila), que sacudió al complejo mixto privado-estatal Altos Hornos de México. Respondiendo al problema de desempleo de México, estos trabajadores del acero, que se contaban entre los mejor pagados del país, insistían en que hubiera más aperturas laborales. Muchas de sus demandas económicas fueron satisfechas. En otras palabras, lejos de comportarse como una "aristocracia obrera" caprichosa, algunos empleados industriales manifestaron su solidaridad de *clase* en una batalla más amplia para democratizar a México. Tendencias similares de extender la lucha obrera para incluir a los empleados de forma irregular se revelaron en 1977 durante la huelga de sesenta y dos días en la General Motors, entre otras numerosas huelgas.

De 1980 a 1982, una oleada de huelgas contra los topes salariales estalló en las industrias automotriz, hulera, minera, petrolera, del acero, metalurgia, eléctrica, textil, procesamiento de alimentos, plásticos, los servicios postal y de teléfonos, y transportes aéreos y de autobuses. Incluso médicos, enfermeras, estudiantes, maestros y jugadores de beisbol fueron a la huelga. Unos 3 200 trabajadores de GM realizaron una huelga de 106 días contra los topes. El 1º de mayo de 1981, hasta 300 000 trabajadores atendieron un llamado de los independientes del UOI. Organizaron una ruidosa manifestación callejera, cantando lemas contra los charros y a favor de la democracia.

Finalmente, después de que la cooptación y la represión hubieron fracasado, el estado corporativista ilegitimado concedió alzas salariales que se aproximaban a la tasa de inflación. Al mismo tiempo, los trabajadores de la aviación, la industria automotriz y hulera descubrieron que el líder de la UOI, un abogado supuestamente de izquierda, estaba en colusión con el gobierno. El estado

[19] Los militantes obreros realizaron unas 300 huelgas en 1977 y organizaron 80 manifestaciones en la ciudad de México, cifras muy por debajo de las de años anteriores.

esperaba usar las credenciales "marxistas" de este abogado para sacar ventaja al resto de la nueva insurgencia laboral. De modo que los trabajadores lanzaron un movimiento para limpiar sus centros de trabajo tanto de sus seguidores como de los charros de la CTM. Eventualmente la UOI se reagrupó como la ya mencionada CIOAC.

La nueva militancia laboral se extendió entre las masas empobrecidas —muchos de cuyos miembros eran los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos por la industria tanto grande como pequeña. Por ejemplo, los obreros temporales que construían la refinería petrolera de Tula fueron licenciados del trabajo en 1976, y los que trabajaban en la construcción de la planta petroquímica de Cactus, en Chiapas, llevaban adelante una huelga militante en 1977. En 1976-1977 también hubo un número inusualmente elevado de acciones de protesta y huelgas en industrias medianas y pequeñas.

LUCHAS DE CLASE Y GÉNERO

Igual como las diferentes fracciones de la burguesía empezaron a unirse a través del CCE, lo mismo los movimientos sociales de México de los años setenta buscaron "nacionalizar" sus luchas. Los campesinos fundaron el Centro Coordinador de Campesinos Revolucionarios Independientes en 1977. En el término de dos años, se expandió hasta el mucho mayor Comité Coordinador Nacional del Plan de Ayala (CNPA), cuyo grito de combate "¡La tierra para los campesinos!" galvanizó a los trabajadores rurales en toda la nación.

En las filas de los segmentos del proletariado urbano no sindicalizados e irregularmente empleados, numerosas organizaciones surgieron y avanzaron también para unificarse en el nivel nacional. En 1979, la Red Nacional de Colonias Populares agrupó a catorce grandes organizaciones de habitantes de los suburbios. Los movimientos sociales urbanos, de composición principalmente femenina, empezaron a construir coaliciones con la tendencia democrática, sindicalistas independientes, estudiantes y la campesina CNPA.[20]

Todo esto sucedía en una época en la que los capitalistas tanto mexicanos como extranjeros, en respuesta a la recesión de 1973 y a la nueva militancia laboral, estaban intensificando el uso y explotación de la mano de obra fácilmente remplazable. El proceso productivo industrial estaba siendo marcado por una fuerte fragmentación de la fuerza laboral; por la des-especialización del trabajo y su división en tareas simples y limitadas; la degradación de la mano de obra; la "feminización" de la fuerza de trabajo, y la terminación-rotación de los tra-

[20] Importantes movimientos urbanos fueron los de la Unión de Colonias Populares en la ciudad de México; Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey (50 colonias); Frente Popular de Durango (20 comunidades); Comité de Defensa Popular de Chihuahua (300 000 vecinos de los suburbios, cuyo líder fue asesinado en 1981), y, en el noreste de México, la Coalición de Organizaciones Independientes para la Defensa de la Economía Popular, fundada en 1978. Incorporaba a habitantes de las colonias populares, trabajadores, campesinos, estudiantes y amas de casa.

bajadores. Haciendo que la mayor parte de la producción industrial consistiera en tareas intercambiables realizables por cualquiera, los capitalistas contribuían a una atomización y descomposición de la clase trabajadora. La división, descalificación y rotación de la mano de obra ayudaba a separar a los trabajadores económica, social y políticamente.

Por otra parte, al atraer (aunque fuese temporalmente) a nuevos elementos al proceso industrial de trabajo, especialmente a mujeres y emigrantes rurales, la misma restructuración industrial capitalista servía para concentrar, en un medio social, a miles de personas cuyos ambientes eran usualmente individualizados (la casa, el pueblo, etc.). Las nuevas experiencias sociales y laborales compartidas de estos reclutamientos en la fuerza laboral industrial crearon una base sociopolítica para la organización de una fracción rápidamente creciente de la clase trabajadora. Por ejemplo, frente al charrismo, el machismo y la probable pérdida del empleo, las mujeres empleadas en las plantas maquiladoras del norte de México empezaron a formar algunos sindicatos en los años setenta. Los gerentes de aquellas plantas opusieron resistencia a sus esfuerzos por organizarse y rotaban constantemente la fuerza laboral. Algunas empresas, sin embargo, se acomodaban aceptando los sindicatos controlados por la CTM como medio para mantener el orden en sus talleres.

Mientras tanto, las familias de los desaparecidos se manifestaron juntas para exigir que el gobierno devolviera a más de 800 de sus seres queridos. Fueron encabezados por Rosario Ibarra de Piedra, un ama de casa. Madre de uno de los disidentes políticos desaparecidos de México, Rosario Ibarra llegó a ser afectuosamente conocida como "la señora" y se presentó dos veces consecutivas como la primera mujer en la historia candidata a la presidencia en 1982 y 1988, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un grupo trotskista. Amnistías sucesivas condujeron al "descubrimiento" y liberación de algunas de estas personas, así como de cierto número de prisioneros políticos. Al menos 20 de los desaparecidos fueron declarados muertos. Algunos de los supervivientes fueron vistos en los confines del Campo Militar núm. 1 de la ciudad de México, en donde su encarcelamiento fue censurado por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos internacionales.

La popularidad de "la señora" reflejaba la creciente importancia de las mujeres en la política. A mediados de los años setenta se formó una Coalición de Mujeres Feministas, y mujeres de clase media empezaron a publicar revistas como *Fem*. Algunas mujeres más acomodadas se unieron a "la señora" para acercarse a las mujeres oprimidas de la clase baja, especialmente a las encarceladas y "desaparecidas". Personas pertenecientes a partidos políticos de izquierda montaron una campaña para legalizar el aborto, y numerosas activistas exigieron públicamente igualdad de derechos para los homosexuales.

Después de tomar posesión como presidente a fines de 1976, López Portillo concedió una amnistía parcial para los prisioneros políticos y realizó movimientos de corta vida para luchar contra la corrupción. Buscando, según él mismo dijo, "legalizar la lucha de la oposición", reformó la Constitución para

que los partidos de oposición pudiesen formar parte del "sistema electoral nacional". Legalizó el Partido Comunista. En futuras campañas electorales el estado pagaría el tiempo de televisión para todos los partidos políticos registrados.

La "reforma política" de López Portillo, la primera de varias realizadas por el PRI a lo largo de las dos décadas siguientes, aumentó la porción de los escaños minoritarios en la Cámara de Diputados a 100, reservando todavía 300 para el PRI. El presidente argumentó con mala fe que debido a que los sindicatos obreros ya participaban en un partido político, no se permitía a los partidos de oposición participar en los sindicatos porque ello violaría la "libertad de decisión" de los sindicatos.

El sistema político "oficial" de México constaba en realidad de sindicatos que no lo eran y un partido político gobernante que no era un partido. Los sindicatos eran brazos políticos del PRI y del estado. El PRI era un pequeño grupo formado por altos cargos de la burocracia sindical y los doce miembros del comité ejecutivo nacional del partido, además de otros pocos jefes políticos "de la familia revolucionaria". En un sistema corporativista regulado por un estado autoritario-tecnocrático, el partido gobernante no organizó a la clase cuyos intereses acostumbraba servir (el CCE de la burguesía se encargaba de eso). Tampoco los sindicatos oficiales representaban genuinamente a la clase a la que nominalmente servían; la tendencia democrática y los sindicatos independientes de la nueva militancia eran quienes lo hacían.

Bajo la reforma política de López Portillo, las enmiendas constitucionales, regularmente impuestas por el PRI mediante su reinado en el poder, sancionaron la permanencia del control del PRI hablando de "partidos minoritarios" como opuestos al "partido de la mayoría". Los cambios al Artículo 41 de la Constitución hicieron a los partidos políticos "entidades de interés público" que "contribuían a la integración de la representación nacional". Esto presentaba el peligro de que si surgían ciertas contradicciones —por ejemplo, entre la clase obrera y los "intereses nacionales" o entre los empleados públicos y el estado— era posible esperar que los partidos políticos defendieran legalmente los "intereses públicos" contra los trabajadores. De forma similar, las violentas campañas anticomunistas (o antiextranjeras) del estado recibieron entonces un refuerzo constitucional en la noción de "integración de la representación nacional". La reforma constitucional permitió también al estado hacer legalmente lo que previamente había venido haciendo por costumbre: financiar a las "entidades de interés público", principalmente al PRI pero ahora también a otros partidos políticos.

No obstante, la reforma política de López Portillo representaba una concesión por el estado a los movimientos democráticos de masas de 1968 y siguientes. Reconociendo la existencia de partidos de izquierda, el estado reconocía por primera vez en más de treinta y cinco años que era legítimo disentir. También permitía a la izquierda proclamar una victoria en su larga lucha por exponer la ilegitimidad del sistema político prevaleciente y las justificaciones anticomunistas del estado para la represión. (¿Por qué otra cosa podía ser necesario ins-

tituir una reforma y reconocer al Partido Comunista?) Otorgando a otros partidos el acceso a la televisión pública, la reforma política ofrecía a los mexicanos una oportunidad de luchar por todos los derechos, incluyendo un cambio en las planillas electorales que permitiría la competencia democrática sin definiciones fijas de "mayoría" y "minoría", como sucedía eventualmente. En resumen, la reforma política facilitaba a las fuerzas progresistas nuevos terrenos para la lucha política al tiempo que simultáneamente volvía a legitimar al estado.

Hasta las elecciones que siguieron a las reformas políticas de López Portillo y sus sucesores, los mexicanos rara vez tuvieron alguna oportunidad de votar por los candidatos opositores de izquierda. Incluso allí había un justificado temor a que el voto por la izquierda fuera peligroso ya que tantos activistas de izquierda habían desaparecido o habían sido reprimidos violentamente. Para oponerse al PRI, los mexicanos tradicionalmente votaban (sin peligro) por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), la "oposición leal" del PRI.

Los dos principales partidos políticos de izquierda de México, el nuevo PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores) y el viejo PCM, buscaban sacar ventaja electoral de las reformas políticas. Surgido del movimiento estudiantil de 1968, el PMT empezó como un grupo vagamente organizado de activistas marxistas y católicos. Había echado raíces entre los obreros y campesinos, el clero, los desempleados y los estudiantes en una docena de estados, envolviéndose en el "sarape" populista y nacionalista de la Constitución de 1917.

El PCM era el partido comunista más viejo de América Latina. En un esfuerzo por cambiar su imagen stalinista, admitía sacerdotes en sus filas, sustituía el objetivo de la "dictadura del proletariado" por el del "poder democrático de los trabajadores" y rebautizaba su ideología marxista-leninista como "socialismo científico". La mayoría de sus miembros y simpatizantes eran periodistas, académicos y estudiantes universitarios. En las elecciones a diputados de 1979 el PCM se convirtió en la tercera fuerza electoral de la nación, cosechando el 5.4% de los votos.[21]

En 1981 el PCM se autodisolvió, uniéndose al PMT y otros cuatro pequeños partidos izquierdistas y liberales para formar el PSUM (Partido Socialista Unificado de México). Acribillada por el fraccionalismo, la alianza se reagrupó en 1986 y 1987 para convertirse en el PMS (Partido Mexicano Socialista). En la carrera presidencial de 1988, respaldó a Cárdenas. Después de eso, los seguidores de Cárdenas, incluyendo a la mayoría de los miembros del PMS y de los recién llegados disidentes del PRI, fundaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda. Previamente, los disidentes del PRI habían formado numerosos partidos pequeños a lo largo de los años, aunque la mayoría acabaron funcionando como "satélites" comprados por el PRI (véase el cuadro 17).

[21] Al mucho mayor PMT se le negó el registro electoral. Para una excelente historia del Partido Comunista, véase Barry Carr, *Marxism and communism in twentieth century Mexico* (Lincoln, University of Nebraska, 1992).

Cuadro 17
Partidos políticos de México

Partidos principales

PAN *Partido Acción Nacional*, fundado por conservadores católicos en 1939 como "único partido de oposición independiente"; derecha populista.

PRD *Partido de la Revolución Democrática*, partido de centro-izquierda fundado tras la "victoria robada" a Cárdenas en 1988; Cárdenas ganó las elecciones de 1997 para jefe de gobierno de la ciudad de México, el segundo cargo oficial elegido más importante. Formado por miembros expulsados del PRI encabezados por Cárdenas, hizo con el PMS (*Partido Mexicano Socialista*) una alianza electoral en 1987-1988 que respaldó la candidatura de Cárdenas y se fusionó con el PRD en 1988. El PMS incluía al PCM (*Partido Comunista Mexicano)* fundado en 1919, prohibido en 1929, legalizado en 1935, vuelto a prohibir en 1947, vuelto a legalizar en 1978. El PCM fue disuelto en 1981 cuando entre éste y unos pocos miembros del populista de izquierda PMT *(Partido Mexicano de los Trabajadores)* fundaron el PSUM (*Partido Socialista Unificado de México)*, que tuvo corta vida. El PMT, mucho mayor que el PCM, fue fundado en 1974 por nuevos izquierdistas, incluyendo radicales católicos. La mayor parte de los miembros del PMT se unieron al PRD.

PRI *Partido Revolucionario Institucional*, fundado en 1929, reorganizado en 1938, rebautizado en 1946; partido gobernante multifaccionario; excluyó a la "corriente democrática" de Cárdenas del comité central en 1986 (véase PARM y PRD) y a partir de entonces experimentó muchas defecciones.

Partidos menores

PARM *Partido Auténtico de la Revolución Mexicana*, fundado en 1954 para honrar la Revolución de 1917; muy pequeño; considerado como la sombra o satélite del PRI pero que abrazó la candidatura de Cárdenas en 1988 y presentó su propio candidato a la presidencia en 1994.

PC *Partido Cardenista*, creado a mediados de los años noventa; le quitó votos al PRD; se sospecha que era un "satélite" del PRI.

PDM *Partido Demócrata Mexicano*, fundado en 1971 por católicos ultraderechistas y disidentes del PAN.

PPS *Partido Popular Socialista*, fundado en 1948, un "satélite" de seudoizquierda del PRI; presentó sus propios candidatos en las elecciones de 1994.

PRT *Partido Revolucionario de los Trabajadores*, trotskista, muy pequeño; presentó la primera mujer candidata en 1982, 1988; en 1997, primera lesbiana elegida para el Congreso (con respaldo del PRD).

PST *Partido Socialista de los Trabajadores*, socialdemócrata, fundado en 1973 por nuevos izquierdistas de 1968 y discípulos del presidente Echeverría; "satélite" del PRI; rebautizado FCRN (*Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional)* en 1988 para quitarle votos a Cárdenas; se convirtió en un partido oficial (PFCRN) para las elecciones de 1994.

PT *Partido del Trabajo*, basado inicialmente en comités de defensa de base urbana en el norte, fundado en 1990 con apoyo del PRI; en 1994, apoyó a la carismática candidata presidencial Cecilia Soto González, antigua ultraderechista, para quitarle votos al PRD.

PVEM *Partido Verde Ecologista de México*, participó por primera vez en las elecciones de 1994; "satélite" del PRI.

El CCE de la burguesía respaldó críticamente la "reforma política" de López Portillo. La mayor parte de las diferencias internas de la burguesía fueron enterradas ahora que el CCE era "el que mandaba".

La principal línea visible de división intra-burguesa concernía a cómo manejar la amenaza de clase desde abajo. Algunos, los llamados radicales, eran partidarios de intensificar la represión de los movimientos sociales de masas que estaban resurgiendo y un retorno a los "valores básicos" de familia, religión, patriotismo, disciplina laboral, libre mercado y las elecciones "democráticas" que los candidatos del gran capital podían ganar. La mayor parte de la burguesía, incluyendo a un amplio sector del capital monopólico, eran conocidos como moderados. Favorecían algunas reformas políticas con la esperanza de aislar a los críticos más duros y de cooptar a los más suaves.

Durante las dos décadas siguientes, algunos moderados de la manufactura nacional se volvieron contra las transnacionales y el TLC cuando descubrieron que no podían competir con las empresas estadunidenses. Igualmente, la burguesía estaba descubriendo una oportunidad de conseguir la presidencia para ella misma a través del PAN, que apoyó para presidente en 1988 a un candidato que antes había encabezado la Coparmex y el CCE y durante largo tiempo había sido considerado como un aliado del PRI: Manuel J. Clouthier.

La reforma política de López Portillo consiguió parcialmente sus objetivos a mediano plazo, desviando o frenando la radicalización de millones de personas. Pero la permanente represión y los cambios económicos representaron también un papel importante. Los programas de austeridad del FMI y las políticas económicas relacionadas con ellos en los años ochenta y noventa socavaron considerablemente la insurgencia obrera. Utilizando la crecida deuda de México como palanca, junto con un préstamo de 1.2 mil millones de dólares, el FMI impuso al gobierno entrante de López Portillo normas restrictivas al presupuesto federal, políticas comerciales y estructura laboral.

López Portillo impuso topes salariales obligatorios, pero dejó que el valor del peso y muchos precios de mercado "flotasen", conduciendo a una inflación galopante. Desde 1977 hasta 1980 la inflación promedió casi 25% al año, las alzas salariales alcanzaron un 14% y los aumentos en la productividad de los trabajadores (descontando la inflación) promediaron el 10%. En otras palabras, en vez de elevar los salarios lo suficiente para aumentar el consumo de las masas y la expansión del mercado doméstico, el estado y la burguesía optaron por el patrón limitado usual de acumulación de capital: más monopolización y precios más altos. Para fines de 1982, la inflación se aproximó al 100%.

La instrumentación por el estado de las recomendaciones del FMI permitiendo que los precios aumentasen por encima de los salarios —inflación en nombre de combatir la inflación —permitió así al menos una momentánea renovación de la acumulación de capital a expensas de los grupos de ingresos fijos o bajos. La introducción de un nuevo impuesto del 10% al valor agregado —en realidad un impuesto sobre la venta— agobiaba aún más a los consumidores.

Además, a pesar de la inmensa deuda, Estados Unidos y otros acreedores extranjeros buscaron propulsar la economía de México aportando unos 3 mil millones de dólares de créditos nuevos en diciembre de 1976 y enero de 1977. Para salvar a los banqueros privados, que habían resultado perjudicados por la recesión de mediados de los setenta, las principales agencias financieras del estado (Nafinsa, Banco de México, etc.) incrementaron sus empréstitos del extranjero. Esto ayudó a Nafinsa a salvar a los bancos privados, pero hizo peligrar aún más a los bancos estatales, cuya dependencia de los préstamos del extranjero socavó la autonomía del estado en la toma de decisiones.

A pesar de la reforma política de López Portillo, las protestas sociales no disminuían. Los pobremente retribuidos maestros de escuela se movilizaron para "un salario de sobrevivencia". Eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en 1998 tenía aproximadamente 900 000 miembros, un 70% mujeres. El SNTE era considerado el mayor sindicato de América Latina. Constituía cerca del 40% de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE, fundado en 1938), que a su vez representaba cerca de un tercio de los miembros del CT. Con sus huelgas de 1979-1981 y nuevamente en los años ochenta y noventa, muchos de los maestros de escuela trataban de mantener vivo el espíritu de la militancia laboral de los años setenta.

Bloqueados por líderes sindicales corruptos, los maestros hicieron de la democracia sindical interna su principal exigencia. A fines de los años setenta y principios de los ochenta firmaron alianzas con otros grupos de trabajadores y se acercaron a los habitantes de suburbios pobres y a campesinos. Más de un millar de maestros militantes murieron misteriosamente; muchos más fueron condenados a la cárcel.

Partiendo del SNTE, en los estados más pobres como Chiapas, Oaxaca y Michoacán, surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que luchó por la independencia de clase tanto del estado como de los charros. La CNTE recibió a muchas mujeres líderes cansadas de su estatus de segunda clase en el SNTE. Mujeres indígenas bilingües, principalmente de la CNTE, desempeñaron un papel decisivo para mantener en marcha el movimiento magisterial.

Los maestros de escuela disfrutaban tradicionalmente de niveles de respeto más elevados entre los pobres de México. Los activistas de la CNTE mostraban la razón de esto. Multiplicaron las alianzas con campesinos y obreros en la lucha contra la pobreza, el charrismo y la violencia del estado. En 1982 la CNTE, treinta sindicatos independientes, veinte "corrientes" de base y organizaciones democráticas de base como la campesina CNPA y el Consejo Nacional de Movimientos Urbanos Populares de pobres urbanos (Conamup, formado en 1981) fundaron la Coalición Sindical Nacional (Cosina) de corta vida, para exigir el derecho ilimitado de huelga, democracia sindical y el fin de la represión y de los programas de austeridad. La insistencia de los maestros en la solidaridad con las luchas de obreros y campesinos ilustraba cómo las personas de "clase media" que están siendo conducidas económicamente hacia condiciones de vida

proletarias podían convertirse en una fuerza explosiva —especialmente cuando la lucha comenzaba como lucha contra su *propia* opresión.[22]

PETRÓLEO Y DEUDA

Comprendiendo que muchos ciudadanos dudaban de la reforma política del PRI y de la retórica anti-corrupción, el PRI jugó también su carta del petróleo. El presidente López Portillo anunció en 1977 lo que los altos burócratas del PRI ya sabían desde 1972: nuevos y fabulosos descubrimientos de petróleo en Chiapas y a lo largo de la costa del Caribe. El desarrollo de los recursos petroleros recién descubiertos supuestamente volverían prósperos a todos los mexicanos. Durante cierto tiempo, el empleo se recuperó, al menos en las industrias afectadas por el petróleo, ayudando a debilitar la nueva insurgencia laboral.

Irónicamente, fue por razones políticas que el anuncio de López Portillo sobre la bonanza petrolera llego cinco años más tarde. Aunque el círculo interno del PRI sabía que México era la Arabia Saudita del Caribe, comprendían también que una vez que los piratas burocráticos abrieran el cofre del tesoro petrolero, el barco del estado, no obstante la momentánea estabilización, podría ser muy pronto saqueado de su preciosa carga y arrojado contra las rocas. De manera que habían cerrado bajo llave la historia del petróleo en el gabinete presidencial y habían elegido por el contrario un recurso "nacionalista" retórico de atacar verbalmente el "saqueo" de México por parte de las transnacionales. Pero para fines de 1976 el imperialismo estadunidense y sus "socios de segundo rango" (*junior partners*) de la burguesía mexicana habían desestabilizado el país, sacando gran parte de su capital frente a la nueva militancia laboral. Informando al público de que él "encontró a la nación al borde de la violencia", López Portillo estaba forzado a jugar el triunfo del PRI, la carta del petróleo.

No es sorprendente, pues, que el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter viniera con regocijo en visita oficial, que el FMI y el Banco Mundial abrieran sus puños con préstamos gigantes y que las inversiones extranjeras volvieran a fluir hacia México. A mediados de 1981, durante una recesión mundial, un grupo de ochenta y dos bancos de once naciones otorgaron a Pemex un préstamo a corto plazo de 4 mil millones de dólares para ayudar a que el petróleo siguiera fluyendo. Los bancos estadunidenses prestaron un 40% del total. Las empresas de equipos petrolíferos estadunidenses experimentaron un verdadero auge, vendiendo a Pemex maquinaria por valor de 2 mil millones de dólares solamente en 1981 —una suma equivalente a una séptima parte de los ingresos por exportaciones de Pemex. Además, la industria en México se benefició porque

[22] El autor agradece a los miembros del movimiento de huelga de los maestros, particularmente a Juana María Gandy, por su generosa ayuda al proporcionarle información sobre su lucha. Más sobre el movimiento de maestros en María Lorena Cook, *Organizing dissent: unions, the state, and the democratic teachers' movement in Mexico* (University Park, Pennsylvania State University Press, 1996).

pudo comprar productos de petróleo y gas de Pemex a un tercio de su valor de mercado mundial.

Por su parte, el pueblo mexicano experimentó repetidas alzas de precios en los productos de hidrocarburos para sus vehículos y casas. López Portillo cambió el Artículo 27 de la Constitución para dar a Pemex derechos sobre todas las tierras de México. Los campesinos de Chiapas y de otros lugares realizaron protestas contra los despojos de tierras de que fueron víctimas por Pemex y contra la contaminación causada por las empresas de Pemex. Como rezongaba un campesino: "¿De qué nos sirve esa fabulosa riqueza si los pobres están llorando de hambre?"

Para garantizar la cooperación del capital extranjero en su costosa carrera para obtener los equipos y los conocimientos técnicos requeridos para la súbita expansión de la producción petrolera, el gobierno mexicano relajó sus leyes reguladoras sobre importación de maquinaria para la industria petrolera y la inversión extranjera en la petroquímica —las leyes se relajaron de nuevo bajo los esquemas del TLC de "un campo de juego nivelado" para todos los inversionistas bajo la rúbrica de "libre competencia y comercio". Los cambios en la Ley del Petróleo en 1959 ya había abierto la puerta en la petroquímica secundaria a los intereses estadunidenses, y para 1982 había dos veces más capital invertido en ella que el que había en el sector químico primario. La industria farmacéutica, de pinturas y de fibras sintéticas estaba controlada por Estados Unidos. La industria petroquímica como un todo estaba sucumbiendo ante la dominación del capital extranjero.

Para 1982, las reservas petroleras probadas se estimaban en 72 mil millones de barriles, sus reservas probables entre 90 y 150 mil millones, y sus reservas potenciales en 250 mil millones, no muy por debajo de las de Arabia Saudita. Además, existían 200 mil millones de pies cúbicos de reservas de gas natural probadas, y cuatro veces esa cantidad de reservas de gas natural potenciales. A principios de los años ochenta, la producción petrolera fluctuaba entre 1.5 y 3 millones de barriles diarios. Ocupando como mínimo el cuarto lugar mundial en capacidad refinadora, ventas y producción de petróleo y petroquímica, Pemex extendió sus exploraciones y programas de desarrollo tecnológico en el resto de América Latina, incluyendo a Cuba, que confiaba en obtener la mayor parte de sus importaciones de petróleo desde México.

Oficialmente, el estado dijo que nunca enviaría más de la mitad de sus exportaciones de hidrocarburos a un solo país, pero para 1981 estaba enviando 80% (principalmente petróleo crudo) a Estados Unidos a precios por debajo de los del cártel de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), principalmente con base en el Oriente Medio. El auge petrolero incrementó la silenciosa integración de las economías de México y Estados Unidos, a medida que México vendía "petrobonos" y acciones de bolsa de la industria mexicana en los mercados monetarios de Estados Unidos. Abrió también ramas de los bancos estatales en Nueva York (por ejemplo, Somex, un banco con mayoría de acciones estatales).

Una vez más en su historia México se convirtió en un monocultivo, a medida que los productos petroleros muy pronto representaron el 75% de sus ingresos por exportaciones. Más de la mitad de su PIB derivaba del petróleo. En la prisa por producir petróleo para su exportación, el volumen de gas perdido por la quema era equivalente al dinero suficiente para pagar el salario mínimo de medio millón de mexicanos en el Distrito Federal.

La mayor parte de las inversiones nuevas de Pemex eran financiadas por los préstamos extranjeros, llevando a su deuda de 25 mil millones de dólares de mediados de los años ochenta (o un tercio de la deuda externa de la nación, otro 15% de la cual lo debía el complejo eléctrico estatal: la CFE). De la deuda pública y privada total de México en 1980, cerca de un 95% era en dólares y más de la mitad de prestamistas estadunidenses. Por cada dólar prestado a México, por lo menos 96 centavos debía devolverlos como pago de los intereses de préstamos anteriores.[23]

Las ganancias de Pemex por concepto de exportaciones no bastaban para cubrir los pagos por el servicio de la deuda externa, pues la expansión de Pemex alimentaba el círculo vicioso de importación de tecnología/deuda que ya hemos descrito. Entre tanto, los funcionarios estadunidenses utilizaban su influencia dentro del FMI y del Banco Mundial en 1979 para defender internacionalmente el dólar estadunidense mediante la instrumentación de estrictas políticas monetarias. Las tasas de los intereses se dispararon, y los pagos de los intereses de México por su deuda ascendieron de forma correspondiente.

Cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan asumieron sus cargos, el neoliberalismo empezó a imponerse —y el mundo se hundió en la peor recesión desde la Gran Depresión de los treinta. Por lo tanto, en 1981-1982, la siguiente ocasión de un programa de austeridad impuesto a México por el FMI, el estado se encontró incapaz de salvar a los bancos privados en la forma acostumbrada.

En 1981 la petro-burbuja empezó a evaporarse, y para fines del año México tuvo que rebajar los precios de su petróleo de exportación en más de 8 dólares por barril, lo que produjo un clamor nacional. Para México, la reducción en los precios mundiales del petróleo significó perder ganancias de 10 mil millones de dólares en la primera mitad de 1982.

Detrás de las rebajas en los precios del petróleo se encontraban presiones estadunidenses tan obvias como la retención de préstamos e inversiones y la cancelación de los contratos con Pemex. Las compañías petroleras declaraban que había una saturación mundial de petróleo. Se creía que una de las empresas que rompieron sus contratos, Exxon, estaba poniendo en práctica un plan para romper el cártel de la OPEP acumulando suficientes reservas de crudo para un periodo de dos años, forzando a las naciones productoras a una guerra de precios.

El gobierno de México anunció que Pemex había firmado un contrato de cinco años para vender petróleo directamente al Departamento de Energía de Es-

[23] Banco de México, informes anuales.

tados Unidos para su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) —la primera de tales compras directas de una agencia de un gobierno extranjero por el Departamento de Energía estadunidense. Los precios no se hicieron públicos, pero se indicó que podrían renegociarse cada tres meses y que México estaba precisamente en ese momento vendiendo por debajo del precio promedio de la OPEP en más de 3 dólares por barril. Un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos comentó: "Eso es algo que me encanta."

Al comienzo de su gobierno, López Portillo prometió a los mexicanos que "su" estado nunca emplearía sus reservas petroleras para el servicio de la deuda o para pagar las importaciones de maíz. Pero ya en fecha tan temprana como 1981 México estaba haciendo precisamente eso. Además, ya no controlaba por completo los recursos energéticos que poseía de petróleo, gas y uranio. Transnacionales como Occidental Petroleum y Dresser Industries de Dallas manejaban operaciones relacionadas con el petróleo mexicano que generaban decenas de millones de dólares en ventas cada año, y los acreedores extranjeros mantenían la espada de Damocles de la deuda externa pendiente sobre la cabeza del estado mexicano.

Al final, el aumento en las deudas del gobierno mexicano para desarrollar la industria petrolera solamente había acelerado la "petrolización" y "sobrecalentamiento" de la economía. El resultado fue una inflación desbocada, corrupción generalizada, un atasco de petróleo mundial, creciente crisis de la deuda y para fines de 1981, una caída en picada de los precios del crudo.

Bajo la carga de las altas tasas de interés de sus deudas en el exterior y de la baja en los precios del petróleo, el estado mexicano enfrentaba la insolvencia. La capacidad de negociación de México con los prestamistas extranjeros no mejoró cuando el mayor derrame de petróleo del mundo, brotando del pozo submarino Ixtoc I en la bahía de Campeche, inundó las playas del sur de Tejas. Algún tiempo después una empresa petrolera tejana reconoció que el accidente fue provocado por un equipo que había alquilado a Pemex.

Acostumbradas a tener acceso a los recursos naturales extranjeros e influencia en la formación de la política exterior de Estados Unidos, las compañías petroleras estadunidenses actuaban como si las reservas de petróleo, gas y uranio de México fueran —a largo plazo— de su propiedad. Además de poseer aproximadamente un tercio de todas las inversiones estadunidenses en el extranjero, ya representaban cerca del 65% del gasto (inversión de capital) de la industria petrolera mundial, el 80% de su gasto en exploración petrolera y el 50% de sus activos fijos. Estados Unidos representaba casi una cuarta parte del consumo de energía mundial y cerca del 13% de la producción de energía. Sin embargo, sólo tenía el 2% de las reservas petroleras probadas del mundo.

A lo largo de los años, ejecutivos, abogados y banqueros asociados con la gigantesca Standard Oil de Nueva Jersey, dominada por Rockefeller, habían dirigido la CIA, ocupado altos cargos en el gobierno estadunidense y determinado muchos destinos diplomáticos. Si bien el embajador estadunidense en México no podía arreglar golpes militares tan fácilmente como en 1913, o apretar un

botón en la mesa de su despacho para en cuestión de segundos trasmitir una orden al presidente de México, como un embajador en funciones en 1964 relató que estaba en condiciones de hacer,[24] la embajada seguía siendo —en países como México y, antes de su toma por los estudiantes insurgentes en 1980, Irán— un conducto de primer orden para movimientos que garantizaban la continuación del dominio de Estados Unidos.

A la luz de estos antecedentes, a nadie sorprendió que el embajador Julián Nava describiera a México en 1980 como "una zona estratégica y vital para los intereses estadunidenses" —lenguaje diplomático estándar para un área sujeta a la intervención militar directa. Tres años antes el secretario de energía James Schlesinger había declarado que garantizar los suministros de petróleo para Estados Unidos era "una responsabilidad militar". Un estudio de la CIA intitulado "La situación energética internacional: perspectivas para 1985" anticipaba que México suministraría a Estados Unidos 4.5 millones de barriles de petróleo por día antes de 1985. El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos describió a México como la mayor amenaza de seguridad para Estados Unidos en los próximos diez años. La sospecha del apoyo encubierto mexicano a las guerrillas centroamericanas se convirtió en un objeto de preocupación para el Consejo de Seguridad Nacional.

La proximidad de los campos petroleros mexicanos a Guatemala, El Salvador y Nicaragua se convirtió en una piedra angular de la justificación para la intervención militar estadunidense en Centroamérica. En discursos para defender las acciones militares estadunidenses contra la revolución nicaragüense, por las que Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Mundial, el presidente Ronald Reagan invocó "la amenaza" que él veía que las revoluciones centroamericanas estaban planteando para "Panamá, el canal y, en última instancia, México". Reagan habló de "millones de pies descalzos" atravesando la frontera sur de Estados Unidos.[25]

"Despedazar a México y Nicaragua" se convirtió en un juego favorito de los medios de comunicación de Estados Unidos, previendo la preparación de la opinión pública ante la posible intervención militar estadunidense en cualquiera de esos dos países. Un artículo de la revista *Gallery* en 1980 describía una imaginaria invasión estadunidense al sur de la frontera para asegurar los suministros de petróleo, mientras que un programa especial de la CBS en 1982 retrataba a México como bamboleándose al borde del caos y al nuevo presidente Miguel de la Madrid como incompetente y ridículo. En respuesta al artículo de *Gallery*, ampliamente citado en la prensa mexicana, el ejército de México juró "defender la patria" —y procedió a romper las protestas campesinas contra la rapiña de sus tierras por parte de Pemex.

El petróleo estaba propiciando una creciente militarización de la sociedad mexicana. Esto satisfacía las necesidades de los imperialistas estadunidenses,

[24] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1964.

[25] El presidente Ronald Reagan a la National Association of Manufacturers, 10 de marzo de 1983.

cuya estrategia preferida para asegurarse el petróleo mexicano no era la intervención militar directa (excepto como último recurso) sino más bien una combinación de presiones económicas y diplomáticas y el cortejo a los aparatos militar y policiaco de México.

Mientras se intensificaban las presiones imperialistas sobre México, el gobierno devaluó el peso en un 65% en febrero de 1982. Se sucedieron fuertes reducciones del presupuesto federal, aplaudidas por el FMI y la comunidad bancaria internacional.

Seguidamente el gobierno mexicano anunció que había descubierto un documento secreto del Departamento de Estado que exponía (de manera profética) que la crisis económica mexicana podría obligarle "a vendernos petróleo y gas a mejor precio". Los funcionarios trataron de asegurar a los mexicanos que esto no llegaría a suceder, y que tampoco habría más devaluaciones. Como sucedió en 1976, los capitalistas empezaron a sacar de México enormes sumas (hasta 100 millones de dólares por día). La deuda pública y privada de México se disparó hasta 80 mil millones de dólares (66 mil millones públicos), la deuda *per capita* más elevada en el tercer mundo.

En agosto de 1982, México asombró al mundo al anunciar que no podría servir los pagos de su deuda durante los noventa días siguientes. Estalló el inevitable pánico financiero. Una devaluación del peso del 100% en dos etapas completó una disminución de diez veces en su valor frente al dólar desde 1976.

El capital monopólico estadunidense aprovechó la oportunidad para obtener más petróleo y gas y un completo dominio sobre la economía y el estado mexicanos. El gobierno de Estados Unidos arregló una compra de petróleo de mil millones de dólares en efectivo adelantado para su reserva de petróleo estratégica a un costo por barril demasiado bajo para ser anunciado. Como parte de un crédito del FMI de 4.5 mil millones de dólares en *stand-by*, México aceptó un programa estabilizador similar a los acuerdos hechos desde 1976 hasta 1977 que, en retrospectiva, sólo había profundizado la crisis económica y política de la nación. Ocurrió la primera de muchas renegociaciones de la deuda, y nuevos préstamos fueron facilitados a México.

Dicho todo esto, el salvamento internacional de México dirigido por Estados Unidos en agosto de 1982 totalizó 10 mil millones de dólares, a cambio de los cuales el gobierno de México prácticamente garantizaba que Estados Unidos recibiría el grueso de las ventas de petróleo y gas de México a un precio inferior al del mercado para el futuro previsible. Para el público mexicano, el mensaje de que en última instancia sería él quien pagaría el costo del salvamento había sido entregado ya desde agosto, cuando el gobierno anunció la duplicación del precio de las tortillas, el pan, el gas y la electricidad.

México estaba bien avanzado en su camino para convertirse en el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos. Las importaciones de petróleo muy pronto representaron más de la mitad del valor de todas las importaciones estadunidenses desde México. La OPEP nunca recuperó su control dominante sobre los precios del petróleo, a medida que los grandes consumidores de petróleo del

mundo (Estados Unidos, Europa occidental y Japón) y sus compañías petroleras, junto con los "independientes", iban ganando mayor influencia sobre la comercialización y los precios del petróleo. Dado que Pemex era uno de los "independientes", Estados Unidos se movió para aumentar su influencia y control sobre las actividades de Pemex. La deuda acrecentada de México (y de Pemex) seguía siendo una poderosa herramienta a disposición de Estados Unidos.

El 6 de septiembre de 1982, el secretario de Hacienda Jesús Silva-Herzog anunció que en 1983 México sólo pagaría los intereses de su deuda. La verdad era que México no podía pagar ni siquiera los intereses a no ser que duplicase su producción de petróleo y aumentase las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, lo que procedió a hacer. Para fines de 1983, las exportaciones de petróleo crudo a Estados Unidos se aproximaban a un millón de barriles por día, comparadas con sólo 100 000 en 1975.

Como ya vimos, para aumentar su producción de petróleo, México tuvo que pedir dinero prestado para pagar la maquinaria importada de Estados Unidos. Junto con las devaluaciones del peso, las crecientes tasas de interés y la inflación, esto disparó la deuda externa. Después de la doble devaluación del peso en agosto de 1982, continuó el mismo patrón. Para fines de aquel año, el FMI tuvo que persuadir a los bancos comerciales privados para que otorgasen una ayuda abierta de fondos de 3 920 millones de dólares del FMI para México con un préstamo de 5 mil millones de dólares.

Una vez más, los acreedores de México condicionaron los préstamos a la instrumentación por parte del estado de nuevos techos salariales y otras concesiones para favorecer al capital privado. El sucesor de López Portillo, Miguel de la Madrid (1982-1988), egresado de Harvard en economía, aceptó. Pero México no salió de su recesión.

La mayor parte de las evidencias señalaban a la repetición de una crisis financiera del tipo de la de 1982 en escala mucho mayor en algún tiempo posterior —lo cual eventualmente sucedió, en 1994 y hasta 1995. A la luz de la creciente pobreza de las masas, los signos de unidad entre los principales partidos de izquierda, y la nueva, aunque crecientemente repetida y "defensiva", militancia laboral, surgió una cuestión natural: ¿estaba México en camino hacia algún tipo de explosión social como la sucedida en Irán en 1979, que también necesitó varios años para llegar a su punto de ebullición?

Más de un millón de los regularmente empleados en México fueron despedidos en el otoño de 1982, mientras un porcentaje aún mayor de la población era empujada a las filas de la población excedente relativa, de la que el capital podía obtener más mano de obra barata para explotarla durante cierto tiempo antes de descartarla nuevamente. La estrategia del capital monopólico era desembarazarse de la recesión mundial que en primer término había generado. Como declaró al *New York Times* (20 de septiembre de 1982) el gerente de una planta de la Fisher-Price Toys en Tijuana: "Esencialmente, estamos comprando mano de obra, y la devaluación [del peso] va a hacer menos costosa la compra de esa mano de obra."

El uso aumentado de un mercado laboral doble que incorporaba trabajadores temporeros superexplotados, un aumento en el ejército laboral de reserva a través de despidos masivos, salarios reales más bajos, todos ellos eran componentes básicos de la estrategia del capital para hacer frente a las decrecientes tasas de ganancia y lograr salir de la crisis. Éste era el núcleo de la doctrina neoliberal del libre mercado que se convirtió en política oficial de México a partir de 1982, pero que ya estaba en funciones por medio de los programas de "estabilización" del FMI y de los paquetes de salvamento.

El estado mexicano tenía la contradictoria misión de controlar a la fuerza de trabajo mediante concesiones como alzas salariales, al tiempo que fomentaba la acumulación de capital. Los subsidios estatales al sector privado se sumaban al creciente endeudamiento del estado y a su crisis fiscal, erosionando así la autonomía estatal. Con los programas de "estabilización" del FMI, en palabras de López Portillo, "la capacidad del estado para resolver conflictos se abole y se cancela su posibilidad de gobernar". Esto era un presagio de la inminente crisis del estado corporativo mexicano.

Sólo en su todavía relativamente independiente política exterior no estaba "cancelada" la "posibilidad de gobernar" del estado mexicano. Con el fin de mantener la doctrina de no intervención de la Revolución mexicana y apaciguar a la oposición de izquierda, así como para ganar fuerza en sus negociaciones internacionales con Estados Unidos, el gobierno protestó por la intervención de este país en América Latina. Dio apoyo moral y en pequeña escala económico a las nuevas revoluciones que sacudían el continente —desde Cuba y Granada hasta Nicaragua y El Salvador. En 1980-1981, México definió a Centroamérica como su "área natural de influencia". Los capitalistas mexicanos deseaban establecer una presencia industrial, técnica y financiera en la cuenca del Caribe, otra razón por la que el gobierno estaba deseoso de aceptar allá nuevas revoluciones "desarrollistas" (lo que parecía tan inevitable como lo de México en 1910).

Si bien en sus relaciones exteriores México sólo obtuvo minúsculos logros económicos al diversificar su comercio y sus fuentes de inversión externa (por ejemplo, con Japón), sí conquistó una modesta distinción internacional. Su proclamación conjunta con Francia a fines de 1981, reconociendo al Frente Democrático Revolucionario pro guerrillero como una fuerza política legítima en El Salvador, impulsó a México al primer plano de la diplomacia internacional. Su posición estaba en marcado contraste con el retrato del gobierno de Estados Unidos de las fuerzas populares de la región como parte de una masiva conspiración "marxista" soviético-cubana. Cortejando a la Internacional Socialista mayoritariamente europea y a los sandinistas de Nicaragua, el estado mexicano ampliaba su margen de maniobra en sus relaciones con Estados Unidos y en cierto modo revivía sus descoloridos colores revolucionarios dentro de casa. México contribuyó a la conclusión de los acuerdos de paz en Centroamérica.

La defensa de México de la resolución pacífica de conflictos, sin embargo, fue desmentida por su violenta supresión de los refugiados guatemaltecos y sal-

vadoreños que huían de los escuadrones de la muerte militares y paramilitares. México encarceló a unos cuantos y deportó a otros muchos de regreso a sus lugares de origen, en donde eran asesinados. El ejército mexicano patrulló la frontera sur del país y se ganó una nefasta reputación por su maltrato a los refugiados, muchos de los cuales acabaron en miserables campamentos de refugiados.

El GATT

México fue sólo una de las muchas naciones del tercer mundo que tuvieron que enfrentar la crisis de la deuda de los años ochenta. Aunque los medios de comunicación occidentales achacaban la crisis a la mala administración de los gobiernos extranjeros, los bancos occidentales habían cometido los más graves errores administrativos. Ampliaron sus préstamos a los países del tercer mundo después de la recesión de 1973, cuando el capital occidental se apresuraba a conquistar más mercados, recursos naturales y fuerza laboral barata para librarse de su crisis de sobreproducción y de la tendencia de la tasa de ganancia a disminuir.

Después del anuncio de quiebra de agosto de 1982, el gobierno de López Portillo empezó a desintegrarse. ¿Cómo podía México pensar en pagar los intereses o el principal de su deuda externa? En vista de la petrolización de la economía, la dolarización y la relativa descapitalización, y de la debilidad del cuerpo político, ¿cómo podría evitarse el cataclismo social, o al menos posponerlo? Finalmente, ¿quién pagaría el costo —y aceptaría la culpa— por los quebrantos económicos del país?: ¿los altos burócratas del estado o los banqueros privados y los industriales, que habían engordado, todos ellos, con los sustanciosos ingresos del petróleo durante los años de auge?

López Portillo respondió la mayoría de estas preguntas al final de su informe "de despedida" sobre el estado de la nación, el 1º de septiembre de 1982. Después de parlotear acerca de los "logros" de su gobierno, el presidente tronó contra las potencias industrializadas occidentales, cuyas altas tasas de interés y su injusto trato a los países menos industrializados contribuyeron al rápido ascenso de la deuda externa del tercer mundo. Luego reprendió duramente a los banqueros privados de México, quienes, según dijo, habían saqueado a la nación mucho más que cualquier potencia colonialista. Los espectadores que presenciaban el discurso ante las pantallas de sus televisores pudieron ver cómo los líderes del CCE y de la ABM (Asociación de Banqueros de México) despertaban de su somnolencia. El presidente acusó a los banqueros de haber saqueado al país 50 mil millones de dólares y de haberlos escondido en bancos y bienes raíces de Estados Unidos. Luego, con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, el presidente despertó a todos los miembros del Congreso con el anuncio de que iba a expropiar los bancos privados de la nación, con compensaciones para sus propietarios.

En un momento memorable, que nadie esperaba, el estado se había salvado y a gran parte del capital privado mexicano convirtiendo a los banqueros en chivos expiatorios y apoderándose de los depósitos bancarios, las inversiones de los bancos en más de cien industrias y las enormes deudas de los bancos (calculadas en 6 mil millones de dólares). La expropiación puso en manos del estado la mitad de los fondos de los bancos nacionales; el estado ya poseía la otra mitad y, como señalamos antes, los había puesto a trabajar para el capital monopólico privado. Tras un momento de atónito silencio, todos los presentes en el anuncio presidencial, excepto los dirigentes del CCE y la ABM y sus amigos, se pusieron en pie y aplaudieron.

El PRI estimuló una euforia de nacionalismo, comparando la acción de López Portillo con la nacionalización petrolera de Cárdenas en 1938 y con el "momento de gloria" de Zapata y Villa. La comparación era espuria: no hubo ningún movimiento de masas implicado en la toma de los bancos, aunque la izquierda y la nueva militancia laboral habían abogado por un paso semejante desde hacía mucho. El gobierno no habló de elevar los salarios o de volver a dar trabajo a un millón de trabajadores despedidos. Por el contrario, propugnaba el "sacrificio" y la defensa del "honor de la nación".

El 3 de septiembre, cerca de medio millón de personas abarrotaron el Zócalo de la ciudad de México para respaldar al presidente en un mitin patrocinado por el estado. Todos los partidos de oposición mexicanos, excepto los dos principales de derecha, el PAN y el Partido Demócrata Mexicano (PDM), apoyaron críticamente la expropiación de los bancos. Algunos izquierdistas, incluyendo a muchos comunistas, creían que *no* toda la "clase política" estaba subordinada a la burguesía y el imperialismo. Argumentaban que por lo menos parte de la "tecno-burocracia" constituía una "clase media" (llamada en ocasiones una "clase gobernante") que podía ser empujada hacia la izquierda por la movilización popular. Mientras tanto, quienes conducían la lucha popular desde abajo por los derechos económicos y políticos repudiaban este punto de vista y proseguían su lucha, conducida por diversas redes de trabajadores independientes, campesinos y habitantes de los barrios pobres. Publicaciones como la revista mensual *Punto Crítico* defendían la posición independiente de la lucha desde abajo.

Si bien el presidente conquistó el apoyo público acusando a los banqueros y anunciando líneas de crédito a bajos intereses para las pequeñas y medianas empresas, ¿qué pasaba con los *políticos* que se habían embolsado gran parte de los ingresos del petróleo? Los bancos privados poseían información sobre el tema. ¿El estado había nacionalizado la banca para evitar un escándalo de ratería burocrática? El semanario izquierdista *Proceso* se elevó por encima de las normas acostumbradas de autocensura y publicó artículos, con fotografías, acerca de las casas de millones de dólares que el regente del Distrito Federal, Carlos Hank González, y el jefe de la policía, general Arturo Durazo Moreno, así como el propio presidente López Portillo, habían adquirido o estaban construyendo.

El decreto bancario de López Portillo fue un intento desesperado por contener la hemorragia económica del estado, quitar argumentos a la izquierda,

distraer a la nueva insurgencia laboral y reafirmar la autonomía estatal. Reformas más profundas al estilo de Cárdenas, tanto en áreas como el petróleo, la tecnología o la industria pesada, o abiertamente contra las transnacionales, hubieran forzado a México a una postura antimperialista en la práctica tanto como en la retórica, y ¿dónde hubiera dejado eso a la clase dirigente, sin el apoyo del imperialismo? Por eso fue que López Portillo actuó contra el capital improductivo —los bancos privados— y no contra el imperialismo o contra la industria. La acción misma fue política, dando al estado corporativo más espacio de maniobra "nacionalista" con el que manipular la lucha de clases.

El decreto presidencial de nacionalización excluía a los bancos extranjeros. Los motivos económicos detrás de su acción encontraron la aprobación de muchas transnacionales y de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que temían un incumplimiento en la deuda externa de México (que representaba el 10% de las deudas combinadas de los países menos industrializados y de Europa oriental). Un incumplimiento mexicano podría haber encendido la mecha de una reacción en cadena de suspensiones de pagos de las naciones menos industrializadas y un pánico financiero de alcance mundial.

Cerca de dos tercios de la deuda total del tercer mundo era adeudada a los bancos privados, y el 22% de esa cantidad entraba en los libros de sólo nueve empresas estadunidenses (muy por encima del capital accionario total de los bancos). La deuda de México representaba el 17.1% de los préstamos bancarios de Estados Unidos a los países del tercer mundo y al bloque oriental. Los tres bancos mayores de Estados Unidos —Citibank, Chase Manhattan y Bank of America— se calculaba que tenían un 40% de su capital paralizado en México. Sus ejecutivos celebraron el decreto de nacionalización de la banca de López Portillo, comprendiendo que el estado estaba absorbiendo las deudas incobrables de los bancos privados, con lo que salvaba así a los banqueros de la posible insolvencia.

La alianza recién ampliada entre el estado y el CCE y la ABM no fue rota totalmente por la acción de López Portillo, aunque sí resultó dañada. Para suavizar aún más las cosas con los banqueros, López Portillo y sus sucesores designaron a miembros de la comunidad bancaria o a sus amigos para puestos en la burocracia estatal para manejar y administrar el sector bancario ahora expandido. Éstos fueron en primer lugar los verdaderos responsables de la crisis económica de México.

Algunos prominentes miembros del CCE hablaron de un *lockout* de patrones para protestar por la falta de sensibilidad del gobierno para los derechos de la propiedad privada, y amenazaron con una demanda judicial. El grupo Monterrey, los miembros de la ABM, y algunos otros grandes capitalistas, que buscaban aprovechar el descontento de las clases medias mexicanas, declaraban que sólo la "privatización" de la economía, no la nacionalización, podría "salvar a la nación". Reforzaron sus campañas contra los sindicatos y por la "flexibilidad" de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales (esto es, nada de horas extras, sustitución de trabajadores por otros a tiempo parcial, y me-

didas similares que se convertirían en prácticas comunes bajo el neoliberalismo). Abogaban por la participación pública de la comunidad empresarial en la vida política de la nación y se afiliaron a partidos políticos. Algunos de esos elementos estaban presumiblemente detrás de los rumores de un golpe de estado militar que prevalecieron durante los meses finales del sexenio de López Portillo.

Al cabo de un año, tanto el CCE como la Coparmex, miembro muy derechista del CCE, estaban haciendo propaganda para un cambio radical en la estructura política de México. Propugnaban remplazar el proceso de tres vías de toma de decisiones del estado (estado/mano de obra/empresa) por uno de sólo dos vías (estado/empresa), en donde una racionalidad tecno-económica sustituiría a la "ineficiencia" y corrupción del corporativismo político.

Pero incluso los banqueros, mediante sus lágrimas de cocodrilo, aceptaban la expropiación estatal de los bancos privados desde el momento en que vieron lo popular que era y después de que los principales magistrados de la nación respaldaran públicamente la acción del presidente. También, por supuesto, estaban recibiendo dinero del estado como compensación por la pérdida de sus bancos. Lo más importante de todo fue que los sucesores de López Portillo, sustentadores del llamamiento del CCE en favor de las políticas económicas neoliberales, empezaron a vender las acciones de los nuevos bancos estatales a los antiguos propietarios y a sus amigos íntimos. Esto era especialmente conveniente para los banqueros, ahora que el estado había pagado por ellos sus deudas incobrables. Los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo completaron la privatización de los bancos estatales en la década de los años noventa, absorbiendo sus deudas restantes a un elevado costo para el gobierno en el proceso. Así fue como los banqueros rieron los últimos.[26]

Mientras tanto, los intereses económicos de Estados Unidos siguieron acosando a México casi hasta eliminar sus barreras aduanales que protegían la producción nacional de la competencia extranjera. Urgían a México a unirse al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Decisiva en la formación de las políticas de Estados Unidos sobre México era la familia Rockefeller. Más temprano en el sexenio de López Portillo, el banquero David Rockefeller y su ayudante durante muchos años Henry Kissinger se reunieron con líderes de los principales grupos industriales de México para intentar persuadirles para que México se integrase al GATT. Tenían la esperanza de "desarrollar" a México a través del GATT en la dirección de sus ventajas "naturales" como exportador de petróleo a cambio de un aumento en las exportaciones de capital y otros bienes y servicios de Estados Unidos hacia México. El objetivo era convertir a México en una "plataforma para la exportación" como Taiwán y Corea del Sur.

[26] Para la historia completa, véase Sylvia Maxfield, *Governing capital: international finance and Mexican politics* (Ithaca, Cornell University Press, 1990), pp. 142-64. Un analista de Standard and Poor calculó los costos del rescate de Salinas y Zedillo de los bancos estatales que fueron privatizados en la gigantesca suma de 47 mil millones de dólares, o cerca del 13% del PIB mexicano en 1995.

En respuesta a las presiones populares contra este esquema, López Portillo anunció a principios de 1980 que México estaba posponiendo su entrada en el GATT, pero la familia Rockefeller seguía impulsando la idea. Implícita en el salvamento económico de 1982 de México estaba la aceptación de México de unirse al GATT, junto con el resto de la agenda Rockefeller y neoliberal: trueque de bonos de la deuda, "privatización" y "desarrollo" de "libre mercado" orientado a las exportaciones. El sucesor de López Portillo, el presidente de la Madrid (1982-1988), nombró a un líder de la "tecno-burocracia", Carlos Salinas de Gortari (doctorado en Harvard en economía y administración pública), como su secretario de Planeación y Presupuesto. Salinas puso en práctica la doctrina económica del neoliberalismo que empezaba a estar de moda. Fue llamada "terapia de choque" para "una economía enferma".

El gobierno del presidente de la Madrid privatizó 743 empresas estatales, redujo los gastos del estado hasta un 17% del PIB (desde un 30% en 1981) y redujo los salarios reales en un 60%. La tasa de cambio del peso se desplomó hasta cerca de 2 400 por dólar, haciendo la mano de obra mexicana todavía más barata para los propietarios extranjeros de maquiladoras, que respondieron invirtiendo otros 10 mil millones de dólares (gran parte de los mismos en yenes japoneses). Los trueques por bonos de la deuda de 108 mil millones de dólares entregaron empresas mexicanas por valor de 4 mil millones de dólares a los extranjeros. El grupo Monterrey de capitalistas ofreció también a sus acreedores extranjeros acciones a cambio de la reducción de la deuda. Excepto por el petróleo, la mayor parte de la gran industria estaba consolidada en el norte de México.

En medio de la prolongada recesión de México de los años ochenta, los empleados públicos y privados no podían mantener su nivel de vida. Las tasas de interés extranjeras seguían siendo elevadas, los precios de la comida y los alquileres se dispararon, los ingresos por el petróleo mexicano declinaban periódicamente y el crecimiento del PIB anual resultó negativo durante los años de de la Madrid. Sin impresionarse por la "terapia de choque", los mexicanos ricos enviaron entre 6 y 12 mil millones de dólares por año a bancos extranjeros ("capital tránsfuga").

Mientras que los mexicanos laboriosos se apretaban los cinturones, los pagos netos totales de México a países extranjeros entre 1982 y 1988 alcanzaron la cifra de 68 mil millones de dólares. Así, la "bomba de succión" siguió absorbiendo la mayor parte del excedente que producían los trabajadores mexicanos. La desnutrición empezó a afectar a la mayoría de los mexicanos.

Para 1986, los precios de las exportaciones de petróleo mexicano habían caído hasta sus niveles de 1973. Una masiva campaña de propaganda del gran capital comparaba los males del "gobierno y la burocracia" con el bien de "la sociedad civil y la empresa privada". "Sociedad civil" para la élite mexicana significaba "economía de mercado". Después del temblor de 1985, sin embargo, cuando los ciudadanos hicieron más en las operaciones de rescate de lo que hizo el estado, la mayoría de los mexicanos empezaron a ver la "sociedad civil" como una en la que los ciudadanos ocupaban el lugar del estado.

Todas estas presiones causaron que el presidente de la Madrid aceptara atar los futuros pagos de la deuda mexicana al precio del petróleo, abandonar totalmente el ya descolorido "milagro económico" de "industrialización de sustitución de importaciones", y anunciar que ciertamente México se integraría al GATT. En México, la agroindustria corporativa estaba complacida, puesto que deseaba expandir sus exportaciones a Estados Unidos y por eso propugnaba el "libre comercio". Unas pocas de las industrias domésticas de México que habían crecido durante los años de sustitución de importaciones también precisaban de mercados más amplios. Sus tasas de ganancia, como ya señalamos, habían venido declinando. Además, la industrialización de sustitución de importaciones había perdido impulso, a medida que la brecha entre ricos y pobres simplemente significaba que en México nunca habían surgido suficientes consumidores para comprar bienes manufacturados a los precios vigentes.

Para ilustrar el compromiso de México con el "libre comercio" y el gran capital, el gobierno del presidente de la Madrid rebajó los impuestos y eliminó las principales regulaciones sobre el capital privado y extranjero. Estableció también un enfoque más libre de impuestos que nunca para el capital privado, especialmente en las zonas de libre comercio de las maquiladoras, y ofreció incentivos para las empresas exportadoras. Estableció un "Pacto de Solidaridad" entre la gran empresa y los sectores obrero y campesino del PRI. En 1987, la alianza entre la élite del PRI y la gran empresa se consolidó como un acuerdo para el control de precios y salarios llamado "Pacto de Solidaridad Económica". Congeló los salarios en sus niveles de 1982 y dio al gobierno el control de los futuros aumentos de salarios. Fue renovado periódicamente en lo que restaba de los años ochenta y noventa. Los tecnócratas como Salinas centralizaban las agencias económicas estatales, facilitando todavía más la suave introducción al neoliberalismo.[27]

El presidente de la Madrid parecía incapaz de avanzar tan velozmente como deseaban el FMI y la gran burguesía. La inflación alcanzaba el 131% en 1987 y la deuda externa permanecía en 108 mil millones de dólares (el 76% del PIB), cuando el mercado de valores de México se hundió. Un año después, a fines del gobierno del presidente de la Madrid, el 60% del presupuesto federal se destinaba al servicio de la deuda. El capital tránsfuga de los años ochenta llegó según parece a los 84 mil millones de dólares.[28]

El terremoto

Un devastador terremoto sacudió la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, introduciendo un nuevo fenómeno de solidaridad colectiva desde abajo

[27] Miguel Ángel Centeno, *Democracy within reason: technocratic revolution in Mexico*, 2a. ed. (University Park, Pennsylvania State University Press, 1997).

[28] *New York Times*, 5 de junio de 1989; *Wall Street Journal*, 25 de septiembre de 1989.

en la sociedad mexicana que amenazó seriamente al PRI. El sismo destruyó un porcentaje más elevado de las estructuras gubernamentales que de las otras construcciones. Los ciudadanos se escandalizaron ante las defectuosas construcciones de hospitales y escuelas. Atribuyeron esas fallas a la corrupta tradición gubernamental de otorgar lucrativos contratos a empresas constructoras sospechosas y de cerrar los ojos ante las violaciones de las normas de construcción.

Algo aún más importante, los ciudadanos se indignaron de que el gobierno no se apresurara a socorrer a las víctimas del terremoto y que por el contrario bloquease a los voluntarios civiles que corrían de un lado a otro prestando ayuda. Los civiles, y no el ejército o el estado, salvaron la mayoría de las vidas de las personas enterradas entre los escombros que lograron sobrevivir. Los intentos de ayuda mal organizados y los retrasos en proporcionar nuevos alojamientos profundizaron el resentimiento público contra el gobierno del PRI.

La experiencia desinteresada y colectiva en el rescate del terremoto hizo nacer un nuevo sentimiento de solidaridad entre ciudadanos de muy diferentes niveles económicos. Uno de los más renombrados escritores de México, el periodista Carlos Monsiváis, lo llamó "el nacimiento de la sociedad civil".[29] En el esfuerzo de reconstrucción, las personas empezaron a dirigirse a sus propios recursos colectivos en vez de a los líderes tradicionales del PRI o de los partidos de oposición.

De repente, los políticos tuvieron que ver cómo eran sobrepasados por el avance de las masas, a menudo encabezadas por una mujer. Humildes costureras, a las que dejaron morir entre los escombros cuando los propietarios de los talleres llegaron sólo a rescatar sus máquinas de coser en vez de ayudar a las trabajadoras, avanzaron a la primera línea de la "sociedad civil". Dirigidas por una "compañera" analfabeta llamada Evangelina Corona (citada al principio del capítulo 6), formaron un sindicato nacional e independiente contrario a la CTM, y lo llamaron "19 de Septiembre" en memoria de sus sesenta compañeras fallecidas en el terremoto.

Las costureras e incontables mujeres de las barriadas se dedicaron al rescate y ayuda en torno a la nueva vida surgida con el sismo en la militancia laboral y en las luchas de los movimientos sociales de las masas depauperadas. La gente pedía respuestas a la cuestión más apremiante: ¿cuál iba a ser la futura dirección de la nación, ahora tambaleándose entre las ruinas de políticas económicas fracasadas y de las ciudades y pueblos destruidos por el terremoto?

En 1986 se realizaron las mayores manifestaciones pacíficas desde 1968. Una de éstas, por el esfuerzo combinado del CUD (Comité Unificado de Damnificados) y del poderoso sindicato independiente de los electricistas, SME, convocó a 70 000 manifestantes durante uno de los inviernos más fríos en la historia de México. Los manifestantes exigían "¡Empleos, viviendas, salarios decentes!" En vez de hacer eco a los viejos gritos de la izquierda de "¡Cancelar la deuda!",

[29] Sus artículos de la época están recopilados en Carlos Monsiváis, *Entrada libre: Crónicas de la sociedad que se organiza* (México, Ediciones Era, 1987).

cansados de que siempre se culpara a la deuda de sus condiciones de vida en constante empeoramiento, exigían su cancelación *sólo si el gobierno la utilizaba como excusa para no encontrar el dinero con el que satisfacer sus más urgentes necesidades inmediatas.*

En el segundo aniversario del terremoto, el Frente Metropolitano de la ciudad de México organizó una marcha de 90 000 personas para exigir empleos y viviendas. Para 1990, unos veinticinco estados tenían organizaciones realmente democráticas de habitantes urbanos pobres. Varias apoyaban al recién fundado Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Cárdenas, mientras que los miembros maoístas de los principales grupos norteños como el Comité para la Defensa Popular de Durango y el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey se unieron al Partido del Trabajo (PT), fundado en 1990 con apoyo del PRI. Todos ellos estaban vinculados al Consejo Nacional de Movimientos Urbanos Populares (Conamup).

A pesar de la represión estatal, los organizadores en las colonias proletarias habían proseguido sus actividades tanto antes como después del terremoto. En muchas ciudades las marchas espontáneas y las barricadas habían impedido los aumentos en las tarifas de los transportes y conquistado otros triunfos.

Ya desde su fundación en 1981, Conamup adoptó como reivindicación principal la de una parcela para la vivienda de cada familia pobre. Había denunciado los planes de desarrollo de la vivienda para las colonias proletarias anteriormente promovidos por el gobierno porque no afectaban a los intereses de la burguesía. Estos planes eran calificados de "especulativos y corporativos", dirigidos por la banca privada y los intereses de bienes raíces que eran en gran parte los principales responsables de los problemas de vivienda de los ciudadanos urbanos pobres.

Como una alternativa a esta "privatización" de la economía, el Conamup pedía un socialismo democrático y mayor intervención estatal para ayudar a toda la clase trabajadora. Se comprometió a continuar la lucha de los desposeídos para manejar sus propias vidas y construir coaliciones multiclasistas con las que resistir la represión estatal y hacer surgir un cambio social genuino. En algunas instancias practicaba un enfoque de autoayuda colectiva ejemplificando una auténtica democracia participativa.[30]

Las mujeres fueron especialmente activas en los movimientos de los pobres urbanos, constituyendo el 80% de los participantes. Organizaron cocinas y lavanderías comunitarias, así como centros de atención infantil. Hicieron campañas contra la violación y los malos tratos. Con el apoyo de mujeres de las clases intermedias, forzaron al estado a promulgar una legislación progresista sobre estas cuestiones, tal como la (raramente aplicada) ley de 1990 contra el acoso sexual en los centros de trabajo. En el proceso de la lucha, rompieron

[30] Véase Lynn Stephen, "Democracy for whom? Women's grassroots political activism in the 1990's, Mexico City and Chiapas" en Gerardo Otero, comp., *Neoliberalism revisited: economic restructuring and Mexico's political future* (Boulder, Westview Press, 1996), pp. 167-86.

muchas, aunque no todas, de las creencias masculinas de que el único lugar apropiado para la mujer era el hogar. Los teólogos católicos de la liberación y los maoístas de las clases intermedias eran especialmente activos en las luchas de los pobres urbanos y rurales.

Los prejuicios basados en los sistemas de valores machistas o patriarcales planteaban obstáculos formidables para la lucha de las mujeres. Muchas mujeres eran golpeadas por sus parientes varones por participar en la vida pública. De forma no tan coincidente, por lo tanto, la mayor parte de las mujeres lideresas resultaban ser solteras o carecer de compañeros masculinos. Pero también algunas de ellas adoptaron un estilo de liderazgo autoritario que parecía un eco de los estilos masculinos o corporativistas.

Posteriores investigaciones de los movimientos sociales en México revelaron que "pocas son las que hablan [públicamente], unas cuantas son las que dirigen".[31] Como resultado, las mujeres empezaron a utilizar consignas como "la mujer callada jamás será escuchada", "somos las esclavas de los esclavos", y "si no se libera la mujer tampoco se libera el hombre, ni la sociedad en su conjunto". Las mujeres organizaron un comité coordinador único para la víctimas del terremoto que abogaba por "democracia en la ciudad y en la casa".[32]

A pesar de las barreras de las definiciones tradicionales del papel de los géneros, las mujeres se veían forzadas por los cambios económicos en México a hacer más trabajo dentro y fuera del hogar. Tanto si eran simplemente pobres o estaban más o menos regularmente empleadas, las mujeres realizaban cada vez más labores por el dinero, y eran cabezas de familia de cada vez más hogares. En general, una mujer con empleo regular estaba casada, tenía tres hijos y educación secundaria (por encima del promedio de los trabajadores varones).[33]

Quizá el cambio más notable en las comunidades afectadas por estos cambios, reforzados por la *concientización* de los movimientos sociales, era el gran número de mujeres que rompieron con los viejos estilos patriarcales y se decidieron a salvarse ellas mismas y a sus familias mediante una participación más directa en la toma de decisiones familiar, la elección individual de "cosas que hacer" e incluso en la actividad política (por largo tiempo un territorio masculino). Los patriarcas de la familia empezaron a perder su poder. Pero el cambio resultante en las relaciones de género no fue en absoluto unidireccional, sino que por el contrario estuvo lleno a cada paso de ambivalencias, confusión y contradicciones para las mujeres.

[31] Alejandra Massolo, "La otra cara de la luna: género y democracia en los movimientos urbanos populares", en Jorge Alonso y Juan Manuel Ramírez Sáliz, comps., *La democracia de los de abajo en México* (México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM, 1997), p. 190, citando a Gisela Espinosa, "Mujeres del movimiento urbano popular, 1983-1985", en Alejandra Massolo, comp., *Mujeres y ciudades* (México, PIEM, El Colegio de México, 1992).

[32] Massolo, en Alonso y Ramírez Sáliz, *La democracia*, pp. 192-93.

[33] Véase Richard Roman y Edur Velasco Arregui, "Zapatismo and the workers movement in Mexico at the end of the century", *Monthly Review* 49, núm. 3 (julio-agosto de 1997), pp. 98-116.

En la era del neoliberalismo, las organizaciones seculares y religiosas no gubernamentales (ONG), algunas mexicanas, algunas internacionales, trataron de llenar el vacío dejado por el reducido papel del estado en programas sociales. El número de ONG comprometidas en las luchas de los trabajadores pobres aumentaba imparablemente tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El número de ONG dedicadas únicamente a cuestiones femeninas llegó a noventa y siete para 1994. Muchas organizaciones pequeñas feministas, antisida y gay se fortalecieron con el apoyo de las ONG.[34]

A pesar de sus intenciones frecuentemente buenas, las ONG tenían poco poder real para mejorar las vidas de las personas, excepto para aquellos individuos mexicanos que lograban cierta movilidad ascendente trabajando en empleos asalariados de las ONG. Los críticos señalaron que las ONG servían a los intereses del Banco Mundial, del imperialismo estadunidense y de las élites nacionales atomizando los movimientos sociales, colocando a "extraños" a cargo de presupuestos y planeación, y reduciendo la lucha político-económica al nivel local en donde los recursos seguían siendo escasos.[35] Las ONG en México socavaron las anteriores redes de trabajo y colectivización en el ámbito nacional de los movimientos sociales mexicanos. También dividieron a los movimientos en campos políticos competidores, pues algunas ONG mexicanas incluso respaldaron al conservador PAN.

Después de la demostración de fuerza electoral realizada por Cárdenas en 1988 y de que la oposición forzara al estado a introducir más reformas electorales, los movimientos sociales mexicanos perdieron a muchos de sus activistas clave en pro de las actividades de los partidos políticos —principalmente para el PRD, pero también para el PT, el PAN e incluso el PRI. Las mujeres urbanas pobres fundaron una nueva organización pluralista orientada a la actividad electoral y a las actividades del Día Internacional de la Mujer. Conocida como "las Benitas" (Coalición de Mujeres Benita Galeana), incorporó a varios grupos, incluyendo a la gran Asamblea de Barrios, fundada después del terremoto para exigir viviendas para los nuevos "sin techo" y para combatir las rentas elevadas. El representante más famoso de la Asamblea era "Superbarrio", un popular luchador enmascarado que se dejaba ver ataviado con una capa al estilo Superman. Sin embargo, "las Benitas" no tuvieron un poder duradero. Se disolvió a causa de divisiones internas relacionadas con las elecciones políticas y con tipos de feminismo opuestos. Mientras tanto, en 1994, mujeres de clase media fundaron la organización Mujeres en Lucha por la Democracia para centrarse en temas de mujeres y la igualdad para las mujeres en la lucha por la reforma electoral y la democracia política.

[34] La mejor revisión analítica de los movimientos gay y lésbico para México y otros países del tercer mundo sigue siendo Peter Drucker, "'In the tropics there is no sin': sexuality and gay-lesbian movements in the Third World", *New Left Review* núm. 218 (julio-agosto de 1996).

[35] Véase, por ejemplo, James Petras, "Imperialism and NGOs in Latin America", *Monthly Review* 49, núm. 7 (diciembre de 1997), pp. 10-27.

Sorprendentemente, la lucha laboral, a pesar del doble obstáculo de la violencia estatal y de que los trabajadores se negaban a participar ni siquiera en batallas "defensivas" debido a las duras condiciones económicas establecidas por el neoliberalismo, no terminó, aunque sí se vio limitada. Los ataques de la burguesía a los sindicatos tuvieron tanto éxito que incluso los sindicatos de la CTM perdieron su influencia en los años ochenta y noventa. Muchos sindicatos fueron eliminados; la afiliación sindical se redujo hasta en un 40% en soportes de la CTM tan importantes como el petróleo, los ferrocarriles y la minería y metalurgia, y los contratos bilaterales aislados por empresa se convirtieron en la norma. Las empresas más grandes utilizaron también el incremento en la contratación de mujeres para debilitar las negociaciones de los contratos colectivos jugando la carta patriarcal de salarios menores para las mujeres y alternando a las mujeres más jóvenes dentro y fuera de la fuerza laboral. A través de todas estas medidas, el capital monopólico fue más capaz que nunca antes de dictar sus condiciones a los obreros y a sus representantes sindicales.

Muchos trabajadores cayeron presas del argumento de que la imposición a la CTM de techos salariales, de la semana laboral periódicamente reducida desde la norma de cuarenta y ocho horas y la aprobación de cierres temporales o automatización de las fábricas eran "males menores" en comparación con más despidos masivos. La CTM imitaba también la política de la AFL-CIO de retornos de salarios para ayudar a que las empresas siguieran siendo competitivas.

Con el fin de enfrentar las críticas de los miembros de base del movimiento, a principios de 1983 la CTM formó una alianza de corta vida con los sindicatos independientes y con la izquierda para oponerse a la alianza del gobierno del presidente de la Madrid con la gran empresa. Esta estrategia no funcionó porque el gobierno cerró tratos salariales especiales con el sindicato de empleados públicos FSTSE y con organizaciones sindicales satélites del PRI como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Así fue como el líder obrero Velázquez retornó a sus viejos hábitos de servir a los patrones y al PRI. Respaldó la privatización neoliberal que acabó con 400 000 empleos sindicales; abogó por la entrada en el GATT y, más adelante, en el TLC; y dirigió movimientos para expulsar del PRI a la "corriente democrática" de Cárdenas y a otras corrientes en pro de la democracia que la siguieron.

El estado desempeñó un papel clave para reducir el poder de los sindicatos. Revisó la legislación laboral para hacer que las huelgas fuesen cada vez más difíciles. Con mayor dureza, envió soldados, policías y pistoleros a sueldo del CT para reprimir las huelgas de los trabajadores de la DINA-Renault (a principios de los ochenta), de los trabajadores del acero (1982, 1985), de los empleados de las embotelladoras (1982), de los telefonistas (Telmex, cinco veces entre 1976 y 1987) y de los trabajadores electricistas (1987). Muchos activistas sindicales fueron asesinados. En la Cervecería Modelo de la ciudad de México, los trabajadores intentaron elegir a sus líderes. Resistieron la represión del estado y de la CTM mediante la huelga. La policía antimotines aplastó la huelga y 5 200 de los trabajadores fueron despedidos. En 1983 el gobierno rompió una huelga del

sindicato independiente de trabajadores de la industria nuclear (SUTIN), negándose a negociar, y reorganizó la industria para eliminar los sindicatos.[36]

En 1983-1984, los trabajadores mexicanos se lanzaron a huelgas generales simbólicas y una marcha masiva de protesta que provocó un alto parcial en la producción y distribución de artículos de consumo. La respuesta del gobierno fue una represión aún mayor. Buscando a unas 500 personas desaparecidas, "la señora" Ibarra dijo a los reporteros que a principios de los años setenta "capturaron y 'desaparecieron' guerrilleros [...] Ahora están reprimiendo movimientos enteros de campesinos, estudiantes, sindicalistas. No quieren centros de agitación en ninguna parte."

El 1º de mayo de 1985, los trabajadores salieron en su marcha tradicional hacia el Zócalo, muchos de ellos desfilando en contingentes independientes de la oficial CTM. Cuando llegaron allí, encontraron la inmensa plaza rodeada por la tropa. Ni siquiera la marcha "oficial" de la CTM obtuvo permiso para entrar. Esto señaló un tropiezo en la capacidad del PRI para controlar a los obreros mediante sus prácticas cooptativas y corporativas.

Otra táctica utilizada para reprimir a los sindicatos, especialmente a aquellos cuyos trabajadores desplegaban una nueva militancia laboral en los años setenta, fue la privatización de empresas estatales que condujo a despidos masivos de trabajadores, como sucedió en la industria del acero (Altos Hornos de México), teléfonos (Telmex), aviación (Aeroméxico y Mexicana), minería (Cananea), procesamiento de pescado, la autoridad portuaria de Veracruz, la compañía tabacalera estatal y los ingenios azucareros propiedad del estado. En 1989, el presidente Salinas negoció una reducción de la deuda por valor de 12 mil millones de dólares y en el curso del siguiente año redujo el número de las restantes empresas estatales a menos de 400. El FMI le premió declarando que México era una "nación deudora preferente".

Después de la venta de Telmex en 1990 (6 mil millones de ingresos anuales en 1977) a Carlos Slim, amigo de Salinas, la lucha principal de los telefonistas fue la de limitar las pérdidas de empleos. Su líder sindical, Francisco Hernández Juárez, apoyó la privatización y llamó a un "nuevo sindicalismo" que cooperaría con la administración. Entonces Salinas puso a la venta el resto del sector bancario "nacionalizado" y reconoció la existencia de conversaciones bilaterales secretas con Estados Unidos acerca de un pacto de libre comercio (TLC). En 1991, Salinas vendió a precio de saldo el banco más rico de México, el Banco Nacional de México (Banamex), a su buen amigo Roberto Hernández y al socio de Roberto, Alfredo Harp Helú, convirtiendo de un plumazo en multimillonarios a Hernández y Harp Helú. Para el fin de su sexenio, Salinas había privatizado más de 1 000 empresas estatales.

Incluso en los casos de privatización, las fuerzas armadas eran utilizadas en ocasiones contra los sindicatos. Para aplastar la resistencia obrera contra

[36] Véase Antonio Gershenson, *México, sindicalismo y poder: la experiencia nuclear* (México, Ediciones El Caballito, 1987).

la privatización de la gran mina de cobre de Cananea en 1989, unos 5 000 soldados ocuparon la mina. La dirigencia nacional del sindicato cooperó en la ruptura del sindicato local y aceptó el despido de 700 trabajadores.

Pero también se dieron victorias ocasionales aunque fuesen de corta vida. En 1987, unos 10 500 trabajadores de la planta de Volkswagen en Puebla ganaron una huelga de cincuenta y siete días en contra de los despidos y el 72% de alza en los salarios. Cinco años más tarde, sin embargo, cuando 14 000 trabajadores protestaron contra el acuerdo de la CTM sobre el concepto de "equipo" ("trabajo de equipo" entre trabajador y empresa, lo que implicaba "flexibilidad" por parte de los trabajadores sobre las condiciones empresariales, rotación de empleos, menos clasificaciones de empleos, etc.), Volkswagen, con el respaldo del gobierno, cerró la planta, la reabrió con salarios más bajos y despidió a la mano de obra anterior.[37]

En 1987, los estudiantes de la UNAM organizaron manifestaciones de 150 000 y más (los estudiantes inscritos en la universidad sumaban unos 340 000, la plantilla más numerosa del hemisferio). Protestaban contra el aumento de las matrículas y exigían que los estudiantes tuvieran voz para establecer normas educativas más estrictas. A diferencia de lo ocurrido en 1986, en esta ocasión el gobierno no envió al ejército. Incorporó a los estudiantes en las negociaciones y al cabo de un año las principales organizaciones estudiantiles habían conseguido tener una voz significativa en la toma de decisiones de la UNAM. Más de cien sindicatos, muchos de ellos simpatizantes del PRD, formaron la nueva federación laboral, el Frente Unido para la Defensa de los Trabajadores y la Constitución.

En 1989, 500 000 maestros de escuela encabezados por la CNTE independiente marcharon hacia la capital del país. Rechazando salarios que eran solamente una tercera parte de los de 1980, participaron en huelgas ilegales y, a pesar de nuevos asesinatos y palizas, consiguieron un aumento. Objetaban la falta de democracia interna en el sindicato oficial de maestros (SNTE) y la escasez de mujeres dirigentes. Rompieron el control del PRI sobre muchos sindicatos locales. El presidente Salinas sustituyó a quien llevaba diecisiete años como líder charro del SNTE (un hombre) por Elba Ester Gordillo (mujer leal al PRI). Entonces la CNTE se dividió debido a que algunos de sus miembros aceptaron la oferta de Gordillo para estar representados en la mesa directiva nacional del SNTE.

En 1987-1990, en la planta de Ford y en otros centros laborales se produjeron huelgas contra el corporativismo. Los obreros de base demandaban la expulsión del nonagenario líder de la CTM Fidel Velázquez. Ford rompió la huelga en su planta de Cuautitlán en las afueras de la ciudad de México, mediante un *lockout* y despidos masivos de trabajadores. Cuando los obreros persistieron en tratar de elegir a sus propios líderes dentro de la CTM, los pistoleros abrieron fue-

[37] Véase Dan La Botz, "The team in Mexico", en Mike Parker y Jane Slaughter, comps., *Working smart: a union guide to participation programs and reengineering* (Detroit, Labor Notes, 1994), y Yolanda Montiel, *Proceso de trabajo, acción sindical y nuevas tecnologías en Volkswagen de México* (México, CIESAS, Colección Miguel Othón de Mendizábal, y SEP, 1991).

go contra ellos, matando a uno e hiriendo a nueve. Los trabajadores lograron el apoyo de los empleados de la Ford de Estados Unidos y Canadá, lo que condujo a un voto de certificación que había de medir cuántos estaban en favor de un nuevo sindicato en contra de la CTM. Sin embargo, la votación se realizó a punta de pistola, puesto que 2 000 policías rodeaban la planta y había cámaras de video que grababan el voto de cada trabajador. A pesar de todo, la CTM sólo ganó por una mínima diferencia.

Los acontecimientos en las zonas rurales de México reproducían los de otros sectores de la sociedad, pero bajo circunstancias aún más duras de asesinatos políticos, palizas, encarcelamientos y ocupación militar. La creciente gravedad, complejidad y entrelazamiento de los problemas de los movimientos sociales en México se hicieron especialmente claros con la superposición de intereses —incluyendo los étnicos y de género —implicados en las dos mayores acciones de 1980-1981 relativas al petróleo y a la energía nuclear. En enero de 1981, unos 10 000 campesinos (indios en su mayor parte) de Chiapas bloquearon las carreteras de los campos petrolíferos Cactus y Reforma y la planta petroquímica de Cactus, que suministraba cerca de dos terceras partes del gas natural utilizado en el interior de México. Llegaron las tropas, fue levantado el bloqueo y el estado aceptó negociar las demandas campesinas por daños a las cosechas y al ganado causados por la contaminación provocada por la planta.

De forma similar, en el invierno de 1980-1981, indios purépechas, particularmente mujeres, de la comunidad de Santa Fe de las orillas del turístico lago de Pátzcuaro (famoso por sus redes de pesca en forma de mariposas) se resistieron a los esfuerzos del estado por construir en sus tierras un centro experimental de energía nuclear. Las mujeres purépechas establecieron contacto con los indios del suroeste de Estados Unidos, más familiarizados con la devastación causada por los desechos de uranio y los ataques de la industria nuclear contra sus tierras y sus vidas. Descubrieron que desde el accidente ocurrido en Three Mile Island, Pensilvania, la industria nuclear estadunidense había frenado sus construcciones dentro del país, prefiriendo "transferir" esos riesgos a las tierras indias de México, Canadá y otros países. México, rico en uranio, planeaba construir veinte reactores nucleares a un precio de venta final estimado en más de 65 mil millones de dólares.

Las mujeres purépechas explicaron a sus comunidades que las nuevas oportunidades de empleo que les habían prometido solamente conducirían a enfermedades y muerte para su pueblo, mientras que la industria pesquera tradicional seguramente acabaría destruida. Tuvieron menos éxito al tratar de convencer a los por otra parte progresistas trabajadores de la industria nuclear del SUTIN, que veían la cuestión desde el punto de vista de nuevos empleos para sus miembros y como parte del esfuerzo "antimperialista" de México para conseguir la "independencia" energética. Pero sí consiguieron el apoyo de los magnates locales del turismo, cuyos intereses e inversiones eran claramente no nucleares. Finalmente, los purépechas unieron a todas las comunidades indias a lo largo de las orillas del lago de Pátzcuaro y forzaron al gobierno a declarar públi-

camente que nunca se construiría ningún centro nuclear en el estado de Michoacán.

Esto todavía dejó en pie el problema de la construcción de sus plantas de energía nuclear en Laguna Verde, en el estado de Veracruz. Una amplia coalición de fuerzas, incluyendo a los indios totonacas de la región y al Grupo de Madres de Veracruz, organizaron marchas de protesta con miles de participantes. Aunque la primera planta de Laguna Verde entró en operación en 1988, los movimientos antinucleares locales forzaron al gobierno a cancelar los planes de construcción de otra docena de reactores nucleares.[38]

Estos incidentes ilustraban una creciente conciencia entre los indios mexicanos y las mujeres campesinas de sus problemas comunes con los indios y los pueblos oprimidos de otros países. Ochocientos delegados indios de lugares tan lejanos como Alaska en el norte y la Patagonia en el sur asistieron a la Segunda Reunión de Organizaciones Indias Independientes de México, Centroamérica y el Caribe, celebrada en Michoacán en marzo de 1981. Entre las resoluciones antimperialistas acordadas hubo algunas de solidaridad con el pueblo de El Salvador y una enérgica denuncia contra el Instituto Lingüístico de Verano, con base en Estados Unidos, acusado de tener vínculos con la CIA y de destruir las culturas indígenas mediante sus programas de "esterilización de mujeres" y de "traducciones de la Biblia".[39]

Esta creciente militancia india provocó una feroz represión estatal que a su vez sólo sirvió para difundir la conciencia de clase, étnica y de género entre los diferentes grupos indígenas. En 1981, el Consejo Supremo de Pueblos Indios (fundado en 1979), con sus 6 millones de miembros, dirigió con éxito una campaña popular que frustró la tradicional práctica del estado de imponer candidatos progubernamentales en las elecciones al oficial Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, que incorporaba a ochenta y cinco consejos regionales y representaba a 9 millones de indios. La planilla democrática de candidatos del Consejo Supremo triunfó en todas salvo unas pocas zonas y procedió a exigir mejores tierras y más escuelas. Una tercera parte de la población indígena no sabía español. Sólo una cuarta parte de los niños indígenas iban a la escuela, y una demanda recurrente de los indígenas se centraba en la poca educación que recibían: la necesidad de más escuelas, de acabar con la costumbre de que los maestros golpeasen a los niños que no entendían o no hablaban español correctamente, y de más maestros de sus propias comunidades lingüísticas.

Los indios exigían también que se les permitiera participar en la toma de decisiones del Instituto Nacional Indigenista (INI), una demanda finalmente concedida en 1986. Tres años más tarde, en el estado de Oaxaca, los indios convocaron el Foro sobre Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas. Como resultado de estas reuniones surgió una mayor demanda de respeto a los de-

[38] James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1981, y Hugo García Michel, *Más allá de Laguna Verde* (México, Editorial Posada, 1988).

[39] Cockcroft, *ibid.*

rechos humanos en todo México y nuevos vínculos con las ONG. En 1992, el 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, los indios se movilizaron en grandes manifestaciones por todo México y América Latina para protestar por "la celebración del etnocidio" y exigir los derechos humanos fundamentales.[40]

Tanto el Consejo Supremo de los Indios como la CNPA de los campesinos condenaron la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) de 1980 y el programa del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que supuestamente iba a hacer al país autosuficiente en producción de alimentos para 1982. Los calificaron de "medidas de control burocráticas y autoritarias sobre los productores rurales que aceleran el desarrollo de los latifundios bajo una nueva cobertura legal".

Financiados en parte por el Banco Mundial, los nuevos programas condicionaban las ayudas a los agricultores de subsistencia a "producir más" y compartir los riesgos con el estado y los "pequeños agricultores" en el desarrollo de agroindustrias. La LDA permitía la expropiación de las tierras "ociosas" de los ejidos o de propiedad indígena al tiempo que concedía "certificados de inafectabilidad" a cualquier tierra ganadera "utilizada de forma intensiva". Combinados con la anterior legalización sobre la posibilidad de arrendar tierras ejidales, la LDA y el SAM generaron un asalto intensificado contra la agricultura de pequeña propiedad y de subsistencia por parte del gran capital y el estado, aunque algunos progresistas trabajaban en los programas y ayudaron en la lucha campesina por la democracia. La ininterrumpida proletarización de los campesinos era disfrazada a través de su asociación con el estado o con los "pequeños" agricultores.

Anticipándose a todo esto, el director del programa de Cooperación para el Desarrollo de la Secretaría de la Reforma Agraria dimitió como protesta en 1980, señalando que la LDA y el SAM agravarían el problema básico de los campesinos: su falta de equipamiento y de organización colectiva para comercializar sus propios productos. El 60% de los recursos del SAM iban a distritos de riego —el corazón del neolatifundismo y de la agroindustria. La CNC comprendía muy bien que sujetando a los descontentos y desesperados productores de subsistencia al estado, el SAM ayudaría a socavar al independiente CNPA y al Consejo Supremo Indígena. La CNC utilizó también al SAM para achacarse el crédito por la creación de 2 000 clínicas para atender a 10 millones de habitantes de zonas rurales —parte del programa estatal para detener el empeoramiento de las condiciones de salud de la fuerza de trabajo agrícola.[41]

Para finales de 1982, el gobierno mexicano declaraba que el impulso por hacer a la nación una vez más autosuficiente en producción de alimentos había sido un éxito. Pero, según su propia definición de autosuficiencia como autosuficiencia alimentaria esto no era verdad. Más aún, de acuerdo con las cifras

[40] Una buena obra de referencia es "Mexico's new Indian movement", *Interhemispheric Resource Center Bulletin* núm. 45 (diciembre de 1996).

[41] Para más datos sobre el SAM, véase Jonathan Fox, *The politics of food in Mexico: state power and social mobilization* (Ithaca, Cornell University Press, 1992).

del Banco de México, las importaciones de alimentos continuaban aceleradamente. Por ejemplo, si bien las importaciones de maíz descendieron de 4.2 millones de toneladas en 1980 a 2.8 millones en 1981, las importaciones de frijoles disminuyeron sólo ligeramente, las importaciones de frijol de soya se duplicaron y otras importaciones de alimentos aumentaron.

La crisis de la deuda de 1982 y el subsiguiente hincapié en la privatización y el neoliberalismo acabaron con el SAM, cuando los fondos del estado para la agricultura y la alimentación fueron reducidos a la mitad durante el resto de los años ochenta. Para mediados de la década de los noventa, México estaba importando el 35% de sus granos básicos y más leche en polvo que ninguna otra nación del mundo.

Los cambios traídos por el neoliberalismo fracturaron todas las organizaciones campesinas, incluyendo la CNC del PRI. La independiente CNPA, dirigida por campesinos, siguió activa pero su importancia disminuyó a medida que sus miembros tenían que luchar contra los problemas de sobrevivencia de sus familias o se unían a partidos políticos como el PRD y el PT. Algunos se unieron a agrupaciones más recientes —la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), o la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC). UNORCA fue fundada en 1985 por intelectuales de extracción campesina, muchos de los cuales se unieron más adelante a la administración de Salinas. La aliada del CNP, la COCEI, siguió conquistando las elecciones en Juchitán, Oaxaca, y en 1989 ayudó a organizar el Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indios.

SALINAS Y LOS TECNÓCRATAS

Como ya hemos señalado, el gobierno de Salinas de 1988-1994 aceleró las privatizaciones y el neoliberalismo e introdujo a México en el TLC. El gobierno de Salinas estaba manejado por tecnócratas de libre mercado como él mismo, principalmente antiguos estudiantes del programa de graduados en economía de Yale y miembros de lo que algunas veces se llamó el "grupo de Harvard" de Salinas. Procedían de familias de clase alta (como el propio Salinas, que a la edad de tres años mató accidentalmente a una sirvienta de la familia cuando jugaba con la pistola de su padre). Conformaban lo que el historiador Dan La Botz ha llamado "la contrarrevolución tecnocrática" de México[42] dentro del estado y la economía, realizando con toda felicidad los deseos del FMI y de los capitalistas extranjeros casi en cada paso que daban.

El gobierno de Salinas eliminó en buena parte la ley de "mexicanización" que requería el 51% de propiedad mexicana en industrias estratégicas. Redujo

[42] Véase La Botz, *Democracy in Mexico: peasant rebellion and political reform* (Boston, South End Press, 1995), pp. 101-19, que incluye excelentes referencias sobre Salinas y su círculo.

los impuestos a las corporaciones y a la clase de altos ingresos, que de cualquier forma raramente se recaudaban. Luego impuso el 2% de impuesto sobre el capital dirigido a las medianas y pequeñas empresas y un 15% de impuesto sobre las ventas afectando al público en general. Muchos individuos de las clases intermedias y el pequeño comercio perdieron sus anteriores exenciones de impuestos. Salinas conferenciaba regularmente con los miembros millonarios y multimillonarios del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Para 1994, los recortes presupuestales del gobierno habían generado un presupuesto equilibrado y la tasa de inflación anual había descendido a un 7%. Salinas era el niño mimado de Wall Street.

Los economistas mexicanos señalaron que el neoliberalismo beneficiaba a la gran industria del país, especialmente a quienes poseían fondos líquidos vinculados a la banca, el comercio y el capital extranjero. Los recortes al gasto social perjudicaban a la población en general, incluyendo a los ciudadanos de las clases intermedias. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalaba que desde mediados de 1981 hasta mediados de 1993, la "clase media" mexicana había experimentado en promedio una disminución del 50% en los salarios reales. El INEGI definía al asalariado de "clase media" como el que gana entre tres y ocho veces el salario mínimo —cerca del 6.5% de la población mexicana.

Numerosos informes del Banco Mundial y de las Naciones Unidas señalaban que México estaba cayendo por debajo del promedio latinoamericano en las áreas de educación y salud. Menos niños mexicanos completaban la escuela primaria, mientras que más adolescentes abandonaban la secundaria. El número de personas que vivían por debajo de la línea oficial de pobreza colocaban a México entre los diez casos peores de América Latina. Los mexicanos comían menos de casi todo, incluyendo tortillas. Las cifras de la tasa de mortalidad infantil, que habían disminuido antes del neoliberalismo, volvieron a subir.

El impacto del neoliberalismo fue reducir el número de empleos en la manufactura y otros dentro de la economía, con el fin de facilitar el ahorro de capital en salarios. Millones de trabajadores fueron despedidos o no pudieron encontrar un empleo regular, al tiempo que las cifras de desempleo y subempleo se disparaban hacia arriba. Las bajas cifras del gobierno para el desempleo reflejaban el poco realista criterio de llamar "empleado" a cualquiera que trabajase, con o sin salario, durante una hora a la semana.

Frente a las reducidas oportunidades educativas de México y la ausencia de compensaciones por desempleo, más de dos tercios de la fuerza de trabajo mexicana buscaba su supervivencia económica en el llamado "sector informal" o "economía sumergida" y emprendían estrategias de sobrevivencia individuales o familiares. La profesora de planificación urbana Lourdes Benería lo llamó "*privatización* de la lucha". Las mujeres soportaban una parte especialmente pesada de las cargas causadas por los fracasos del neoliberalismo, al ver aumentado su trabajo doméstico en los hogares y al mismo tiempo tener que

acudir a un "empleo regular". Muchas mujeres cargaban a sus hijos y se sumaban al creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos.[43]

Los salinistas partidarios del libre mercado eliminaron los precios subvencionados para la mayor parte de los productos alimenticios básicos. Bajo las reglas del TLC, empezó una fase de quince años sin subvenciones a los precios del maíz —una de las causas del levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas. Muchos chiapanecos eran cultivadores de maíz. El maíz ha sido siempre la base de la vida tanto en la antigua como en las actuales religión y cultura mayas.

Antes del TLC, el Artículo 27 de la Constitución fue reformado para concluir con la distribución de tierras a los campesinos y para permitir la privatización de los ejidos, una causa todavía más importante del levantamiento zapatista en un estado en donde cerca de un tercio de la población vivía en ejidos. Nacionalmente, cerca de 28 000 ejidos fueron dejados "a su propio riesgo". Ocupaban casi la mitad de las tierras agrícolas de México, producían más de la mitad de los suministros alimentarios y sostenían a más de 3 millones de familias. La reforma del Artículo 27 puso un clavo más en el ataúd del componente agrario de la Revolución mexicana.

La administración de Salinas introdujo también programas que intentaban tranquilizar al campesinado, dividiendo con éxito a la oposición campesina y neutralizando los esfuerzos por romper el estrangulamiento del PRI sobre el voto rural, como por ejemplo en la recién fundada Unión Cardenista Democrática (UCD). El más importante programa de Salinas fue una vasta expansión del agonizante y descolorido Plan Nacional para Áreas Deprimidas y Marginadas (Coplamar, creado en 1977). Salinas lo rebautizó Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), cooptando de esta manera el lema favorito de los que trabajaron en el rescate de víctimas tras el terremoto: "solidaridad". Utilizando más de 12 mil millones de dólares de productos de las privatizaciones y de los presupuestos federal y estatales, el Pronasol creó proyectos de obras públicas en los estados en donde el PRI era débil.

El programa pretendía proyectar la filosofía de Salinas de "liberalismo social", que en 1993 empezó a formar parte de la ideología oficial del PRI junto con "nacionalismo" y "revolución". Varios intelectuales y activistas maoístas y comunistas fueron cooptados para administrar el Pronasol y asegurar a las comunidades que Salinas era "progresista". El Pronasol creó 150 000 comités de "solidaridad", cubriendo casi la totalidad de los municipios del país. En realidad redujo la pobreza entre algunos de los que sufrían pobreza extrema. En el proceso, sin embargo, reforzó los patrones autoritarios del clientelismo.

Organizaciones campesinas independientes como la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se dividieron con la privatización de los ejidos instrumentada por Salinas, en parte porque algunos líderes campesinos fueron cooptados por el PRI o el programa Pronasol, y en

[43] Lourdes Benería y Shelley Feldman, comps., *Unequal burden: economic crises, persistent poverty, and women's work* (Boulder, Westview Press, 1992), p. 97.

parte porque algunos ejidatarios necesitaban desesperadamente los pesos de las ventas de sus parcelas ejidales. El Pronasol también resultó efectivo para dividir y ralentizar los movimientos sociales urbanos obligando a sus líderes a firmar acuerdos a cambio de fondos o servicios sociales. Reclutando la mano de obra de los habitantes de comunidades empobrecidas en proyectos de mejoramiento que ellos mismos recomendaban y el Pronasol apoyaba, éste podía eliminar gran parte de razón a los movimientos sociales insurgentes. También, como ha señalado la profesora canadiense Judith Adler Hellman, los movimientos sociales perdieron impulso fácilmente una vez que fueron satisfechas sus más rudimentarias demandas —una clínica, un camino pavimentado, mejoras en saneamiento, agua potable, ayudas para la construcción de viviendas, etcétera.[44]

No todos los campesinos quedaron convencidos con los diversos planes del gobierno de Salinas. En 1992, algunos de ellos lanzaron el movimiento de "El Barzón" como una forma colectiva de decir "no" a sus propias deudas que debían al estado y a acreedores privados. Realizaron numerosas grandes movilizaciones y atacaron a funcionarios bancarios incluso físicamente. El nuevo movimiento muy pronto atrajo no sólo a campesinos sino también a pequeños comerciantes y a ciudadanos tarjetahabientes. Los miembros de El Barzón sobrepasaban los 300 000 ya *antes* del colapso económico de 1994-1995, que generó cerca de tres veces más nuevos reclutas para sus filas.[45]

En un intento por "despolitizar" los renovados movimientos en pro de la democracia y cooptar a sus dirigentes, el presidente Salinas introdujo una política de "concertación". Pidió a los comités alimentarios locales manejados por consejos de mujeres que administraran algunos de los almacenes del estado y la distribución de alimentos. Atrajo al sindicato independiente de electricistas, SME, para que regresara a la CTM. Conquistó para su programa económico neoliberal a los antiguos trabajadores militantes de teléfonos y electricidad, que formaron la columna vertebral de una nueva Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios, con 200 000 miembros.

En enero de 1989, Salinas mandó arrestar al charro sindical del petróleo Joaquín ("La Quina") Hernández Galicia y a docenas de funcionarios del Sindicato de Trabajadores Petroleros.[46] La Quina había hecho acusaciones de corrupción contra un amigo íntimo de Salinas y había mostrado simpatía por la campaña presidencial de Cárdenas en 1988. Su sustituto, otro charro, despidió a 30 000 trabajadores temporales de Pemex, desindicalizó a 10 000 empleados técnicos y profesionales, aceptó un contrato más "flexible" y finalmente redujo la fuerza laboral de Pemex a la mitad: 124 000 trabajadores.

[44] Judith Adler Hellman, "Mexican popular movements, clientelism, and the process of democratization", *Latin American Perspectives* 21 (primavera de 1994), pp. 124-42.

[45] Véase Alva Senzek, "The entrepreneurs who became radicals", *NACLA Report on the Americas* 30, núm. 4 (enero-febrero de 1997), pp. 28-29; Gabriel Torres, "El derecho de 'barzonear' y sus efectos políticos", en Alonso y Ramírez Sáiz, *La democracia*, pp. 265-91.

[46] La Quina salió de la cárcel en diciembre de 1997 y dijo a los reporteros que abandonaba la política.

Salinas siguió el encarcelamiento de La Quina con el arresto de un miembro de la familia Legorreta, perteneciente a la élite bancaria, acusado de un fraude en la quiebra de la bolsa de 1987. Esto tuvo por objetivo mostrar que Salinas también podía ser duro con el gran capital. Muy pronto resultó claro, sin embargo, que muchas familias de élite, junto con los capitalistas extranjeros y recién venidos cercanos a Salinas y a los tecnócratas que dominaban el PRI, se iban a hacer ricos recolectando a precios de saldo las acciones de las empresas estatales privatizadas.

Para principios de los años noventa, la economía de México estaba por fin creciendo una vez más. Sin embargo, al menos 44 activistas del PRD y muchas docenas más de líderes campesinos y obreros habían caído bajo las balas de la "concertación". Periodistas honrados y abogados progresistas fueron también eliminados a tiros.

La aparente "recuperación económica" demostró ser ilusoria, y a fines de 1994 la economía estaba patas arriba. En ese punto, las cosas se pusieron mucho peor para la mayoría de los mexicanos, especialmente para las mujeres y los indígenas. Pero la gente trabajadora de México no se rinde. Frente a adversidades económicas cada vez más difíciles, muchos mexicanos siguieron luchando por la democracia política y económica.

Corporativismo ¿vivo o muerto?

Parece apropiado concluir este capítulo con una breve reflexión sobre el corporativismo a mediados de los años noventa, y la crisis del estado corporativista mexicano que estalló en la escena mundial en 1994-1997. Según muchos observadores, los modos de operación del estado corporativista ya no bastaban para resolver problemas generados por los conflictos de clase, debido a que el neoliberalismo estaba despojando al estado de sus recursos o porque la nueva dirección tecnocrática del PRI elegía conscientemente desmantelar el corporativismo.

Estos enfoques son algo miopes, simplificaciones antihistóricas. Después de todo, como han mostrado este capítulo y los anteriores, los recursos del estado ya estaban siendo extraídos *antes* del neoliberalismo, en parte a través del intercambio desigual en el comercio y del efecto de "bomba de succión" de la inversión extranjera. Además, los tecnócratas presidenciales del neoliberal PRI deseaban "desmantelar" (esto es, debilitar) a los *sindicatos*, no al estado corporativista que el PRI operaba. De hecho, ellos solicitaron la ayuda de Fidel Velázquez, el jefe de la CTM, sector sindical del PRI, para realizarlo.

Los dirigentes tecnócratas del PRI, sus familias y sus amigos deseaban conservar la capacidad del PRI para apoyar al capital monopólico y obtener "su justa parte" del excedente económico de la nación generado por la fuerza laboral. Para hacer esto en las condiciones del neoliberalismo necesitaban un estado fuerte centralizado para hacer su agosto en la requerida privatización de empresas estatales. La venta en 1990 de la compañía telefónica del estado Telmex y

la venta en 1991 del más poderoso banco de la nación, Banamex, a amigos íntimos del presidente, no fueron más que dos de muchos ejemplos semejantes de cómo la privatización actuaba en la práctica.

Otros observadores opinan que la importancia del corporativismo, en primer lugar, siempre fue exagerada. Conocedores de las muchas diferencias regionales dentro de una nación tan diversa étnica y geográficamente como México, creen que el estado mexicano ha sido siempre mucho menos corporativista o centralizado de lo que se supone comúnmente.

Esto también es una simplificación de la realidad. Habría que recordar que cuando el estado envió al ejército para aplastar los movimientos de "la tierra para quien la trabaja", los movimientos estudiantiles y las huelgas obreras *en todo el territorio* de México, pudo hacerlo con relativa impunidad porque era un estado poderoso y *centralizado,* no un estado descentralizado. Lo mismo es verdad para cuando el estado cooptaba con éxito a líderes locales en todas partes desde Baja California en el norte hasta Chiapas en el sur, utilizando los métodos del corporativismo. En realidad, para instaurar el neoliberalismo, el presidente Salinas *centralizó,* no descentralizó, las agencias económicas del estado.

Aquí nos será útil una perspectiva histórica. El corporativismo llegó a la escena mexicana inicialmente como una forma de resolver los intensos conflictos de clase expresados durante la Revolución y sus secuelas, de 1910 a 1940. El corporativismo finalmente tuvo éxito en su misión de mediación entre las clases dentro de una economía capitalista, no sólo bajo el presidente Cárdenas sino, de manera aún más importante, durante la segunda guerra mundial y los quince años siguientes, más o menos, cuando la sustitución de importaciones tuvo su mayor éxito y el país llegó a una semindustrialización.

Debido a que la burguesía estaba acostumbrada a obtener la mayor parte de sus ganancias mediante la superexplotación de la mano de obra con bajos salarios y a no pagar impuestos, la elevación del capital y la tecnología en el desarrollo económico desigual de México fue dejado principalmente a la comunidad inversionista extranjera (sobre todo estadunidense). Para mediados de los años sesenta y setenta, y todavía más hacia 1994, la economía mexicana había experimentado cambios estructurales tan profundos, producidos por el dominio del capital monopólico nacional y extranjero y por los cambios en la economía mundial, que el corporativismo al viejo estilo ya no era tan fácil de practicar.

Los acreedores e inversionistas de Estados Unidos, que tenían sus propios problemas con la sobreproducción capitalista, tasas de ganancia decrecientes y mercados insuficientes, estaban comprometidos con el neoliberalismo. Esto requería que el gobierno de Estados Unidos tuviera un presupuesto federal equilibrado en el que los gastos sociales vinieran de los ingresos por impuestos disponibles. El imperialismo estadunidense impuso este modelo de neoliberalismo a México. En una economía de bajos salarios y alto desempleo como la de México, con una prohibición efectiva a imponer contribuciones a las corporaciones como fuente de ingresos para el estado, los fondos disponibles para los nece-

sarios costos sociales para la reproducción de la clase trabajadora sobre una base diaria y generacional eran tremendamente inadecuados. El estado corporativista no tenía la opción democrática social de forzar a la burguesía mediante impuestos corporativos para que cargase con una parte de los costos de la reproducción de la clase trabajadora. Las décadas de cambios económicos estructurales, combinadas con estos obstáculos internos y con los hábitos corruptos del PRI, erosionaron gradualmente tanto la eficacia del corporativismo como la legitimidad política del PRI.

Lo mismo sucedió con el creciente ataque popular desde abajo contra las fuerzas del sexismo y el racismo. A lo largo de todo este capítulo hemos visto el importante papel de las mujeres y los indios en la lucha de clases de México no obstante su relativa carencia de posiciones de liderazgo. Los varones mestizos y blancos casi siempre *eran los mandamases*. Esto reflejaba indirectamente una dimensión social y cultural frecuentemente pasada por alto del corporativismo mexicano, a saber, los valores nucleares del patriarcado y el racismo que centralizan la autoridad en "el padre", "el hombre [blanco]", "el patrón", y "el que manda" (forma coloquial muy común en México y Centroamérica).

La "familia revolucionaria" de México (la dirección del PRI) y su estado centralizado y unipartidista encabezado por un "padre" fuerte ("el señor presidente", el "presidencialismo") eran expresiones políticas del patriarcado. Lo mismo sucedía con las instituciones estatales del PRI, tales como sus organizaciones de mujeres, la CNC y el INI —y su condescendiente, paternalista manejo de las mujeres, los campesinos y los indios. El patriarcado y el racismo eran patrones históricos y culturales profundamente arraigados que efectivamente reforzaban el corporativismo del siglo XX y la correspondiente falta de democracia en México. Patriarcado, racismo y corporativismo eran "hermanos de sangre".

El estado corporativista del PRI estaba indudablemente en crisis. Pero la crisis estaba enraizada en los cambios estructurales producidos durante muchas décadas en los modos capitalistas de "desarrollo" y "modernización" económica guiados por el estado, así como en las luchas de clase, étnicas y de género contra la opresión que acompañaron aquellos cambios. Así, a pesar de los apologistas del PRI que declaraban que este sistema gubernamental nunca "gobernó" verdaderamente, y de aquellos que decían que había sido conscientemente finiquitado por los tecnócratas, el corporativismo en realidad *se erosionó* en un complejo proceso histórico.

CAPITULO 8

DESAFÍOS AL PRI

Democracia es gobernar obedeciendo —el gobierno del pueblo, para el pueblo, y por el pueblo.

Cuarta Declaración Zapatista de la Selva Lacandona, 1º de enero de 1996

[El libre comercio] trata de cómo el 4% de los habitantes del mundo pueden seguir teniendo el 22% de su riqueza.

Presidente Bill Clinton, en la Convención de AFL-CIO, septiembre de 1997

Quieren mucho al mexicano porque es la persona más trabajadora que hay en Estados Unidos... Nadie trabaja tan duro.

Un trabajador inmigrante de Michoacán

Somos las semillas de la rebelión y daremos fruto.

Pancarta de las mujeres mayas en el Día Internacional de la Mujer, 9 de marzo de 1998, marchando hacia una trinchera militar que protegía una pista de helicópteros en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, para destruirla[1]

Más de dos millones de mexicanos perdieron sus empleos durante los dos primeros años (1994-1996) de la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Una sexta parte de los empleos perdidos fueron en el sector manufacturero "moderno", que se vio incapaz de competir con la afluencia de productos extranjeros más baratos. Más de 28 000 empresas mexicanas fueron a la quiebra. Los bancos también quebraron, mientras que la deuda de los consumidores alcanzó proporciones astronómicas. El salario mínimo bajó a niveles inferiores a los de 1981, el último año antes de la introducción formal de políticas económicas neoliberales. El devastador impacto del TLC y el colapso económico mexicano de 1994-1995 fueron producto del subdesarrollo histórico y del neoliberalismo contemporáneo.

A pesar de la crisis económica, los activistas en pro de la democracia hicieron avances asombrosos. Los indios, campesinos, y mujeres de Chiapas, que respaldaban las demandas del levantamiento de la guerrilla zapatista del 1º de enero de 1994, se convirtieron en un punto focal y fuente de inspiración. Los

[1] La declaración del presidente Clinton apenas fue reproducida, pero yo la encontré en Kim Moody, "Up against the polyester ceiling: the 'new' AFL-CIO organizes itself!" *New Politics* VI (New Series), núm. 4 (invierno de 1998), p. 7. Para la cita del cartel de las mujeres mayas, véase *Mexican Labor News Analysis* 3, número especial sobre el Día Internacional de la Mujer (marzo de 1998). La frase del trabajador emigrante de Michoacán es de James D. Cockcroft, notas de campo inéditas, 1982.

movimientos políticos y sociales contra el neoliberalismo y por la democracia política alteraron radicalmente el panorama político de la nación. Para 1998, el PRI había perdido su mayoría en el Congreso y el descontento entre las clases intermedias y campesina económicamente oprimidas era cada vez más profundo. La agitación de los trabajadores, durante largo tiempo mantenida a raya por el charrismo de la confederación sindical oficial CTM, tras la represión por parte del gobierno de las huelgas industriales de mediados de los años setenta, había recomenzado. En resumen, la lucha de clases había comenzado un ascenso desigual pero notable, que no se veía desde el periodo 1968-1977 (excepto brevemente a continuación del terremoto de 1985 en la ciudad de México).

Este capítulo relata aquellos acontecimientos con algunos antecedentes históricos cuando ello es apropiado. También examina los muy influyentes papeles del narcotráfico, los militares, la Iglesia, los medios de comunicación y la emigración temporal de cerca de una quinta parte de la fuerza laboral a Estados Unidos.

Las elecciones de 1988

Durante los años ochenta y gran parte de los noventa, la tendencia electoral central en México era de apatía por parte del electorado, como lo demuestran los resultados de menos de la mitad de los votantes elegibles en cada día de elecciones. Típicamente, el encabezado de un periódico de 1985 proclamaba "¡La abstención volvió a ganar!"

El PRI intentó revertir esta tendencia y ampliar su poder de atracción poniendo a más mujeres en un consejo nacional del partido recientemente creado (1984) y anunciando a grandes voces "nuevas reformas internas del partido". Pero el método jerárquico tradicional de manejar los asuntos del partido desde el pequeño comité ejecutivo nacional hacia abajo —un sistema conocido como *dedazo*— seguía practicándose. Lo mismo sucedía con el presidencialismo, incluyendo el *dedazo* del presidente para designar a su sucesor.

Ninguna de las maquinaciones internas del PRI importaban gran cosa a la población. Nadie se molestaba en preguntarse cómo se las arreglaban los tres sectores corporativos en el PRI (obrero, campesino y "popular") para alternarse en el uso del poder interno del partido, puesto que el terreno en el que los candidatos eran elegidos no estaba allí. Más bien, los círculos internos del PRI, sus funcionarios de más alto nivel e, indirectamente, la burguesía, eran quienes elegían a los candidatos.

También, en muchas ocasiones, los candidatos del PRI ganaban automáticamente las elecciones, ya que el PRI controlaba el procedimiento de conteo de votos. Usando fondos del estado, de forma regular el PRI gastaba fortunas en sus campañas electorales con bombo y platillo al estilo de las de Estados Unidos, en particular acarreando en camiones a los campesinos y obreros a los mítines

y comprando espacios publicitarios en la televisión. Dada la deuda externa en constante ascenso, la mayor parte de los mexicanos consideraban que este uso de los ingresos nacionales era un lamentable desperdicio.

Como ya señalamos en el capítulo anterior, quienes participaban en los movimientos sociales constantemente tenían que enfrentar el poder del estado. Esto tendía a empujarlos hacia una alianza natural con partidos políticos de izquierda. Sin embargo, la "reforma política" del presidente López Portillo había prohibido a estos partidos participar en organizaciones de masas. Para que la izquierda lograse conquistar cualquier poder político significativo tenía que remitirse a los sindicatos, pues sólo en las organizaciones de masas era posible establecer una base política. De hecho, la izquierda intentaba hacer esto, pero enfrentaba dos obstáculos adicionales: una histeria anticomunista propiciada por los "charros", y una actitud independiente entre los militantes sindicales de base que desconfiaban de cualquier partido político.

Aunque incapaz de ganar las elecciones nacionales, gran parte de la izquierda de México decidió participar en ellas porque proporcionaban un espacio en donde exponer sus puntos de vista, un espacio demócrata burgués limitado manejado por el estado. En la práctica era más burgués que democrático, puesto que los derechos individuales y colectivos seguían siendo violados en los aspectos de libertad de expresión y asociación, de protección jurídica y de los derechos de sindicalización y huelga. Empleando tanta energía en batallas electorales y de propaganda, la izquierda corría el riesgo de distanciarse de las luchas de obreros y campesinos en sus centros de trabajo. De hecho, uno de los objetivos del programa de reforma política del estado era precisamente ése.

Antes de las elecciones de 1979 y 1982, los mexicanos rara vez tuvieron oportunidad de votar por candidatos de la oposición de izquierda. Quienes pretendían emitir "votos de protesta" se veían forzados a votar por los candidatos del siempre presente y conservador PAN (Partido Acción Nacional). El PAN se convirtió en la segunda fuerza electoral del país y en las elecciones para diputados de 1979 tuvo el 13% de los votos emitidos. Fundado en 1939 por católicos conservadores para combatir las reformas populistas de Cárdenas, durante años el PAN llenó sus arcas con donaciones de capitalistas partidarios de la economía de *laissez-faire*. Sin alejarse nunca mucho de su caracterización como partido de los empresarios urbanos y los grandes terratenientes, en los años sesenta empezó a desarrollar una política más populista atacando la corrupción en el gobierno. En los setenta, un nuevo partido neopopulista, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), fue fundado para servir a un sector de los antiguos partidarios del PAN: los más conservadores de entre los católicos, aquellos más asustados por la tradición anticlerical de los políticos mexicanos. Los fascistas sinarquistas se afiliaron al PDM. El PAN obtuvo alguna fuerza electoral de las clases medias en las grandes urbes y ciudades de provincia. Su nueva retórica populista también levantaba apoyos entre los campesinos de tendencias religiosas, cierto número de trabajadores emigrantes que regresaban de Estados Unidos o Canadá, y unos cuantos trabajadores con empleo regular.

En los años ochenta y noventa, algunos miembros de la burguesía mexicana apostaron tanto por el PRI como por el PAN, que seguía actuando como "oposición leal" del PRI. Los "radicales" de ultraderecha y algunos de los "moderados", analizados en el capítulo anterior, intentaban usar al PAN como vía hacia la presidencia. Como señaló el historiador Dan La Botz, existía un paralelismo entre los tecnócratas que se apoderaban del PRI y los grandes capitalistas que financiaban y manejaban el PAN, en el sentido de que de esta manera "la empresa mexicana tenía dos partidos."[2]

Tanto la izquierda como la derecha objetaban repetidamente los fraudes electorales del gobierno. Durante los años ochenta y noventa, incontables palacios municipales fueron ocupados por airados ciudadanos que reclamaban que sus votos no habían sido contados o habían sido falsamente acreditados al PRI.

En 1982, el PRI, operando secretamente como siempre, anunció su candidato presidencial, o "destapado" —término proveniente de la jerga de las peleas de gallos, refiriéndose al acto de desatar los pies del gallo cuando entra a la arena. Se trataba de Miguel de la Madrid Hurtado quien, al igual que López Portillo, no era un veterano de la política interna del PRI, pero había redactado el Plan de Desarrollo Global de López Portillo. Tecnócrata educado en Harvard, de la Madrid muy pronto se rodeó de un "gabinete íntimo" previo a la toma de posesión constituido por veinticuatro tecnócratas compañeros suyos, dieciséis de los cuales habían hecho sus estudios de posgrado en el extranjero. Sólo cuatro políticos fueron incluidos en este grupo cerrado. La selección de De la Madrid representó una bofetada para los leales de la vieja guardia del PRI, las burocracias estatales y los tres sectores corporativos del PRI. La capacidad de la vieja guardia para controlar los caminos hacia el estado transitados por el sector privado resultó cada vez más disminuida.

La campaña de de la Madrid se basó en una plataforma de "renacimiento moral" de la nación, haciendo eco al tema anti-corrupción de su predecesor, cuya administración había establecido nuevas marcas de venalidad. Como indicador de su propia honradez, de la Madrid reconoció que ciertamente en México había cierto número de ciudadanos "desaparecidos".

Aparentemente no convencidos, más de la mitad de los votantes potenciales de la nación no votaron por él en el día de las elecciones, el 4 de julio de 1982. En el conteo oficial, más de un millón de votos fueron anulados. El PRI "ganó" con el 74%. Al PAN se le adjudicó el 14%. El Partido Socialista Unificado de México (PSUM), una coalición izquierdista dominada por antiguos comunistas y unos cuantos individuos del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), cosecharon el 5% y otros partidos de oposición el resto. El mayor partido de izquierda, el PMT, no formaba parte del PSUM y, al no poder obtener el registro, boicoteó las elecciones aunque sí permitió a los miembros del partido trabajar individualmente con el PSUM.

[2] Dan La Botz, *Democracy in Mexico: peasant rebellion and political reform* (Boston, South End Press, 1995), p. 62.

Debido a que el voto del PRI era virtualmente obligatorio por parte de la inflada burocracia estatal y del 70% aproximado de la fuerza laboral urbana y rural en la que éste influía o ejercía control, estos resultados oficiales no sorprendieron a nadie. De hecho, los encabezados del día siguiente en casi todos los periódicos, dominados por el estado y la burguesía (véase más adelante la sección sobre medios de comunicación), no se molestaron en anunciar el ganador. Por el contrario, trataron de negar el repetido abstencionismo de los votantes, proclamando en sus encabezados "¡La apatía derrotada!"

Los vigilantes de urnas, sin embargo, obtuvieron resultados diferentes. Encontraron que el PAN obtuvo entre el 20 y el 30% de los votos, el PSUM del 10 al 15%, el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que apoyaba a la primera mujer candidata del país, Rosario Ibarra de Piedra ("la señora"), de 4 a 8%, y el PRI sólo entre el 40 y el 50%. Así pues, la propaganda estatal en contrario, la apatía de los votantes y el sentimiento anti-PRI seguían siendo un problema que era aliviado sólo en parte por los seis años previos de reforma política. Los servicios internacionales por cable hicieron su acostumbrado trabajo acerca del supuesto respaldo del electorado a la "estable democracia guiada" de México.

En las elecciones para diputados de mitad de periodo, en 1985, el conjunto de los ocho partidos de oposición contabilizaron más votos que el PRI en la ciudad de México. La ley electoral, sin embargo, dio al PRI los cuarenta escaños en el Congreso. La prensa internacional guardó silencio. Sacudido por las gigantescas manifestaciones que siguieron al terremoto de finales de 1985, el estado consideró oportuno anunciar una "reforma política" adicional en 1986. Elevó el número de los escaños de la oposición en el Congreso a 150 de los 500 existentes.

La extensión del descontento popular con la aceptación por parte del gobierno de los programas de austeridad impuestos por el FMI a cambio de alargar los plazos para el pago de la deuda fue sugerida por el rechazo sin precedentes del Congreso de las propuestas presupuestarias del presidente a principios de 1987. Por primera vez, el organismo dominado por el PRI no servía para poner su sello a las políticas del ejecutivo. La inflación llegaba al 150% en 1987. Todo esto preparó el escenario para el desastre electoral del PRI en 1988 y un cambio en la política de México.

Antiguo senador del PRI y gobernador del estado de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente que nacionalizó el petróleo en 1938,[3] anunció en 1987 que se presentaría a las elecciones para presidente. Llevaba consigo la "corriente democrática" de dirigentes del PRI expulsados un año antes, inclu-

[3] Cuando tenía cuatro años, Cárdenas contribuyó con los ahorros de su alcancía a la campaña para ayudar a compensar a las empresas petroleras nacionalizadas. De joven se afilió al movimiento disidente del PRI fundado por su padre, el Movimiento por la Liberación Nacional (MLN) de principios de los años sesenta. Para más datos sobre la trayectoria de Cárdenas y las personas e ideologías que agrupó a su alrededor, véase La Botz, *Democracy*, pp. 83-99, y Adolfo Gilly, *El cardenismo, una utopía mexicana* (México, Cal y Arena, 1994).

yendo al antiguo presidente del PRI (1975-1976) Porfirio Muñoz Ledo. Al no tener partido que le respaldase, Cárdenas aceptó la invitación para presentarse como candidato del casi difunto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Excepto por el PRT, todos los partidos mexicanos de izquierda le apoyaron (véase el cuadro 17 en el capítulo 7).

En la campaña presidencial de 1988, Cárdenas atrajo a sus mítines a multitudes inmensas, sobre todo debido a la popularidad del nombre de su padre, a las habilidades organizativas de sus partidarios (especialmente los comunistas y los nuevos izquierdistas del PMT), y el deseo de muchos mexicanos de librarse del PRI. Los campesinos iban a pie o en autobuses a los mítines de Cárdenas. Deseaban ver de cerca al nuevo "Tata" (padre en náhuatl, el nombre cariñoso que los campesinos daban a Lázaro Cárdenas en los años treinta). Los mítines de Cárdenas dejaban enanos a los del candidato del PRI, otro deslucido tecnócrata de la *Ivy League*, Carlos Salinas de Gortari. Como hacía siempre en época de elecciones, el PRI regalaba a la gente refrescos, les concedía el día libre y los acarreaba en camiones a los mítines.

Haciendo campaña contra lo que llamaba el "fascismo moderno" del PRI, Cárdenas criticaba tanto la vieja estrategia económica de sustitución de importaciones como el nuevo neoliberalismo para el desarrollo económico de México. Pedía la renegociación de la deuda externa y enmendar el TLC para conseguir la "armonización hacia arriba" de los salarios mexicanos hasta niveles como los de Canadá y los Estados Unidos. Los teléfonos de Cárdenas fueron intervenidos por la policía federal y su jefe de campaña fue asesinado, pero nada de esto logró detenerle.

En la elección misma, la mitad de los votantes se abstuvo, lo que no constituyó ninguna sorpresa. Pero una mayoría de la otra mitad votó *en contra* del PRI. Naturalmente, el PRI no podía permitir que se hiciera público un verdadero recuento de votos. De manera que las computadoras "se cayeron" oportunamente la noche de las elecciones, y el director de la oficina a cargo de la organización de las elecciones nacionales de 1994 admitió que sus predecesores habían optado "por hacer que el sistema fallara". Los resultados de la mitad de las urnas del país en 1988 nunca se hicieron públicos; muchas papeletas fueron quemadas. Las protestas contra el "fraude cibernético" provocaron que el ejército vigilase las urnas y las boletas fuesen incautadas. Las papeletas recogidas fueron quemadas unos cuantos años después, de acuerdo con las condiciones de un acuerdo mayoritario en el Congreso conseguido por el PRI y su "leal oposición", el PAN.

Los resultados oficiales de las elecciones de 1988 no fueron anunciados hasta que los "alquimistas" del PRI pudieron transformar el escenario perdedor en otro ganador. Esto se llevó varios días, a pesar de que los partidarios del PRI habían depositado múltiples papeletas ("tamales") en las urnas. Finalmente el PRI "ganó" con el 50.4% de los votos. Cárdenas recibió el 31%. El PAN recibió el 17% para Manuel J. Clouthier, un hombre de negocios norteño cercano al PRI que en el pasado había presidido tanto la organización patronal conservadora Co-

parmex como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del capital monopólico mexicano.

Con menos de una cuarta parte de la población creyendo que había ganado honradamente, el presidente electo Salinas anunció que la era del partido único estaba "terminando". Gigantescos mítines a todo lo largo de la nación protestaron contra las "elecciones robadas", y numerosas personas resultaron muertas en enfrentamientos con la policía. Rumores de golpe militar llenaban el aire. El PRI siguió hacia delante tambaleándose, sacudido pero sin derrumbarse todavía.

El PRD

En 1989, los leales a Cárdenas se organizaron en el PRD (Partido de la Revolución Democrática). Bajo la bandera del sol azteca, el PRD incorporó gran parte del Partido Mexicano Socialista, una coalición izquierdista de 1987 que había expandido la antigua coalición del PSUM dominada por los comunistas, incorporando al mucho mayor PMT. Algunos de los partidos más pequeños que habían respaldado la candidatura de Cárdenas empezaron a cooperar una vez más con el PRI. El PRD defendió las causas populares, nuevas elecciones para sustituir a las fraudulentas de 1988 y la "abolición del estado unipartidista y del corporativismo".

El "apoyo crítico" del PAN al presidente Salinas le reportó el reconocimiento de un triunfo gubernamental en Baja California en 1989, pero las victorias electorales del PRD en Michoacán y Guerrero no fueron reconocidas. Campesinos, obreros y estudiantes ocuparon numerosas sedes de gobiernos municipales. Salinas envió al ejército para recuperarlas. Al menos sesenta oponentes del PRI, en su mayor parte activistas del PRD, fueron muertos a tiros en 1990. Algo parecido ocurrió en las disputadas elecciones de 1992 en Michoacán, que tuvieron como resultado seis muertos más.

El presidente Salinas introdujo reformas electorales complejas y cautelosas. En 1989, una de tales reformas reorganizó distritos de votación de manera favorable para el PRI y garantizaron al presidente una mayoría automática de apoyo en el Congreso. Surgieron nuevas alianzas de base para la democracia, incluyendo personas que alguna vez habían votado por el PRI. A pesar de estar sujetos a hostigamientos y actos de violencia ocasionales, eventualmente forzaron al gobierno de Salinas a instrumentar reformas electorales adicionales que para fines de 1993 eliminaron la garantía de una mayoría automática del PRI en el Congreso.

Salinas intentó presentarse como un "reformador" comprometido con la "democracia". El gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación aplaudían cada una de sus decisiones, llamándole "modernizador democrático de México" y elevándole a un estatus heroico nunca antes experimentado por ningún presidente de "al sur de la frontera". Esto era porque Salinas proclamaba

las virtudes de que México entrara a formar parte de una nueva alianza comercial norteamericana que se estaba negociando y que había sido deseada durante largo tiempo por las transnacionales de Estados Unidos (véase la sección del TLC más adelante).

Cárdenas describía la alianza entre Salinas y Estados Unidos como un rescate político virtual del antidemocrático sistema del PRI. Como dijo a unos periodistas en 1990, el gobierno de Salinas

> ofrece a Estados Unidos un trato implícito, en el que el libre comercio es el último paso. México pondrá en práctica indiscriminadamente el tipo de reformas económicas que Estados Unidos siempre deseó para México, pero Estados Unidos aceptará y protegerá el sistema político existente. El pueblo mexicano desea una relación amistosa y equilibrada con Estados Unidos, pero no a costa de su apoyo al gobierno autoritario de México.

En una entrevista publicada en 1991, Salinas, en parte involuntariamente, aceptó el argumento de Cárdenas cuando dijo:

> Cuando estás introduciendo reformas económicas tan fuertes, debes estar seguro de que construyes un consenso político en torno a ellas. Si al mismo tiempo estás introduciendo reformas políticas drásticas adicionales, puedes acabar sin ninguna reforma en absoluto. Y nosotros queremos tener una reforma, no un país desintegrado.[4]

En las elecciones para diputados y gobernadores de 1991, el PRI "ganó" el 62% de los votos. No resulta sorprendente que un porcentaje similar del electorado se abstuviera de votar. Varias elecciones a la gubernatura de los estados fueron descaradamente "robadas" por el PRI. Los partidos de oposición se quejaban de la cobertura de la campaña por los canales de la televisión estatal y el monopolio privado Televisa, cuyo dueño era un multimillonario leal al PRI. Nuevamente estallaron multitudinarias protestas contra el fraude electoral.

El candidato independiente para gobernador de San Luis Potosí, derrotado pero muy popular, el doctor Salvador Nava, entonces de 77 años y enfermo de cáncer, se enfrentó al PRI. Todos los grandes partidos de oposición habían respaldado su candidatura. Conocido como "el médico de los pobres", Nava pidió entonces a sus seguidores crear un movimiento ciudadano por la democracia. Como resultado, una multitud de mujeres ocupó el palacio de gobierno. Otros partidarios de Nava siguieron al enfermo doctor en una "Marcha por la Dignidad" de 400 kilómetros desde San Luis Potosí hasta la ciudad de México. De la noche a la mañana, el "médico de los pobres" se convirtió en héroe nacional, llamado por algunos "el Gandhi de México".

[4] Cita de Salinas tomada de *New Perspectives Quarterly* 8, núm. 1, 1991, citado por Joseph L. Klesner, "Political change in Mexico: institutions and identity", *Latin American Research Review* 32, núm. 2 (1997), p. 185. La cita de Cárdenas fue ampliamente reproducida en la prensa.

Según el muy respetado historiador conservador Enrique Krauze, el doctor Nava dijo que le gustaría que el movimiento por la democracia se basara en el Plan de San Luis Potosí proclamado por Madero en 1910. Cuando se le recordó que el plan de Madero llamaba al levantamiento popular, Nava respondió: "Lo mismo haremos nosotros: convocar a una revolución de las conciencias."[5]

El 1º de marzo de 1992, el llamamiento de Nava fue respondido por la convención fundacional del Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD). El MCD agrupó a docenas de grupos cívicos que exigían el fin del excesivo control presidencial, del régimen unipartidista, de la pobreza, de la manipulación estatal de los medios de comunicación y de la dependencia económica de Estados Unidos. Incluía a muchos grupos indígenas y a incontables simpatizantes del PRD. Muy poco después, en su última declaración antes de morir, el doctor Nava urgió al MCD a seguir luchando y promover "la conciencia internacional acerca de la violación de los derechos humanos y las libertades políticas del pueblo de México".[6]

Otros ciudadanos que protestaban contra el fraude electoral realizaron una marcha de mil kilómetros desde el estado suroriental de Tabasco. Muchos activistas del MCD se unieron al grupo demócrata Alianza Cívica, una ONG (organización no gubernamental) organizada para vigilar las casillas de votación en las elecciones presidenciales de 1994.

Debido a las presiones creadas por todas las protestas a todo lo ancho de la nación, el presidente Salinas tuvo que anular numerosos resultados de elecciones locales impugnados designando funcionarios interinos o concediendo sus victorias a la oposición. Como resultado, para 1993 el conservador PAN obtuvo tres gubernaturas estatales. Pero el PRD seguía haciendo frente a la violencia del estado.

El levantamiento zapatista

Al amanecer del 1º de enero de 1994, el mismo día que entraba en efecto el TLC, el "Ejército Zapatista de Liberación Nacional" (EZLN) realizó con éxito un ataque relámpago en el estado sureño de Chiapas que dejo atónito al mundo entero. La posición contraria al TLC del EZLN y su exigencia de democracia política y de justicia económica para *todo* México tocó una cuerda sensible en el público mexicano. Las primeras encuestas de opinión mostraron que el 75% de la población apoyaba a los zapatistas. El levantamiento alteró radicalmente la política mexicana y provocó que las corporaciones estadunidenses partidarias del TLC reconsideraran la tan proclamada "estabilidad" de México. Los funcionarios mexicanos y de la CIA conocían ya la presencia del EZLN desde la primavera de 1993, pero habían preferido mantenerlo en secreto para que el Congreso de

[5] Véase Enrique Krauze, *La presidencia imperial: Ascenso y caída del sistema político mexicano, 1940-1996* (México, Tusquets Editores, 1997), p. 430.

[6] Véase La Botz, *Democracy*, p. 135.

Estados Unidos pudiera considerar a México como "políticamente estable" y aprobar el TLC aquel otoño.

En los primeros días del levantamiento, el EZLN tomó los principales pueblos de Chiapas y amenazó con avanzar sobre los estados vecinos y la ciudad de México. En diez días de combate, el ejército y la fuerza aérea mexicana controlaron finalmente el avance de la guerrilla y empezaron a empujarlos de regreso hacia las montañas y barrancas de las tierras altas de Chiapas y de la selva Lacandona, de donde provenían. Se produjeron extensos e indiscriminados bombardeos de civiles con resultado de cientos de muertos.

Mientras seguían los violentos combates, en el resto de la nación los ciudadanos se lanzaban a las calles para mostrar su simpatía por los zapatistas. Decenas de miles se manifestaron en México y otras ciudades. Coreaban consignas antigobiernistas y prozapatistas y exigían que el gobierno dejara de usar la fuerza militar. Abogaban por el cese al fuego, una paz negociada y que no hubiera represalias contra los zapatistas. De forma muy significativa, los trabajadores de muchos de los principales sindicatos hicieron acto de presencia en las marchas para declarar su solidaridad con los zapatistas.

Como resultado de este extendido sentimiento, el gobierno no encontró políticamente conveniente utilizar su potencia de fuego superior para eliminar a los zapatistas. En cualquier caso esto no hubiera sido nada fácil, debido al territorio montañoso e irregular y a las sólidas redes de apoyo local que los zapatistas habían construido durante los diez años precedentes, desde que un pequeño grupo de antiguos activistas universitarios de los movimientos democráticos de fines de los años sesenta y setenta fundaron el EZLN en Chiapas. Igualmente, había claras señales por todas partes de grupos organizados campesinos e indígenas que se agitaban agresivamente para defender sus reclamaciones de tierras, desde los huicholes en los estados del Pacífico de Jalisco y Nayarit y los yaquis en el estado de Sonora hasta los huastecos cerca de la región del golfo en los estados de Hidalgo y Veracruz.

Por todo ello el gobierno decidió que sería prudente por el momento aceptar un cese al fuego arreglado por el obispo Samuel Ruiz de San Cristóbal de Las Casas. El cese al fuego empezó el 13 de enero de 1994. El obispo Ruiz fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), grupo mediador independiente de prominentes mexicanos fundado en diciembre de 1994.

Después del cese al fuego, los trabajadores siguieron organizando acciones para protestar contra el neoliberalismo y la ocupación militar de gran parte de Chiapas. El 14 de febrero de 1994, el sindicato de trabajadores universitarios ocupó brevemente el edificio de la Bolsa mexicana. El levantamiento zapatista se iba convirtiendo en un punto de unión para las acciones políticas abiertas de todos los ciudadanos de México.

¿Quiénes eran los 2 000 guerrilleros zapatistas? El EZLN se llamaba a sí mismo "un ejército de mayoría indígena" para reflejar el hecho de que sus miembros eran en su mayor parte mujeres, hombres y adolescentes indígenas empobrecidos que hablaban varias antiguas lenguas mayas diferentes (chol, mam, tzel-

tal, tzotzil y tojolabal). Se cubrían los rostros con pasamontañas para impedir que las fuerzas de seguridad los identificasen fácilmente. Sus máscaras servían como una vacuna contra el caudillismo y como símbolo de haber sido siempre ignorados por el resto de la sociedad como "los sin rostro". Veían su lucha como parte de la resistencia de 500 años de todos los habitantes indígenas de América. Un movimiento milenario con un moderno programa contra el neoliberalismo y en favor de la democracia, los zapatistas decían que actuaban para atraer la atención mundial sobre la extrema pobreza y el trato injusto que sufre mas de la mitad de la población de Chiapas, los indios, y de todos los pueblos indígenas de México y Latinoamérica.

Los zapatistas reclamaban el derecho a la autonomía de los pueblos y municipios indígenas y campesinos. De la población de México, el 30% es aún predominantemente india, aunque muchos de ellos comparten la cultura del 60% o más que son mestizos. La etnicidad sigue siendo una construcción social relacionada con la posición de clase en la sociedad, lo que los antropólogos llaman "identidades situacionales".[7] Cerca del 40% de los indios de México residía en tres estados sureños: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El 80% de los indios de la nación eran trabajadores agrícolas, y la mitad de éstos carecían de tierras. Las tierras que todavía conservaban eran las peores imaginables y aún así seguían siendo arrojados de ellas por extraños, especialmente después que se descubrió petróleo en gran parte de las mismas. En 1975, para citar un ejemplo, los indios de la comunidad de San Francisco de Chiapas relataron cómo los soldados del 46 Batallón (con la aprobación de las autoridades locales) los asaltaron, quemaron sus casas y los arrojaron de sus tierras —que fueron luego entregadas a individuos no indios con conexiones políticas.[8]

Durante generaciones, la mayor parte de los indios fueron dominados por un sistema de caciquismo externo, intermediado por líderes comunitarios. Los indios eran excluidos del gobierno, aunque en 1980 el PRI y el Partido Comunista tenían cada uno de ellos un diputado indio en el Congreso. La dramática aparición en escena de los zapatistas dio renovado impulso a los pueblos indígenas de México y a sus ya fuertes movimientos sociales en todo México. Con mayor urgencia y militancia que antes, empezaron a celebrar reuniones regionales, nacionales e internacionales que unificaban a los diversos grupos y reforzaban las demandas zapatistas.

La revuelta zapatista era una rebelión campesina y étnicamente pluralista, no sólo india. Hablando en nombre de los muchos pueblos comprometidos en diversas actividades económicas, los zapatistas reflejaban los recientes cambios en Chiapas. El campesinado del estado se había dedicado a múltiples estrategias de supervivencia económica. Muchos de ellos se habían convertido en

[7] Por ejemplo, un indio podría sentir su identidad india en su estado natal, pero podría sentirse "mexicano" en Los Ángeles, California, mientras que otros pueden considerar al indio un mestizo en ciertos ambientes, al tiempo que pueden ver a un mestizo empobrecido como indio.

[8] *Excélsior*, 15 de julio de 1975, tal como aparece resumido en Philip Russell, *Mexico in transition* (Austin, Colorado River Press, 1977), p. 112.

campesinos proletarizados que trabajaban las tierras de los barones ganaderos y cafetaleros en condiciones virtuales de peones endeudados. Algunos habían entrado en el pequeño y aun en el gran comercio, que les llevaba tan lejos al norte como la ciudad de México. La tradicional artesanía indígena, realizada especialmente por las mujeres, había encontrado nuevos mercados. Otros se habían transformado en trabajadores migratorios, que seguían las cosechas temporeras hasta Sinaloa y California. Unos pocos se las arreglaban para hallar trabajo temporal en los proyectos de construcción petroleros, petroquímicos, hidroeléctricos y de carreteras de Chiapas y los estados vecinos. Al tiempo que otros emigrantes habían llegado desde el centro y norte de México en busca de trabajo, la población de Chiapas se había vuelto más diversificada. Algunos de los recién llegados se habían unido a los habitantes locales para el clareado de nuevas tierras en la selva Lacandona, a veces espontáneamente o en proyectos de colonización patrocinados por el gobierno. Todos ellos deseaban una parcela de tierra, ejidal o no, para asegurar al menos un poco de comida para sus familias.

El lema principal de los zapatistas, que hacía eco a los magonistas y zapatistas de la Revolución mexicana, era "tierra y libertad". Sus pronunciamientos públicos a menudo utilizaban las palabras exactas de Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata o de los portavoces de Zapata. Su demanda principal era por la tierra, la mayor parte de la cual les había sido arrebatada por los barones ganaderos y por otros latifundistas cuyos pistoleros a sueldo habían aterrorizado a los campesinos de Chiapas durante décadas.

Además, los zapatistas declaraban que su "revolución" era nacional, no étnica, y que era contra "el mal gobierno" y por la democracia. La frase "el mal gobierno", como gran parte del programa del EZLN, fue una expresión favorita del propio Emiliano Zapata.[9] Internacionalmente, los zapatistas aspiraban a ayudar a terminar el "saqueo del mundo" por las fuerzas del neoliberalismo.

El portavoz del EZLN era el "subcomandante Marcos", "el Sub" para abreviar, muy dispuesto a reírse de sí mismo pero carismático. Marcos mostró un refrescante sentido del humor y capacidad para ser muy concreto acerca de la vida

[9] Véase, por ejemplo, una declaración de Zapata leída en la Convención de Aguascalientes de 1914 y citada en Subcomandante Marcos, *Shadows of tender fury: the letters and communiqués of Subcomandante Marcos and the Zapatista Army of National Liberation* (Nueva York, Monthly Review Press, 1995), p. 229. Un libro sumamente revelador en español es la colección de entrevistas con líderes del EZLN realizadas por el latinoamericanista y sociólogo francés Yvon Le Bot, con Maurice Najman, *Subcomandante Marcos: El sueño zapatista. Entrevistas con el subcomandante Marcos, el mayor Moisés y el comandante Tacho, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional* (México, Plaza y Janés, 1997). Quizá el informe más autorizado y actualizado sobre los zapatistas, así como sobre sus negociaciones con el gobierno, es Héctor Díaz-Polanco, *La rebelión zapatista y la autonomía* (México, Siglo XXI, 1997). La más reciente recopilación de puntos de vista de mujeres zapatistas, reunidas por un grupo de doce mujeres, es Sara Lovera y Nellys Palomo, comps., *Las alzadas* (México, Centro de Información de la Mujer y Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional, 1997). Para obtener comunicados zapatistas y temas relacionados en la red, consúltese http://www.actlab.utexas.edu/zapatistas/index.html. Buenos videos son "Sixth Sun" de Saul Landau (documental de PBS), y "Ya basta! The battle cry of the faceless" de Thierry Zéno (Nueva York, Icarus Films).

cotidiana de la gente trabajadora de México. Tenía también un sentido poético en su uso del lenguaje. En un escrito de 1992 titulado "La tormenta y la profecía", hablaba de un "choque de estos dos vientos [...] Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene [...] Cuando amaine la tormenta, cuando lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor."[10]

El mando real del EZLN estaba en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), compuesto por representantes indígenas y campesinos de diversas asambleas regionales y locales acostumbradas a la tradición maya de toma de decisiones colectivas. Numerosos miembros del CCRI eran mujeres, como lo eran varios comandantes de unidades del EZLN.

Como todo lo demás, la rebelión zapatista ha de situarse en un contexto histórico y socioeconómico. Muchos mexicanos, viviendo en ese contexto todos los días, aunque no de forma tan dura como los indios de Chiapas, reconocían fácilmente la legitimidad de las demandas del EZLN y las consideraban realizables. Como ya señalamos, la penetración del capitalismo posterior a 1960 en los rincones más remotos de las zonas rurales de México, especialmente en su estado más pobre, Chiapas, había desplazado a miles de campesinos indios y mestizos, dividido sus comunidades, aumentado las diferencias de clase y, a pesar de alguna movilidad individual ascendente, había depauperado al campesinado. Había obligado a la gente a remodelar sus estrategias para la sobrevivencia económica. La mayor parte de las familias campesinas de Chiapas se dedicaba al trabajo asalariado o al pequeño comercio de uno u otro tipo. En donde entraba el capital, el clero —católico y evangélico protestante —lo seguía. Los valores indios tradicionales se mantenían aunque modificados, o en algunos casos eran llevados a la clandestinidad.

Movimientos de protesta social surgieron entre los campesinos y maestros de escuela de Chiapas en los setenta y ochenta. Eran respaldados por activistas católicos y antiguos estudiantes y militantes universitarios (maoístas y guevaristas, entre otros) de los movimientos estudiantiles reprimidos de los setenta. A pesar de la salvaje represión, los disidentes de Chiapas se mantuvieron firmes durante un tiempo. Exigían tierras, créditos, fertilizantes, y herramientas; poner fin a la brutalidad policiaca, las matanzas militares y el empleo de pistoleros por los barones ganaderos, cafetaleros y madereros; la eliminación de los procesos electorales fraudulentos que hacían de Chiapas el estado más seguro para el PRI, y la liberación de todos los presos políticos. Muchas de las organizaciones de protesta fueron cooptadas por el gobierno. Por consiguiente, en los años ochenta los zapatistas lucharon por arrancar la lucha campesina del terreno estatal infestado de caciques.

La represión estatal de las protestas pacíficas de la gente de Chiapas y el impacto destructivo cada vez más profundo del capitalismo neoliberal fueron los elementos finales que condujeron al levantamiento zapatista. En 1990 se

[10] Véase EZLN. *Documentos y comunicados 1* (México, Era, 1994), p. 66.

permitió la flotación de los precios del café en el mercado mundial y muy pronto éstos cayeron a plomo. El TLC amenazaba el lugar de los campesinos en el mercado de maíz de México, puesto que las gigantescas agroindustrias estadunidenses eran hasta seis veces más productivas que los pequeños cultivadores mexicanos en tierras pobres y montañosas. En 1992, el gobierno de Salinas reformó el Artículo 27 de la Constitución de 1917 para permitir la privatización de las tierras comunales indígenas y de los ejidos campesinos. Por primera vez desde la Revolución mexicana, los campesinos y los indígenas de Chiapas, en su mayor parte reducidos a pobreza extrema, se encontraron sin ninguna garantía de su medio último de supervivencia: *la tierra*.

Marcos y el EZLN afirmaron repetidamente que esta "reforma constitucional" neoliberal era el suceso aislado más importante que les obligó a empuñar las armas. A principios de 1993, asambleas comunales, celebradas en partes de Chiapas en donde los habitantes habían sabido de la presencia de la guerrilla y le habían dado apoyo, dieron un ultimátum para el CCRI: lanzar una ofensiva en el plazo de un año o las comunidades ya no seguirían cooperando con el comando guerrillero. En otras palabras, muchos campesinos sentían que iban a morir sin haber tenido acceso a la tierra y que una revolución armada era la única opción realista que les quedaba.

Gracias a las entrevistas publicadas por el sociólogo francés y latinoamericanista Yvon Le Bot en abril de 1997, sabemos ahora que cuando Marcos y sus diez camaradas llegaron por primera vez a Chiapas a mediados de los años ochenta, habían pensado en el EZLN como en un ejército *estrictamente* defensivo para proteger al pueblo contra posibles actos de represión del ejército mexicano. Marcos había supuesto que tarde o temprano el ejército invadiría las comunidades de Chiapas y otras partes de México a medida que los ciudadanos fueran aumentando sus protestas contra los efectos empobrecedores del neoliberalismo. Marcos le dijo a Le Bot que creía que el ultimátum de las asambleas comunales acerca de impulsar un levantamiento era al mismo tiempo estúpido y "suicida", pero que él y el CCRI no tenían ninguna opción aparte de "obedecer". Esto estaba de acuerdo con los ideales democráticos de abajo hacia arriba de la dirigencia del EZLN, que se basaban en que cada líder debía aprender a "mandar obedeciendo" —es decir, obedeciendo los deseos manifestados por las asambleas de las comunidades locales. Marcos concedió a Le Bot que la práctica de este tipo de democracia no era en absoluto perfecta.

El "primer levantamiento" ocurrió en realidad sin que se disparase un solo tiro y fue de carácter interno. En marzo de 1993, mientras se preparaban para la insurrección, los zapatistas discutieron la necesidad de elaborar una serie de "leyes revolucionarias". Las mujeres presentes insistieron en una ley acerca de su igualdad y el final de los abusos por parte de sus hombres. Como Marcos señaló más adelante: "El primer levantamiento del EZLN [...] fue dirigido por las mujeres zapatistas. No sufrieron pérdidas y ganaron."[11]

[11] *La Jornada*, 26 de enero de 1994.

En el "segundo levantamiento", la rebelión armada del 1° de enero de 1994, el EZLN zapatista "obedeció" la decisión de las asambleas de la comunidad y tomó el control de la más famosa ciudad de Chiapas, la histórica San Cristóbal de Las Casas, así como varias otras de las áreas más pobladas. Un tercio del EZLN se componía de mujeres, algunas de las cuales mandaban unidades enteras. El genio militar de los zapatistas aprovechando tan acertadamente la ocasión impresionó a todo el mundo en aquel momento, aunque rara vez fue analizado o comentado en la avalancha de artículos y libros que se sucedieron. Las entrevistas de Le Bot en 1997 proporcionaban una explicación de la estrategia político-militar del EZLN, que fue llevada a cabo con éxito en un día o dos con pocas armas aparte de escopetas, palos, piedras, el elemento sorpresa, las armas capturadas durante los ataques iniciales a los puestos militares o policiacos y, sobre todo, la muy útil cooperación de los residentes locales.[12] Como Marcos dijo a la prensa sobre el primer día del cese al fuego: "una guerra no es cuestión de armas [...] sino de política". Y un comunicado del CCRI en febrero añadía: "No sólo la boca de fuego logra la libertad [...] otras bocas deben abrirse y gritar para que el poderoso tiemble."[13]

Los zapatistas dijeron que aceptaron el cese al fuego y negociar con "el mal gobierno" debido a la avalancha de apoyo para su causa y para la paz de la ciudadanía de México. En palabras de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona del EZLN en junio de 1994: "otra fuerza superior a cualquier poder político o militar se impuso [...] la Sociedad Civil".[14] "Obedeciendo" las órdenes de la ciudadanía de México, el EZLN cambió a una estrategia de lo que llegó a conocerse como "violencia desarmada": pacientes negociaciones. Los principales partidos políticos de México firmaron un Acuerdo para la Paz, la Democracia y las Elecciones Limpias, que más adelante se convirtió en ley. Incluía cambios electorales tales como hacer que el Tribunal Federal Electoral estuviera menos inclinado a favor del PRI.

Las elecciones de 1994

El presidente Salinas nombró como comisionado para la paz a un rival político en el PRI, Manuel Camacho Solís, antiguo regente de la ciudad de México considerado como un "democratizador" del partido. Anteriormente, Camacho Solís había reclamado por no haber sido elegido en vez de Luis Donaldo Colosio, un tecnócrata del PRI, para suceder a Salinas en la presidencia, y había dicho que tendría que presentarse él mismo como candidato. Dejado en un segundo plano, Colosio intentó dar mayor impulso a su campaña presidencial adoptando varias demandas de la oposición, como una mayor transparencia electoral y más

[12] Véase especialmente Le Bot, *Subcomandante Marcos*, pp. 206-28.
[13] EZLN. *Documentos y comunicados...*, pp. 70, 132.
[14] *Ibid.*, p. 270.

observadores extranjeros en las próximas elecciones de agosto. Colosio pedía un giro en la política económica para mejorar las vidas de los pobres y de los pequeños agricultores.

El 16 de marzo de 1994, Colosio y Camacho Solís firmaron una alianza, y seis días más tarde Camacho Solís dijo que ya no se presentaría para la presidencia. Un día después de esta declaración, un asesino mató a Colosio disparándole en medio de un mitin de campaña. Poco tiempo después, se suspendieron los diálogos de paz entre el gobierno y los zapatistas. A principios de 1994 surgieron también tensiones políticas por el secuestro de dos importantes hombres de negocios y una explosión en un banco de Monterrey, en el noreste de México.

Los políticos de la vieja guardia del PRI, o "dinosaurios" como eran llamados (véase más adelante), eran sospechosos a ojos de la mayoría de la población de haber maquinado el asesinato de Colosio. Por otra parte, algunos pensaban que el propio Salinas deseaba ver a Colosio eliminado porque había ido demasiado lejos en sus promesas de reforma política radical (Salinas había advertido en 1991, "al introducir una reforma política drástica, puedes terminar sin ninguna reforma en absoluto"). El jefe de la policía de Tijuana a cargo de la investigación del asesinato de Colosio fue también asesinado poco después. Un antiguo ayudante del fiscal general huyó a Estados Unidos, tildando a México de "narco-democracia" y declarando que los barones de la droga y altos funcionarios del PRI estaban detrás del asesinato de Colosio.

Ernesto Zedillo Ponce de León fue nombrado para suceder a Colosio como candidato del PRI. Zedillo se había educado en Yale y había sido secretario de Programación y Presupuesto muy conservador en el gabinete de Salinas, y había ayudado a supervisar Pronasol, el poderoso programa contra la pobreza examinado en el capítulo precedente. Zedillo había fungido también brevemente como secretario de Educación, cuando intentó sin éxito introducir nuevos libros de texto de historia que reflejaban favorablemente los intereses extranjeros, el gobierno de Estados Unidos y el dictador Porfirio Díaz. Zedillo eligió al antiguo presidente del PRI y acaudalado hombre de negocios de la vieja guardia (y con reputación de lavado de dinero de la droga) Carlos Hank González como su director de campaña.

Mientras tanto, el ejército mexicano estaba ocupado en trasladar varias decenas de miles de soldados a Chiapas, emprendiendo lo que los manuales del ejército de Estados Unidos llaman "guerra de baja intensidad". A mediados de junio de 1994, los zapatistas se negaron a volver a la mesa de negociaciones, señalando como impedimento las incursiones del ejército y la falta de medidas adecuadas para la democracia política en el programa de paz de treinta y cuatro puntos del gobierno. Después de esto, las negociaciones de paz fueron periódicamente renovadas e interrumpidas nuevamente.

Aquel agosto, en uno de sus primeros actos públicos después del cese al fuego, los zapatistas celebraron una Convención Democrática Nacional. Entre los asistentes estuvo la campeona nacional de "los desaparecidos", Rosario Iba-

rra de Piedra. En un gesto simbólico, le entregaron la gigantesca bandera mexicana de la convención para que la llevara con ella a México y la conservara en lugar seguro. Consiguiendo enorme apoyo del desafío de los zapatistas al estado, el movimiento democrático mexicano consiguió garantías para el uso de urnas transparentes y el derecho a tener grupos de observadores nacionales y extranjeros en todas partes de México el día de las elecciones programadas para ese mismo mes de agosto.

Un PRI herido y dividido trató de concentrarse en ganar las elecciones de 1994. Durante todo el gobierno de Salinas el PRI había soportado intensas luchas internas que enfrentaban a los "dinosaurios" contra los tecnócratas, hombres como Salinas que se cubrían hipócritamente con el disfraz de la "reforma". Políticos maduros, los "dinosaurios" veían con desconfianza a Salinas, quien nunca antes había competido por cargos políticos. Demostraron su influencia en la expulsión de más de un miembro de la "corriente democrática" y la eliminación de los supuestos "reformistas" designados por Salinas para encabezar el partido. Cuando el tercer "reformista" designado por Salinas para encabezar el PRI reconoció públicamente en 1993 que "no somos un partido único virtual ni tampoco el partido del gobierno", fue prontamente removido.

Los "dinosaurios" estaban "abochornados" de que los tres últimos presidentes de México hubieran provenido de fuera del círculo interno de políticos del PRI. Echaron humo cuando el "destapado" de 1994 resultó ser Colosio, otro más de los tecnócratas educados en Estados Unidos. Colosio había dirigido el PRI anteriormente y había encabezado la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Salinas, agencia notoriamente ineficaz encargada de limpiar el desastre medioambiental a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Zedillo, como Salinas, al principio atrajo la cólera de los "dinosaurios", aunque algunos respetaban el trabajo de Zedillo para el Pronasol, un programa contra la pobreza que él había convertido en vehículo de cooptación. La mayor parte de los "dinosaurios" se alinearon con la campaña de Zedillo cuando éste designó a algunos de ellos para posiciones clave como la de director de campaña y secretario del PRI para información y propaganda.

Un año antes de las elecciones presidenciales de agosto de 1994, la oposición de centro-izquierda del PRD realizó una elección nacional interna para designar a la directiva de su partido. Andrés Manuel López Obrador fue elegido para presidente del partido. Antiguo miembro del PRI, estaba cerca de los movimientos sociales del país. Defendió a las comunidades indígenas de Tabasco cuando sus tierras y comunidades fueron devastadas por la carrera para producir más petróleo de los años setenta en adelante. Debidamente impresionado con el intento del PRD en pro de la democracia y su resultado, el EZLN animó a sus partidarios a votar por el candidato presidencial del PRD, Cárdenas.

Para el candidato Zedillo, el PRI puso todo su empeño en evitar la repetición de su desastre electoral de 1988. Hizo buen uso de su todavía poderoso, aunque reducido, papel en organizar y administrar las elecciones. Un debate televisado entre Zedillo, el conservador candidato del PAN Diego Fernández de Cevallos,

y el candidato del PRD Cárdenas, fue ganado fácilmente por la agudeza lingüística de Fernández de Cevallos. Cárdenas, que se movió hacia el centro político diciendo que él no nacionalizaría la banca ni regresaría al proteccionismo en el comercio, prometió más "reforma" económica con una mayor conciencia social. Su imagen resultó carente de color o empuje.

Cuando se anunció el resultado del recuento oficial de los votos, Zedillo había acumulado escasamente el 50 por ciento. El candidato del PAN Fernández de Cevallos acabó segundo, y Cárdenas tercero. El PRD denunció un "fraude" general, incluyendo el "afeitado" de 6 millones de votos (dejándolos fuera del registro nacional y negándoles así la posibilidad de votar). Pocos supervisores de las votaciones negaron que, excepto en Chiapas y uno o dos estados más, el fraude electoral no fue tan descarado como lo había sido en 1988.

El resultado de las votaciones fue más alto de lo usual, en parte porque el PRI gastó sumas enormes para comprar votos y transportar a "sus gentes" a las urnas. En la clásica forma corporativa del PRI, en vísperas de las elecciones el gobierno implementó el Programa Nacional de Ayuda Directa al Campo (Procampo) para ganar el apoyo de los votantes y suplir al Pronasol. Procampo pagó a unos 3.3 millones de productores campesinos 100 pesos por hectárea para asegurarse de que votaran por el PRI. Como presidente, Zedillo prosiguió los programas anti-pobreza del Pronasol, trasladándolos a la Sedesol. Pero incluso antes de que Zedillo tomase posesión de su cargo, otro importante asesinato político sacudió a México.

En septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, el segundo más alto funcionario del PRI, fue asesinado. La investigación oficial de su muerte, igual que la anterior de Colosio, tuvo como resultado frecuentes encubrimientos, dimisiones de los encargados de investigar y varias muertes misteriosas. En febrero de 1995, un hermano del ex presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, fue arrestado y luego encarcelado por haber supuestamente pagado por el asesinato de Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito.

El "milagro del Tratado de Libre Comercio"

Cuando el presidente Salinas tomó posesión en 1988, México seguía experimentando "la década perdida para el desarrollo". Las políticas económicas neoliberales eran generalmente una fuente de descontento social masivo. Los tecnócratas del PRI sentían que el neoliberalismo necesitaba más tiempo para tener éxito y más, y no menos, ímpetu de libre comercio. Por lo tanto decidieron anunciar que un nuevo "milagro económico" estaba a punto de ocurrir, y esta vez no a través de las políticas de sustitución de importaciones de la segunda guerra mundial y años sucesivos sino mediante su "opuesto neoliberal" el libre comercio tal como se encarnaba en el TLC.

El tratado de 2 000 páginas, negociado en secreto y conocido en México como TLC, fue patrocinado por las organizaciones comerciales más poderosas de

México, Canadá y Estados Unidos, incluyendo el *Business Round Table* de Estados Unidos y su equivalente mexicano, el CCE (cuyos treinta y cinco miembros al parecer poseían valores equivalentes a una cuarta parte del PIB de México). El TLC prometía eliminar en un plazo de quince años las barreras aduanales a los productos total o principalmente originados en cualquiera de los tres países del TLC. Los patrocinadores de la gran empresa del TLC creían que esto fortalecería su "competitividad" frente a las crecientes potencias económicas de Japón y la Comunidad Económica Europea/Unión Europea. Declaraban que el TLC auguraba un mercado de 6 billones de dólares para 363 millones de consumidores, o una quinta parte del comercio mundial, y una elevación correspondiente en los salarios y empleos de los trabajadores. La llamaban una situación "ganar-ganar-ganar" para los tres países. México estaba ya acercándose a otros países latinoamericanos para formar apéndices del TLC y los gobiernos de Bush y Clinton hablaban de un eventual mercado común hemisférico.

México había empezado bajando sus aranceles en el anterior gobierno del presidente de la Madrid (1982-1988), que introdujo a México en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, luego sustituido por el Organización Mundial de Comercio, que recibió poder para imponer el "libre comercio", esto es, un "terreno de juegos nivelado para todos"). Salinas redujo los aranceles de México mucho más durante los años que llevaron a la instrumentación del TLC en 1994.

Salinas y los tecnócratas de su equipo no sólo veían signos de dólares para ellos mismos en su manejo del paso acelerado de las privatizaciones que el TLC llevaba consigo ("para nivelar el terreno de juego"). También pensaban que podían salvar al PRI utilizando el "milagro del TLC" como una señal al pueblo de que la economía no sólo volvería a crecer sino que generaría empleos y bienes de consumo para todos. Utilizaron fondos del gobierno para realizar una costosa campaña de publicidad de acuerdo con esas líneas tanto en México como en Estados Unidos.

Esto convirtió a Salinas en un verdadero héroe para los círculos dirigentes de Estados Unidos. Un memorándum filtrado a la prensa del embajador John Negroponte, en 1991, aconsejaba apoyar a Salinas porque su gobierno estaba cambiando "dramáticamente" su actitud con respecto a Washington y el TLC ofrecía una oportunidad única para expandir la influencia estadunidense. Negroponte había servido tiempo atrás como embajador en Honduras, durante la organización militar de los contras de Nicaragua en bases de Honduras en los años ochenta.

El gobierno de Salinas también hizo campaña en el Congreso de Estados Unidos para votar por el TLC, lo que el Congreso no hizo sino en noviembre de 1993 después de que algunos votos fueron "comprados" en negociaciones tras bastidores con favores del presidente Bill Clinton a los congresistas titubeantes. Las encuestas de la época demostraban que la opinión pública estadunidense estaba contra el TLC.

El acuerdo previo al TLC para el libre comercio entre Canadá y Estados Unidos (FTA) había garantizado a este último libre acceso al petróleo y el gas de Ca-

nadá, obligando a los canadienses a exportar a Estados Unidos por lo menos el volumen promedio de los tres años anteriores. Hasta el agua, en épocas de escasez en Canadá, tenía que ser enviada a Estados Unidos. Pero la gran empresa canadiense había respaldado el FTA porque abría oportunidades de inversión en áreas de bajos salarios de Estados Unidos, el mismo beneficio que las empresas canadienses esperaban de una economía mexicana más ampliamente abierta bajo el TLC.

Los críticos del TLC, canadienses o no, señalaban que el FTA había provocado que Canadá abrazase la política neoliberal de echar para atrás algunos programas canadienses de bienestar social, considerados por el FTA como "subsidios comerciales injustos". Para estos críticos, el TLC representaba más de lo mismo. Consideraban que la agenda corporativa tras del TLC estaba destinada a ahorrar en salarios, al encaminarse los salarios de Estados Unidos y Canadá cada vez más hacia niveles mexicanos y no al contrario (una armonización de salarios "hacia abajo" y no "hacia arriba"). Estos críticos sentían que el TLC convertiría a México en una "economía de enclave" de Estados Unidos y que los empleadores utilizarían amenazas con el fin de pasar su producción hacia México y evitar que los trabajadores norteamericanos ganasen salarios decentes.

De hecho, la firma del TLC sirvió para abrir a México más aún a la inversión extranjera y para maniatar a México impidiendo que el estado metiera las manos en las inversiones extranjeras. Además, prohibía a México legislar o decretar normas de funcionamiento que pudieran obligar a una transnacional a transferir tecnología al país anfitrión o a dar preferencia a los proveedores domésticos. El TLC asestaba así un nuevo golpe a los debilitados esfuerzos de México por desarrollar una producción más vigorosa y autónoma de capital y de bienes intermedios.

Los críticos mexicanos vieron la promoción estadunidense de Salinas y el TLC como un intento de salvoconducto político para el PRI. Éstos, contrarios al TLC, eran acompañados por críticos de todo el mundo que veían el TLC como parte de la codicia de Estados Unidos por el petróleo, el gas natural, el uranio y otros recursos naturales de México, incluyendo los bancos de genes de la flora y fauna tropical de gran utilidad para las compañías farmacéuticas que los patentaban como parte de sus "derechos de propiedad intelectual". Algunos decían que la "fuga de cerebros" de México aumentaría a medida que los graduados universitarios en computación e investigación científica emigraran hacia el norte en busca de empleos mejor pagados.

A muchos preocupaba que el TLC estuviera dominado por Estados Unidos, en donde el PIB era once veces mayor que el de Canadá y veinte veces mayor que el de México.[15] En 1992, el 7% de todas las exportaciones estadunidenses iban hacia México, aumentando el desequilibrio de su balanza comercial, una ten-

[15] El investigador de Harvard Juan Enríquez, en una conferencia en el CUNY Bildner Center de la ciudad de Nueva York, el 20 de marzo de 1998, situó en perspectiva el tamaño de la economía de México señalando que sus aproximados 300 mil millones de dólares de PIB eran sólo un poco más que la mitad del del Fidelity Mutual Fund.

dencia que más adelante fue acelerada por el TLC (excepto durante un breve periodo después de las devaluaciones del peso mexicano de 1994-1995). Los críticos denunciaban el TLC como "un negocio sucio de la gran empresa" que abriría México y su inmensa reserva de mano de obra barata a inversiones mayores, más fáciles y garantizadas para las transnacionales con base en Estados Unidos y Canadá.

Los opositores mexicanos al TLC deseaban desarrollar México en una forma que no mantuviera sus salarios bajos y forzara a más y más personas a aceptar condiciones laborales pobres e inseguras o a emigrar hacia el norte sólo para sobrevivir. Construyeron una coalición de "nuevas políticas" de más de cien grupos llamada Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio. Ésta forjó vínculos con sus principales contrapartes contrarias al TLC en el norte: la Action Canada Network y la Mobilization on Development, Trade, Labor and the Environment, con base en Estados Unidos. Las tres juntas propusieron un Pacto de Desarrollo Continental modelado según la Carta Social de la Comunidad Económica Europea (CEE), que gastó 70 mil millones de dólares para elevar los niveles salariales en naciones pobres de la CEE como España y Portugal, y un plan similar propuesto por Cárdenas. Estados Unidos fue el único país occidental que no otorgó a los trabajadores derechos como los consagrados en la Carta Social Europea. Las demandas de la Red de Acción Mexicana incluían un pago igual por trabajo igual, la desmilitarización de la frontera entre México y Estados Unidos, la modificación de las injustas leyes electorales de México para permitir elecciones limpias y la inclusión de organizaciones no gubernamentales (ONG) en todas las negociaciones del TLC.

A principios de los años noventa, grupos internacionales de solidaridad como la North American Worker-to-Worker Network, la Coalición para la Justicia en las Maquiladoras, respaldada por AFL-CIO, y la Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio cooperaban cada vez más para ejercer presiones en pro del trabajador y el medio ambiente y en contra del TLC. Algunos observadores llamaron a estas coaliciones de base "diplomáticos ciudadanos".

Quienes buscaban una solución de compromiso *dentro* del TLC también se vinculaban a través de las fronteras. Por ejemplo, el bien financiado Fondo de Defensa Ambiental, cuyo apoyo del TLC demostró ser crítico para que el TLC pudiera ganar la aprobación del Congreso de Estados Unidos, construyó puentes con el mexicano "Grupo de los 100", prominentes intelectuales mexicanos que defendían un TLC "con rostro humano". El Grupo de los 100, como las fuerzas contrarias al TLC antes mencionadas, querían poner en la agenda la emigración de mano de obra mexicana hacia el norte para impedir que los bajos salarios de México se convirtieran en una característica permanente del paisaje económico norteamericano.

Hubo actos de solidaridad obrera internacional, aunque todavía pocos, relacionados con el TLC. El 8 de enero de 1991, una fuerza de trabajo de solidaridad trinacional, Mexuscan, organizó un Día de la Justicia de los Trabajadores de Ford para el primer aniversario del asesinato de un trabajador huelguista

por un pistolero de la CTM en la planta de Ford en Cuautitlán. Los oradores llamaron a construir una unidad laboral internacional para asegurar la armonización ascendente de los salarios en los tres países, con o sin el TLC. De forma similar, el FLOC (Farm Labor Organizing Committee), del medio oeste, cooperó con el SNTOAC de Sinaloa (Sindicato Nacional de Trabajadores y Obreros Agrícolas y Campesinos) en las negociaciones del contrato con Sopas Campbell. Su anterior cooperación había impedido a Campbell trasladar sus operaciones de Michigan a Sinaloa.

AFL-CIO criticó el TLC en 1991 en una publicación titulada "Exploiting both sides". Pero al limitar su cooperación a la CTM, cuyo envejecido líder Fidel Velázquez apoyaba el TLC, y al hacer a un lado a los líderes de las corrientes democráticas en los sindicatos mexicanos, AFL-CIO no podía ganar la confianza de los trabajadores mexicanos que luchaban contra el charrismo. Tanto el tema ambiental como el de la protección laboral, así como la cuestión de los trabajadores emigrantes a Estados Unidos, quedaban excluidos de las tan secretas negociaciones del TLC.

Sin embargo, debido al clamor público de las fuerzas contrarias al TLC, el gobierno de Clinton se vio forzado a añadir acuerdos colaterales *no-obligatorios* al TLC para alentar la protección ambiental y los derechos laborales. Pero no hubo ninguna sugerencia por parte de la Casa Blanca en el sentido de una Carta Social al estilo de la de la CEE. Por ambos lados los acuerdos afirmaban que todos los remedios debían ser conformes con las leyes nacionales existentes en cada país más que con las normas internacionales. Durante los cinco primeros años del TLC (1994-1998), ninguno de los dos acuerdos laterales condujeron a ningún cambio o soluciones de alguna consideración a los problemas medioambientales o a la falta de derechos laborales en cualquiera de las tres naciones signatarias.[16]

El TLC resultó ser no tanto un pacto de libre comercio como un saqueo de México por parte de las corporaciones transnacionales con base en Estados Unidos y, en menor medida, en Canadá, y un ataque contra los salarios y derechos de los trabajadores de las tres naciones. También, desde su inicio, el TLC tuvo más que ver con guerras comerciales que con libre comercio. Sus patrocinadores corporativos veían en el TLC una forma de satisfacer los intereses comerciales estadunidenses en su competencia con los crecientes desafíos planteados por las fuertes economías de principios de los años noventa de Japón, Asia oriental y la CEE.[17] De hecho, las guerras comerciales escalaron des-

[16] El North American Development Bank, creado para ayudar a limpiar el desastre ambiental a lo largo de la frontera mexico-norteamericana, aprobó solamente cuatro préstamos en tres años. Los casos acerca de violaciones de los derechos de los trabajadores recibieron atención pero no remedios directos.

[17] Estados Unidos se quejó durante largo tiempo de los altos aranceles de sus rivales en el mercado mundial. Declaraba que había rebajado sus aranceles al 6%, muy por debajo de los de otras potencias industriales. Sin embargo, según el Banco Mundial, el uso por parte de Estados Unidos de barreras no impositivas (derechos anti-*dumping*, cuotas sobre importaciones, etc.) para compen-

pués de que el TLC y el WTO del GATT alcanzaron pleno efecto. Incluso *dentro* de los pactos de libre comercio, la fiebre de la guerra comercial subió al máximo, como lo prueban las tensiones entre Estados Unidos y Canadá acerca de tratos justos sobre la madera, la pesca del salmón y las industrias culturales, o las controversias sobre las tunas, aguacates, fresas, tomates y transportes de México.[18]

El vicepresidente de Estados Unidos Al Gore comparó a menudo al TLC con la compra de Louisiana, un gran éxito económico para Estados Unidos.[19] El presidente Clinton reconoció tácitamente el reto planteado a la hegemonía económica de Estados Unidos por Japón y la CEE cuando dijo a una convención de AFL-CIO en 1997 que el libre comercio "trataba de cómo es que el 4% de las personas del mundo puede seguir reteniendo el 22% de la riqueza del mundo". Las nuevas palabras clave de la era del libre comercio eran "reformas del mercado" y garantía de "derechos de propiedad intelectual" (DPI) al estilo del TLC, así como "garantías de inversión" y "tratamiento no discriminatorio" que aseguraran a *todos* los inversionistas acceso igual a *cualquier* economía, incluyendo el "sector servicios" (es decir, banca, seguros, bienes raíces, transportes y telecomunicaciones).

México fue recompensado en 1994 por su papel en la formación del TLC concediéndole la entrada al poderoso organismo consultivo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Utilizando el TLC como modelo, el gobierno de Clinton buscaba conseguir más apoyo latinoamericano para la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA), así como para el Acuerdo Multilateral de Inversión (MAI) y el Acuerdo Trans-Atlántico de Libre Comercio (TAFTA). Los críticos llamaban al MAI una "licencia para saquear" y "TLC con esteroides" porque concedía todos los "derechos" imaginables a las transnacionales y protecciones férreas para sus inversiones. En mayo de 1998, miles de manifestantes formaron una cadena humana fuera de una reunión de los jefes de estado del "G-8" (Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia y Estados

---

sar la influencia de las exportaciones de manufacturas de Japón y el Lejano Oriente hizo que los aranceles de Estados Unidos, en realidad, no fuesen del 6% sino del 23%. Véase John Warnock, *The other Mexico* (Montreal, Black Rose Books, 1997), p. 3, citando al Banco Mundial, *World development report* (Washington, World Bank, 1993). Cualquier duda acerca de cómo los bloques de "libre comercio" regional sirven para imponer el proteccionismo en contra de otros bloques, quedaría enterrada en el fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón a principios de 1994. Además, el marco de los acuerdos de libre comercio firmados por Estados Unidos con Chile y otros países latinoamericanos tendían a asegurar condiciones de inversión favorables para las transnacionales con matriz en Estados Unidos —mediante cláusulas de "contenido local" similares a las del TLC—, para situar a las compañías japonesas y europeas en desventaja dentro del "patio trasero" de Estados Unidos. En realidad, las "guerras del libre comercio" eran antidemocráticas pues tendían a ser peleadas por pequeños círculos de élite, sin intervención de los trabajadores cuyos salarios y condiciones de vida estaban a merced de las élites, siempre dispuestas a sacrificarlas con objeto de "hacer competitiva a la nación".

[18] Véase *Multinational Monitor*, noviembre de 1997.

[19] Señalado en James Petras, "Latin America: the resurgence of the left", *New Left Review* núm. 223 (mayo-junio de 1997), p. 39.

Unidos) para protestar contra el intento de establecer el TAFTA y para exigir la cancelación de la deuda del tercer mundo para el año 2000.

Después de que el TLC entró en funciones, sus tres naciones miembros experimentaron una declinación inicial en los salarios reales para sus fuerzas laborales. Sus sindicatos cada vez más reducidos tuvieron que pelear batallas sobre todo defensivas. México sufrió los peores efectos del GATT y el TLC. En 1993-1994, cerca de un 40% de los fabricantes de ropa de México tuvo que cerrar debido a las importaciones asiáticas surorientales y chinas baratas que las nuevas tiendas de menudeo estadunidenses traían al establecerse en México. La industria mexicana del juguete estuvo a punto de hundirse, mientras que el sector de la piel y el calzado sufrió una reducción de más de la mitad en la producción y el empleo. El casi colapso de la industria mexicana y el creciente número de trabajadores despedidos empeoró después de las crisis por las devaluaciones del peso de 1994 y 1995. Desde 1993 hasta 1996, México importó más productos agrícolas de los que exportó, incluyendo grandes cantidades de maíz que hicieron que los precios de mercado en México subieran, en vez de bajar como los partidarios del TLC había predicho. Los principales importadores dedicados a la comercialización del maíz incluían a algunas transnacionales con base en Estados Unidos, como Anderson Clayton, Cargill y Purina. En la era del TLC, el papel de las transnacionales aumentó a lo largo de las áreas más productivas y rentables del campo mexicano, al tiempo que seguían quebrando más pequeñas explotaciones agrícolas.

Como ya señaló Edur Velasco Arregui, México experimentó una devastación medioambiental mayor que Estados Unidos o Canadá. El TLC facilitó que México se convirtiera en una especie de terreno apto para el *dumping* y para los vertidos de desechos norteamericanos. Velasco Arregui calculó que los costos combinados de la erosión del suelo, la contaminación del agua y el aire y el agotamiento de recursos no renovables desde 1980 hasta 1997 alcanzó una cifra entre el 8.5% y el 15% del PIB de México, con los trabajadores y los pobres sufriendo los peores efectos de la contaminación y de la degradación ambiental.[20]

El TLC funcionaba de manera muy similar a lo que las transnacionales habían esperado desde un principio. Cerca de la mitad de las empresas estadunidenses pertenecientes a un grupo industrial norteamericano que había hecho cabildeo para el TLC envió su trabajo al exterior e incrementó sus ganancias en cerca de un 300% para principios de 1997.[21] Las exportaciones estadunidenses a México aumentaron de forma notable, según México superaba a Japón en 1994 como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos (detrás de Canadá). El gobierno estadunidense declaró una ganancia de cuatro años en el empleo en Estados Unidos gracias al TLC con más de 100 000 empleos, debido al aumento en las exportaciones. Sin embargo, también admitió por otra parte

[20] Véase Edur Velasco Arregui, "Commentary on statistical tables: neoliberalism, the long wave in Mexico, and the economic integration of North America" (manuscrito inédito).

[21] Estadísticas del U.S. Labor Department y de *Forbes*, citadas por David E. Bonior (vocero de la minoría en el Congreso), en *New York Times*, 13 de julio de 1997.

que se habían perdido 151 256 empleos a causa del TLC, y que esta cifra subestimaba la verdadera pérdida de empleo.

Haciendo que el TLC garantizase la protección de los derechos de propiedad intelectual y de oportunidades de inversión en *todos* los sectores económicos de México, los bancos y corporaciones de Estados Unidos y Canadá estaban en condiciones de economizar en los costos de mantener salarios decentes, condiciones laborales seguras y beneficios de salud para sus trabajadores. También podían ahorrar en los costos de cumplir las normas medioambientales al norte de la frontera con México. Conseguían sus objetivos en la medida en que se trasladaban a México o limitaban sus concesiones a la fuerza laboral organizada utilizando como arma su amenaza de mudarse.

Los bancos y corporaciones estadunidenses y canadienses intentaban justificar sus políticas de libre comercio y de las llamadas "reducciones" sobre la base de "la necesidad de competir globalmente" —una justificación utilizada por todas las transnacionales y grandes bancos del mundo en un ataque global contra los niveles de vida de la clase trabajadora en todas partes. El razonamiento de la "competencia global" fue utilizado incluso para capturar a México en las redes del neoliberalismo y del libre comercio alegando que México se estaba volviendo *más* competitivo *debido a* su estructura de bajos salarios. La armonización hacia abajo de los salarios era sin duda la agenda oculta de pactos comerciales como el TLC y el GATT.

La privatización del petróleo

En última instancia, con relación especial a México, los pactos de libre comercio iban abriendo el camino a la privatización de las industrias del petróleo y el gas natural nacionales por mandato constitucional. El TLC transfirió parte del sector de energía de México a compañías estadunidenses mediante el hincapié en la desregulación, la privatización, el libre flujo de mercancías y la protección a los derechos de propiedad intelectual. En especial, el TLC facilitó contratos de servicios y ventas de equipos y tecnología en petroquímicos secundarios altamente lucrativos, así como de gas natural. Incrementó la apertura de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex a "alianzas estratégicas" con intereses norteamericanos en la exploración y perforación del petróleo.

Cuando en 1992 una explosión en Guadalajara mató a más de 180 personas, se culpó a Pemex, dando fuerza a las demandas para su privatización. La penetración de Estados Unidos en el sector petroquímico primario ya había sido posibilitada gracias a la aceptación por parte del gobierno mexicano de las "reclasificaciones técnicas" de los artículos petroquímicos primarios en "secundarios", y a los cambios en la ley corporativa. Un cambio en 1992 de la ley corporativa convirtió a Pemex en una "compañía tenedora de acciones" con subsidiarias en petroquímicos, gas, refinerías y exploración/perforación. Estas medidas ayudaron a evitar la delicada cuestión de la exigencia constitucional de

propiedad nacional de la industria petrolera. Pemex y Shell Oil Company, por ejemplo, utilizaron la ley de 1992 para formar una "alianza estratégica" en el refinamiento del petróleo. Mientras que el presidente Salinas insistía en que "la propiedad y el control del petróleo permanece inalterable en manos de los mexicanos", el ingeniero civil Heberto Castillo, una autoridad en cuestiones petroleras, acusó al gobierno de "estar entregando el control del petróleo a extranjeros y a la iniciativa privada mediante una serie de subterfugios".[22]

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), otro líder de la "tecno-burocracia" educada en Estados Unidos (doctorado en economía por Yale), anunció que se proponía privatizar sesenta y una plantas petroquímicas. En mayo de 1995, presionado por los acreedores extranjeros que habían ayudado a salvar a México de la crisis financiera de 1994-1995, México modificó el Artículo 27 de la Constitución (un artículo nacionalista que proclamaba la propiedad mexicana de todos los recursos del subsuelo). De acuerdo con la ley modificada, el estado vería con agrado las inversiones de capital privado en los transportes y en el almacenamiento y distribución de gas natural, recurso de primer orden en la producción de petroquímicos primarios. Más adelante ese mismo año, el gobierno anunció estar dispuesto a invitar al capital privado extranjero y nacional para invertir en el desarrollo *y la producción* de gas natural, mediante contratos de servicio que técnicamente respetarían la Constitución aunque entregando un mayor control de los recursos de gas natural al capital extranjero. Esperando precios más bajos para los productos petroquímicos para fines del siglo debido a la creciente eficiencia tecnológica, la competencia entre el capital mexicano y el extranjero era de esperarse que se intensificara no sólo en la industria del gas natural y el petróleo sino también en otras industrias, tales como los textiles, las partes para automóviles, el calzado, la construcción y otras más. Era obvio que la posición competitiva de México se estaba debilitando.

Según el economista de la UNAM Alejandro Álvarez Béjar y la mayoría de los demás observadores del escenario petrolero mexicano, para fines de los años noventa el control de Pemex iba limitándose cada vez más a las zonas de extracción de petróleo crudo y gas natural. La comercialización e incluso la exploración y perforación estaban pasando gradualmente a manos del capital privado, nacional y extranjero. La producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petroquímicos y combustibles como el gas natural estaban pasando también al capital privado. Dado que las utilidades del componente de "valor añadido" de la mano de obra eran mayores en las horas extra de la producción que en las de la extracción, Pemex iba quedando excluido de las mayores utilidades que provenían de la fase de producción a largo plazo de la industria petrolera. Además, como el economista Sidney Weintraub señaló en 1988, "la confianza ingenua de México en las exportaciones de petróleo [...] perjudicó el

[22] Un ensayo de Heberto Castillo sobre este tema se incluyó en José Luis Manzo Yepes y Rosa Albina Garavito Elías, *La petroquímica mexicana: ¿industria estratégica o subordinada?* (México, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y Editorial Nuestro Tiempo, 1995).

desarrollo de un sector manufacturero competitivo, agotando al mismo tiempo un recurso no renovable".[23]

México ocupaba un muy próximo segundo o tercer lugar (junto con la antigua Unión Soviética y Venezuela) después de las naciones del Oriente Medio e Irán como fuente de reservas petroleras. Pemex produjo 3 millones de barriles por día en 1997, o el 5% del total mundial. Estados Unidos recibía más de la mitad de las exportaciones petroleras de México, o el 7% de todas las importaciones de petróleo de Estados Unidos. México era la única nación con un convenio petrolero especial con Estados Unidos: garantizaba el suministro de la Reserva Estratégica de Petróleo a bajo costo.

Debido a este convenio y a los enormes préstamos y ventas de tecnología de Estados Unidos para desarrollar la industria petrolera, así como a las concesiones a empresas estadunidenses de los sectores de gas natural y petroquímico, México ya no podía seguir controlando con seguridad el destino de sus propios recursos de hidrocarburos. En 1993, Pemex firmó acuerdos con el Citibank que estuvieron a punto de dar en prenda su petróleo como colateral, un paso que más adelante México se vio forzado a dar públicamente a cambio del rescate financiero de su colapso económico de 1994-1995. *Fortune*, *El Financiero* y otras publicaciones económicas concluyeron que las fuerzas del mercado acabarían por llevar a la completa desnacionalización del petróleo mexicano, modificando quizá la Constitución mexicana tal como se hizo en 1992 con el fin de privatizar los ejidos.

El Tratado de Libre Comercio contra el medio ambiente

Como ya hemos señalado, la degradación ambiental de México empeoró a causa del TLC. México entró en los años noventa como una de las naciones de mayor "biodiversidad" del mundo, pero el 98% de sus bosque tropicales ya habían sido destruidos y un tercio de sus tierras convertidas en desierto en la carrera por extraer recursos naturales y poner en práctica la revolución verde. Tanto el TLC como el GATT contribuyeron a rebajar las normas de armonización de la conservación. El Artículo 106 del TLC prohibía las regulaciones ambientales que pudieran ser "una restricción disfrazada para el comercio".[24]

[23] La cita de Weintraub es de Peter S. Cleaves y Charles J. Stephens, "Businessmen and economic policy in Mexico", *Latin American Research Review* 26, núm. 2 (1991), pp. 187-202, reseñando a Sidney Weintraub, "Mexican trade policy and the North American community" (Washington, Center for Strategic and International Studies, 1988).

[24] La producción insuficiente en ganadería y en minería desde 1970 provocó que México representara una cuarta parte de la pérdida de la selva pluviosa de América Latina. La protección ambiental gira en torno a cómo se manejaron los casos en disputa. Sólo los gobiernos, no los grupos ecologistas ni otros grupos de ciudadanos, fueron autorizados por las condiciones del TLC para iniciar una demanda. Para más datos sobre el medio ambiente y el TLC, véase Joel Simon, *Endangered Mexico* (San Francisco, Sierra Club Books, 1997).

El primer código de protección ambiental serio de México fue legislado en 1988, pero no fue puesto en vigor. En 1982, el gobierno había creado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), equivalente a la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Ambas fallaban gravemente por su base. Una década más tarde, el presidente Salinas cerró la Sedue y creó Sedesol, que incluía preocupaciones ambientales pero que encargó la mayoría de los programas a firmas consultoras privadas y poco pudo realizar. Los presidentes Salinas y Zedillo pusieron el crecimiento económico por encima del medio ambiente. Para atraer la inversión extranjera, emprendieron reformas legales que suavizaran los códigos ambientales.[25]

Para el TLC, la representante comercial de Estados Unidos Carla Hills insistió en las normas permisivas de la Comisión del *Codex Alimentarius* de la ONU, dominada por intereses corporativos de las industrias agrícola y alimentaria. Las normas del *Codex* habían sido incorporadas al GATT. En un punto clave —el uso del plaguicida DDT, prohibido en Estados Unidos— *Codex* declaraba que no había nada de malo en que hubiera un poco de DDT en la comida. México podía alegar que cualquier prohibición de los alimentos contaminados con DDT era un obstáculo al comercio. Las frutas y vegetales para exportación y los trabajadores agrícolas mexicanos seguían siendo en forma rutinaria rociados con insecticidas prohibidos en Estados Unidos.

Aunque el presidente Salinas ordenó algunos cierres simbólicos de fábricas para ayudar a conseguir el paso del TLC en el Congreso de Estados Unidos, fue muy poco lo que se hizo para limpiar las maquiladoras eructoras de toxinas, las ciudades y cuencas de los ríos notoriamente contaminadas o los campos agrícolas rociados con plaguicidas. Además, los fondos disponibles para programas ambientales seguían siendo extraordinariamente bajos. También las leyes, aunque bien intencionadas, eran ineficaces, dada la facilidad y tradición de los sobornos corporativos. Programas bilaterales como el Plan Ambiental Integrado para la Zona Fronteriza Mexico-Norteamericana (IBEP) y la Comisión Internacional de Aguas y Límites (IBWC) carecían de personal suficiente y eran ineficaces.

De acuerdo con un informe de 1996 de la U.S. Government Accounting Office (GAO), la contaminación en las áreas de la frontera de México y Estados Unidos aumentó después del TLC. Otros numerosos documentos confirmaban el juicio previo de la American Medical Association de que la zona fronteriza era "una letrina virtual y un campo de cultivo para enfermedades infecciosas". Un estudio del National Toxics Campaign Fund concluyó en 1991 que las maquiladoras "habían estado convirtiendo la frontera [mexico-norteamericana] en un Canal Amoroso de 3 000 kilómetros". A lo largo de ambos lados de la frontera, tasas por encima de la media de hepatitis, cáncer de hígado, lupus, enve-

[25] Salinas declaraba que los fondos adecuados para hacer obligatorio el cumplimiento de los reglamentos ambientales sólo podrían presupuestarse una vez que se superase el problema de la deuda externa; que la economía se hallaba en una fase de crecimiento sostenido, y que el déficit presupuestal y el desequilibrio de la balanza estaban siendo corregidos. Zedillo siguió actuando de acuerdo con las mismas premisas.

nenamiento por mercurio, polio, tuberculosis y cólera eran atribuidas a los sistemas de drenaje inadecuados y a la contaminación de las maquiladoras.[26]

General Motors (GM), el mayor empleador de México en el área manufacturera, y Stepan Chemicals de Matamoros fueron acusados de arrojar xileno al medio ambiente por varios miles de veces más que el nivel "tolerable" asumido. En ambos lados de la frontera entre Matamoros y Brownsville apareció la rara enfermedad destructora del cerebro anencefalia (bebés que nacen descerebrados). Las mujeres de muchas maquiladoras de productos electrónicos seguían manejando materiales tóxicos sin protección adecuada.

Las mujeres y familiares que vivían en los suburbios colindantes con las plantas maquiladoras de la zona fronteriza organizaron innumerables protestas contra la contaminación de las maquiladoras. Muchas de ellas se negaban a salir de sus casas, exigiendo por el contrario que las empresas contaminantes se mudaran a otro lugar o por el contrario que limpiaran sus sistemas. Numerosas empleadas de maquiladoras se quejaron de que cuando protestaban dentro o cerca de las plantas eran despedidas.

Los pequeños grupos ambientales de México se multiplicaron en los años ochenta y principios de los noventa. Para mediados de los noventa, muchos de ellos se habían agrupado en redes como el Pacto de Grupos Ecológicos y la Federación Conservacionista Mexicana. El poeta ecologista Homero Aridjis del Grupo de los 100 se quejaba de las potencias extranjeras que "toman nuestra madera y nuestro petróleo y nos traen desechos tóxicos". El Grupo de los 100 prevé la total destrucción de la selva Lacandona de Chiapas para dentro de quince años debido a la creciente actividad ganadera y militar que se da en esa zona.[27]

La gente de México, en particular los indígenas y las mujeres, ya habían iniciado acciones de protesta medioambientales mucho antes del TLC. Prosiguieron sus movilizaciones en los noventa. Por ejemplo, en febrero de 1996, unos 10 000 indios chontales y campesinos de Tabasco bloquearon sesenta pozos petroleros durante diez días para protestar por la destrucción llevada a cabo por Pemex de 140 000 hectáreas de sus tierras y para exigir compensación. Tropas del ejército fueron enviadas a la zona para restablecer los trabajos de perforación y allí se quedaron. Aproximadamente por esa misma época, indios nahuas

[26] Una investigación al azar de fábricas estadunidenses en México, conducida en 1992 por la General Accounting Office del gobierno de Estados Unidos, encontró que todas ellas violaban las leyes de protección del medio ambiente. Arizona tenía tasas de hepatitis 20 veces superiores al promedio nacional de Estados Unidos; El Paso County, en Texas, tenía tasas de tuberculosis que duplicaban el promedio nacional. El 12 de julio de 1997, ABC News informó acerca de brotes de cólera, tifoidea y polio en el Imperial Valley de California. Plaguicidas de las agroindustrias gigantes del valle y la contaminación debida al mal servicio de drenaje de Mexicali, Baja California, habían contaminado el New River que fluye por ambos países. El New River estaba más contaminado que antes del TLC, cuando ya se habían presentado quejas.

[27] Cita de Aridjis en NACLA *Report on the Americas* 30, núm. 4 (enero-febrero de 1997), p. 30. La crisis de la selva Lacandona aparece descrita en *NewsPak* núm. 105 (27 de enero-9 de febrero de 1997), Human Rights Documentation Exchange, P.O. Box 2327, Austin, TX 78768.

ocuparon el pueblo de Tepoztlán en las cercanías del centro turístico de Cuernavaca, Morelos, y a pesar de las accidentes sufridos, gobernaron la ciudad hasta que una gran sociedad mexicana de bienes raíces suspendió su construcción destructiva para el medio ambiente de un lujoso campo de golf. La prensa lo llamó "la guerra del golf".[28]

Guiones alternos

Aunque servía a los intereses del capital monopólico, en algunos sentidos el TLC fue un tiro por la culata para las élites dirigentes de las tres naciones. Primero, los resultados negativos pronto resultaron muy claros para cualquiera. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno reconoció que sus cifras sobre pérdidas de empleo en relación con el TLC solamente contaban a los trabajadores que probadamente recibían asistencia de ajustes por el TLC, y que muchos trabajadores no se molestaban en inscribirse por el fracaso de algunos de los programas de entrenamiento laboral. Los cálculos no gubernamentales de las pérdidas de empleo relacionadas con el TLC llegaban hasta 700 000. Las áreas de confección de vestidos, electrónica y repuestos para automóviles llevaban la peor parte. Los afroamericanos, los latinos y las mujeres eran quienes en cantidad desproporcionada soportaban pérdidas de empleo y problemas ambientales relacionados con el TLC. Un informe del Departamento de Comercio y del Departamento del Trabajo, dos agencias gubernamentales del todo favorables al TLC y al GATT, advertían que la sociedad estadunidense se estaba polarizando entre "poseedores y desposeídos", y que la reciente brecha salarial entre trabajadores blancos y no blancos muy probablemente significaría el fin de la estabilidad social y la democracia en Estados Unidos de no tomarse acciones que lo remediaran.[29]

Además, numerosos informes indicaban que el TLC aumentó el tráfico de drogas porque los narcotraficantes utilizaban la compra de maquiladoras o utilizaban sus almacenes. Los funcionarios aduanales daban trato preferente a los embarques de las maquiladoras. Este aumento del comercio facilitaba también un aumento en el contrabando. Igualmente importante era que la liberalización del TLC de los flujos de capital facilitaba en gran medida el lavado de dinero por parte de los bancos, muy necesitados de dinero líquido fácil para cubrir las carteras de créditos vencidas y los préstamos incobrables.

[28] Véase David V. Carruthers, "Indigenous ecology and the politics of linkage in Mexican social movements", *Third World Quarterly* 17, núm. 5 (diciembre de 1996), pp. 1007-1028; John Ross, "Zapata's children: defending the land and the human rights in the countryside", *NACLA Report on the Americas* 30, núm. 4 (enero-febrero de 1997), pp. 30-35.

[29] *New York Times*, 3 de junio de 1994. Las conclusiones sobre las industrias estadunidenses y la composición étnica y de género de los empleados afectados más negativamente por el TLC se basan en datos recopilados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y han sido ampliamente reproducidos en la prensa.

Encuestas realizadas en las tres naciones mostraban un sentimiento contra el TLC cada vez mayor. En 1997 el Congreso rechazó que el presidente Clinton tuviera "autoridad *fast track*" para extender el TLC al resto de América Latina (menos Cuba) en el propuesto FTAA. Ese mes de noviembre cerca de 40 delegados de veinte países viajaron a San Francisco, California, para asistir a la Conferencia del Hemisferio Occidental contra el TLC y las Privatizaciones. La reunión fue convocada para oponerse a la agenda de libre comercio del TLC y del APEC, así como a los propuestos FTAA y MAI. La declaración final de la conferencia llamaba al fortalecimiento del sindicalismo en el nivel mundial.

Una reunión internacional similar se celebró en Santiago de Chile en abril de 1998. Se proclamó como "Cumbre de los Pueblos". Presentó alternativas al FTAA que fueron discutidas en la "Cumbre de las Américas" por los máximos dirigentes de los países del hemisferio (menos Cuba). La contracumbre, a la que no se dio publicidad, agrupó a 100 de los principales líderes laborales, incluyendo a los de AFL-CIO y del Canadian Labor Congress (CLC). La CTM de México envió delegados a la "Cumbre de los Pueblos" modificando aparentemente su anterior apoyo al TLC y tratando de ponerse a la altura de los sentimientos contrarios al TLC de los trabajadores mexicanos representados por la rival de la CTM recién fundada, la Unión Nacional de Trabajadores. La contracumbre exigió que cualquier acuerdo comercial futuro fuese sometido a plebiscitos nacionales.

Entre tanto, en la cumbre oficial, los estadunidenses partidarios del libre comercio hicieron saber a los funcionarios sudamericanos que habían sido engañados al firmar en 1995 un pacto de cooperación de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El presidente Clinton trató de asegurar a los otros jefes de estado, todos ellos partidarios del libre comercio, que la resistencia del Congreso de Estados Unidos al *fast track* no eliminaría el papel de Estados Unidos para crear el FTAA.

Al igual que los participantes en la contracumbre, muchas organizaciones laborales, ambientales y de mujeres de México, Estados Unidos y Canadá venían promoviendo desde hacía tiempo el "comercio justo" en vez del "libre comercio". Algunas habían establecido organizaciones comerciales alternas de persona a persona. Todas ellas eran partidarias de guiones alternos al TLC y al FTAA para el hemisferio occidental. Un guión alterno típico incluía lo siguiente:

- remplazar o redactar de nuevo los pactos de libre comercio existentes por un programa de desarrollo continental que insista en la seguridad laboral para todos, salarios decentes y la armonización hacia arriba en vez de hacia abajo de los salarios (por medio de la elevación de los niveles de vida mexicanos y de los demás países latinoamericanos a los niveles de Estados Unidos y Canadá);
- eliminar las políticas de impuestos y aranceles que ayudan a las transnacionales a cambiarse a nuevos lugares;
- sustituir los préstamos condicionales a América Latina basados en la privatización y otros objetivos corporativos por préstamos incondicionales

dispuestos para llevar la prosperidad económica a todos, independientemente del sistema económico de cada nación;
- incluir el libre comercio para Cuba y otras naciones bloqueadas, en vez de usar los bloqueos económicos para matar de hambre a pueblos cuyos sistemas económicos o políticos no agradan a Estados Unidos;[30]
- garantizar a todos los trabajadores sus derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores inmigrantes, de las minorías no blancas y de las mujeres, y proteger el derecho a sindicalizarse libremente así como el derecho de huelga;
- mejorar e imponer medidas de protección ambiental;
- enfrentar la cuestión de la demanda estadunidense y europea de drogas (la causa principal del narcotráfico) y enfrentar la corrupción de las fuerzas encargadas de imponer la ley.

El colapso económico

Las tasas de inflación anuales de México de más del 100% en los últimos años de la década de los ochenta había decrecido a menos del 10% para 1994. Pero el desequilibrio en la balanza de pagos de México —empeorado por la disminución de la mayoría de las barreras comerciales que aún quedaban en anticipación del TLC— había crecido vertiginosamente. Esto dejó a México con un déficit de cuenta corriente muy peligroso de cerca de 25 mil millones de dólares para fines de 1993, y que en los primeros nueve meses de 1994 creció en cerca de 10 mil millones. Anticipando una crisis, muchos capitalistas empezaron a enviar su dinero al extranjero ("capital tránsfuga").

En el primer año del TLC, la asombrosa suma de cerca de 100 mil millones de dólares de nuevas inversiones extranjeras directas (IED) se abalanzaron sobre México. Una parte era para comprar infraestructura privatizada o para establecer maquiladoras, pero la mayoría, como en el pasado reciente, consistía en fondos especulativos —acciones, bonos y similares, fácilmente transferibles de nuevo fuera de México con sólo tocar unas cuantas teclas de las computadoras. En un sólo día promedio, los mercados de divisas internacionales movían mil millones de dólares. La misma transferencia instantánea estaba disponible para los propietarios mexicanos de los capitales repatriados que finalmente regresaron cuando México "se recuperó" de su crisis de quiebra nacional de 1982, que por su parte fue consecuencia de la excesiva confianza en la IED y del endeudamiento con las altas finanzas del imperio.

En todo el mundo, en la era de las economías de libre mercado y del libre comercio, las inversiones de cartera se movilizaban fuera de la IED en nuevas

[30] Canadá, México y la Unión Europea (UE) aprobaron una ley que hace ilegal para sus ciudadanos el obedecer la Ley Helms-Burton de Estados Unidos que endureció el bloqueo contra Cuba impidiendo que las empresas que venden productos o negocian con Cuba puedan comerciar con Estados Unidos.

instalaciones productivas.[31] En el caso de México, los inversionistas extranjeros especulaban con el país y el TLC. Muchos de ellos abrieron las llaves de salida cuando resultó obvio que el ejército no sería capaz de eliminar a los zapatistas y cuando el candidato presidencial Colosio fue asesinado a tiros en marzo de 1994. En cuestión de semanas sacaron del país 10 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos prestó a México 6 mil millones para tratar de detener la hemorragia económica. Las altas tasas de interés de Estados Unidos también extraían al capital fuera de México.

En 1994, el valor de las acciones mexicanas en poder de Estados Unidos cayó en 20 mil millones de dólares, algo que los partidarios del TLC nunca habían previsto. El gobierno mexicano emitió unos 30 mil millones de Tesobonos en dólares a corto plazo, para cubrir la fuga de capitales, pero pronto resultó obvio que no sería capaz de honrar estas obligaciones para la fecha de vencimiento de la mayor parte de ellas (primavera de 1995). La megadeuda de México de 110 mil millones aumentó bruscamente a causa de los nuevos endeudamientos externos.

Ya desde mediados de 1994, los "enterados" hablaban en privado de una probable devaluación del peso exageradamente sobrevalorado, la posible quiebra del mercado accionario y de una "fuga de capitales" masiva al estilo de la de los años ochenta. Sin embargo, la imagen pública de México seguía siendo la del "milagro del TLC", incluyendo un peso fuerte con respecto al dólar. El presidente Salinas no deseaba devaluar el peso en medio de la campaña para una elección presidencial que el PRI necesitaba desesperadamente ganar. Después de las elecciones aún seguía dudando, no queriendo arriesgar su posible elección para ser presidente de la Organización Mundial de Comercio.

Posponer lo inevitable sólo consiguió que el colapso económico de México, cuando por fin se produjo, fuese aún mayor. El nuevo presidente, Zedillo, tomó posesión el 1º de diciembre. Luego asistió a la reunión de la "Cumbre de las Américas" celebrada en Miami con la asistencia de los primeros líderes de los gobiernos del hemisferio occidental (menos Fidel Castro de Cuba) para ayudar a impulsar el libre comercio del imperialismo y la agenda neoliberal. En la "cumbre", Estados Unidos presentó a México como el perfecto modelo de reforma económica y de sabiduría librecomercial.

Diez días más tarde, Zedillo se presentó en la televisión nacional para anunciar que el peso se devaluaba radicalmente. Para fines de ese año el peso era una sombra de su antiguo ser y el capital salía hacia afuera más deprisa que nunca antes, aunque gran parte del mismo empezó a regresar en 1995 para aprovechar el correspondiente colapso de los salarios de los trabajadores mexicanos. Por ejemplo, GM abrió una nueva planta en México para construir 100 000 automóviles Chevrolet por año.

Reconociendo que el colapso económico de México estaba empezando a disparar un pánico financiero mundial poniendo en peligro al neoliberalismo en

[31] Véase Wally Seccombe, "Labour's capital circulating in cyberspace", *Socialist Register* 1999 (Suffolk, Merlin Press, 1999).

todo el mundo por el fracaso manifiesto de su modelo líder, el presidente Clinton, sin el consentimiento del Congreso, y el FMI y Canadá, con la renuente ayuda de Europa, salvó la economía de México con un paquete de préstamo de emergencia de 52 mil millones de dólares. A cambio, México aceptó someter sus presupuestos a la supervisión del FMI y cortar abruptamente los gastos sociales. El presidente Clinton justificó la participación de Estados Unidos en el salvamento como un asunto de "seguridad nacional". Como colateral para la porción de Estados Unidos, México tuvo que depositar sus ingresos por el petróleo en el Federal Reserve Bank de Nueva York. México utilizó los dineros de Estados Unidos para redimir los Tesobonos, muchos de los cuales estaban en posesión de inversionistas estadunidenses. Puesto que los nuevos préstamos eran para pagar los antiguos, México se encontró aún más endeudado que nunca antes, con su petróleo mantenido como rehén por el gobierno de Estados Unidos.

A causa de haber caído el peso en diciembre de 1994 y enero de 1995 a menos de la mitad de su valor anterior, los bancos recientemente privatizados de México se vieron cargados con un gran volumen de deudas sin valor. Por lo menos la mitad de los bancos quebraron, mientras que los más grandes fueron rescatados por el gobierno mexicano mediante una misión de salvamento que para mediados de 1997 había costado ya 40 mil millones de dólares y costaría todavía más en lo sucesivo.

El PIB de México en 1995 fue *menos* 6.9%, lo que supuso una verdadera catástrofe económica. Entre 1993 y 1996, unos 2.5 millones de mexicanos perdieron sus empleos. Los salarios cayeron en picada al renovarse la inflación, especialmente en los costos de los bienes de subsistencia básicos. Los empleados de las maquiladoras llevaban a sus casas sólo de 25 a 35 dólares por semana, contribuyendo al auge de las nuevas plantas maquiladoras.

El fracaso del perfecto modelo mexicano representó un severo retroceso para las autoridades gobernantes tanto de México como de Estados Unidos. La lección de México parecía obvia: el neoliberalismo y los pactos comerciales como el TLC eran fatales. El sociólogo canadiense Wally Seccombe resumió como sigue el colapso económico mexicano de 1994-1995:

> Las multinacionales no drenaron súbitamente la economía mexicana de capital líquido en el espacio de unos pocos días. Lo hicieron los inversionistas viajeros, los mismos que, un año o dos antes, se habían abalanzado sobre México, al acecho de una puerta de entrada a América Latina [...] Sin embargo, cuando Wall Street decidió aparecerse, esta historia cambió de la noche a la mañana. México siguió siendo un atrasado tradicionalista gobernado por una oligarquía feudal corrupta cuyos jefes de partido estaban actuando ahora como señores de la mafia en una lucha por el mando, aprovechándose del tráfico de drogas y quitando la esperanza de recibir contratos a los políticos que les desagradaban [...] El pueblo mexicano puede ahora decirle a un mundo "hambriento de capital": tengan cuidado con los ahorros de nuestros vecinos del norte —son líquidos e inquietos, y giran alrededor del mundo por el ciberespacio en busca de las utilidades más altas, notoriamente miopes y pro-

clives a moverse en manadas, como una turbamulta dominada por el pánico en busca de salidas cuando alguien grita fuego.[32]

México intentó levantarse persiguiendo de forma todavía más agresiva la misma estrategia de "plataforma exportadora" neoliberal, de libre comercio, que precisamente le había hundido. El bajo costo de los artículos producidos en México contribuyó al excedente comercial en 1995. Más de la mitad de este excedente provino de las exportaciones de las maquiladoras. Empresas de electrónica, partes de automóviles, maquinaria e instrumentos de precisión representaron el 67% de las exportaciones, casi todas en comercio interno de empresas estadunidenses. La inversión extranjera empezó a regresar, el 60% de ella en 1996 en plantas industriales, la mayor parte en maquiladoras. Ayudando al regreso de la inversión extranjera, el presidente Zedillo anunció un primer pago de 12.5 mil millones de dólares del préstamo de emergencia de Estados Unidos que era parte del rescate de 1994-1995.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el PIB de México aumentó un 5.1% en 1996, pero esto sólo reflejaba los aumentos en los precios del petróleo y las exportaciones de las maquiladoras, no una "recuperación económica". Las exportaciones incrementadas ocultaban un mercado doméstico estancado, en donde las ventas al menudeo estaban en niveles inferiores a los de antes de la crisis. El PIB creció en la misma forma engañosa en 1997 y principios de 1998, antes de que los precios de petróleo sufrieran otra caída en picada. Edur Velasco Arregui observó: "Quince años después de que la crisis estallara en 1982, el ingreso per cápita de México era 12% más bajo en términos del acceso de la población a bienes y servicios, sin tomar en cuenta la degradación del medio ambiente."[33]

El FZLN y el EPR

Igual que el PLM y los magonistas de la Revolución mexicana, cuyos colores negro y rojo adoptaron, los zapatistas eran al mismo tiempo nacionalistas e internacionalistas. Haciendo buen uso de Internet, organizaron dos conferencias que contaron con nutrida asistencia y a las que llamaron "Encuentro Intercontinental por la Humanidad contra el Neoliberalismo", primero en 1996 en Chiapas y un año más tarde en Madrid, España.

Los planificadores militares estadunidenses se preocuparon por el éxito de los zapatistas en su utilización de Internet. En palabras de un libro publicado en 1998 por la conservadora Rand Corporation con base en California:

La *Netwar* —un enfoque global del conflicto social orientado a la información— [...] a menudo implicará a fuerzas no estatales, paramilitares e irregulares [...] De hecho,

[32] *Ibid.*

[33] Véase Velasco Arregui, "Commentary".

> probablemente se necesitarán redes informáticas para luchar contra otras redes informáticas, de manera semejante a como, en épocas anteriores, hacían falta tanques para luchar contra tanques [...] Si Estados Unidos no se ajusta a unidades de maniobra más pequeñas, nuestros grandes ejércitos de tierra y nuestras unidades navales serán vulnerables ante los ataques de enemigos más despiertos.[34]

En Internet, los zapatistas se describían a sí mismos como parte de una nueva "Internacional de la Esperanza". Grupos de apoyo de los zapatistas surgieron en Europa, Estados Unidos y Canadá. En 1994, amigos de los zapatistas organizaron la "Comisión Nacional para la Democracia en México", una red de treinta grupos de base comunitaria. Aparecieron muchos otros grupos seculares y religiosos, locales y regionales de Estados Unidos que llevaban a cabo labores de solidaridad con los zapatistas. El apoyo internacional ayudó a los zapatistas no sólo política sino también económicamente. En la selva Lacandona del oriente de Chiapas y de las montañas y barrancas circundantes, los zapatistas empezaron a construir nuevas escuelas y clínicas, cooperativas agrícolas y comerciales, e instalaciones para bombear y almacenar el agua de los arroyos.

Desde agosto de 1994 hasta febrero de 1995, los zapatistas celebraron tres convenciones democráticas nacionales para promover la organización de la "sociedad civil" a través de "comités cívicos de diálogo". Miles de personas asistieron a las dos primeras celebradas en la selva Lacandona. Pidiendo una "nueva sociedad plural, tolerante, inclusiva, democrática, justa y libre [...] en una nueva nación", la directiva del EZLN anunció su intento de crear una nueva fuerza política, el FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional). No llamaban al FZLN un partido político sino "una fuerza política creada por los comités cívicos de diálogo" que "no aspira a tomar el poder", que "crece desde la base que es su fuerza social", y que "está dispuesta a dar dirección a través de la obediencia".

La tercera convención democrática nacional tuvo lugar en el estado de Querétaro justamente al norte de la ciudad de México. Esa misma semana Querétaro hospedó también la primera Convención Nacional de Mujeres. Pocos días más tarde, el 9 de febrero de 1995, el presidente Zedillo ordenó el arresto de los principales líderes zapatistas. Unos 60 000 efectivos del ejército invadieron las áreas de Chiapas controladas por los zapatistas, incluyendo la selva Lacandona. Destruyeron casas, violaron mujeres, derramaron insecticidas sobre las reservas de alimentos de los habitantes y mataron a sus animales. La invasión del ejército saboteó eficazmente las conversaciones de paz.

Decenas de miles de mexicanos se unieron para protestar contra la brutal militarización del conflicto. Documentales de video mostraban a grupos de mujeres y niños indígenas arrojando piedras contra los tanques y los Mac-1 Armored Personnel Carriers de la Chrysler que los invadían, gritando al mismo tiempo insultos a los soldados, llamándolos traidores a su propio pueblo. Las escenas,

[34] John Arquilla y David Ronfeldt, *In Athena's Camp: preparing for conflict in the information age* (Santa Mónica, Rand, 1998), pp. 6, 16 y 18 de la versión previa a la publicación.

que incluían a cientos de mujeres y niños desarmados enfrentándose solos al poder militar del estado, nunca fueron difundidas en Estados Unidos, en donde los medios de comunicación de masas prefieren el punzante simbolismo de escenas de más simple explicación, tales como la tan difundida fotografía de un muchacho solitario enfrentándose a un tanque en la Plaza de Tienanmen en 1989.

Antes de la invasión, el EZLN controlaba gran parte del tercio oriental de Chiapas, pero después de la invasión controlaba menos. Por otra parte, su apoyo popular se había extendido por todo el estado y más allá. Además, el ejército resultó incapaz de capturar a los dirigentes del EZLN o de sostener una batalla decisiva con las tropas zapatistas. Este fracaso del ejército, junto con el constante apoyo mostrado a los zapatistas por la mayoría de la población de México, condujo a la publicación por el Congreso de una "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz con Dignidad en Chiapas" el 11 de marzo de 1995. La ley obligaba al gobierno a frenar el despliegue de tropas y a emprender un diálogo con los zapatistas.

En agosto y septiembre de 1995, los zapatistas y sus partidarios de todo México organizaron y llevaron a cabo un "Plebiscito por la Paz y la Democracia" nacional e internacional, convocando a "un nuevo orden internacional basado en la democracia, la libertad y la justicia y gobernado por ellas". El plebiscito fue un modelo de la gente organizando sus propias elecciones y votando en forma abrumadora por la paz y la democracia, lo que obligó al gobierno a regresar a la mesa de la paz. En octubre, el EZLN y el gobierno de Zedillo estaban negociando seriamente los términos de la paz. La Comisión de Mediación y Pacificación (Cocopa), multipartidista de miembros del Congreso, supervisaba las conversaciones.

Durante el periodo posterior a 1994, el gobierno impulsó su estrategia de doble cara de intimidación militar y de división de las comunidades campesinas en Chiapas. Su "guerra de baja intensidad" (represión prolongada tendiente a debilitar la resistencia guerrillera y sus bases populares de apoyo) incluía el uso de diversas unidades terroristas paramilitares. El "Plan de Campaña Chiapas 94", escrito por un general del ejército que, junto con otra docena de oficiales mexicanos, se graduó en la U.S. Army School of the Americas, pedía el "entrenamiento y apoyo de fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares".[35] Los paramilitares mexicanos ejecutaban "desapariciones", asesinatos políticos y matanzas en pequeña escala no sólo en Chiapas sino también en otros estados.

Los jóvenes de Chiapas, sin tierra que trabajar, empleos, ni dinero, eran fáciles reclutas de fuerzas paramilitares. Los jóvenes recibían entrenamiento a cargo de miembros de las fuerzas de seguridad de México, que por su parte permanecían ociosos, o vigilaban ciertas áreas, mientras que los paramilitares ejecutaban sus actos de terrorismo: 500 asesinatos en 1997 solamente, elevando el número de víctimas en Chiapas a 1 500 desde el levantamiento de 1994. El

[35] Citado en *NACLA Report on the Americas* 31, núm. 5 (marzo-abril de 1998), p. 12.

sociólogo colombiano Ricardo Vargas Meza llamó a eso "la privatización" de la contrainsurgencia del estado.[36] Ofrecía al gobierno mexicano una oportunidad para culpar de la violencia a grupos que no podía controlar y para asegurar a los inversionistas extranjeros que "investigaría" las violaciones a los derechos humanos y los pondría bajo su control. También contribuía al mito racista de que la violencia en Chiapas era una especie de feudo familiar entre "indios" o "salvajes". Algunos de los paramilitares de Chiapas eran las antiguas "guardias blancas" de los grandes rancheros y barones madereros, y muchos de ellos tenían el respaldo *público* del gobierno del estado de Chiapas.

Sin dejar de favorecer a los intereses ganaderos, madereros, mineros y de gas natural y petróleo de Chiapas, el gobierno mexicano hablaba acerca del "desarrollo económico" de la región. Con apoyo del Banco Mundial, anunció planes para estimular el "desarrollo sustentable", incluyendo plantaciones comerciales de árboles y ecoturismo. Las mundialmente famosas ruinas mayas de Palenque, hábitats naturales de selva pluviosa y los depósitos de petróleo, gas natural y uranio estaban situados, al menos en parte, dentro de las zonas de Chiapas controladas por los zapatistas. El gobierno emprendió un plan para atraer a más maquiladoras hacia una más vasta región de Chiapas principalmente para la manufactura de textiles. El plan consistía en crear 30 000 nuevos empleos en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, con inversión básicamente de Estados Unidos y Hong Kong.[37]

Por otra parte, el gobierno empezó a instrumentar su Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Este programa incluía un complejo industrial que ya estaba refinando la mayor parte del petróleo crudo mexicano y la mayor parte de sus productos petroquímicos. El objetivo final del programa consistía en remplazar el anticuado y demasiado estrecho canal de Panamá, sobre el cual Panamá debía recuperar la soberanía en el año 2000, con una ruta transoceánica a través del istmo de Tehuantepec. Esta nueva ruta sería principalmente un "puente terrestre" utilizando el Ferrocarril Transístmico (administrado por cuatro compañías estadunidenses y una canadiense) y nuevas autopistas en construcción para unir el puerto de Coatzacoalcos y el río Coatzacoalcos en el lado del golfo con el puerto de Salina Cruz en el Pacífico. El programa del istmo amenazaba el equilibrio ecológico de los dos millones de hectáreas de la selva pluviosa de las Chimalapas, conocida como la "reserva de oxígeno" de México. Los dos millones de ciudadanos del istmo, en su mayoría indios de seis diferentes grupos, empezaron a organizarse en contra del proyecto.[38]

[36] *Ibid.*, p. 6; *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 2 (16 de enero de 1998).

[37] *La Jornada*, 11 de diciembre de 1996, citado en *Mexican Labor News Analysis*, 16 de diciembre de 1996.

[38] Marcos, "Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial", *Le Monde Diplomatique*, junio de 1997, p. 20, citando a Ana Esther Ceceña, "El istmo de Tehuantepec: frontera de la soberanía nacional", *La Jornada del Campo*, 28 de mayo de 1997; *Multinational Monitor*, noviembre de 1997, pp. 6-7; Nancy Nusser, "Mexico may build overland route to river canal", latinolink.com/biz/1005bist.htm; Ross, "Zapata's children".

El 1º de enero de 1996, segundo aniversario de su levantamiento, los zapatistas emitieron la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En ella se comprometían a "continuar la lucha y no descansar hasta que la tierra sea nuestra". La declaración se refería a los escándalos que rodearon los años de Salinas (de narcotráfico, asesinatos políticos y planes de privatización para la seguridad social) como "la democratización de la miseria". La privatización de los bancos estatales y otras medidas neoliberales representaban "la unidad entre el sistema del partido de estado y el dinero". La declaración concluía diciendo que "gobierno y crimen son actualmente sinónimos y equivalentes".

Tras muchos meses de interrumpidas conversaciones de paz, en febrero de 1996 los representantes del gobierno firmaron los Acuerdos de Derechos y Cultura Indígenas en la ciudad montañosa de San Andrés Larráinzar, Chiapas (rebautizada San Andrés Sakam Ch'en). Estos acuerdos garantizaban la mayoría de las demandas zapatistas de autonomía política y cultural para las cincuenta y seis naciones indígenas de México.

El 28 de junio de 1996, individuos enmascarados de una fuerza guerrillera que se autonombraba Ejército Popular Revolucionario (EPR) se mostraron en un mitin público al que asistía Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y reclamaron el derrocamiento del gobierno mexicano. La ocasión era el primer aniversario de una matanza ejecutada por policía motorizada de un autobús de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) cerca de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero. La matanza fue grabada en video y mostrada en la televisión mexicana, estremeciendo a toda la nación. La policía había matado a diecisiete personas y herido a veintitrés. La matanza se produjo poco después de que un corrupto gobernador del PRI firmara un contrato de 10 millones de dólares con la gigante empresa maderera estadunidense Boise Cascade, un negocio al que la OCSS se oponía por considerarlo una amenaza contra el ya dañado medio ambiente a lo largo de la Costa Grande.

La gente se preguntaba si el EPR conseguiría el apoyo popular y se convertiría en una nueva amenaza para el corrupto estado en Guerrero, de la misma forma como lo había hecho el EZLN en Chiapas, y si iría a producir cambios en las políticas mexicanas como lo hicieron los zapatistas. En agosto, el EPR llevó a cabo algunos ataques bien coordinados contra instalaciones militares y policiacas en seis estados en un mismo día. También realizó acciones de propaganda en Chiapas, provocando que el subcomandante Marcos publicara una carta a los soldados del EPR criticando su presencia en Chiapas porque perjudicaba el proceso de paz.[39]

La principal base de operaciones y apoyo campesino del EPR estaba en Guerrero, en donde se había venido organizando clandestinamente ya desde los años setenta, cuando el ejército mató a los líderes guerrilleros Lucio Cabañas,

[39] Para el texto completo, véase *La Jornada*, 4 de septiembre de 1996, y, en inglés, *International Viewpoint*, septiembre de 1996. En noviembre, el EPR realizó nuevas incursiones en tres estados, incluyendo un ataque contra un cuartel militar en las afueras de la ciudad de México (*New York Times*, 2 de noviembre de 1996).

del Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez Rojas, de la Alianza Cívica de Guerrero. El EPR tenía también fuerza en Oaxaca y el área triestatal de la Huasteca cerca del golfo de México. Su vocero político era el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), una asociación de 15 organizaciones que incluía al Partido Revolucionario Obrero Clandestino y Unión del Pueblo (PROCUP), un fanático grupo maoísta frecuentemente comparado con Sendero Luminoso de Perú. El PDPR, al igual que el EPR, tenían seguidores principalmente en Guerrero, pero también en algunos otros estados. El Frente Amplio para la Creación de un Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), una coalición de organizaciones de pobres radicales y de ultraizquierdistas que se habían separado de la Convención Democrática Nacional de los zapatistas, estaba también cerca del EPR.[40]

El mismo patrón de "guerra sucia" que se había visto en Chiapas volvió a ejecutarse en Guerrero, en donde no sólo los sospechosos de ser "simpatizantes" del EPR, sino también muchos activistas del PRD fueron asesinados a tiros. De hecho, las violaciones de los derechos humanos fueron incluso más frecuentes en Guerrero que en Chiapas. El ejército despachó cerca de 40 000 efectivos a Guerrero. Tanto en Chiapas como en Guerrero, y en cierto grado también en los estados vecinos, el gobierno mexicano distribuyó dinero y recursos para formar grupos campesinos opuestos a las guerrillas. Estos campesinos se volvieron dependientes de las ayudas del gobierno y vieron sus comunidades socavadas por la prostitución y el alcohol que acompañaba la presencia de los soldados.

A principios de 1997 el presidente Zedillo rehusó firmar o dar curso a los acuerdos de San Andrés. Aparentemente temía las posibles demandas indígenas de control sobre los recursos de Chiapas: petróleo, uranio, madera y energía hidráulica. A menudo los zapatistas habían afirmado su creencia en el control de los recursos por parte de los pueblos indígenas en contra de la idea de que "la tierra pertenece a quienes la compran". Sus "simpatizantes" ya habían establecido y puesto a funcionar treinta y ocho municipios autónomos en las tierras altas, cañones y bosques de Chiapas.

En respuesta a la traición del presidente Zedillo a los acuerdos de San Andrés, unas cuantas docenas más de comunidades indígenas y campesinas en Chiapas y otros estados empezaron a establecer "municipios autónomos" de autogobierno. El conflicto entre la gente que establecía sus propias formas de gobierno y el PRI se extendió a todo lo largo del norte de Chiapas y de las tierras altas del estado.

Antes de la traición de Zedillo, en el verano de 1996, los zapatistas habían seguido rompiendo el cerco militar organizando una conferencia nacional de la organización de deudores El Barzón, que declaraba contar con un millón de miembros. El EZLN y El Barzón cooperaron para forjar alianzas más amplias con muchos movimientos sociales, ONG, grupos de derechos humanos, grupos feministas y de homosexuales, el PRD y el PRT, e incontables asociaciones religiosas

[40] Para más datos sobre el EPR, véase Georgina Gatsiopolous, "The EPR: Mexico's other guerrillas", *NACLA Report on the Americas* 30, núm. 4 (enero-febrero de 1997), p. 33.

y civiles. La mayoría de estas diversas fuerzas se reunieron en la ciudad de México a finales del verano en una asamblea llamada "La Convergencia".

Ese mismo otoño, un emisario de El Barzón se reunió con representantes del FMI, Wall Street y el gobierno de Estados Unidos, en Nueva York y Washington. Actuando en un tribunal federal mexicano que encontró que los diez mayores bancos de México habían sido privatizados ilegalmente en 1990, intentó sin éxito persuadir a los responsables últimos de las tomas de decisiones sobre el destino de México para que ayudasen a los pequeños deudores a restructurar su deuda de modo que no se vieran obligados a clausurar el sistema bancario mexicano al negarse legalmente a pagar sus deudas.[41]

Los zapatistas ayudaron también a organizar un Congreso Nacional Indígena (CNI), que celebró su primera asamblea nacional en octubre de 1996. Cientos de delegados que representaban a cuarenta y cinco grupos étnicos de veintitrés estados respaldaron los Acuerdos de San Andrés. Proclamaron la plena propiedad de los derechos políticos y humanos de las mujeres, incluyendo su derecho a controlar su propio cuerpo y el número de hijos que deseaban tener. El CNI prosiguió con la movilización de miles de indígenas para marchas de protesta en la ciudad de México y con la conducción de más asambleas nacionales. Era independiente del EZLN.

En el aniversario de la Revolución mexicana, el 20 de noviembre de 1996, un nuevo grupo guerrillero anunció su existencia. Manifestando su solidaridad tanto con el EZLN como con el EPR, el Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) declaró tener su base en el norte de México. Más tarde, las autoridades militares dijeron que el ERPI era un grupo escindido del EPR basado en las comunidades indígenas de Guerrero.

Decadencia del PRI

En forma paralela a estos acontecimientos, el PRI sufrió más reveses en las casillas de votación que fueron hechos posibles por las reformas electorales promulgadas en el verano de 1996. La autonomía del tribunal electoral había aumentado, y los partidos de oposición estaban recibiendo más recursos del gobierno. Como resultado, en las elecciones celebradas en ocho estados en 1996, la oposición al PRI recogió el 52.3% del recuento de votos oficial. El PRI también tuvo malos resultados en las elecciones municipales de ese año. El resultado final fue que el PRI gobernaba sólo en dos de las doce mayores ciudades de México, y el PAN tenía gobernadores en cuatro de los treinta y un estados del país.

El PRI reaccionó ante estas derrotas acelerando nuevas reformas electorales que se hallaban entonces ante el Congreso, aunque dejó intacta la futura supervisión de las elecciones por parte de un organismo electoral independiente. Se sucedieron nuevas defecciones al más alto nivel dentro del PRI. Existía la sos-

[41] *Ibid.*, pp. 14-15, 27.

pecha generalizada de que algunos de los desertores estaban uniéndose al PRD y al PAN anticipando la futura posible pérdida de poder del PRI.

En la 17a. asamblea nacional del PRI en el otoño de 1996, los "dinosaurios" intentaron salvar al buque del PRI a punto de naufragar. Guiaron los votos de la mayoría contra el neoliberalismo, por el "nacionalismo revolucionario" y por cambios en la dirección que impedirían que otro "tecnócrata" compitiera por la presidencia en el 2000. Sin embargo, el PRI muy rara vez sigue sus propias reglas.

Los destinos del PRI siguieron declinando en 1997. Temiendo una derrota electoral en las inminentes elecciones de julio, el PRI y el gobierno de Zedillo lanzaron una calumniosa campaña contra el PRD por su supuesta cooperación con los "partidarios de la violencia", las guerrillas del EZLN, el EPR y el ERPI. Cerca de 9 mil millones de dólares en inversión extranjera entraron al país, convirtiendo a México en el mayor receptor de capital extranjero de entre todos los países sólo detrás de China. Esto era una señal, según decían los portavoces del gobierno, de que el capital extranjero aprobaba las políticas estatales y de que la economía estaba en una fase de rápida recuperación. La Asociación de Banqueros advertía repetidamente que una victoria del PRD conduciría a "una huida masiva de capitales".

La reforma electoral de 1996 había hecho posible que 300 de los 500 escaños en la cámara baja del Congreso, la Cámara de Diputados, fuesen decididos por elección directa. Los otros 200 escaños debían ser distribuidos mediante un complejo sistema de representación proporcional. El PRI había incluido en la reforma una cláusula que a su parecer protegería su poder, la llamada cláusula de "gobernabilidad" que aseguraría una absoluta mayoría para cualquier partido que obtuviera el 42.2% de los votos.

Sin embargo, en julio de 1997 el PRI perdió su control mayoritario de la Cámara. Debía elegirse una cuarta parte del Senado y el PRI perdió decisivamente también allí, consiguiendo sólo doce escaños de un total de treinta y dos. Pero conservó el control del Senado. Por primera vez, la participación de los votantes a mediano plazo superó la abstención: de 52 millones de votantes registrados, el 57% llenaron sus boletas. En la votación para el Congreso, el PRI acabó con un 38%, el PAN 27% y el PRD 26 por ciento. La Cámara recién elegida tuvo una mayoría no priista sin precedentes, formada por 125 miembros del PRD, 122 del PAN, ocho del partido ecologista (el PVEM), y seis del Partido del Trabajo (PT), sumando en total once más que los 239 del PRI. El PAN ganó dos de las cinco elecciones para los gobiernos de los estados. Hubo señales de un fraude en gran escala por parte del PRI en tres estados en los que se las arregló para ganar.

Algo aún más importante fue que, en las primeras elecciones para gobernar la ciudad de México en medio siglo, el aspirante presidencial del PRD Cuauhtémoc Cárdenas logró una victoria decisiva, recibiendo cerca de la mitad de los votos en una carrera multipartidista. El PRI recibió sólo el 25% y el PAN un 15%. La campaña de Cárdenas incluyó mañosos comerciales de televisión notablemente ausentes en sus anteriores campañas presidenciales. Se presentó como un centrista neopopulista, partidario de aumentar la inversión extranjera en

México, la reducción de impuestos, alzas salariales y la conversión de la capital de la nación en un centro financiero mundial. Asegurando al U.S. National Security Council que era un reformista, Cárdenas dijo ante una reunión de banqueros en Nueva York que él no sólo estaba en favor del capitalismo, sino que hasta podría seguir el extremo modelo neoliberal de Chile. Después de la elección, el mercado de valores mexicano tuvo una subida. Voces importantes del gran capital tanto en México como en Estados Unidos celebraban los pasos dados por México hacia la democracia.

Como jefe de gobierno, Cárdenas se encontró con el obstáculo de la tradicional subordinación de las fuerzas de seguridad y de gran parte del presupuesto al gobierno federal y al PRI, así como con la desconfianza que sentían los capitalistas hacia los izquierdistas en su administración. Heredó una deuda citadina de 1.6 mil de millones de dólares, un déficit de viviendas de un millón de unidades y problemas de contaminación atmosférica que empeoraban constantemente. Su prometida mano dura contra la corrupción topó con dificultades, pues la administración saliente destruyó los archivos. Los sindicatos obreros nacionales controlados por el PRI eran más fuertes en la ciudad de México, en donde sus líderes prometían bloquear los intentos de reforma de Cárdenas. Una de sus primeras medidas como gobernante fue nombrar a un oficial de la fuerza aérea retirado como director de la policía, a pesar de los llamados a terminar con el control militar de la fuerza policial de la ciudad. Unos pocos optimistas del PRD pensaban que si todo lo que Cárdenas hiciera fuese solamente encabezar un gobierno limpio durante tres años, eso bastaría para hacerle ganar las elecciones a la presidencia el año 2000.[42]

Los principales resultados de las elecciones de 1997 fueron la derrota del PRI y el surgimiento del PRD como segundo partido más importante de la nación. Al final, el PRI siguió gobernando a México, aunque no con su acostumbrado monopolio garantizado de los puestos de elección. Más aún, las elecciones de 1997 le demostraron al PRI que el gastar grandes sumas, llamar a los oponentes como Cárdenas "traidores" y agredir incluso a grupos no partidistas —como a la coalición de control de las elecciones Alianza Cívica, cuyas computadoras fueron robadas— ya no servía para garantizar las fáciles victorias electorales del PRI.

El presidente Zedillo intentó poner buena cara ante la humillación del PRI en las urnas identificándose con la "generación del 68" partidaria de la democracia. Dijo a la prensa que la democracia "primero ganó importancia en la conciencia nacional en 1968 [...] Nosotros éramos los jóvenes de aquella época que dieron los primeros pasos para reclamar la democracia que México necesita y merece."[43]

[42] La ciudad de México, en 1997, experimentó sólo veintisiete días en los que la calidad del aire fue "buena". Véase *Mexican Labor News Analysis* 2, núm. 22 (5 de diciembre de 1997), y 3, núm. 4 (16 de febrero de 1998).

[43] Véase *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 1 (2 de enero de 1998); *New York Times*, 9 de julio de 1997; Scott Sherman, "Mexico's morning after", *The Nation*, 28 de julio-4 de agosto de 1997, pp. 20-23.

Las frecuentes convocatorias y proclamas nacionales de los zapatistas sobre derechos iguales para las mujeres y los gays y lesbianas dieron especial estímulo a los grupos feministas y gay/lésbicos, muchos de cuyos miembros daban apoyo crítico al PRD en época de elecciones. Una iniciativa zapatista condujo a la formación de la Convención Nacional de Mujeres. Esperanza Brito, editora de la revista *Fem*, declaró en un acto de la convención para honrar a la comandante zapatista Ramona: "La lucha feminista hizo causa común con el EZLN porque es una revolución que no traiciona a las mujeres." Lo mismo podría decirse para el trato dado por los zapatistas a los activistas gays y lésbicos mexicanos. El subcomandante Marcos saludó la elección al Congreso en 1997 de una lesbiana, miembro del PRT, que se presentó bajo la bandera del PRD.

El propio EZLN decidió no participar en las elecciones de 1997 debido a la negativa del gobierno a cumplir los acuerdos de San Andrés y el fracaso de todos los partidos políticos en tratar adecuadamente a los indígenas. El EZLN ridiculizó la promesa de Cárdenas de "librarse de los bordes más cortantes del neoliberalismo" diciendo que caería "en un erizo cuyo abrazo hiere y mata".[44]

De vuelta a Chiapas, los zapatistas desconfiaban con razón del proceso electoral. Las elecciones anteriores allí habían sido totalmente fraudulentas. En las semanas anteriores a las elecciones de julio de 1997, tropas del ejército empezaron a avanzar hacia los reductos zapatistas. Hostigaban a los activistas del PRD. No teniendo más remedio que responder, los zapatistas lo hicieron —el día de las elecciones. Sus partidarios bloquearon los caminos y quemaron las urnas ("salvando al PRI de tener que quemarlas", se burlaron algunos). Entre un tercio y la mitad de las casillas de votación de Chiapas ni siquiera llegaron a instalarse. Los cálculos sobre abstencionismo en Chiapas iban hasta el 80%. El conteo de votos "oficial" de Chiapas, creído por muy pocos, daba al PRI el 49% con el 31% para el PRD.

El 8 de septiembre de 1997 tuvo lugar la más numerosa y más larga marcha de pueblos indígenas jamás vista en la historia de México, encabezada por 1 111 miembros del EZLN y a la que se unieron otros 6 000 indígenas de toda la nación. La marcha de cinco días de duración recorrió 1 200 kilómetros desde San Cristóbal de Las Casas hasta la plaza del Zócalo de la ciudad de México, en donde 200 000 simpatizantes dieron la bienvenida a los exhaustos marchistas. La multitud coreó la demanda del EZLN de cumplir los acuerdos de San Andrés y de retirar al ejército de Chiapas.

Durante la semana siguiente a la marcha tuvo lugar el congreso fundacional del FZLN. Tuvo poca asistencia y no pudo llegar a acuerdos referentes a la dirección, la organización o los puntos programáticos. Basándose en los 300 comités civiles para el diálogo existentes en todo México, el FZLN era difuso, confuso y débil comparado con el ímpetu reformista que se había construido detrás del PRD y las nuevas corrientes democráticas en el sindicalismo organizado.

[44] La cita de Brito es de "Mexico's new Indian movement", *Interhemispheric Resource Center Bulletin* núm. 45 (diciembre de 1996), p. 6. La cita del EZLN es de *Weekly News Update on the Americas* núm. 388 (6 de julio de 1997).

El EPR y sus partidarios civiles de entre el FAC-MLN estaban también en una posición relativamente débil. El FAC-MLN había estado sufriendo una represión militar y policiaca muy severa en Guerrero y otros estados. En mayo de 1997 el ejército invadió y ocupó numerosas de las principales comunidades indígenas de Guerrero, en donde eran fuertes el PRD y el FAC-MLN. Intentando protegerse de nuevos arrestos y asesinatos, algunos líderes del FAC-MLN se presentaron como candidatos del PRD en las elecciones de julio a la Cámara de Diputados: dos de ellos ganaron.[45]

La militarización de la sociedad

Las "fuerzas de seguridad nacional" de México, incluyendo a paramilitares y policía, siguieron asesinando a miembros del PRD: cerca de 300 fueron muertos en 1994-1996 solamente. Campesinos y maestros que simpatizaban con las guerrillas de Guerrero y Oaxaca sufrían igualmente ataques. Amnistía Internacional (AI) censuraba periódicamente a las fuerzas de seguridad mexicanas por arrestar y torturar a campesinos (4 500 campesinos e indígenas estaban encarcelados en 1997).

Los zapatistas habían atraído la atención mundial sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas. En 1996, AI denunció "un patrón creciente" de asaltos sexuales y torturas contra las mujeres en México, particularmente contra las indias monolingües y políticamente activas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno de México afirmó el 1º de marzo de 1996 que México se estaba convirtiendo en "un estado policial". La CNDH criticó "la militarización de la seguridad pública y la eliminación de garantías jurídicas" que estaba "llevándonos a un estado de libertades individuales suspendidas *de facto*". Partes importantes de Chiapas, Tabasco con su riqueza petrolera, Oaxaca, Puebla, Guerrero, y la zona de la Huasteca que abarca partes de tres estados (en donde se decía que había presencia del EPR) estaban ocupadas por el ejército. Los soldados también eran más visibles en ciudades y pueblos a todo lo largo de la nación.

En 1997, la Unión Europea firmó acuerdos comerciales con México para el mejoramiento de su terrible situación en derechos humanos, mientras que AI describía a México diciendo que estaba experimentando "una crisis de derechos humanos". La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas urgió al gobierno mexicano a tomar medidas para acabar con las violaciones de los derechos humanos, especialmente las desapariciones y la tortura. Incluso la secretaria de Estado Madeleine Albright expresó su preocupación por las amenazas de muerte contra los abogados en derechos humanos. El Departamento de Estado, al tiempo que afirmaba que México "generalmente" respetaba los dere-

[45] *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 1 (2 de enero de 1997); *Weekly News Update on the Americas* núm. 383 (1º de junio de 1997).

chos humanos, condenó las acciones militares represivas del gobierno en contra de civiles.[46]

Pero lo peor aún estaba por venir. El 22 de diciembre de 1997, en medio de la época navideña, varias familias se reunieron en una capilla en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, a unos diecinueve kilómetros al norte de San Cristóbal de Las Casas. De repente, una patrulla paramilitar abrió fuego contra ellos. Los que no quedaron muertos en el acto lograron huir, y durante varias horas los pistoleros les dieron caza y los asesinaron a machetazos, incluso arrancando los fetos del vientre de las mujeres embarazadas, una marca de fábrica de los infames "kaibiles" de Guatemala. (Los kaibiles eran una unidad contrainsurgente de élite que supuestamente habría entrenado a cincuenta altos oficiales de México desde el levantamiento zapatista de 1994.) Las autoridades no hicieron nada para parar la matanza que dejó cuarenta y cinco muertos. La mayoría de las víctimas eran indios tzotziles, veintiún mujeres y quince niños. La mayor parte pertenecía a un grupo pacifista llamado "*Las Abejas*" que compartía muchos de los objetivos de los zapatistas.

La matanza se ejecutó sólo cuatro días después de que la delegación del PRI para las conversaciones locales para la paz en Chenalhó hubiera informado a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que había decidido interrumpir el diálogo. La Conai estaba encabezada por el muy respetado obispo Samuel Ruiz, cuyo decisivo papel en el proceso de paz le había ocasionado un atentado contra su vida en el mes de octubre anterior. Parte de la estrategia del PRI en Chiapas durante todo ese tiempo había consistido en atraer a los campesinos lejos de las pocas tierras que aún les quedaban para que así fueran más dependientes de las ayudas del PRI. Diciembre de 1997 era la época del inicio de la cosecha de café en un año en que se esperaba que el café alcanzase altos precios de mercado. Después de la matanza, pocos campesinos se sintieron lo bastante seguros como para ir a cosechar el café. Como resultado, perdieron su única fuente de ingresos.

El gobierno mexicano y el gobierno estatal de Chiapas en un principio negaron cualquier implicación en la matanza de Acteal y culparon a conflictos locales entre indígenas. Más de cuarenta de los supuestos asesinos, incluyendo a un antiguo presidente municipal priista de Chenalhó, fueron arrestados. Investigaciones posteriores implicaron al gobierno del estado y revelaron que oficiales del ejército y la policía habían tenido conocimiento de la matanza mientras ésta se producía pero no habían hecho nada para impedirla. También fueron implicados en los asesinatos un general retirado del ejército y un soldado en

[46] *Mexico NewsPak* núm. 105 (27 de enero-9 de febrero de 1997), citando informes de prensa. Véase también *The Nation*, 22 de diciembre de 1997, p. 4, y varias notas *infra*. Ya desde el 14 de junio de 1990, Americas Watch, con base en Estados Unidos, condenó la "política de impunidad" de México para los violadores de los derechos humanos. Un año más tarde Amnistía Internacional informaba: "La tortura sigue siendo endémica en México." Para más información, véase Human Rights Watch/Americas, *Implausible deniability: state responsibility for rural violence in Mexico* (Nueva York, 1997).

servicio activo. El EZLN, rehusando dejarse provocar, no respondió a la agresión. Sin embargo, se afirma que miembros de un grupo poco conocido llamado "Ejército Justiciero de los Indefensos" atacaron un puesto de mando de la policía en Guerrero el 3 de enero de 1998 como respuesta a la matanza de Acteal.

Acteal marcó una escalada en la "guerra sucia" del gobierno y una aparente decisión de erradicar la base social civil del zapatismo. Bajo el disfraz de estar buscando a los asesinos de Acteal, el ejército envió otros 5 000 efectivos a Chiapas. Los soldados se desparramaron por los pueblos supuestamente zapatistas, desarmando e intimidando aún más a los simpatizantes del EZLN. Entraron violentamente en las viviendas, golpearon a los habitantes, violaron a las mujeres, cientos fueron arrestados, hubo nuevos asesinatos paramilitares y el nivel de violencia en el estado aumentó de forma notable. Miles de civiles huyeron a los ya sobrepoblados campamentos de refugiados. Veintisiete bandas paramilitares operaban con total impunidad en otros tantos municipios. Para mediados de 1998, el secretario de la Defensa Nacional de México había construido ocho edificios de concreto permanentes y 200 kilómetros de carreteras y caminos por todo Chiapas, facilitando la penetración de las tropas en las zonas zapatistas.[47]

La matanza de Acteal puso a México y a sus amigos de todo el mundo en un estado de sobresalto y escándalo. Cerca de un cuarto de millón de personas organizaron marchas en la ciudad de México. En muchos otros países hubo manifestaciones. El gobierno mexicano decidió culpar por la violencia no sólo a los indios, sino también a los extranjeros. A principios de 1998, empezó a deportar a grupos de ciudadanos europeos, canadienses y estadunidenses pertenecientes a misiones de ayuda de derechos humanos en Chiapas, incluyendo a importantes miembros de ONG, acusándolos de "intervenir en los asuntos internos de México". Los grupos de observadores extranjeros desafiaron esta intimidación llegando en números aún mayores que antes, muchos con visa de turista.

El gobierno reiteró su poco verosímil acusación de que la Conai no era imparcial. Culpando todavía a los zapatistas por la ruptura de las conversaciones de paz, el gobierno urgió a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), perteneciente al Congreso, a "modificar" el papel de la Conai. El presidente Zedillo intentó hacer de lado los acuerdos de San Andrés que él mismo había roto anunciando una propuesta de revisar la Constitución para fortalecer los derechos de los indígenas. Los críticos observaron que había faltado a los acuerdos de San Andrés. El subcomandante Marcos del EZLN reiteró que las conversaciones de paz podían reanudarse una vez que el gobierno cumpliera los acuerdos de San Andrés, liberase a los presos políticos zapatistas, desarmara a los paramilitares de Chiapas y pusiera fin a la enorme presencia militar y policial en Chiapas.

[47] *La Jornada*, 15 de junio de 1998. Para más datos, véase Peter Gellert, "Mexican government launches offensive against Zapatistas", *Mexican Labor News Analysis*, 2 de abril de 1998, y otros números de 1998.

Luego, el 7 de junio de 1998, en un periodo de veinticuatro horas, dos sucesos alarmantes aunque no relacionados sacudieron a la nación: el obispo Ruiz dimitió de su presidencia de la Conai, acusando al gobierno de "abandonar el camino del diálogo", y el ejército ejecutó otra matanza. El obispo Ruiz protestó contra el "clima de linchamiento" de las "agresiones" del gobierno contra él mismo y contra la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El gobierno, según el obispo Ruiz, había expulsado o encarcelado a numerosos sacerdotes y cerrado o destruido cuarenta iglesias en los últimos años. Los miembros de la Conai, prominentes mexicanos, siguieron inmediatamente la dimisión de Ruiz disolviendo la Conai debido a lo que ellos llamaban la "estrategia de guerra" del gobierno. El FZLN respondió declarando que la celebración gubernamental de estos sucesos mostraba que todavía "no había entendido que los zapatistas no están solos en sus demandas [...] son demandas nacionales, suya satisfacción es la única garantía para avanzar no sólo en la construcción de la paz en Chiapas, sino también para la transición democrática de la nación entera".[48]

La matanza del 7 de junio ocurrió durante un asalto antes del amanecer en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, una comunidad mixteca en las colinas de la costa del Pacífico. Ayutla estaba gobernada por el PRD. El ejército declaró que sus soldados habían sido emboscados bien fuese por el EPR o el ERPI. No hubo bajas entre los militares. En supuesta defensa propia, los soldados abrieron fuego contra una escuela bilingüe llena de personas dormidas. La comunidad había permitido que la escuela fuese utilizada como dormitorio para cerca de veinticinco visitantes civiles de otras comunidades indígenas y para quince guerrilleros que estaban de paso. Los ocupantes de la escuela se rindieron. Los testigos declararon que al menos ocho de ellos fueron ejecutados tras obligarles a arrastrarse hasta la cancha de basquetbol del la comunidad. El resultado final fue de once muertos, cinco heridos y veintidós arrestados.

Pocos días más tarde, el 10 de junio de 1998, la escalada militar del gobierno alcanzó un listón aún más elevado. Utilizando helicópteros, aviones de combate y morteros, entre 2 000 y 3 000 soldados, policías, y paramilitares realizaron ataques poco antes del amanecer en numerosos pueblos pro zapatistas en el municipio autónomo predominantemente tzotzil de El Bosque, Chiapas, cerca del municipio autónomo de San Andrés Larráinzar, sede de las interrumpidas conversaciones de paz. El resultado fue: por lo menos nueve muertos (incluyendo a un policía del estado), nueve heridos, numerosos desaparecidos, cincuenta y siete civiles arrestados y torturados, un helicóptero dañado, el palacio municipal de un pueblo, en el que el gobierno autónomo de San Juan de la Libertad había mantenido sus oficinas desde 1995, "recuperado", y docenas de

[48] La declaración del FZLN, difundida por Internet, hizo eco a la afirmación de renuncia de los miembros de la Conai de que "una paz justa y honorable no será posible sin respeto por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sin un avance significativo en la reforma del estado y en la transición hacia la democracia". Véase *La Jornada*, 8 de junio de 1998, y *New York Times*, 9 de junio de 1998.

viviendas y cooperativas de consumo bombardeadas o saqueadas. Incontables mujeres y niños huyeron a las colinas y cañadas cercanas.

Manifestaciones de protesta se produjeron en México y en todo el mundo. Grupos estadunidenses solidarios exigieron que su gobierno condenase las matanzas y acabase con la ayuda militar a México. La secretaria de Estado Albright reaccionó ante estas presiones asegurando al Congreso que "el gobierno mexicano conoce nuestra preocupación en relación con [...] las matanzas" y que "estamos presionando" al gobierno "a resolver la situación en Chiapas". Predeciblemente, el gobierno mexicano consideró las palabras de Albright como una violación a su doctrina de no intervención.[49]

La paz y la democracia parecían más lejanas que nunca. La sociedad mexicana estaba sufriendo una militarización constante y cada vez más profunda, y no sólo en el sur de México. A principios de 1997, patrullas del ejército fuertemente armadas iban siendo visibles en áreas remotas y pacíficas del México central, desde la ciudad de México hasta el estado de Michoacán. Tropas, y ya no sólo policía, se veían estacionadas en algunas de las calles de la misma capital del país.

Los escándalos de la droga

Durante los años noventa, las autoridades estadunidenses acusaron repetidamente a México por problemas de narcotráfico y abuso de drogas. Los funcionarios mexicanos respondían que el problema estaba centrado en Estados Unidos, en donde se localiza gran parte del mercado de consumo de drogas.

De acuerdo con la U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), en 1997 México era el punto de tránsito del 70% de la cocaína y de la mayor parte de la heroína y mariguana que entraban en Estados Unidos. Las cifras del gobierno mexicano ponían la cifra de producción y tránsito de drogas en 41 mil millones en 1990, más que las ganancias por exportación de petróleo y cerca del 11% del PIB. El lavado del dinero de la droga a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos se calculaba conservadoramente en por lo menos 30 mil millones de dólares al año, con los grandes bancos manejando la mayor parte de esa cantidad. Pero el flujo de drogas se mantendría en tanto que los ciudadanos estadunidenses continuaran gastando 50 mil millones de dólares por año en narcóticos.[50]

De forma muy significativa, los mercados financieros mundiales estaban profundamente envueltos en el tráfico de drogas. Según las Naciones Unidas,

[49] *Weekly News Update on the Americas* núm. 438 (21 de junio de 1998).

[50] La cifra de consumo de drogas en Estados Unidos fue proporcionada por el zar antidroga, general Barry McCaffrey (véase *Wall Street Journal*, 7 de mayo de 1997); la cifra del lavado de dinero fue proporcionada por un miembro de un subcomité bancario del Congreso de Estados Unidos. Véase *The Nation*, 30 de septiembre de 1996, p. 6. La cifra de 1990 del gobierno de México proviene del Programa Nacional Mexicano para el Control de Drogas. Véase Warnock, *Other*, p. 232.

el tráfico de narcóticos a mediados de los años noventa representaba un 8% de todo el comercio mundial.[51] El flujo de dinero asociado con el narcotráfico en el último tercio del siglo XX no tenía paralelo en la historia de la humanidad, excepto con el flujo de riqueza asociado con la bonanza de oro y plata que los europeos extrajeron de América Latina a mediados del siglo XVI. Ambos fenómenos ejercieron impactos transformadores en las economías y políticas del mundo. Las ganancias del tráfico de drogas, en Estados Unidos tan sólo, se valuaban conservadoramente en 200 mil millones por año, una cifra equivalente a dos tercios del PIB de México. Además de estas sumas, el dinero de la droga "lavado" por los bancos estadunidenses les ayudaba a recuperarse de los préstamos incobrables, especular en los mercados financieros mundiales y financiar los desequilibrios comerciales de Estados Unidos —como los existentes con Japón y otras partes de Asia. Los mayores bancos sobrevivientes de México, que llevaban años balanceándose al borde del colapso, confiaban también en los fondos del narcotráfico. Algunas personas creían que la "guerra antidroga" de Estados Unidos no era sino un truco tendiente a impedir que las ganancias y los fondos lavados del tráfico de drogas abandonasen Estados Unidos.[52]

Poco después de que el presidente Salinas concluyera su mandato, estallaron escándalos en torno a sus parientes y amigos implicados en el narcotráfico. Se reveló que el hermano mayor de Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había colocado más de 120 millones de dólares en cuentas de bancos extranjeros bajo nombre falso, operaciones en las que el Citibank de Nueva York se encargó de la mayor parte de las transferencias. También se dijo que el padre de los hermanos Salinas tenía relaciones con narcotraficantes. El ex presidente caído en desgracia, proclamando su inocencia, marchó al exilio en Irlanda. Raúl Salinas escapó de las autoridades pero fue capturado a principios de 1995 y encarcelado. En noviembre de 1995, Paulina Castañón, que más adelante se casó con Raúl, fue arrestada cuando intentaba sacar de Suiza algunos de los millones de Salinas.

El ex presidente Salinas pasó a ser un conveniente chivo expiatorio para los delitos de otros altos funcionarios relacionados con el narcotráfico. Las instituciones estatales estaban tan comprometidas por sobornos y ganancias del narcotráfico que resultaba apropiado llamar al estado mexicano un "narco-estado". A medida que la prensa de México y de Estados Unidos revelaba nuevos detalles, iba resultando claro que la corrupción implicaba no sólo a prominentes individuos o bancos sino a ramas importantes de los gobiernos de ambos países, incluyendo a los militares, la policía y a los servicios de inteligencia. Poderosos funcionarios federales y locales a cargo del combate contra el narco-

[51] Relatado en "All things considered", National Public Radio, 26 de junio de 1997.

[52] Véase Subcomandante Marcos, *Shadows of tender fury: the letters and communiqués of Subcomandante Marcos and the Zapatista Army of National Liberation* (Nueva York, Monthly Review Press, 1995), p. 13; Petras, "Latin America", p. 46, y Cockcroft, *Latin America: history, politics, and U.S. policy* (Chicago, Nelson-Hall Publishers, 1996), que da una lista con numerosas fuentes de primer orden sobre el tema del narcotráfico.

tráfico habían hecho cientos de millones de dólares con el comercio de la droga. Gran parte de esta corrupción era conocida desde hacía mucho tiempo, a pesar de las negativas gubernamentales.[53]

Un comandante de la policía federal mexicana informó a la DEA y al FBI ya desde 1991 que se estaban realizando pagos de favores con droga en los más altos niveles del gobierno. Sin embargo, como en 1997 declaró al diario *New York Times* un antiguo alto funcionario del gobierno estadunidense: "Allá por 1993, era muy impopular decir nada en contra de México, básicamente debido al TLC."[54]

Informes similares habían estado llegando a las oficinas de la CIA en México (el complejo de la CIA más grande de toda América Latina). Sin embargo, durante muchas décadas la CIA había trabajado bajo un arreglo con los gobiernos mexicanos para ignorar la corrupción en los altos niveles a cambio de la cooperación mexicana con las actividades contrarrevolucionarias de la guerra fría en el Caribe y Centroamérica. Fue típico el caso de Miguel Nazar Haro, antiguo jefe de la policía secreta de México (director de la seguridad federal) durante el mandato del presidente López Portillo. En 1982, la CIA solicitó al departamento de justicia que no persiguiera a Nazar Haro en California por su implicación en un delito de tráfico de autos robados por valor de 30 millones de dólares porque se trataba de "su más importante fuente de información en México y Centroamérica". Conocido protector de los señores de la droga y torturador de presos políticos mexicanos, Nazar Haro fue más adelante director de inteligencia de la policía de la ciudad de México durante el mandato de Salinas. Cuando luego se descubrió que Nazar Haro había construido una nueva cámara de tortura, el escándalo público le forzó a dimitir sin que nunca más se volviera a conocer su paradero.

En 1997, el *New York Times* informó que una directiva del presidente Reagan en 1986 había autorizado a la CIA a conducir operaciones antidroga secretas en México. Algo aún más grave, según un funcionario estadunidense, la directiva del presidente Reagan contenía un apéndice de máximo secreto que daba a la CIA todavía más autoridad dentro de México. Los funcionarios mexicanos y estadunidenses a cargo de imponer el cumplimiento de la ley frecuentemente cooperaban en la vigilancia de los 3 000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, pero con pocos efectos en el tráfico de drogas.[55]

A principios de 1997, sólo ocho días después de ser calificado por el "zar de las drogas" de Estados Unidos, el general retirado Barry R. McCaffrey, como "un honrado servidor público en quien se podía confiar", el recién nombrado jefe de la lucha antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue arrestado bajo la acusación de haber trabajado para Amado Carrillo Fuentes del cártel de Ciudad Juárez, de quien se dice que era el principal señor de las drogas de México.

[53] Véase *New York Times*, 11 de julio de 1997; *Weekly News Update on the Americas* núm. 436 (7 de junio de 1998).

[54] *Ibid.*, así como la cobertura de prensa del momento de los incidentes.

[55] *Ibid.*

Gutiérrez Rebollo fue encarcelado y posteriormente juzgado, convicto, y sentenciado a trece años de cárcel. Informes secretos de la Secretaría de la Defensa mexicana que probaban la cooperación militar con narcotraficantes fueron más tarde filtrados a la prensa, causando que el ejército tuviese que reconocer que los cárteles de la droga habían infiltrado sus filas, y que en 1997 había entregado a las autoridades a treinta y cuatro oficiales y ex oficiales.

El 2 de julio de 1997, Gutiérrez Rebollo declaró ser un "preso político" que "había descubierto que el tráfico de drogas ha alcanzado incluso al despacho del presidente" y que el "cartel de Tijuana" estuvo implicado en el asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Un día después, Carrillo Fuentes murió mientras era sometido a una operación de cirugía plástica en una clínica de la ciudad de México. Los cirujanos desaparecieron. Los representantes legales de la clínica resultaron ser dos importantes políticos del PAN, incluyendo al candidato presidencial del PAN en 1994. Luego, en 1998, funcionarios anónimos de Estados Unidos revelaron que dos de los cinco médicos que realizaron la operación de cirugía estética a Carrillo Fuentes estaban viviendo en Estados Unidos, uno de ellos bajo protección del gobierno. El principal abogado de Gutiérrez Rebollo, que había hecho la acusación de que una red de altos mandos del ejército mexicano estaba vinculada a los cárteles de la droga de Tijuana, fue asesinado.

También en 1998, la representante de Estados Unidos Maxine Waters, jefa del Congressional Black Caucus, escribió al presidente Clinton una carta que alcanzó gran difusión. Anteriormente, Waters había encabezado diversos intentos para lograr que el Congreso investigase los informes de que la CIA estaba enterada de que los contras de Nicaragua patrocinados por Estados Unidos financiaron su guerra contra la Revolución nicaragüense vendiendo cocaína en las ciudades del interior de Estados Unidos durante la década de los ochenta. Waters escribió a Clinton que ella estaba preocupada acerca de los informes más recientes de que Carrillo Fuentes había lavado cientos de millones de dólares a través de Citibank, una parte de Citicorp, el segundo banco más importante de Estados Unidos. Citicorp estaba intentando una asociación de 82 mil millones de dólares con el gigante financiero Travelers Group Inc. Waters pedía a Clinton y al director de la Reserva Federal Alan Greenspan que bloquearan esa asociación hasta que se realizase una investigación del posible lavado de dinero de Citibank, incluyendo el caso de Raúl Salinas.

Cinco semanas después de que la carta de Waters fuese reproducida en la prensa estadunidense, el gobierno de Estados Unidos anunció el éxito de una operación de infiltración realizada secretamente durante tres años y el arresto de veintidós banqueros mexicanos por lavado de dinero de la droga para los cárteles de Cali (Colombia) y Ciudad Juárez en las filiales estadunidenses de los bancos mexicanos más poderosos. Los banqueros arrestados habían sido atraídos a Las Vegas y Los Ángeles para asistir a supuestas reuniones y fiestas de "expertos en narcotráfico". En su mayoría eran ejecutivos de nivel medio, pero los bancos en los que prestaban sus servicios eran doce de los diecinueve mayores

bancos de México, todos los cuales habían sido privatizados, casi todos durante la administración de Salinas. El Federal Reserve Board emprendió acciones legales contra cinco de los mayores bancos implicados. A pesar de toda la propaganda acerca de la cooperación binacional para luchar contra el narcotráfico, la operación de infiltración estadunidense de tres años de duración fue llevada a cabo sin ni siquiera consultar a las autoridades mexicanas.

Los dueños de los bancos formaban un "quién es quién" entre los multimillonarios de México y las familias de élite. Incluían a los multimillonarios Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Eugenio Garza-Lagüera y Adrián Sada González. Hernández y Harp Helú dirigían el banco más rico de la nación, el Banco Nacional de México (Banamex), que habían comprado a precio de ganga en 1991 mediante un trato privado con el presidente Salinas. Garza Lagüera, jefe del grupo Visa del grupo de Monterrey, presidía Bancomer, el segundo banco más rico de México (en parte propiedad del Banque de Montréal). Sada González encabezaba Banca Serfin, el tercer banco más rico (asociado con J.P. Morgan, así como con capital británico vía Hong Kong y la Shanghai Bank Corporation). Sada dirigía también grupo Vitro, el mayor grupo industrial de México. También fueron arrestados algunos ejecutivos del banco español Santander que, junto con Morgan y Citibank, habían acaparado cuatro quintas partes de las ganancias de 1.3 mil millones de dólares hechas por quince bancos extranjeros en México en 1995 (una cifra igual al 41% de las utilidades de la banca en México aquel año). Santander, Morgan y Citibank trabajaban con las mayores compañías mexicanas que controlaban el comercio exterior de México, incluyendo aparentemente su tráfico de drogas. Banca Confía, vendida dos semanas antes a Citibank, había sido dirigida por un hombre que ahora fue acusado de defraudar a sus clientes inmensas sumas de dinero y que desapareció antes de que Citibank cerrase el trato. Importantes accionistas de Banca Confía pertenecían a las familias de élite Garza Sada, Garza González, Sada Zambrano y Garza Treviño, entre otras. Interacciones y Unión era dirigida por la políticamente poderosa familia Hank.[56]

La operación llegó en un momento desafortunado para los bancos mexicanos. Ya estaban mal vistos por los mexicanos por haber despedido a miles de sus empleados para ayudar a paliar un problema de deudas incobrables que la nueva información contable mostró ascender al 12% de todos sus préstamos, y no al 6.7% como se creyó originalmente. De acuerdo con el movimiento de deudores El Barzón, 30 millones de ciudadanos estaban en rebeldía o eran incapaces de pagar sus deudas —debidas principalmente a los mismos bancos que acababan de ser pillados con las manos en el cajón del narcotráfico. El Barzón y el PRD criticaban al PRI y al PAN por haber pasado recientemente legislación que mantenía el 15% de los impuestos sobre las ventas (que proporcionaba una ter-

[56] *La Jornada*, 19 de mayo de 1998, Carlos A. Heredia, "Downward mobilty: Mexican workers after NAFTA", *NACLA Report on the Americas* 30, núm. 3 (noviembre-diciembre de 1996), p. 35, comunicado personal por correo electrónico del economista de la UNAM Alejandro Álvarez Béjar, 3 de marzo de 1998.

cera parte de los ingresos por impuestos federales), en parte para continuar el salvamento de los bancos, de los que se decía había costado ya 48 mil millones en los últimos tres años.

Algunas personas creían que existían agendas secretas del imperialismo estadunidense detrás del golpe asestado al lavado de dinero en México sin que se adoptasen medidas correspondientes contra Citibank y otros bancos estadunidenses sospechosos de estar implicados. Como ya señalamos, los principales objetivos de Estados Unidos que habían de ser encauzados por el TLC incluían un mayor control sobre los servicios financieros mexicanos tales como la banca, y el uso de presiones económicas para recuperar los recursos petroleros de México (nacionalizados en 1938). La acción no implicó a ningún ciudadano estadunidense en el escándalo de la banca, aunque muchos ciudadanos estadunidenses trabajaban en las oficinas filiales de los bancos mexicanos acusados y algunos de esos mismos bancos tenían vínculos con los principales personajes estadounidenses de las altas finanzas.

Durante años, el gobierno de Estados Unidos utilizó sus declaraciones de "certificación" acerca de la cooperación de otros países con la guerra antidrogas como un medio de presionar para que pusieran en práctica las políticas preferidas por Estados Unidos, tales como mayor privatización de las empresas estatales o más estrecha colaboración con la DEA, la CIA y el Pentágono. Pero el gobierno de Estados Unidos rara vez atacó a las grandes mafias de la droga estadunidenses y se tomó grandes trabajos para disimular las conexiones con el narcotráfico del teniente coronel Oliver North en la operación "contra" elaborada en los sótanos de la Casa Blanca. Pocos meses antes de los arrestos de los banqueros mexicanos en 1998, el gobierno de Estados Unidos había certificado que el gobierno de México estaba "cooperando plenamente" en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de la manifiesta falta de resultados efectivos en la guerra antidroga y de la creciente evidencia de una implicación mucho más profunda en el narcotráfico por parte de los militares, jueces y banqueros de México. La "certificación" de México había ocurrido porque Estados Unidos consideró importante no agitar el nacionalismo mexicano en un momento en el que el TLC estaba recibiendo ataques y el capital estadunidense había empezado a regresar a México después del colapso económico sufrido por este país en 1994-1995.

Eran pocos los que seguían creyendo en la corrección de esas "certificaciones". Los gobiernos latinoamericanos decían que si las mismas debían continuar, entonces Estados Unidos debería ser certificado también. El zar estadunidense antidroga McCaffrey dijo a la prensa a principios de 1998 que había llegado el momento de "enterrar el proceso de certificación por ser totalmente irrelevante" y pasar la cuestión a "una entidad cooperativa multinacional" como la Organización de Estados Americanos (OEA).[57]

[57] *Wall Street Journal*, 28 de febrero de 1998. Sobre la operación de Oliver North, véase Cockcroft, *Latin America*.

La guerra antidroga de Estados Unidos era un fracaso manifiesto. Construyendo más cárceles y dando más ayuda militar a América Latina no había logrado frenar el flujo de narcóticos. Los estudios mostraban que los programas de tratamientos eran más efectivos en cuestión de costos que las "guerras" en el exterior, aunque se prestaba poca atención a los programas de reducción de peligros tales como los canjes por agujas seguras. Numerosos oficiales del ejército estadunidense habían declarado oficiosamente que la ayuda exterior antidroga iba destinada a combatir las guerrillas más que a luchar contra los narcotraficantes. Según la organización de derechos humanos Americas Watch con base en Nueva York, el aumento de la autoridad de la patrulla fronteriza con el pretexto de combatir el narcotráfico ayudaba a aumentar las violaciones "rutinarias" de los derechos humanos contra inmigrantes mexicanos. En junio de 1998, una carta firmada por cientos de dignatarios de todo el mundo, incluyendo al anterior secretario de Estado George P. Shultz, criticaba la guerra antidroga "por causar más daño que el mismo abuso de las drogas."[58]

Pero el gobierno de Estados Unidos seguía insistiendo en la necesidad de aumentar la ayuda y el entrenamiento para las fuerzas de seguridad mexicanas en nombre del combate contra las drogas, un razonamiento conveniente para ayudar al gobierno mexicano a luchar contra los zapatistas y otros ejércitos guerrilleros y movimientos sociales populares. A finales de 1997, ambos gobiernos firmaron acuerdos que ampliaban la autorización a los aviones "antidroga" estadunidenses para operar en México.

Las fuerzas de seguridad y el entrenamiento estadunidense

Después de la elección en 1940 del primer presidente civil desde que se redactó la Constitución de 1917, se consideraba generalmente que los militares "habían vuelto a sus cuarteles". La ideología oficial sostenía que los días de gobierno del ejército habían expirado con Porfirio Díaz. Obviamente, sin embargo, esto dependía mucho de la *clase* de civiles que gobernasen. El ejército mexicano era el puño armado de la burguesía y actuaba de acuerdo con ello. No era sorprendente, por lo tanto, que a pesar de la composición proletaria de sus filas (la clase intermedia acomodada evitaba el alistamiento), los militares ejecutaban rutinariamente sus deberes de clase cuando rompían huelgas o asesinaban campesinos. Además, con pocas excepciones, hasta los años ochenta el presidente del PRI siempre había sido seleccionado de entre el cuerpo de oficiales del ejército, y en los cincuenta y sesenta casi el 20% de los gabinetes presidenciales habían consistido en personal militar.

[58] Como fue publicado en el *New York Times*, 9 de junio de 1998. Véase también Eva Bertram y Kenneth Sharpe, "War ends, drugs win", *The Nation*, 6 de enero de 1997, pp. 11-14. En numerosas ocasiones, Americas Watch ha censurado los "rutinarios" abusos físicos y verbales de la patrulla fronteriza contra los emigrantes, incluyendo varios casos que acabaron en muerte o incapacidad permanente. Véase *New York Times*, 31 de mayo de 1992, *Washington Post*, 14 de mayo de 1993.

En aquellos tiempos, los reducidos porcentajes del presupuesto federal de México que iban al ejército hicieron pensar a algunos investigadores que los intentos de golpe militar ya no serían posibles. Pero el gasto militar real aumentó marcadamente a fines de los setenta y el presupuesto de defensa fue duplicado en 1981. Se creó un organismo militar bien armado y modernizado. Los generales empezaron a pretender puestos relevantes, especialmente en los niveles del gobierno y el Congreso. Empezó a ser aceptable hablar de un candidato presidencial militar. Los rumores sobre un inminente golpe militar ya se tomaban en serio.

Algunos políticos y expertos de Estados Unidos consideraban "el golpe militar [como] parte del proceso democrático en América Latina",[59] incluyendo a México. Muchos oficiales del ejército mexicano se declaraban públicamente "defensores de la nación", "profesionales" o "constitucionalistas". Pero eso no era tan inusual en América Latina entre el personal militar —tal fue el caso de Chile, por ejemplo, antes del golpe de 1973 contra el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente. Las fuerzas de seguridad mexicanas y estadunidenses frecuentemente conducían operaciones conjuntas. La amplia gama de actividades emprendidas por las fuerzas de seguridad e inteligencia estadunidenses en México daban un mentís a las declaraciones del gobierno mexicano de independencia respecto de Estados Unidos.

Desde 1946 hasta 1982, la ayuda militar y policiaca de Estados Unidos a México sumó cientos de millones de dólares. Luego, desde 1981 hasta 1991, la asistencia militar de Estados Unidos a México se disparó hasta un 60%, ostensiblemente como parte de la "guerra antidroga". Más de mil oficiales del ejército fueron entrenados en Estados Unidos, incluyendo a cerca de la mitad de los generales mexicanos. Por lo menos cuatro de ellos asistieron a la infame escuela de "contrainsurgencia" School of the Americas en Panamá (trasladada luego a Fort Benning, Georgia), famosa por sus manuales de tortura y su entrenamiento de oficiales latinoamericanos que se convertirían en dictadores en sus respectivos países.

Algunos de los oficiales entrenados en Estados Unidos pasaron a formar parte de la élite de contrainsurgencia "brigada blanca" (la Brigada Militar núm. 9, con base en el Campo Militar núm. 1 de la ciudad de México), que fue acusada por organizaciones de derechos humanos de torturas y asesinatos en masa a cientos de estudiantes, campesinos, periodistas, disidentes políticos y supuestos guerrilleros "desaparecidos". Un desertor del ejército mexicano confirmó la existencia de ejecuciones de más de cien presos políticos en el Campo núm. 1. El presidente Salinas designó a un antiguo miembro de la "brigada blanca" como jefe de la policía judicial del Distrito Federal. El nuevo jefe hizo correr un escalofrío por las espaldas de los mexicanos diciendo a la prensa que su misión consistía en "persuadir a la mayoría cardenista [PRD] en esta ciudad de que no sigan insistiendo en sus derechos".

[59] Véase John J. Johnson, *The military and society in Latin America* (Stanford, Stanford University Press, 1964).

La presencia del ejército mexicano y de la fuerza aérea en Chiapas precedió al levantamiento zapatista en ese estado. Durante décadas, el ejército mexicano mantuvo estrechos contactos con el ejército guatemalteco (considerado el mayor violador de los derechos humanos de toda America Latina) para patrullar la frontera común entre ambas naciones. La zona al sur de México y norte de Guatemala se convirtió en los sesenta en un terreno de operaciones de fuego libre para las fuerzas armadas de México, Guatemala y Estados Unidos (incluyendo a representantes de los Boinas Verdes o *rangers*) contra la insurgencia guerrillera de Guatemala. De hecho, el principal líder guerrillero de Guatemala, Yon Sosa, fue muerto por soldados mexicanos. La tecnología de la guerra de Vietnam fue introducida allí, así como la práctica de masacrar a la población civil. Se dice que México ayudó a proporcionar el napalm de su propia fábrica, junto con tanques y otros componentes de su próspera industria de armamentos. Las fuerzas militares y paramilitares de México también utilizaban este tipo de acciones militares de contrainsurgencia para acabar con los grupos guerrilleros en varias partes del México rural. El ejército mexicano miraba para otro lado cada vez que los soldados guatemaltecos cruzaban la frontera supuestamente para dar caza a guerrilleros que huían. En los años setenta y los ochenta, el ejército mexicano desplegó sus fuerzas a lo largo de la frontera con Guatemala, en parte para aplastar la "inquietud social" entre los indios mayas guatemaltecos y mexicanos.

El ejército mexicano conservaba un grado significativo de autonomía, y representaba una fuerza política que era preciso reconocer. La nación estaba dividida en treinta y cinco zonas militares que recibían sus órdenes del secretario de la Defensa, generalmente un militar. Ningún gobernador de un estado podía dar órdenes al jefe de una zona militar, el cual tenía un notable poder autónomo en cuestiones de "inquietud social".

En el curso de los años, la represión institucionalizada en gran escala tuvo como resultado la construcción de un complejo bloque de poder de fuerzas represivas, incluyendo a los 175 000 miembros del ejército (1998) y 400 000 policías locales, 26 121 miembros de la policía judicial estatal, y cerca de 7 000 policías federales (1998, o 1 policía por cada 224 habitantes). Existían también numerosas agencias de inteligencia vinculadas con diferentes sectores del gobierno, unidades paramilitares, escuadrones de pistoleros y otros más. Estas fuerzas estaban raramente bien coordinadas, hasta que Estados Unidos empezó a declarar públicamente en los setenta que México era una "pieza vital" de su doctrina de seguridad nacional.[60]

[60] Un estudio particularmente penetrante de las doctrinas de "seguridad nacional" mexicanas y estadunidenses y su interrelación es un artículo que debió traducirse y publicarse en 1998 o 1999 por *Latin American Perspectives* titulado "Las estrategias político-militares del estado mexicano y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: seguridad nacional versus soberanía nacional". Las cifras sobre la policía son del diario de la ciudad de México *El Nacional*, 5 de enero de 1998, citado en *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 2 (16 de enero de 1998).

El presidente López Portillo (1976 a 1982) añadió al curso militar básico del Heroico Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra (en los que se graduaba la mayoría de los futuros altos oficiales de México), el Colegio de la Defensa Nacional, con un programa de licenciatura en "seguridad nacional". Emprendió un programa de intercambio con escuelas militares estadunidenses como West Point. Cuando los periodistas preguntaron al secretario de la Defensa, general Félix Galván López, cómo definiría él la "seguridad nacional", éste respondió "equilibrio social, económico y político", confirmando así el papel central del ejército en la política mexicana y en el control la "inquietud social". Galván fue el primer miembro del gabinete en ser informado por el presidente López Portillo de la decisión de nacionalizar los bancos privados de México en 1982 y en pedírsele que lo apoyara.[61]

Como en la mayor parte de América Latina, también en México: la "guerra antidroga" conducida por Estados Unidos era en realidad una guerra de contrainsurgencia contra los movimientos sociales populares o las guerrillas, así como contra los campesinos pobres dependientes del cultivo de cosechas como la mariguana para su supervivencia. De hecho, México tiene una larga historia de este tipo de contrainsurgencia "antidroga". A mediados de los setenta, la DEA ayudó a entrenar a policías mexicanos y a menudo sirvió de tapadera para los agentes de la CIA. Desde 1973 hasta 1977 la policía mexicana recibió 47 millones de dólares de la DEA, en su mayor parte para la compra de ferretería para usarla contra disidentes políticos. En la Sierra Madre de los estados norteños de Sinaloa y Durango, por ejemplo, 7 000 soldados ayudados por 226 asesores de la DEA pelearon una "guerra especial" contra los ocupantes de tierras indios y campesinos bajo el pretexto de destruir plantíos de mariguana. Herbicidas de un tipo usado en la guerra de Vietnam fueron utilizados para matar plantas alimenticias, ocasionando hambrunas entre la población india.[62]

En el primer mes después del levantamiento zapatista de 1994, el general Gordon Sullivan, comandante del ejército de Estados Unidos, visitó dos veces consecutivas al secretario de la Defensa de México para cerrar la venta de equipos "no letales" y para elevar a casi el doble los fondos de Estados Unidos de la cuota de México en el Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar creado por Estados Unidos. Los "asesores" militares estadunidenses fueron vistos en Chiapas, un estado mejor conocido por sus plantaciones de maíz y café que por campos de mariguana.

La ayuda militar estadunidense a México se disparó en nombre del "combate contra el narcotráfico", cuando los objetivos reales eran las guerrillas y sus partidarios campesinos. En 1997, el gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente la verdad de lo que los observadores sobre el terreno habían declarado desde hacía mucho: los helicópteros proporcionados por Estados Unidos

[61] Véase Roderic A. Camp, *Generals in the Palacio: the military in modern Mexico* (Nueva York, Oxford University Press, 1992), p. 32.

[62] Véase *NACLA Report on the Americas*, enero-febrero de 1978.

estaban siendo empleados pata atacar a los habitantes de las zonas guerrilleras de Chiapas y Guerrero.[63]

Estados Unidos gastó más dinero en el ejército mexicano que en el de ningún otro país latinoamericano. Miles de soldados y oficiales mexicanos fueron entrenados en Fort Bragg y otras bases militares estadunidenses. El número de enero de 1996 de la revista de Fort Bragg *Special Warfare* afirmaba que "se está dando un hincapié especialmente enérgico a las fuerzas que habrán de situarse en los estados de Chiapas y Guerrero".[64] Estados Unidos aumentó igualmente el número de agentes de la DEA, la CIA y otra agencias que operaban en el interior de México, al tiempo que reforzaba la presencia de soldados y Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México. En 1997, se informó de la presencia de barcos de la Marina, la Guardia Costera y patrullas aduanales dentro de aguas mexicanas "persiguiendo en caliente" a narcotraficantes.[65]

Para 1998, según el *Washington Post*, los mexicanos constituían "el mayor grupo de soldados extranjeros que recibían instrucción militar de Estados Unidos".[66] Estaban siendo entrenados a una tasa de más de mil por año en diversos centros estadunidenses, incluyendo la School of the Americas en Fort Benning, Georgia. Más de 400 oficiales mexicanos y 3 200 soldados fueron entrenados en el periodo 1996-1998 en Fort Bragg, North Carolina, por el Seventh Special Forces Group, la unidad contrainsurgente de élite que dio empleo a muchos Boinas Verdes al fin de la guerra de Vietnam en 1975. Basándose en informes del gobierno de Estados Unidos el *Post* describía a los oficiales graduados en Fort Bragg como la "columna vertebral" del nuevo órgano de élite Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFE), "entrenados para conducir operaciones secretas de baja intensidad". Una unidad del GAFE fue acusada posteriormente de torturar a veintinueve jóvenes, matando a uno. El Pentágono reconoció que algunos miembros de la unidad habían sido entrenados en Fort Bragg. En los ochenta se dio mucha publicidad al manual de entrenamiento de la CIA que incluía técnicas terroristas y de tortura para ser utilizadas por los contras en sus ataques a la revolución de Nicaragua.[67]

Y no era que los oficiales estadunidenses ignorasen los abusos contra los derechos humanos practicados por sus discípulos. En 1997 Amnistía Interna-

[63] Sobre el reconocimiento público del gobierno de Estados Unidos, véase *New York Times*, 4 de junio de 1997; *La Jornada*, 18 de junio de 1997.

[64] Citado en *Weekly News Update on the Americas* núm. 422 (1° de marzo de 1998).

[65] *Ibid.*, núm. 406 (9 de noviembre de 1997).

[66] *Washington Post*, 26 de febrero de 1988.

[67] Para más datos sobre el manual de la CIA, véase Cockcroft, *Latin America*, p. 221. Sobre la unidad del GAFE acusada de tortura, véase *Weekly News Update on the Americas* núm. 427 (6 de abril de 1998). El entrenamiento del GAFE era un programa especial sin supervisión del Congreso y recibió 28 millones de dólares de fondos del gobierno en 1997. Los ahí entrenados recibieron instrucción en "tácticas de asalto con helicópteros, explosivos, guerra rural y urbana y planificación y recopilación operativa de inteligencia". Luego regresaron a México para entrenar allí a "grupos de reacción rápida". Para principios de 1998, cuarenta y dos de estas unidades de cien hombres cada una habían sido desplegadas por el ejército mexicano.

cional (AI) publicó una crítica sangrienta contra las fuerzas de seguridad mexicanas por "aumentar las violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales [...] y permitiendo que los responsables quedaran impunes". AI también condenó "la sistemática transferencia de helicópteros Huey a las fuerzas armadas mexicanas". La ayuda estadunidense incluyó setenta y tres helicópteros Huey UH-1H y cuatro aviones de vigilancia C-26.

Una parte esencial de la doctrina contrainsurgente de Estados Unidos venía siendo desde hacía mucho la creación de grupos paramilitares especiales como los que ya actuaban en aquellos estados en donde operaban los zapatistas y el EPR, o los que ejecutaban las matanzas de civiles en Colombia que tan amplia difusión han tenido. Un documento de la Secretaría de la Defensa de México titulado "Plan de Campaña Chiapas 94" fue filtrado al semanario mexicano *Proceso* en 1998, poco después de la matanza de Acteal. Escrito según parece por un general mexicano que había estudiado en la School of the Americas del ejército de Estados Unidos, el documento afirmaba que "el objetivo estratégico-operativo en Chiapas" consistía en "conseguir el apoyo de la población civil". Llamaba a "organizar en secreto a sectores de la población civil [...] que serán empleados bajo órdenes en apoyo de nuestras operaciones". Éstas incluían "asesoramiento y apoyo a las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares [...] En los lugares en donde no existan fuerzas de autodefensa será necesario crearlas."[68]

Todo esto reflejaba una creciente militarización de la política de Estados Unidos y de la vida cotidiana de México. Como señaló en 1997 un investigador mexicano en Harvard, los encargados de la política en los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos tenían que asistir con frecuencia cada vez mayor a reuniones sobre México en el Pentágono o en el Consejo de Seguridad Nacional.[69]

En nombre de la "seguridad nacional", el presidente López Portillo y sus sucesores compusieron un aparato estatal represivo más fluido y centralizado. En 1995, una nueva ley estableció el Consejo Nacional de Seguridad Pública con participación de las fuerzas armadas en tareas de policía. La ley fue conocida como "ley de seguridad nacional", significando seguridad contra las amenazas internas tales como las representadas por las guerrillas. En la práctica, los objetivos del ejército y la policía se extendían hasta los demócratas de los sindicatos, los militantes del PRD y todas las fuerzas políticas a la izquierda de ellos mismos.

A mediados de los noventa el presidente Zedillo coronó la centralización del poder estatal en "seguridad nacional" con un plan para crear un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que supervisaría a todas las agencias gubernamentales encargadas de los sistemas de justicia criminal y defensa militar y que

[68] Citado en *Weekly News Update on the Americas* núm. 414 (5 de enero de 1998).
[69] Juan Enríquez, "Dealing with Mexico", *New York Times*, 9 de noviembre de 1997.

estaría bajo el mando del presidente. La presidencia mexicana ya operaba un gabinete de seguridad nacional fundado por Salinas.

Bajo estas coberturas federales, unidades de élite militares y policiacas como la de los "zorros" y similares escuadrones "antiterroristas", disfrutaban de un amplio grado de autonomía operativa que a menudo aterrorizaba a la población civil. Por ejemplo, en 1998 se descubrió que una unidad de operaciones especiales formada para capturar a supuestos secuestradores en los estados de Morelos y México era en realidad parte de la banda de secuestradores. (México ocupa el segundo lugar después de Colombia en número anual de secuestros —1 900 en 1996— y eran pocos los secuestradores capturados.)[70]

A principios de 1997, once militares retirados se afiliaron al PRD, acontecimiento raro en la historia de México ya que todos los oficiales eran entrenados para obedecer al presidente y sostener el sistema del PRI. La mayor parte de los oficiales provenían de la clase intermedia baja y eran desairados por las élites más acaudaladas de la nación. Algunos de ellos eran nacionalistas y no se dejaban convencer tan fácilmente por la ayuda de Estados Unidos y sus manuales de entrenamiento. En mayo de 1998, algunos oficiales al parecer se quejaron de que sus pares estadunidenses planeaban utilizar detectores de calor infrarrojo en Chiapas —la técnica empleada en Bolivia en los sesenta para seguir, acorralar, capturar y asesinar al guerrillero más famoso del mundo, Ernesto "Che" Guevara.[71]

La mayor parte de los oficiales con sentimientos nacionalistas estaban llegando a la edad del retiro. Parecían incapaces de controlar los abusos de sus colegas contra los derechos humanos y su narcotráfico. Estaba resultando muy lucrativo estar en el ejército, un lugar atractivo para hacer dinero gracias a toda la corrupción aparejada a la droga. Lo mismo era cierto para las demás fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Que el poder de los oficiales nacionalistas siguiera declinando o bien que experimentase un resurgimiento dependía en parte de la influencia de los movimientos sociales del país y de la evolución de los partidos políticos en contienda. En cualquier caso, pocos estudiosos o periodistas tenían acceso o estaban informados de las consultas internas del cuerpo de oficiales de México.

La Iglesia

Una fuerza represiva mucho más sutil e ideológica que las fuerzas de seguridad era la Iglesia católica romana. Se considera que cerca de un 90% de todos los mexicanos son nominalmente católicos. Sin embargo, durante y después de la guerra fría numerosos grupos protestantes, pentecostales y evangélicos, algu-

[70] Para las estadísticas de secuestros en América Latina, véase *Latin American Weekly Report*, 15 de julio de 1997.

[71] *Washington Post*, 31 de mayo de 1998.

nos con apoyo de la CIA y otras fuerzas del gobierno de Estados Unidos penetraron profundamente en el casi monopolio católico de creyentes cristianos. Las asistentes más frecuentes a los servicios religiosos eran mujeres, y su número comenzó a declinar.

Desde un punto de vista liberal decimonónico, las relaciones Iglesia-estado se habían vuelto obscenamente armoniosas, especialmente desde los años sesenta en adelante. Tanto la Iglesia como el estado hacían propaganda contra los "males" del comunismo y el terrorismo. Sin duda, algunas tensiones menores seguían existiendo, como cuando la Iglesia criticaba los textos de la escuela pública o el programa de control de natalidad del gobierno. Por otra parte, la educación privada católica era floreciente y tanto la Iglesia como el estado montaban campañas para defender las "virtudes" de la maternidad y la vida familiar. La Iglesia y el estado rechazaban de común acuerdo las propuestas izquierdistas y feministas para la legalización del aborto.

Los empresarios y hombres de negocios conservadores católicos respaldaban al PAN y al PDM, así como a las fuerzas de derecha dentro del PRI. Deseaban que el estado reprimiera a los clérigos "revolucionarios" que defendían y practicaban la teología de la liberación, una tendencia popular que se estaba extendiendo en América Latina. El obispo de Tehuantepec Arturo Lona Reyes afirmó en abril de 1981 que la violencia se volvía legítima defensa frente a la represión anticampesina y el hambre generalizada. Y añadía que tanto el gobierno como la Iglesia estaban empujando a la gente hacia una nueva revolución.[72] Un número creciente de sacerdotes y monjas socialmente comprometidos trabajaban junto a organizaciones progresistas de trabajadores, campesinos, habitantes de los suburbios y estudiantes para proporcionar asistencia a los desposeídos y para organizarse políticamente para un cambio social radical. Algunos clérigos de otras creencias, especialmente protestantes asociados con el Consejo Mundial de Iglesias, se volvieron también activistas políticos.

Para mitigar la oposición de derecha y obtener apoyo para sus políticas neoliberales conservadoras, el presidente Salinas vació la Constitución de su anticlericalismo, restaurando el estatus legal de la Iglesia católica y dándole acceso a la televisión. En 1992, nuevas leyes dieron a los sacerdotes el derecho al voto y a las iglesias el derecho a tener propiedades y dirigir sus propias escuelas sin interferencia del estado. México restableció relaciones diplomáticas plenas con el Vaticano. Llegó un nuncio papal y montó una ofensiva a gran escala contra los miembros del clero partidarios de la teología de la liberación. En el otoño de 1993, hizo pública la programada transferencia al Vaticano de Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

[72] Citado en *Proceso*, 6 de abril de 1981. Para excelentes presentaciones de las diversas y conflictivas tendencias dentro de la Iglesia mexicana desde diferentes perspectivas, consúltese Roderic A. Camp, *Crossing swords: politics and religion in Mexico* (Nueva York, Oxford University Press, 1997).

El levantamiento zapatista, sin embargo, puso a Ruiz en el centro del proceso de paz y dejó al nuncio papal con su influencia momentáneamente disminuida. Decenas de miles de indios chiapanecos aman al obispo Samuel Ruiz. Después de entrevistar al obispo en 1994, el prominente historiador conservador Enrique Krauze le describió como a "un profeta como Las Casas" que practicaba "la caridad de la verdad" y esperaba salvar a los indios "no en la otra vida, sino en ésta". Ruiz, un pacifista, dijo a Krauze: "Ciertamente, nosotros tenemos que ver con la rebelión [zapatista], porque a raíz de la reflexión cristiana instamos a los indios a recuperar la dignidad."[73]

Consciente de estos desafíos y de los fracasos del neoliberalismo, la Iglesia católica mexicana publicó una declaración en el aniversario del levantamiento zapatista que afirmaba que el creciente desempleo era "un desorden moral" y criticaba las políticas del gobierno que abandonaban a la gente a "los caprichos del libre mercado". Esto resultó muy sorprendente porque el Vaticano había abandonado desde hacía mucho pronunciamientos tan radicales. Sin embargo, la enormidad de la pobreza de México exigía una respuesta.

En 1993, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara se atribuyó oficialmente a los tiros cruzados entre bandas de narcotraficantes, aunque algunos sospecharon que el asesinato fue organizado por los "narco-sicarios" del presidente Salinas.[74] El cardenal Posadas no era un liberal. Otros clérigos, que *sí eran* liberales, recibían frecuentes amenazas de muerte. En junio de 1995 hubo un atentado contra el obispo de Tehuantepec Lona Reyes, que por entonces era presidente del Comité de Derechos Humanos del Tepeyac. En otoño de 1997, como ya dijimos, el obispo Ruiz se salvó de un intento de asesinato.

Claramente, la Iglesia católica mexicana estaba tan dividida como la misma sociedad del país. A fin de cuentas, sin embargo, seguía siendo una fuerza represiva y conservadora. En 1998, el arzobispo de México Norberto Rivera Carrera dijo la última palabra, al menos por el momento. Censuró públicamente a "las feministas, los homosexuales, los tercermundistas, pacifistas, liberacionistas y descontentos de cualquier ralea".[75] Un movimiento de derecha creciente y poderoso respaldado por la Iglesia y los políticos conservadores impulsaba las versiones más extremas de los "valores familiares". Utilizando el acceso del PAN y de la Iglesia a la televisión, el movimiento llamaba a la abstinencia sexual, condenando el uso del condón, criticando a las personas enfermas de sida, patrocinando los valores patriarcales y en general haciéndose eco de los sentimientos del arzobispo.

[73] Véase Krauze, *La presidencia*, p. 434.

[74] Citado en Warnock, *Other*, p. 185.

[75] *La Jornada*, 27 de abril de 1998. Véase también *The Economist*, 6 de diciembre de 1997. Para más información, véase Marta Lamas, "Scenes from a Mexican battlefield", *NACLA Report on the Americas* 31, núm. 4 (enero-febrero de 1998), pp. 17-21.

Los medios de comunicación

Aún más poderosos que la Iglesia para influir en la opinión pública eran los medios de comunicación de masas.[76] Técnicamente, México tenía una "prensa libre", pero los medios siempre habían estado atados a los grupos financieros ricos y conservadores leales al PRI y el PAN. Los intereses privados extranjeros y nacionales marcaban la pauta. Las firmas publicitarias de Madison Avenue hacían un negocio redondo para el capital monopólico mediante el uso de los medios. Tanto a través de la radio, la televisión, discos, cintas magnetofónicas, libros, tabloides, revistas o fotonovelas, en su mayor parte los mexicanos eran una audiencia cautiva para los mensajes tanto de represión política como sexual. Los partidos y fuerzas políticas menos conservadores tenían que intentar comunicar sus alternativas para el futuro de la nación en esta atmósfera inhóspita.

Todos los medios de comunicación impresos, incluyendo las empresas editoriales, estaban sujetos a los antojos del monopolio estatal para el suministro de papel, Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA).[77] El estado conservaba el control de las licencias de los medios de comunicación y prerrogativas relacionadas, que de tiempo en tiempo utilizaba para tirar de las riendas de las voces más independentistas. El gobierno de Echeverría (1970-1976), por ejemplo, disolvió el equipo del más prestigioso diario del país, *Excélsior*, para ponerlo bajo el control del gobierno. Los periodistas e incluso algunos autores de libros practicaban habitualmente la autocensura. Por lo tanto, no era sorprendente que las encuestas realizadas durante los noventa mostrasen que entre los mexicanos que seguían las campañas presidenciales por televisión, la mayoría opinase que la cobertura era excesivamente priista. Respondiendo a las quejas de algunos periodistas acerca de que no se les permitía el acceso a sus portavoces, el EZLN declaró que solamente tendría tratos con "la prensa honesta".

Como sólo el 2% de la población de México leía libros, y aún eran menos lo que consultaban la prensa de izquierdas, los principales medios de comunicación eran la televisión y la radio. En 1945, la CBS y la NBC integraron sus intereses radiofónicos en Radio Programas de México; más adelante se centraron en la programación de televisión y las ventas de tecnología. El estado operaba una estación de radio ocasional, principalmente con programación cultural como Radio Educación, fundada en los años setenta. En general, la radio estaba controlada por capitalistas ricos, que se aseguraban de que las estaciones radiales difundieran un mensaje altamente comercial y conservador.

Por lo que se refiere a la televisión, desde su nacimiento en 1955 fue casi un monopolio en manos del capital privado, aunque había unos pocos canales manejados por el estado. Durante años, el mayor monopolio privado en televi-

[76] El autor agradece a Geoffrey Fox las informaciones sobre algunas fuentes útiles sobre los medios de comunicación de México.

[77] En 1981, por ejemplo, la casa editorial izquierdista Nueva Imagen tuvo que reducir a la mitad su programa de publicaciones porque PIPSA le retuvo el papel y el gobierno requisó el papel importado en el puerto de Veracruz.

sión fue Televisa, subsidiada por el gobierno y propiedad de un multimillonario leal al PRI. Poco antes de su muerte en 1997, la segunda mayor cadena de México, TV Azteca, también conservadora en su tendencia, empezó a quitarle espacio al mercado de Televisa. TV Azteca fue privatizada en 1993. La revista *Forbes* situó tanto al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, como al propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, entre los individuos más ricos del mundo. Salinas no era pariente del ex presidente, aunque en 1996 admitió haber intercambiado dinero con Raúl Salinas. Tuvo que defenderse públicamente, puesto que era del dominio público que muchos periodistas eran comprados habitualmente por los cárteles de la droga mexicanos, y de ahí el término "narco-prensa".[78]

Había docenas de estaciones de televisión comercial más pequeñas. Además de poseer el control accionario de diversas editoriales y del nuevo Museo Rufino Tamayo de arte moderno, el grupo Alfa de Monterrey poseía importantes participaciones económicas en muchas de las principales cadenas. Las telenovelas gozaban de elevados *ratings*, aunque los informes acerca de los escándalos de la vida real en los años de Salinas les ganaron momentáneamente en popularidad. TV Azteca emitía una popular telenovela llamada "Nada personal" que retrataba a la clase política mexicana como malvados y sin sentimientos.

El periodismo independiente en México era un negocio peligroso. Escuadrones de la muerte, de los que se sospechaba estaban vinculados con el ejército y la policía, asesinaron a treinta y seis periodistas sólo en los ochenta. El asesino del periodista Manuel Buendía resultó ser el mismo individuo encargado de su protección, el director de la policía de seguridad nacional. Los escuadrones de la muerte siguieron atacando a periodistas en los noventa. En junio de 1990, el columnista de política internacional Jorge Castañeda y su asistente, Mariana Rodríguez, recibieron amenazas de muerte, provocando protestas internacionales. Siete años más tarde, la conservadora Inter-American Press Society declaró a México como el país que más preocupación le había causado en 1997, debido a las agresiones contra periodistas y a la falta de libertad de prensa.

A pesar de todos los obstáculos, México podía alardear de poseer numerosos periódicos, revistas y editoriales reconocidas internacionalmente y de gran calidad informativa, incluyendo a muchos de los citados en las notas de este libro. El diario de la ciudad de México *La Jornada* era ampliamente leído nacional e internacionalmente, incluyendo su edición en Internet. Siglo XXI era considerada por muchos la mejor editora de libros en español, incluyendo numerosas obras traducidas de autores de fuera de México.

En una escala mucho más modesta, también florecían unos innovadores "medios alternos". El periódico obrero, de ocho páginas, *Corre la Voz*, por ejemplo, contenía muy legibles y excelentes análisis de los principales acontecimientos políticos y sociales y se vendía en el sistema de transporte metropolitano

[78] *Latin American Weekly Report*, 29 de julio de 1997. El autor agradece a Rose Gandy por llamar su atención sobre la "narco-prensa", que consiste principalmente en artículos e informaciones que sirven a los intereses de los cárteles de la droga, por ejemplo, defendiendo a un gobernador o a un general confabulados con narcotraficantes.

del DF y otros lugares por trabajadores en huelga que conservaban las ganancias. En 1997 su circulación alcanzó una cifra de entre 60 000 y 100 000 ejemplares. El "Canal 6 de Julio" de la capital producía videocasetes sobre neoliberalismo, matanzas e insurgencia guerrillera que constituían reportajes ejemplares.

La fuerza laboral se reanima

A mediados de los años noventa, el movimiento sindical mexicano, casi dormido, empezó a despertar, animado por el levantamiento zapatista y más tarde por los triunfos electorales del PRD.

Gran parte del activismo obrero era resultado de las condiciones de trabajo cada vez más deterioradas y de la rápida tasa de pérdidas de empleo debidas al neoliberalismo. Los trabajadores simplemente sentían que les quedaba muy poco que perder. El ingreso per cápita real de México en 1998 era inferior al de 1960.[79] Los trabajadores industriales, durante mucho tiempo entre los peor pagados del mundo, estaban experimentando drásticas reducciones en los salarios reales y la tercera tasa más elevada del mundo en accidentes laborales. La situación empeoró más todavía a fines de 1997 por el inadecuado aumento del salario mínimo en un equivalente de 3.20 dólares por día, con lo que el gobierno dejó a la mayor parte de los trabajadores con el poder de compra más bajo desde 1935.

La muerte a los noventa y siete años del zar sindical del PRI Fidel Velázquez debilitó aún más el Congreso del Trabajo (CT) dominado por el PRI y a su principal organización, la CTM. La muerte de Velázquez el 21 de junio de 1997 facilitó en agosto la separación de seis grandes sindicatos del CT que pocos meses después se unieron a otros sindicatos para formar una organización rival de importancia considerable: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Otro líder charro leal al PRI, Leonardo Rodríguez Alcaine, de 76 años, sucedió a Velázquez como jefe de la CTM.

Las acciones de desafío por parte de trabajadores descontentos a mediados de los noventa se enfrentaron a los mismos obstáculos que la nueva militancia sindical había encontrado en los setenta. Como ya señalamos en el capítulo 5, la Ley del Trabajo de México hacía que las huelgas fuesen casi imposibles. Además, la ley de requisa frecuentemente utilizada (equivalente mexicano a la Taft-Hartley Act de Estados Unidos) permitía al estado tomar el control de las industrias afectadas por la huelga que considerase vitales para los intereses de la nación. En el estado de Nuevo León, sede del conservador y burgués grupo Monterrey, cualquier huelga era automáticamente declarada por el gobierno del estado como "acto de traición". La tan incorrectamente llamada Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), con base en Monterrey, servía lealmente a los intereses de la empresa. Declaraba contar con 280 000 miem-

[79] Juan Enríquez (investigador de Harvard), conferencia en el CUNY Bildner Center, Nueva York, 20 de marzo de 1998.

bros en los estados norteños de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Entre tanto, los pistoleros de la CTM seguían golpeando a los trabajadores que intentaban organizar sindicatos verdaderamente democráticos o independientes.

Los conductores de autobuses encontraron toda clase de problemas cuando organizaron un sindicato independiente, el Sindicato de Trabajadores de Ruta 100 (SUTAUR), para luchar contra la privatización de la línea de autobuses Ruta 100 en la ciudad de México. El gobierno arrestó a los líderes del SUTAUR y congeló los fondos del sindicato. Cuatro miembros del SUTAUR fueron asesinados. Pero con ayuda de grupos de apoyo en setenta países y una resolución en la convención de 1995 del AFL-CIO que apoyaba su lucha, el sindicato consiguió una victoria parcial. Firmó un acuerdo con la administración de la ciudad. Cuando las promesas de empleo del gobierno fueron rotas, el sindicato estableció cooperativas para manejar tres rutas de autobuses urbanos. En mayo de 1998, un juez sentenció a doce líderes del SUTAUR a nueve años de cárcel.

Después del colapso económico de 1994-1995, empezaron a producirse acciones sindicales un poco más frecuentemente. Empezaron como "motines por alimentos". Los campesinos robaron trenes de carga de frijoles y maíz en Veracruz y otros estados. A mediados de 1996, cerca de 10 000 trabajadores, dirigidos por obreros agrícolas emigrantes mixtecos y triquis, se manifestaron por sus derechos humanos en San Quintín, Baja California. Ocuparon la ciudad, levantaron barricadas y asaltaron almacenes de alimentos. Más tarde, en el estado relativamente rico de Nuevo León, la gente usó tanques de gas propano para bloquear un tren y robar su carga de cereales. Miembros del sindicato de empleados del gobierno de la ciudad de México (con 120 000 miembros) ocuparon las oficinas del sindicato para exigir democracia sindical y mejores servicios de salud para los 4 millones de ciudadanos que padecían pobreza extrema.

En 1997-1998, indios y campesinos emprendieron cada vez con mayor frecuencia el bloqueo de carreteras para exigir los prometidos envíos de alimentos, o para protestar contra otras fallas del gobierno. Los trabajadores de las secretarías de Salud y de Agricultura iniciaron paros laborales y manifestaciones públicas contra las medidas de austeridad. Los médicos de Ciudad Juárez hicieron un paro de dos horas para protestar por el asesinato al estilo mafioso de cuatro colegas. Miles de pensionistas y viudas organizaron actos de desobediencia civil para protestar por la privatización del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y por sus inadecuadas pensiones y otros beneficios. Trabajadores del sindicato petrolero en varios locales condujeron simultáneamente protestas demandando el voto secreto en las elecciones sindicales. Unos 400 trabajadores de la industria azucarera tomaron un ingenio azucarero en Morelos para protestar contra las amenazas de despidos de los nuevos propietarios privados. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME, 36 000 miembros), afiliado a la CTM pero notablemente democrático, organizó gigantescas manifestaciones para impedir la privatización de las compañías eléctricas públicas, aunque el desarrollo de plantas financiadas privadamente y cogestionadas y la subcontratación no sindical prosiguieron.

Las ocupaciones de edificios, las sentadas, y otros medios de desobediencia se convirtieron en sucesos cotidianos. El 5 de mayo de 1997, muchos grupos que estaban siendo bloqueados para impedirles marchar hasta la embajada de Estados Unidos para protestar contra la visita del presidente Clinton, se sentaron en las calzadas y aceras. Estaban indignados por las políticas imperialistas y porque el gobierno mexicano comenzase la visita dentro de una fiesta nacionalista (en honor de la victoria militar contra los franceses en Puebla). Algunas de las acciones sindicales más importantes y atrevidas tuvieron lugar en fábricas y plantas maquiladoras propiedad de extranjeros y recibieron apoyo de los principales sindicatos estadunidenses y canadienses.

Una vez más, las mujeres estaban en primera línea de la lucha por las reformas. Las mujeres constituían más del 35% de la fuerza laboral en el sector formal de la economía, y una mayoría en el sector informal, en el que labora la mayoría de los mexicanos. Los maestros organizaron grandes huelgas y acciones de protesta en muchos estados. Muchos líderes de estas acciones pertenecían al sindicato independiente de maestros CNTE, constituyendo cerca del 20% de los miembros del la gigantesca unión sindical de trabajadores de la educación SNTE. Aliados con el FZLN zapatista, la CNTE trabajaba en estrecha colaboración con los deudores del movimiento El Barzón, el de ciudadanos urbanos pobres Conamup, y la Coalición Intersindical Primero de Mayo. Como ya señalamos antes, las mujeres indias y campesinas se destacaban en la dirección de muchas, aunque naturalmente no todas, las luchas rurales, particularmente en Chiapas. Un movimiento entre las aproximadamente 1.2 millones de trabajadoras domésticas en México comenzó igualmente, exigiendo mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo.

Las mujeres tuvieron una fuerte presencia en la dirección y membresía del PRD, por el que las mujeres votaban mayoritariamente. La senadora Rosa Albina Garavito Elías, antigua guerrillera, era una de las principales dirigentes del PRD. Las mujeres también destacaban en las coaliciones políticas en pro de la democracia como Alianza Cívica. El papel de las mujeres en las muchas organizaciones de derechos humanos en México era legendaria. La nueva organización sindical de tendencia reformista UNT se hizo posible en gran parte por la militancia de las mujeres en las ciudades, zonas rurales y comunidades. Las mujeres constituían mayoría en los principales sindicatos de la UNT.

Una organización de la UNT era el Frente Auténtico del Trabajo (FAT, fundado en 1960), que durante largo tiempo luchó por un sindicalismo independiente. La mayoría de sus 50 000 miembros eran mujeres. Provenían de sindicatos independientes, cooperativas, organizaciones de trabajadores agrícolas y grupos comunitarios urbanos. El FAT desempeñó un papel clave en numerosas luchas internacionalistas, sindicales, en pro de la democracia y en contra del TLC, estimuladas en parte por líderes sindicales feministas como Bertha Luján, una de sus tres dirigentes nacionales. El FAT exigía legislación laboral para servir a las necesidades de las mujeres trabajadoras, tales como disponer de servicios de guarderías, seguridad personal, licencias por maternidad y familiares y trans-

portes públicos. Las organizadoras de FAT y otras más documentaron los abusos contra las mujeres en las maquiladoras, incluyendo frecuentes violaciones, la exposición a materiales tóxicos, la falta de paga igual o de promociones, revisiones degradantes para detectar embarazos y dimisiones forzadas de mujeres embarazadas. Estas practicas violaban la Constitución mexicana y la Ley del Trabajo que prohíben la discriminación por género, y posteriormente un comité laboral colateral del TLC que se ocupó del caso falló en favor del FAT.

El 8 de marzo de 1998, las organizaciones de mujeres de México conmemoraron el Día Internacional de la Mujer celebrando una reunión de dos días de duración en el Congreso con mujeres políticas. Sus primeros movimientos habían aumentado la participación de mujeres en el Congreso hasta cerca del 20%. La asamblea resolvió demandar una aplicación más estricta de la ley de 1990 contra el hostigamiento sexual y redactar una nueva ley para eliminar las revisiones y despidos por embarazo y aplicar sanciones a los empleadores que despidieran a mujeres embarazadas. También exigieron atención diurna a los niños y otras demandas. Pidió acciones afirmativas en las posiciones de toma de decisiones en los sindicatos y centros de trabajo. Hubo diferencias, sin embargo, acerca de la despenalización del aborto y en algunas cuestiones de derechos laborales. Las mujeres aplaudieron la nueva ley contra la violencia doméstica que estaba siendo debatida en el Congreso. Un mitin de sesenta organizaciones de mujeres se celebró en el Zócalo capitalino, bajo la bandera "Sin derechos para las mujeres, no hay derechos humanos."[80]

Una importante organización nueva para la reforma sindical, anterior a la UNT, fue "el Foro", o Foro Sindical Nacional, así llamado a resultas de un foro sindical realizado en febrero de 1995 y conducido por un grupo de sindicalistas oficiales, semioficiales e independientes. Al salir de esa reunión, el Foro dijo que se oponía al corporativismo y al charrismo. El Foro combatió la privatización del sistema de seguridad social que tuvo lugar por esas fechas. La privatización estaba provocando el despido de algunos de los 350 000 trabajadores del sistema de salud administrado por el IMSS. Además, la privatización del IMSS estaba dejando a 11 millones de trabajadores con pensiones, atención de salud y cobertura de incapacidades insuficientes.

Aunque el Foro se opuso a las medidas de austeridad inspiradas por el FMI en 1995, en 1997 firmó el pacto económico neoliberal entre la mano de obra, la empresa y el gobierno. El sindicato de telefonistas del Foro (Telmex) estaba a favor de patrones de "modernización" tales como "contratos flexibles" y pactos laborales con las empresas. El sindicato de electricistas del Foro (SME) se

[80] Los supervisores varones en algunas maquiladoras inspeccionan habitualmente las toallas sanitarias de las empleadas para verificar que están menstruando. En 1997, el FAT y otros grupos de derechos humanos se unieron a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México para presentar una petición sobre "Discriminación sexual en el sector de maquiladoras de México" ante la National Administrative Office (NAO) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, bajo el acuerdo colateral del TLC sobre el trabajo. En enero de 1998, NAO resolvió a favor de los demandantes y llamó a consulta ministerial.

opuso a esas medidas neoliberales. Entre los líderes del PRI implicados en el Foro estaba uno de sus tres fundadores, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE designada por Salinas que más adelante pasaría a hacerse cargo del sector "popular" del PRI, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Una coalición sindical y comunitaria más radical que el Foro era la Coalición Intersindical Primero de Mayo, o "Intersindical", fundada en marzo de 1995 para organizar una manifestación de oposición el 1° de mayo como alternativa al tradicional homenaje de la CTM al "señor presidente" en el mismo Zócalo. Los choferes de autobuses del SUTAUR y su aliado, el izquierdista Movimiento Proletario Independiente, estaban entre los principales fundadores de la Intersindical.

A diferencia de algunas partes del Foro, la Intersindical no deseaba actuar dentro de los límites de la agenda neoliberal. Buscaba ir más allá de las batallas defensivas de los trabajadores sindicalizados llamando a un proyecto independiente que abarcara a todos los mexicanos. Compuesto por diversas corrientes marxistas, anarquistas y populistas, la Intersindical incluía a muchos activistas del FAT y otros sindicatos, los deudores del movimiento El Barzón, la CNI de los pueblos indígenas, segmentos de los movimientos de habitantes urbanos y obreros rurales y diversos sindicalistas pro democracia y facciones de partidos izquierdistas.

El gobierno canceló el 1° de mayo de 1995 porque temía un posible estallido de protestas entre los trabajadores de base, que desde 1981 a menudo habían montado marchas militantes de protesta en el 1° de mayo. La Intersindical siguió adelante con su propio desfile del 1° de mayo en 1995, incorporando a cerca de medio millón de trabajadores. El mismo esquema de 1° de mayo no oficial continuó hasta 1999. Cada 1° de mayo, la Intersindical y el Foro organizaban sus propios desfiles separados del 1° de mayo. Las marchas de 1997 reunieron por lo menos a 250 000 trabajadores anticharros de todas las edades, molestos pero confiados.

La Intersindical formó una alianza con el EZLN y el FZLN. En el otoño de 1996, junto con el EZLN patrocinó la "Consulta Nacional sobre Trabajo y Libertad Sindical". A diferencia del PRD, que pensaba que la democracia se podía conquistar mediante elecciones, la Intersindical creía que era necesaria la insurgencia cívica para la creación de una democracia genuina. Ponía su fe en el FZLN, las movilizaciones de masas y la lucha continua por democracia interna en los sindicatos y otras organizaciones de masas.

La división largamente prevista en la CTM ocurrió después de que su líder por 40 años, Fidel Velázquez, muriera a mediados de 1997. El siguiente mes de noviembre, la UNT celebró su convención fundacional. Separándose de los charros de la CTM y el CT, la UNT decía representar a 1.5 millones de trabajadores en 300 organizaciones de obreros y campesinos. Los grupos campesinos se caracterizaban por contar entre sus miembros más indígenas y mujeres que en el pasado, y por haber creado numerosas cooperativas y explotaciones agrícolas de propiedad colectiva para combatir la constante privatización del campo.

La creación de la UNT tendió a dividir y marginar a otras organizaciones sindicales como el Foro y la Intersindical. Por ejemplo, la ex dirigente del SNTE de maestros, Elba Esther Gordillo, desempeñó un papel decisivo en mantener al SNTE y a otros sindicatos del Foro dentro del CT oficial. El SME de los electricistas también permaneció fuera de la UNT. Por otra parte, Benedicto Martínez Orozco del FAT, fundador del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal (1991, STIMAHCS), pasó a ser uno de los siete vicepresidentes de la UNT.

La UNT pedía la democratización del estado mexicano; el fin del corporativismo en el movimiento sindical; una nueva política económica (en 1998 no respaldó el pacto económico neoliberal entre el trabajo, la empresa y el gobierno); apoyo a las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas, y mayor representación femenina en las direcciones sindicales. La UNT tenía tres presidentes. Los tres eran hombres. Irónicamente, todos ellos provenían de grandes sindicatos notorios por su militante membresía femenina. Y cada uno de los presidentes de la UNT provenía de los sindicatos que constituían la principal fuerza de la UNT. Los presidentes y sus sindicatos eran: el líder del sindicato de Telmex Francisco Hernández Juárez; Antonio Rosado García, jefe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (SNTSS) con 350 000 miembros, muy criticado por su falta de práctica democrática, y Agustín Rodríguez Fuentes, líder de los 100 000 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma (STUNAM). Los dos primeros hombres eran miembros del PRI, mientras que el tercero simpatizaba con el PRD.

Hernández Juárez era seguramente el principal fundador tanto del Foro como de la UNT. Estaba a favor de un "nuevo sindicalismo" anticharro que sin embargo seguiría cooperando con la empresa y las fuerzas del neoliberalismo. Respaldó la privatización de Telmex y había representado la fuerza principal detrás de la creación de la Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios (Fesebes) que reclamaba este "nuevo sindicalismo". Aunque él lo negaba, su "nuevo sindicalismo" se parecía a la idea de la "nueva cultura laboral" promovida por el CT, la CTM, el Banco Mundial y las transnacionales de todo el mundo.

En 1998, Hernández Juárez aceptó reunirse con los líderes de la CTM para elaborar un acuerdo sobre revisiones a la Ley del Trabajo que estaba siendo debatida en el Congreso, que pudiera crear un compromiso en respaldo tanto del "nuevo sindicalismo" como de mayor autonomía sindical respecto del corporativismo —lo que algunos analistas especulaban podría convertirse en una especie de neocorporativismo de patrones amigables. Independientemente de lo que sucediera con la Ley del Trabajo, estaba claro que la UNT tenía el potencial para desempeñar, en una nueva presidencia reformista de alguien como Cárdenas del PRD, un papel semejante al que la CGOCM de Vicente Lombardo Toledano representó para el presidente Lázaro Cárdenas en los años treinta (véase el capítulo 4).

El FAT celebró su undécima convención nacional a fines de noviembre de 1997. Fue conducida más democráticamente que la convención de la UNT. El FAT tenía una alianza informal con el PRD. Subrayaba una nueva "globalización desde abajo" de los movimientos obreros, campesinos y sociales. Ya había venido

practicando esto a través de la Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio. El FAT también hizo avanzar a las mujeres más hacia el primer plano de su dirigencia, creando una Organización de Mujeres.

El historiador del trabajo y sindicalista Dan La Botz señala el crítico papel de las mujeres en la reactivación del sindicalismo organizado:

> Todos los trabajadores mexicanos y todos los trabajadores de Canadá y Estados Unidos —pues nosotros ya formamos parte del mismo movimiento laboral— tienen una deuda de gratitud con las mujeres mexicanas. De no haber habido movimiento de mujeres, no hubiera podido haber movimiento de reforma. El ascenso de las mujeres fue también el ascenso de la clase trabajadora, ha sido el ascenso de todos nosotros.[81]

México experimentó sólo treinta y nueve huelgas reconocidas oficialmente en 1997, pero 1998 comenzó con una explosión. En enero, 150 trabajadores agrícolas destruyeron las construcciones y los equipos de una planta empacadora en el estado noroccidental de Sinaloa para protestar contra las retenciones de cuotas sindicales de la CTM y para exigir transportes y servicios médicos. En febrero, 2 000 trabajadores de la industria del automóvil en Diesel Nacional (Dina) ganaron una huelga de un día de duración que tuvo como resultado un inusual aumento salarial de 24.5%. Empleados de procesadoras de alimentos, conductores de camiones y otros obreros industriales también hicieron huelgas durante los cinco primeros meses de 1998. En mayo, los trabajadores organizaron piquetes en las plantas congeladoras de alimentos de Irapuato, Guanajuato, para protestar por incorrectos repartos de beneficios de la empresa, bajos salarios, largas jornadas laborales y malas condiciones de trabajo. La empresa, con base en Texas, respondió despidiendo a veintidós trabajadores que exigían un sindicato independiente.

Una huelga no autorizada por el sindicato, de tres semanas de duración, fue organizada por miembros del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles Mexicanos (STFRM) a mediados de febrero, contra la privatización de los ferrocarriles y los despidos y abusos que se seguían. Un movimiento de base por una mayor democracia sindical había puesto objeciones a la forma como el líder del STFRM, Víctor Flores Morales, había conseguido el poder a principios de los años noventa, después de que sus rivales murieron o fueron asesinados. Se opusieron a su reelección en la convención del STFRM de noviembre de 1997. Más que nada, los miembros de base disidentes objetaban la manera como Flores Morales había seguido adelante con la venta de algunos ferrocarriles a extranjeros y los nuevos contratos "flexibles" que estaban contribuyendo al despido de cientos de miles de obreros.

[81] *Mexican Labor News Analysis* 3, número especial sobre el Día Internacional de la Mujer (marzo de 1998). Gran parte de la información sobre las mujeres en esta sección se encuentra elaborada allí.

La huelga ilegal fue iniciada por 3 700 ferrocarrileros en Empalme, Sonora, contra la empresa privada Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex, un conglomerado de capitalistas mexicanos y compañías extranjeras como la gigante estadunidense Union Pacific). Los huelguistas muy pronto obtuvieron apoyo del Frente Amplio de Organizaciones Sociales fundado por grupos de indios yaquis. Las familias de los huelguistas y sus simpatizantes bloquearon las carreteras, de modo que todo el tráfico terrestre se interrumpió. Las principales fábricas de todo el país se vieron afectadas al no recibir sus suministros. Entre 2 000 y 3 000 mujeres y niños desfilaron por Empalme, golpeando cacerolas vacías para simbolizar el hambre causada por el desempleo. La huelga estimuló otras luchas obreras contra la privatización, y Flores Morales no tuvo más remedio que apoyarlas. Finalmente Ferromex acabó la huelga aceptando conservar algunos de los empleos de aquellos afectados por la privatización.[82]

El CT se vio dividido, endeudado y perdiendo miembros frente a la UNT. De manera que a principios de 1998 decidió utilizar algunas de las banderas agitadas por los reformadores que le eran contrarios. Habló de oponerse al TLC y dijo que reanudaría la celebración anual del 1° de mayo. Su grupo principal, la CTM, prometió organizar a los campesinos (muchos de los cuales estaban uniéndose a la UNT) y sindicalizar a más trabajadores de maquiladoras. Por desgracia para el CT, en abril, un senador de la oposición, entre otros, descubrió varios documentos del gobierno que demostraban sin duda alguna el constante uso por parte de los gobiernos del PRI de espías obreros, agentes dobles y asesinos a sueldo para socavar la militancia laboral. De hecho, las personas que buscaban trabajo como matones seguían siendo visibles todos los días en el edificio de conciliación en donde debía suponerse que las disputas laborales se arreglasen pacíficamente.[83]

En medio de todos estos problemas para la fuerza de trabajo oficial, Flores Morales se unió al jefe de la CTM Rodríguez Alcaine para llevar a cabo un golpe contra la dirigencia del CT. Entre los dos hombres depusieron al presidente del CT que tenía tendencias reformistas y procedía del gran sindicato de empleados públicos FSTSE, el cual, al igual que la CTM, contaba con cerca de una tercera parte de los miembros del CT. Le sustituyeron por una persona más conservadora identificada con el grupo Foro dominado por líderes del SNTE. Numerosos sindicatos miembros del CT se retiraron disgustados. La organización satélite del PRI, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que contaba con cerca del 7% de los miembros del CT, dijo que no reconocería al nuevo presidente al que llamó "golpeador". El Sindicato Mexicano de Electricistas anunció que pronto se separaría del CT.[84]

[82] Dan La Botz, "The story behind the Mexican rail workers' wildcat", *Labor Notes*, mayo de 1998, pp. 8-9; *Mexican Labor News Analysis* 2, núm. 21 (16 de noviembre de 1997) y 3, núm. 6 (16 de marzo de 1998).

[83] *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 9 (2 de mayo de 1998).

[84] *Ibid.*; *La Jornada*, 14 de abril de 1998. Sobre los cálculos de miembros del CT, véase Warnock, *Other*, p. 117.

El 1º de mayo, el CT no condujo una marcha sino que celebró un mitin de 35 minutos con cientos de miles de trabajadores que habían sido amenazados con perder un día de paga o algo aún peor si no asistían. El presidente Zedillo se dirigió a los silenciosos trabajadores en el mitin del Zócalo y luego se retiró rápidamente. Luego, desfiles entusiastas organizados por la Intersindical y la UNT entraron en escena, igualando o aún superando el número de la dispersa y descontenta multitud del CT. La marcha de la Intersindical fue seguida por cerca de 100 000 trabajadores, mientras que la de UNT contó cientos de miles. Los tiempos estaban cambiando.[85]

A principios de junio de 1998, hubo otras dos huelgas aún más importantes. Los 1 200 miembros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Metal y la Industria de Transformación ganaron una huelga de cinco días por un importante aumento salarial en la antigua planta nacional del acero en Ciudad Sahagún, Hidalgo. El Sindicato de Pilotos y Sobrecargos de Aeroméxico consiguió una victoria parcial en una huelga de seis días contra su empresa. Las organizaciones de mujeres y muchos otros sindicatos respaldaron la huelga, que también recibió cartas de apoyo de asistentes de vuelo de otros 170 países. La huelga tuvo éxito en atraer al sindicato a 300 empleados "de confianza" o administrativos, pero sólo consiguió un modesto aumento salarial.

"Guerras fronterizas"

Históricamente, cada vez que llegaban tiempos económicamente difíciles a Estados Unidos los capitalistas trataban de dirigir la culpa del desempleo sobre los inmigrantes, convirtiéndolos en chivos expiatorios por "ocupar puestos de trabajo de los norteamericanos". Las recesiones de mediados de los años setenta, principios de los ochenta y principios de los noventa no fueron diferentes. Los medios de comunicación estadunidenses y los funcionarios públicos agitaron el "espantajo de los morenos" contra el grupo inmigrante más numeroso y vulnerable, los mexicanos. La campaña contra "los morenos" incluyó a los centroamericanos desde fines de los ochenta. Para los noventa, todos los inmigrantes latinos fueron convertidos en blanco. Para entonces, su número había alcanzado una cifra equivalente a la quinta mayor nación latinoamericana. De un cálculo de 5 millones de inmigrantes "indocumentados" en Estados Unidos a fines de 1996, unos 2.7 millones (el 54%) eran mexicanos; 40% de todos los "indocumentados" o "extranjeros ilegales" residían en California.[86]

Durante la nueva ola de nativismo o de aniquilación de inmigrantes, los políticos de Estados Unidos procuraban acumular votos advirtiendo contra una

[85] *Ibid.*; *New York Times*, 2 de mayo de 1998.

[86] Estas cifras son del INS, que contó como "indocumentados" sólo a aquellas personas que habían permanecido en el país "ilegalmente" por más de doce meses. Véase Jorge del Pinal y Audrey Singer, "Generations of diversity: Latinos in the United States", *Population Bulletin* 52, núm. 3 (octubre de 1997), pp. 20-23.

invasión de "extranjeros ilegales" y lo que el presidente Reagan llamaba "gente de a pie". Los 3 000 kilómetros de frontera con México se convirtieron en una auténtica zona de guerra. Con el pretexto de combatir el narcotráfico y detener el flujo de "ilegales", el gobierno de Estados Unidos militarizó la frontera en una versión doméstica de la doctrina de "conflictos de baja intensidad" que estaba instrumentando en zonas extranjeras de "inestabilidad" o que intentaban la revolución social (por ejemplo, Nicaragua y El Salvador en los años ochenta).

Informes acerca de tiroteos contra inmigrantes por la Patrulla Fronteriza estadunidense y el racista Ku Klux Klan partidario de la supremacía blanca se volvieron asuntos cotidianos. El apaleamiento por los oficiales del alguacil mayor de un condado californiano de dos indefensos inmigrantes en California, uno de ellos mujer, fue trasmitido por la televisión de costa a costa. Inmigrantes sospechosos de ser "ilegales" detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, o lo que los inmigrantes latinos llaman "la migra") eran frecuentemente golpeados; algunos eran violados. Las estaciones de televisión de San Diego emitían programas informativos especiales sobre pandillas de adolescentes blancos que disparaban contra mexicanos "como deporte". Numerosos refugiados políticos "ilegales" haitianos y centroamericanos, incluyendo niños, que huían de las dictaduras o de las guerras contrarrevolucionarias apoyadas por Estados Unidos en sus países de origen, así como algunos inmigrantes indocumentados mexicanos, eran arrojados a "centros de detención". Los periodistas y observadores de derechos humanos más importantes dirigieron su atención a los campos de concentración. En ocasiones, los oficiales de la patrulla fronteriza dispararon sus armas en dirección al territorio nacional mexicano, despertando sonoras protestas del gobierno de México que por lo demás no quería o no podía hacer nada acerca de las condiciones de vida que empujaban a sus ciudadanos hacia "el norte".

En 1997, la patrulla marítima de Estados Unidos que respaldaba a agentes federales en su operación antidroga en Texas disparó por la espalda y mató a un adolescente norteamericano de ascendencia mexicana. Un año después, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe condenatorio sobre las violaciones a los derechos humanos de la Patrulla Fronteriza, señalando que la agencia había reconocido sus problemas de abusos creando un departamento asesor cuatro años antes pero que no había mejorado su conducta en lo más mínimo. En lugar de eso, el informe de AI concluía: "Hay el sentimiento de que los oficiales del INS actúan con impunidad" y los agentes a menudo dan "trato cruel, inhumano o degradante" a las personas que detienen. El informe de AI encontró eco en la organización estadunidense de derechos humanos Americas Watch, que lleva años condenando lo que llama la "justicia fronteriza" del INS.[87]

[87] *New York Times*, 31 de julio de 1997 y 21 de mayo de 1998. Americas Watch censuraba regularmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos por no investigar cientos de quejas bien documentadas en contra de la patrulla fronteriza. Su informe de 1997 decía que las políticas del INS permitían el arresto de menores sin acceso a asistencia legal y que creaba condiciones que propiciaban los tiroteos, palizas y agresiones sexuales de la Patrulla Fronteriza contra las personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales. Véase *La Jornada*, 5 de diciembre de 1997.

Según el Centro Binacional de Derechos Humanos con base en Tijuana, 1 500 mexicanos murieron en el peligroso paso migratorio durante los once primeros meses de 1997. Pero la naturaleza de la vida económica en ambos países incrementa el flujo de mano de obra mexicana hacia el norte, bien sea a las zonas de maquiladoras o a Estados Unidos y Canadá. Como ya señalamos antes, el 27% de la fuerza laboral mexicana a mediados de los noventa consistía o de trabajadores desempleados o que trabajaban en "el norte". Además, a medida que aumentaba la represión en México, también lo hacía el número de mexicanos que buscaban refugio en Estados Unidos o Canadá. En un periodo de seis meses de 1996 a 1997, los funcionarios estadunidenses recibieron 13 313 solicitudes de asilo político por parte de mexicanos.[88]

Varios factores básicos plantaron cara a los estereotipos negativos que circulaban en Estados Unidos acerca de los mexicanos y otros inmigrantes latinos. Los inmigrantes *no eran* "una sangría para los contribuyentes estadunidenses". Nunca fueron pasibles de recibir servicios de bienestar social (a no ser que llevasen allí más de cinco años). Nunca recibían gran cosa de los impuestos de Estados Unidos y siempre era mucho más lo que pagaban al sistema de lo que tomaban de él. Un estudio realizado en 1994 por el *think tank* conservador de Rand Corporation encontró que los impuestos anuales pagados por los inmigrantes sumaban un total de entre 25 y 30 mil millones de dólares *más* que los costos de los servicios que recibía. De hecho, los pagos de la Seguridad Social aportados por los trabajadores inmigrantes representaban una parte importante del fondo de depósito de ese sistema —hasta 80 mil millones de dólares por año en la década de los ochenta según algunos estudios. Un informe de la Fundación Ford realizado en 1984 declaraba: "A medida que más blancos alcanzan la edad para Seguridad Social, su sostén dependerá de las cuotas para Seguridad Social pagadas por la fuerza de trabajo crecientemente hispana y negra."[89]

La reforma de las servicios sociales de Estados Unidos llevada a cabo en 1996 aplicaba más del 40% de las reducciones del presupuesto federal a los inmigrantes *legales* que previamente habían calificado para recibir dichos servicios, un grupo que representaba sólo un 5% de los que efectivamente recibían los beneficios de los servicios sociales. Según el Urban Institute, la reforma de los servicios sociales arrojó a 1 100 000 niños y a 1 500 000 adultos más, en su mayoría inmigrantes, a la pobreza extrema. (Las mujeres y los niños también cargaban con el golpe de las revocaciones en los noventa de los decretos de derechos civiles de "acción afirmativa".) En violación a la decisión de 1971 de la Suprema Corte que había invocado la cláusula de "protección igual" de la 14a. Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para prohibir a los estados negar los beneficios de los servicios sociales a los inmigrantes, la reforma de éstos eliminaba los beneficios para *todos* los residentes legales que no fuesen aún ciudadanos.

[88] Véase *Excélsior*, 19 de junio de 1997.

[89] Ford Foundation, *Hispanics: challenges and opportunities* (Nueva York, junio de 1984), p. 20. Para más información sobre las contribuciones de los inmigrantes a la economía, véase Gregory DeFreitas, *Inequality at work* (Nueva York, Oxford University Press, 1991), pp. 209-31, 248-51.

Los principales beneficios negados eran el Supplemental Security Income (SSI), los cupones para alimentos y Medicaid. Esto golpeaba más duramente a los latinos en especial porque, según la Oficina del Censo, cerca de un tercio de los latinos residentes en Estados Unidos no eran ciudadanos estadunidenses. El 71% de la población latina "legal" (excluyendo a los puertorriqueños) era de ascendencia mexicana (18 de 25.3 millones).

Más que nunca antes, los mexicanos y otros inmigrantes estaban perdiendo los beneficios por los que habían pagado impuestos, experimentando una cruel y despiadada forma de "imposición sin representación". Los empleadores se beneficiaban puesto que la reforma de los servicios sociales dejaba a los trabajadores más ansiosos por trabajar aunque ganasen salarios inferiores a la norma y menos inclinados a sindicalizarse o protestar, por temor a ser despedidos sin compensaciones de desempleo u otros beneficios sociales.

Por lo que respecta a la educación, México pagaba los costos de educar a los trabajadores inmigrantes que *luego* se trasladaban al norte y contribuían a la economía de Estados Unidos. Contando *sólo* los trabajadores indocumentados, a principios de los años noventa esto ahorró solamente a un estado, California, 3 200 millones de dólares de los costos anuales por educación de la fuerza laboral. Los mismos trabajadores indocumentados contribuían aproximadamente con un 7% del producto estatal bruto de California. Los impuestos deducidos de los salarios de los inmigrantes "indocumentados" ayudaban a sostener las escuelas públicas en las que estudiaban sus hijos. Pero en 1994 los votantes de California aprobaron la Proposición 187 que prohibía a los no ciudadanos (incluyendo a los inmigrantes "legales"), asistir a las escuelas públicas y prohibía a los "ilegales" obtener servicios de salud públicos (excepto en casos de emergencia). Cuatro años más tarde el electorado californiano aprobó la Proposición 227, ordenando el fin de la educación bilingüe. Ambas propuestas eran inconstitucionales y fueron paralizadas por los tribunales.

Para mediados de los setenta, los inmigrantes mexicanos no eran por lo general ni los menos educados ni los más pobres de la población de México.[90] Las causas principales que les forzaban a emigrar no eran ni la falta de escuelas ni la pobreza. Las causas principales eran la falta de empleos con salarios decentes en México y, aún más importante, la creciente demanda de los empleadores estadunidenses de mano de obra inmigrante mexicana después de la recesión de mediados de los setenta. Enfrentando una crisis de sobreproducción y tasas de ganancia decrecientes, el capital estadunidense intentaba restructurar

[90] Los mexicanos empobrecidos carecían de fondos suficientes para pagar a los *polleros* (traficantes de emigrantes también llamados *coyotes*) y otros costos del viaje a Estados Unidos. El nivel educativo global de los inmigrantes mexicanos superaba el promedio nacional (séptimo grado), una parte poco observada pero significativa de la "fuga de cerebros" desde México a Estados Unidos. Para más datos sobre los costos de la educación en México y California y la contribución de los inmigrantes a la economía de California, véase NACLA *Report on the Americas*, noviembre-diciembre de 1995. Véase también James D. Cockcroft, *Latinos in the struggle for equal education* (Danbury, Franklin Watts, 1995).

la economía de Estados Unidos de forma que no sólo pudiera trasladar empleos a zonas de bajo costo como las zonas maquiladoras de México y Centroamérica, sino que también pudiera reducir los costos domésticos de producción ahorrando en salarios mediante un mayor uso de mano de obra inmigrante. Sabiendo poco o ningún inglés, los inmigrantes eran menos proclives que los trabajadores estadunidenses a sindicalizarse o protestar por el trato injusto. Además, las tendencias demográficas indicaban la futura escasez de mano de obra. Según la Oficina del Censo, cerca de 7 millones menos de trabajadores entrarían a la fuerza de trabajo en 1996 que en 1981. Como señaló *Business Week* (23 de junio de 1980), "Estados Unidos necesitará inmigrantes para reforzar el suministro de mano de obra si se quiere que crezca la economía."

Las corporaciones estaban intentando mejorar la rentabilidad y la productividad laboral incrementando la mecanización, los despidos para reducir costos y recurriendo a los trabajadores inmigrantes más disciplinados y peor pagados en el curso de la rotación de la fuerza laboral. La revolución tecnológica de computadoras, telecomunicaciones y robótica ya había empezado a reducir la necesidad de obreros de filas en Estados Unidos. Mientras tanto, las empresas de alta tecnología estaban encontrando empleados muy motivados, muy laboriosos y de bajos salarios en la reserva de inmigrantes, que a su vez encontraban empleos en sistemas de producción modernizados como los del Silicon Valley en California. Allí, hasta un 70% de la producción de *chips* para la electrónica y la computación consistía en empleos operativos semicapacitados, mal pagados y no sindicalizados, en los que se ocupaban generalmente mujeres mexicanas y otros trabajadores inmigrantes. Trabajaban largas horas, algunos llevando trabajo a casa en donde a menudo "eran responsables de sus propios gastos generales fijos, tales como maquinaria y electricidad".[91] El sueño del capital moderno, como escribió el sociólogo Manuel Castells, consiste en activar una "tecnología del siglo XXI con proletariado del siglo XIX", en otras palabras, una "restructuración" de alta tecnología con bajos salarios.[92]

Aunque las industrias de alta tecnología aumentaban constantemente el número de sus trabajadores, éste no era el sector de la economía estadunidense que creaba la mayoría de empleos nuevos. Ese sector era el de servicios (80% de todo el empleo de Estados Unidos en 1997), particularmente restaurantes, salud, instalaciones sanitarias, comercio minorista y servicios personales, gran parte del cual dependía notablemente de la mano de obra inmigrante y tenía bajas tasas de sindicalización. Los sectores manufactureros de trabajo intensivo como el del

[91] Donna Van Houten Kelly, "Women workers, multinational assembly lines and informal work: liberation or marginalization" (documento inédito para mi curso "Societies in Transition", en el Center for Distance Learning, SUNY-Empire State College, 1996), p. 1. El estudio de Kelly se basa en gran medida en Karen J. Hossfeld, "Their logic against them: contradictions in sex, race and class in Silicon Valley", en Kathryn Ward, comp., *Women workers and global restructuring* (Ithaca, ILR Press, 1990).

[92] Manuel Castells, *La teoría marxista de las crisis económicas y las transformaciones del capitalismo* (México, Siglo XXI, 1978), p. 114.

vestido y de procesamiento de alimentos contaban también en gran medida con el trabajo inmigrante. Un número en constante aumento de inmigrantes mexicanos entraba a la industria propiamente dicha o a sus talleres subcontratados, tanto en partes automotrices, electrónica u otros trabajos de ensamblado.

Desde la "integración silenciosa" de las economías de los dos países, la frontera entre México y Estados Unidos se había convertido en una ficción legal. La frontera servía para justificar la deportación de "ilegales indeseados", como los que intentaban sindicalizarse; 10% o menos de los inmigrantes se afiliaba a sindicatos. La frontera aseguraba también que la clase trabajadora mexicana, mediante su exportación de capital humano, subsidiara la economía de Estados Unidos, al no tener que cargar con el costo de criar y educar a los trabajadores inmigrantes temporales. El inmigrante era animado a llegar solo, y remitir a su hogar pequeñas cantidades de dinero (según las normas de Estados Unidos) para la subsistencia de su familia. Un 60% o más de los salarios de los trabajadores inmigrantes mexicanos se gastaba en Estados Unidos. Entre tanto, las ciudades y empresas estadunidenses a lo largo de la frontera recibían el grueso del dinero gastado por los trabajadores de las maquiladoras y también de otros vecinos de México que hacían sus compras "al otro lado de la frontera".

Sobre todo, la ficción legal de la frontera reforzaba el argumento de que la causa del desempleo en Estados Unidos era en parte culpa de que los inmigrantes "ocupaban los empleos de los estadunidenses". De hecho, las tasas de desempleo eran menores en las zonas que recibían gran número de inmigrantes.[93] El nativismo reforzaba el racismo e impedía a los trabajadores estadunidenses distinguir a su "enemigo común", los empleadores poco escrupulosos. El hecho era que pocos inmigrantes mexicanos desplazaban a los trabajadores estadunidenses porque respondían a un mercado de trabajo con reglas inaceptables para la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Había sin embargo un grupo que sí perdía sus empleos en favor de los inmigrantes. Este grupo era el de los afroamericanos en los servicios domésticos y en sectores de la construcción, demostrando la validez de aquella vieja canción popular sobre el racismo: "Si eres blanco, estás bien / Si eres moreno, quédate por aquí / pero si eres negro, lárgate." Esto, por supuesto, no era culpa de los inmigrantes sino de los

[93] Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en las ocho áreas de mercado laboral del suroeste y el medio oeste que experimentaron el mayor aumento de trabajadores inmigrantes mexicanos ilegales entre 1968 hasta 1977, la tasa de desempleo era inferior al promedio nacional. Tampoco era verdad que ciertos empleos fuesen inherentemente malos o de bajos salarios, mientras que otros fuesen buenos o de salarios altos. Los empleos "buenos" lo eran porque los trabajadores se habían organizado y luchado para mejorarlos. Según el investigador Timothy C. Brown de la Hoover Institution de la Universidad Stanford, los compradores mexicanos "gastaron 22 mil millones de dólares, pagaron 1 700 millones en impuestos y generaron 400 000 empleos, pero no recibieron ningún servicio" en 1995. Véase Timothy C. Brown, "The fourth member of NAFTA: the U.S.-Mexico border", en Paul Rich y Guillermo de los Reyes, comps., *NAFTA revisited: expectations and realities*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 550 (Thousand Oaks, Sage Periodical Press, 1997), p. 105.

empleadores racistas antinegros y del racismo institucionalizado que oprimía tanto a los afroamericanos como a los latinos.

La frontera servía como una barrera, no sólo para la unidad de la clase trabajadora en Estados Unidos, sino para la unidad internacional de clase. Separaba a los trabajadores de Estados Unidos de sus hermanas y hermanos de México, mientras que el capital tenía mucha más libertad y medios que el trabajo para moverse a uno y otro lado de las fronteras internacionales y colaborar con sus socios de clase.

Si bien la mayor parte del análisis sobre los inmigrantes mexicanos se enfocaba en los "no calificados", un número creciente de éstos eran profesionales capacitados —aproximadamente 20 000 en 1981. Ese número aumentó con cada sucesiva crisis económica en México, a medida que personas bien educadas de clase intermedia se dirigían hacia el norte. La sangría de ingreso y capacitación causada por esta emigración contribuía a dificultar todavía más un próspero desarrollo para México, que padecía de una escasez extrema en todas las áreas de trabajo especializado, desde ingenieros hasta operarios capacitados y semicapacitados. Es más, la mayor parte de los inmigrantes mexicanos habían estado empleados en México antes de su emigración. A pesar del hincapié de Estados Unidos en dar preferentemente el estatus de inmigrado a los trabajadores especializados, según la Inmigration Act de 1990, la American Manufacturers Association y la U.S. Chamber of Commerce alegaban en 1998 que no había suficientes trabajadores especializados en Estados Unidos en campos como el de la tecnología de la información, servicios médicos e investigación académica, una declaración refutada por la U.S. Congress's General Accounting Office. El AFL-CIO advirtió que las empresas de alta tecnología estaban empeñadas en reducir los costos contratando trabajadores extranjeros baratos.

El antiguo perfil de una fuerza de trabajo inmigrante mexicana en Estados Unidos compuesta en su mayoría por trabajadores agrícolas varones ya no resultaba aplicable. Menos del 15% de los inmigrantes mexicanos estaban empleados en la agricultura. A medida que más mujeres entraban a formar parte de la fuerza laboral de México, sólo para ser despedidas pocos años después, también ellas empezaron a emigrar hacia el norte, algunas llevando a sus hijos, y muchas provenientes de las zonas de maquiladoras. Para mediados de los noventa, al menos una tercera parte de los inmigrantes mexicanos eran mujeres. Los empleadores las reclutaban en número creciente porque con frecuencia tenían un grado más elevado de educación, y sin embargo podían ser contratadas por salarios más bajos que los hombres. Entrevistas realizadas en 1997 con mujeres inmigrantes centroamericanas y mexicanas revelaron que casi todas ellas habían experimentado agresiones sexuales durante el paso migratorio; las que se habían librado eran usualmente las únicas que habían encontrado *coyotes* "protectores" en sus pueblos de origen o habían juntado el dinero suficiente para tomar el avión.[94]

[94] Entrevistas de muestra realizadas en 1997 aparecen en Sara Poggio, "Travelling in the dark", apéndice de Cockcroft, *Outlaws in the promised land: the politics of immigration* (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1999).

Los inmigrantes mexicanos eran la base de la economía en el suroeste, la región de Estados Unidos que experimentaba el mayor vigor económico desde la década de los setenta. Como afirmaba un encabezado del *Wall Street Journal* del 7 de mayo de 1985: "Los inmigrantes ilegales son la columna vertebral de la economía en los estados del suroeste – Hacen partes para computadora, empacan píldoras para artríticos, cocinan, limpian y cuidan niños – Prisioneros en barracones." Ese mismo periódico empresarial había observado antes que: "Legal o no, la actual oleada de inmigrantes al hemisferio occidental enriquece y contribuye hoy a la sociedad norteamericana... bien puede ser que los ilegales estén proporcionando un margen de supervivencia para sectores enteros de la economía."[95]

Por eso fue por lo que tantos empleadores apoyaron la Inmigration Reform and Control Act de 1986 (IRCA), con su estipulación de 350 000 o más "trabajadores visitantes" de México, una ley laboral disfrazada como ley de reforma a la inmigración. Comprendían que la nueva ley les ayudaría a estabilizar y garantizar su flujo de mano de obra mexicana de forma muy semejante a como el viejo programa bracero de 1942-1964 lo había hecho. La mano de obra inmigrante de bajo costo podía, como ya lo había hecho antes, ayudar a deprimir los salarios normales de los estadunidenses, proporcionar esquiroles contra las huelgas y generar mayores utilidades. Las especificaciones de sanciones a los empleadores del IRCA no eran consideradas una amenaza real, puesto que nunca habían sido aplicadas en el pasado y, de hecho, ayudarían a los empleadores a controlar a los inmigrantes todavía más.

El programa de trabajadores-visitantes del IRCA reinstituyó el sistema de contrato laboral ilegalizado en 1886 y nuevamente en 1964. Neutralizó las decisiones de la Suprema Corte que daban a todos los trabajadores, incluyendo a los indocumentados, el derecho de huelga y de sindicalización, y a todas sus familias el derecho de asistir a la escuela. Pasaba atropellando por encima de las reglas de la corte federal que impedían las redadas del INS en centros de trabajo y vecindarios. Las redadas en fábricas y talleres aumentaron dramáticamente en los años noventa, a una tasa equiparable a los bruscos aumentos presupuestales para el INS y la Patrulla Fronteriza.[96]

Los empleadores estadunidenses obtuvieron los mismos resultados de elevación de utilidades y control de los sindicatos por la unilateral IRCA que habían disfrutado bajo el antiguo programa bilateral de "braceros". Por ejemplo, el IRCA tuvo el efecto de hacer "ilegal" a la American Federation of Workers, con sus 40 000 inmigrantes mexicanos indocumentados. Además, el IRCA amenazaba a todos los trabajadores de Estados Unidos exigiendo un sistema de identificación para conseguir empleo y ordenando futuras credenciales de identificación.

[95] *Wall Street Journal*, 18 de junio de 1976.

[96] Sobre la escalada de 1997-1998 en las redadas del INS y las campañas para detenerla, véase *Immigration New Briefs* (suplemento mensual del *Weekly News Update on the Americas*), mayo de 1998, y la Coalition for Human Rights of Immigrants con base en Nueva York y *web site* (http://home.earthlink.net/-dbwilson/chri).

Además, los empleadores tenían todos estos nuevos poderes sin tener que preocuparse por ninguna limitación que pudiera poner el gobierno mexicano, que ahora no tenía nada que opinar respecto del reclutamiento del "trabajo contratado" de su propia ciudadanía. En cualquier caso, el gobierno de México estaba en una posición demasiado débil para poder manifestar ninguna protesta seria. Además, se beneficiaba de la "válvula de escape" social de la emigración, y de los dólares que los trabajadores emigrantes podrían remitir a sus casas —la tercera fuente legal de ingreso para México después del petróleo y las exportaciones de las maquiladoras.

El IRCA exigía un aumento del presupuesto para la Patrulla Fronteriza, que ya estaba siendo militarizada. Durante la presidencia de Jimmy Carter, la Patrulla Fronteriza había empezado a recibir entrenamiento en técnicas de contrainsurgencia, y habían comenzado los trabajos para la construcción de una reja de alambre de púas de muchos pies de altura a lo largo de la frontera. Los inmigrantes mexicanos la bautizaron "la cortina de tortilla". Los presidentes Reagan, Bush y Clinton siguieron construyendo la valla y aumentaron el presupuesto de la Patrulla Fronteriza todavía más, mientras que proseguía la militarización de la Patrulla Fronteriza y no se hacía nada acerca de sus abusos contra los derechos humanos.

Cambios adicionales en la ley de inmigración estadunidense después del IRCA amenazaron aún más a millones de mexicanos y otros latinoamericanos con la deportación instantánea. La ley de inmigración de 1996 eliminó la jurisdicción de los tribunales federales para la mayoría de las apelaciones de los inmigrantes, dejando los deportables al capricho del INS y de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Esto violaba los tratados internacionales que regulan los derechos humanos así como a los refugiados políticos. El mínimo pago requerido para representar a los inmigrantes fue elevado más allá de la capacidad de la mayoría de los latinos para pagarlo. Al igual que el IRCA, las nuevas leyes invertían las anteriores normativas que daban preferencia a las familias, y rompían las familias mexicanas y latinas en una escala masiva; dos tercios de todos los latinos en Estados Unidos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes.

También reintroducían el macartismo al permitir que se negara la admisión a anarquistas, comunistas y a cualquiera que apoyase a "una organización revolucionaria". Finalmente, continuaron con el desmantelamiento del "programa del trabajador visitante" del IRCA, aunque la agroindustria luchó por su preservación. En cualquier caso, había otras leyes disponibles para importar los trabajadores que se necesitasen.

Las declaraciones en el sentido de que el TLC reduciría la inmigración mexicana a Estados Unidos demostraron ser falsas. El TLC ofrecía un suministro incluso más abundante de mano de obra mexicana barata, bien fuese explotada en las maquiladoras mexicanas o como inmigrantes en Estados Unidos. Más mexicanos que nunca se encaminaban hacia "el norte", especialmente porque los ejidos, pequeños comercios e industrias pequeñas y medianas quebraban en México. El TLC echó nueva leña a la hoguera del nativismo, no obstante el hecho

de que algunos de los más ruidosos enemigos de los inmigrantes, como el gobernador de California Pete Wilson, seguían proclamando la urgencia de garantizar un suministro permanente de trabajadores inmigrantes para mantener en marcha las industrias textiles, agrícolas y de servicios de limpieza y vigilancia.

El nativismo tuvo el efecto de intensificar el racismo contra los chicanos y otros latinos. Si bien los pequeñoburgueses y algunos proletarios chicanos mejor pagados ya no tenían gran cosa en común con los inmigrantes mexicanos, al contrario de lo que ocurría años antes, no obstante estaban sometidos a redadas por el INS y los agentes de la patrulla fronteriza en sus centros de trabajo, en sus autos, en los autobuses, en las escuelas o en las aceras de cualquier calle. En un año, por ejemplo, según estadísticas del INS, el 95% de todos los inmigrantes "ilegales" deportados eran "mexicanos", de los cuales el 35% no eran legalmente deportables en primer lugar; la mayoría fue obligada a firmar formas de salida "voluntarias".[97]

Entre los dos polos "chicano" e "inmigrante mexicano" se extendía un largo continuo formado por lazos familiares, la duración relativa de la residencia inmigrante en la comunidad chicana, similitudes en el trabajo y las situaciones vitales y los valores culturales. El hecho era que los chicanos estaban conscientes y orgullosos de sus raíces mexicanas y llevaban largo tiempo en la primera línea de la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos. En donde las divisiones se producían con mayor fuerza era a lo largo de las líneas de *clase* —por ejemplo, algunos burócratas pequeñoburgueses, ciertos empleadores y los capataces de la fuerza laboral *contra* los trabajadores mexicanos *y* chicanos.

Una nueva militancia entre los ciudadanos estadunidenses de ascendencia mexicana se produjo a raíz del movimiento de derechos humanos de los sesenta y principios de los setenta. Para los años ochenta, una combinación de represión y recortes en los programas sociales había quitado gran parte del impulso del movimiento chicano. La United Farm Workers (UFW), fundada por César Chávez y Dolores Huerta, había visto el número de sus miembros disminuir desde un máximo de 50 000 hasta solamente 20 000. No obstante, esa década presenció una nueva oleada de marchas de protesta contra el reclutamiento y la intervención en Centroamérica; el desarrollo más notable fue la aparición de latinos como líderes, y grandes números de participantes chicanos.

Crecientemente, la dinámica de la migración e internacionalización latinoamericana del capital de Estados Unidos y el conflicto de clases estaba generando una comunidad transnacional de derechos humanos y activistas obreros. La zona fronteriza entre México y Estados Unidos era particularmente representativa de los nuevos intercambios transnacionales y de la cultura que se iba desarrollando.[98] Ni el gobierno estadunidense ni el mexicano sabían cómo

[97] Los datos del INS fueron sometidos por éste a la U.S. Select Commision on Immigration a principios de los ochenta. El patrón siguió igual en los noventa.

[98] Para más información sobre el tema, véase Frank Bonilla, comp., *Borderless borders: U.S. Latinos, Latin Americans, and the politics of interdependence* (Filadelfia, Temple University Press, 1998).

manejar esta incipiente erradicación humana de la "ficción legal" por las mismas personas que más habían padecido sus abusos.

Para mediados de los noventa, todas las clases y los grupos contendientes de México empezaron a sentir (aunque gradualmente) que el único cambio que podría invertir el esquema de represión y militarización era el fortalecimiento de los movimientos sociales de masas y la internacionalización de la lucha laboral para equipararse con el alcance global del capital. Los activistas de los movimientos obreros y sociales de Estados Unidos y Canadá empezaron también a comprender que el éxito de sus luchas dependía de las mismas variables, cuando veían a "sus" capitalistas buscar fuerza de trabajo más fácilmente explotable trasladando la producción al extranjero y contando mucho más con la mano de obra inmigrante. La persecución a los inmigrantes en Estados Unidos, como en otras grandes naciones industrializadas, refleja el intento del capital por dividir y dirigir a los trabajadores así como endurecer la disciplina laboral. Los activistas de derechos humanos, como los organizadores laborales, estaban reconociendo también que tenían que vincular sus causas a otras más amplias internacionales, como las luchas contra el TLC, el GATT y el MAI.

Para tener éxito en sus luchas, sin embargo, los activistas obreros y de derechos humanos tenían que ponerse al nivel de otras nuevas realidades en los centros de trabajo, especialmente con los papeles cada vez más importantes desempeñados por las mujeres y los inmigrantes. Así, no sólo internacionalizar las luchas obreras, sino también "feminizar" y (en Estados Unidos) "latinizar", demostraría ser crucial para su progreso. Concretamente esto significaba organizar lo desorganizado.[99]

Empezando en los setenta, antes de que el IRCA y otras leyes de inmigración fuesen promulgadas para bloquear sus esfuerzos, los desorganizados, muchos de ellos mexicanos indocumentados, estaban organizando las acciones laborales más militantes en Estados Unidos. Mientras que la dirigencia suprema de la AFL-CIO respaldaba el IRCA y aceptaba "restituciones de salarios" para mantener "competitiva" la industria estadunidense, los inmigrantes mexicanos se estaban organizando a ellos mismos y a otros en sindicatos independientes en el suroeste, noroeste, medio oeste, Nueva Jersey y Florida. Muchos de ellos eran trabajadores agrícolas; otros trabajaban subcontratados en talleres industriales, astilleros y líneas de montaje de tecnología de punta. Más adelante, muchos se unieron al independiente International Coordinating Committee (ICC) que en 1982 cambió su nombre por el de American Federation of Workers (AFW). El número de los miembros en la AFW aumentó hasta más de 40 000 trabajadores "indocumentados" antes de que el IRCA le diera el golpe de gracia.[100]

[99] Para un conciso sumario de los puntos teóricos detrás del análisis en esta sección, véase James D. Cockcroft, "Gendered class analysis: internationalizing, feminizing, and latinizing labor's struggle in the Americas", *Latin American Perspectives* 25, núm. 6 (noviembre de 1998), pp. 42-46.

[100] A principios de 1982, los principales afiliados del ICC: International Brotherhood of General Workers, Arizona Farm Workers Union, Texas Farm Workers Union y el Florida Farm Workers Union, se unieron para formar el AWF. Algunos de los líderes de los sindicatos de trabajadores agríco-

Por entonces, el número de trabajadores inmigrantes estaba ya acercándose al 10% de la fuerza laboral de Estados Unidos El grupo más numeroso provenía de México. En áreas urbanas como Los Ángeles-San Diego y en las rurales como Maricopa County, Arizona, los mexicanos llevaban a cabo huelgas militantes. Una de sus mayores victorias fue originada por las mujeres en un esfuerzo de coalición con otros grupos: la huelga de veintiún meses de duración contra Farah Clothing Company en ciudades fronterizas de Texas y Nuevo México de 1973 a 1974.

En 1980, la ICC convocó en la ciudad de México una conferencia internacional que aprobó un Acta de Derechos del Trabajador Indocumentado de trece artículos, subrayando los derechos humanos internacionales y un trato justo de la mano de obra. El Acta de Derechos fue respaldada por la organización mexicana CT, que creó un "fondo de resistencia" para los indocumentados.

Siguieron numerosas conferencias internacionales, empezando con una Conferencia Nacional de Inmigración Chicana que reunió a organizaciones latinas en un esfuerzo por abolir el trabajo contratado y la patrulla fronteriza. La United Electrical, Radio & Machine Workers of America (UE) llevaba largo tiempo dedicada a organizar a los trabajadores inmigrantes. El trabajo de la UE fue complementado a principios de los ochenta por una renovación de los movimientos organizativos conducidos por miembros locales de los Teamsters, la International Ladies' Garment Workers Union (ILGWU), y la United Auto Workers (UAW), entre otros.

Estas experiencias y otras anteriores habían enseñado a un número creciente de trabajadores estadunidenses y mexicanos la necesidad de mostrar solidaridad por encima de las fronteras. Empezando en los setenta, los trabajadores estadunidenses y mexicanos manifestaron un apoyo cada vez mayor hacia las huelgas respectivas en los sectores textil, electrónico, agrícola, minero y automotriz. La UE y el FAT de México iniciaron proyectos internacionalistas sin precedentes unificando a trabajadores de Estados Unidos y México.

Un sector laboral clave, aunque difícil, que claramente necesitaba de la solidaridad internacional era el de las trabajadoras de maquiladoras en México. A fines de los setenta, unas 250 mujeres de la planta electrónica de Solidev Mexicana de Tijuana organizaron su propio sindicato, el primer sindicato independiente de una maquiladora que jamás se hubiera organizado. Miembros del Centro de Tijuana de Estudios sobre Migración e Información contactaron a activistas de UE del otro lado de la frontera, que movilizaron apoyo para las valerosas mujeres de Solidev. Finalmente las mujeres consiguieron un contrato que tuvo como resultado la readmisión de las trabajadoras despedidas y salarios notablemente más elevados. Pero en 1983 la compañía matriz, Solitron Devices Corporation, cerró su operación Solidev. Durante el periodo reaccionario de neoliberalismo, semejantes organizaciones audaces y esfuerzos inter-

---

las estaban decepcionados con el UFW de Chávez y de la Huerta. Chávez se opuso durante largo tiempo a organizar a los inmigrantes mexicanos indocumentados.

nacionalistas continuaron, aunque a un nivel muy disminuido. Sin embargo, ayudaban a mantener encendida la llama del internacionalismo obrero.

Luego, en los noventa, a medida que el TLC avanzaba al primer plano, la llama de la solidaridad obrera internacional resplandeció una vez más. La FAT obtuvo apoyo de trabajadores de Honeywell en Canadá y Estados Unidos para protestar contra el arbitrario e ilegal despido de empleados en su maquiladora de Chihuahua. Los trabajadores mexicanos fueron despedidos porque habían decidido formar un sindicato independiente y unirse al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal (STIMAHCS, fundado en 1991), afiliado al FAT. Una experiencia similar ocurrió en el caso de los esfuerzos organizadores de FAT en la planta de GE de Ciudad Juárez, responsable de producir motores pequeños que solían fabricarse en Decatur, Illinois, antes de la clausura por GE de la planta en 1989. En 1993, los trabajadores de la maquiladora Carlysle Plastics de Tijuana, cuya matriz estaba en Boston, consiguieron el apoyo de los trabajadores estadunidenses del otro lado de la frontera en su lucha por un sindicato independiente. En junio de 1997, unos 400 trabajadores de las seis plantas maquiladoras de GM en Reynosa llevaron a cabo una huelga no autorizada que obtuvo un éxito parcial, ayudados por el respaldo de la Coalition for Justice in the Maquiladoras, apoyada por AFL-CIO.

La AFL-CIO, bajo una nueva dirección de reformadores a partir de 1995, ya no era tan favorable al TLC en América Latina como en el pasado. Con gusto ayudó a fundar la Coalition for Justice in the Maquiladoras, que seguía exponiendo a los que contaminaban en el "corredor químico" de Matamoros y protestando contra los despidos y los incidentes de brutalidad policial como los sucedidos contra los empleados de Sony en Nuevo Laredo. Seguían formándose otras coaliciones por encima de las fronteras.

Dos grandes batallas laborales relacionadas con el TLC atrajeron la atención internacional en el periodo entre 1997 y 1998; las luchas de los trabajadores de las maquiladoras Han Young e ITAPSA-Echlin por formar sindicatos independientes. En junio de 1997, los trabajadores de la maquiladora Han Young de Tijuana empezaron a organizar un sindicato independiente. La planta producía chasis para camiones y tráilers para la Hyundai Precision America de San Diego, parte de la poderosa transnacional Hyundai de Corea del Sur. A pesar de los despidos, las agresiones físicas y los arrestos de militantes sindicales, los trabajadores ganaron dos elecciones consecutivas para unirse al STIMAHCS del FAT. Bajo la presión de Maquiladora Workers' Support Committee con base en San Diego y de los principales sindicatos estadunidenses y canadienses, el gobierno mexicano finalmente reconoció al sindicato.

En abril de 1998, la National Administrative Office (NAO), del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, nuevo organismo consultivo establecido bajo el TLC, tomó una decisión en favor del FAT en una demanda previa presentada contra Hyundai por parte de nueve grandes sindicatos y organizaciones de derechos humanos en México, Canadá y Estados Unidos, incluyendo a la UAW y a Maquiladora Health & Safety Support Network, la trinacional con base en Es-

tados Unidos. El gobierno de México respondió que la opinión iba más allá de los términos del TLC; en cualquier caso, el acuerdo colateral no permitía que tales reglamentos fuesen vinculantes.

Un mes más tarde, cuarenta soldadores de la maquiladora Han Young fueron a la huelga para protestar contra la negativa de la empresa de negociar un nuevo contrato. Fue la primera huelga legal en la historia de un sindicato independiente de una maquiladora. Un nuevo gerente de la empresa empezó por ofrecer a los militantes del sindicato 1 200 dólares por licenciarse. Pocos aceptaron la oferta, de modo que el gerente empezó a despedirlos.[101] El órgano laboral local ordenó una tercera elección en la planta y una vez más los independientes, soportando nuevas intimidaciones, ganaron la votación. Luego, el 3 de junio de 1998, cientos de policías tácticos atacaron violentamente a los piquetes y llevaron a la planta trabajadores de remplazo. Las autoridades del estado dieron órdenes de arresto contra el principal líder y el abogado del sindicato. Mítines a favor de los trabajadores de Han Young empezaron rápidamente a extenderse desde la ciudad de México a otras partes del mundo. Los manifestantes movilizados por la Cross-Border Labor Organizing Coalition (CBLOC) clausuraron durante veinticuatro horas los muelles de la Hyundai Corporation en el puerto de Portland (Oregon). La lucha de la Han Young ha proseguido.

En el verano de 1997, unos 30 trabajadores de la planta ITAPSA-Echlin en las afueras de la ciudad de México intentaron librarse de su "contrato de protección" de la CTM organizando un sindicato independiente para formar parte del STIMAHCS. Expuestos a los efectos del asbesto y de solventes químicos tóxicos, los trabajadores producían frenos de disco para exportar a Estados Unidos y Canadá. Ganaban un promedio de seis dólares por día, o menos de la mitad de lo que el gobierno consideraba que era el costo de la "canasta básica de alimentos". Las mujeres trabajadoras sufrían hostigamientos, y las amenazaban con raparlas si apoyaban a los activistas. Como en el caso de la Han Young, la empresa matriz era una poderosa transnacional extranjera, la fabricante de repuestos para automóviles Echlin Inc., con base en Connecticut, la cuarta productora más importante de autopartes del mundo, con ventas de 3 600 millones de dólares en 1997 y ocho plantas en México.

Una vez más, la solidaridad internacional demostró ser útil. De 1996 a 1997, la UE había estimulado la formación por parte de los sindicatos de los tres países del TLC de una Alianza trinacional de trabajadores de Echlin, para coordinar las negociaciones colectivas con la cadena Echlin. En la primavera de 1998, al enterarse de las acciones ilegales realizadas en la planta ITAPSA-Echlin, las principales organizaciones sindicales, como AFL-CIO, Teamsters y UAW, el Canadian Labor Congress (CLC), la Canadian Auto Workers (CAW) y la UNT de México se unieron con UE y FAT para plantear una reclamación ante la NAO bajo el acuerdo co-

[101] *Mexican Labor News Analysis* dio constantes y completos informes sobre la lucha obrera de Han Young. Véase también David Bacon, "Testing NAFTA's labor side agreement", NACLA *Report on the Americas* 31, núm. 6 (mayo-junio de 1998), pp. 6-9, y números del *Weekly News Update on the Americas*, por ejemplo el núm. 434 (24 de mayo de 1998).

lateral del TLC. La CAW y la UAW habían trabajado estrechamente con los sindicatos de México durante algún tiempo, como en el caso ya mencionado de la huelga de Ford en Cuautitlán. Parte de la reclamación de 1998 ante la NAO tenía que ver con el despido de 52 activistas sindicales simpatizantes del STIMAHCS, a lo que siguió el empleo de 170 matones armados con pistolas y tubos de hierro para intimidar a los trabajadores el día en que se celebraba una elección sindical para decidir si se quedaban en la CTM o preferían ser representados por el STIMAHCS; de forma poco sorprendente, "ganó" la CTM.[102] El 31 de julio, la NAO se apoyó en la preferencia de los trabajadores y alentó a los gobiernos estadunidense y mexicano a emprender consultas ministeriales.

Para 1998, incluso la CTM estaba suficientemente consciente de su falta de credibilidad entre los empleados de las maquiladoras para decidir llamar a la huelga. En enero éstas se declararon en huelga en dos plantas de Ciudad Juárez que empleaban a más de 3 000 trabajadores. Ambas plantas decidieron cerrar.[103]

También en enero, a la CTM le llegó el momento con un movimiento de huelga de tres días en diez maquiladoras de Matamoros. Unos 13 000 trabajadores, o cerca de una cuarta parte de los empleados en las cien plantas maquiladoras de la ciudad, pararon en seis plantas de GM y Lucen Technologies, Sunbeam y otras plantas. Los trabajadores de las plantas cercanas emprendieron paros para mostrar su apoyo. La UAW respaldó la gigantesca huelga de las maquiladoras de Matamoros. Las transnacionales afectadas obtuvieron el respaldo de la Secretaría de Gobernación y la CTM para imponer un arreglo.[104]

Las huelgas de las maquiladoras y los proyectos organizativos de sindicatos independientes tenían una importancia decisiva para el futuro de los trabajadores en toda América y hasta de todo el mundo. Después de todo, las zonas maquiladoras mexicanas eran consideradas desde hacía mucho como un modelo de la supuesta benevolencia de las transnacionales. Pero los trabajadores de las maquiladoras eran superexplotados y, en el caso de las mujeres, hostigadas sexualmente. El valor de las exportaciones de las maquiladoras, según la Secretaría de Comercio mexicana, representaba el 42.5% de las exportaciones de México (1997). Si los salarios y las condiciones de seguridad en el trabajo podían ser mejoradas en las maquiladoras, eso sería en beneficio de la justicia social, se asestaría un fuerte golpe a las transnacionales y se impulsarían otros movimientos obreros.

Durante la década de los noventa, tuvieron lugar numerosas reuniones internacionales de trabajadores de Estados Unidos, México y Canadá. Fueron organizadas por grupos como el Transnational Information Exchange (TIE), una red global y con base industrial de trabajadores de diversos países; la publicación

[102] Véase *Mexican Labor News Analysis*, por ejemplo: 2, núm. 23 (16 de diciembre de 1997), 3, núm. 2 (16 de enero de 1998) y 3, núm. 5 (2 de marzo de 1998).

[103] *La Jornada*, 23 y 24 de enero de 1998. Otras dos huelgas de la CTM ocurrieron en plantas maquiladoras en junio. Véase *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 12 (16 de junio de 1998).

[104] Véase *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 3 (2 de febrero de 1998), y núm. 7 (2 de abril de 1998).

mensual de Detroit *Labor Notes;* la trinacional Mujer a Mujer, y la Maquila Women Workers' Network. El Transportation Trades Department de la AFL-CIO envió un mensaje de solidaridad a los trabajadores ferrocarrileros huelguistas en marzo de 1998. La alianza FAT-UE siguió agrupando sindicatos dentro de la misma empresa sin importar en donde estuviesen situados los sindicatos.

Tanto la convención de la UNT como la del FAT en noviembre de 1997 contaron con la asistencia de observadores visitantes enviados por las principales organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá. Éstos simpatizaban con el nuevo reformismo de la UNT, en parte debido a las diferencias políticas que habían experimentado con el CT y la CTM a propósito del TLC.

Había una razón adicional para que la AFL-CIO enviase a sus representantes a las convenciones obreras reformistas de México. A fines de 1995, en la primera elección democrática que nunca se hubiera permitido, los miembros de AFL-CIO votaron en favor de una planilla reformista. El presidente electo fue John J. Sweeney, largo tiempo presidente de la Service Employees International Union (SEIU) que contaba con 1.1 millones de miembros. Una latina, Linda Chávez-Thompson, de la American Federation of County, State and Municipal Employees (AFCSME), fue elegida vicepresidenta ejecutiva de AFL-CIO. Mujeres, afroamericanos y latinos se habían convertido en una mayoría de lo que anteriormente fue una organización predominantemente blanca y masculina. Demostraron ser una fuerza clave para la victoria de la planilla reformista. Los locales del SEIU habían difundido el triunfo sindical en 1990 de "Justice for Janitors", formado predominantemente por inmigrantes latinos, en California, que ayudó a poner a Sweeney en la primera plana de AFL-CIO. No es sorprendente, pues, que Sweeney llamase a organizar a los desorganizados, pero él compartía los puntos de vista del "nuevo sindicalismo" de la UNT de Hernández Juárez, hablando frecuentemente de la asociación patrones-trabajadores tendiente a aumentar la productividad y la "competitividad".[105]

Latinos, afroamericanos y mujeres constituían también una fuerza importante detrás del movimiento de base Teamsters for a Democratic Union (TDU) que ayudó a elegir candidatos reformistas para la mesa ejecutiva de los Teamsters en 1991, incluyendo a un afroamericano y a la primera mujer y el primer latino en la dirección. En 1996, los votos latinos para el presidente reformista de Teamsters Ron Carey seguramente fueron decisivos en su reelección por un estrecho margen de 16 000 votos.

Mujeres, afroamericanos y latinos fueron algunos de los huelguistas más persistentes durante la victoriosa huelga de Teamsters en 1997 contra United

[105] Véase Marc Cooper, "Class.War@Silicon.Valley disposable workers in the new economy", *The Nation*, 27 de mayo de 1996, pp. 11-16; Héctor Figueroa, "The growing force of Latino labor", *NACLA Report on the Americas* 30, núm. 3 (noviembre-diciembre de 1996), pp. 19-24; Kim Moody, "American labor: a movement again?" *Monthly Review* 49, núm. 3 (julio-agosto de 1997), p. 71; "The dynamics of change in American Labor", en Ray Tillman y Michael S. Cummings, comps., *The transformation of U.S. unionism: voices, visions and strategies from the grassroots*(Boulder, Lynne Rienner, 1998).

Parcel Service (UPS).[106] Los latinos estuvieron también activos en la huelga de UAW de 1998, aunque fueron principalmente trabajadores blancos y afroamericanos en Flint, Michigan, quienes iniciaron la huelga.[107]

El análisis ofrecido a lo largo de este libro nos lleva a la lógica conclusión de que la lucha obrera en uno de los tres países del TLC seguramente se beneficiará de los esfuerzos por internacionalizarla, latinizarla (en el caso de Estados Unidos) y feminizarla. Comenzando en los setenta, como ya vimos, tales esfuerzos comenzaron efectivamente, y para mediados de los noventa habían asumido no sólo una mayor urgencia sino también mayor impulso y amplitud.

De hecho, las huelgas en Estados Unidos en los años noventa a cargo de trabajadores inmigrantes latinos y mexicanos y por ciudadanos latinos (especialmente mujeres de esos grupos), reflejaban las dimensiones internacionales, femeninas y latinas de la fuerza laboral moderna. Trabajadores agrícolas, recolectores de nueces, empacadores de pescado, capataces, carpinteros, albañiles, empleados de hostelería, equipos de cargadores de los muelles, maestros de escuela pública u otros trabajadores de bajos ingresos latinos, estaban generando un sindicalismo militante que hacía mucho tiempo no se veía en Estados Unidos. La UFW estaba renaciendo también, organizando con amplio apoyo la sindicalización de 20 000 trabajadores de la fresa en California y 5 000 cosechadores de manzanas en el estado de Washington. En Los Ángeles, la Domestic Workers Association y la Day Workers Association estaban agrupando a los superexplotados mexicanos, centroamericanos y asiáticos.

Había otra razón más por la que la latinización y feminización de la lucha obrera, al menos en Estados Unidos, estaba resultando posible, y ésta era, irónicamente, el abandono histórico por parte del sindicalismo organizado precisamente de esos segmentos de la fuerza laboral. Este abandono significaba que latinos y mujeres tenían que "ver por sí mismos", por así decirlo. Como resultado, el internacionalismo y la conciencia de clase entre latinas y latinos era proporcionalmente más fuerte.

Esto quedó ilustrado por el éxito sin precedentes de la marcha del 12 de octubre de 1996, "Día de la Raza", en la capital, organizada durante los tres años anteriores. Entre 30 000 y 75 000 latinos y otros inmigrantes y sus partidarios marcharon ese día para exigir derechos humanos, no sólo para los inmigrantes sino para *todos* los trabajadores. Las principales organizaciones hispanas de derechos humanos dudaban del éxito de la marcha, por lo que la ignoraron hasta el último minuto, cuando pidieron a los organizadores que permitieran que

[106] En 1996, había 100 000 miembros con apellidos españoles en la organización Teamsters con 1.4 millones de miembros. Sobre el movimiento de base por la democracia de los Teamsters, véase Julio César Guerrero, "Latino activism could change the Teamsters", *Labor Notes* (mayo de 1997), p. 3; Phill Kwik, "The Teamsters victory: a successful strategy for revitalizing the labor movement", *New Politics* 4, núm. 1 (verano de 1992), pp. 155-66; Dan La Botz, *Rank and file rebellion: Teamsters for a democratic union* (Nueva York, Verso Books, 1990). Sobre la huelga de UPS y sus consecuencias, véanse varios números de *Labor Notes* de 1997 y 1998.

[107] Para más información, véase el *Christian Science Monitor*, 24 de junio de 1998; Kim Moody, "On the line in Flint", *The Nation*, 13 de julio de 1998, p. 6.

sus dirigentes hablaran en el mitin. Ese permiso se les concedió. La organización de base para la marcha fue iniciada por las comunidades inmigrantes principalmente mexicana y centroamericanas de California y sus patrocinadores latinos, incluyendo a José Jacques Medina de One Stop Immigration, quien antes había sido un trabajador inmigrante mexicano y que ayudó a fundar ICC y AFW. Solicitando y obteniendo el apoyo de UE y otros sindicatos, montaron la Coordinadora de la Movilización Nacional por los Derechos Civiles, que luego fue conocida como Coordinadora '96. El lema de la Coordinadora era "Ley de Derechos, Empleos y Justicia para Todos". Su exigencia inicial insistía en que "los derechos democráticos y económicos deben ser afirmados nacional e internacionalmente por los mismos trabajadores". Su lista de demandas incluía un salario mínimo de siete dólares por hora, varias exigencias sobre los derechos de las mujeres, la ampliación de los servicios de salud, la regularización del estatus de los trabajadores indocumentados, la aceleración en dar la ciudadanía a los inmigrantes legales y la paz mundial.

Un tercio o más de los manifestantes era inmigrantes de países distintos a los latinoamericanos. Algunos irlandeses portaban la bandera del Batallón de San Patricio, recordando el tiempo en que gran número de irlandeses y otros reclutas inmigrantes abandonaron "las filas de los agresores" para luchar al lado de los mexicanos en la guerra entre México y Estados Unidos. La gigantesca y militante manifestación fue una llamada de alerta para muchas personas de Estados Unidos que todavía no entendían lo que estaba pasando con "todos esos extranjeros".[108]

Si bien el porcentaje de la fuerza laboral estadunidense en los sindicatos seguía descendiendo (hasta cerca de un 14%), el número de sindicalistas latinos aumentó en un 12% entre 1992 y 1996. Las mujeres constituían un tercio de la fuerza sindical, los afroamericanos un quinto y los latinos por lo menos una décima parte. En términos de porcentaje de población "subgrupo", los latinos estaban tan bien representados como los blancos —y había también en los sindicatos un porcentaje más elevado de mujeres latinas que de mujeres blancas. Según cálculos de AFL-CIO, las latinas estaban entrando en la fuerza laboral a una tasa doble que todas las demás mujeres de Estados Unidos. Según la Oficina del Censo estadunidense, para el año 2000 la juventud mexico-norteamericana será el segundo grupo más numeroso entre los nuevos miembros de la fuerza laboral. Para 2050, los latinos constituirán el 25% de la población de Estados Unidos.[109]

[108] Para mayor información sobre la marcha de los inmigrantes sobre Washington, véase *Hispanic*, diciembre de 1996. El autor agradece a toda la gente anónima comprometida en la organización de la marcha que le otorgó entrevistas y le proporcionó documentos mimeografiados de la Coordinadora '96. Gracias también a Mario Nelson del Social Justice Center de Albany, Nueva York, por su ayuda.

[109] Cockcroft, *Hispanic*, p. 130, y *Latinos*, p. 161; del Pinal y Singer, "Generations"; Figueroa, "The growing force"; Nicolás Kanellos, comp., *The Hispanic-American almanac* (Detroit, Gale Research Inc., 1993), p. 334; Edwin Meléndez, Clara Rodríguez y Janis Figueroa, comps., *Hispanics in the labor force: issues and policies* (Nueva York, Plenum Press, 1991); *Mexican Labor News*

No obstante, la AFL-CIO no prestaba suficiente atención a estas nuevas tendencias y posibilidades. Le resultaba difícil sacudirse su larga herencia racista y sexista. En México existían problemas similares con respecto a las mujeres y a los indígenas en la fuerza laboral. Sin embargo, cuando se trataba de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos era fácil para los sindicalistas mexicanos apoyarlos, al menos retóricamente. En 1997, por ejemplo, el CT de México pidió una alianza obrera continental para defender a los trabajadores emigrantes.

Aunque menos poderosos económicamente que los estadunidenses, los sindicatos mexicanos también han practicado la solidaridad internacional. En 1998, aprovecharon los acuerdos del TLC cuando UNT, FAT y STIMAHCS presentaron una demanda acusando a los empleadores de Washington de intimidaciones y amenazas de deportación contra los trabajadores de la manzana que intentaban sindicalizarse.

Mientras prosiga la crisis de acumulación de capital, y mientras el capital monopólico apriete su puño sobre las vidas del pueblo en México, Estados Unidos y Canadá, la gente trabajadora y progresista cada vez más tendrá que forjar redes internacionales de unidad y lucha si es que quiere tender a un futuro mejor. El editor de *Labor Notes*, Kim Moody, señala el valor de forjar un nuevo "sindicalismo de movimiento social" basado en algunas de las experiencias en países como México, Brasil, Sudáfrica y Corea del Sur. Este tipo de sindicalismo trabaja estrechamente unido a los movimientos de los pobres urbanos, los trabajadores de medio tiempo y los desempleados. Dentro de la Unión Europea también hay signos de sindicalismo en los movimientos sociales relacionados con los trabajadores de medio tiempo y los desempleados.

Perspectivas políticas

Aunque la mayoría de los obreros y campesinos mexicanos siguen empeñados en la lucha por sobrevivir, los medios de comunicación se están fijando ya en las preparativos para las elecciones presidenciales programadas para el año 2000. A principios de 1998, el miembro del PRD Cuauhtemoc Cárdenas iba en cabeza en los resultados de las urnas. El PRD es un partido de varias facciones con considerable democracia interna, pero sigue siendo precariamente dependiente de un único individuo portador de un nombre famoso. Sus fondos para montar una campaña de éxito son mezquinos comparados con los del PRI o el PAN. Cárdenas está cortejando al gran capital más que nunca antes.

El PAN, desde hace largo tiempo unido estrechamente al grupo Monterrey y a Coparmex, sigue siendo un partido conservador defensor de las causas de

Analysis 3, núm. 10 (16 de mayo de 1998); Moody, "American labor", y "Membership still slipping, but some organizing tactics work", *Labor Notes*, marzo de 1998, pp. 11-14. Según Jack Otero del Labor Council for Latin American Advancement, los latinos constituyen "más del diez por ciento de todos los sindicalizados". Véase Juan Gómez Quiñones, *Mexican American labor, 1790-1990* (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994), p. 231.

la Iglesia católica y del neoliberalismo. Posee fuertes bases regionales en los estados del norte y algunos del norte-centro, en Yucatán y en numerosos barrios residenciales. Para expandirse en el nivel nacional, ha atenuado su alianza de tipo "oposición leal" con el PRI para cooperar en algunas cuestiones con el PRD. Por ejemplo, ayudó a elegir al líder del PRD Muñoz Ledo como portavoz del Congreso. Además, el PAN utiliza la retórica populista para buscar el apoyo de la UNT, cuyo principal líder, Hernández Juárez, promueve el "nuevo sindicalismo". Un importante candidato para la nominación presidencial del PAN es el neopopulista gobernador de Guanajuato Vicente Fox, independiente y carismático empresario. En mayo de 1998, sin embargo, anunció que se retiraría si las encuestas seguían situando en cabeza a Cárdenas.

Mientras tanto, el presidente Zedillo declaró en una reunión de ejecutivos de medios de comunicación, en junio de 1998, que el PRI abandonaría el tradicional "dedazo" de los presidentes para nombrar a su sucesor, y que por el contrario conduciría una "elección abierta" para seleccionar al candidato presidencial del PRI. Los "dinosaurios" del PRI, sin embargo, están decididos a volver a las viejas normas, sin más tecnócratas llevando la voz cantante. Algunos "dinosaurios" desean ser presidentes. Por ejemplo, el gobernador de Puebla Manuel Bartlett, que tuvo bajo sus órdenes a la policía secreta de México, espera ganar la nominación presidencial del PRI según las reglas del partido que ordenan llevar diez años en el partido y por lo menos una victoria electoral para poder ser candidato. (Sólo dos de los ministros de Zedillo reúnen esas características, pero las reglas del partido fueron siempre ignoradas rutinariamente por los principales burócratas del PRI.) El PRI está más quebrantado con divisiones internas que nunca antes, incluyendo a quienes azuzan a elementos partidarios de Salinas en contra de los de Zedillo ¡y otros partidarios de Colosio contra ambos! Muchos líderes del PRI ya han abandonado el partido, incluyendo a Manuel Camacho Solís, el frustrado aspirante presidencial de 1994 que, en febrero de 1998, anunció su decisión de formar el Partido de Centro Democrático.

Una incógnita en la próxima elección presidencial es la comunidad emigrante. Unos 6 millones de mexicanos en edad de votar residen en Estados Unidos y la mayor parte de ellos, al irse, han votado ya con su actitud y están en contra al PRI. Una de las reformas políticas de 1996 les permitirá votar por primera vez en el 2000. Sin embargo, esto requiere un Registro Nacional de Ciudadanos que, debido a las tácticas dilatorias del PRI, probablemente no estará listo a tiempo.

Otro elemento impredecible es el gran numero de jóvenes mexicanos que tendrán su primera o segunda oportunidad de votar en el 2000 (la mitad de la población tiene menos de veinticinco años). Son un grupo variado, que va desde los retoños malcriados de las élites tradicionales hasta estudiantes rebeldes muy activos en el FZLN. La mayoría de los estudiantes políticamente activos apoyan al PRD. "Los porros" (matones armados) están reapareciendo en los campos universitarios y en las escuelas, obligando a los estudiantes a organizar marchas contra el "neoporrismo". Un número creciente de jóvenes de la empobrecida clase obrera pertenecen a bandas, se muestran como punks, pintan graffiti

y dan salida a otras formas de rebelión, algunas veces con ribetes políticos de admiración por los grandes revolucionarios mexicanos Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata.

La crisis económica de México está teniendo múltiples efectos políticos y sociales. El crimen es un problema creciente. La clase dirigente, al igual que el PRI, parece estarse fragmentando. Los movimientos sociales están adoptando muchas formas diferentes, incluyendo una nueva preocupación por los derechos de los indígenas y las mujeres. La pequeña burguesía, incluyendo a la mayor parte del movimiento de deudores El Barzón, está depauperándose. Las clases intermedias están cada vez más decepcionadas del PRI. Las organizaciones cívicas y las ONG son más numerosas y activas que nunca. Los movimientos guerrilleros, aunque rodeados por la "guerra sucia" del gobierno, están obteniendo, al menos en el caso de los zapatistas, apoyo moral e incluso material de gente de todo el mundo.

Considerando las muchas formas de activismo político existentes a todo lo largo y ancho el país, puede decirse que México está en un estado de semi-insurrección. El estado mexicano está en plena crisis. Grandes porciones de la nación están ocupadas por sus fuerzas de seguridad, que tienen vínculos directos con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. La economía de México es rehén de Estados Unidos y de las inversiones y las comunidades bancarias extranjeras. Emboscadas en los márgenes sombríos acechan poderosas fuerzas militares, nacionales y extranjeras. Y sin embargo, los mexicanos tienen esperanza...

CONCLUSIÓN

LA ESPERANZA DE MÉXICO

Sin democracia no puede haber ni libertad ni justicia ni dignidad, y sin dignidad nada hay.

Comunicado del CCRI-CG del EZLN, desde las montañas del sureste mexicano, 26 de febrero de 1994[1]

Como hemos visto, la economía de México estuvo marcada, desde las épocas precolonial y colonial, por su estructura de bajos salarios y sus estados fuertemente centralizados. El estado colonial vigiló la inserción de la economía en el mercado mundial. Después de la independencia, las élites domésticas extendieron estas tendencias durante el prolongado desarrollo del capitalismo en los siglos XIX y XX, en su propio interés y en el de los inversionistas extranjeros, crecientemente estadunidenses.

A lo largo de su historia, la base de bajos salarios de la acumulación de capital en México tuvo como resultado un desarrollo limitado de la producción de capital y de bienes intermedios, retardando el crecimiento económico en comparación con el ritmo establecido por las potencias imperialistas emergentes. El mercado interno tampoco creció tan vigorosamente como hubiera debido hacerlo si los salarios hubieran aumentado por encima de los niveles de subsistencia para todos los trabajadores. Debido a la relativa debilidad de las élites domésticas frente a los capitalistas y a los estados extranjeros, y la dependencia de las propias élites de estados fuertes y no democráticos, las luchas de clases en México por mejorar las condiciones económicas o la democracia política siempre cargaron pesadamente sobre las espaldas de los campesinos y de las clases trabajadora e intermedia. Así fue siempre desde las guerras de los indígenas contra el sometimiento al extranjero, hasta las guerras de independencia contra España en la década de 1810 y la guerra de liberación nacional contra Francia en la década de 1860, así como en la Revolución mexicana y los movimientos sociales por la democracia en los periodos de los años treinta y después de los cincuenta.

El emergente, creciente y mal pagado proletariado industrial mexicano siempre fue relativamente débil en su capacidad de determinar el resultado de las luchas de clase históricas. Por consiguiente, a menudo otras fuerzas de la sociedad resultaron decisivas en momentos de cambio político o económico radical —indios, mujeres, campesinos, estudiantes e intelectuales.

Desde la consolidación en los cuarenta de un estado corporativo bajo la hegemonía política del PRI, la lucha de clases de México generalmente evolucionó

[1] Subcomandante Marcos, en EZLN. *Documentos y comunicados, 1*, p. 177.

en el contexto de las luchas de los trabajadores contra los mecanismos corporativistas de control del PRI. Debilitar al PRI revestía una importancia capital para conseguir las demandas populares de su lucha de clase.

La débil naturaleza de la burguesía de México significó que ésta confiaba en un estado fuerte que pudiera controlar al proletariado, a los campesinos y a los elementos combativos de las clases intermedias mediante el corporativismo o la represión. Lo que hacía al estado corporativo fuerte y eficaz para la burguesía era el control hegemónico unipartidista del PRI. Por lo tanto, los sectores de la burguesía que apoyaban a la "oposición leal" conservadora del Partido de Acción Nacional (PAN) debían tener cuidado de no crear una crisis del estado desafiando excesivamente al PRI. De forma similar, cuando las clases populares desafiaban al PRI, en realidad estaban desafiando al principal mecanismo de control de la burguesía.

Aun en el caso de que los actuales movimientos por la democracia en México logren realmente el desmantelamiento del estado corporativo y su sustitución por un gobierno del pueblo respetuoso del pluralismo, quedaría pelear aún la batalla por la democracia económica. Aquí, las lecciones de las experiencias históricas de México bajo el capitalismo dominado por el extranjero han sido claras. Ni el "liberalismo" de los "científicos" en época de Porfirio Díaz ni el actual neoliberalismo de los tecnócratas basado en el monoproducto petrolero y el crecimiento dependiente de la inversión externa pueden proporcionar bienestar económico a la ciudadanía.

Sin pretender nunca enfrentar las bases de bajos salarios que es la causa de la incompleta industrialización de México, sino más bien esperando sacar ventaja de ésta, los arquitectos del actual neoliberalismo de México están construyendo un castillo de arena reforzado con dólares. Barriendo la arena hacia el norte están las corrientes de la estrategia neoliberal del capital monopólico moderno, consistente en empobrecer a los trabajadores mexicanos para contener las decrecientes tasas de ganancia corporativas y restructurar internacionalmente la producción en la "economía global". La actividad manufacturera mexicana, como su agricultura e industria de hidrocarburos, está más orientada por completo hacia las exportaciones y dominada por el extranjero que en cualquier otra época desde la dictadura de Díaz hace ochenta años. El encuentro de México con sus anteriores políticas e historia está cerrando un círculo completo.

Los arquitectos neoliberales de México están hipotecando la nación y su reserva de mano de obra a los extranjeros. A una escala sin precedentes, México está transfiriendo capital a Estados Unidos, no sólo en recursos naturales y valor añadido por el trabajo en los puntos de producción, sino también en el traslado literal de cerca de un quinto de su población económicamente activa a Estados Unidos ("mano de obra emigrante"). México podría compararse a un gigantesco depósito de mano de obra barata a disposición de las élites y acreedores extranjeros —un eslabón decisivo en la cadena del imperialismo, pero, como reveló el levantamiento zapatista y el colapso económico de 1994-1995, se trata de un "eslabón débil".

El neoliberalismo y el TLC han acelerado la "petrolización" y "maquiladorización" de la economía, creando un México dividido. Por una parte, hay unas pocas gemas de prosperidad, especialmente en los estados norteños. Por otra parte, capas sobre capas de pobreza están encostrando esas gemas, especialmente en los estados del sur y centro-sur.

Debido a esta concentración y polarización, otro colapso económico puede estar ya tomando forma. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos informó a mediados de 1998 que 33 600 millones de capital personal y corporativo de México están escondidos en bancos estadunidenses (capital tránsfuga), cifra superior a las reservas externas actuales y a la cantidad con que se contaba en diciembre de 1994, cuando se produjo el último colapso económico de México.[2] Además, los gigantescos pagos de la deuda externa que vencerán en el periodo 1998-2000 privarán a México de los fondos que necesita para su inversión nacional productiva.[3] El estado está gastando ya una cifra igual al 12% del PIB de 1997 para cubrir las deudas incobrables del sector bancario privado. En su valoración de los bancos de sesenta y un países en 1997, Moody's Investors Service calificó a los bancos de México como los que más probablemente "necesitarían auxilio externo" (junto con los de Pakistán, Rumania y Túnez).[4] Todo esto deja a México más vulnerable que nunca frente a la presión de Estados Unidos. Pero también amenaza a la cadena imperial con una grave ruptura.

Una vez más el peso parece sobrevaluado. La inflación va en aumento, con los precios muy por arriba de los salarios, dejando a un 75% de las familias incapaces de aspirar a la "canasta básica de alimentos".[5] La producción del PIB per cápita está descendiendo y los términos del intercambio en comercio exterior siguen siendo desiguales en un momento en que México está importando bienes de capital costosos más que nunca antes.[6] Con la reserva de mano de obra de México creciendo en más de un millón de nuevos elementos por año y su masiva pobreza empeorando, incluso el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del capital monopólico nacional está diciendo que México tiene que dar absoluta prioridad a crear un millón de nuevos empleos por año con el fin de "asegurar a la sociedad que no vamos a volver a caer en

[2] *La Jornada*, 4 de julio de 1998 (con los datos de un artículo del número de junio de 1998 del *Federal Reserve Bulletin*).

[3] Para más detalles, véase Carlos Marichal, "The vicious cycles of Mexican debt", NACLA *Report on the Americas* XXXI, núm. 3 (noviembre-diciembre de 1997), pp. 25-31.

[4] *Wall Street Journal*, 7 de mayo de 1997.

[5] La inflación fue del 16.7% en el costo de la canasta de bienes básicos en 1997. Según la Universidad Obrera de la ciudad de México, los precios aumentaron 177% mientras que los salarios cayeron un 36% entre la devaluación del peso de diciembre de 1994 y agosto de 1997 (citado en *Mexican Labor News Analysys*, 15 de septiembre de 1997). El salario mínimo real descendió en 1998 hasta el nivel que tuvo a mediados de los treinta.

[6] Véase Edur Velasco Arregui, "Commentary on statistical tables: neoliberalism, the long wave in Mexico, and the economic integration of North America" (manuscrito inédito), cuadros 1 y 2.

crisis recurrentes".[7] Pero las empresas privadas están despidiendo más trabajadores de los que están contratando, y las pocas empresas estatales que aún quedan emplean menos del 7% de la fuerza laboral. Otras voces del capital monopólico mexicano, recordando las devastadoras consecuencias de retardar la devaluación del peso en 1994, urgen un pronto "ajuste fiscal" incluso a costa de no crear suficientes empleos.[8]

Una sequía a principios de 1998 y un mercado de valores mexicano tambaleante no auguran durabilidad para la muy ensalzada pero erróneamente nombrada "recuperación económica". Las insurgencias guerrilleras, los desafíos electorales de la oposición al PRI y la creciente presencia militar de Estados Unidos a lo largo de la frontera mexico-estadunidense no son pruebas de "estabilidad". Una de las mayores preocupaciones económicas es la "caída libre" de los precios del petróleo a su nivel más bajo en dos décadas, lo que ha llevado a mayores recortes en el presupuesto federal de programas sociales.[9]

Sin embargo, los arquitectos del castillo de arena mexicano siguen ocultando sus cabezas aún más profundamente en la arena. Han anunciado mas privatizaciones y planes de empréstitos en el extranjero. Dicen que la empresa petrolera Pemex, ya semiprivatizada, mediante sus ventas (por valor de 29 mil millones de dólares en 1996) y más inversión de capital (que se duplicó entre 1995 y 1997), elevará su producción diaria desde 3 millones a 3.7 millones de barriles para el año 2000. Esto implica más préstamos externos y un posible recalentamiento de la economía como sucedió en los años previos al colapso económico de 1982.[10]

Además, si el desarrollo de la producción de los medios de producción —bienes de capital e intermedios— sigue dependiendo de la "buena voluntad" de las transnacionales, esto sólo puede acelerar la acumulación de capital en el extranjero y atar aún más a la economía subordinada y semi-industrializada de México al imperialismo y a sus instituciones de crédito. En los noventa México

[7] Del presidente de la CCE, Eduardo Bours Castelo, se afirma que también dijo que una transición política costosa era preferible a perpetuar la corrupción del pasado. Véase *La Jornada*, 16 de junio de 1997 y 19 de junio de 1998.

[8] Véase *La Jornada*, 15 de abril de 1998.

[9] Esto toma en cuenta la inflación. Desde el otoño de 1997 hasta la primavera de 1998, el precio por barril del crudo cayó 8 dólares quedando en 13 dólares (*New York Times*, 21 de mayo de 1998). Según el Banco de México, México tenía más de 30 mil millones en reservas de divisas en abril de 1998, pero eso era 10 mil millones menos que los pagos de intereses de la deuda en 1997. La crisis económica asiática aumentó la fuga de capitales fuera de México y ayudó a bajar los precios en la bolsa mexicana. Un ex secretario de Hacienda advirtió de los próximos recortes en los subsidios a la leche, las tortillas y desayunos escolares y del "riesgo de conflictos sociales debidos al descontento público" (*La Jornada*, 8 de mayo de 1998). Para más información, véase *La Jornada*, 30 de octubre de 1997, 15 de abril de 1998; *Mexican Labor News Analysis* 3, núm. 4 (16 de febrero de 1998); *New York Times*, 25 de marzo de 1998.

[10] Las estadísticas y planes de Pemex aparecieron en *The Economist*, 6 de diciembre de 1997. Por otra parte, la posibilidad de disminución de los precios del petróleo amenazó con forzar a Pemex a aceptar disminuir su producción mediante acuerdos establecidos con otros países productores para recuperar los anteriores precios.

importa el 90% de su maquinaria y de sus bienes de capital intermedios. Durante los seis primeros años de los noventa, el costo de las importaciones de alta tecnología de Estados Unidos aumentó más del doble hasta 28 mil millones de dólares (cerca del 10% del PIB). El gasto en investigación de México entre 1991 y 1992 fue apenas un 0.3% del PIB, o menos de una octava parte de lo que gastó Estados Unidos, y cayó aún más después del colapso económico de 1994 y 1995.[11]

En contraste, los economistas de centro-izquierda de México como Carlos Perzabal creen que México necesita romper el círculo cada vez más profundo de dependencia de las importaciones de tecnología industrial extranjera, y reafirmar la intervención estatal en la economía para reforzar el desarrollo doméstico de la industria de bienes de capital y el mercado doméstico.[12] Ciertamente la intervención estatal para impedir la salida del capital tránsfuga y del dinero en bancos de la droga ayudaría a volver a hacer solvente al estado. Lo mismo harían los impuestos corporativos y al ingreso aplicados al grupo de ingresos correspondiente al 5% superior, hasta ahora raramente intentados o puestos en práctica. Los ahorros internos se dispararían hacia arriba en lugar de desaparecer.[13]

Todo ese dinero podría entonces reintegrarse para el desarrollo de recursos de tecnología, mejoras de la infraestructura y de las fábricas anticuadas, construcción de escuelas y hospitales y para proporcionar empleos y viviendas para todos. Elevar el salario mínimo a niveles muy por encima de la tasa de inflación facilitaría romper el patrón histórico de acumulación de capital basado en salarios bajos, y estimularía la expansión del mercado interno para los productos de consumo y los servicios locales. Los ingresos por exportación de petróleo y el dinero ahorrado por el rescate de la deuda también podrían colaborar a esto. Según el economista David Barkin, un programa de autosuficiencia alimentaria basado en el desarrollo autónomo local podría crear 3 millones de nuevos puestos de trabajo en tres años o aun menos, mientras que un programa de agua potable segura añadiría otros 3.4 millones de empleos.[14]

Para tener éxito, un enfoque semejante tendría que romper los bloques integrados de poder representados por el triunvirato de capital privado/capital

[11] El gobierno mexicano proporcionó el 68% de los fondos de investigación, mientras que la industria privada financió el resto. Los gastos académicos para desarrollo de tecnología fueron prácticamente nulos (0.06 % del PIB). Véase Unesco, *World science report*, 1996. En la primavera de 1998, Conacyt anunció una reducción del 10% en las becas a causa de la baja en los precios de exportación del petróleo. Para más datos, véase *La Jornada*, 26 de marzo y 8 de mayo de 1998.

[12] El Sistema Económico Latino Americano (SELA), un organismo de las Naciones Unidas, advirtió a finales de 1993 que la monopolización de la transformación tecnológica por doce industrias que incluían más de mil transnacionales competidoras, amenazaba con dejar atrás a México y al resto de América Latina. Unas 40 000 transnacionales dominaban la economía internacional, representando dos tercios del comercio mundial.

[13] Véase Velasco Arregui, "Commentary".

[14] David Barkin, comentario en un panel del XX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Guadalajara, México, 1997. Véase también David Barkin, *Distorted development: Mexico in the world economy* (Boulder, Westview Press, 1990).

extranjero/estado. Implicaría volver a nacionalizar el petróleo, afirmar el control de un estado democrático sobre otras fuerzas dirigentes de la economía y hacer converger los usos de los recursos naturales de la nación, la fuerza laboral, las necesidades de la comunidad, las necesidades económicas y la capacidad productiva industrial (dos tercios de la cual no alcanzan a ser utilizados a cabalidad).[15] Ciertamente implicaría renegociar el TLC y la relación con Estados Unidos. Sobre todo, este enfoque requeriría el apoyo popular de la ciudadanía mexicana, que sólo puede obtenerse a través de una participación genuinamente democrática, desde las bases hasta arriba, a través de cada uno de los niveles del nuevo estado. Y, como el fallecido doctor Salvador Nava no dejaba de insistir, también requeriría un incremento en el apoyo de los activistas de derechos humanos y laborales de todo el mundo, empezando con los de Estados Unidos y Canadá.

Hay una cosa clara. El gobierno de Estados Unidos considera a México como crítico para su "seguridad nacional".[16] México posee tres grandes atractivos en abundancia: petróleo, gas natural y mano de obra barata. Cualquier intento por parte del estado de México ya tan "agredido económicamente" para cambiar el curso tropezaría con la resistencia imperialista. En 1998, una propuesta de enmienda a la carta del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó tan lejos como para permitir que el FMI pudiese examinar la "apertura" de un país y criticar a cualquier país que limitase la inversión extranjera, tanto en la industria como en los servicios y los mercados de valores y de bonos. El castillo de arena de la economía de México ya estaba "abierto". Sin embargo, frente al creciente desencanto del Congreso de Estados Unidos con el TLC y otros juguetes neoliberales, ya no existe ninguna seguridad de que el gobierno de Estados Unidos o el FMI serán política o financieramente capaces de "rescatar" a las economías menores como las de México o Indonesia, mucho menos a grandes potencias como Japón.

Por más importantes que el petróleo y el gas natural sean para la economía estadunidense, la mano de obra inmigrante lo es todavía más. Pero el nativismo de Estados Unidos y las nuevas leyes migratorias amenazan con deportaciones

[15] Para más información sobre esta idea de llevar a converger los diversos recursos, gentes, capacidades y necesidades de una sociedad, véase Clive Yolande Thomas, *The poor and the powerless: economic policy and change in the Caribbean* (Nueva York, Monthly Review Press, 1988). Hay que señalar que ningún país consiguió nunca la prosperidad económica mediante la economía del *laissez-faire* o del neoliberalismo. Todas las primeras potencias industriales se beneficiaron de la fuerte intervención estatal en beneficio del capital, incluyendo aranceles proteccionistas y subsidios estatales para la expansión externa. Los nuevos países en vías de industrialización de Asia oriental generalmente utilizaron la intervención estatal como base de su estrategia de desarrollo económico. La economía de más rápido crecimiento del mundo de los años noventa, China, prestó también un papel clave a la intervención económica del estado.

[16] Véase John Saxe-Fernández, "El gas natural mexicano: su integración vertical a Estados Unidos y la seguridad nacional", *El Cotidiano* año 12, núm. 71 (septiembre de 1995), pp. 31-42; The White House, "National security strategy of the United States" (Washington, U.S. Government Printing Office, marzo de 1990).

en masa de mexicanos, causando alarma en México. En un comunicado al pueblo mexicano durante una visita de estado en 1997, el presidente Clinton dijo que los que quebranten las leyes "deberán enfrentar las consecuencias".[17]

En realidad, reducir la inmigración mexicana aunque fuese modestamente es una imposibilidad en tanto sus *causas* sigan existiendo. Esas causas son la demanda por parte de los empleadores de Estados Unidos de mano de obra mexicana barata, y la falta de salarios decentes en México. Si el flujo migratorio fuese a ser reducido siquiera modestamente por medio de medidas policiacas radicalmente más enérgicas contra los inmigrantes indocumentados, reducción de cuotas para los inmigrantes legales y la negativa de atención hospitalaria y escolaridad para los inmigrantes según los recientes plebiscitos californianos, entonces ocurrirían muchas cosas que sólo empeorarían la situación. La frontera sería militarizada todavía más; habría un número creciente de niños mendigos a los que no se permitiría asistir a la escuela, y las tasas de enfermedades contagiosas en zonas azotadas por la pobreza seguirían aumentando.

En realidad, la frontera *nunca* podrá sellarse contra el flujo migratorio, ni siquiera empleando a todo el ejército de Estados Unidos ni construyendo un muro de concreto de 3 000 kilómetros. Para los empleadores estadunidenses, recortar la inmigración mexicana sabotearía la economía del suroeste y muchos nuevos centros urbanos vitalizados, como Chicago y Nueva York, que dependen considerablemente de la mano de obra inmigrante. Los trabajadores estadunidenses no se beneficiarían de ello, puesto que mantener fuera a los inmigrantes convertiría a México todavía más en una reserva de mano de obra barata para las empresas estadunidenses ("talleres tránsfugas"). Y tampoco el gobierno mexicano miraría con buenos ojos la consiguiente pérdida de envíos de dólares o la eliminación de una importante válvula de seguridad para la inquietud social. El capital perdería su principal chivo expiatorio para los problemas laborales en Estados Unidos.

Mientras tanto, la legislatura mexicana ha aprobado una ley que permite a los mexicanos en Estados Unidos que han elegido la ciudadanía estadunidense conservar también su ciudadanía mexicana si así lo desean. La "doble ciudadanía" permite conservar plenos derechos ciudadanos en ambos países, incluyendo la libertad de viajar, libertad de poseer propiedades, de tierras u otras, la libertad de aceptar un nuevo empleo en el otro país, y el derecho al voto. Sin embargo, Estados Unidos ha rehusado reconocer la doble ciudadanía de los mexicanos, a pesar de que Estados Unidos cuenta con acuerdos bilaterales para la doble ciudadanía con otras 134 naciones, incluyendo al otro socio del TLC: Canadá. Sospechando que se trate de racismo, los mexicanos preguntan: ¿por qué Canadá sí y México no?

Una política estadunidense sensibilizada para resolver los problemas de la inmigración enfrentaría sus causas, incluyendo la estructura de bajos salarios de México. Esto implicaría una política exterior que insista en armonizar los

[17] *New York Times*, 8 de mayo de 1997.

salarios hacia arriba, en vez de hacia abajo. Significaría revisar el IRCA de 1986 y las subsiguientes leyes migratorias para conceder la "amnistía" a los "ilegales" actualmente empleados y para equiparar las disposiciones de refugio político de acuerdo con la Refugee Act de 1980 que obligaba a Estados Unidos a utilizar los criterios de las Naciones Unidas para definir a un refugiado político. Significaría también incluir a México en los acuerdos sobre "doble ciudadanía". En vez de desperdiciar miles de millones de dólares en un juego de gato y ratón para dar caza a los inmigrantes mexicanos, una política sana disolvería la Patrulla Fronteriza y utilizaría el dinero así ahorrado para proporcionar servicios de legalización y programas de enseñanza del idioma, así como un subsidio cultural para celebrar la floreciente sociedad transnacional y bilingüe que evoluciona a lo largo de la "ficción legal" de la frontera entre México y Estados Unidos.

En vez de eso, el gobierno estadunidense prosigue una política derrochadora y violenta que atrae la censura de los grupos defensores de derechos humanos en todo el mundo. Lo mismo por lo que toca al exagerado mito de "dar la bienvenida a los inmigrantes a la tierra de la libertad".

Lo mismo puede decirse acerca de la política sobre drogas. Es demasiado derrochadora y violenta, especialmente para las víctimas inocentes de las redadas policiales en Estados Unidos y para los campesinos de México y de gran parte del resto de América Latina que no cuentan con otros medios de supervivencia. Una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambas naciones es una solución poco realista, puesto que ya fue intentada sin ningún éxito debido tanto a la corrupción de las fuerzas de seguridad de ambos países como a la confianza de los grandes bancos en los miles de millones de dólares de los fondos "lavados". Se necesitan cambios mayores tanto en Estados Unidos como en México si se quiere resolver de manera realista el problema de la droga, empezando con programas adecuados de rehabilitación para los adictos y transformaciones en la agricultura mexicana que permitan a los campesinos ganarse la vida con la producción de maíz y otros productos agrícolas.

Así como la "ficción legal" de la frontera proporciona múltiples beneficios a las fuerzas de seguridad y a los empleadores que buscan mano de obra barata, así la falsa "guerra contra la droga" ayuda a perpetuar el "complejo industrial militar" estadunidense contra el que el presidente Dwight Eisenhower previno ya a fines de los años cincuenta. La economía estadunidense, al igual que otras poderosas economías a lo largo de la historia, nunca ha prosperado por mucho tiempo sin recibir un subsidio estatal para la producción de materiales de guerra y gangas económicas "ganadas" mediante la dominación o la conquista. Éste es el sentido real según el cual México es definido como un problema de "seguridad nacional" para Estados Unidos —no como una amenaza de invasión, sino como una pérdida potencial de beneficios de capital. Caspar Weinberger, secretario de Defensa de Estados Unidos durante la "guerra de baja intensidad" de los años ochenta en Centroamérica, en 1997 escribió un libro que preveía la posible invasión de México en el año 2003 para derrocar a un "narco-

gobierno" mexicano. ¡Qué conveniente, excepto por el detalle de que 1998 no era 1848![18]

Como ya señalamos antes, la estrategia preferida por el imperialismo estadunidense para asegurarse el petróleo y el gas natural mexicanos no es alguna guerra irreal y maquinada, sino una combinación de presión económica y diplomática y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad nacionales para controlar las protestas ciudadanas contra la desnacionalización, y para quebrantar las protestas de los campesinos contra la rapiña de sus tierras por las empresas de petróleo, gas natural, petroquímicos y construcción. La mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de México se dirigen ya a Estados Unidos, y México sigue entregando cada vez más su patrimonio nacional mediante alianzas entre Pemex y empresas extranjeras.

En el frente político, México está experimentando una crisis del estado unipartidista autoritario-tecnocrático que vuelve al gobierno todavía menos capaz de satisfacer las necesidades de las masas. Aunque los patrones de privatización han traído miles de millones de dólares a las arcas del estado, impidiendo así su colapso definitivo, la mayor parte de ese nuevo dinero está regresando al sector privado a través de subsidios estatales y de los pagos de la deuda, o a individuos y firmas privadas a través de la corrupción. Los presupuestos gubernamentales reducidos frente a las crecientes demandas populares dejan al estado en una posición aún más debilitada.

No obstante las frecuentes diferencias de opinión dentro del estado mexicano, éste mantiene una relación armoniosa con el imperialismo, lo que sólo sirve para agravar la crisis del estado. ¿Por qué? Porque el estado, como el capital extranjero, tiene que luchar para demostrar su legitimidad nacional, para probar a un pueblo escéptico su carácter mexicano e independiente en vez de su carácter dependiente y dictado por el FMI. Ésta es una razón más por la que el gobierno mexicano subraya su política exterior "independiente", como en su apoyo a la readmisión de Cuba en la Organización de Estados Americanos.

Falta ver si la humillante derrota del PRI en las elecciones de 1997 conducirá a una mayor democratización en México o a más "guerra sucia". Las guerrillas, aunque cercadas, siguen representando una amenaza para la supervivencia del gobierno del PRI. En el caso de los zapatistas, éstos siguen conservando una especie de ventaja moral, o al menos influencia, nacional e internacionalmente, que ayuda a controlar la militarización del resto del país por el gobierno de Zedillo. Aun así, escuadrones de la muerte disfrazados, pistoleros y paramilitares siguen muy activos, intimidando o asesinando de forma selectiva a periodistas, activistas de derechos humanos y abogados laboralistas como los miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, militantes del PRD, clérigos e intelectuales prominentes críticos del PRI y estudiantes, campesinos, indígenas o trabajadores disidentes.

El PRI sigue teniendo en sus manos las riendas del poder, incluyendo su ela-

[18] Caspar Weinberger, *The next war* (Nueva York, Regnery, 1997).

borado sistema de patronazgo del que mucha gente depende para sus empleos. La corrupción está tan viva como siempre, y los presidentes recientes han centralizado el poder y militarizado a la sociedad en una medida alarmante. Al mismo tiempo, las divisiones en la dirigencia del PRI, su incapacidad para resolver los problemas económicos, y las crecientes protestas de los movimientos sociales de México han forzado a los gobiernos del PRI a aceptar las reformas políticas. Inicialmente, el PRI esperaba que las reformas desviarían las oleadas de descontento hacia canales electorales en donde podrían ser contenidas más fácilmente. Sin embargo, los grupos democráticos y los partidos de oposición han utilizado las reformas para ganar el control de numerosos gobiernos locales y estatales y para acabar con la mayoría del PRI en el Congreso.

Con el PRI —y por consiguiente con el estado corporativo —perdiendo credibilidad pública, y con los mexicanos tomando las calles para exigir sus derechos básicos, los rumores de golpe militar se han vuelto más habituales. Muchos observadores indican, sin embargo, que el PRI ha sobrevivido a otros tiempos difíciles y muy bien podría capear también esta última tormenta.

Cierto número de mexicanos miran hacia el nuevo siglo con la esperanza de que todavía podrán ver una democracia política y económica. ¿Por qué? Una razón obvia es que la crisis del estado unipartidista les conviene, porque el estado ha contribuido durante largo tiempo a su opresión. Como resultado de la creciente desconfianza popular en el estado existente, las masas trabajadoras de México, dirigidas sólo en parte por los trabajadores industriales regularmente empleados y principalmente por los más oprimidos (mujeres e indígenas), parecen estar siguiendo una estrategia de luchar por un mayor control de la producción económica en las fábricas, talleres y campos. Parecen más interesados en construir un poder o autonomía en los centros de trabajo y en las comunidades y vecindarios que en ganar el control del estado en bancarrota. Gran parte de la lucha contra el estado se dirige a un mismo objetivo: el control local.

A pesar a la represión estatal, los movimientos sociales populares han forzado la apertura de cierto espacio democrático en la política mexicana. Bajo las nuevas leyes que hacen el voto obligatorio, los mexicanos están empezando a votar con mayor frecuencia, y son menos los que optan por el PRI. Los que votan con mayor regularidad son los elementos más acomodados de las clases intermedias y los campesinos y obreros sobornados por el PRI.

A medida que las elecciones se van conduciendo con mayor limpieza, surgen nuevas oportunidades, junto con nuevos problemas. Por ejemplo, el PRD, de centro-izquierda, no puede permitirse los elevados costos del proceso electoral que afrontan el PRI y el PAN. También, los partidos políticos contrarios al PRI pueden absorber los talentos y energías de los movimientos sociales, conduciendo a divisiones internas dentro de los movimientos y a una reducción de su influencia. Ésta es la lógica detrás de la declaración de los zapatistas de que ellos no desean que el FZLN sea un partido político ni tomar el poder del estado. Ellos ven al estado existente tan corrupto que participar en él forzosamente corrompería y debilitaría a los movimientos.

Otro problema es que los intentos de democratización, aunque abren un espacio para la representación política, tienden a provocar una represión y militarización de la sociedad todavía mayores. Ésta es una razón más por la que los movimientos democráticos no esperan que la transformación democrática venga "desde arriba" sino que comprenden que tienen que construirla "desde abajo".

En última instancia, la única defensa contra la represión estatal es el fortalecimiento de los movimientos sociales de masas y la internacionalización de la lucha obrera para responder a la internacionalización del capital monopólico. Y ahí también se asienta la esperanza, puesto que hay señales claras de crecientes redes internacionales de apoyo obrero, especialmente en el contexto del TLC, con creciente solidaridad entre los sindicatos de los tres países. Al mismo tiempo, la esperanza hace que las lecciones de la historia política y económica de México lleguen a conjugarse.

Después de todo, fueron los movimientos sociales de masas de los trabajadores los que iniciaron las grandes revoluciones de la historia de México, primero contra el colonialismo español, luego contra la ocupación militar francesa y finalmente contra la dictadura "liberal" de Díaz. Fueron guerrilleros campesinos como Emiliano Zapata y revolucionarios internacionalistas como Ricardo Flores Magón los que formularon los programas y prácticas de democracia local directa que dieron origen a las cláusulas más progresistas de la Constitución de la Revolución mexicana de 1917. En muchos de sus comunicados, los actuales zapatistas parecen conscientes de los peligros de ser "embaucados" o "traicionados" una vez más, como les sucedió a sus predecesores en 1911 cuando las tropas de Zapata entregaron sus armas, o en 1915 cuando el movimiento obrero urbano se separó del movimiento campesino para formar los batallones rojos, o en 1919 cuando Zapata fue asesinado.

Los indígenas y las mujeres de México siguen siendo decisivos para el éxito de cualquier transformación política. Los diferentes pueblos indígenas de México (mayas, mixtecos, purépechas, zapotecos, etc.) están empeñados tanto en una lucha de clases dentro de una economía capitalista moderna como en una batalla cultural contra una sociedad racista. Su lucha de clase se refleja en las luchas de los campesinos y trabajadores rurales por tener un pedazo de tierra y condiciones de trabajo decentes, o en las luchas de los trabajadores por obtener mejores salarios y condiciones laborales, o en demandas relacionadas con los talleres artesanos y empresas comerciales pequeñoburguesas, o en las demandas de los trabajadores emigrantes. Sus exigencias culturales se centran en torno al tema de la propiedad y el uso de la tierra y de la cuestión estrechamente relacionada de la toma de decisiones colectiva, o democracia. Ésta es la base del apoyo del Congreso Indígena Nacional al programa de los zapatistas en 1996. Para los pueblos indígenas, la tierra no es un bien que pueda comprarse y venderse. Su exigencia de "autonomía" significa no sólo autogobierno local de acuerdo con los usos tradicionales (específicamente culturales), sino también el control de las tierras, ríos y elementos de la naturaleza que durante lar-

go tiempo han respetado y comprendido en formas que van contra la fácil explotación capitalista de estos recursos. La cultura se armoniza particularmente con la lucha de clases cuando la tierra se convierte en el único medio de supervivencia para tantas gentes rurales, de cualquier etnia que sean, en un medio superexplotador.

Debido al patriarcado y a la ideología de género con él relacionada, el capital ha tenido una capacidad añadida para sobrexplotar a las mujeres, lo que es una razón detrás de la creciente participación de las mujeres en los sectores tanto formal como informal de la economía de México. El capital encontró siempre en las mujeres una fuente no asalariada de producción de fuerza de trabajo que subsidia al capital en la producción de bienes de capital y de consumo reduciendo los costos de la mano de obra. Pero el capital aprovecha cada vez más una vasta reserva de fuerza laboral barata, no sindicalizada y en ocasiones capacitada para la producción de capital y de bienes de consumo. En todas partes, cada vez más mujeres se están convirtiendo en cabezas de familia y en primeras "proveedoras" de la familia.[19]

En palabras del director del programa de desarrollo para las mujeres del Banco Interamericano de Desarrollo, "Invertir en las mujeres ofrece a los políticos las utilidades económicas y sociales más altas al menor costo".[20] La "maquiladorización" de México le debe en gran parte al patriarcado el que haya sido posible la superexplotación de las maquiladoras de una fuerza laboral principalmente femenina. Esta misma lógica está detrás del uso por parte de muchas industrias estadunidenses de alta tecnología de trabajadoras inmigrantes mexicanas y de otras nacionalidades, como sucede en el Silicon Valley de California.[21]

[19] Véase Helen I. Safa, *The myth of the male breadwinner: women and industrialization in the Caribbean* (Boulder, Westview Press, 1995).

[20] Mayra Buvinic, "Women in poverty: a new global underclass", *Foreign Policy*, otoño de 1997, pp. 38-39. Esto representa una versión de fines de los años noventa de una inversión más feminizada en la estrategia iniciada por el Banco Mundial treinta años antes. Esta versión convertía a las mujeres en foco de la nueva estrategia de "Social Investment Funds" (SIF), del Banco Mundial. Los SIF eran medidas temporales que pretendían mitigar el devastador impacto del neoliberalismo en las vidas de los pobres sin tocar las causas estructurales subyacentes de la pobreza. Para más datos, véase Michael Lipton y Jacques van der Gaag, *Including the poor* (Washington, World Bank, 1994); *NACLA Report on the Americas* 29, núm. 6 (mayo-junio de 1996). No nos sorprende que en 1997 una historia crítica en dos tomos sobre el Banco Mundial, publicada por Brookings Institution con autorización del Banco, recibiera poca atención en la prensa. Véase *The Nation*, 23 de marzo de 1998, pp. 4-5.

[21] Al entrevistar a trabajadoras inmigrantes en Silicon Valley, Karen Hossfeld encontró que no sólo tenían "fuerza numérica, sino también una riqueza de creatividad, comprensión y experiencia que podría ser decisiva para reavivar el estancado movimiento obrero [de Estados Unidos]". Hossfeld escribió que "me impresionaron como organizadoras de gran eficacia potencial para el trabajo y la comunidad y como líderes de base. Pero casi ninguna estaba interesada en la organización colectiva, debido a sus limitaciones de tiempo y a sus obligaciones familiares y por su falta de confianza en los sindicatos, el movimiento feminista y las organizaciones comunitarias." Véase Karen J. Hossfeld, "Their logic against them: contradictions in sex, race and class in Silicon Valley", en Kathryn Ward, comp., *Women workers and global restructuring* (Ithaca, ILR Press, 1990), pp. 176-77.

Las mujeres de México, como sus indígenas, tienen que pelear una lucha doble, una basada en la clase y otra basada en exigencias específicas de género. Y, al igual que las mujeres indígenas, las mujeres trabajadoras de todos los grupos raciales y étnicos se están unificando cada vez más en torno a demandas tanto de clase como de género. Además, las "estrategias de supervivencia familiar" consistentes en múltiples tipos de trabajo productor de ingreso están convirtiéndose en la forma dominante de lucha económica para las masas empobrecidas de México, a menudo con las mujeres a su cabeza.

Cada vez más, indígenas y mujeres están en la primera fila de todos los movimientos sociales de México para el cambio político y económico. Una falta de análisis de clase de género y étnico/racial y de *praxis* podría llevar, sin embargo, a un fracaso en el intento de enfrentar la realidad de la incrementada iniciativa y participación en el cambio social y en los procesos revolucionarios de las mujeres y los indígenas, con suficiente compromiso como para tener una dirigencia femenina e indígena y una instrumentación real de reformas que satisfagan sus necesidades y derechos específicos. Sólo cuando los trabajadores pobres, la clase obrera y los organizadores e intelectuales comprometidos reconozcan el papel de las masas depauperadas y de las mujeres y los indígenas dentro de ellas no sólo como "ejército laboral de reserva", sino también como un arma activada extraordinariamente importante de la acumulación de capital para los capitalistas domésticos y extranjeros, podrán los crecientes movimientos sociales de masas y los movimientos organizadores de sindicatos entre los trabajadores pobres vincularse a la dinámica fundamental de la lucha de clases, la que impulsa a los propietarios capitalistas contra los proletarios urbanos y rurales.

Muchas personas en el movimiento sindical reconocen la necesidad de internacionalizar las luchas obreras y de incorporar las demandas feministas. Ellos, como los activistas en derechos humanos, comprenden que sus luchas deben estar relacionadas con cuestiones de mayor envergadura, tales como el TLC, el GATT y el MAI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones), así como con las tendencias de organización sindical específicas como las existentes entre las maquiladoras de México o en la recientemente creada Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y su organización miembro el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), o la AFL-CIO de Estados Unidos y su organización miembro la United Farm Workers (UFW). Ahora reconocen la necesidad de "organizar a los desorganizados" —principalmente mujeres y trabajadores emigrantes—, muchos de los cuales ya habían empezado a organizarse ellos mismos en ambos países desde antes de los años noventa.

Y todo esto es lo que da a muchos mexicanos motivo de esperanza.

No obstante, en su lucha por espacios democráticos, mejoras económicas y transformación del estado, los mexicanos tienen que enfrentarse a armas más poderosas (suministradas por Estados Unidos) y a políticos más mañosos que nunca. Para tener éxito, tendrán que enfrentar y edificar basándose en las lecciones de su historia, de la que siguen siendo agentes muy activos. También necesitarán insistir en la solidaridad internacional, cuyo elemento clave es la creciente

corriente de solidaridad internacional obrera, feminista y de derechos humanos que ya está volviendo a poner a México en el primer plano de la atención mundial, como el TLC y otros programas del capital monopólico moderno han hecho en el pasado reciente. Inexorablemente, los destinos de los trabajadores, no sólo en México sino en toda América —de hecho, en todo el mundo— dependen recíprocamente cada vez más de los éxitos o fracasos de las luchas nacionales por los derechos de los trabajadores y de las democracias genuinamente pluralistas dentro de sus países, diferentes pero interrelacionados. Por esa razón, la esperanza de México es la esperanza del mundo.

SITIOS DE LA RED RELACIONADOS

Banco Interamericano de Desarrollo, para datos sobre México y otros países <*http://www.iadb.org*>

Banco Mundial: publicaciones diversas, por ejemplo informes económicos sobre México, datos sobre medio ambiente, etc. <*http://www.worldbank.org*>

CLACSO: Principal organización de ciencias sociales de bancos de datos y libros latinoamericanos en 100 centros de investigación de diecinueve países de América Latina afiliados <*http://www.webcom.com/~clacso*>

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL). Estadísticas sociales, muy confiables <*http://www.eclac.cl*>

Comisión Nacional para la Democracia en México, con base en Estados Unidos, para documentos sobre el EZLN y otras organizaciones mexicanas <*http://www.igc.apc.org/ncdm/*>

Fourth World Documentation Project: Información para la comunidad de la red de los pueblos indígenas <*http://www.halcyon.com/FWDP/fwdp.html*>

Guía de sitios y recursos sobre los latinos en Estados Unidos y sobre problemas en la frontera de Estados Unidos y México <*http://lib.nmsu.edu/subject/bord/latino.html*>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo estadístico oficial de México <*http://ags.inegi.gob.mx*>

Interhemispheric Resource Center (antecedentes y materiales actuales) <*http://www.zianet.com/ircl*>

Interpress Latin America Wire, noticias en la red ordenadas por temas y países <*http://worldnews.net/interpress/iphome.html*>

IPL Trade Directory para información comercial sobre 50 000 empresas en México y Centroamérica <*http://www.ipl.com.gt*>

Latin America Working Group, National Council of Churches: *Legislative Update* (correo informativo con materiales sobre formación de políticas de Estados Unidos) <*www.igc.apc.org/lawg*>

Library of Congress, con resúmenes e información bibliográfica sobre gran variedad de temas latinoamericanos <*http://www.lcweb2.loc.gov/hlas/hlashome.html*>

Libro de historia de América Latina con informes y vínculos con otros sitios dedicados a la historia <*http://www.h-net.msu.edu/~latam*>

Mexican Labor News Analysis, excelente fuente de noticias y estadísticas sociales sobre México con explicaciones de sus antecedentes <*03144.2651@compuserve.com*>

NACLA, datos actuales sobre México <*http://www.igc.org/nacla/mexico.html*>

NACLA *Report on the Americas,* 475 Riverside Drive, Suite 454, NY, NY 10115, fuente ampliamente respetada por sus materiales analíticos, incluyendo políticas de Estados Unidos <*http://www.nacla.org*>

North American Institute. Datos sobre comercio, medio ambiente, temas socioculturales relativos a Canadá, Estados Unidos y México <*http://www.santafe.edu/~naminet*>

North American Integration and Development Center en UCLA, acerca del TLC, proyectos de inversión, etc. <*http://naid.sppsr.ucla.edu*>

PROFMEX, información sobre México en inglés y español <*http://profmexis.sar.net/*>

TLC, documentos relacionados <*http://NAFTA.net*>

University of Texas: LANIC, sitio para materiales sobre México y otros temas y subtemas relacionados con América Latina <*http://www.lanic.utexas.edu*>

University of Texas, Informes y documentos sobre temas actuales del Programa de Estudios de Políticas entre México y Estados Unidos <*http://www.utexas.edu/depts/lbj-school/usmex.html*>

Weekly News Update on the Americas, excelente publicación que abarca noticias sobre México y otros países del Nicaragua Solidarity Network of Greater New York, 339 Lafayette St., NY, NY 10012 <*home.earthlink.net/~dbwilson/wnuhome.html*>

ÍNDICE ANALÍTICO

Abejas, Las (organización): 395
aborto: 411, 418
acero, industria del: 311
acoso sexual: 334-5
Acteal, matanza de: 395-7
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT): 176, 332; burguesía urbana y: 263; derechos de propiedad intelectual y: 209; ingreso de México al: 292, 368
Acuerdo de Libre Comercio (FTA): 368
Acuña y Rosete, Elisa: 116
Adams, John Quincy: 84, 87
Aeroméxico (línea aérea): 423
africanos: 20, 53
afroamericanos: 428, 440
Agee, Philip: 303
Agency for International Development (AID): 194, 209, 247, 249
agentes extranjeros: 62
agiotistas: 80, 83
agricultura: bajo Díaz: 110-3; Banco Mundial y: 247-8; de los indígenas: 32, 360; después de 1940: 250-1; después de la segunda guerra mundial: 186; durante la segunda guerra mundial: 188; emigrantes mexicanos empleados en: 429; en el México colonial: 47-9, 60; en la Mesoamérica precolonial: 24; estructura de clase rural y: 237, 247; fuerza de trabajo en: 229; Ley de Desarrollo Agrario y: 342; proyecto Pider y: 249-50; reforma agraria y: 159-162; revolución verde en la: 175, 213-23, 376; *véase también* ejidos
agroindustria: 220-2, 246, 251, 363
Aguilar, Alonso: 224
Agustín de Iturbide, emperador de México: 75-6
Alamán, Lucas: 83
Albright, Madeleine: 394, 398
Alemán, Miguel: 165, 177, 187-8, 264n
ALFA (organización de la industria del acero): 263, 265, 414
algodón, industria del: 221
Alianza Cívica: 358, 392, 417
alimentos, motines por: 56, 416
Almazán, Juan Andreu: *véase* Andreu Almazán, Juan
Altos Hornos de México: 311, 338
Alvarado, Pedro de: 30, 51
Alvarado, Salvador: 125, 160
Álvarez, Juan: 75, 91
Álvarez Béjar, Alejandro: 375
Álvarez Córdoba, Enrique: 290
Allende, Salvador: 405
América Latina: depresiones económicas causadas por el neoliberalismo en: 251-252; golpes militares en: 405; TLC, FTAA y: 380-1
American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO): 441, 456; American Institute for Free Labor Development, fundado por: 194; Coalición para la Justicia en las Maquiladoras, fundada por: 435; nueva dirección de: 438; retornos de salarios por: 337; sobre el TLC: 369-71; sobre la inmigración de trabajadores: 429, 433
American Federation of Workers (AFW): 430, 433
American Institute for Free Labor Development (AIFLD): 194
"americanización" de México: 300

Americas Watch: 395n, 404, 424
Amnistía Internacional (AI): 394, 408-9, 424
anarquismo: 117
Anderson Clayton Co.: 221
Andreu Almazán, Juan: 165
Antorcha Campesina: 256
Antuñano, Esteban de: 83
aranceles: 82, 368, 371n; *véase también* GATT
Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA): 372, 380
Argüello, Gilberto: 77
Aridjis, Homero: 378
Arriaga, Ponciano: 58, 91, 93-4
artesanos: 98-100, 114, 235
Asamblea de Barrios: 336
asiáticos: 54
asilo político: 425
Asociación de Banqueros de México (ABM): 327, 329, 391
Asociación de Trabajadores Domésticos: 439
Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB): 261
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS): 261
Ávila, Alonso de: 38
Ávila Camacho, Manuel: 156, 164, 177
Ayutla de los Libres, matanza de: 397
Azcárraga Jean, Emilio: 262, 414
aztecas: 26-31, 33; sacrificios humanos: 29
azúcar: 110
Azuela, Mariano: 166

Baja California: 122, 356
Bajío, región del: 72, 147, 214
Banca Confía: 232, 402
Banca Serfin: 402
bancarrotas: de empresas mexicanas: 350; del gobierno de México: 231, 327
Banco de Comercio (Bancomer): 230, 264n, 402
Banco de México: 107, 144, 156, 232, 261
Banco Mundial: 248, 285, 319, 342
Banco Nacional de México (Banamex): 264n; control de: 232; control económico de: 230; deuda externa negociada por: 141; dinero de la droga lavado por: 401-2; privatización de: 338, 348
Banco Rural: 240
Banco Santander, grupo financiero (España): 232, 402
Bank of America: 329
Bank of New Scotia (Canadá): 232
Banque de Montréal (Canadá): 232, 402
Barchfield, John W.: 216
Barkin, David: 242, 448
barrios bajos: 280-3; talleres de: 281-3
Bartlett, Manuel: 442
Bartra, Roger: 188
Basurto, Jorge: 111
Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem): 280n, 286
Batallones Rojos (Revolución mexicana): 123, 131, 454
Benería, Lourdes: 344
Benita Galeana, Coalición de Mujeres ("Las Benitas"): 336
bienestar: 425
Bloque de Unidad Obrera (BUO): 199
Bolívar, Simón: 65, 73
"bomba de succión", efecto de: 205, 331, 347
Borbones, reformas en España: 59-61
Bortz, Jeffrey: 47
Bours Castelo, Eduardo: 446n
braceros: 204, 219, 430
Braverman, Harry: 267
brigada blanca: 405
Brito, Esperanza: 393
Brown, Lyle: 161
Brown, Timothy C.: 428n
Bryan, William Jennings: 127
Bucareli, Acuerdos de (1923): 142-4
Buendía, Manuel: 414
burguesía: 445; agraria: 146, 257; agropolítica: 259; bajo Lázaro Cárdenas:

153-18; candidatos seleccionados del PRI y: 351-2; comercial: 258; Consejo Coordinador Empresarial: 309; consolidación de, después de la Revolución mexicana: 138-42; divisiones políticas dentro de: 316-7; elecciones de 1910 y: 120; en la formación del estado: 100-1; en la Revolución mexicana: 105, 134-135; estado mexicano y: 299; imperialismo cultural y: 212-3; populismo y: 168-9; revolución verde y: 222-3; rural: 244, 256-60; tecno-burócratas en: 270; tras la derrota francesa: 97-8
burguesía urbana: 260-5; fracción central: 264, 309
burócratas: 269-73, 300, 354
Bush, George: 310, 431
Business International Corporation: 209
Bustamante, Carlos María de: 67, 74

Cabañas, Lucio: 388
Cabrera, Luis: 123
caciquismo: 254, 360
Cádiz, Constitución de (España, 1812): 74-5
café: 251, 363, 395
California: 85, 424, 427
calpulli (azteca): 27-8
Calleja, Félix: 74
Calles, Plutarco Elías: *véase* Elías Calles, Plutarco
Camacho Solís, Manuel: 364, 442
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra): 263
Campa, Valentín: 193
Campbell Soup Company (empresa): 246, 371
campesinos: 94; bajo Calles y Obregón: 146; bajo Lázaro Cárdenas: 159-62; carreteras bloqueadas por: 416; desplazados: 219; después de 1940: 238; después de la segunda guerra mundial: 188; diferencias de clase entre: 243-6; en la Revolución mexicana: 104, 134-7; en las luchas de clase: 235, 454; entre los zapatistas: 356-60; movimientos cooptadores de: 252-6; movimientos de: 304, 342, 388-9; mujeres: 242; ocupación francesa y: 96; proletarización de: 111-2, 284; revolución verde y: 216-7; revueltas de: 101-2; Salinas y: 345-6
Canadá: 368
Canadian Auto Workers (CAW): 436
Cananea, mina de cobre de: 338
Canning, George: 78
Canek, Jacinto: 51
Cánova, León J.: 132
capital privado, grupos de: 198
capitalismo: agrícola: 112, 251; bajo Díaz: 112-3; bajo Lázaro Cárdenas: 152-9; campesinos desplazados por: 362; corporaciones transnacionales en: 174; desarrollo de: 98-102; después de la Revolución mexicana: 134, 138-42; deudas internacionales y: 230-1; en causas de crisis políticas: 292-300; en el México colonial: 58; gran capital financiero: 263; grupos de capital privado y: 198; imperialismo cultural y: 212; modos de producción no capitalistas absorbidos por: 284; monopolista: 174, 198, 229; papel del estado en: 185, 224; población excedente relativa y: 279
capitalistas: dinero sacado de México por: 324; grupo Monterrey: 263, 264; organizaciones de: 260-3
Cárdenas, Cuauhtémoc: 271, 306; elegido jefe de gobierno de la ciudad de México: 392; en las elecciones de 1988: 292, 315, 336, 355; en las elecciones de 1994: 366; en las elecciones del 2000: 441; los zapatistas y: 393; sobre la alianza Salinas-Estados Uni-dos: 357
Cárdenas, Lázaro: 100, 138, 150, 157, 272, 354; corporativismo: 348; diferencias entre la burguesía bajo: 263; en el Movimiento de Liberación Nacional: 253; industria petrolera nacionalizada

por: 163; políticas de reforma agraria: 159-62; trabajo y: 151-9
Carey, Ron: 438
Carlos III (rey de España): 59
Carlos IV (rey de España): 72
Carranza, Venustiano: 119; asesinato de: 134, 142; como presidente: 139; Constitución de: 133; en la Revolución mexicana: 124, 127-30; huelga general de 1916 aplastada por: 132
Carretero, familia: 214
Carrillo Fuentes, Amado: 400-1
Carrillo y Alderete, Martín de: 56
Carter, Jimmy: 319, 431
Casa del Obrero Mundial: 125, 130-1
Castañeda, Jorge: 414
Castañón, Paulina: 399
castas: 20, 55, 68, 71
Castells, Manuel: 427
Castillo, Leonel: 219
Catorce Puntos (Lázaro Cárdenas): 157
Cedillo, Saturnino: 151, 160
censura: 413
Central Intelligence Agency (CIA): American Institute for Free Labor Development y: 194; desestabilización del gobierno de Echeverría por: 307-10; gobierno mexicano infiltrado por: 303; "guerra contra las drogas" como cobertura de: 407-8; Instituto Lingüístico de Verano y: 341; manual de entrenamiento de: 408; sobre el petróleo mexicano: 323; tráfico de drogas y: 400-1; zapatistas y: 358
Central Nacional de Trabajadores (CNT): 199
Centro Binacional para los Derechos Humanos: 425
Centro Coordinador de Campesinos Revolucionarios Independientes: 312
Centro Nacional de Investigación Agraria: 214
Centroamérica: 323, 326
centroamericanos: 423
CGOCM: *véase* Confederación General de Trabajadores de México
Chalco, revuelta de (1868): 101
charrismo: 193-5, 299, 310
Chase Manhattan Bank: 329
Chávez, César: 220, 432, 434n
Chávez, Ezequiel: 107
Chávez-Thompson, Linda: 438
Chiapas: agricultura en: 214-5, 218; después del TLC: 350-1; indios de: 52, 240-241, 304; matanzas en 1998: 395-8; petróleo en: 319; presencia militar de Estados Unidos en: 407-10; presencia militar en: 406; recursos en: 389; sindicatos obreros en: 340; zapatistas en: 16, 52, 104, 285, 345, 358-66, 384-8, 393
chicanos: 432
chichimecas: 27, 51-2
Chihuahua: 119
Chile: 392, 405
Cholula: 30
chontales: 378
"científicos": 106, 270
cimarrones: 54
Citibank: 232, 329, 399, 401-2
Ciudad Juárez: 205
Ciudad Juárez, tratados de paz de (1911): 122
"clase media": 68, 266-8, 273, 344
clases en México: 21; burguesía emergente en: 65-8; burguesía rural: 256-9; campesinos: 94; castas: 55; clases intermedias coloniales y trabajadores pobres: 68-72; conflictos en: 83; de oficiales del ejército: 410; de zapatistas y villistas: 126; después de 1940: 234-6; durante la Revolución mexicana: 131, 134-7; en áreas rurales: 237-47; en áreas urbanas: 260-74; en el México colonial: 50, 56, 59; género en: 181-5; guerras de Independencia y: 72-6; proletariado y pobres en: 99, 274-85; *véase también* estratificación social

clases intermedias: 68-71, 328; en la estructura de clases urbana: 266-274; en las luchas de clases: 235-6; expansión de: 299-300; mujeres en: 334
clases trabajadoras: *véase* proletariado
Clinton, Bill: 262; en México: 450; frontera México-Estados Unidos militarizada por: 431; FTAA y: 380; industria del vestido: 281-2, 373; México rescatado por: 383; protestas contra: 417; sobre libre comercio: 350, 372; TLC y: 368
Clouthier, Manuel J.: 317, 355
Club Literario y Social de Querétaro: 72
Coalición de Mujeres Feministas: 313
Coalición Intersindical Primero de Mayo: 417-9, 423
Coalición Obrera-Campesina-Estudiantil del Istmo (COCEI): 305, 343
Coalición Obrera-Campesina-Estudiantil de Oaxaca (COCEO): 305
Coalición por la Justicia en las Maquiladoras: 435
Coalición Sindical Nacional (Cosina): 318
Colón, Cristóbal: 35, 37
colonias proletarias: 280
Colonia Tierra y Libertad (San Luis Potosí): 304
Colosio, Luis Donaldo: 365-6, 401
Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI): 362-4
comercio: 41-3; Actas de Libre Comercio (España, 1765) y, 60; bajo Lázaro Cárdenas: 163; de España: 37, 64; de México, dominación estadunidense de: 141; derechos de propiedad intelectual y: 209; derechos humanos vinculados a: 394; después de 1940: 173; después de la independencia mexicana: 76-7, 79; durante la segunda guerra mundial: 186; en alimentos: 214, 222, 342-3; en bienes de capital: 227; en el café: 362-3; en el libre comercio: 105; en el petróleo mexicano: 320; entre Inglaterra y la America española: 65; grupos de capital privado y: 198; Leyes de Libre Comercio (España, 1765) y: 60; pérdidas mexicanas por: 298; TLC y: 367-74, 379-81; tráfico de drogas: 398
Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 394
Comisión Federal de Electricidad (CFE): 158, 189, 230
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): 394
Comisión Nacional de Intermediación (Conai): 395-6
Comisión Nacional para la Democracia en México: 385
Comité Coordinador del Plan de Ayala (CNPA): 312, 343
Comité Unificado de Víctimas del Temblor (CUD): 333
Comonfort, Ignacio: 91-2
compadrazgo: 34, 288
Comte, Auguste: 106
Conasupo: 215, 280
Confederación Campesina de México (CCM): 162
Confederación Campesina Independiente (CCI): 255
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin): 261-2
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL): 194
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex): 141, 261, 309, 330
Confederación de Trabajadores de México (CTM): 191-5, 198, 229, 246, 422; Ávila Camacho apoyado por: 165; Congreso del Trabajo formado por: 199; creación de: 152; decadencia de, en los ochenta y noventa: 337; demandas de democracia dentro de: 299; división en: 419; huelga de la Ford y: 339-400; huelga de maestros rota por: 268-9; huelgas en maquiladoras con-

vocadas por: 437; jornaleros como miembros de: 304; Lázaro Cárdenas y: 161; muerte de Fidel Velázquez y: 415; pacto entre la Concamin y: 262; revuelta estudiantil de 1968 y: 303; sobre el TLC: 370-1, 380
Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM): 148, 151
Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC): 304, 312, 345
Confederación Nacional Campesina (CNC): 191, 343; falta de democracia en: 195; indígenas y: 241; orígenes de: 162; Sistema Alimentario Mexicano y: 342
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco): 261
Confederación Nacional de la Pequeña propiedad (CNPP): 263
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP): 274, 287
Confederación Nacional del Pequeño Comercio (CNPC): 263, 267
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM): 132, 140-3, 146, 148
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC): 337, 422
Congreso de Chilpancingo: 73
Congreso del Trabajo (CT): 99, 311; división en: 422; fundación de: 199; llamado para la alianza continental: 441; muerte de Fidel Velázquez y: 415; trabajadores indocumentados apoyados por: 434
Congreso Internacional de Mujeres (México, D.F., 1975): 184
Congreso Nacional Indígena (CNI): 390, 454
Consejo Coordinador Empresarial (CCE): 261, 291, 309, 317, 446; nacionalización de la banca y: 328-30; TLC apoyado por: 367-8
Consejo de Seguridad Nacional (Cosena): 409
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN): 261, 344
Consejo Mundial de Iglesias: 411
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): 212, 226
Consejo Nacional de Huelga (CNH): 302-3
Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas: 241, 341
Consejo Nacional de Movimientos Urbanos Populares (Conamup): 318, 334, 417
Consejo Nacional de Seguridad Pública: 409
Consejo Supremo de Pueblos Indígenas: 341
conservadores: 83
Consolidación de Rentas Reales, Ley de (España, 1805): 64, 75
constitucionalistas (durante la Revolución mexicana): 125-30, 133
Constituciones mexicanas: de 1857: 91, 100; de 1917: 104, 115, 133, 168, 454; industria del petróleo y: 142, 320, 374-375; la Iglesia y: 411; partidos políticos bajo: 314; sobre los ejidos: 215, 252, 345, 363
construcción, industria de la: 276
contaminación: 377
Convención Constitucional de Querétaro, 1916: 133
Convención de Aguascalientes (1914): 129-30, 136
Convención Nacional de Mujeres: 393
Coolidge, Calvin: 144
Cooperación Económica Asia-Pacífico, foro de: 372
Coordinadora '96 (Comité Coordinador de la Movilización Nacional para los Derechos Humanos): 440
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): 318, 339, 417
Coparmex: *véase* Confederación Patronal de la República Mexicana
Córdova, Arnaldo: 131

Corona, Evangelina: 234, 333
corporaciones transnacionales: 174; agroindustria y: 220-1; importaciones y exportaciones de alimentos por: 214; inversiones en México de: 203-4, 293-4; maquiladoras operadas por: 276, 296-297, 436-7; tecnócratas ligados a: 269; TLC y: 373; transferencias de tecnología y: 207-13, 226
corporativismo: 139n, 167, 185, 292 ; bajo Lázaro Cárdenas: 152, 157; en los noventa: 347-9
Corral, Ramón: 119
corrupción: 273, 453; bajo Alemán: 188; caciquismo y: 254-5; de los ex presidentes: 270-1; después de la independencia de México (1821): 78; después de la Revolución mexicana: 134; en el México colonial: 23, 44; en los sindicatos: 194-5; terremoto en México y: 333; tráfico de drogas y: 400
Cortés, Hernán: 19, 28-30, 37
Cowdray, Lord (Weetman Dickinson Pearson): 127
Creelman, James: 119
criollos: 20, 65
cristeros (1926-29): 147
Cross-Border Labor Organizing Coalition (CBLOC): 436
Cruz, Francisco de la: 286
Cruz, sor Juana Inés de la: 49
Cuauhtémoc (emperador azteca): 31
Cuba: 381, 452
Cuitláhuac (emperador azteca): 30-1
cultura: de tecnocracia: 270; lucha de clases y: 454; mujeres reflejadas en: 183; *véase también* imperialismo cultural
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992): 252

Daniels, Josephus: 150
Darwin, Charles: 106
Davis, Diane E.: 287
Day Workers Association: 439
DDT: 377
Debs, Eugene V.: 117
Del Monte (empresa): 220
Departamento de Energía de Estados Unidos: 322
Depo-Provera: 249
deportaciones: 431
derechos de propiedad intelectual: 209, 369
derechos humanos, abusos contra: matanzas de Acteal y Ayutla: 395-8; por el INS y la Patrulla Fronteriza: 424, 431; por militares entrenados en Estados Unidos: 405, 408-9
Derechos Indígenas y Acuerdos Culturales (acuerdos de San Andrés): 388-9, 396
derrames de petróleo: 322
"desaparecidos": 313, 338, 353, 405
desarrollo : económico: 174; sustentable: 252
descapitalización de la economía mexicana: 205, 210, 227
desempleo: 201-2, 229; a consecuencia del TLC: 350, 379; durante la gran depresión: 149; industrias maquiladoras y: 205; inmigrantes como chivos expiatorios para: 423, 428; neoliberalismo y: 344; relacionado con el TLC, 379 rural: 218, 237
Destino Manifiesto, doctrina del: 85
destrucción ecológica: 237
deuda: internacional: 79, 230-2, 290, 298-299, 318, 327, 446; con los bancos privados: 329; industria petrolera y: 321, 325
Día de la Raza, marcha del: 439-40
Día Internacional de la Mujer: 418
Díaz, Porfirio: deuda externa renegociada por: 79; dictadura de: 103, 105-14; en la batalla de Puebla: 96; Partido Liberal mexicano, oposición del: 114-22; rebeliones indígenas contra: 51
Díaz del Castillo, Bernal: 28

Díaz de León, Jesús: 193
Díaz Ordaz, Gustavo: 303, 307
Díaz Serrano, Jorge: 310
Díaz Soto y Gama, Antonio: 115, 129
diezmo: 22
"dinosaurios" (dirigencia del PRI): 365-6, 391, 442
división internacional del trabajo: 278
doble ciudadanía: 450
Doheny, Edward L.: 127, 144
Douglass, Frederick: 86
drogas: escándalo de: 398-404; tráfico de: 265, 298, 451
Drug Enforcement Administration (DEA): 398, 407
Durazo Moreno, Arturo: 328

Eckstein, Susan: 275, 286
ecología, destrucción: 237
economía: 11-3, 444-9; bajo Lázaro Cárdenas: 155-6; bancarrotas y crisis: 231, 327; colapso de 1982: 291; colapso de 1995: 381-4; contribución de las mujeres a: 182; crisis de la deuda en: 290, 325; de los inmigrantes a Estados Unidos: 429; después de 1940: 173; después de la independencia de México (1821): 77; deudas internacionales y: 230-2; dominada por el capital extranjero: 140; durante la gran depresión: 149; en causas de crisis políticas: 292-300; en los noventa: 348; estrategia de desarrollo sustentable para: 252; industrialización y: 223-30; industrias maquiladoras y: 205; inflación en: 354; nacionalización de la industria petrolera: 163; papel del estado en: 185-91, 213; petróleo en: 321; TLC y: 367-74
Echeverría, Luis: 225-6; censura bajo: 413; como presidente: 304-5, 307-10; revuelta estudiantil de 1968 y: 303
Echlin Workers' Alliance: 436
educación: ayuda de Estados Unidos para: 211; católica: 411; de hijos de inmigrantes indocumentados: 426; de los indígenas: 241; decadencia de: 344; maestros en: 269, 318, 339; "socialista": 150, 153
Eisenhower, Dwight: 451
Ejército Justiciero de los Indefensos: 396
Ejército Popular Revolucionario (EPR): 388-90
Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI): 391
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): 358-64, 385, 444; Acteal, matanza de: 395-6; alianzas: 389-90; Coalición Intersindical Primero de Mayo: 419; marcha a la ciudad de México: 393; medios de comunicación y: 413; *véase también* zapatistas
ejidos: 96, 161; bajo la Constitución de 1857: 91; después de 1940: 218, 238-9; enmienda constitucional de 1992: 215, 252, 345, 363; Ley de Desarrollo Agrario y: 342
ejidos de los valles Yaqui y Mayo, coalición de los: 305
El Barzón, movimiento de: 346, 389, 402, 417, 443
El Salvador: 290, 326
elecciones: 353; de 1872: 105; de 1884: 106; de 1888: 106; de 1910: 118-21; de 1911: 122; de 1920: 142; de 1924: 143-4; de 1929: 147; de 1933: 150; de 1940: 164-5; de 1976: 310; de 1977: 184, 241; de 1982: 353-4; de 1985: 354; de 1988: 292, 315-7, 336, 354; de 1991: 357; de 1992: 356; de 1994: 262, 364-7, 382; de 1996: 390-1; de 1997: 391-3, 452; de 1998: 351; del 2000: 442; partidos políticos en: 314-5; reformas de: 356-7, 391
Elías Calles, Plutarco: 119, 142, 156; como presidente: 144-9; en la elección de 1924: 143; Lázaro Cárdenas y: 150-1, 158; sobre el asesinato de Villa: 134
Emerson, Ralph Waldo: 86

"empresarios del estado": 270
encomienda: 35, 38-9
Engels, Friedrich: 141
escándalos de la droga, 398-404
Escandón, Manuel: 83
"esclavitud por endeudamiento" (peonaje endeudado): 111
esclavos, esclavitud: 29, 53, 84
Escuela de las Américas: 405, 408
España: burguesía emergente mexicana contra: 67; civilización azteca y: 28; guerras de independencia de México contra: 72-6; impuesto del "quinto real" sobre el comercio mexicano: 22; invasión francesa (1808): 65; jesuitas expulsados de Nueva España por: 63; México invadido por: 30-6; políticas en Nueva España: 36-41; reformas borbónicas y: 59-60; revueltas contra: 51-57; Tampico ocupado por (1829): 84; Veracruz invadido por (1861): 92-93
Estados Unidos: bajo Franklin Roosevelt: 150-1; comercio entre México y: 62, 173; concesiones mexicanas a (1877): 105; defensores de los zapatistas en: 385; desestabilización del gobierno de Echeverría: 307-10; deudas de México a: 230-2, 382; durante la gran depresión: 145-50; durante la Revolución mexicana: 124, 127-8, 132; economía mexicana dominada por: 141; elecciones mexicanas de 1910 y: 120; en guerra con México (1846-48): 85-9; guerras antidroga: 403, 407; imperialismo cultural: 212; implicado en el asesinato de Villa: 134; industria petrolera mexicana y: 142-4, 163, 319-25, 376; inmigración de mexicanos: 425-34; inmigración de trabajadoras mexicanas: 345; inmigrantes indocumentados en: 423; inversión extranjera: 202; inversiones en México: 12; líderes del Partido Liberal Mexicano en el exilio en: 117; matanzas en México: 397-8; militares mexicanos entrenados por: 404-10; pérdidas de empleos relacionadas con el TLC en: 379; política de inmigración: 449-451; préstamos a México: 317, 383; programa bracero: 219; Salinas y: 356-357; Texas y California tomadas por: 84-5; TLC y: 367-74; tropas en la frontera mexicana con: 116
estratificación social en México: 20; burguesía emergente: 65-7; capitalismo monopolista y: 174; de los indígenas, bajo España: 35; en el México colonial: 50, 55; en la civilización azteca: 27-9; etnicidad en: 360; mujeres en: 180; *véase también* clases en México
estructura de clases rural: 237-47, 259; burguesía en: 256-9; proletariado en: 149
estructura de clases urbana: 260, 274; burguesía: 260-6; clases intermedias: 266-74; proletariado y pobres: 195-6, 274-85
estudiantes: 268; rebelión de 1968: 300-3
etnicidad: 360
exportaciones: *véase* comercio
EZLN: *véase* Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fajnzylber, Fernando: 204, 208
Fall, Albert B.: 144
familia: 181, 242
Farm Labor Organizing Committee (FLOC): 246, 371
Feder, Ernest: 220
Federación Conservacionista Mexicana: 378
Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios (FESEBES): 346, 420
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE): 274, 318, 337
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios: 274n
Federación Mundial de Sindicatos: 194

Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI): 415
Federal Bureau of Investigation (FBI): 255, 308
feminismo: 393
Fernández de Cevallos, Diego: 367
Fernando VII (rey de España): 74
feudalismo, en España: 37
Flores Magón, Enrique: 115
Flores Magón, Jesús: 115
Flores Magón, Ricardo: 115-7, 121, 178, 361, 443, 454
Flores Morales, Víctor: 421-2
Florescano, Enrique: 63
Fondo de Defensa Ambiental: 370
Fondo Monetario Internacional (FMI): 449; devaluación del peso y: 308; López Portillo sobre programas estabilizadores del: 290, 326; préstamos del: 319, 325, 383; programa de austeridad de: 321; restricciones impuestas a México por: 317; techos salariales por: 311
Ford, Henry II: 173
Ford Motor Co.: 339
fórmula infantil, 222
Foro Nacional de Sindicatos del Comercio ("el Foro"): 418-9
Foro sobre Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas: 341-3
Fox, Vicente: 442
Francia: El Salvador y: 326; España ocupada por (1808): 65, 72; México ocupado por (1862-67): 92-7; Revolución en: 62; Veracruz ocupado por (1838): 84
francmasones: 72, 82
Frente Amplio para la Creación de un Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN): 389, 394
Frente Auténtico del Trabajo (FAT): 306, 417-8, 420-1, 434-8, 456
Frente Democrático Revolucionario (El Salvador): 326
Frente Metropolitano (México, D. F.): 334
Frente Nacional de Insurgencia Obrera, Campesina y Popular: 307
Frente Tierra y Libertad (Monterrey): 287
Frente Unido de Sindicatos en Defensa de los Trabajadores y la Constitución: 339
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN): 385, 393, 397, 419, 453
fresa, industria de la: 220
FZLN: *véase* Frente Zapatista de Liberación Nacional

Gadsden, venta de la zona de (1854): 89
Galván López, Félix: 407
Gálvez, José de: 63
ganancia: del narcotráfico: 399; descenso de las tasas de: 293; transferencia de precios y: 210, 298
Garavito Elías, Rosa Albina: 417
García, Eusebio: 304
Garza Lagüera, Eugenio: 402
Garzón, Alfonso: 255
Gelves, Marqués de: 56-7
General Motors (GM): 228, 311, 378, 382
género: 181-5, 455; *véase también* mujeres
Gibson, Charles: 32
gobierno; bajo Lázaro Cárdenas: 155-6; bancarrota del (1982): 231, 327; burguesía urbana y: 260-2; burócratas del: 271-3; Consejo Coordinador Empresarial y: 309; corporativismo y: 347; crisis política y legitimidad de: 299; de la Corona española, en las colonias: 38; de los aztecas: 27; de los indígenas, bajo España: 34; después de la derrota francesa: 101; en la Constitución de 1917: 363; ex presidentes: 270; huelgas aplastadas por: 338; indígenas excluidos del: 360; papel en la economía de: 185-91, 213, 224; personal militar en: 404; presidencialismo en: 168; reformas electorales y: 356, 391; reformas políticas y: 314-7; relaciones Iglesia-estado: 411; traficantes de drogas y: 265

Goldman, Emma: 117
Gompers, Samuel: 128, 149
González, Manuel: 106
Gordillo, Elba Esther: 339, 419-20
Gore, Al: 372
Gramsci, Antonio: 138
Gran Bretaña: 59; comercio entre la América "española" y: 65; después de la independencia de México (1821): 79; durante la Revolución mexicana: 127; guerra entre España y (1796): 62; la guerra civil de Estados Unidos y: 96; nacionalización mexicana de la industria del petróleo y: 163
Gran Círculo de Trabajadores: 99
Gran Confederación de Trabajadores: 99
gran depresión: 149-50
Gran Familia Artística: 98
Grant, Ulysses S.: 86
Greenspan, Alan: 401
gremios, sistema de: 45, 61, 69
Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFE): 408
Grupo de los 100: 370, 378
grupo de los 40: 264
Grupo de Madres de Veracruz: 341
Grupo Inverlat (empresa): 232
Grupo Visa: 402
Guadalajara: 62, 374
Guadalajara, grupo de: 264
Guadalupe Hidalgo, Tratado de: 89
Guatemala: 74, 406
guerra civil (Estados Unidos): 96
guerra civil (México, 1857-59): 95
guerra de castas de Yucatán: 51
"guerra de los pasteles" (1838): 84
guerras de independencia (1810-22): 72-8
Guerrero (estado): 253, 389, 394, 408
Guerrero, Vicente: 75
guerrillas: 388-90; guerra de: 304, 406; *véase también* zapatistas
Guevara, Ernesto "Che": 301, 410
Gutiérrez de Lara, Lázaro: 121, 123
Gutiérrez de Mendoza, Juana B.: 116, 123
Gutiérrez Rebollo, Jesús: 400-1
Guzmán, Martín Luis: 126

Haber, Steven: 154
haciendas: 47-9, 61, 71, 111, 146
Haití: 65
Hamilton, Nora: 166
Han Young (empresa): 436
Hank González, Carlos: 264n, 328, 365
Harp Helú, Alfredo: 338, 402
Hart, John M.: 123
Haywood, William D.: 128
Hearst, William Randolph: 127
Helms-Burton, Ley (EE.UU): 381n
Hellman, Judith Adler: 346
henequén o sisal: 111, 126
Hernández, Roberto: 338, 402
Hernández Galicia, Joaquín ("La Quina"): 346
Hernández Juárez, Francisco: 196, 338, 420, 438, 442
Hewitt de Alcántara, Cynthia: 223
Hidalgo y Costilla, Miguel: 64, 73-4
Hilton, Conrad: 187
Hills, Carla: 377
homosexuales y lesbianas: 393
Hoover, J. Edgar: 308
Hossfeld, Karen: 455n
Houston, Sam: 84
huastecos: 51
huelgas: 99, 100, 146; aplastadas por el gobierno: 338; bajo Díaz: 103, 114-6; bajo Lázaro Cárdenas: 152, 156-7, 162-164; contra los "topes": 311; contra Volkswagen: 339; de maestros: 268, 318; de trabajadores ferrocarrileros: 116, 193, 421, 438; después de la Revolución mexicana: 140; después de la segunda guerra mundial: 140; durante la Revolución mexicana: 136; durante la segunda guerra mundial: 191-2; durante los setenta: 306; en 1998: 421-3; en Estados Unidos durante la gran depresión: 149; en Estados Unidos por inmi-

grantes latinos y mexicanos: 438-9; en la Constitución de 1917: 133; en la Universidad Nacional: 307; en las industrias maquiladoras: 436-7; huelga general de 1916: 131-2; interferencia estatal en: 195; Ley del Trabajo sobre: 415; por mujeres trabajadoras contra la agroindustria: 246
Huerta, Adolfo de la: 142-3
Huerta, Dolores de la: 432, 434n
Huerta, Victoriano: 122-8
Humboldt, Alexander von: 47, 68
Hyundai (empresa): 435-6

Ibarra de Piedra, Rosario: 313, 338, 354, 365-6
Iglesia Católica Romana: Acta de Consolidación de Ingresos Reales (España, 1805): 64; clero secular: 57; confiscación de tierras y: 91; conversión de indígenas a: 32-3; en la Constitución de 1917: 133; en los noventa: 410-2; Inquisición: 36, 50; jesuitas en: 63; Lázaro Cárdenas y: 151; recaudación de diezmos: 22; sobre la reforma agraria: 147
Immigration Act (Estados Unidos, 1990): 429
Immigration and Naturalization Service (INS): 424, 431-2
Immigration Reform and Control Act (IRCA): 430-3, 451
imperialismo: 175, 212-3, 257, 278, 452; cultural: 212
importaciones : sustitución de, 175; *véase también* comercio
impuestos: 189, 262; corporativos: 344, 448; pagados por inmigrantes: 425-6; transferencia de precios y: 210; *véase también* aranceles
IMSS-Coplamar: 280
Independencia, Acta de (Guatemala, 1821): 74
indigenismo: 177, 179, 302
indios (pueblos indígenas): 20; Acuerdos de San Andrés sobre: 388-9; asesinatos de (década de 1970): 304; caciquismo entre: 254-5; carreteras bloqueadas por: 416; conquista española de: 30-2; conversión al catolicismo de: 32; Derechos Indígenas y Acuerdos Culturales (1996), 388-9, 396; después de 1940: 179, 240, 302; entre los zapatistas: 359-360; esenciales para la transformación política: 454; explotación de: 34; "guerra contra las drogas" y: 407; marcha de 1997: 393; matanzas de 1998: 395-398; movimientos sociales entre: 340-1; nombrados erróneamente por Colón: 37; protestas medioambientales de: 378-9; revueltas anticoloniales de: 23, 51-2; tierras tomadas a: 388; *véanse los distintos pueblos individuales*
industria : automotriz: 199, 228, 306 ; de la construcción: 276; de la fresa: 220; del acero: 311; del algodón: 221; del calzado, 281; del tabaco: 77, 251; nuclear: 340
industria bancaria: 230-2; colapso económico y (1995): 383; consolidación de: 309; lavado del dinero de las drogas por: 401-2; nacionalización de: 263, 271, 291, 327-30; privatización de: 338-339, 390; tráfico de drogas y: 265, 398-9
industria minera: 42-3, 47, 61; bajo Díaz: 110; después de la independencia de México: 77; empleo en: 99; inversiones extranjeras en: 79; privatizaciones en: 339
industria petrolera: 118-9, 127, 227-8, 319-325; Acuerdos de Bucareli: 142-4; antes de la nacionalización: 140-1; expansión de la producción (1977-82): 291; nacionalización: 163; privatización: 374-6; producción incrementada: 447; reservas petroleras de México y: 319-321; Salinas y: 346; TLC y: 368-9; trabajadores temporales en: 276; *véase también* Petróleos Mexicanos

industria textil; bajo Díaz: 109; colonial: 44-5; después de la independencia mexicana (1821): 77; empleo en: 99; matanzas de trabajadores en: 114; talleres en los barrios bajos: 281-2
Industrial Workers of the World (IWW): 117
industrialización: 156, 174n, 187, 223-9, 293
inflación: 354, 381, 383, 446
Inglaterra: *véase* Gran Bretaña
inmigración: como chivos expiatorios: 423; de Centroamérica hacia México: 251, 326; de mexicanos a Estados Unidos: 12, 109, 423-34, 449; de mujeres mexicanas: 242, 345; durante la gran depresión: 149; en el México colonial: 54-5; programa bracero y: 204, 219
inmigrantes indocumentados: 423-6, 429, 433, 450
Inquisición: 36, 50
Instituto Lingüístico de Verano: 341
Instituto Nacional Indigenista (INI): 179, 241, 341
Instituto para la Investigación de Recursos Bióticos: 212
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 416, 418; *véase también* IMSS-Coplamar
Interacciones y Unión (empresa): 402
International Brotherhood of Teamsters (IBT): 434, 438
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU): 194
International Coordinating Committee (ICC): 433, 434
International Ladies' Garment Workers Union (ILGWU): 434
Internet: 384
inversiones en México: 348; después de la segunda guerra mundial: 223-5; después del colapso económico: 383-4; efecto de "bomba de succión" de: 205, 331, 347; en 1897: 108; en 1997: 391; en la época de la Revolución mexicana: 104; en la industria minera: 79; en las industrias maquiladoras: 275, 296; en las industrias petrolera y petroquímica: 320, 374; en las manufacturas: 227; en los estados del norte: 119; externa directa: 205-6; legislación de mexicanización y: 202-3; nacionalización de la industria petrolera y: 163; neoliberalismo y: 202; por el estado: 185; por grupos capitalistas privados: 198; por las corporaciones transnacionales: 203, 294; TLC y: 12, 369, 381; transferencias de tecnología y: 207-13, 226
irlandeses-americanos: 87, 88, 440
Islam, en España: 36
ITAPSA-Echlin, planta: 436
Iturbide, Agustín de (Agustín I, emperador de México): 75-6
izquierda; en las elecciones: 352-4; organizaciones de: 389; partidos de: 315; *véase también* zapatistas

J.P. Morgan (banco): 402
Jackson, Andrew: 84
Japón: 373
Jaramillo, Rubén: 178, 218, 253
Jefferson, Thomas: 62
jesuitas: 57, 62-3
Jiménez y Muro, Dolores: 116
jornaleros: 304
Juan Diego: 33
Juárez, Benito: 90-1, 95-7, 100, 105
Juárez, Margarita Maza de: 90, 97
judíos, en España: 36

kaibiles (Guatemala): 395
Katz, Friedrich: 124, 134
Kellogg, Frank B.: 144
Kissinger, Henry: 209, 330
Krauze, Enrique: 358, 412
Ku Klux Klan: 424

La Botz, Dan: 343, 353, 421

La Laguna, región de: 161
Laclau, Ernesto: 168
Ladd, Doris M.: 48, 66, 77
Lagarde, Marcela: 179
Lamont, Thomas W.: 132, 142, 144
Lansing, Robert: 132
Las Casas, Bartolomé de: 32
latinos: 440
Le Bot, Yvon: 363-4
leche: 221
Legorreta, Agustín F.: 173, 224, 232, 309
Lenin, V.: 257
Lerdo de Tejada, Miguel: 91
Lerdo de Tejada, Sebastián: 91, 105
Ley de Desarrollo Agrario (LDA, 1980): 342
Ley de Disolución Social (1941): 177
Ley del Trabajo (México, 1931): 146, 152, 177, 415, 420
Leyes de Libre Comercio (España): 60
liberales: 82-3, 96, 105
liberalismo : económico: 65; social: 345
libre comercio: 65, 78-9, 105, 332; Clinton sobre: 350; Organización Mundial del Comercio y: 368; TLC y: 368
Liga de Comunidades Agrarias: 149
Limantour, José Yves: 118
Lincoln, Abraham: 85, 96
Lombardo Toledano, Vicente: 148, 151-2, 156, 161, 193
Lona Reyes, Arturo: 411-2
López, Jacinto: 255
López, Julio: 101
López Mateos, Adolfo: 193, 218, 253, 263
López Obrador, Andrés Manuel: 366
López Portillo, José: bancos nacionalizados por: 327-30; como presidente: 305, 310; de la Madrid y: 353; ejército mexicano bajo: 406, 409; petróleo mexicano y: 319, 322; reformas políticas bajo: 314-7, 352; sobre el GATT: 331; sobre la bancarrota mexicana: 327; sobre los programas de estabilización del FMI: 290. 326
Los Ángeles (Estados Unidos): 85
Lozada, Manuel: 101
lucha de clases en México: 101, 444-5; bajo Lázaro Cárdenas: 157; burócratas y: 271-3; corporativismo y: 292; de los zapatistas: 358-64; después de 1940: 234-6; después de la Revolución mexicana: 140; después del TLC: 350-1; durante la Revolución mexicana: 137; en pequeñas industrias: 275; en zonas rurales: 237-47; indígenas y mujeres en: 454; interferencias extranjeras y: 141-149; movimientos cooptadores de campesinos en: 253-5; mujeres en: 334-5; papel del estado en: 185; revuelta estudiantil de 1968 y: 303
Ludlow, matanza de: 118
lumpenproletariado: 280

machismo: 22, 179, 183
Madero, Francisco I.: 118-24
Madero, Gustavo: 120
Madrazo, Gustavo: 300
Madrid Hurtado, Miguel de la: descripciones de la prensa de: 323; economía de México bajo: 325, 331-2; en las elecciones de 1982: 353; impuestos reducidos por: 368
maestros: 269, 318, 339
magonistas: *véase* Partido Liberal Mexicano
Magruder, John B.: 95
Malinche (amante de Cortés): 31
manufacturas: bajo las políticas neoliberales: 226-7; bajo Lázaro Cárdenas: 156; durante la segunda guerra mundial: 186; en el México colonial: 60; en las industrias maquiladoras: 204; fuerza laboral en: 229; industrialización y: 224-5; inversión extranjera en: 227
maquiladora, industria: 292; abiertas después del TLC: 297; corporaciones transnacionales y: 204-5; de ropa: 281; empleados en: 276; exportaciones de: 228-9; mujeres empleadas en: 200, 455;

peligros medioambientales en: 377-8; salarios en: 383; sindicatos en: 313, 434-7; sobrexplotación de la mano de obra en: 199-200; tráfico de drogas y: 379
Marcos, subcomandante: 16, 363; sobre el EPR: 388; sobre el primer levantamiento de los zapatistas: 396; sobre la lesbiana elegida al Congreso: 393; sobre las conversaciones de paz con el gobierno: 393
Marichal, Carlos: 231
Mariña Flores, Abelardo: 293
Martínez Orozco, Benedicto: 420
Martínez Tarrago, Trinidad: 204, 208
Marx, Karl: sobre el colonialismo europeo: 41; sobre el mercantilismo: 21; sobre la población excedente relativa: 279; sobre la primitiva transformación del capitalismo rural: 71; sobre la sobrexplotación de la mano de obra: 199; sobre los bienes de los Departamentos I y II: 174
maximato, periodo del (1928-34): 148
Maximiliano (emperador de México): 92, 97
mayas: 24-6, 34, 51, 345; acciones militares contra: 406; revuelta de 1848: 86, 88
McCaffrey, Barry R.: 400, 403
McLane-Ocampo, Tratado (1858): 95
McNamara, Robert: 285
Medina, José Jacques: 440
medio ambiente: Cumbre de la Tierra (1992) sobre: 252; desarrollo sustentable y: 252; destrucción del: 237; Fondo de Defensa Ambiental: 370; propuesta del canal de Tehuantepec y: 387; TLC y: 370, 373, 376-9
medios alternos: 414
medios de comunicación: 413-5; mujeres reflejadas en los: 183
Meillassoux, Claude: 245
Mercado, Thomás de: 42
mercantilismo: 21
mestizos: 20, 68, 241, 349
mexicanización, legislación de: 202, 343
mexicanos: como chivos expiatorios: 423; como emigrantes a Estados Unidos: 425-34
México colonial: 19-24; agricultura en: 47-9; burguesía emergente en: 65-8; capitalismo en: 58; clases intermedias y trabajadores pobres en: 68-72; guerras de independencia de: 72-6; jesuitas expulsados de: 63; políticas de la Corona en: 36-41; revueltas en: 51-7; supresión española de los indios en: 30-6; *véase también* Nueva España
México: bajo Díaz: 103-14; colapso económico de 1995: 381-4; como Nueva España: 19, 21-3; crisis política en: 292-300; después de la independencia (1821): 76-80; deuda internacional de: 230-3; economía de: 11-3, 444-50; estratificación social: 20; guerra civil en (1857-59): 89-92; guerras de independencia (1810-1822): 72-6; invadido por España: 30-6; invasiones extranjeras de 1823-61: 84-9; jesuitas expulsados de: 63; medios de comunicación en: 413-5; militarización de: 394-8; mujeres en: 179-85; ocupación francesa de (1862-67): 92-7; origen del nombre de: 29; precolonial: 19, 24-30; primeros pobladores de: 24-30; revoluciones apoyadas por: 326; se une al TLC: 367-74; tras la derrota francesa: 97-102; *véase también* México colonial y Nueva España
México, ciudad de: 13; barrios bajos de: 280; Batallón de Radio Patrullas del estado de México en: 280n; Consulado (gremio comercial) en: 62; elecciones a la jefatura de gobierno de 1997: 391; motín del maíz en (1692): 53, 56; redadas policiales: 286-7; revuelta de estudiantes (1968): 302-3; revueltas de negros en 1611 y 1665: 54n; sistema

de transporte subterráneo en: 276; terremoto de 1985: 282, 292, 332-3; tomada por Álvarez (1855): 91; tomada por Estados Unidos (1847): 88; tomada por Iturbide (1821): 75
Mexuscan: 370
Meyer, Jean: 140
Mier, fray Servando Teresa de: 66
migraciones internas: 242
minifundios: 188
Miranda, Francisco de: 65
mixtecos: 397
Mixtón, rebelión del (1541): 34, 51
Moctezuma (emperador azteca): 30
Monroe, doctrina (Estados Unidos): 84
Monroe, James: 84
Monsiváis, Carlos: 333
Monte Albán (pueblo): 25n
Montejo, Francisco de: 51
Monterrey, 119, 157, 258
Monterrey, grupo: 140, 308, 309, 329, 331; Echeverría enfrentado por: 305; facciones en: 263-4; Grupo Visa de: 402
Moody, Kim: 441
Mora, José María Luis: 74, 88
Morelos (estado): 104, 136, 253
Morelos, José María: 73, 75
Morera, Carlos: 198
Morones, Luis: 132, 143, 148, 158, 165
Morrow, Dwight: 144, 147, 149
mortalidad infantil: 344
motines, por alimentos: 56, 416
Mota y Escobar, Alonso de la: 31
Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD): 358
Movimiento de Liberación Nacional: 253, 354n
Movimiento de Maestros Revolucionarios: 268
movimiento eugenista: 149
Movimiento Proletario Independiente (MPI): 419
movimientos agrarios: 85
movimientos milenaristas: 52, 85
movimientos sociales: 285, 289, 454; ambientales: 378; cooptados por Salinas: 346; en los setenta: 312-3; entre los indígenas: 341, 456; mujeres en: 335, 456; partidos políticos y: 336, 352; rebelión estudiantil de 1968: 301-3; sindicalismo de movimientos sociales y: 441; tras el temblor de México, D. F.: 333-4; zapatistas: 358-64
Múgica, Francisco: 165
Mujeres en Lucha por la Democracia: 336
mujeres: AID en la contribución de: 249; ataques sexuales contra: 394; bajo Lázaro Cárdenas: 159-60; como inmigrantes a Estados Unidos: 429-30; como maestras: 269; después de 1940: 179-85; empleadas en la industria procesadora de alimentos: 218; en el México colonial: 22, 49-50; en el motín del maíz: 56; en el movimiento contra Díaz: 116-7; en la fuerza laboral: 112-3, 283, 337; en la Revolución mexicana: 123-4, 131; en las rebeliones indígenas: 53; en los movimientos sociales: 313, 335; en los sindicatos: 306-7, 417-8, 420, 440; en revueltas anticoloniales: 63; entre los zapatistas: 363-4; esenciales para la transformación política: 454-7; impacto del neoliberalismo en: 344-5; los zapatistas sobre la igualdad de derechos para: 393; opresión de: 288-9; protestas contra las maquiladoras: 378; rurales: 241-3; sobrexplotación de las: 200, 455; trabajo no pagado de: 298
mulatos: 20, 54
Multilateral Agreement on Investment (MAI): 372
Muñoz Ledo, Porfirio: 355, 442
musulmanes, en España: 36

Nacional Financiera: 156
nacionalizaciones: de la banca: 265, 271, 291, 327-30; de la industria tabacalera: 251; del petróleo: 163, 276

nahuas: 378
Napoleón Bonaparte (emperador francés): 65, 72
Napoleón III (emperador francés): 92, 96
narco-burguesía: 265
narcotráfico: 265, 298, 379, 398-404, 451
National Administrative Office (U.S. Department of Labor): 435
nativismo: 428, 432
Nava, Julián: 323
Nava, Salvador: 357-8, 449
Nazar Haro, Miguel: 400
Negroponte, John: 368
negros: 20, 54, 428, 440; *véase también* africanos
neocolonialismo: 175
neoliberalismo: 15n, 189, 445; colapso económico de 1982 y: 291; compromiso de Estados Unidos con: 348; consecuencias económicas de: 383-4; depresiones económicas causadas por: 251-2; desempleo causado por: 190; en causas de crisis políticas: 292; fondos para investigación y tecnología recortados bajo: 211-2; instrumentado por Salinas: 331, 344; industrias maquiladoras y: 295; inversión extranjera y: 206; papel del estado en la economía bajo: 231; producción manufacturera en: 226-7; recesión mundial y: 321; restructuración económica en: 176; reformas y: 272; tecno-burócratas y: 270; trabajo infantil ligado a: 202
Nezahualcóyotl (municipio): 280, 285
Nicaragua: 323, 326, 401, 408
niños: fórmula infantil: 222; mortalidad infantil: 344; trabajadores: 222, 277
North American Development Bank: 371n
North, Oliver: 403
Nueva España: 19, 21-4; agricultura en: 47-9; políticas de la Corona en: 36-41; rebeliones en: 51-7; *véase también* México colonial
Nuevas Leyes (España, 1542-45): 32
Oaxaca: 305, 394
obrajes: 44
Obregón, Álvaro: 119; asesinato de: 147; como presidente: 134, 139-44; en la Revolución mexicana: 124, 128, 130-1
Ocampo, Melchor: 91
Olimpiada (México, 1968): 302
olmecas: 25n
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): 320, 324
Organización Mundial de Comercio (OMC): 368, 382
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD): 372
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT): 194
Organizaciones Indígenas Independientes de México, Centroamérica y el Caribe: 341
organizaciones no gubernamentales (ONG): 336
oro: 19, 28, 43
Orozco, Pascual: 121, 123
Ortiz Mena, Antonio: 262
Ortiz Rubio, Pascual: 147
O'Shaughnessy, Edith: 128
Otero, Mariano: 80, 93
otomíes: 30

Pacto de Grupos Ecológicos: 378
Pacto de Solidaridad Económica (1987): 332
Palafox y Mendoza, Juan de: 57
Panamá, canal de: 387
Pani, Alberto: 144-5
paracaidistas: 305
Paré, Luisa: 246, 254
Partido Acción Nacional (PAN): 336, 358, 401, 441, 445; Almazán apoyado por: 165; en las elecciones de 1982: 353; en las elecciones de 1988: 317, 355; en las elecciones de 1994: 367; en las elecciones de 1997: 391; votos de protesta para: 352

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 355
Partido Comunista Mexicano (PCM): 148, 304; diputado indígena del: 241, 360; en huelga en la Universidad Nacional (1977): 307; en las elecciones: 315; fuera de la ley: 177; legalizado: 314-5
Partido de la Revolución Democrática (PRD): 334, 356-8, 453; apoyado por oficiales del ejército retirados: 410; asesinatos de líderes del: 347; ataques armados del gobierno contra: 394; campaña del PRI contra: 391; en las elecciones de 1994: 366; en las elecciones de 1997: 391; en las elecciones del 2000: 441-2; fundado por Cuauhtémoc Cárdenas: 292, 315; mujeres en: 417
Partido de la Revolución Mexicana (PRM): 163-4, 177; *véase también* Partido Nacional Revolucionario y Partido Revolucionario Institucional
Partido del Centro Democrático: 442
Partido del Trabajo (PT): 334, 391
Partido Democrático: 119
Partido Demócrata Mexicano (PDM): 352
Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR): 389
Partido Liberal Mexicano (PLM): 103, 113-122, 136
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): 315, 353, 356
Partido Mexicano del Trabajo: 146
Partido Mexicano Socialista (PMS), 315, 356
Partido Nacional Revolucionario (PNR): 147, 151, 163; *véase también* Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional
Partido Popular Socialista (PPS): 193, 255
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): 313, 354
Partido Revolucionario Institucional (PRI): 177, 444-5, 452; actividades antiobreras del: 421-2; como patriarcado: 349; Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en: 274; corporativismo y: 347; crisis políticas y económicas de México y: 298-9; Cuauhtémoc Cárdenas y la división en: 271; decadencia del: 390-4; diputado indígena del: 241, 360; en Chiapas: 395; en las elecciones de 1982: 353; en las elecciones de 1985: 354; en las elecciones de 1988: 292, 354; en las elecciones de 1991: 357; en las elecciones de 1994: 262, 364-7, 382; en las elecciones del 2000: 442; falta de democracia en: 300; líderes sindicales en: 190; movimientos sociales cooptados por: 286, 287; Pacto de Solidaridad Económica y: 332; pérdida de mayoría en el Congreso: 351; política de liberalismo social de: 345; reformas políticas y: 314-5; reservas petroleras de México y: 319; retos obreros al: 305-6; sobre la nacionalización de la banca: 328; TLC y: 369
Partido Revolucionario Obrero Clandestino y Unión del Pueblo (PROCUP): 389
Partido Socialista Unificado de México (PSUM): 315, 353, 356
partidos políticos: 314-5, 336, 352, 391; *véanse también los diversos partidos individuales*
patriarcado: 349
Patrulla Fronteriza (Estados Unidos): 424, 430-1
Peña, Sergio de la: 282n
pequeña burguesía: 69, 235, 267, 280, 443
Pérez de la Serna, Juan: 56
periodistas: 413
Pershing, John J.: 133
personalismo: 23, 77
Perú: 37
Perzabal, Carlos: 448
peso, devaluaciones del: 298, 308, 324-5, 373, 382, 446
Petróleos Mexicanos (Pemex): derrames de petróleo: 322; despidos de trabaja-

dores en: 346; inversión estatal en: 189; préstamos internacionales a: 319-324; privatización de: 375; producción incrementada de: 447; protestas medioambientales contra: 378
petroquímica: 374; *véase también* industria del petróleo
Pider, proyecto: 249
plaguicidas, 222
Plan de Ayala (1911): 122
Plan Nacional para Áreas Deprimidas y Marginadas (Coplamar): 345
"plantas tránsfugas": 295; *véase también* industria maquiladora
plata: 42, 110
plusvalor: 234n, 277, 281
población, control de: 249
pobres, pobreza: 344, 425; en el México colonial: 68-72; en la estructura de clases urbana: 274-85; movimientos sociales de los: 335; potencial político de los: 285-9
Poinsett, Joel Roberts: 84
Polk, James K.: 85
populismo: 168, 352
Portes Gil, Emilio: 147
Posadas Ocampo, Juan Jesús: 412
Pozas, Isabel H. de: 179
Pozas, Ricardo: 179
precios, transferencia de: 210, 298
presidencialismo: 168
PRI: *véase* Partido Revolucionario Institucional
Primero de Mayo: 419, 423
privatizaciones: 176, 213, 262, 347-8; de la banca: 271, 329-30, 390; de la industria del petróleo: 374-6; del sistema de seguridad social: 190; despidos resultantes: 418; para eliminar sindicatos: 338-9; por Salinas: 338, 363
producción: de los Departamentos I y II: 174; industrial: 110, 186, 199-201, 293
productividad: 293
programa bracero: 204, 219, 430
Programa del Trabajador Visitante: 430-1
Programa Nacional de Ayuda Directa al Campo (Procampo): 367
Programa Nacional de Solidaridad: *véase* Pronasol
Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec: 387
proletariado: 99, 444; bajo Díaz: 103, 111; bajo Lázaro Cárdenas: 159; conciencia política de: 305-6; en la Revolución mexicana: 104, 136; movimientos proletarios, 100; rural: 149, 237-8, 243-7, 252; urbano, crecimiento del: 195-6; urbano, después de 1940: 274-85
proletarización: de burócratas y tecnócratas: 273; de campesinos: 243-6, 284, 361; de campesinos desplazados: 111-112; de ejidatarios: 238
Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad): 345, 367
protestantes: 410-1
proyectos hegemónicos: 155
Puebla, batalla de: 96
pueblo, indios: 51-2
pueblos indígenas: *véase* indios
purépechas: 340; *véase también* tarascos

Querétaro: 72, 133, 385
Quirós, Eleuterio: 88

racismo: 20, 349, 428, 432, 454
radio: 413
Ralston-Purina (empresa): 214
Ramírez, Sara Estela: 116
raza: 20; acciones de Iturbide sobre: 75; clase y: 240; clases intermedias y: 70
Reagan, Ronald: 323, 400, 424, 431
rebelión del Mixtón (1541): 34, 51
reconquista (España, 1031-1492): 36-7
Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio: 379, 421
Red Nacional de Colonias Populares: 312
reforma agraria: 146, 159-162
reforma liberal (1855): 91, 98-101

reformas borbónicas (España): 59-61
refrescos embotellados: 221
Refugee Act (Estados Unidos, 1980), 451
religión: conversión de los indígenas al catolicismo: 32-3; de los aztecas: 29; expulsión de judíos y musulmanes de España: 36; *véase también* Iglesia Católica Romana
repartimientos: 35, 39
Revolución mexicana: 105; de 1910 a 1913: 122-4; de 1913 a 1914: 124-30; de 1915 a 1920: 130-4; indígenas en: 51; lecciones de: 134-7; Partido Liberal Mexicano en: 121-2; populismo y: 168
revolución verde: 175, 213-23, 247, 376
Rivera, Diego: 144
Rivera Carrera, Norberto: 412
Rockefeller, David: 330
Rockefeller, Fundación: 213, 218
Rockefeller, John D.: 118
Rodríguez, Abelardo: 148, 150
Rodríguez, Mariana: 414
Rodríguez Alcaine, Leonardo: 415, 422
Rodríguez Fuentes, Agustín: 420
Roosevelt, Franklin: 150
Rosa, Martín de la: 286
Rosado García, Antonio: 420
Ruiz, Samuel: 359, 395, 397, 411-2
Ruiz Massieu, José Francisco: 367
Ruta 100, Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos (SUTAUR): 416, 419

sacrificios humanos, de los aztecas: 29
Sada, Andrés Marcelo: 263, 309
Sada, Luis: 141
Sada González, Adrián: 402
Sáenz, Aarón: 140, 264n
salarios: 189-91, 201; en la sobrexplotación del trabajo: 200; en las maquiladoras: 297; inflación y: 383; mínimo: 189, 350, 415; pagados a las mujeres: 241; TLC y: 369, 373; topes salariales: 311, 317
Salazar, Othón: 268
Salazar, Rosendo: 131
Salinas, Ricardo: 414
Salinas de Gortari, Carlos: 187, 262; Antorcha Campesina y: 256; asesinato de Colosio y: 364-5; como presidente: 274; corporatismo y neoliberalismo: 347; elecciones de 1994 y: 366; en el exilio: 271; en el gobierno de Miguel de la Madrid: 331; en las elecciones de 1988: 292, 355; escándalos de droga: 399; Iglesia Católica Romana y: 411; movimientos sociales cooptados por: 344-7; políticas económicas: 382; políticas medioambientales de: 377; privatizaciones bajo: 330, 338, 363; reformas electorales de: 356; sindicatos y: 339; TLC y: 368-9
Salinas de Gortari, Raúl: 367, 399, 401, 414
San Andrés, Acuerdos de: 388-9, 396
San Cristóbal de las Casas: 364
San Patricio, Batallón de: 87-8, 440
sandinistas (Nicaragua): 326
Santa Anna, Antonio López de: 76, 84, 88, 91
Santa Fe, Alberto: 102
Scott, Winfield: 87
Scheelle, Nicholas: 173
Schlesinger, James: 323
Seccombe, Wally: 383
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): 377
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue): 377
sector servicios: 266-7, 427-8
secuestros: 410
segunda guerra mundial: 176, 186
seguridad social: Estados Unidos: 425; sistema de (México): 189-90
Shiva, Vandana: 209
Shultz, George P.: 404
Sierra, Justo: 107
Silva, Prisciliano, G.: 121, 123
Silva-Herzog, Jesús: 163, 325

United Parcel Service (UPS): 438-9
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 307, 339
urbanización: 187
Urrea, Teresa ("Santa Teresa"): 113

Valdés Ugalde, Francisco: 140
Vallejo, Demetrio: 193
vaqueros: 67-70
Vargas Bravo, David: 193
Vargas Meza, Ricardo: 387
Vasconcelos, José: 144, 147
Vaticano: 411
Vaughn, Mary Kay: 159
Vázquez Rojas, Genaro: 253, 389
Velasco Arregui, Edur: 295-8, 373, 384
Velázquez, Fidel: 193-4, 201, 299, 310, 347; Congreso del Trabajo, dominado por: 199; huelga de la Ford y: 339; muerte de: 415, 419; neoliberalismo de: 337; TLC defendido por: 371
Velázquez, Luciano: 85
Veracruz: Consulado (gremio comercial): 62; invasión española (1861): 92; ocupación de Estados Unidos (1914): 127; ocupado por Francia (1838): 84; plantas nucleares: 341; revueltas campesinas (1836-1910): 101; tomado por Santa Anna (1822): 76; tumulto en 1808: 67
Viadas, Lauro: 112
Villa, Francisco (Doroteo Arango): 104; asesinato de: 134, 143; en la Revolución mexicana: 121, 124-6, 130-4
villistas: 126-33
violencia doméstica: 242, 418
Virgen de Guadalupe: 33
Vogt, Egon Z.: 26
Volkswagen (empresa): 339

Warman, Arturo: 245
Waters, Maxine: 401
Webster, Daniel: 86
Weinberger, Caspar: 451
Wilkie, James: 156
Wilson, Pete: 432
Wilson, Woodrow: 127, 132
Wolf, Eric: 34

Yanga: 54
yaquis: 52, 113
yopes: 51
Yucatán: 51, 111, 160; guerra de castas en: 51
Yudelman, Montague: 248

Zapata, Emiliano: 104, 443, 454; asesinato de: 133; en la Revolución mexicana: 121-2, 124, 128-32; mujeres en el ejército de: 116; zapatistas actuales y: 361
zapatistas: 443, 452-4; conversaciones de paz entre el gobierno y: 396; elecciones de 1994 y: 366; en Chiapas: 16, 52, 104, 215, 240-1, 285, 345, 358-65, 384-390; en la Revolución mexicana: 122-3, 129-133, 136; matanza de Acteal y: 396; respaldados por el Congreso Nacional Indígena: 454-5; Samuel Ruiz y: 412; sobre democracia: 350; sobre derechos humanos: 393-4
Zedillo Ponce de León, Ernesto: acuerdos de San Andrés y: 389, 396; como presidente: 274, 367; ejército mexicano bajo: 409-10; en la decadencia del PRI: 392-3; en la manifestación del 1° de Mayo: 423; en las elecciones de 1994: 365-7; en las elecciones del 2000: 442; políticas económicas de: 382-3; políticas medioambientales de: 377; privatizaciones bajo: 330, 375; zapatistas y: 385
Zumárraga, Juan de: 35

tipografía: libros del umbral
impreso en castillo hermanos, s.a.
camelia 4, col. el manto
del. iztapalapa
dos mil ejemplares y sobrantes
29 de enero de 2001

sinarquistas: 154, 162, 165, 177, 352
Sindicato de Pilotos y Sobrecargos: 423
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM): 193, 421
Sindicato de Trabajadores del Metal e Industrias Similares (STIMAHCS): 435-6
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): 416-9, 422
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): 318, 417, 420
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (SNTSS): 306
Sindicato Nacional de Trabajadores y Obreros Agrícolas (SNTOAC): 246, 371
sindicatos: 456; aplastados por el gobierno: 338; bajo Calles: 146; CGOCM: 148, 152; Comité Coordinador de Sindicatos Independientes: 311; de los maestros: 269, 318; de mujeres trabajadoras: 200; de trabajadores agrícolas: 246; demandas de democracia en: 299; después de la segunda guerra mundial: 191-9; emigrantes mexicanos en: 428, 433-4; en la Constitución de 1917: 133; en las industrias maquiladoras: 313, 434-8; en los noventa: 415-23; en los ochenta: 336-9; en los setenta: 311; en México, D. F.: 392; Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios: 346; Industrial Workers of the World: 117; movimiento para la democracia en: 305-6; movimientos sociales y: 352; Partido Revolucionario Institucional y: 347; partidos políticos y: 314; sindicalismo de movimientos sociales y: 441; tasa de sindicalización: 274-5, 440; United Farm Workers: 220, 432; *véase también* huelgas
Singelmann, Peter: 46
Siqueiros, David Alfaro: 193
Sistema Alimentario Mexicano (SAM): 342
Sistema Económico Latinoamericano (SELA): 448n
Sistema Nacional de Investigadores (SIN): 212
Slim, Carlos: 338
Smith, Adam: 41
sobrexplotación de la mano de obra: 175, 199-202, 231, 284; de las mujeres: 181-183
"Social Investment Funds" (SIF): 455n
socialismo: 125, 315
sociedades de ayuda mutua: 99
Solidev Mexicana (empresa): 434
Solitron Devices Corporation: 434
sorgo: 214
Sosa, Yon: 406
Spencer, Herbert: 106
Standard Oil: 120
Stepan Chemicals (empresa): 378
Stern, Steve: 49, 53
subproletariado: 277
Sullivan, Gordon: 407
"Superbarrio": 336
sustitución de importaciones: 175
SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana): 306
Sweeney, John J.: 438

tabaco, industria del: 77, 251
Talavera, María: 117
talleres, de los barrios bajos: 281-3
Tampico: 84
tarascos: 30, 244; *véase también* purépechas
tarifas: *véase* aranceles *y* GATT
Tax, Sol: 284
Taylor, William B.: 52-3
Taylor, Zachary: 87-9
Teamsters for a Democratic Union (TDU): 438
Teapot Dome, escándalos del: 144
tecnoburocracia: 270, 328
tecnócratas: 269-70, 347, 353
tecnología, transferencias de: 207-13, 226
Televisa: 414

televisión: 413-4
Telmex: 338, 347, 418, 420
Tenochtitlán: 27, 30
teología de la liberación: 411-2
Tepic, indios: 51-2
tercer mundo: 175, 327
terratenientes: 82
Terrazas-Creel, camarilla: 126
Texas: 84, 86
Thoreau, Henry David: 86
Tlatelolco: 28
tlaxcaltecas: 30
toltecas: 26
topes salariales: 311, 317
Torres, Camilo: 301
totonacas: 341
trabajadores: profesionales: 269, 429; visitantes, programa: 430-1
trabajo: bajo Lázaro Cárdenas: 156-7, 161-2; de las mujeres: 112-3, 180-2; de los campesinos convertidos en proletarios: 111-2; de los trabajadores emigrantes en Estados Unidos: 426, 429-34; desarrollo del trabajo libre en la Nueva España: 40; después de la segunda guerra mundial: 191-9; división internacional del: 278; en el México colonial: 58; en la Constitución de 1917: 133; en las haciendas: 48; en las industrias maquiladoras: 297; en los noventa: 415-23; infantil, 222, 277; por fuera, sistema de: 281-2; salarios para: 189; sobrexplotación del: 175, 199-202, 231
tráfico de drogas: 265, 298, 451
transferencia de precios: 210, 298
Transnational Information Exchange (TIE): 437
Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC): 367-74; burguesía urbana en: 263; campesinos amenazados por: 363; comercio e inversiones futuras bajo: 229; desempleo a consecuencia de: 350; efectos medioambientales de: 376-9; impacto de: 379-81; inmigración mexicana a Estados Unidos y: 431; inversiones en México después de: 12, 369, 381; luchas laborales relacionadas con: 435-9; maquiladoras abiertas después: 297; México se une al: 176, 292; negocios de drogas y: 265; objetivos de: 403; rebelión zapatista y: 215; regulaciones mexicanas bajo: 320; sindicatos mexicanos y: 441; subvenciones al precio del maíz terminados con: 345
Trist, Nicholas: 88
tumultos: 56, 63, 67
turismo: 183, 187
Turner, John Kenneth: 112n
TV Azteca: 414
tzeltal, rebelión (1712): 52
tzotziles: 395, 397

UNAM: *véase* Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Cardenista Democrática (UCD): 345
Unión de Científicos Comprometidos: 252
Unión Europea: 394
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA): 343
Unión Nacional de Trabajadores (UNT): 419-23, 438, 456; el PAN y: 442; fundación de: 415; mujeres y: 417; sobre el TLC: 380
Unión Nacional Independiente de Trabajadores del Metal y de la Industria de la Transformación: 423
Unión Obrera Independiente (UOI): 306, 311
Union of Workers in War Industry: 193
United Auto Workers (UAW): 434, 437, 439
United Brands (empresa): 221
United Electrical, Radio, and Machine Workers ofAmerica (UE): 434, 436, 438
United Farm Workers (UFW): 220, 432, 433n, 439, 456